

Aníbal Romero

La miseria del populismo

Historia y política de Venezuela



Obras Selectas.

La miseria del populismo. Historia y política de Venezuela.

Aníbal Romero

© 2010 | EDITORIAL EQUINOCCIO

Todas las obras publicadas bajo nuestro sello han sido sometidas a un proceso de arbitraje. Reservados todos los derechos.

Coordinación editorial

Carlos Pacheco

Cuidado de la edición

Maribel Espinoza

Diseño y diagramación

Aitor Muñoz Espinoza

Impresión

Gráficas Acea

Tiraje

1.000 ejemplares

Hecho el depósito de ley

Depósito legal: lf24420093203566

ISBN: 978-980-237-309-3

Valle de Sartenejas, Baruta, estado Miranda.

Apartado postal 89000, Caracas 1080-A, Venezuela.

Teléfono: (0212) 9063162 | Fax: (0212) 9063164

E-mail: equinoccio@usb.ve

RIF: G-20000063-5

Índice

7 **Nota preliminar**

P A R T E

9 **La miseria del populismo.**

I

Mitos y realidades de la democracia en Venezuela

11 *Introducción. Consideraciones sobre el cambio histórico*

17 *Naturaleza del desafío venezolano*

75 *Una visión alternativa de la democracia*

P A R T E

191 **Las crisis y las perspectivas de la democracia venezolana**

II

193 *Introducción*

197 *La naturaleza de la democracia venezolana*

209 *El período 1974-1988: El petróleo y la política*

221 *Campaña electoral y crisis social*

231 *Conclusión*

P A R T E

237 **Decadencia y crisis de la democracia.**

III

¿A dónde va la democracia venezolana?

239 *Prefacio*

245 *Los golpes de Estado de 1992: Sobre crisis, claudicaciones y mesianismos*

279 *¿Puede la petrodemocracia sobrevivir sin el maná petrolero?*

315 *Las realidades, los escenarios y las opciones*

349 *Apéndices*

P A R T E

385 **Venezuela: Historia y política**

IV

387 *La ilusión y el engaño: La Independencia venezolana y el naufragio del mantuanismo*

419 *Bolívar como héroe trágico*

463 *Visiones del fracaso: Intelectuales y desilusión en la Venezuela moderna*

493 **Bibliografía**

La presente edición en tres volúmenes de mis *Obras Selectas* es el resultado de la buena voluntad y esfuerzo de numerosas personas.

De manera especial deseo destacar la guía y el apoyo de mi colega y amigo Carlos Pacheco, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y director de la Editorial Equinoccio, así como de Evelyn Castro y todos los miembros del equipo de trabajo de Equinoccio.

He sido afortunado al contar con el respaldo profesional y aprecio compartido de Maribel Espinoza, cuya devoción hacia la tarea de corregir los textos y prepararlos para su publicación ha sido fundamental. Agradezco también a Aitor Muñoz Espinoza su aporte creador, así como a Alberto Linares su dedicación.

Numerosos amigos contribuyeron con el financiamiento de estas publicaciones. A todos ellos les reitero mi honda gratitud. Una de las más gratas experiencias vinculadas con la realización del proyecto, ha sido precisamente constatar que cuento con un nutrido grupo de sinceros y leales amigos. Me he sentido genuinamente recompensado por ello.

El presente volumen recoge varios de mis estudios en torno a la política venezolana contemporánea, así como tres ensayos históricos. Corresponderá al lector comprobar hasta qué punto fui capaz de percibir los síntomas de erosión del sistema político establecido en Venezuela durante los tiempos de la República Civil (1958-1998), y en qué medida logré advertir acerca del imperativo de rectificar a tiempo. Por otra parte, no dejará ese lector acucioso de captar la evolución de mi perspectiva acerca de la figura histórica de Bolívar, así como la agudización de mi mirada crítica hacia su pensamiento y acción políticos.

Las siguientes son las fechas iniciales de publicación de los diversos textos aquí recopilados:

- *La miseria del populismo* (1986)
- *La crisis y las perspectivas de la democracia venezolana* (1989)
- *Decadencia y crisis de la democracia* (1994)
- *La ilusión y el engaño: La Independencia venezolana y el naufragio del mantuanismo* (2001)
- *Bolívar como héroe trágico* (2002)
- *Visiones del fracaso: Intelectuales y desilusión en la Venezuela moderna* (2000)

Dedico esta edición de mis *Obras Selectas* a Gladys, mi esposa, y a Paola, mi hija, a quienes debo más —en términos de afecto entregado y de estímulos para vivir— de lo que jamás podría retribuirles.

Anita Romero

Caracas, febrero de 2010

La miseria del populismo.**I****Mitos y realidades de la democracia en Venezuela**

«... la política en el mundo de hoy es en su misma esencia un instrumento de aprendizaje social. Sus posibilidades de funcionar como una vía de supervivencia y crecimiento, y no como un mecanismo de destrucción, se verán notablemente acrecentadas en la medida en que sea guiada por mayores esfuerzos intelectuales. Todos los estudios políticos, y todas las técnicas y modelos propuestos como herramientas de análisis tienen igual propósito: hacer que los hombres sean capaces de actuar en política con los ojos abiertos».

KARL DEUSTCH

The Nerves of Government. New York: The Free Press, 1966.

«¿Ah, y cuándo para el corazón del hombre fue menos que una simple traición dejarse llevar por la corriente de las cosas...?».

ROBERT FROST

«Reluctance», en *The Poetry of Robert Frost*. New York: Holt, 1962.



1

En su controversial *Estudio de la historia*, Arnold Toynbee confiesa que se vio llevado a escribirlo a raíz del impacto devastador que la Primera Guerra Mundial tuvo sobre los imperios europeos, y que él observó como lúcido y angustiado testigo. Esa terrible conflagración le reveló de manera directa el carácter precario, permanentemente vulnerable y sujeto a la decadencia que impregna aun las más elevadas e imponentes creaciones del genio y la perseverancia humanas.¹

Si bien su obra ha sido sometida a muy duras críticas, muchas veces justificadas,² el impresionante análisis de Toynbee sobre el origen, auge y desintegración de las civilizaciones tiene una gran virtud: su lectura es muy estimulante, y esto es algo que no puede decirse de gran número de obras históricas. Juzgar a Toynbee únicamente en relación con las deficiencias científicas de su esfuerzo equivale, por ejemplo, a dictar un veredicto sobre un libro como *Las voces del silencio*, de André Malraux, de acuerdo exclusivamente con los criterios academicistas de la estética y la historia del arte: en ambos casos, tales apreciaciones dejarían de lado lo más valioso de esas obras; es decir, la originalidad de la visión y la riqueza intelectual que motivaron su diseño y ejecución.

Es en función de esas características que he creído útil comentar brevemente el esquema de cambio histórico sugerido por Toynbee, pues considero que ofrece un interesante ángulo de aproximación al conte-

Arnold Toynbee, *A Study of History*. (Abridged Edition). London: Oxford University Press, 1960, pp. 908-912.

Para un resumen de las principales posiciones en torno a las posibilidades de una filosofía de la historia, véase Patrick Gardiner, ed., *Theories of History*. New York: The Free Press, 1959. Una respuesta clásica a los intentos de hacer «metahistoria», al estilo de Toynbee, es el artículo de Alan Bullock, «The Historian's Purpose: History and Metahistory», *History Today*, 7, February 1959.

nido posterior de este estudio. Como es sabido, el concepto central del esquema de Toynbee es el de desafío histórico. Las sociedades y sistemas políticos, que Toynbee denomina civilizaciones, nacen y se desarrollan a través de un proceso de desafío y respuesta en constante cambio y reformulación. Según Toynbee, los hombres alcanzan niveles superiores de desarrollo histórico como resultado de su respuesta a un desafío que se plantea en términos de particular dificultad, y que les impulsa a hacer esfuerzos sin precedentes con el objeto de superar el nuevo reto. Su hipótesis es que son *las dificultades*, no las condiciones favorables, las que generan en los seres humanos los estímulos para superarse; de allí que el autor británico hable de las virtudes de la adversidad, y se refiera al mito de Ulises en la *Odisea* de Homero. Los mayores peligros que amenazaban al héroe homérico no se derivaban de sus encuentros con antagonistas declarados como los cíclopes y otros adversarios de gran poderío físico, sino de las insinuaciones de personajes como la diosa Calipso, Circe, y las sirenas, todas las cuales le tentaban con los atractivos de una vida fácil y le incitaban a desviarse de su verdadero objetivo: retornar a su tierra y recobrar lo que era suyo.³

Desde luego, ciertos desafíos pueden resultar excesivos, provocando el deterioro de sociedades enteras y eventualmente su colapso, y esta realidad conduce a interrogarse acerca de los criterios que permiten determinar si una sociedad crece y se desarrolla o si ha entrado en una etapa de disgregación. Toynbee rechaza los criterios basados en el aumento del grado de control sobre el ambiente externo, bien sea físico —a través de mejoramientos técnicos—, o humano —a través de la conquista política y militar de sociedades más débiles. El progreso de una sociedad, de acuerdo con Toynbee, se manifiesta más bien en un proceso de mayor articulación y autodeterminación *internas*, es decir, en el avance de los mecanismos de acción de un sistema político y en sus capacidades intelectuales y organizativas, todas las cuales le permiten enfrentarse en forma sistemática a una variedad de desafíos de creciente complejidad.⁴ El progreso en la autodeterminación significa, en última instancia, que *los desafíos supremos a una sociedad se originan dentro de sí misma*, y tocan su propia habilidad práctica y coraje moral como factores decisivos para sobreponerse a otros retos externos.

3 Toynbee, pp. 60-68.

4 *Ibid.*, pp. 198-208.

Todo crecimiento así definido tiene su origen en la creatividad de individuos o grupos minoritarios, cuya tarea es en primer lugar proponer a su sociedad una nueva visión y nuevas metas, y en segundo lugar persuadir a la mayoría para que realice los esfuerzos y sacrificios necesarios con el objeto de superar el desafío planteado. A su vez, la ruptura y posterior desintegración de las sociedades se deriva precisamente del progresivo deterioro en la creatividad de los sectores dirigentes, que de minorías creadoras pasan a ser minorías dominantes, lo cual conduce a que la mayoría retire la confianza que tenía en sus líderes y a la fragmentación y pérdida del todo social.⁵ Las sociedades, en otras palabras, no perecen de causas naturales, y sólo pocas veces se desintegran como producto de un asesinato o agresión externa; la más frecuente causa de deterioro y fracaso es el *suicidio*: la consecuencia de deficiencias en la capacidad creadora de la dirigencia. Estas fallas pueden manifestarse de dos maneras: a través de la demagogia o del autoritarismo. O bien porque los líderes, por cansancio y autocomplacencia, se entregan al peligroso arte de ilusionar a las mayorías, o bien porque, llevados de ambición excesiva y una ausencia de humildad, deciden oprimir a la mayoría, quebrando así el vínculo de lealtad y credibilidad que sostenía al sistema. Toynbee distingue entre la ruptura y la desintegración de una sociedad; lo primero no implica inevitablemente lo segundo, pues un orden político-social determinado puede simplemente petrificarse, ya que, si bien fue capaz de resolver el reto inicial que le dio origen, no logró superar el desafío del crecimiento y la autodeterminación. Cuando se presenta una situación semejante la sociedad se estanca, y la mediocridad, la desconfianza, la falta de solidaridad y la incapacidad para innovar se transforman en sus características primordiales y definitorias. El paso siguiente es el desmembramiento, el caos, la anarquía, y finalmente el autoritarismo.⁶

Ibid., pp. 244-359.

Sigmund Freud, *Civilization and Its Discontents*. London: Hogarth Press and the Institute and Psychoanalysis, 1946, pp. 35-36.

A pesar de que la anterior no sea más que una cruda síntesis del marco conceptual del *Estudio de la historia*, la misma ofrece, a mi modo de ver, una sugestiva interpretación del cambio histórico con obvia relevancia para el actual contexto venezolano. Nuestra democracia surgió como respuesta a un desafío nacional en lucha por la libertad contra la tiranía. En una primera etapa de estabilización el nuevo sistema tuvo que enfrentar serios retos políticos, pero después de ese período, y casi hasta el presente, las condiciones de expansión de la democracia venezolana han sido extremadamente favorables debido a una combinación de factores, pero principalmente a la posibilidad de satisfacer las expectativas siempre crecientes de la población con los beneficios de una economía rentista basada en el petróleo. Esta ausencia de dificultades no detuvo nuestro crecimiento, pero sí lo encauzó por canales que, en lugar de acentuar nuestras capacidades de autodeterminación y creatividad, nos convirtieron en una sociedad falsamente opulenta y artificialmente sólida, generando desmedidas ilusiones de poderío y acrecentando la complacencia de los sectores dirigentes.

La crisis económica, social y política que ha venido perfilándose con cada vez mayor nitidez en tiempos recientes tiene un denominador común: la pérdida de confianza de numerosos venezolanos en sí mismos y en su país. Los rudos golpes recibidos a partir de 1983 han empezado a mostrarnos la irrefutable realidad de nuestras vulnerabilidades, y por primera vez en muchos años nos colocan frente a un desafío histórico de dimensiones verdaderamente significativas. Pero el problema de fondo es grave, pues nuestros sectores dirigentes se encuentran llenos de dudas acerca de cómo enfrentar creativamente el reto de renovarse después de dos décadas de fácil manejo populista —es decir, demagógico— de la política. Sin embargo, creo que es justificado afirmar que la necesidad de innovación es urgente, pues en Venezuela se está perdiendo aceleradamente la habilidad de crear. De creer que el país pueda, de verdad, superar el pesimismo, la incertidumbre y el desencanto que le abrumen; de creer que el país sea capaz, de verdad, de conquistar las metas de desarrollo equilibrado, honestidad política y respetabilidad internacional que han sido repetidamente sustentadas por nuestros gobernantes democráticos; de creer finalmente que los venezolanos logremos, de verdad, mejorar sustancialmente al país en un futuro cercano. En el terreno político, extirpando la corrupción y el clientelismo partidista que la origina. En

el terreno económico, aumentando la productividad de nuestro trabajo y cercenando la mentalidad rentista que nos ha creado la artificial riqueza petrolera. En el terreno social, elevando la calidad de nuestra vida colectiva y ampliando las oportunidades de superación y el sentido del mérito por el trabajo al mayor número posible de venezolanos. En el terreno educativo, renovando nuestros sistemas de enseñanza para cerrar, aunque sea sólo en parte, el enorme abismo que ahora nos separa de los países más avanzados del mundo. En el terreno científico, produciendo respuestas originales a los problemas de nuestra industria y agricultura. Y, en fin, en el terreno de nuestra proyección exterior, creando la imagen de país equilibrado, responsable, moderado, y también firme y serio en la defensa de sus intereses. Hablo aquí de la habilidad de creer *de verdad*, no superficial ni pasajera. El deterioro de esta habilidad y del vínculo de confianza que une a la población y sus líderes está en la raíz de la actual crisis nacional, y es la médula de la profunda, enervante, creciente desilusión de los venezolanos, tanto de los que conocen los detalles de la condición interna del país y sus vulnerabilidades exteriores, así como de los que apenas las intuyen.

Por esto, el reto clave de nuestra élite política democrática, el primer e impostergable desafío que le toca enfrentar, es restaurar la habilidad de creer en los venezolanos: de creer en el mensaje de sus dirigentes, de creer en sí mismos como ciudadanos responsables de una nación libre regida por leyes iguales para todos y respetadas por todos; en fin, de creer en su país. No en un país mágico, inflado por la retórica pero debilitado en sus resortes morales; vanidoso en su comportamiento internacional pero internamente sostenido por una economía artificial; henchido por la gloriosa memoria de sus próceres, pero incapaz de reconciliar la libertad y el orden; sino un país que entienda su pasado y los peligros de su presente, y que abandone el escepticismo sobre su porvenir.

La tarea no será fácil, pero hay que tratar, y un paso fundamental es definir *en qué país creer*. Este estudio es un intento de responder a esa interrogante, de reflexionar sobre una Venezuela que deje de lado las ambiciones desbordadas y el gigantismo económico, que asimile su potencial y limitaciones como país pequeño ubicado en un área altamente conflictiva, un país que sólo sobrevivirá a largo plazo como democracia y como nación libre e independiente por sus propios esfuerzos. Los venezolanos sólo lograremos recuperar la capacidad de actuar con creatividad y decisión en lo interno y externo si antes recobramos la habilidad de creer.

Pocas veces resulta fácil enfrentarse a la realidad. Los hombres tendemos a engañarnos con ilusiones y fantasías, sustituimos los deseos por los hechos y con frecuencia llegamos al extremo de dar por completo la espalda a una realidad que nos perturba y nos entregamos sin crítica al espejismo que nos reconforta. En el caso de las sociedades que comienzan a experimentar síntomas de ruptura, estancamiento o desintegración, ese alejamiento con respecto a una realidad insatisfactoria adopta usualmente la forma de lo que Toynbee denomina la sensación de abandono, que consiste en una paulatina entrega, por parte de la ciudadanía y sus dirigentes, de sus responsabilidades a las fuerzas del azar o de una presunta inevitabilidad histórica.⁷ Para decirlo en otras palabras, la sensación de abandono es una claudicación ante la historia.

¿Se está produciendo este fenómeno en la Venezuela contemporánea? Creo que hay signos que apuntan en esa peligrosa dirección, y que se manifiestan, por un lado, en la renuencia de un sector importante de la población a mirar la realidad de frente y descarnadamente, y por otro lado en la ausencia de un ánimo verdaderamente convincente de renovación de parte de nuestros sectores dirigentes. Esta reacción no es sorprendente, aunque desde luego no presagia nada bueno para el país. Karl Popper ha analizado sus raíces en la tensión que genera la existencia de una sociedad libre, que exige una actitud despierta, crítica y responsable de parte de los ciudadanos. Se trata de una sensación creada por el esfuerzo que la vida en una sociedad abierta continuamente demanda de nosotros: «... el esfuerzo de ser racionales [...] De responder por nosotros mismos, de aceptar nuestros deberes».⁸ En un régimen dictatorial, por supuesto, este problema no se plantea, pues el poder de decidir ha sido usurpado y el individuo carece de responsabilidad concreta sobre su destino político. El precio de la libertad es la tensión de ser responsables, y para los venezolanos el desafío consiste precisamente en superar la crisis sin sacrificar la libertad.

7 Toynbee, pp. 444-445.

8 Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies*, vol. 1. London: Routledge & Kegan Paul, 1966, p. 176.

Petróleo y populismo

En un artículo de prensa escrito con motivo del estreno de su famosa pieza teatral, *La muerte de un viajante*, el dramaturgo norteamericano Arthur Miller definió la esencia de la tragedia como la dislocación de la imagen que cada quien tiene de sí mismo.¹ Esta es una idea poderosa, que no sólo se ajusta a la realidad de los individuos sino también a la de las naciones enteras. Posiblemente, la esencia del malestar y la desconfianza que se han instalado entre un amplio sector de venezolanos en tiempos recientes, y que tienden a crecer día a día, tiene sus raíces en la progresiva y persistente dislocación que viene experimentando la imagen que nos habíamos hecho del país, particularmente durante la década que se inició a partir de 1973.

El camino desde los sueños de la «Gran Venezuela», el «Nuevo Orden Económico Internacional», y el «papel protagónico de Venezuela en el mundo», hasta la dura realidad del endeudamiento, la devaluación de la moneda, la pérdida de la credibilidad de las organizaciones y líderes políticos democráticos, el deterioro institucional, el incremento del clientelismo partidista y la constatación de que la corrupción se ha generalizado en el país, ese camino, repito, desde el reconfortante mundo de las ilusiones hasta la severa coyuntura en que ahora nos encontramos ha sido excesivamente rápido y traumatizante. Sin embargo, la misma severidad del cambio, la crudeza y velocidad del descenso, aún no han permitido que surja entre el liderazgo nacional una imagen alternativa, a la

Arthur Miller, «Tragedy and the Common Man», *The New York Times*, February 27, 1946.

vez clara y consistente, sobre el país que tenemos y el que deseamos crear. Lentamente hemos caído en cuenta de que en esos años atravesamos una etapa de desmesuradas fantasías, de espejismos, de expectativas falsas, de autoengaño y retórica artificial que dañaron hondamente lo que quizás podríamos denominar el alma nacional, que no es otra cosa que nuestra imagen de nosotros mismos. Pero no es fácil, con base en esta toma de conciencia, dar inicio a un proceso de rectificación a fondo bajo la guía de un proyecto nacional diferente, que preserve los logros del pasado pero que supere las fallas de una democracia en obvia situación de descomposición y crisis. Tal proyecto tendría que levantarse sobre una visión alternativa del país que tenemos, de nuestra posición en el mundo y de la Venezuela que deberíamos tratar de construir; y esa visión, para decirlo en pocas palabras, tendría que fundamentarse en la aceptación de que somos un pequeño Estado, de importancia relativamente marginal en las relaciones internacionales, cuyos problemas —al menos por ahora— superan nuestras capacidades de gestión, y de que debemos actuar a la vez con modestia y realismo, con un acertado equilibrio entre la audacia y la prudencia, convencidos de que el desafío principal es *interno* y de que sólo nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos, podemos salir del atolladero.

Toda sociedad —escribió en una ocasión Henry Kissinger— puede alcanzar un punto en su proceso evolutivo en el que corre el riesgo de haber agotado todas las posibilidades de innovación inherentes en su estructura. Una vez alcanzado este punto la sociedad pierde su capacidad de adaptación, y tarde o temprano, no importa cuán poderosa o estable sea en apariencia, comenzará a desintegrarse. El colapso de las naciones se debe entonces a dos factores: la rigidez interna y el deterioro en la habilidad de sus líderes para dirigir el curso de los eventos.²

¿Ha llegado Venezuela a este punto? ¿Se han agotado en nuestra democracia las potencialidades de la innovación política? Francamente, no lo creo así. Sin embargo, hay que tener claro que existen importantes obstáculos para el surgimiento y difusión de ideas nuevas que rompan los esquemas del pasado y abran perspectivas de renovación a nuestra

sociedad y a nuestro sistema político. Aquí vale la pena complementar la observación de Kissinger con un agudo párrafo de Hayek, según el cual:

El político de éxito le debe su poder al hecho de que se mueve dentro de los esquemas aceptados de pensamiento, y de que piensa y habla de acuerdo a los patrones convencionales. Sería casi contradictorio que un político fuese a la vez un líder en el terreno de las ideas. Su tarea en una democracia es descubrir cuáles son las opiniones que tiene la mayoría, en lugar de abrirle paso a nuevas opiniones que *podrían* hacerse mayoritarias en un futuro lejano.³

De acá se deriva un grave problema para un sistema como el nuestro, que es el de la reducción progresiva en su capacidad de innovación intelectual en el terreno político. No se trata tan sólo de que en una democracia la mayoría puede en ocasiones estar equivocada, sino también —y esto es lo relevante para mi argumento— que buen número de veces esa mayoría tiende a estar desinformada respecto a la naturaleza y desarrollo real de las situaciones, se siente confusa y hasta desinteresada ante la complejidad de los problemas políticos y económicos, y busca en sus dirigentes las respuestas que requiere. Pero si estos últimos, a su vez, lo que desean es adaptarse al más extendido denominador común en el público, ¿de qué manera pueden entonces surgir ideas y planteamientos originales frente a los retos que tiene la nación?

El dilema esbozado se hace aún más agudo en tiempos de tensión como los que en la actualidad vive Venezuela, pues es precisamente en tales circunstancias cuando se necesitan con mayor urgencia proposiciones renovadoras ante los problemas nacionales. En la actual coyuntura del país existe una profunda necesidad de ideas no convencionales sobre la economía, el papel de los partidos políticos, el rol del liderazgo, la organización del Estado, la reforma constitucional, la política exterior y, en fin, sobre las concepciones más globales acerca del porvenir de Venezuela, y el carácter y propósitos de lo que he denominado nuestro proyecto nacional. No obstante, el sistema político venezolano no está dando muestras de poseer una capacidad creativa adecuada a las condiciones que vivimos. En parte —como comentaré más adelante— esto se debe a

F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty*. London: Routledge & Kegan Paul, 1976, p. 112.

que, a pesar de que muchos de nuestros dirigentes perciben la realidad y peligrosidad del deterioro, hay aún una sólida reserva de confianza en la estabilidad básica del orden político, que a veces asume la forma de una cierta creencia mágica –derivada del espejismo petrolero– en que, de una u otra manera, saldremos airoso de la crisis.

A lo anterior se añade una concepción manipuladora y cortoplacista de la política que se halla bastante extendida entre nuestros sectores dirigentes. La importancia de la lucha electoral y las disputas internas en los partidos han concentrado por años la atención de buena parte de nuestros políticos, y en no pocos casos ello ha contribuido a dejarles atrás con relación a un país que es ahora mucho más complejo y que se enfrenta a desafíos crecientemente exigentes. Por último, existe también en nuestro medio una actitud ambigua, mezcla de respeto, sospecha e ironía, hacia la función de innovación intelectual en política. Hay que admitir que tal actitud ha encontrado cierta justificación en las posiciones radicales que con demasiada frecuencia asumen nuestros intelectuales, y en el tradicional abismo, que permanece abierto, entre los proyectos de renovación que se plantean en Venezuela y las realidades y posibilidades concretas del país. No obstante, esto en nada disminuye el significado del problema que he querido formular: la democracia venezolana requiere en el actual momento histórico ideas no convencionales y hondamente renovadoras, que la revitalicen y enrumben hacia metas de superación nacional en todos los órdenes; sin embargo, el hecho es que nuestro sistema político se muestra lento y reacio a innovar.

¿Qué hacer? Ante todo es indispensable afrontar la verdad de la crisis sin la más mínima muestra de autocomplacencia, y tener claro que la realidad del deterioro de la democracia venezolana va más allá de lo político –del fracaso del liderazgo y de las más vitales políticas públicas, de la conversión de los partidos en meras maquinarias electorales y del descontento generalizado de la población–, y hunde sus raíces en lo social y económico. En otras palabras, comienzan a presentarse en Venezuela constelaciones de problemas y estrangulamiento del desarrollo semejantes a los que en repetidas ocasiones han producido el derrumbe de la democracia pluralista en la mayor parte de las naciones latinoamericanas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son sus orígenes y qué podemos hacer para enfrentarla?

El conocido historiador británico Edward H. Carr dijo una vez «que la historia sólo puede ser escrita por aquellos que encuentran un sentido

de dirección. La creencia de que venimos de alguna parte, está estrechamente vinculada a la creencia de que vamos a alguna parte. Una sociedad que ha perdido la fe en su capacidad de progresar en el futuro cesará rápidamente de preocuparse por su progreso en el pasado». ⁴ Si bien es indudable que la democracia venezolana atraviesa por un difícil período, cuyo posible desarrollo y consecuencias están aún sumidos bajo un manto de incertidumbre, hay que reconocer los logros positivos del proceso que se inició en enero de 1958. Lo que ahora somos, por supuesto, es producto del pasado; la historia es la raíz del presente, y aun si admitiésemos que los pueblos que olvidan su historia *no* se condenan inevitablemente a repetirla, el conocimiento de la historia puede al menos ahorrarles a las nuevas generaciones la necesidad de aprender una y otra vez las mismas lecciones como si nada hubiese ocurrido antes y hacia atrás sólo existiese un vacío. ¿Y qué enseña la historia de Venezuela desde un punto de vista puramente político? Pienso que el recorrido de la Venezuela independiente casi hasta nuestros días, tiene un denominador fundamental que ha caracterizado por décadas nuestro proceso evolutivo como pueblo: la violencia de los venezolanos entre sí, la opresión de unos venezolanos sobre otros, y el aplastamiento continuo y sistemático de los derechos de los ciudadanos para servir intereses exclusivistas y minoritarios. En tal sentido, no cabe duda de que la democracia inauguró una etapa cualitativamente distinta y ampliamente positiva del acontecer histórico nacional.

Es crucial que los venezolanos de hoy apreciemos esta realidad: nuestro sistema de libertades, a pesar de sus serias fallas, es una significativa conquista histórica que nos separa de una larga era de tiranías, guerras civiles y arbitrariedad. Esa historia debe también transmitirnos el mensaje de que la democracia y la protección de los derechos individuales constituyen un logro frágil, pues, entre otras cosas, el pasado ejerce su peso sobre el presente, y no sería sorprendente que el paulatino deterioro del actual experimento político venezolano desembocase en nuevos períodos de represión y autoritarismo. Esa conciencia acerca de la fragilidad histórica de la democracia y la libertad en nuestra tierra tiene que convertirse en el principal estímulo para el mejoramiento de nuestro orden político. El problema de aprender por la experiencia es que el costo de adquirirla puede resultar demasiado elevado. Al principio de una

nueva etapa histórica los pueblos y sus líderes tienen usualmente numerosas opciones y alternativas para la acción creadora, pero un conocimiento escaso que pueda servir de base sólida a la toma de decisiones. Cuando ese conocimiento se adquiere, desafortunadamente, ya las opciones se han reducido con el paso del tiempo y el impacto acumulativo de las escogencias ya implementadas, y así también se reduce la posible repercusión de las nuevas decisiones. Un ejemplo revelador —que será comentado posteriormente— lo ofrece la evolución de la política económica del Estado venezolano durante los años 1970: de las innumerables alternativas que se nos presentaron a mediados de esa década asumimos las más ambiciosas y desproporcionadas. Cuando sus efectos dañinos se hicieron patentes ya era tarde para rectificar a fondo. De allí que la comprensión del pasado histórico debe generar conocimiento que podamos emplear *ahora* en el apuntalamiento de nuestras libertades, pues aún nos resta algo de tiempo y capacidad para decidir.

En este orden de ideas, y retomando el tema de los logros de la democracia, vale la pena referirse al fenómeno que el notable economista norteamericano Albert Hirschman denominó «fracasomanía», que es a su modo de ver una actitud muy usual por parte de cada nuevo grupo de decisores en Latinoamérica, que consideran todo lo que vino antes de ellos como un fracaso total, creando así la impresión de que es necesario empezar desde cero una y otra vez. A esta tendencia se une la dificultad para percibir que han ocurrido y constantemente están ocurriendo cambios en nuestras sociedades, buen número de ellos con signo positivo, lo cual con frecuencia nos lleva a pasarlos por alto y abandonar las cosas a un inevitable deterioro.⁵ Es bastante evidente que estas observaciones se aplican con fuerza al caso venezolano, pues ya se ha hecho reglamentario que nuestros sucesivos gobiernos dediquen buena parte de sus energías a disminuir la importancia de lo que los precedió, sin generalmente detenerse a considerarlo en detalle o a intentar extraer beneficios de los aspectos positivos que ha legado el pasado. Ocurre también que el país ha avanzado y se ha transformado con tanta rapidez en los últimos 25 años, y en tantos terrenos de manera simultánea, que a los que nacimos bajo el imperio de la Venezuela petrolera nos resulta difícil asimilar la extraordinaria magnitud del cambio o interpretar adecuadamente lo que tiene de positivo.

5 Albert O. Hirschman, *Essays in Trespassing*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, pp. 155-156.

No obstante, una vez admitidos estos puntos, se hace necesario retornar a la realidad de la presente crisis y al análisis de sus raíces y probables consecuencias, y apuntar que, a pesar de todo lo dicho acerca del avance que ha representado la democracia para Venezuela, *sí* ha habido un fracaso histórico de dimensiones tal vez insospechadas, pues –para citar de nuevo a Carr– «la dificultad de la historia contemporánea es que la gente recuerda el tiempo cuando todas las opciones estaban aún abiertas, y encuentra complicado adoptar la actitud del historiador, para el cual esas alternativas ya fueron cerradas por los hechos».⁶ No hace falta demasiado esfuerzo para caer en cuenta de que a la nación ya se le han clausurado varias posibilidades de avance en la dirección de lo que algunos, obnubilados por el flujo de petrodólares, dieron en llamar la «Gran Venezuela». Esto, como sostendré en estas páginas, no es necesariamente negativo, ya que semejantes delirios de grandeza, aun en la época de nuestra bonanza, siempre fueron exagerados, se colocaron más allá de nuestras dimensiones y entraron en conflicto con nuestros verdaderos intereses. Lo que cabe preguntarse es: ¿Qué otros senderos se le han cerrado al país? ¿Cómo nos relacionamos los venezolanos con ese pasado reciente y hacia dónde aspiramos realmente orientar el país? Estoy convencido, como sugerí previamente, de que en las condiciones existentes de democracia política es posible para Venezuela tomar un rumbo con objetivos razonablemente claros y compartidos por la mayoría. Para lograrlo hay que hacer dos cosas: en primer lugar, comprender adecuadamente cuál ha sido la naturaleza y efectos de los factores determinantes en la evolución de la democracia venezolana hasta el presente y su contribución a la crisis, y en segundo lugar dar forma a una visión lo más precisa posible del tipo de país que queremos crear hacia el porvenir.

Venezuela ha avanzado en diversos aspectos, pero hemos pagado altos costos por ello y hemos despilfarrado en gran parte la tal vez irrepetible oportunidad histórica que nos abrió la etapa de la bonanza petrolera. Dos factores clave explican el proceso evolutivo de la democracia venezolana: petróleo y populismo. El petróleo nos ha dado en apariencia la posibilidad de crecer aceleradamente y atacar a la vez numerosos problemas de toda índole en lo social, económico y político, sin que para ello haya sido indispensable realizar los esfuerzos de productividad, organización, ahorro e innovación que han caracterizado el desarrollo de na-

ciones avanzadas en otras regiones del mundo. El populismo ha estado constituido, de un lado, por un conjunto de percepciones e ideas sobre la economía, la política y la visión global de la democracia y su futuro, y de otro lado por un cierto estilo de ejercicio del liderazgo que ha influido decisivamente en la manera en que los venezolanos —nuestros dirigentes y la población en general— han asumido sus tareas históricas. Dicho de otra forma, la riqueza derivada del petróleo abrió una gama de alternativas para el desarrollo democrático nacional durante los pasados 25 años; de ese conjunto de posibilidades, el liderazgo político y económico nacional ha escogido consistentemente una línea de acción de tipo populista que es, en última instancia, la que ha moldeado los perfiles más nítidamente definidos de nuestra democracia. Es aquí donde se encuentra la explicación de la presente crisis de nuestro orden político.

Casi desde los albores de la explotación petrolera en el país, venezolanos de relevancia —entre los cuales se contó de manera prominente, en algunos momentos de especial pesimismo, Juan Pablo Pérez Alfonzo— han interpretado el impacto de esta riqueza extraída del subsuelo como si se tratase de una suerte de maldición, que inevitablemente tenía que conducirnos a la autocomplacencia, la desmesura y la corrupción típicas de las naciones que no han tenido que trabajar duro por su bienestar. Según esta perspectiva de las cosas, los cuantiosos ingresos provenientes del petróleo nos condenan irremisiblemente al despilfarro de esa riqueza, a la distorsión y al desquiciamiento de la economía, al deterioro moral de la población y sus líderes, a la hipertrofia del Estado y al aumento continuo de las desigualdades e injusticias. Esta apreciación, sin embargo, se fundamenta en una concepción determinista de la historia que considero desde todo punto de vista inaceptable.⁷ Al contrario, parto de la idea según la cual los hombres hacemos nuestra propia historia, aunque por supuesto no siempre dentro de un contexto que nosotros mismos hayamos deseado o escogido. El factor petrolero ha jugado un papel crucial en el desarrollo de la Venezuela moderna, pero las vías específicas en que ha evolucionado la democracia, y la intensidad y complejidad de los desafíos que ahora tiene por delante, no surgen de la explotación petrolera misma sino de las ideas —políticas, sociológicas y económicas— que han guiado la inversión y utilización de esos recursos y que han dado forma

7

Para un análisis de los aspectos éticos y epistemológicos del determinismo histórico, véase mi ensayo «Tolstoi, el poder y la paz», *Argos*, 3, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1981, pp. 7-34.

al país que tenemos. Si las ideas y el estilo político que han conducido la acción de nuestros dirigentes a todos los niveles hubiesen sido otras, si las concepciones que han determinado la manera en que se ha realizado el gasto de la renta petrolera y el marco político-económico resultante hubiesen tenido una naturaleza no populista, casi seguramente, estoy convencido de ello, la situación presente de Venezuela no sería tan en extremo inquietante como de hecho lo es.

Para tratar de afinar aún más el planteamiento que he venido haciendo en los párrafos precedentes, vale la pena abrir aquí un breve paréntesis metodológico. Es bien sabido que el materialismo histórico marxista enfatiza la importancia de los factores objetivos de tipo socioeconómico en la evolución de los asuntos humanos. Como lo formuló Marx en el Prólogo a la *Contribución a la crítica de la economía política*, «El modo de producción de la vida material condiciona en términos generales el desarrollo social, político e intelectual de los grupos humanos. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que es su ser social el que determina su conciencia».⁸ Dicho en otra forma, si bien Marx no negó el papel de las ideas y de la voluntad humana como elementos del cambio histórico, su visión de la evolución social atribuye una influencia preponderante a los condicionamientos económicos. Max Weber, por otra parte, ofreció en su gran obra *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* una versión de la historia que difiere significativamente de la de Marx, en cuanto que Weber quiso «contribuir a la comprensión de la forma en que las ideas se convierten en efectivas fuerzas históricas», mediante la comprobación de que la Reforma protestante y la aparición de las actitudes que abrieron las puertas al nacimiento del modo de producción capitalista, no pueden ser explicadas como «el resultado históricamente necesario» de transformaciones económicas anteriores.⁹ En otras palabras, Weber mostró con gran originalidad y lucidez que las ideas y actitudes de los seres humanos sobre sí mismos y el ambiente que les rodea, son capaces de motorizar transformaciones que *no estaban implícitas* en el contexto en que se desenvolvían sus actividades, dando así amplio espacio a la creatividad histórica.

Desde luego, tanto la tesis de Marx como los postulados de Weber, llevados a un extremo, pueden conducir a posturas dogmáticas que en lugar

Karl Marx y Federico Engels, *Selected Works*. London: Lawrence & Wishart, 1968, p. 182.

Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen & Unwin, 1976, pp. 90-91.

de explicar la realidad contribuyen más bien a ocultarla del análisis crítico. No obstante, es claro que los aportes de Weber introdujeron correctivos importantes a las tendencias deterministas que se encuentran hondamente arraigadas en el pensamiento de Marx y en el de muchos de sus discípulos. Por esto, aplicando las enseñanzas de esta polémica metodológica en las ciencias sociales al tema que ahora me ocupa, he intentado plantear que es un error creer que el rumbo que ha seguido la democracia venezolana en los campos socioeconómico, político e ideológico, estaba inevitablemente definido en un presunto carácter determinista del factor petrolero. Si bien el petróleo creó la posibilidad de que Venezuela tomase el camino que ha tomado, el hecho de que nuestros dirigentes optasen por la vía fácil de la economía rentista y de la política populista fue el resultado de decisiones, escogencias y tomas de posición –deliberadas o no en todos sus aspectos– que *han podido ser de otra manera*. Es decir, que los errores cometidos deben atribuirse a fallas del liderazgo y no a la supuesta inevitabilidad que, según algunos, está en la esencia misma del factor petrolero como determinante de nuestra existencia nacional.

¿En qué consiste entonces el populismo? Se trata, a la vez, de un *tipo* de movimiento político, de un conjunto de concepciones *sobre* la política y de un estilo de ejercer el liderazgo. Dicho de otra manera, el concepto de populismo tiene un contenido histórico-político y un aspecto ideológico. Históricamente, a partir de la década de 1940, el populismo latinoamericano ha representado el intento, generalmente dirigido por la clase media, de conjugar esfuerzos de varios sectores sociales para crear un sistema político de amplia participación y una economía industrializada, capaz de satisfacer las aspiraciones tanto del trabajo como del capital. Según Juan Carlos Rey,

Los partidos o movimientos políticos populistas latinoamericanos se caracterizan, ante todo, por construir una coalición de clases y grupos sociales heterogéneos [...] Desde el punto de vista de los condicionamientos estructurales más generales, tales coaliciones surgen tras la quiebra del modelo primario-exportador asociado al «crecimiento hacia afuera» y representan el intento de formar una alianza tácita entre clases y grupos sociales diversos con el fin de buscar una nueva forma de inserción en el sistema capitalista internacional y la puesta en marcha o la aceleración e intensificación de un modelo de «crecimiento ha-

cia adentro», primordialmente mediante la industrialización sustitutiva de importaciones.¹⁰

El sistema democrático establecido en Venezuela a partir de 1958 se fundamentó sobre expectativas de participación política creciente y mejoramiento continuo en lo social y económico de amplias capas de la población. Los diversos sectores que convergieron en la creación de ese nuevo orden de cosas —con excepción de la, para entonces, izquierda insurreccional— lo hicieron en función de aspiraciones comunes: se trataba de un régimen incluyente que en teoría debía satisfacer las pretensiones de grupos diversos, con intereses muchas veces en el fondo divergentes pero dispuestos, sin embargo, a acatar ciertas reglas de juego en la medida en que el sistema brindase respuestas positivas a las demandas de cada sector. Es importante aclarar que, en la práctica, *todas* las democracias pluralistas que existen descansan sobre coaliciones sociales heterogéneas, pero no todas adoptan las características que en América Latina tradicionalmente le ha dado el populismo a la democracia. En otras palabras, el hecho innegable de que en Latinoamérica los sistemas democráticos han fracasado repetidamente tiene que ver en parte con cuestiones de tipo objetivo o estructural de naturaleza socioeconómica y también con factores políticos e ideológicos, entre los cuales ocupa un lugar de primordial importancia el estilo político populista. Nuestro problema no ha sido —para insistir sobre el punto— que la democracia haya requerido la convergencia y el consenso de diversos sectores, sino que el sistema se ha levantado sobre supuestos políticos populistas que han conducido la economía y la sociedad hacia el callejón sin salida de la dependencia total respecto a la renta petrolera, creando también las bases del deterioro institucional, el clientelismo político y la generalizada corrupción administrativa.

Desde el punto de vista estructural, el dilema que recurrentemente ha producido el derrumbe de los sistemas democráticos en Latinoamérica se plantea entre, de un lado, las exigencias de acumulación y ahorro como palancas de inversión y crecimiento económico, y de otro lado los requerimientos distributivos de todos los sectores, cuya presión —por educación, vivienda, empleo, servicios públicos, etc. aumenta constan-

Juan Carlos Rey, «Ideología y cultura política: el caso del populismo latinoamericano», en *Problemas sociopolíticos de América Latina*. Caracas: Ateneo de Caracas-Editorial Jurídica Venezolana, 1980, pp. 146, 150.

temente e impone al Estado un gasto en permanente abultamiento. Para citar de nuevo a Rey,

El éxito de la política populista se basa en que las relaciones en el interior de la coalición no sean suma-cero, lo cual implica que los premios y recompensas a repartirse entre sus miembros han de tomarse *del exterior de ella*. Tal reparto no tiene que hacerse en partes necesariamente iguales entre sus miembros; por el contrario, lo típico es que los sectores más marginados y desorganizados participen en proporción considerablemente inferior que los más organizados y privilegiados de manera que, a la larga, *el resultado general de las políticas redistributivas es el aumento de la brecha entre ambos sectores*. Por consiguiente, el mantenimiento de la coalición está condicionado a una expansión económica y al éxito de las políticas de industrialización que no sólo proporcionan beneficios a la burguesía, sino también permiten un aumento de la producción, de los mercados, del empleo y, en general, de la participación de sectores diversos [itálicas AR].¹¹

Puesto en otros términos y simplificando un tanto las cosas, desde la perspectiva estructural el populismo se basa en el intento de, *al mismo tiempo*, satisfacer las demandas crecientes de una amplia gama de sectores y grupos, y de construir una economía sólida y productiva que sea capaz de responder a esas demandas. Si bien semejante propósito no es en principio imposible, el camino estatista, siempre escogido por el populismo, y el estilo político que caracteriza a tal fenómeno en nuestras sociedades, han bloqueado—como trataré de mostrar en estas páginas— las vías para una reconciliación entre democracia y desarrollo económico en nuestras naciones. En América Latina, con muy pocas excepciones, y a diferencia de las democracias occidentales avanzadas, no ha sido posible preservar por mucho tiempo coaliciones heterogéneas en juego político abierto, y el dilema distribución versus capitalización ha llegado comúnmente a un punto de ruptura final y a la aparición de regímenes autoritarios excluyentes. Estos últimos resuelven el dilema aplazando para un futuro indefinido las expectativas distributivistas mediante el

11 | *Ibid.*, p. 162.

cierre de los canales de acceso democrático a los sectores mayoritarios menos favorecidos.

¿Qué ha permitido en Venezuela la supervivencia de la democracia, a pesar de que hemos sido gobernados con criterios y estilo típicamente populistas por más de dos décadas? Como bien lo expone Rey en el párrafo citado anteriormente, el juego populista se mantiene en la medida en que los miembros de la coalición tomen sus recompensas con recursos provenientes *del exterior de ella*; es decir, no necesariamente con el producto de una economía sólida y equilibrada, sino con los beneficios —controlados por el Estado— del sector primario- exportador. Es claro, entonces, y se ha dicho muchas veces, que la supervivencia de la democracia populista en Venezuela se explica en buena medida, aunque no exclusivamente, por la gran capacidad de maniobra que ha otorgado al Estado la renta petrolera, la cual le ha posibilitado, al menos hasta tiempos recientes, dar algún tipo de respuesta a las expectativas múltiples y encontradas de grupos diversos y con demandas que con frecuencia no están en armonía. La fragilidad fundamental de la democracia venezolana está en que se basa en la esperanza generalizada de un progreso socioeconómico continuo por parte de todos los grupos sociales, en tanto que la economía no ha podido dejar de ser postiza, pues se trata de una economía esencialmente rentista, de altos costos y bajísima productividad. A pesar de que el juego de acrobacia del Estado con la población ha dado resultados medianamente satisfactorios por dos décadas —en cuanto a la participación política, movilidad social y acceso a recursos—, ya se hacen evidentes alarmantes signos de descomposición debido al deterioro en los términos de intercambio, al agotamiento de la sustitución de importaciones, a la estrechez de los mercados internos, y finalmente al aumento incesante de las demandas distributivistas de todos los sectores, estimulados en sus ilusiones por la demagogia populista que ha venido caracterizando por años los procesos electorales del país. En Venezuela ya existen estos estrangulamientos del desarrollo, a los que se añade el fracaso, cada día más patente, de las ambiciosas políticas de inversión del Estado, que presuntamente harían menos rentista nuestra economía erigiendo una plataforma autosostenida de producción industrial pesada no petrolera. Como resultado, el presupuesto nacional se disipa en gran parte en gastos improductivos, la deuda crece de forma desmesurada, la moneda pierde paulatinamente su valor, y la inflación y el desempleo comienzan a golpear duramente a la ciudadanía.

Desde luego, la democracia venezolana no sólo cuenta con un basamento económico, sino también con el pilar de sustentación que se deriva del apoyo mayoritario de la ciudadanía, de la disposición de nuestra gente a vivir en una atmósfera de libertades públicas, y la conciencia de los altos costos de toda índole que implican las salidas dictatoriales. No obstante, el cuadro que ha comenzado a perfilarse en nuestro país es en extremo preocupante, pues combina los efectos de una economía distorsionada, una sociedad hondamente desigual, un marco institucional ineficiente y en creciente desprestigio, con un enorme cúmulo de expectativas generadas por los partidos políticos, en particular AD y Copei, a través de dos décadas de exaltación populista, que han dejado a la nación y a sus líderes en condiciones poco propicias para enfrentar las cambiantes circunstancias de nuestro presente histórico. La cruda realidad indica que en 25 años de democracia hemos extraído alrededor de 27.000 millones de barriles de petróleo y desembolsado un gasto fiscal que alcanza unos 700.000 millones de bolívares, y sin embargo no hemos sido capaces de cimentar una nación que viva del producto de una economía no rentista, con una sociedad equilibrada y un marco legal respetado y eficaz, todo lo cual nos ha colocado en una posición altamente vulnerable, que experimenta síntomas de descomposición semejantes a los que han originado el derrumbe de la democracia en otras naciones del continente.

¿Qué ha ocurrido? ¿Era posible tomar un rumbo diferente? Estoy convencido de que sí lo era, y de que la constelación de problemas descrita no se hubiese presentado, al menos no con la intensidad y repercusiones con que lo ha hecho, si el liderazgo político nacional hubiese rechazado la tentación populista y los mitos estatistas de nuestro tiempo, adoptando en su lugar un estilo político ajeno a la demagogia y al clientelismo, basado en la moderación, y una ideología económica favorable a los mecanismos de mercado, a la competencia y a la iniciativa de los individuos, y sospechosa del intervencionismo estatal. Como lo formula, con acierto y lucidez, el economista venezolano Roberto Dubuc Picón, en nuestro país los ingresos petroleros han sido utilizados fundamentalmente para el establecimiento de una *economía de Estado*:

Si hacemos —escribe— una radiografía de la estructura de la economía venezolana, descubriremos que ésta se asemeja mucho

más a la de un país socialista de Europa oriental que a la de los llamados países capitalistas. No queremos decir que en Venezuela no haya empresarios privados; de hecho muchos de ellos tratan de sobrevivir ante el aplastante poder económico del Estado gracias a su esfuerzo y talento organizativo [...] Pero es indudable que más de un pretendido empresario ha emergido repentinamente como resultado de las ventajas especiales concedidas por el Estado o, incluso, por la apropiación indebida de los fondos públicos. Estos empresarios advenedizos se parecen muy poco a los empresarios típicamente capitalistas que hacen su fortuna después de un largo período de innovación y riesgo. La misma presencia de un Estado fuerte y dominante conduce a que muchos individuos intenten apoderarse del aparato estatal a fin de obtener privilegios particulares.¹²

Es decir, que las ideas económicas que han guiado la acción de los diversos gobiernos democráticos venezolanos a partir de 1958, en lugar de orientar las energías nacionales hacia la creación de una economía sólida y productiva, basada en la iniciativa individual, la sana competencia en un marco legal con reglas iguales para todos, y la implacable sanción al usufructo indebido de la riqueza nacional, nos encauzaron más bien por la vía a la vez más fácil, irresponsable y reconfortante a corto plazo de acrecentar el poder económico del Estado con base en la explotación pasajera de una economía rentista, utilizada para mantener satisfechos los apetitos de una amplísima clientela populista cuyas expectativas ya han llegado a desbordar el potencial del petróleo como alimento del sistema. Tanto Acción Democrática como Copei, además de otros partidos y movimientos que han participado directa o indirectamente del ejercicio del gobierno nacional en los últimos 25 años, han contribuido a extender a pasos agigantados las funciones y compromisos del Estado, aumentando así los recursos del mismo y su capacidad para conceder beneficios materiales a una coalición adormecida por la mentalidad rentista. Al convertirse en el correa de transmisión populista entre el petróleo y la sociedad venezolana, el Estado, *que equivale en nuestro caso a los partidos políticos que lo controlan*, nos han llevado a una situación de

total dependencia respecto a un ingreso cambiante y perecedero, una situación cuyo impacto va mucho más allá de lo económico y se incrusta en la propia psicología colectiva de una ciudadanía que en buena medida ha adoptado la mentalidad rentista generada por los errores y desaciertos de sus dirigentes.

En Venezuela el populismo ha significado la implantación de un conjunto de ideas económicas y la diseminación de una concepción de la política y de un estilo de hacer política profundamente dañinos al interés nacional. Tanto la mayor parte de los líderes de AD y Copei, así como gran número de intelectuales y analistas dentro y fuera de los partidos, han sucumbido por mucho tiempo a los mitos socializantes que sedujeron, después de la Segunda Guerra Mundial, a sectores importantes de la socialdemocracia y el socialcristianismo a escala internacional. Se trata de los mitos que atribuyen una especie de omnipotencia a la intervención del Estado en la vida económica, que rechazan —casi como si fuesen pecaminosos— la viabilidad de los mecanismos de mercado y la competencia; que proclaman a ultranza que las empresas públicas constituyen una afirmación de nacionalismo; que hostilizan, persiguen o contribuyen a corromper a los que se dedican por sus propios medios a la actividad de producir riquezas, que desconfían de la iniciativa individual, y usan las aspiraciones de igualdad y justicia para castigar el mérito y eliminar la competencia, y para redondear este cuadro de supersticiones que tanto daño hacen a las naciones que las acogen, tales mitos, repito, en lugar de buscar la causa de nuestros problemas y equivocaciones en nuestras propias acciones le atribuyen el origen de nuestras desventuras a otros países, al orden económico internacional, o a cualquier otro fantasma, pero pocas veces a los propios desaciertos del liderazgo nacional.¹³

En términos políticos, el populismo predominante en Venezuela se origina en una noción de la política como manipulación, como mero intento de preservar el poder en lugar de utilizarlo sistemáticamente en función de objetivos de interés público. Varias características definen el estilo político populista: en primer lugar, la vocación demagógica que lleva a ofrecer más de lo que se puede lograr y a generar expectativas que no es posible satisfacer; en segundo lugar, la visión de túnel electoralista, que obstaculiza la voluntad creadora y merma la potencialidad de los

partidos políticos para actuar como agentes de la superación ciudadana y nacional. Por último, una característica clave y quizás la más nefasta de ese estilo tan común entre nuestros dirigentes es la incapacidad para ver un abismo, contemplarse en él y tomar a tiempo las medidas correctivas para rectificar el rumbo y evitar un colapso de graves consecuencias para el país entero.

En tal sentido, uno de los pasos esenciales que deben darse con miras a afrontar políticamente la situación de deterioro nacional es tomar plena conciencia de sus verdaderas causas y de los riesgos que implican, en especial el de la gestación de una posible salida de tipo autoritario y antidemocrático en un futuro no demasiado lejano. Ello ha ocurrido en otras naciones latinoamericanas de desarrollo democrático aún más sólido que el nuestro, a raíz no tan sólo de crisis estructurales en la economía y la sociedad, sino también y fundamentalmente del fracaso de las élites políticas en gestionar eficazmente y con probidad los asuntos públicos, y de la consecuente pérdida de credibilidad de amplios sectores en la capacidad del Estado democrático para resolver eficientemente los problemas. Es la conciencia de ese peligro la que motiva el presente análisis, que ahora debe considerar con mayor detalle el proyecto político que han encarnado los principales partidos de nuestra democracia y sus efectos presentes.

Socialdemocracia, socialcristianismo y populismo

Fue Maquiavelo, en *El Príncipe*, quien primero enfatizó que en política, muchas veces, las mejores intenciones –puestas en práctica– se transforman en lo contrario de lo que sus promotores querían y llevan a resultados opuestos a los que se esperaban.¹⁴ Propósitos que parecían excelentes de pronto llevan a la ruina, y otros que en principio lucían mal pueden desembocar en realidades positivas para la sociedad. La idea tie-

Niccolo Machiavelli, *The Prince*. Harmondsworth: Penguin Books, 1961, pp. 92, 123, 130.

ne enormes implicaciones, pues cuando se estudia la historia no es difícil caer en cuenta de que numerosas tragedias han sido desencadenadas con los más loables objetivos en mente. Las revoluciones de nuestro tiempo son un ejemplo típico: su origen ha sido una voluntad de superación y liberación humanas. Su producto, sin embargo, ha sido el totalitarismo y la opresión llevados a un más elevado nivel de refinamiento.

Así es de impredecible la política, como todos los asuntos humanos. Max Weber también lo apuntaba en su famoso texto «La política como vocación»: «Es una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia—decía— [...] el de que frecuentemente o, mejor, generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación totalmente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario».¹⁵ Esta especie de alquimia de la política mediante la cual en ocasiones lo que parece bueno y deseable puede hacerse negativo y reprobable, y viceversa, no es ningún principio metafísico sino una simple constatación empírica, que tiene obvia relevancia en el caso de la democracia venezolana.

En efecto, muy probablemente, la mayor parte de los que asumieron la responsabilidad de enrumbar nuestro proceso democrático en sus primeros años de vida, de ninguna manera imaginaban que a consecuencia de sus postulados y acciones en Venezuela se iba a desarrollar una economía totalmente dependiente del petróleo, y un sistema político caracterizado por el clientelismo partidista y la corrupción en sus más diversas manifestaciones. Al contrario, es posible que, ahora, muchos de esos hombres y mujeres contemplan con estupor y desengaño lo ocurrido, y admitan con una mezcla de resignación y rebeldía el hecho de que el Estado venezolano, durante 25 años, ha devorado la casi totalidad de los ingresos provenientes de la liquidación de los minerales de nuestro subsuelo de una forma principalmente improductiva, asfixiando la posibilidad del surgimiento de una economía equilibrada, con un sector privado sólido y eficiente, y un sector público a la vez controlable y beneficioso para el país. Es posible, también, que buen número de esos líderes acepten como una realidad innegable el deterioro de nuestros partidos políticos, que de instrumentos de renovación y cambio en beneficio de Venezuela han devenido en meras maquinarias electorales, caracterizadas por la lucha tribal entre facciones unidas tan sólo por intereses personalistas, carentes de inquietudes ideológicas y de las cuales se ha

ausentado casi por completo el genuino entusiasmo nacionalista que en otro tiempo tal vez les caracterizó. Y, sin embargo, aun cuando nuestros dirigentes democráticos analicen o no con mirada crítica las realidades actuales como producto del camino que tomaron inicialmente, lo cierto es que las ideas políticas y económicas que han predominado a lo largo de nuestra evolución democrática no podían menos que llevarnos a la situación que en este momento vivimos. Es decir, no importa cuáles hubiesen sido las *intenciones* de esos hombres y mujeres que tuvieron, y en algunos casos aún tienen en sus manos la tarea de conducir al país; el hecho es que las *ideas* que han manejado en materia económica y el estilo político que han adoptado conducen directamente a los males de la dependencia petrolera, el estatismo, la demagogia populista y la partidocracia clientelar.

Ya en 1958 Rómulo Betancourt decía lo siguiente: «... la cuestión [para Venezuela] se plantea ahora en estos términos: ¿Ese mayor ingreso en la renta petrolera vamos a seguir invirtiéndolo en bisuterías costosas [...] o vamos a invertir racionalmente ese dinero en dos sentidos: en el sentido de crear una economía sólida y estable y permanente y, sobre todo, venezolana, paralela a esa economía adventicia y transitoria que deriva el petróleo?». ¹⁶ Y en otra ocasión, en esa misma época, afirmaba:

Tenemos problemas, pero el Estado venezolano dispone de una potencialidad fiscal que hace posible afrontar la solución de estos problemas. Para ello será necesario empobrecer al gobierno para enriquecer al país [...] Estamos viviendo de prestado de una riqueza, de la riqueza del petróleo, que nos va a durar apenas unas pocas décadas. Contra reloj, en este lapso tenemos que crear una economía nuestra, una agricultura poderosa, una ganadería próspera, una industria potente, para que cuando desaparezca el petróleo [...] no veamos ese fenómeno con desolada tristeza [...] sino como algo que se esperaba y para lo cual estábamos preparados. ¹⁷

En estos párrafos está presente una serie de planteamientos que han jugado papel predominante a todo lo largo de nuestra evolución demo-

Rómulo Betancourt, *Posición y doctrina*. Caracas: Cordillera, 1959, p. 87.
Ibid., pp. 273-274.

16
 17

crática: En primer lugar la idea firmemente expresada de que la riqueza petrolera es en sí misma un espejismo y que debe ser utilizada para crear un aparato económico, industrial, agrícola y comercial, capaz de perdurar más allá del período, relativamente corto, de la bonanza extractiva. En segundo lugar —y éste es el reverso de la tesis del petróleo como maldición— la idea de que el petróleo podría ser nuestra salvación, el gran demiurgo de nuestro desarrollo, que nos ahorraría muchas de las dificultades que confrontan otros países de América Latina, Asia y África. Como lo formulaba Betancourt en otra alocución del período,

En la India, extraordinariamente populosa, de Nehru [...] se aprecian problemas sociales y económicos agudos; pero existe entre la India y Venezuela la diferencia de que mientras Nehru necesita realizar un viaje a Washington en solicitud casi encarecida de un préstamo de cien millones de dólares para iniciar su segundo plan quinquenal [...] nosotros disponemos de dinero fiscal derivado del producto del petróleo; dinero que podemos y debemos aumentar mediante una revisión negociada del status en cuanto a los impuestos petroleros.¹⁸

La tercera idea expuesta por Betancourt y otros importantes dirigentes en esa etapa inicial de la democracia, y que se ha mantenido hasta nuestros días como una constante en el marco intelectual de nuestro liderazgo, es que debía ser el Estado el gerente primordial y casi único del desarrollo nacional, afrontando a la vez, con financiamiento petrolero, la promoción de la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la educación, la política de vivienda, la de salud pública, de infraestructura, y de todos los servicios públicos concebibles.¹⁹ Por último, todo esto, es decir el desarrollo, tendría que lograrse en un tiempo relativamente corto, pues —como con característica metáfora lo planteaba Betancourt— Venezuela estaba trabajando contra reloj.

Es imposible exagerar el impacto que este conjunto de ideas, compartidas por una mayoría sustancial del liderazgo nacional y de la población en general, ha tenido en la definición de nuestro modelo político y económico democrático. Aunque ésta no fuese la *intención* de nuestros dirigen-

18 *Ibid.*, p. 99.

19 *Ibid.*, p. 208.

tes al formular a grandes trazos ese proyecto nacional de la democracia, el hecho es que detrás de esas aspiraciones se asomaban tres supuestos que carecían entonces, y aún carecen, de firme sustentación en la realidad de las cosas. Se trata, por una parte, de la noción de que el desarrollo venezolano puede lograrse sin austeridad, sin ahorro, sin sacrificio económico por parte de la población pues podemos comprarlo con el petróleo. El segundo supuesto que se desprendía de los planteamientos de la época, y que continúa jugando un papel en la mitología política de la democracia, es que ese desarrollo puede alcanzarse en corto tiempo, y que es un proceso que exige afrontar todos los problemas a la vez, sin un claro sentido de las prioridades. Por último, el tercer supuesto implícito en las concepciones mencionadas era que el Estado venezolano, además de principal promotor del desarrollo, debía convertirse también en *Estado benefactor desde el propio comienzo de su gestión*, pues la población pedía una pronta y eficaz solución a sus problemas, y esto exigía que el Estado le diese satisfacción efectiva a sus demandas. Dicho en otros términos, el Estado benefactor no sería en nuestro caso el producto de un largo y exigente proceso de creación de riqueza a través del trabajo, el ahorro, y la innovación administrativa y técnica, sino un lujo a ser disfrutado de gratis, gracias al petróleo. Eso sí, según lo expresaba Betancourt, sería necesaria «la redistribución de la renta nacional»,²⁰ pero sin detenerse a explicar en qué consistiría exactamente ese objetivo.

Desde luego, al enunciar tales propósitos, el liderazgo democrático nacional asumía que la planificación centralizada, la sustitución de importaciones, la reforma agraria y el aumento del gasto corriente en todos los campos y a todos los niveles de la economía eran instrumentos plenamente idóneos para materializar el tan ansiado desarrollo. Si bien existían algunas dudas sobre la sabiduría de acometer una misión tan exigente, generando tan elevadas expectativas, sobre la exclusiva base del excedente petrolero, los cuestionamientos iniciales de ninguna manera frenaron el ímpetu de nuestra dirigencia ni las ilusiones de la gente. Betancourt advertía, en relación con la sustitución de importaciones, que no se debía «tender en torno al país una especie de muralla china»,²¹ para proteger la incipiente y costosa industria nacional, olvidando, sin embargo, que *eso y no otra cosa* es lo que requiere tal sustitución y lo que

Ibid.

20

Ibid., p. 275.

21

le había condenado con anterioridad al fracaso en otras naciones latinoamericanas que la ensayaron. Lo que se perdía de vista era que la síntesis de todo el conjunto de proposiciones económico-políticas en que se basaba el proyecto nacional elaborado en esos años, no iba más allá de la típica receta populista experimentada sin éxito durante las décadas de 1940 y 1950 en América Latina. Una élite política con concepciones diferentes habría intentado moderar las expectativas de la población, concentrándose en la creación de un marco institucional adecuado para el crecimiento equilibrado de una economía mixta sin avasallante predominio estatal. Hay que tomar en cuenta, no obstante, que en las condiciones de la época y ante la insurgencia de la izquierda revolucionaria, la tentación populista era en extremo difícil de resistir políticamente, lo cual contribuyó aún más a acentuar las tendencias implícitas en la ideología predominante dentro de nuestros principales partidos.

Aun una persona de la estatura intelectual de Arturo Uslar Pietri, quien —cuando participó en la política práctica— fue una de las figuras más ajenas a la mitología populista en Venezuela, sucumbió sin embargo, en más de una ocasión, ante el espejismo de un desarrollo sin austeridad y a corto plazo. Como lo planteaba hacia 1963-1964:

Construir un país o desarrollar un país implica fundamentalmente invertir capital. Los capitales, en su forma más simple y llana, provienen de un hecho: del hecho de que una parte de la riqueza producida no se destine directamente al consumo sino que se ahorre [...] Por lo tanto, cuando un país tiene que invertir en su desarrollo, tiene que ahorrar; y ese ahorro puede hacerse de muchas maneras, pero siempre constituye una operación difícil y un sacrificio [...] Sin embargo, Venezuela tiene un caso único y distinto, Venezuela es un país al que la Providencia le ha dado *la oportunidad de poder realizar ese desarrollo económico prácticamente sin sacrificio de su pueblo*, porque el capital con el cual vamos a pagar esa transformación nos ha sido dado y está encerrado, como en las más seguras cajas, en el subsuelo [...] Venezuela tiene la posibilidad de realizar un desarrollo rápido, un desarrollo completo sin necesidad de imponer [...] sacrificios [...] Si nosotros tenemos del petróleo un concepto instrumental y lo consideramos simple y llanamente como un capital, como un instrumento de desarrollo para transformar a Venezuela, *podre-*

mos realizar el milagro de construir al país en menos de la vida de una generación [itálicas AR].²²

El razonamiento de Uslar Pietri tiene gran interés, pues se desprendía de la constatación del presunto dilema que existe entre las necesidades del bienestar social y las necesidades del desarrollo,²³ así como de las dificultades que se le presentan a un régimen democrático si aspira llevar adelante con consistencia y perseverancia una política de austeridad económica. Según Uslar Pietri:

La mayoría de nuestras gentes ha carecido por tanto tiempo de tantas cosas elementales y necesarias para su bienestar que desean tenerlas, y simultáneamente tenemos requerimientos tan inmensos de desarrollo, de inversiones enormes en carreteras, en irrigación, en maquinaria pesada que fatalmente se impone constantemente una escogencia: o hacemos viviendas para las gentes o *les damos* caminos, o *les damos* comodidades personales o hacemos irrigación. Lo ideal sería llegar a ese igualmente difícil equilibrio de encontrar ese punto en el cual se pueda *llevar adelante un programa de desarrollo sin imponerle sacrificios sociales injustos a la población* [itálicas AR].²⁴

Los ejemplos que Uslar Pietri utilizaba para ilustrar la noción de sacrificio que impone el desarrollo eran Inglaterra en el siglo XIX y la Unión Soviética en la época de Stalin.²⁵ Dejando de lado las enormes diferencias entre las condiciones imperantes en esas naciones y las de un país como la Venezuela de los años 1960 —con una población pequeña, amplio territorio, gran excedente financiero y un régimen que podía, al menos en teoría, buscar el consenso ciudadano con base en la verdad y no en la manipulación y en la represión—, vale la pena enfatizar la noción de *Estado paternalista* que se perfila en estos párrafos de Uslar Pietri, como una entidad que debe dar a la gente lo que pide. Aquí también este prestigioso escritor rendía tributo a los prejuicios de la cultura política populista,

Arturo Uslar Pietri, *Hacia el humanismo democrático*. Caracas: Publicaciones del Frente Nacional Democrático, 1965, pp. 53-55.

Ibid., p. 109.

Ibid., p. 110.

Ibid., p. 66.

22

23

24

25

sin que ello, por supuesto, menoscabe su esfuerzo de interpretar lo más acertadamente posible el desafío de ese tiempo.

A mi modo de ver el error que cometía Uslar Pietri consistía en concebir el dilema entre capitalización y progreso social en términos extremos, y en darle a la noción de sacrificio social un carácter prácticamente de hecatombe o catástrofe, que sólo aumentaba con la inadecuación de sus ejemplos históricos. No fue Uslar Pietri el único que vio las cosas de esta forma, lo cual, casi inevitablemente, reforzaba la propensión a admitir la mitología populista como única vía de preservar el régimen de libertades y el apoyo ciudadano al proyecto nacional de la democracia. Pero los problemas de Venezuela no requerían ni la mano dura de Stalin ni la demagogia tradicional del populismo latinoamericano, sino una visión realista del desarrollo propuesta por un liderazgo consciente de los límites de la acción del Estado, capaz de dirigirse con claridad y autenticidad a la ciudadanía y de *confiar* en las capacidades mentales de los venezolanos comunes y corrientes para aceptar una alternativa no paternalista y no populista de la democracia, y una política económica fundamentada en la austeridad gubernamental y la promoción de un mercado competitivo, de bajos costos y elevada productividad.

Por otra parte, no obstante lo dicho antes, Uslar Pietri estaba en lo correcto al apuntar que un proceso de desarrollo es generalmente el resultado de la interacción de dos funciones, a las que Hirschman denomina la función empresarial y la función reformista. La primera es la función de acumulación, cuya fortaleza depende de la abundancia y calidad de las oportunidades para una inversión reproductiva de capitales; la segunda es una función de equilibrio o redistributiva, que se dirige a mejorar la posición de aquellos grupos que han sido dejados atrás o simplemente maltratados a consecuencia del empuje de la primera etapa acumulativa. Como bien señala Hirschman, la manera en que estas dos funciones sean ejecutadas y coordinadas es crucial en la determinación de los resultados económicos y políticos del proceso de desarrollo.²⁶ Ambas juegan un papel importante: por un lado, la función empresarial hace posible el aumento en la productividad y la generación de riqueza; por otro lado, la función reformista hace posible el sostenimiento del crecimiento económico luego del empuje desestabilizador de la etapa acumulativa —como

en los casos, por ejemplo, del Acta de Reforma en Inglaterra en 1832 y del *New Deal* en los Estados Unidos. Hirschman también indica –y éste es un punto de particular relevancia en el caso de Venezuela– que en América Latina en general las fuerzas ideológicas que han enfatizado la importancia de la función empresarial han sido más *débiles* que en Europa o los Estados Unidos. En otras palabras, en nuestro medio la función reformista o redistributiva ha contado tradicionalmente con un respaldo político intelectual que no se corresponde con nuestros logros en el terreno de la acumulación y la innovación económicas, y esto ha traído como consecuencia un desequilibrio entre ambas funciones y, por supuesto, en nuestro proceso de desarrollo. Hirschman cita como ejemplo el hecho de que el impulso industrializador de la posguerra en nuestro continente duró sólo alrededor de una década, y fue seguido por una fase distinta caracterizada por el predominio del clamor redistributivo.²⁷ En nuestro país se presentó un fenómeno semejante después de 1958, y me parece evidente que en Venezuela, a raíz del impacto de la riqueza petrolera, la función empresarial o bien ha sido percibida como relativamente secundaria o bien ha sido atribuida casi por completo al Estado. Como resultado, los partidos políticos, que controlan el Estado y cuyo interés primario ha sido y es aumentar su base de apoyo, se han concentrado en la reforma redistributiva casi con exclusión de la generación de un crecimiento económico no rentista, es decir, eficiente, competitivo y autorreproductivo.

Si bien es bastante probable que las intenciones del liderazgo político que estableció la democracia en Venezuela eran las de combinar de forma armoniosa ambas funciones económicas, el marco ideológico que guió sus acciones les empujaba en una dirección que, como afirmé previamente, contribuyó a acelerar las distorsiones de nuestro proceso de desarrollo. Para explicar con mayor precisión lo que ha ocurrido, hay que tener en cuenta que Acción Democrática y Copei no son movimientos aislados sino partidos que expresan en términos nacionales grandes tendencias políticas mundiales –socialdemócrata y socialcristiana, respectivamente–, que enfrentan en diversos países el reto de perfeccionar una sociedad que no sacrifique las libertades políticas en aras de un ideal imposible, pero que también trabaje sistemáticamente para reducir los desequilibrios en su seno y no acepte pasivamente los desajustes de una

economía de mercado. Tanto el pensamiento político socialdemócrata como el socialcristiano surgieron como un intento de superar los extremos representados por el socialismo marxista y las versiones más radicales del individualismo liberal. Como lo exponía en 1939 el gran escritor alemán Thomas Mann, la socialdemocracia es un «intento de reconciliar los valores del individuo con las demandas de la vida en sociedad», y añadía que «este balance jamás se logra definitivamente. Es una tarea humana que debe ser resuelta una y otra vez».²⁸

Esta es la esencia teórica de la socialdemocracia. En la práctica, sin embargo, el ejercicio del gobierno por parte de los partidos socialdemócratas y demócratacristianos en Europa y América Latina ha tendido, de acuerdo con las circunstancias y sobre todo con las convicciones de sus líderes, o bien a enfatizar los principios liberales y antiolektivistas implícitos en estas ideologías políticas, o bien a acentuar los aspectos socializantes que también llevan dentro de sí. La administración que dirigió Helmut Schmidt en Alemania es un ejemplo de lo primero, y el gobierno de François Mitterrand en Francia, en su primera etapa al menos, ofrece vívidas ilustraciones de lo segundo. La primera versión de lo que significa un proyecto político socialdemócrata se fundamenta en el propósito de combinar cuatro elementos en la conformación de una sociedad a la vez libre y justa: en primer lugar, un mercado descentralizado, con todo lo que ello implica en términos de espacio para el crecimiento de un sector privado empresarial poderoso y competitivo; en segundo lugar, la aceptación de una tasa de ganancia adecuada que premie el espíritu de empresa y garantice una constante inversión; en tercer lugar, el uso de un sistema libre de precios como método óptimo para determinar la utilización alternativa de sus recursos escasos, y en cuarto lugar —pero de ninguna manera en orden de prioridad— la lucha por la justicia social del acceso de los individuos a las oportunidades y recursos de la vida civilizada.²⁹ Esta no ha sido, sin embargo, la visión predominante en nuestro país. En Venezuela, Acción Democrática es el partido socialdemócrata por antonomasia. Por razones históricas que tienen que ver con el marco ideológico adoptado por sus fundadores, así como por el impulso estatista que ha dado a nuestra economía el factor petrolero, Acción Demo-

28 Thomas Mann, «The Problem of Freedom», en E. K. Bramsted y K. J. M. Melhuish, comp., *Western Liberalism. A History in Documents from Locke to Croce*. London: Longman, 1978, p. 718.

29 Arthur Seldon, comp., *Agenda for Social Democracy*. London: The Institute of Economic Affairs, 1983, p. 6.

crática se ha orientado básicamente de acuerdo con la tendencia socializante hostil a los mecanismos de mercado y favorable a las soluciones corporativistas de la socialdemocracia. Al contrario de lo que han sostenido algunos de sus críticos de izquierda, en Acción Democrática ha dominado una concepción estatista de la misión de gobierno, fundamentada en un siempre creciente control de la economía por parte del sector público, en la convicción acerca de la bondad intrínseca de las nacionalizaciones, las empresas públicas y en general del intervencionismo estatal en todos los órdenes de la existencia nacional. A esto se ha unido una visión predominantemente populista y marcadamente colectivista de la política y la sociedad, caracterizada por el intento de convertir el Estado en instrumento de salvación, en gran repartidor de riqueza y beneficios, en lugar de propender a reducir sus funciones en aras de ampliar el espacio para la iniciativa y creatividad de los individuos e instituciones independientes.

En cuanto a Copei, hasta mediados de la década de 1960 éste había sido un partido que ponía gran énfasis en la importancia de las definiciones ideológicas y la elaboración de un claro y sólido proyecto político no populista para Venezuela. Sin embargo, ya para el momento de la elección de Rafael Caldera en 1968, buena parte de ese fermento o bien se había disipado o había sido implacablemente extirpado en función de presuntas exigencias electorales. Al igual que AD, Copei adoptó una postura de pragmatismo populista, cobijado por los ingresos petroleros y la posibilidad de gobernar sin prioridades firmes y sin tomar en cuenta criterios de austeridad. El punto culminante de esa tendencia se manifestó durante el gobierno de Luis Herrera Campíns. En ese período se agotaron casi por completo en Venezuela los mecanismos populistas como opción viable de gobierno, aunque muchos continúan viviendo de su nostalgia; no obstante, Copei demostró carecer de los recursos ideológicos para enrumbar de otra manera la nave del Estado.

Como ideología política el socialcristianismo ha evolucionado en términos bastante paralelos a la doctrina social de la Iglesia, y por ello refleja algunas de sus virtudes y defectos, particularmente en su versión latinoamericana. Entre las primeras cabe señalar el sentido de búsqueda y la inquietud por la reforma político-social, todo lo cual, si se canalizase adecuadamente, podría servir de base para una propuesta política a la vez sensata y eficaz. Las dificultades, sin embargo, al igual que con la socialdemocracia, derivan de los prejuicios contra la economía de mercado,

a favor del estatismo y contra la noción liberal de la política que exalta al individuo y limita el rol de las agrupaciones políticas y de la intervención estatal en la vida ciudadana. En su doble propósito de enfrentar los problemas del capitalismo y la oferta revolucionaria socialista, el pensamiento socialcristiano se ha impregnado en nuestro país de la mitología populista, la cual, en lugar de servir de guía para una acción política constructiva sólo acentúa la demagogia y la ineficacia económicas. El caso del régimen presidido por Eduardo Frei en Chile y los gobiernos de Copei en Venezuela son ejemplos elocuentes de esto.

En Alemania e Italia, a pesar de todos los obstáculos, los partidos demócratacristianos han actuado según una visión distinta de la política y la economía, cercana a la perspectiva antisocialista y liberal de un sector de la socialdemocracia, con resultados en general bastante aceptables. La terrible incompetencia y corrupción de la democracia cristiana italiana en años recientes es producto del desgaste luego de tres décadas de mando con base en el miedo a la alternativa comunista. Sin embargo, en ambos casos se trata de democracias no populistas, donde los partidos evitan crear expectativas excesivas en el electorado y se comportan de acuerdo con un sentido más realista del potencial y los límites de la acción del gobierno. Pero en Venezuela, Copei, al igual que AD, ha sido hasta ahora incapaz de dejar de lado los mitos populistas y de elaborar un proyecto dirigido a acrecentar su capacidad de gerenciar eficazmente el capitalismo de Estado venezolano, y ello, aunque parezca paradójico, exige desestatizar gradualmente la economía, romper los vínculos entre el Estado y el sector parasitario del empresariado, aclarar las reglas del juego económico, alentar los mecanismos del mercado, restaurar la confianza y castigar la corrupción. El reto para AD se plantea en forma muy semejante, y la renovación ideológica de este partido está planteada con urgencia, una renovación que abandone concepciones anacrónicas para una Venezuela de opulencia y despilfarro que ya se está acabando, y se adapte a la realidad emergente de una nación que está, por obligación y no por escogencia, dejando atrás su pasado rentista.

Esto no será fácil; no hay que perder de vista que el sistema populista ha dado a los partidos políticos que nos han gobernado extraordinarios beneficios basados en el clientelismo y la corrupción. La extensión constante de las funciones del Estado y el acrecentamiento de los recursos a disposición del mismo guardan una relación directa con el aumento del poderío de las organizaciones políticas que lo controlan. No obstante, es-

toy convencido de que dentro de estos partidos existen numerosos individuos con voluntad de actuar firme y decididamente en función de los intereses del país, y no exclusivamente de una u otra tola política. Para estos hombres y mujeres el obstáculo clave que aún les impide asumir una postura ideológica renovada, acorde con las nuevas realidades nacionales, es el apego a la mitología populista y a los mitos socializantes que todavía dominan la cultura política nacional. Tomemos por ejemplo estos párrafos extraídos de un reciente artículo de un importante dirigente de Acción Democrática. Al explicar en qué sentido, en su opinión, debe reorientarse la democracia, el autor argumenta que:

En primer lugar, se impone liquidar la *desviación desarrollista*, que es aquella que se empeña en ver y medir el desarrollo por el mero crecimiento de las magnitudes económicas sin tomar en cuenta sus efectos sociales [...] Pero también se impone luchar contra la desviación populista, asociada a la demagogia, al reparto y al derroche irresponsable de la riqueza, a la práctica de dar sin exigir, al gasto alegre en obras ofrecidas en programas irresponsables que no se acomodan a un plan serio e integrado de desarrollo social, pero que se construyen para sacar dividendos políticos. Esta desviación también ha costado numerosos recursos económicos y ha sido fuente de frustraciones colectivas.³⁰

Lejos está de mi propósito cuestionar el más que justificado ataque que acá se hace a la desviación populista; no obstante, lo que llama la atención en este análisis es, de un lado, el intento de rendir tributo de oposición a una presunta desviación desarrollista, de cuya presencia me resulta muy difícil encontrar rastros en la ideología de nuestros partidos políticos y aun del sector empresarial —todos los cuales siempre enfatizan el término «social» al hablar de desarrollo. De otra parte, los párrafos citados siguen poniendo de manifiesto una visión del desarrollo centrada en la acción del gobierno, y en la idea de *planificación* por parte del Estado. Se habla de un plan serio e integrado de desarrollo social, pero no se define con precisión qué significa esto. En realidad, en estos conceptos hay más retórica que sustancia, y lo que se pierde de vista es que

Marco Tulio Bruni Celli, «Significación, características y consecuencias de las elecciones del 4 de diciembre de 1983», en VV.AA., 1984: *¿A dónde va Venezuela?* Caracas: Planeta, 1984, pp. 124-125.

el desarrollo no es un proceso mágico sino el producto de gente de carne y hueso tratando de generar riqueza. En otras palabras, el desarrollo depende de las actitudes y aptitudes de la gente, y de un marco institucional que permita que esas actitudes y aptitudes se canalicen libremente y obtengan beneficios con base en el esfuerzo y la iniciativa personal.

En Venezuela aunque hayan existido movimientos desarrollistas sólo hemos padecido de una desviación populista y de un paternalismo estatal que asfixia, ahoga y congestiona toda la economía. La única manera de alcanzar el desarrollo en una sociedad democrática —y este tema será objeto de un más detallado análisis posteriormente— es a través del trabajo creador de los individuos en un contexto de libertad económica. En nuestro país lo que hemos tenido es un Estado que sabe repartir pero no crear riqueza, y una ideología económica que es incapaz de responder a las exigencias de una economía no rentista. Afirmar que en Venezuela se ha concedido secundaria importancia a los efectos sociales del crecimiento económico derivado del petróleo no se ajusta a los hechos. Al contrario, el populismo vigente en las concepciones económicas predominantes dentro y fuera de nuestros principales partidos políticos ha enfatizado permanentemente la función del Estado como gran repartidor de beneficios en detrimento de cualquier posibilidad de un desarrollo nacional sólido, es decir, no rentista. Aun las políticas de sustitución de importaciones han sido implementadas en función de objetivos sociales —proteccionismo para el empresariado y el empleo para la clase obrera— más que propiamente económicos, con graves consecuencias que ahora están a la vista. Este proceso de industrialización sustitutiva, que Venezuela experimentó con fuerza a partir de los años 1960 con base en nociones típicamente populistas que ya habían fracasado en otros países latinoamericanos demostró, por una parte, que es poco sensato pretender producir domésticamente todo lo que otros generan en el exterior, y por otra parte que la clave para ejecutar con éxito una política de industrialización está en otorgar importancia prioritaria a los factores de eficiencia y competitividad. Pero en nuestro medio estos dos factores han sido sistemáticamente subordinados al proteccionismo, para ganar adeptos dentro de un sector empresarial en no poca medida parasitario, y al paternalismo clientelista que han conducido al despilfarro de una enorme e irrecuperable riqueza, sin que de ello reste un aparato productivo capaz de sostenernos en el futuro.

No es superfluo insistir en que el populismo en economía se fundamenta por sobre todo en la idolatría a la acción del Estado y en la desconfianza hacia los mecanismos del mercado y la función empresarial. La tendencia a ver el Estado como la encarnación del bien colectivo, y las intervenciones estatales como herramientas infalibles en la resolución de los problemas de la economía y de la sociedad, es bastante común en nuestro medio; sin embargo, como acertadamente señala Dubuc Picón,³¹ el Estado no es una institución suprahumana sino una entidad compuesta por hombres y mujeres, que en ocasiones —como está de sobra demostrado en Venezuela— pueden utilizar en su propio provecho o el de los grupos o partidos que representan los recursos que han sido colocados a su disposición. Por otra parte, es iluso, además de peligroso para la libertad humana, creer en el poder mágico de la acción del Estado en la organización y conducción de la sociedad y la economía. Como se verá más adelante, el Estado tiene significativas funciones que cumplir —tanto políticas, como sociales y económicas y, por supuesto, de defensa—, pero una sociedad libre sólo puede sobrevivir si estas funciones se *limitan*. En el terreno económico hay que tener claro que la vida económica de una sociedad libre

... no puede ser manipulada de acuerdo a las intenciones de nadie en particular, ya que la misma se desenvuelve dentro de un terreno de interacciones muy diversificado y complejo entre agentes y fenómenos económicos; el desconocimiento de este hecho básico podría significar que las intervenciones gubernamentales, independientemente de los buenos deseos que las animen, vengán a agravar los problemas existentes o, incluso, a generar problemas aún mayores.³²

A mi modo de ver, esto último ha ocurrido con frecuencia en el caso venezolano, donde el siempre creciente intervencionismo estatal, en lugar de desprendernos paulatinamente de la dependencia del petróleo, ha llevado la economía a una situación en la que se combinan la inflación, el desempleo, el endeudamiento, la ineficacia, la falta de competitividad y la ausencia de un aparato productivo dinámico y no rentista.

Dubuc Picón, p. 11.
Ibid.

31
32

Nuestra idolatría del Estado le ha dado igualmente al término planificación un carácter casi místico en el marco de la ideología económica predominante. Al respecto, es indispensable aclarar que existen dos concepciones muy distintas de lo que se debe entender por planificación. Si por planificación –cito de nuevo a Dubuc Picón:

... se entiende la evaluación consciente de fines, la escogencia racional de los medios y la previsión de las consecuencias no intencionales de las acciones humanas cuyos efectos negativos se quieran evitar, entonces es altamente recomendable que cada uno de los agentes económicos planifique cuidadosamente sus actividades [...] Pero si por planificación se entiende el propósito de dirigir y controlar la vida económica de la sociedad de acuerdo a un plan preestablecido nos hallamos entonces ante un absurdo total; [en vista de] lo extremadamente diversificado y complejo de la interacción de los numerosos agentes y fenómenos que intervienen en la vida económica, ninguna oficina de planificación es capaz de ensamblar toda la información detallada y pertinente que le es exclusivamente accesible y conocida a cada agente económico en particular, por más funcionarios y computadores que dicha oficina puede utilizar. Las instrucciones emanadas de la oficina de planificación serán inevitablemente insuficientes y causarán todo tipo de distorsiones en el proceso productivo, mientras que los agentes económicos se verán impedidos de desarrollar su propia iniciativa y capacidad. Todo esto hace de la planificación central un obstáculo fatal a la eficiencia y al dinamismo de las actividades productivas, además del enorme desperdicio de energías humanas y recursos materiales que el funcionamiento de tal oficina de planificación trae consigo.³³

¿No es esto acaso lo que ha tenido lugar en Venezuela? En nuestro país se idolatra la idea de planificación en este sentido amplio, con serias consecuencias para la economía como un todo, y ya es hora de cuestionar este otro gran mito socializante de la ideología política del populismo. La verdad es que el solo volumen y la desmesurada ambición de nuestros planes de la Nación los hace incomprensibles, indigeribles e impracticables para la mayoría de los agentes económicos que, presuntamente, ten-

drían que implementarlos. No obstante, *esto no quiere decir que semejantes planes no hayan sido y sean profundamente dañinos* en ocasiones. Precisamente, debido al enorme poder financiero de que ha disfrutado en determinadas coyunturas el Estado venezolano, la movilización de recursos tras las metas desproporcionadas e inasimilables de, por ejemplo, el v Plan de la Nación, condujo la economía por un camino de malbaratamiento, despilfarro y congestión nunca antes vistos en un país pequeño en el mundo, con excepción tal vez de algunos Estados árabes y de Nigeria (cuya población es mayor que la nuestra). Las consecuencias de los errores conceptuales cometidos, y de las políticas erradas y desmesuradas implementadas en ese período, estarán con nosotros por mucho tiempo.

El Plan para Venezuela no debería requerir más de unas cuantas páginas con lineamientos generales, sobrios y coherentes, dirigidos a orientar el gasto no en función de la estatización de la economía, sino de la creación de un marco institucional, de infraestructura y de servicios, que dinamice y facilite la vida económica de la sociedad como un todo. Tal concepción es totalmente contraria a la que ha predominado en Venezuela, que se dirige más bien a acentuar el poderío de una economía estatizada, la cual, en lugar de asegurar un contexto que incentive la iniciativa, conocimiento y competitividad de los agentes económicos —individuos y empresas—, contribuye a acentuar la asfixia burocrática, el desperdicio y la artificialidad rentista. No hemos fallado por falta de planes sino por su exceso, y por una acumulación de políticas e instituciones económicas equivocadas. En lugar de alimentar más el Estado, una oficina como Cordiplan debería interrogarse sobre su propio sentido, evaluar su trayectoria y reducir sus desmedidas ambiciones. Pensar en el futuro, tener programas económicos y un sentido de dirección política para ejecutarlos no debe confundirse con el mito de la planificación centralizada, que cuando no es negativo es irrelevante.

No es nada fácil, sin embargo, combatir la idolatría estatista en Venezuela, pues ésta no es sólo el producto de los cómodos beneficios que para muchos ha arrojado la economía rentista, sino también, en ciertos casos, de una genuina creencia en la bondad intrínseca de la acción del gobierno y la maldad intrínseca de los mecanismos del mercado económico en una sociedad libre. A pesar de que la evidencia demuestra constante y sistemáticamente, en Venezuela y el resto del mundo, que las políticas estatales no pueden suplantar lo que Adam Smith describía como «el esfuerzo de cada hombre por mejorar su condición», que es «el principio del

cual se deriva la verdadera riqueza nacional y privada»,³⁴ la mitología socialista de nuestro tiempo ejerce una fuerte atracción, aun sobre líneas de pensamiento político no del todo antiliberales como la socialdemocracia y el socialcristianismo, las cuales se fundamentan en el respeto a la libertad del individuo. Pero si queremos salir del atolladero económico en que nos encontramos debemos refutar la tendencia a aceptar pasivamente el paternalismo estatal y enfatizar que, como lo formulaba Mill:

... la manera en que el gobierno puede más adecuadamente demostrar la sinceridad con la cual procura el mayor bienestar de los ciudadanos, es realizando aquellas actividades que por naturaleza le competen en vista de las dificultades que tienen los individuos para ejecutarlas por sí mismos, y todo esto con el objeto no de aumentar y perpetuar esas dificultades sino de corregirlas y reducirlas [...] la acción del gobierno [...] debe dirigirse en la medida de lo posible a acrecentar la capacidad de los ciudadanos para llevar a cabo grandes tareas a través de la iniciativa individual y de la cooperación voluntaria.³⁵

En concreto, la intervención del Estado en la vida económica debería orientarse a realizar *eficientemente* las siguientes —y en lo posible no otras— tareas: a) La ejecución de obras de infraestructura económica y social que no puedan ser llevadas a cabo apropiadamente por la iniciativa privada, pero sin establecer por ello un monopolio del sector público. b) Llevar adelante una política monetaria austera y estable, incrementando mesuradamente la oferta de dinero de acuerdo con las posibilidades reales de la economía, a objeto de controlar lo más férreamente posible los procesos inflacionarios. c) Crear y administrar un régimen tributario a la vez sencillo, estable, seguro y moderado, que mantenga un equilibrio entre los requerimientos públicos y el derecho de los individuos a disponer libremente del fruto de su actividad económica. d) Implementar una política económica global fundamentada en una correcta apreciación del significado del mercado y la competencia, y que estimule las condiciones para que éstos produzcan los resultados más eficientes y beneficiosos para la sociedad como un todo.³⁶ Hay que tener muy claro que todas

34 Adam Smith, *The Wealth of Nations*. London: Methuen, 1950, p. 49.

35 John Stuart Mill, *Principles of Political Economy*. London: Longmans, 1848, p. 978.

36 Dubuc Picón, pp. 14-15.

estas funciones son extremadamente complejas, y su eficaz realización exige una gran competencia y honestidad. No se trata, por tanto, de rechazar de plano el intervencionismo del Estado en la economía, sino de orientarlo hacia aquellos ámbitos donde su acción puede verdaderamente estimular la actividad productiva de los individuos y empresas, en lugar de obstaculizarla y minimizarla todo el tiempo.

Ciertamente, Acción Democrática y Copei han reiterado numerosas veces su compromiso de proteger una economía mixta, que armonice en forma balanceada la ventajas comparativas de los sectores público y privado. Éstas pueden haber sido, tal vez, *las intenciones* de nuestro liderazgo político, pero como ya tuve ocasión de señalar, las políticas que sucesivos gobiernos han adelantado en los terrenos económico, social, y con respecto a la estructura y funciones del Estado y los partidos, no han hecho sino acentuar el carácter estatista de nuestra economía y su dependencia de la renta petrolera. Esto ha traído como consecuencia un paulatino deterioro en nuestro medio, en todas las esferas de la vida ciudadana, del principio liberal básico según el cual el gobierno mismo debe ser limitado, pues ésta es la única manera de proteger un espacio seguro para la libertad de los individuos. En vista de que la vida concreta de la gente constantemente exige cálculos económicos, que son indispensables hasta para satisfacer aspiraciones y metas no económicas, no es posible separar ambas realidades y objetivos con precisión. Esto significa que si el Estado acrecienta su control sobre el proceso económico inevitablemente aumenta también su control sobre aquello que los individuos pueden lograr en este campo, e igualmente su control sobre los propósitos no económicos a que los ciudadanos puedan aspirar. Es por ello que Hayek ha argumentado con gran acierto que «El control económico no es meramente el control de los medios necesarios para el logro de todos nuestros fines. Aquel que tiene el control de estos medios tiene también el poder de determinar qué fines van a buscarse, qué valores van a recibir atención prioritaria, y, en síntesis, qué debemos creer y por qué cosas debemos luchar».³⁷ De tal forma que, *aunque esto no sea necesariamente lo que se persiga*, el creciente poder económico del Estado en Venezuela nos lleva irrevocablemente hacia una sociedad menos libre y hacia un sistema político más opresivo. La idea de *igualdad ante la ley* pierde sentido en un contexto donde la gente está siendo sometida cada vez más a la dirección y controles estatales, y la noción de *igualdad de oportunidades* reduce gra-

vemente su validez en un marco en el cual tales oportunidades son crecientemente un regalo o dádiva de la autoridad pública. De allí que, en síntesis, el peligro fundamental de la mitología ideológica populista se encuentre en su *intrínseca propensión al autoritarismo*, que puede producirse o bien como resultado del estatismo socializante o bien como consecuencia del fracaso de las políticas populistas y el colapso de la democracia bajo el peso del descalabro económico, el deterioro institucional y la protesta social generalizada.

Ya algunos de estos síntomas de descomposición comenzaban a perfilarse ominosamente en el horizonte de la democracia venezolana a fines de la década de 1960 y principios de los años 1970. La popularidad de la consigna electoral del candidato presidencial de la oposición en 1973: «democracia con energía», reveló la sensación de desaliento, el temor al presente y el deseo de un sentido de dirección firme hacia el futuro que experimentaban amplios sectores de la población en todos los estratos sociales. Se estaba dibujando un complejo y difícil cuadro político y socioeconómico para el régimen establecido en 1958; los mecanismos populistas parecían estar agotándose y existía una muy difundida impresión de que el liderazgo político nacional se vería llevado a introducir rectificaciones importantes en el rumbo que había venido siguiendo la democracia. Sin embargo, todas estas percepciones se transformaron con una violencia y rapidez inusitadas, y de manera totalmente imprevisible, a raíz del aumento de los precios del petróleo a partir de 1973. Venezuela entró a vivir entonces una etapa histórica de grandes ambiciones y de no menos grandes desaciertos. Temporalmente, el petróleo había salvado de nuevo al populismo.

La intoxicación de un país

Pienso que para cualquier observador medianamente objetivo debe resultar obvio que existen significativas diferencias en la actitud mental de los ciudadanos de las naciones avanzadas del globo, en cuanto a la productividad económica y la seguridad legal, y de otro lado los habitantes de buena parte del así denominado Tercer Mundo. Una de esas diferen-

cias llama poderosamente la atención: se trata de la *idea del tiempo* imperante entre nuestra gente y su expresión política.

Estoy convencido de que existe una íntima relación entre la concepción del tiempo que tienen las personas y la vida política de las naciones. Me refiero tanto al tiempo histórico, es decir, el que se necesita para que las empresas colectivas maduren, como al individual, que aquí entiendo en función del impacto del individuo sobre los procesos sociales. En Europa, en general, la gente conserva un cordón umbilical con el pasado, y usualmente percibe la política en términos de mediano a largo plazo, consciente de que los cambios verdaderamente importantes toman tiempo y dependen de numerosas voluntades, cada una actuando en no poca medida por su propio interés. En nuestro país, sin embargo, predomina una idea distinta del tiempo histórico. En principio, carecemos de fuertes lazos con el pasado. La revolución de Independencia quebró radicalmente el vínculo con lo que venía antes, y desde entonces nuestra historia ha sido una sucesión de rupturas y saltos bruscos que nos han dejado sin una clara memoria colectiva. Después de la dictadura de Juan Vicente Gómez el país ha vivido en una especie de aceleramiento permanente en búsqueda de un porvenir de desarrollo que aparentemente jamás llega. Por otra parte, ese pasado ha dejado una marca que nos lleva a conceder suprema importancia al rol del individuo excepcional —el líder, el jefe o el caudillo— en el proceso histórico. La enorme significación de Bolívar ha sido con frecuencia extraída del contexto específico en que ejerció su extraordinario impacto, y muchos de nuestros dirigentes posteriores, llevados por la vanidad, la ignorancia o el impulso populista de exaltar la figura del líder, han querido actuar, y efectivamente lo han hecho, con base en una visión mesiánica de la política y del papel del hombre providencial en el destino de las naciones.

Esta actitud ante el tiempo, que nos dice que los cambios pueden producirse de la noche a la mañana, que podemos desarrollarnos rápidamente, y que necesitamos de un jefe carismático para que guíe el país, es un componente clave de la psicología política del populismo, y uno de los que más daño ha hecho a la democracia venezolana. Los desajustes, errores y fracasos a que puede llevar esta tendencia populista se pusieron de manifiesto con mayor fuerza que nunca en nuestra historia democrática durante el período de gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1979. En esta etapa —y uso la imagen con fines puramente ilustrativos— a Venezuela le ocurrió lo mismo que al individuo que come y bebe en exceso: el país se intoxicó, física y espiritualmente. Todos los rasgos

negativos en la evolución de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestro sistema político, que discutí en las secciones precedentes, se agudizaron mucho más, dejando a Venezuela de nuevo postrada ante el espejismo petrolero, y a su población y a sus líderes mareados de ambiciones absurdas y congestionadas de sueños imposibles. No solamente nos vimos inundados por un inimaginable torbellino de riqueza fácil que en nada se correspondía con la magnitud de nuestro esfuerzo productivo, sino que, también, ese torbellino coincidió con la presencia al frente del Estado de un dirigente propenso, por convicción y personalidad, a lanzarse con enorme e incontrolado dinamismo al voraz torrente petrolero, impulsando a la nación hacia metas desmesuradas que la dura realidad pronto reveló como espejismos.

En esos años Venezuela vivió un paroxismo de exaltación que los historiadores del futuro seguramente estudiarán con una mezcla de fascinación y revulsión: lo primero, por la intensidad del autoengaño colectivo en que se sumió el país; lo segundo, ante nuestra falta de humildad y la naturaleza desproporcionada de nuestros propósitos. En síntesis, éste fue el saldo del período:

- Aguda intensificación del poder económico del Estado y de las debilidades intrínsecas de nuestra economía.
- Aguda intensificación de la dependencia de toda la economía y la sociedad respecto al factor petrolero.
- Crecimiento notable del parasitismo empresarial a través de dádivas, créditos y contratos preferenciales del Estado, y de la demagogia hacia el sector obrero a través de legislación tendiente a garantizar una estabilidad y niveles de salarios ficticios, basados no en la productividad de las empresas sino en el ingreso proveniente del petróleo.
- Gigantesco crecimiento del consumismo, el clientelismo político y la corrupción administrativa, así como del endeudamiento público y privado.
- Asfixia de amplios sectores productivos medianos y pequeños bajo el peso de monopolios favorecidos por el Estado, y crecimiento desmesurado del sector comercial y de servicios respecto al industrial y agrícola.
- Acentuación de la tendencia a percibir a Venezuela como un gran poder, con la capacidad no sólo de transformarse en el centro motor de la integración regional, sino también de influir decisivamente en el cambio del sistema mundial y en la creación de un nuevo orden económico y político internacional.

Las cifras que demuestran lo ocurrido son demasiado elocuentes y no dejan, como veremos, lugar a dudas. No obstante, lo verdaderamente crucial es tener claro que lo acontecido durante esa etapa que se extendió hasta el período presidido por Luis Herrera Campíns fue la extensión, llevada a extremos, del estatismo-populista implícito en la evolución de la democracia venezolana desde sus comienzos. De nuevo quisimos comprar el desarrollo a *corto plazo*, y a todo ello se sumaron las peculiaridades como dirigente de Carlos Andrés Pérez. Su estilo, por decirlo de alguna manera, coincidió con el carácter de los tiempos, pero lamentablemente lo que requería Venezuela ante la inundación de petrobolívars no era exaltación, sino sobriedad; no era impaciencia, sino serenidad; no era retórica, sino sensatez; no era, en fin, un proyecto de gran país sino de una nación seria, digna, fundada en el respeto a las leyes y en la conciencia de nuestros propios límites. No se trata, como algunos constructores de mitos han pretendido hacernos creer, de que no estábamos preparados para absorber el maná que nos cayó del cielo; se trató de que, una vez más, el liderazgo democrático nacional falló, y en forma grave para los intereses nacionales. Como Betancourt, como Caldera, como Uslar Pietri y como tantos otros de nuestros dirigentes, Carlos Andrés Pérez tenía claro cuál era el reto del petróleo. En 1974 decía:

Si esa riqueza no la transformamos en una agricultura pujante que le dé a Venezuela los alimentos que consume, las materias primas de origen agropecuario que necesita su industria, esa riqueza, si no la transformamos en una industria venezolana que se fundamente en la explotación de nuestra riqueza, de nuestro carbón Naricual, de nuestro hierro de la Guayana, de nuestro petróleo de Oriente y Occidente, de nuestros minerales ferrosos y no ferrosos, si no fundamentamos esa riqueza [...] será un sueño, que vivirá una generación de venezolanos, *pero nuestros hijos despertarán de ese sueño en un país arruinado y miserable* [itálicas AR].³⁸

Igualmente, el ex presidente Pérez afirmaba estar dispuesto a «administrar la abundancia con criterio de escasez»: «La abundancia de recursos fiscales —enfaticaba en su discurso de toma de posesión— han sido espejismos que han contribuido a que nos engañemos a nosotros mismos

Carlos Andrés Pérez, *Manos a la obra (textos de mensajes, discursos y declaraciones del Presidente de la República)*, vol. 2. Caracas: Presidencia de la República, 1977, p. 14.

sobre la verdad de la sociedad venezolana. Por eso [...] mi gobierno administrará esta abundancia con criterio de escasez»... Y luego, en su alocución ante el Congreso solicitando poderes extraordinarios, repetía:

Nos hemos acostumbrado a vivir los venezolanos en una economía de derroche. Nos hemos acostumbrado a dilapidar la historia, los recursos y los hombres. Una filosofía del ahorro y de la orientación de los recursos se impone como nunca ahora, con acento patético [...] La sociedad de consumo no puede ser nuestra sociedad. Tenemos que ser primero una sociedad de productores [...] Somos una nación rica, exuberante y ostentosa en la superficie. Pobre, desamparada y huérfana en su profundidad.³⁹

Ciertamente, el incremento de los ingresos petroleros a partir de 1974 fue asombroso, así como el aumento del volumen de ingresos provenientes del petróleo en relación con el resto de la economía.

T A B L A 1

PETRÓLEO E INGRESOS DEL ESTADO (en millones de bolívars)

Año	Ingreso del Estado	Ingresos provenientes del petróleo	Petróleo como porcentaje de ingresos ordinarios	Precio promedio por barril
1958	4.705	2.559	54.4	2.48
1959	5.441	3.102	57.0	2.19
1960	4.967	2.891	58.2	2.08
1961	5.792	3.129	54.0	2.10
1962	5.910	3.103	52.5	2.06
1963	6.597	3.474	52.7	2.03
1964	7.133	4.654	65.2	1.94
1965	7.265	4.720	65.0	1.88
1966	7.751	4.912	63.4	1.88
1967	8.539	5.666	66.4	1.85
1968	8.775	5.791	66.0	1.86
1969	8.661	5.443	62.8	1.81
1970	9.498	5.708	60.1	1.84
1971	11.637	7.643	65.7	2.35
1972	12.192	7.884	64.7	2.52

Año	1973	Ingreso del Estado	16.054	Ingresos provenientes del petróleo	11.182	Petróleo como porcentaje de ingresos ordinarios	69.7	Precio promedio por barril	3.71
	1974		42.558		36.448		85.6		10.53
	1975		40.898		31.655		77.4		10.99
	1976		38.130		28.024		73.5		11.25
	1977		40.474		29.421		72.6		12.61
	1978		40.123		25.810		64.3		12.04
	1979		48.339		33.377		69.0		17.69
	1980		62.697		45.331		72.3		26.44
	1981		92.656		70.886		76.5		29.71

F U E N T E S

Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1978, pp. 82, 273; *Anuario de series estadísticas 1981*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1972, pp. 72, 243.

Una nueva situación estaba sin duda planteada y ésta exigía de nuestro liderazgo una postura inequívoca: o bien proseguíamos la senda populista para intentar comprar el desarrollo a corto plazo, o bien restringíamos las expectativas y el gasto tratando de acometer mesuradamente las tareas del crecimiento y el cambio social de acuerdo con un estricto orden de prioridades y un sobrio sentido de las proporciones. De hecho, y a pesar de los numerosos y sistemáticos pronunciamientos que a lo largo del período se hicieron en contrario, el equipo de gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez optó por la primera alternativa. Se habló mucho de administrar con criterio de escasez la riqueza que como una tormenta tropical había descendido sobre el país, pero en realidad Venezuela se hundió más profundamente que nunca en la engañosa ciénaga de la prosperidad postiza.

T A B L A 2

VALOR DE LAS EXPORTACIONES VENEZOLANAS (en millones de US dólares)

Año		Petróleo		Hierro		Resto de la economía
	1958		2.299		120	53
	1959		2.128		129	60
	1960		2.149		158	50
	1961		2.213		125	46
	1962		2.343		113	51
	1963		2.336		93	71
	1964		2.341		107	55
	1965		2.306		123	54

Año	Petróleo	Hierro	Resto de la economía
1966	2.221	123	60
1967	2.333	118	82
1968	2.342	103	79
1969	2.280	130	88
1970	2.380	147	113
1971	2.905	142	103
1972	2.929	131	142
1973	4.450	170	164
1974	10.762	273	255
1975	8.493	269	214
1976	8.802	256	284
1977	9.225	168	268
1978	8.705	139	330
1970	13.673	140	547
1980	18.301	149	825
1981	19.094	170	814

F U E N T E S

Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1978, pp. 326; *Anuario de series estadísticas 1981*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1972, pp. 29, 32, 47.

Es importante recordar que en muy numerosas oportunidades el ex presidente Pérez dijo que, a su modo de ver, su gobierno constituía «la última oportunidad» para afianzar la democracia en Venezuela.⁴⁰ Por fortuna se equivocó, pero no cabe duda de que los eventos de esos cinco años contribuyeron en forma significativa a erosionar aún más los débiles cimientos económicos, institucionales y éticos en los que, precariamente, se venía sosteniendo nuestro sistema de libertades. Para ser justos, es indispensable decir que los cinco años posteriores, bajo el mando del partido Copei, complementaron una década de desaciertos y desencanto de serias repercusiones para Venezuela.

Si algo no puede criticársele a Carlos Andrés Pérez en cuanto a su gestión de gobierno se refiere, es la absoluta franqueza con que reiteradamente explicó la naturaleza de su estilo y propósitos. Como dijo en una alocución del 29 de junio de 1974, «Así actuará mi gobierno: ¡adelante! en el camino enderezaremos las cargas». Y luego sostuvo: «Hay que andar [...] al paso de la historia. Cuanto más aprisa mejor, y si tenemos que co-

rrer, correré hacia adelante para lograr la grandeza de nuestra Patria». ⁴¹ Su objetivo fue lograr lo que llamó, con característica inmodestia, la «Gran Venezuela», y dijo: «... esta década de los años 70 es la oportunidad histórica que se le ha abierto de manera definitiva a nuestra patria para llevar adelante el proceso de *crecimiento firme que nos coloque entre los grandes países industrializados de la tierra y en uno de los soportes de la liberación económica de la América Latina*» [itálicas AR]. ⁴² ¡Nada menos! Lo que no se entiende es cómo pretendían reconciliar el presidente Pérez y su equipo de gobierno las ideas de «austeridad» y «criterio de escasez» con un objetivo tan desproporcionado, no sólo respecto a las características y recursos —materiales y humanos— reales de Venezuela, sino también, muy probablemente, a nuestro verdadero interés nacional.

En efecto, cuando cuestiono el objetivo definido por el ex presidente Pérez como la «Gran Venezuela» me estoy refiriendo a una *cierta forma* de concebir al país y su futuro, que se encarnó de manera particularmente notoria en la gestión de su gobierno, pero que todavía sobrevive en la mentalidad y ambiciones de un número no subestimable de venezolanos. Un país puede ser grande de muchas formas y, ciertamente ser un poder industrial no es la única de ellas. Venezuela, con su relativamente pequeña población, su amplio territorio y recursos, su clima en general benéfico, y su régimen de libertades, *podría* aspirar y *debería* aspirar a construir una economía sólida, capaz de sostenernos y de comprar afuera lo que no podamos producir por razones de costos o de insuficiencias tecnológicas; una sociedad equilibrada, sin extremos de riqueza y pobreza, que se ocupe de los más débiles pero que no por ello restrinja a los más capaces; una sociedad que produzca lo que consume y que no se caracterice, como ahora, por la opulencia exagerada de unos pocos; aspirar, en fin, a un orden político estable y democrático basado en el respeto a las leyes, en valores nacionalistas dignos y moderados y no en una retórica exaltada y falsificadora de la realidad de las cosas. Ser grande no implica asemejarse a los superpoderes, ni siquiera a poderes medios del actual sistema internacional. Venezuela, hay que convencerse de ello, y no hay por qué avergonzarse de ello, es un país pequeño de importancia relativamente secundaria en el contexto mundial. Dentro de tales condiciones, no obstante, podríamos, como otras naciones que no son grandes poderes, levantarnos con dignidad y construir una sociedad, una econo-

Ibid., pp. 296, 300.

Ibid., vol. 2, p. 190. Véase también pp. 10-11, 14, 55, 126, y en el vol. 1, pp. 24-25, 341-347, 432-433, 540-541, 545, 580.

41

42

mía y un orden político respetables, sólidos, equilibrados y libres, de los que cualquier ciudadano pueda sentirse orgulloso. Hacia allí, y no hacia los sueños de situarnos entre los grandes países industrializados de la tierra, debería dirigirse la estrategia nacional.

Ampliaré estas ideas en otras secciones de la presente obra. Por el momento quiero insistir en la contradicción que se planteaba entre los ideales de austeridad del gobierno del presidente Pérez y el sueño de la «Gran Venezuela», con sus realidades de despilfarro y corrupción, que se intensificaron múltiples veces a partir de 1974. Ésta puede o no haber sido la intención de nuestros gobernantes de la época, pero, repito una vez más, la política no es esencialmente una cuestión de intenciones sino de hechos, es decir, de las consecuencias de nuestras ideas y propósitos. Simplemente *no era posible* armonizar las metas de administrar con criterios de escasez y austeridad y el objetivo de la «Gran Venezuela», a ser logrado —no olvidemos, pues así lo enfatizó muchas veces el ex presidente Pérez— en cosa de pocos años. Por eso había que correr, que lanzarse adelante, que enderezar las cargas en el camino. Y no solamente íbamos nosotros a convertirnos en uno de los grandes países industriales de la tierra, sino que también contribuiríamos a transformar sustancialmente todo el orden económico y político internacional. Venezuela, la Patria de Bolívar, podía hacerlo todo. Como lo formuló en una ocasión Carlos Andrés Pérez: «Vamos a cambiar la vida»; en su opinión, «El Nuevo Orden Económico Internacional [...] tiene que ser, y de hecho será, la consecuencia inevitable del nuevo orden político internacional». ⁴³

Por ahora sólo me interesa destacar que el ex presidente Pérez nos colocó de plano como miembros del genérico Tercer Mundo, a pesar de que él mismo aceptaba que las características de la evolución económica y política venezolanas eran atípicas, pues el nuestro es «un subdesarrollo en un país riquísimo, en un país millonario». ⁴⁴ En vista de esto, lo prudente habría sido moverse con cautela en el intento de colocar a Venezuela sobre el camino de negociaciones globales en compañía de un conjunto de países con problemas en muchos sentidos distintos a los nuestros, y con aspiraciones también muchas veces diferentes, a pesar de las coincidencias terminológicas de la retórica tercermundista. Sin embargo, el

43 Carlos Andrés Pérez, *Un nuevo orden económico es esencial para la paz mundial*. (Alocución del 16 de noviembre de 1976 ante la Asamblea General de la ONU). Caracas: Ministerio de Información y Turismo, 1976.

44 Pérez, *Manos a la obra*, vol. 1, p. 285.

presidente Pérez se refería a «nuestra Patria, concertada con las demás patrias del Tercer Mundo»⁴⁵ como si se tratase de un bloque homogéneo capaz de llevar adelante un programa a la vez *coherente y realista*, que pudiese suscitar una respuesta positiva de parte de otros sectores en el orden mundial.

Pero nada de esto detuvo el sueño de la «Gran Venezuela» ni su estruendoso fracaso. Paradójicamente, ya en octubre de 1974, pocos meses después de haber iniciado su mandato, el ex presidente Pérez analizaba de esta forma los planes de la Nación elaborados hasta entonces:

Si revisamos los cuatro planes de la Nación que se han escrito —decía— encontraremos sinceramente que no han sido nunca congruentemente formulados. *Veremos que han sido más formulaciones teóricas hechas de buena fe y expresando grandes aspiraciones, pero que no han consultado las realidades del país, ni tampoco han conjugado los factores humanos, materiales, científicos y tecnológicos indispensables para realizarlos* [itálicas AR].⁴⁶

Todo esto, pero aumentado varias veces, podría decirse del v Plan de la Nación formulado por su propio gobierno, bajo la dirección del entonces ministro de Estado para la Planificación, Gumersindo Rodríguez, cuya confusión conceptual y desconocimiento de las realidades económicas difícilmente encuentran paralelo entre otras figuras que han tenido la poca suerte de recibir la encomienda de redactar un Plan de la Nación para Venezuela. El más grande de los absurdos, y la más crasa de las contradicciones, fue el intento de crear una sociedad de productores a través del aumento artificial de los salarios y de una política de pleno empleo, que llegó hasta el punto de exigir que se contratasen asistentes para los ascensores de todos los edificios públicos, fuesen o no necesarios. Con esto lo que se logró fue acrecentar enormemente el monto de las importaciones. La gente, con dinero en la mano y sin bienes que adquirir —pues no tenemos industria que los produzca— se volcó a consumir lo que encontraba, que en buena parte era importado. De manera que, en resumen, la enorme responsabilidad de orientar la utilización de los gigan-

Ibid., vol. 2, p. 128.

45

Ibid., p. 72.

46

tescos recursos generados por los nuevos precios quedó en manos de un equipo dirigente de ambiciones totalmente desbordadas, y que —como afirmó el presidente Pérez— «no estaba seguro si sería posible resolver los problemas nacionales del desarrollo sin el avance de los proyectos de integración latinoamericana. Éstos, a su vez, deben basarse en los objetivos del Tercer Mundo». ⁴⁷ En otras palabras, para alcanzar los desmesurados propósitos del v Plan ya ni siquiera tendríamos que tomar en cuenta las condiciones internas del país y nuestras posibilidades reales de enfrentarlas, sino que tales metas dependerían de premisas externas sobre las cuales nuestro control era aun mucho menor aunque algunos imaginaban lo contrario. En suma, el v Plan no sólo se dirigía a cambiar a Venezuela sino a Latinoamérica y al mundo entero.

Lo anterior puede sonar risible o parecer caricaturesco, pero estoy plenamente seguro de que no lo es. Para convencerse de ello basta leer en detalle los mensajes y declaraciones de nuestros gobernantes de la época, así como ese documento casi alucinante por su desmesura que es el v Plan de la Nación. Lo grave es que el gobierno no se quedó en pura retórica, lo cual, tal vez, habría sido menos dañino, sino que el país se lanzó casi desafortadamente, tanto en su estrategia interna como externa en pos del espejismo de la «Gran Venezuela», con resultados en lo fundamental, sumamente negativos para el país.

Los venezolanos, para usar la hermosa y terrible frase de Karl Deutsch, cometimos el «pecado de orgullo» («*the sin of pride*»), que consiste en percibirse a sí mismos en términos desproporcionados respecto al mundo que nos rodea. Este pecado, en relación con la política, envuelve la sobrestimación de la organización (en este caso, al país) en comparación con el ambiente en que se desenvuelve, de sus métodos de acción pasados (en este caso, el populismo) por encima del compromiso a usar alternativas, y de su actual voluntad y situación interna por encima de las posibilidades de un cambio verdaderamente sustancial. ⁴⁸ Lo contrario del pecado de orgullo es la actitud de humildad, que de ninguna manera debe interpretarse como pasividad, timidez o cobardía, sino en sentido *positivo* como una conciencia de los límites de la acción política, y una disposición razonable a aceptar la realidad de la falibilidad humana. La idea de

47 Venezuela Now. New York: Delegación Venezolana ante la ONU, 1977.

48 Karl Deutsch, *The Nerves of Government*. New York: The Free Press, 1966, pp. 229-230.

que en el camino se enderezan las cargas ilustra nítidamente el significado del pecado de orgullo: los dirigentes que enrumbaron el país esos años jamás se preguntaron qué ocurriría si sus ambiciosos proyectos fracasaban, excepto, claro está, desde una perspectiva mesiánica, según la cual si lo que yo propongo no funciona, entonces se acabará la democracia (la versión populista de: «*après moi, le déluge*»). Y hay que tener claro que nadie, entre los grupos organizados, puede sentirse totalmente libre de culpa, pues, además de un gobierno desacertado, tuvimos un empresariado en buena medida parasitario, un sindicalismo de cortas miras y una oposición confusa, dividida e incapaz de presentar con firmeza y valentía ante la nación una alternativa no populista frente a las temerarias pretensiones de la «Gran Venezuela».

Nos ocurrió un fenómeno que ha sido común en Latinoamérica en décadas recientes, con la diferencia de que en nuestro caso alcanzó mayor intensidad. Como señala Hirschman, es perfectamente posible que en ocasiones, la articulación de problemas y la formulación de soluciones a los mismos se incrementen en forma independiente de lo que *efectivamente* está teniendo lugar en la sociedad y la economía. A partir de 1945 las sociedades latinoamericanas, y entre ellas Venezuela, han sido sometidas a un torrente sin precedentes de soluciones estructurales; ha habido una verdadera inundación de proyectos de cambio radical, de planes de desarrollo integral y de propuestas para la reforma global y los remedios definitivos, que han creado una inflación de soluciones aún más aguda que la de los propios problemas. Esto ha traído como consecuencia una cada vez mayor frustración, en vista de que constantemente aumenta el abismo entre la *realidad* de nuestras sociedades y la *dimensión de las tareas* que permanentemente se les proponen. Así, primero vino la industrialización, una conquista que estaba a nuestro alcance si hubiésemos implementado otras políticas, pero a la que luego se sumó la más compleja misión de planificación del conjunto de la economía. Poco más tarde, en los años 1960, añadimos la integración latinoamericana, y como si fuera poco a todo esto se incorporó la meta de redistribuir el ingreso doméstico conjuntamente con la superación de la dependencia económica y tecnológica mediante el reordenamiento del sistema internacional.⁴⁹ No nos hemos detenido ante nada y hemos logrado muy poco. No hay que sor-

prenderse, por lo tanto, de que la incidencia de fracasos haya sido tan alta, pues el intento de trasladar tantos proyectos y tan grandiosa ambición a la práctica y en corto tiempo trae un costo que usualmente se mide en tropiezos y caídas.

En concreto, la estrategia económica implementada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez se fundamentó, por un lado, en el intento de impulsar el desarrollo de un sector de empresas privadas y, por otro lado, de estimular un sector de empresas básicas de propiedad predominantemente estatal. Fue, pues, una estrategia sustentada en una extraña mezcla de concepciones capitalistas y socialistas.⁵⁰ El impulso al sector de empresas privadas se lograría a través de la concesión de sustanciosos y fáciles créditos gubernamentales y del proteccionismo arancelario, diseñado para defender la industria nacional. Sin embargo, tal meta no pudo alcanzarse pues las medidas formuladas eran muy poco adecuadas para dar estímulo a un sector privado verdaderamente productivo y competitivo. Un sector empresarial en un país moderno no surge de la noche a la mañana, y no se puede crear como por arte de magia mediante el obsequio, o la fácil inyección de dineros públicos: «Un sólido sector de empresas privadas sólo puede desarrollarse a lo largo del tiempo de tal modo que, en primer lugar, sea capaz de acumular experiencias, y en segundo lugar, vaya generando sus propios fondos a fin de reinvertirlos en la expansión de sus actividades».⁵¹ Lo que de hecho ocurrió en Venezuela durante esos años fue que ese sector empresarial, holgadamente favorecido por el Estado, prefirió reciclar el dinero hacia el área de servicios, importaciones, comercio, construcción de viviendas suntuosas o de clase media en Caracas y otras ciudades, y en depósitos líquidos bancarios, en lugar de invertirlo en empresas industriales y agrícolas a mediano y largo plazo. Parte importante de estos dineros públicos, desde el propio *comienzo de la administración del ex presidente Pérez*, fue sacado del país y colocado o invertido en el exterior, particularmente en el estado de Florida, Estados Unidos, donde los venezolanos —según un estudio sobre el tema— nos convertimos en los principales proveedores de capi-

50 He extraído buena parte de las cifras que siguen del excelente artículo de James Petras y Morris H. Morley, «Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela», *Third World Quarterly*, 5, 1, January 1983, pp. 7-27, y del trabajo de Roberto Dubuc Picón, «El Programa de Gobierno de Acción Democrática», *Resumen*, Caracas, 13 de noviembre de 1983, pp. 15-19.

51 Dubuc Picón, «El Programa...», p. 17.

tal de toda la América Latina.⁵² La avidez de ganancia fácil se sumó a la actitud complaciente y falta de control sobre sus dádivas de parte del gobierno, el cual, además de financiar a una clase empresarial que carecía por completo de interés en un crecimiento industrial y agrícola de nuestra economía, dio aliento a un cada vez más amplio e improductivo sector de empresas públicas, que además de absorber recursos con enorme voracidad, pronto se convirtió en un punto focal de corrupción administrativa, incompetencia y desperdicio.

La estatización de la economía creció a pasos agigantados durante esa etapa. Hacia mediados de 1977 ya representaba alrededor del 60% del PTV, y hacia fines de ese mismo año el Estado ya era responsable por el 72% de la formación de capital nacional comparado con 33% a principios de los años 1970.⁵³ El rol decisivo del Estado en nuestra economía se refleja en el hecho de que seis de las diez más grandes empresas son de propiedad pública, y la industria petrolera es 17 veces más poderosa que la segunda más grande empresa del país (también propiedad del Estado). El fracaso de la estrategia propuesta en el v Plan ya era evidente hacia 1976. Ese año se produjo un *boom* en la industria de la construcción que alcanzó un crecimiento superior al 3% de lo proyectado, en cambio la tasa de crecimiento en el sector manufacturero declinó del 12% ese año al 3,5% en 1977. En cuanto a la agricultura, su contribución al producto doméstico descendió de un promedio de 7% entre 1961 y 1970 a 6,6% entre 1971 y 1975, y de 6,1% entre 1976 y 1980. La expansión de exportaciones no mineras—agricultura y bienes manufacturados— no se materializó. Para diciembre de 1977 las exportaciones no tradicionales apenas llegaban al 2% del volumen total; en cambio, las importaciones aumentaron dramáticamente en cantidad y valor. Entre 1974 y 1978 el valor de las importaciones se triplicó, de US\$ 3,9 billones a US\$ 11,2 billones (1 billón = 1.000 millones). Durante esta misma etapa la proporción de importaciones respecto al producto doméstico subió de 17% a 37%, mientras que la proporción de exportaciones bajó de 44,7% a 25,6%. Todo ello produjo una declinación en la balanza de pagos de US\$ 7,2 billones en 1974 a US\$ 3,5 billones en 1975, y US\$ 12,1 billones en 1976. Hacia 1978, tanto la balanza de pagos como la comercial se encontraban en situación deficitaria, en una

Mira Wilkins: «Venezuelan Investment in Florida», *Latin American Research Review*, xvi, 1, 1981, pp. 156-165.

Latin America, October 5, 1977, p. 317.

cifra no menor a los US\$ 5.4 billones y US\$ 1.8 billones respectivamente, y ese mismo año nuestras reservas extranjeras descendieron 21%.

La deuda pública interna y externa, por otra parte, se duplicó entre 1974 y 1975, y el servicio de la deuda como proporción del presupuesto nacional total aumentó del 6% en 1975 al 15% en 1977. En 1976, a pesar de toda la retórica oficial sobre nuestra abundancia, el gobierno negoció créditos en el Euromercado por más de US\$ 1 billón, para refinanciar deudas a corto plazo de los institutos autónomos y empresas del Estado. Para 1977, aproximadamente el 40% de todas estas empresas estaban dando pérdidas significativas y debían ser subsidiadas por el Fondo de Inversiones de Venezuela y el Banco Central. El valor de las importaciones de alimentos, un índice muy ilustrativo de los resultados de las políticas agrícola e industrial, creció de 2.021 millones de bolívares en 1973 a 3.500 millones de bolívares en 1976, excluyendo las importaciones ilegales desde Colombia. Entre 1974 y 1976 las importaciones de alimentos crecieron del 11% al 20% como porcentaje de nuestros requerimientos totales, y ya en 1976 traíamos del exterior 20% de la carne, 24% de la leche, 49% del maíz, 68% del sorgo y 100% del trigo y soya que consumimos. En parte como consecuencia de ello, de 1974 a 1977 el costo de la vida creció del 15% al 18%, mientras que los salarios reales descendieron del 17.8% al 9.3%. Desde luego, los resultados de una política agrícola no se ven claramente en sólo dos o tres años; sin embargo, ése era el criterio con el cual el propio gobierno quería ser juzgado. De otro lado hay que hacer constar que el así llamado Fondo de Inversiones Agrícolas, creado por el Estado para canalizar grandes sumas en inversiones en las zonas rurales, dirigió la mayor cantidad de créditos y dádivas hacia los más poderosos ganaderos y capitalistas del campo, dejando así a los pequeños y medianos productores, que presuntamente iban a ser los principales beneficiarios de la nueva política crediticia, en situación precaria. Buena parte de los créditos agrícolas y ganaderos fueron reciclados hacia inversiones de alta rentabilidad a corto plazo colocados en depósitos en bancos extranjeros.⁵⁴

T A B L A 3

LA DEUDA VENEZOLANA Y EL SERVICIO DE LA DEUDA (en millones de bolívares)

Año	Externa	Interna	Flotante	Total	Servicio de la deuda nacional
1958	680	488	—	1.168	220
1959	501	824	—	1.325	282
1960	986	1.186	—	2.578	543
1961	814	1.557	—	2.777	1.381
1962	746	1.424	—	2.576	1.318
1963	691	1.323	—	2.230	924
1964	855	925	—	1.930	904
1965	1.083	989	—	2.128	547
1966	1.332	1.003	406	2.354	556
1967	1.546	1.283	406	2.829	510
1968	1.881	1.647	406	3.528	568
1969	2.183	2.200	216	4.383	525
1979	2.931	2.560	150	5.491	693
1971	3.770	2.712	56	6.482	1.471
1972	4.340	2.870	19	7.210	1.361
1973	5.201	2.233	—	8.434	1.538
1974	4.709	5.467	—	10.176	2.226
1975	6.123	6.778	—	12.901	2.374
1976	14.146	8.251	—	22.397	4.578
1977	20.275	14.464	—	34.739	5.622
1978	31.186	17.913	—	49.099	5.792
1979	35.326	19.207	—	54.533	7.967
1980	41.516	19.237	—	60.753	11.801
1981	40.795	25.859	—	66.654	15.081

F U E N T E S

Banco Central de Venezuela, *La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1978, pp. 280-283; *Anuario de series estadísticas 1981*. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1972, pp. 92, 104.

Esta acumulación de cifras puede tal vez resultar un tanto avasallante y confusa; lo importante, no obstante, es no perder el rastro de lo esencial: las políticas económicas de la «Gran Venezuela» fracasaron porque se basaron en concepciones erradas, según las cuales el Estado no sólo puede manejar a su antojo la economía, sino que también es capaz de crear una clase empresarial y una disciplina productiva y de consumo ajenas a los criterios de competitividad y costos del mercado. El otorgamiento de créditos a la ligera y casi sin controles, motivados a veces por

favoritismos políticos, y el proteccionismo excesivo, trajeron como consecuencia que muchas de las empresas que se llegaron a establecer en el país pronto acusaran síntomas de ineficiencia, elevados costos, bajísima competitividad y propensión a la parálisis. En cuanto al sector de empresas públicas, como apunta Dubuc Picón:

... se cayó en un nacionalismo megalomaniaco que llevó a la fundación o a la expansión de empresas para las que no existían ni los mercados suficientes ni las destrezas empresariales y técnicas requeridas, ni la conveniente infraestructura institucional [...] El resultado que se obtuvo, de esta forma, fue la eclosión de un grupo de empresas públicas altamente ineficientes, sujetas a todo tipo de corruptelas y permanentemente deficitarias, que para sobrevivir tienen que seguir devorando grandes cantidades de fondos gubernamentales y recurrir a dosis cada vez mayores de endeudamiento. Así, el espejismo de la «Gran Venezuela» creó las condiciones de la crisis fiscal y de endeudamiento externo que actualmente sufre nuestro país.⁵⁵

En síntesis, los petrodólares y el populismo intoxicaron a Venezuela. Ciertamente, el ex presidente Pérez estaba en lo correcto al insistir en que Venezuela es un país de grandes problemas económicos y desigualdades sociales, pero éstas no son más que perogrulladas que conocemos de sobra todos. Lo importante no es repetir hasta el cansancio lugares comunes, sino adoptar una vía de aproximación para enfrentar el reto del desarrollo que sea a la vez realista y coherente; es decir, una vía que no responda a los mitos populistas y a las concepciones estatistas de siempre, y que se fundamente en la firme convicción de que lo que está planteado en Venezuela, como en todo país esencialmente pobre aunque artificialmente rico, es una política de desarrollo de largo alcance. La implementación de una política de esta naturaleza exige un liderazgo nacional con características muy distintas al que nos ha conducido durante los últimos 25 años y requiere también la superación de la ideología político-económica predominante en nuestro medio que es la ideología de nuestra democracia populista.

En tal sentido, cabe referirse, aunque sea brevemente, a las constantes afirmaciones del ex presidente Pérez, que son comunes entre nuestros dirigentes democráticos, de acuerdo con las cuales «El problema esencial [de Venezuela] es el de la injusta distribución de la riqueza».⁵⁶ La «circunstancia de la pobreza —decía Carlos Andrés Pérez en 1974— no fue nunca [resultado de la] indolencia de las mayorías nacionales, sino [de la] *falta de activa justicia distributiva de la democracia económica* que no funcionaba en nuestro país».⁵⁷ La democracia, insistía, es

... asediada por dos extremos. La extrema derecha que acusa a la democracia como sistema incapaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, de dar seguridad, y asimila la democracia al bochínche; en el otro extremo la izquierda cuestiona la democracia como el sistema para favorecer los intereses de los poderosos, para asentar los privilegios. Y frente a estas dos falsificaciones de la democracia *quiero demostrar que se puede dar pan y dar bienestar, pero también libertad*.⁵⁸

Dejemos por el momento de lado la noción paternalista, puesta una vez más de manifiesto en la idea de que el papel del gobierno es «dar» a la gente esto o aquello. Lo que quiero comentar ahora es la tendencia de nuestros dirigentes políticos a ponerle apellidos a la democracia, y hablar de una «democracia social», «económica», «participativa», etc.,⁵⁹ sin jamás explicar con precisión qué es exactamente lo que se quiere decir con esto y de qué forma tales apellidos de la democracia constituyen una respuesta a los problemas de la pobreza y la distribución del ingreso en la sociedad. Si tratamos de descifrar qué es lo que numerosas personas en Venezuela, dentro y fuera de los partidos, entienden por democracia social —a pesar de lo oscuro del concepto—, hay que concluir que, en esencia, se refieren a una cierta visión de la vida política y económica según la cual las libertades de un régimen de derecho no bastan, y deben ser complementadas con la intervención del Estado para garantizar un reparto equitativo de la riqueza entre la población. Lo que jamás alguien

Carlos Andrés Pérez, *Manos a la obra*, vol. 2, p. 92.

Ibid., pp. 7-8.

Ibid., vol. 1, p. 297.

Ibid., p. 429.

56

57

58

59

explica —porque no es posible hacerlo— *es cuáles son los criterios objetivos que nos podrían permitir conocer en qué consiste una justa distribución del ingreso; o para decirlo de otra forma, qué es la justicia social*. Aquí es necesario detenerse, pues el terreno que pisamos es pantanoso y está lleno de trampas ideológicas y chantajes emocionales. En nuestro país la mitología populista ha impuesto, entre otras cosas, un cierto lenguaje político, y el que no lo habla se condena a ser atacado con todo tipo de epítetos y acusado de la más dura crueldad. Dos frases clave de ese lenguaje son las de justicia social y reparto equitativo de la riqueza, y si bien mucha gente las usa constantemente, nadie ha explicado cuál es su contenido concreto y de qué manera pueden lograrse tales objetivos. Debo entonces dejar claro lo siguiente: cuestionar estos conceptos no significa adoptar una actitud altiva y egoísta ante los gravísimos males que afectan a amplios sectores de nuestra población, en no poca medida debido a la demagogia populista. Aspiro a que *todos los venezolanos* tengan acceso al trabajo, a la educación, a oportunidades de superarse y ejercer a plenitud sus capacidades en el contexto de una sociedad libre y democrática. Lo que está planteado no es un debate entre un grupo de almas buenas que se preocupan por los pobres, débiles y marginales, y otro grupo de gente sin corazón y carente de ideales. No, lo que está planteado es un debate entre una serie de concepciones demagógicas y, como sostendré luego, en extremo peligrosas acerca de la democracia, y por otro lado un conjunto de ideas sobre la política y la economía que a mi modo de ver son las únicas que pueden enrumbar a Venezuela hacia un progreso *real* sin sacrificar nuestras libertades.

En la sección siguiente presentaré con mayor detalle mis puntos de vista sobre la democracia. Por ahora quiero enfatizar que no debemos perder de vista en ningún momento que en una sociedad *libre* siempre existirán desigualdades que parecerán injustas o inmerecidas a unos u otros, pero tales desigualdades tendrán, en tal sociedad, una naturaleza y un significado muy diferentes a las desigualdades que existen en las sociedades socialistas o autoritarias en general. En el primer caso, si se trata de sociedades democráticas con una vigorosa economía de mercado, se generarán desigualdades que serán principalmente producto de fuerzas impersonales, de las diferencias en talento y productividad de las personas; las sociedades colectivizadas, en cambio, producen desigualdades que son el resultado de jerarquías políticas *inflexibles* y de mecanismos económicos sometidos a una *dirección centralizada*. En este caso

las desigualdades son consecuencia de estructuras que aplastan al individuo; en una sociedad libre las desigualdades se derivan del funcionamiento de estructuras que dejan espacio al individuo para el despliegue de sus potencialidades. Ésta, lamentablemente –debido al estatismo y a la excesiva influencia partidista, que crean privilegios clientelares en todos los ámbitos de la vida ciudadana– no es la situación existente en Venezuela.

Desde luego, un Estado democrático tiene el *deber moral* de ocuparse de los miembros más débiles e infortunados de la sociedad. Mas esta protección del Estado a los menos favorecidos debe canalizarse en el sentido de contribuir a crear el marco institucional –económico, jurídico y educativo– que permita a las personas superarse por sí mismas. Esto es distinto a los programas de redistribución de la riqueza de que hablan muchos de nuestros políticos. En la práctica, y en particular dentro de nuestro contexto populista, esos programas distributivos se transforman

... en un proceso totalmente arbitrario en el que un grupo reducido de políticos y funcionarios públicos traspasan caprichosamente recursos de unos grupos de la población a otros. La intensificación de los llamados programas distributivos engendraría una gran desigualdad en las atribuciones y usos del poder político en favor de quienes controlasen el aparato de transferencia de recursos. Esas personas tendrían entonces el camino abierto para explotar dicho poder y concederse a ellas mismas privilegios materiales.⁶⁰

Esto es, de hecho, lo que ha ocurrido en todas partes donde el Estado, en lugar de estimular una economía de mercado y un marco jurídico de leyes y reglas comunes y de igual aplicación para el conjunto de la ciudadanía, ha acrecentado sistemáticamente su poderío económico y sus atribuciones distributivistas –y Venezuela no es, como sabemos, una excepción. Nuestro problema esencial no es la injusta distribución de la riqueza sino la existencia de una economía y una mentalidad nacional rentistas, que le cierran el paso a un desarrollo efectivo y contribuyen decisivamente al deterioro de nuestro orden político.

En suma, si bien admito que la idea de justicia social tiene un contenido intuitivo que responde en muchos casos a la honesta y legítima inquietud por las desigualdades e infortunios que padece un gran número de venezolanos, creo también que hay que evitar caer en ingenuidades en el análisis de un problema clave para el país, que es el de la vía más eficiente para enfrentar tales dificultades dentro de un marco de libertades públicas. Continuar prestando atención a la sonora pero hueca retórica populista sólo nos conducirá a una crisis más grave, y tal vez al derrumbe definitivo de la democracia. Recordemos, en esta línea de argumentación, que el equipo socialcristiano que se encargó de los destinos del país en 1979 llegó al poder tras las consignas de la democracia participativa y el gobierno de los pobres, dos innovaciones dentro del lenguaje del populismo. Sin embargo, a pesar de las promesas, Luis Herrera Campíns presidió por cinco años sobre una economía estancada, un crecimiento casi nulo del sector no petrolero, elevadas pérdidas del sector público, enormes gastos en importaciones, aumentos masivos en el endeudamiento nacional, inflación creciente y fuertes descensos en los niveles de vida del grueso de la población.⁶¹ De nuevo, el gobierno de Copei entre 1979 y 1984 no hizo otra cosa que inflar todavía más al ya gigantesco Estado venezolano, y aun sin la baja en los precios del petróleo, que dejó las proyecciones del VI Plan de la Nación en el limbo de las más descabelladas utopías, nuestra economía habría experimentado serios traumas en ese período.

El secreto del desarrollo no es un misterio tan profundo como desean en ocasiones pintarlo algunos sociólogos y economistas. El progreso económico real, no rentista, de las naciones es, sin excepción, el resultado de la capacidad productiva de sus ciudadanos: de su trabajo, de su disciplina social en un marco de leyes y reglas comunes, de su ingeniosidad y su espíritu de innovación y superación. Como plantearé con mayor amplitud oportunamente, esa capacidad productiva se relaciona con un conjunto de factores que van desde lo político hasta lo psicológico, pasando por supuesto por lo económico propiamente dicho. En todo proceso de desarrollo las instituciones políticas juegan un papel de primordial importancia, pues éstas pueden o bien obstaculizar o bien estimular el despliegue del esfuerzo productivo de las personas. En tal sentido y retornando al tema de los programas redistributivos, la experiencia vene-

61 | Petras y Morley, pp. 15-20.

zolana indica que en nuestro contexto institucional ese tipo de procesos lo que logra es atraer a la población hacia actividades políticas en busca del dinero fácil del Estado, apartándola de los esfuerzos productivos que son los únicos capaces de dejar atrás efectivamente la condición de atraso y marginalidad en que se encuentran numerosos venezolanos. En nuestro país los gobiernos democráticos se han visto reiteradamente tentados a sustraer recursos de los sectores más productivos de la sociedad, para engrosar —bajo la consigna de la redistribución del ingreso— un tesoro público que ha estado por mucho tiempo abarrotado de dinero petrolero. Lo que casi siempre se pierde de vista es que al sucumbir a las presiones ideológicas populistas en estas materias, el camino queda abierto para golpear aún más duramente la iniciativa individual y su potencial para producir bienes y servicios, así como para destruir el surgimiento de nuevos hombres de empresa, que se abstendrían de invertir al darse cuenta de que buena parte de sus ingresos irían a parar a manos de una maquinaria burocrática que ha malbaratado enormes sumas del tesoro público. Una política impositiva debe entonces responder a criterios de eficiencia, y no a los dogmas ideológicos de un populismo que tiende a concentrar poder económico en el Estado a pesar de las repetidas demostraciones de su propensión al despilfarro y la corrupción.

Para Venezuela hubiese sido mil veces preferible que los sustanciosos ingresos provenientes del petróleo a partir de 1973, en lugar de despilfarrarse en función de los desmesurados proyectos de la «Gran Venezuela», se hubiesen orientado de otra manera, de acuerdo con una concepción no estatista del desarrollo como un proceso a largo plazo. Como plantea Dubuc Picón:

... viendo las cosas en retrospectiva, hubiese sido mejor gastar ese dinero en la humanización de nuestras infernales ciudades, en la edificación de obras para la expansión de oportunidades individuales en el terreno de la cultura y el deporte, y en la construcción de la infraestructura que siempre hemos necesitado —y para lo que ahora tenemos tan escaso dinero— a fin de crear condiciones para las actividades agropecuarias y pesqueras privadas. Desgraciadamente pudo más la mitología política que la sensatez.⁶²

Hubo, sin duda, programas positivos, basados en una visión más acertada de lo que debía hacerse, como por ejemplo la creación de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Sin embargo también aquí se cometieron serios errores, y la incidencia de fracasos, la ineficiencia y el clientelismo fueron muy elevados. La «Gran Venezuela» absorbió recursos que administrados de otra forma, y en condiciones políticas distintas dentro de un marco democrático levantado sobre las leyes y no sobre la demagogia, podrían haber colocado a Venezuela sobre un sendero de sólida superación nacional. Pero, de hecho, entramos en una etapa de progresivo deterioro, que aún persiste.

¿Hemos asimilado las lecciones que arroja esta experiencia? Es decir, como lo formula Deutsch, ¿hemos logrado extraer de todo esto un aprendizaje *creativo* que nos permita entender adecuadamente lo ocurrido e incrementar las posibilidades de tomar un camino distinto hacia adelante?⁶³ Esto está aún por verse, pero no hay que olvidar que los individuos, y naciones enteras, pueden experimentar procesos de aprendizaje «patológicos» que, en lugar de acrecentar su capacidad de innovación la reducen, con consecuencias usualmente nefastas para su evolución futura.⁶⁴ Para Venezuela las alternativas siguen siendo o bien la continuación de una democracia populista, que seguramente nos llevará a una mayor decadencia, a la parálisis, la anarquía o el autoritarismo, o bien una democracia basada en el sentido de la realidad por parte de la ciudadanía y sus dirigentes. En la sección siguiente me propongo trazar algunos de los rasgos de esa opción no populista para la democracia venezolana. Conquistar esa alternativa es, en esencia, el desafío fundamental que tiene planteado Venezuela.

63 Deutsch, p. 169.

64 *Ibid.*, p. 248.

Democracia y expectativas ciudadanas

En la primera parte de este estudio me concentré en una crítica del modelo de democracia que se ha desarrollado hasta el presente en Venezuela. No quise con ello desconocer el significativo logro que para nuestro país implica haber establecido y sostenido por casi tres décadas un régimen de libertades públicas, y en varios pasajes reconocí sin ambigüedades este aspecto como una conquista histórica altamente positiva. No obstante, mi objetivo no es hacer elogios sino enfrentar dificultades, pues, como dice Samuel Brittan, «el propósito de anunciar que una casa se está incendiando es alertar a los bomberos, no sentarse a contemplar las llamas».¹ La motivación central de mi análisis no es la de retrotraer a Venezuela a etapas ya superadas de nuestro proceso histórico, sino por el contrario alzar una voz de alarma respecto a los graves problemas que se derivan del tipo de democracia que se ha implantado en nuestro medio, con el objeto de que se introduzcan a tiempo correctivos que, por un lado, conserven lo que el sistema tiene de positivo, y por otro lado reformen sus componentes negativos. No está de más, entonces, enfatizar que mi discusión responde a un conjunto de valores políticos que no temo en calificar de liberales, en tanto que ese calificativo se entienda en los términos que le ha asignado Popper en su obra *Conjeturas y refutaciones*: «... por un liberal no me refiero a un simpatizante de un determinado partido político, sino simplemente a un hombre que valora la libertad individual y que está alerta a los peligros inherentes al poder y la autoridad».² Estos

Samuel Brittan, *The Economic Consequences of Democracy*. London: Temple Smith, 1977, p. 247.
Karl R. Popper, *Conjectures and Refutations*. London: Routledge & Kegan Paul, 1974, p. viii.

1
2

valores incluyen la voluntad de defender una sociedad abierta y democrática, en la que se preserven tanto la libertad de expresión como la que cada quien tiene de escoger su propio modo de vida; una sociedad en la que no existan grupos oprimidos o a los que se les nieguen los medios de subsistencia y superación, y donde el mantenimiento del orden y la estabilidad sean al máximo posible el producto del respeto a las leyes y al mínimo posible el producto del ejercicio de la coacción por parte del Estado.

El peligro que traté de esbozar en páginas precedentes se refiere a la elevada posibilidad de que el camino populista que ha venido siguiendo la democracia venezolana, nos conduzca paulatinamente al deterioro y eventual abandono de los valores mencionados. Ahora me propongo evaluar un modelo alternativo de democracia, y afrontar directamente la pregunta de si es posible, en nuestras condiciones, desarrollar un estilo y una sustancia democrática no populistas, que nos enrumben por una dirección diferente de sólida libertad política y efectivo progreso económico. En este orden de ideas, mi primer objetivo será discutir el dilema de la relación entre la democracia y el crecimiento de las expectativas ciudadanas, es decir, el problema de la tendencia inherente a los sistemas democráticos —y en particular a los partidos políticos— a generar esperanzas excesivas en la ciudadanía en cuanto a las posibilidades de mejoramiento rápido y continuo de sus condiciones de vida, así como a aumentar constantemente las expectativas en cuanto a la habilidad de los gobiernos para manipular la economía y la sociedad de acuerdo con metas y planes preestablecidos.

Mi punto de partida es el análisis presentado por el economista y sociólogo Joseph Schumpeter en su notable libro de 1942, *Capitalismo, socialismo y democracia*. En esta obra, Schumpeter formula una definición en extremo moderada y poco ambiciosa de la democracia como un método o arreglo institucional para alcanzar decisiones políticas, de acuerdo con el cual un conjunto de individuos (los gobernantes) adquieren «el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular».³ Según Schumpeter, la teoría clásica de la democracia, que la define como un método para tomar decisiones políticas «que realizan el bien común» a través de la participación popular en la elección de individuos que son responsables de implementar esa «voluntad general», carece de asidero

3 | Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Allen & Unwin, 1976, p. 269.

en la realidad de las cosas. Esto es así, argumenta, pues no existe un «bien común» en torno al cual todos los ciudadanos estén de acuerdo o puedan llegar a compartir a través de la persuasión racional: «Ello no se debe principalmente a que algunas personas deseen cosas distintas a lo que se entienda como “bien común”, sino sobre todo al hecho de que tal “bien común” significará cosas distintas para diversos grupos e individuos». ⁴ Por otra parte, apuntaba Schumpeter, aun si lográsemos delinear un bien común suficientemente preciso y aceptable para todos –como, por ejemplo, el principio utilitario de la máxima satisfacción económica– esto no implicaría que pudiesen obtenerse respuestas definidas y similares de los ciudadanos ante cuestiones específicas. Las opiniones sobre éstas podrían diferir hasta el extremo de producir disensiones básicas en torno a los fines globales del bien común: «La salud puede ser deseada por todos pero la gente difiere sobre las vacunaciones, la vasectomía, etc.». ⁵ Por último, y como consecuencia de lo anterior, la noción de que existe una «voluntad general» no tiene validez. Sin un bien común, que todos puedan discernir y hacia el cual todos puedan gravitar, el concepto de voluntad general, escribe Schumpeter, «se desvanece en el aire». Por esto, en su opinión, es necesario adoptar una idea de la democracia que reduzca a su justa proporción las ilusiones de la teoría clásica, la cual «atribuía al electorado una capacidad de iniciativa totalmente irreal, que conducía prácticamente a ignorar el factor del liderazgo en política». ⁶ En síntesis, para Schumpeter la democracia no es más –ni menos– que un método de competencia por el liderazgo a través de una repetida contienda electoral por el voto libre de los ciudadanos. Su criterio del éxito de este sistema político no es el logro de algún ideal abstracto o de un óptimo desempeño, sino simplemente su autorreproducción en condiciones que no conduzcan al empleo por sectores desafectos de métodos no democráticos para implementar cambios políticos. La función de los electores, en suma, es escoger entre varios equipos potenciales de gobierno; aquel que resulte seleccionado tendrá en sus manos, por un tiempo definido, la tarea de formular y ejecutar las políticas públicas. Si al final de ese período los electores se sienten descontentos con el resultado, no lo «comprarán» otra vez.

Ibid., p. 251.

Ibid., pp. 251-252.

Ibid., p. 270.

4
5
6

A pesar del carácter un tanto crudo y poco estimulante de la visión schumpeteriana de la democracia, el hecho es que, a su modo de ver, la esencia competitiva del método democrático da lugar a un proceso de aumento permanente de las expectativas, cuyos resultados pueden ser fatales. Schumpeter insiste repetidas veces en su obra que es equivocado interpretar la actividad de los políticos democráticos como si éstos fuesen ideólogos o portavoces de un mensaje con verdadera sustancia. En realidad —afirma— los políticos son fundamentalmente empresarios que compiten en un mercado de votos en lugar de comerciar con bienes de consumo. Los programas políticos de los partidos pueden o no tener importancia para garantizar éxito en una determinada coyuntura, pero su significación a más largo plazo es casi nula y los mensajes cambian de la noche a la mañana, tal como ocurre con las mercancías que se exhiben en los supermercados. Para Schumpeter, en resumen, el secreto del mercado político democrático no es muy distinto al del económico: complacer a los clientes, pero a la vez sacarles beneficios.

No les faltaría razón a los que sostuviesen que los planteamientos de Schumpeter son un tanto exagerados; no obstante, sus tesis centrales, que acá he simplificado mucho, tienen la virtud de revelar con gran claridad una dificultad clave del proceso democrático. El problema se deriva del hecho de que los votantes carecen de experiencia y limitaciones presupuestarias en el mercado político, al contrario de lo que ocurre en el económico. Es decir, en sus vidas privadas la gente sabe que más de alguna cosa (por ejemplo, ropa), significa generalmente menos de otra (por ejemplo, comida), y entiende que los ingresos deben distribuirse de acuerdo con ciertos criterios y prioridades, pues no son ilimitados. Sin embargo, en la esfera política este conocimiento de los límites es mucho más difuso y a veces casi inexistente. De allí que el electorado tienda a esperar siempre demasiado de los gobiernos y carezca de una percepción adecuada de los costos que la satisfacción de sus actitudes basadas en la consistencia (más de esto es menos de aquello), que en mayor o menor grado predominan en el mercado económico, no se trasladan de manera directa al mercado político, donde los ciudadanos carecen en su mayoría del conocimiento, interés inmediato y experiencia que les convengan efectivamente de que los gobiernos también tienen limitaciones. La tendencia natural del electorado a esperar más y más de sus gobernantes es con frecuencia reforzada por los propios políticos, que buscan acentuar, en lugar de disminuir, las expectativas de la gente en su afán por ganar la

competencia de los votos. Los partidos de la oposición prometen que lo harán mejor que el gobierno de turno; a su vez, los gobernantes, acosados por las demandas ciudadanas, abrumados por los problemas y presionados por sus partidarios, ofrecen más para callar a la oposición, y así sucesivamente en una espiral sin destino aparente que generalmente desemboca en decepción, crisis y parálisis.

Si bien Schumpeter enfatiza el rol del elector en este proceso de crecimiento de las expectativas, por su tendencia a desear todas las cosas valiosas a la vez en el terreno político y a atribuir una especie de omnipotencia a los gobernantes, a mi modo de ver el eslabón clave de esta cadena es el papel que cumplen los líderes, pues éstos son, al fin y al cabo, los que tienen mayor responsabilidad en sus manos. El ciudadano común y corriente —y éste es un hecho de la vida comprobable en todas las naciones democráticas— tiene un interés relativamente limitado y secundario en los asuntos políticos, en comparación con sus asuntos privados:

A medida que nos alejamos de las esferas privadas de la familia y el trabajo, y nos adentramos en campos de la política nacional e internacional que carecen de una conexión directa e inequívoca con esas esferas privadas, la voluntad individual, el conocimiento de los hechos y los métodos de inferencia de las personas rápidamente cesan de cumplir los requerimientos ideales de la teoría clásica de la democracia, [y los ciudadanos] comienzan gradualmente a perder el sentido de la realidad [...] El ciudadano típico se retrotrae a un nivel inferior de su capacidad mental tan pronto entra al terreno político; aquí es usual que argumente y analice de una manera que le sería fácil reconocer como casi infantil si la aplicase en la esfera de sus intereses privados.⁷

Estas son frases duras, que desafortunadamente contienen buena parte de verdad, tanto en relación con el caso venezolano como con otros.⁸ Sería superfluo, no obstante, sumarse al coro de lamentaciones por esta realidad de la vida democrática, o pretender que la participación llevará a la gente a prestar a la política la atención que los ideólogos y políticos pro-

Ibid., pp. 261-262.

Con respecto a la común superficialidad de las motivaciones que determinan la identificación partidista de los electores en Venezuela, véase el trabajo de Aristides Torres «¿Crisis o consolidación de los partidos en Venezuela?», *Argos*, 1, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1980, pp. 9-21.

fesionales necesariamente le conceden. Como con característica crudeza lo expresa Schumpeter:

El retrato publicitario de la más bella muchacha que jamás haya existido no podrá por sí solo y a largo plazo mantener las ventas de un cigarrillo de bajísima calidad. Pero este tipo de válvula de seguridad no existe en el campo de las decisiones políticas. Gran número de decisiones de enorme importancia son de tan compleja naturaleza que hacen imposible para el público que las reflexione y experimente con el tiempo, la serenidad y el conocimiento necesarios y a bajo costo. Aun si ello fuese posible, su veredicto no puede alcanzarse con la ligereza con la cual se elige un cigarrillo, pues los efectos de las decisiones políticas son mucho menos fáciles de interpretar.⁹

Si la realidad de las cosas responde básicamente a la descripción de Schumpeter, y creo que en lo fundamental su análisis es bastante acertado, ello sólo viene a reforzar la responsabilidad e importancia del liderazgo político en el proceso democrático. Desde luego, muchas veces los votantes adoptan una actitud cínica respecto a las promesas de los políticos, pero tal reacción no es la más característica, particularmente en democracias jóvenes como la venezolana. Al contrario, en nuestro país las exigencias y expectativas ciudadanas no hacen sino crecer, así como el deseo de castigar a gobiernos que, atrapados en la red de sus exageradas promesas, son sistemáticamente incapaces de satisfacer las ansiedades de los ciudadanos. A esto se añade el espejismo de la riqueza petrolera, que intensifica la generalizada convicción entre la gente de que existen recursos suficientes para lograrlo todo y a corto plazo. La única manera de romper este círculo vicioso de promesas, expectativas y frustraciones es a través de un ejercicio sensato y creíble del liderazgo político, basado en la verdad y capaz de despertar confianza en la ciudadanía sin recurrir a la demagogia. A pesar del pesimismo de Schumpeter, esto no es imposible pues hay que tener en cuenta que su modelo de funcionamiento de la democracia responde a un contexto económico de relativa abundancia y elevada estabilidad, pero ese modelo no se aplica de igual forma en otras condiciones. Dicho en otras palabras, el constante estímulo de las

9 | Schumpeter, p. 263.

expectativas ciudadanas puede no ser excesivamente riesgoso y dar resultados positivos para los partidos políticos en épocas de abundancia, pero en tiempos de crisis no es otra cosa que un mecanismo suicida que acelera el derrumbe de la democracia.

La validez de este punto se comprueba si recordamos que el propio Schumpeter indicaba que los votantes simplifican los problemas de escogencia, desviando su atención de los programas a las consecuencias de la acción de los gobiernos, y en la medida en que piensan en términos de políticas programáticas su apoyo o rechazo de las mismas tiene frecuentemente poca relación con su identificación partidista: «Un partido —escribe Schumpeter— es un grupo cuyos miembros se proponen actuar coordinadamente en la lucha competitiva por el poder político. Si esto no fuese así sería imposible que partidos diversos adoptasen exactamente o casi exactamente el mismo programa. Y sin embargo, como todo el mundo sabe, esto ocurre».¹⁰ Este es el fenómeno que Tullock ha denominado el «teorema del votante medio», y al que otros analistas se refieren cuando hablan de la lucha por el centro político: «... si los puntos de vista de la gente sobre un asunto en particular pueden ordenarse a lo largo de una línea de tal forma que haya mayor número de personas coincidiendo en el medio que en los extremos, los principales partidos políticos terminarían adoptando posiciones centristas sobre el asunto muy parecidas entre sí».¹¹ Tales políticas «de centro», según Tullock, son las que infligen «la menor insatisfacción a la sociedad como un todo»; pero el teorema tiene un serio defecto: su aplicación se limita casi exclusivamente a aquellos problemas que pueden ser presentados al electorado en forma simple y unidimensional, en términos de recibir o lograr más o menos de una determinada actividad o bien público. Es decir, que la competencia democrática puede reflejar eficazmente aquellos cambios en la opinión del electorado que tienen que ver, por ejemplo, con el monto del gasto en educación, salud, etc., pero su adecuación es menor para resolver la cuestión —a nivel básico— de si tales servicios deben o no ser prestados por el Estado o por el sector privado. Para dar otro ejemplo, usando un caso extremo con fines ilustrativos, la competencia democrática puede adecuadamente y sin mayores traumas asignar más recursos para la defensa nacional, pero es singularmente inapropiada para arrojar una deci-

Ibid., p. 283.

Gordon Tullock, *The Vote Motive*. London: Institute of Economic Affairs, 1976.

10

11

sión precisa y sensata sobre si un país debe o no ir a la guerra para recuperar un trozo de territorio en reclamación o sostener algún principio que los líderes nacionales hayan tradicionalmente considerado de vital interés nacional. Es por esta razón que Schumpeter insistía en que una de las condiciones para la supervivencia de la democracia es que el rango efectivo de las decisiones políticas que se tomen por este método *no se extienda demasiado*, pues ello acrecentaría la polémica y traería consigo mayor conflicto e inestabilidad.¹²

En suma, la democracia, en condiciones de estabilidad y abundancia tiende a convertir la lucha por el centro político en un fin en sí mismo, deteriorando así la posibilidad de que el liderazgo nacional afronte con firmeza asuntos básicos que no pueden presentarse al electorado en forma simplificada, y cuyo impacto crea polémica. De allí que con gran frecuencia los dirigentes democráticos reaccionen tarde ante las crisis, y pocas veces perciban a tiempo sus síntomas.

Para recapitular brevemente lo expuesto hasta ahora, he intentado mostrar que, de acuerdo con Schumpeter, el proceso democrático debe verse no tanto como un método de participación popular en el gobierno o un medio para implementar la voluntad general, sino como una lucha por el poder a través del voto llevada adelante por equipos competitivos de políticos profesionales. Si bien esta perspectiva de la democracia no encierra toda la verdad, es limitada y hasta podría considerarse cínica, apunta hacia un aspecto de gran importancia en la determinación de las debilidades intrínsecas a la competencia por los votos: la tendencia al aumento permanente de las expectativas ciudadanas. Las expectativas a las que me refiero no cubren la totalidad de las demandas que la gente hace en su vida individual, sino exclusivamente aquellas que se espera sean satisfechas en el mercado político a través de la acción del gobierno. Del análisis de Schumpeter puede inferirse que la dinámica inherente al proceso democrático acrecienta sistemáticamente este último tipo de expectativas —es decir, las del mercado político— hasta el punto de que los electores prácticamente esperan que el gobierno les resuelva la *mayor parte* de los problemas y afronte exitosamente el conjunto de retos nacionales; y todo ello es exigido por el electorado sin una consideración detallada de la complejidad de los asuntos, su relación con los recursos disponibles y los posibles costos de las alternativas existentes.

Como señalé antes, el aumento de las demandas y expectativas ciudadanas es en buena medida el producto de la irresponsabilidad de los políticos, al divulgar ofertas electorales y estimular esperanzas que en lugar de agudizar el sentido de la realidad en la gente lo erosionan. Es evidente que la democracia venezolana ha venido funcionando sobre este mecanismo. Cada ronda electoral renueva el largo catálogo de promesas por parte de los líderes políticos de los principales partidos, quienes nos aseguran que si tan sólo tenemos la inteligencia de elegirlos conducirán a la nación por senderos de bienestar y progreso incesantes. Por supuesto, las promesas sólo se cumplen en parte o de ninguna manera, pero para ganar elecciones —se piensa— es siempre necesario ocultar la realidad, y carece de sentido decir con claridad cuáles son los costos que se tendrían que pagar para alcanzar las cimas de satisfacción generalizada que se ofrecen en los torneos electorales. Ello sólo se conoce al final del período presidencial, cuando la explicación de los fracasos queda oscurecida por la esperanza de un cambio de gobierno.

El desgaste institucional y la pérdida de credibilidad a que nos conduce la mecánica de las promesas rotas y las expectativas falsas deberían ser obvios para todos los venezolanos, en particular para los dirigentes nacionales. En una situación de abundancia como la que vivió Venezuela durante dos décadas, alimentar el mecanismo de las promesas y expectativas artificiales era irresponsable pero no excesivamente peligroso. En las condiciones que han venido perfilándose en tiempos recientes, sin embargo, los riesgos de que la demagogia genere una grave crisis política son demasiado elevados. En otras naciones democráticas las instituciones del sistema pluralista tienen tal fortaleza que su sustitución se hace no sólo impracticable sino hasta inconcebible, pero no ocurre así en Venezuela. En nuestro país, la continua decepción de las expectativas creadas en cada período electoral está produciendo un perceptible y creciente deterioro en la credibilidad de un sistema que ha suscitado gran apoyo, pero que se ha mostrado incapaz de responder con eficiencia ante los desafíos históricos de una nación en desarrollo y con envidiables recursos. Y es que la credibilidad, particularmente en las circunstancias populistas imperantes en Venezuela, está en función de los recursos y no de la capacidad efectiva de los gobiernos. En países pobres y atrasados, de los que tenemos varios ejemplos en Latinoamérica, culpar a los dirigentes por los males sociales tiene a veces algo de injusto; simplemente las cosas sólo pueden mejorar de manera muy lenta, pues no existen los medios para hacerlo de otra forma. Pero en Venezuela sabemos que

hay grandes recursos naturales, y además por años nuestros dirigentes nos han dicho que el desarrollo puede comprarse a corto plazo. Por esto, el hecho de que los problemas tiendan a agravarse, de que nuestra economía sea cada día más ficticia, nuestra sociedad más desigual, nuestro aparato de gobierno más ineficiente, nuestra estructura de impartir justicia más corrupta y nuestras políticas públicas en general más incompetentes, está siendo paulatinamente atribuido por un número no menos apreciable, y en crecimiento, de venezolanos a un sistema que se mueve impulsado por promesas vacías, y no a la incapacidad pasajera de uno u otro partido político.

La credibilidad de la democracia venezolana, contrariamente a lo que piensan algunos bien intencionados ilusos, es frágil y altamente vulnerable. Esto es así porque las expectativas de la población son exageradas, pero las realizaciones dejan demasiado que desear. No obstante, el deterioro no es irreversible. Los principales partidos políticos cuentan aún con un significativo margen de apoyo que posibilita la revigorización del régimen democrático-representativo. Por desgracia las naciones usualmente aprenden por experiencia y alcanzan la sabiduría cuando ya es demasiado tarde para corregir los errores de sus líderes.¹³ De allí que la esencia de un liderazgo eficaz sea la habilidad de los dirigentes para percibir a tiempo los signos de descomposición, actuar «como si su intuición fuese ya experiencia y su aspiración la verdad»,¹⁴ y dar inicio a un proceso de rectificación.

En esa senda, el primer paso que debe darse en Venezuela es adoptar una imagen realista de la democracia, su potencial y sus limitaciones. Hay que evitar caer en el extremo de los que atribuyen a la democracia virtudes casi místicas, y un poder moralizador que más bien pertenece a la esfera de la religión y no de la política,¹⁵ así como también el extremo representado por Schumpeter, quien ve al «ciudadano típico» de la democracia como una especie de *zombie* que concede a la política un rango menor que los *hobbies*, y tan sólo la ve como el objeto de «conversaciones irresponsables».¹⁶ Esto es cierto en numerosos casos, especialmente en

13 Sobre este tema, puede verse mi libro *Líderes en guerra: Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle*. Madrid: Tecnos, 1979, recogido en el vol. III de estas *Obras selectas*.

14 Henry A. Kissinger, *A World Restored*. London: Gollancz, 1977, p. 329.

15 Puede consultarse, por ejemplo, la obra de C. B. Macpherson, *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. Oxford: Oxford University Press, 1973, pp. 3-76.

16 Schumpeter, p. 261.

períodos de estabilidad y abundancia, pero las percepciones de la gente cambian con rapidez en tiempos de crisis, y una de las virtudes de la adversidad de que hablaba Toynbee se deriva de que las dificultades sensibilizan políticamente a los ciudadanos y abren para los líderes la posibilidad de apelar al sentido de la realidad. La parte positiva del modelo schumpeteriano es ésta: la restauración a un lugar relevante de la función del liderazgo en un régimen de libertades. En Venezuela ese liderazgo debe ante todo ajustar las expectativas a la realidad, y ello implica como punto prioritario asumir una actitud realista sobre la democracia.

Pienso —como Popper— que el punto de partida de la democracia y de una sociedad abierta, es decir, libre, es la constatación de la falibilidad humana, o para expresarlo de otra forma el reconocimiento de que, como humanos, somos imperfectos y podemos equivocarnos. Aún nuestro conocimiento científico de la realidad no es más —ni menos— que la más cercana aproximación a la «verdad» existente en un momento dado, y no sólo no está exento de errores sino que existe siempre la posibilidad de que las teorías que hoy se consideran válidas sean mañana superadas por otras. Esta es la base de la libertad: la convicción de nuestra falibilidad y la voluntad de tolerar otros puntos de vista y aceptar que las otras personas busquen sin imposiciones sus propios fines de acuerdo con sus conocimientos y aspiraciones. La consecuencia de estos principios en el terreno político es enorme, pues el propósito de la ciencia política no debe ser en ningún momento sugerir que los seres humanos tenemos la habilidad y el conocimiento para organizar y dirigir el todo social de acuerdo con fines predeterminados y según nuestra voluntad, sino más bien mostrarnos las *limitaciones* de nuestro control, e indicarnos que somos partes de un todo muy complejo que ha evolucionado en términos que escapan a los caprichos de dominación de individuos particulares.

En el transcurso de la historia, y también en nuestro tiempo, numerosos pensadores y actores políticos han creído que la racionalidad, la lógica y la perspectiva científica indican que la sociedad, para funcionar en forma adecuada, debe someterse a un control centralizado y autoritario, y ser planificada como un todo. Tal opinión, además de conducir a la tiranía, descansa sobre una imagen completamente equivocada de la ciencia, pues la racionalidad, la lógica y la perspectiva científica más bien apuntan hacia una sociedad abierta y pluralista, donde puntos de vista opuestos e incompatibles puedan expresarse y los individuos puedan perseguir propósitos muy diversos. En esta sociedad las personas deben tener la

posibilidad de someter a crítica racional y constructiva las proposiciones de otros, muy particularmente las del gobierno, y en tal sociedad debe ser posible cambiar las políticas gubernamentales y los gobiernos a la luz de la crítica y sin violencia, a través de elecciones celebradas regularmente.¹⁷

La diferencia fundamental entre la democracia y la tiranía se encuentra entonces en el hecho de que la democracia, al contrario de la tiranía, permite sustituir a los gobiernos sin el uso de la violencia. Además, una sociedad democrática hace posible que los conflictos se resuelvan a través de los argumentos racionales y la persuasión, en lugar de la coacción y la fuerza. Desde luego, puede decirse —como hace Schumpeter— que en la práctica la argumentación racional juega un papel de poca importancia en la política democrática, pero el punto que debe enfatizarse es que, al menos, una sociedad abierta permite que la racionalidad, el sentido crítico y la persuasión cumplan el rol que les asigna una concepción humanista y no represiva de la política, aunque no puede garantizar que tal función se realice a plenitud y con resultados siempre óptimos. Aparte de esto, indica Popper, la democracia como tal no puede conferir otros beneficios a los ciudadanos ni debe esperarse que lo haga. De hecho la democracia no puede hacer nada, sólo los ciudadanos de la sociedad democrática pueden actuar (incluyendo, por supuesto, aquellos ciudadanos que componen el gobierno). La democracia sólo proporciona el marco institucional dentro del cual los ciudadanos pueden actuar de manera, en mayor o menor grado, coherente y organizada.¹⁸ La idea democrática exige distinguir entre los aspectos *personales* e *institucionales* de una situación social. Numerosos críticos de la democracia se muestran insatisfechos al comprobar que muchas veces las instituciones democráticas no garantizan el logro de determinados fines positivos para el país. Pero estas críticas no siempre están bien enfocadas en relación con la verdadera naturaleza de los problemas, y revelan una comprensión inadecuada de lo que puede esperarse de las instituciones democráticas y de la alternativa a las mismas. La democracia proporciona el marco para el cambio gradual de la sociedad; hace factible su reforma sin el uso de la violencia y por ello posibilita el uso de la razón en el diseño de nuevas instituciones y el ajuste o reacomodo de las viejas: La democracia, sin embargo, no puede por sí sola proveer esa razón.

17 Bryan Magee, *Popper*. London: Fontana, 1973, pp. 77-78.

18 Popper, *Conjectures and Refutations*, pp. 250-251.

El problema del carácter moral e intelectual de sus ciudadanos es en gran parte un problema personal [...] Es un error culpar a la democracia por los fracasos políticos de un determinado Estado democrático; en todo caso habría que culpar a los ciudadanos del Estado en cuestión. En un Estado no democrático, la única vía de obtener reformas razonables es a través del derrocamiento violento del gobierno y la posterior introducción de un marco democrático. Aquellos que critican la democracia en términos éticos casi nunca distinguen entre problemas institucionales y personales. Las instituciones democráticas no pueden mejorarse por sí mismas; el propósito de mejorarlas es siempre un problema de las personas y no de las instituciones.¹⁹

Es por todo lo anterior que Popper sostiene que las instituciones son como fortalezas: deben estar bien diseñadas de inicio, pero también bien mantenidas. La fortaleza democrática ha sido diseñada para evitar la tiranía y sustituir, sin violencia, a los gobiernos, y los defensores de esa fortaleza somos los ciudadanos del Estado democrático. En teoría, el sistema democrático permite que la crítica constructiva conduzca eventualmente a la reforma y al mejoramiento de las instituciones; en la práctica, no obstante, ese proceso requiere de un liderazgo creador que actúe con claridad y sin demagogia, y que despierte confianza fundada en el sentido de la realidad de los ciudadanos. El problema del carácter moral y las virtudes cívicas de los ciudadanos no se resuelve —como han sostenido los diversos partidarios del gendarme necesario en nuestro medio—²⁰ a través de un ejercicio despótico del poder que eduque a la gente para la democracia. Como acertadamente señalaba Kant, el ejercicio de la libertad sólo se aprende en libertad; los hombres sólo llegan a ser libres si un marco institucional apropiado se los permite, o para decirlo en otros términos, las virtudes que hacen a los hombres aptos para la libertad no pueden adquirirse excepto en libertad.²¹ Si esto es así —y estoy convencido de

Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies*, vol. 1. London: Routledge & Kegan Paul, 1969, pp. 126-127.

Para un resumen de las ideas sobre «despotismo ilustrado» en Venezuela, véase el trabajo de Clara M. Rojas, «El positivismo de Laureano Vallenilla y la tesis del Gendarme Necesario» en *Argos*, 2, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1981, pp. 39-53.

Immanuel Kant, *Kant's Political Writings*. London: Cambridge University Press, 1970.

19

20

21

que lo es— resulta obvio que el populismo, que se basa en la constante erosión del sentido de la realidad y de la ética de responsabilidad personal de los ciudadanos, destruye en lugar de enaltecer las virtudes cívicas y condena a las instituciones democráticas a un deterioro sistemático. De allí que, insisto, el desafío prioritario que se le plantea a la democracia venezolana tiene que ver con las actitudes y la visión política del liderazgo nacional, su voluntad de presentar a la ciudadanía una versión realista del país que tenemos y de las dificultades y exigencias que implica para Venezuela emprender un camino de desarrollo no rentista.

Fue el célebre teólogo norteamericano Reinhold Niebuhr quien produjo una de las más adecuadas definiciones de lo que es la democracia. «Es un método —dijo— para encontrar soluciones aproximadas a problemas insolubles». Esta concepción tiene dos ventajas: por un lado indica que los problemas de la política jamás concluyen sino que evolucionan y se transforman. De esta manera, Niebuhr logra cuestionar las visiones utópicas de los que pretenden construir un paraíso en la tierra, y que usualmente abren las puertas a la tiranía. Por otra parte, sin embargo, esta noción de la democracia enfatiza que la resignación jamás debe convertirse en principio político. Al contrario, a pesar de que la perfección sea inalcanzable, ello no debe conducir a la pasiva aceptación de las cosas como son, sino a un esfuerzo permanente de mejoramiento. Lo positivo de la democracia es que permite que este esfuerzo se lleve a cabo sin aplastar la libertad.²²

Una vez así entendida la esencia de la democracia, se comprende mejor por qué resulta difícil mantenerla. Si para el individuo es comúnmente complicado lograr un equilibrio entre un sano escepticismo y una justificada esperanza ante la vida, para un sistema político libre es aún más arduo preservar la confianza de la gente en medio de las dificultades. Esta confianza no se puede mantener por mucho tiempo a través de la demagogia y la propaganda. La libertad no puede a largo plazo sostenerse en el engaño sino en la convicción. Por esto lo que en última instancia determina la preservación de la democracia es la credibilidad del sistema en los corazones y las mentes de la población, la confianza en que, a pesar de todos los problemas, la nación avanza, hay un futuro y existen perspectivas concretas de un mañana mejor.

22

Pueden consultarse las siguientes obras de Niebuhr: *Moral Man and Immoral Society*. New York: Charles Scribner's Sons, 1937, y *The Irony of American History*. New York: Charles Scribner's Sons, 1952.

Lo que realmente preocupa de la actual situación venezolana es la sensación generalizada, que aún no encuentra una expresión política definida, de que vamos de mal en peor, de que estamos fracasando, de que no merece la pena cifrarse esperanzas en el futuro, y de que todos nuestros partidos y líderes políticos son igualmente ineficientes y corruptos. El escepticismo se ha apoderado de Venezuela; vivimos una época de gran desconfianza colectiva, un tiempo de desgaste de las ideas y de los hombres que han conducido nuestra democracia hasta el presente. El terreno está abonado para la innovación, y ésta, de alguna manera y en libertad, debe producirse antes de que sea tarde.

Lo que Venezuela requiere no es una revolución que trastoque el sistema, sino un proceso de rectificación y de reformas firmes y decididas, guiadas por una concepción distinta de la política democrática. Como con acierto señala Popper, las revoluciones lo que hacen es sustituir los vicios del pasado por otros, ¿y quién garantiza que los nuevos vicios sean mejores? Nos dice:

La teoría de la revolución pierde de vista el aspecto más importante de la vida social: que lo que requerimos no es tanto hombres buenos como buenas instituciones. El poder puede corromper aun al mejor de los hombres; pero instituciones que hacen posible que los gobernados ejerzan alguna forma de control efectivo sobre los que les gobiernan pueden llevar a los malos gobernantes a realizar lo que los gobernados consideren de su mejor interés. O, dicho de otra manera, quisiéramos tener buenos gobernantes, pero la experiencia histórica nos muestra que es poco probable que los obtengamos, de allí la importancia de diseñar instituciones que impidan aun a los malos gobernantes causar demasiado daño.²³

Este, a mi modo de ver, es un pensamiento de gran importancia en todo intento de evaluar acertadamente las limitaciones de la política y de la democracia; no obstante, tiene el defecto de atribuir a los líderes políticos una casi innata propensión al error y la demagogia. Lo que Popper olvida —y que Schumpeter lúcidamente reveló— es que las propias instituciones de la competencia democrática pueden en ciertas condiciones dar

origen a un proceso de desgobierno y distorsión de las expectativas ciudadanas, si no existe una visión realista y responsable de la política que las controle. Popper habla de la importancia de una actitud racional que sirva de guía a la acción política, es decir, una actitud que conceda especial valor a la argumentación y la experiencia como principios de acción, y que rechace el dogmatismo y la demagogia.²⁴ Esto es básicamente lo que se requiere de un liderazgo democrático que crea verdaderamente en la libertad. Si bien no debemos depositar toda nuestra confianza en la suerte de tener buenos gobernantes, tampoco es razonable suponer que la política se reduce a la demagogia. De aquí se deriva mi convicción de que en Venezuela es posible actuar en política de acuerdo con una perspectiva distinta, no populista, de la democracia, enarbolada por un nuevo liderazgo. La tarea de los próximos capítulos será esbozar algunos de los principios teóricos y rasgos prácticos que a mi modo de ver deben caracterizar esa concepción alternativa de la democracia.

Libertad, orden, justicia

Me he propuesto trazar en sus rasgos esenciales el perfil de una democracia posible para Venezuela. No obstante, no asumo esta tarea con el espíritu de construir un modelo utópico, en el sentido popperiano del término, hacia el cual forzar el destino histórico del país, sin importar los costos y consecuencias. Como con acierto apuntaba Popper, la búsqueda de utopías en política usualmente desemboca en la tiranía, pues el deseo de perfección es la raíz del mesianismo, y éste, a su vez, siempre genera intolerancia y violencia.²⁵ Al contrario, mi visión de la democracia se basa en una idea de la política que si bien de ninguna manera rechaza la voluntad de cambio y superación en función de ciertos ideales, al mismo tiempo acepta el sano escepticismo y la sabia modestia del verdadero liberalismo, plasmados en las obras de pensadores como Hayek, Popper y Bauer en nuestro tiempo, y previamente, entre otros, Hume y

24 *Ibid.*

25 Popper, *Conjectures and Refutations*, pp. 356-362.

Kant. Según la excelente descripción de un autor venezolano, esta línea de pensamiento político:

... se fundamenta en una bien reflexionada desconfianza en la ilusión de que los seres humanos son por naturaleza únicamente buenos y sensatos, y en la observación de que el poder ejercido sin freno ni restricción rápidamente torna en monstruos hasta a los hombres mejor intencionados. De allí el rechazo liberal a las fórmulas de ordenación social que o bien estimulen la demagogia populista, o bien tiendan a depositar en un hombre o una oligarquía (por ejemplo un partido único) un poder de coerción mayor al mínimo indispensable. Es decir que, en contraste con las religiones y las utopías, el liberalismo ni promete salvación ni ofrece la realización del bien absoluto en este mundo. No cree en una mutación histórica mediante la cual queden resueltos de una vez por todas los conflictos de individuos y grupos entre sí y con el Estado, pero sí en la posibilidad de un constante examen y una permanente conciliación de esos conflictos, a la luz de la experiencia y la razón, con respeto a la tradición y a la costumbre, y bajo el imperio de un cuerpo de leyes lo menos complicado posible. Esas leyes deben ser de factible cumplimiento, para que sean normalmente acatadas con un mínimo de coerción. Deben estipular la separación de los poderes públicos y en general propiciar la alternabilidad y la dispersión del poder. Y deben establecer derechos básicos y garantías inviolables, que minimicen la probabilidad de abuso de poder por el Estado o por otras potestades contra los ciudadanos.²⁶

Esta concepción de la política responde al ideal de una sociedad abierta, plural y libre, que permita el cambio y las reformas a través de la experiencia y la crítica, pero que no sucumba a la tentación profética de transformarlo todo a la vez y en forma revolucionaria, trastocando así la posibilidad de un mejoramiento gradual con base en la experiencia, el argumento racional y la persuasión. En este tipo de sociedad se buscaría eliminar males concretos en lugar de realizar bienes abstractos, y no se trataría de lograr la felicidad por medios políticos, sino de afrontar problemas concretos con medios directos. He aquí la diferencia clave entre

las utopías y los ideales sensatos en política: las primeras procuran materializar sus propósitos indirectamente, creando un paraíso que sea totalmente bueno y perfecto, de acuerdo con el argumento de que si no cambia todo nada puede cambiar. Los segundos, al contrario, se dirigen a establecer un contexto de libertad y tolerancia donde el mesianismo, la demagogia y el dogma revolucionario cedan su espacio a la razón. No se trata entonces de aceptar de manera literal el excesivamente pesimista consejo de Max Weber, según el cual los soñadores de la paz y la felicidad deben leer la inscripción grabada sobre la puerta que se abre hacia el futuro de la humanidad: «Abandonen toda esperanza»,²⁷ sino de admitir que no somos omnipotentes, que existen límites a lo que puede lograrse en política, y que la búsqueda de un equilibrio entre el poder y los principios éticos requiere de una lucha perenne, pues sus reconciliaciones son siempre pasajeras.

Lo anterior puede aclararse si pensamos que existen dos imágenes fundamentales de la política: por un lado, la idea de la política como conflicto y lucha, como una pugna entre intereses, partidos e ideologías en función de un poder siempre discutido. De otro lado se presenta la imagen de la política centrada en el compromiso, la convivencia entre fuerzas opuestas, la estabilidad y la paz; es decir, la política entendida como creación de un orden de convivencia en función de determinados valores de libertad y justicia que dan sentido a la existencia ciudadana.²⁸ De acuerdo con tal perspectiva la política debe ser vista como un compuesto de *lucha* dentro de una realidad conflictiva y de *visión ordenadora* de esa realidad. La lucha política no consiste sólo en pronosticar dificultades, enfrentar obstáculos y conquistar el poder para ejercerlo como un fin en sí mismo. Esta imagen no agota la realidad de la política, que debe incluir también un universo de fines y valores que son los que dan sentido a la acción y los que pueden rescatar de las confrontaciones humanas un elemento de creatividad. Como argumento con detalles en otra parte,²⁹ tal perspectiva sobre la política se encuentra en la médula misma del pensamiento de Simón Bolívar, y a mi modo de ver tiene obvia relevancia para los venezolanos de hoy. El Libertador intentaba reconciliar la libertad, entendida como ejercicio de derechos y limitación de la autoridad, con el orden, concebido como aceptación de deberes y limitacio-

27 Citado por David Beetham, *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. London: Methuen, 1974, p. 42.

28 Manuel García-Pelayo, *Idea de la política*. Caracas: Universidad Central de Venezuela (Cuadernos del Instituto de Estudios Políticos, 13), 1968, pp. 4-5.

29 Véase mi libro *La idea de la política en el pensamiento de Simón Bolívar*. Caracas: Ateneo de Caracas, 1985.

nes para una existencia colectiva bajo el imperio de leyes comunes para todos; de allí que repetidamente enfatizase que sus ideas políticas perseguían «la estabilidad unida a la libertad y conservación de los principios que hemos adoptado». ³⁰

Desde este punto de vista, el realismo político, que con frecuencia ha sido usado como excusa para el sacrificio y abandono de los ideales, debe más bien concebirse como el fundamento de una actitud racional que acepte los límites y el carácter imperfecto de la acción humana, pero que a la vez asuma la política como un área *perfectible* de la existencia, sujeta al flujo constante de intereses en pugna. Así, realismo político significa rechazo al dogmatismo y a las soluciones radicales, y búsqueda, en lo posible, de la conciliación y el equilibrio. Esta es otra lección del pensamiento y la acción práctica de Bolívar, quien obraba —en términos de Weber— según los dictados de una «ética de la responsabilidad», es decir, de una ética que ordena «tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción», ³¹ convencido como lo estaba de que tenía que moverse en un territorio de realidades, no en un universo de buenos deseos, para conquistar, dentro de sus límites, orden y libertad a la vez.

La libertad, entonces, no puede existir sin un marco institucional estable, que al mismo tiempo le abra espacio de expansión y le indique límites a su ejercicio. En política (y, como argumentaré más tarde, en economía) la libertad irrestricta o absoluta no sólo es autodestructiva, sino que forzosamente produce lo opuesto, pues si todos los límites se remueven nada detendría al poderoso si éste decidiese oprimir al más débil. La paradoja de la libertad es que no puede existir como principio de coexistencia y valor político sino dentro de un contexto de leyes, normas y tradiciones que la limiten y le den un sentido creador. Tampoco la tolerancia puede ser absoluta, pues es absurdo tolerar al intolerante. En palabras de Popper, «no hay libertad que no esté asegurada por el Estado; por otra parte, sólo un Estado que esté controlado por ciudadanos libres puede ofrecerles verdadera seguridad». ³² Por ello hay que tener claro que la libertad ciudadana y la democracia, aunque compatibles, no son lo mismo, pues si un sistema democrático otorga poderes ilimitados a la mayoría el resultado sería la opresión totalitaria de los demás, y por lo tanto el fin de la libertad. En consecuencia, los resultados electorales

Simón Bolívar, *Obras completas*, tomo I. La Habana: Lex, 1947, p. 1272.
Max Weber, *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1975, p. 164.
Popper, *The Open Society and Its Enemies*, vol. 1, p. 111.

30
31
32

no deben interpretarse en ninguna circunstancia como una certificación autoritaria a favor del partido victorioso y sus programas, pues ello implicaría el riesgo de que ese partido adoptase medidas exclusivistas para beneficiar a los sectores que lo apoyan o tratase de imponer por la fuerza sus preferencias al resto de la sociedad. La noción liberal de la democracia exige que el gobierno actúe de acuerdo con principios generales y no para beneficio exclusivo de un grupo o sector en particular. Por lo tanto, una sociedad libre no es aquella que carece de leyes o reglas o poderes gubernamentales, sino aquella en la cual el gobierno mismo está limitado por leyes que se encuentran por encima de su potestad. Si bien la institución de la voluntad mayoritaria en lo que respecta a un país es altamente laudable, no hay que perder de vista que debe ser controlada para que no degenera en tiranía. En síntesis, en una sociedad democrática y libre las funciones coercitivas del gobierno deben limitarse a hacer cumplir leyes y normas de comportamiento justo entre los ciudadanos.

Como lo plantea Hayek, el concepto central de la perspectiva liberal sobre la sociedad sostiene que bajo un marco de leyes y reglas generales que protejan una reconocible esfera privada para la actividad de los individuos, se desarrollará un «orden espontáneo» de actividades humanas mucho más complejo y dinámico del que podría crearse *deliberadamente*, y en consecuencia la acción coactiva del gobierno debe concentrarse en hacer cumplir esas reglas, sin perjuicio de otros servicios que pueda al mismo tiempo realizar con los recursos que hayan sido puestos a su disposición para tales propósitos.³³ Este tipo de orden espontáneo, como por ejemplo el mercado económico, puede ser usado para muy diversos fines individuales, a veces divergentes y hasta conflictivos. En contraste con lo que Hayek denomina una organización (por ejemplo, los partidos políticos o la institución militar), que es creada *deliberadamente*, con jerarquías y fines prefijados, un orden espontáneo no requiere sustentarse en un acuerdo acerca de los resultados concretos que debe producir; no obstante, tal tipo de orden, que no descansa en objetivos comunes sino en la noción de *reciprocidad*, es capaz de reconciliar los distintos fines de los participantes para su beneficio mutuo. La importancia de este tipo de orden y de la libertad que proporciona reside en el hecho de que —como ocurre en la economía de mercado y al contrario de las economías

centralizadas—, extiende la posibilidad de la coexistencia pacífica de los individuos para su mutuo beneficio mucho más allá de los pequeños grupos cuyos miembros tienen propósitos comunes concretos, o están sujetos a una voluntad superior que les dirige. La idea de una *sociedad abierta* y libre es inconcebible sin la existencia de estos órdenes espontáneos en economía y en política, donde funciona como la base de la libertad de crítica. Esta noción de la vida social se opone radicalmente a la perspectiva socialista que presume que la sociedad puede y debe organizarse deliberadamente; tal visión de las cosas imagina la sociedad como una suerte de individuo capaz de distribuir y asignar equitativamente, de acuerdo con criterios arbitrarios, lo que corresponde a cada cual. Pero una sociedad libre no debe ser concebida como una especie de individuo, sino que se trata de un sistema complejo y no planificado de innumerables valores, preferencias y acciones, capaz de reconciliar, si sus reglas se mantienen, los propósitos de sus integrantes. De hecho, muchos de los beneficios que obtenemos de esta compleja estructura se derivan precisamente de su carácter espontáneo y de la multiplicidad de fines que en ella interactúan, y no se dan como resultado de la *intención* específica que alguien pueda tener de proporcionarnos tales beneficios.

Sólo si se tiene claro que una sociedad libre existe en la medida en que dentro de ella se preserven estos órdenes espontáneos que son, desde luego, producto de la acción humana pero no del diseño de una mente o un organismo todopoderosos con la capacidad de centralizar, controlar y dirigir los valores, preferencias, energías y propósitos de los miembros del todo social; sólo, repito, si este punto se tiene claro, es posible comprender adecuadamente el significado de la idea de justicia y su relación con la libertad. En efecto, en una sociedad libre la noción de justicia encuentra su sentido cuando se aplica a la conducta humana, al comportamiento concreto de los individuos dentro de un marco de reglas generales donde la *escogencia* sea posible. Si una persona contrae cierta enfermedad, o sufre la pérdida de un ser querido, o nace con un defecto físico, tales situaciones pueden obviamente calificarse de desafortunadas, pero carecerá de sentido llamarlas injustas.³⁴ Estos son hechos de la naturaleza que nada tienen que ver con acciones justas o injustas. La justicia es un concepto moral y sólo los seres humanos y sus acciones pueden calificarse de morales o inmorales, justas o injustas. Existe, sin

embargo, una segunda idea de justicia, que no se refiere a las reglas de conducta entre la gente sino a la *distribución de bienes materiales* en la sociedad. Esta noción de justicia, que persigue lograr ciertos resultados específicos para ciertos individuos o grupos sociales en particular, sólo tiene sentido en el contexto de organizaciones centralmente dirigidas y con propósitos fijos y claramente delimitados, como las economías colectivistas, pero no dentro del marco de una sociedad libre, que es un orden espontáneo. En un sistema de mercado competitivo la posición relativa de los individuos no es el resultado de un designio deliberado de fuerzas identificables y manejables por una autoridad central, sino de un proceso sobre el cual nadie tiene absoluto control. Por ello es un error hablar de injusticia para referirse a los efectos de una sociedad libre, en la medida en que nadie haya *actuado* injustamente dentro de ella, violando sus reglas generales. De igual forma, los conceptos de remuneración justa o distribución justa sólo tienen verdadero sentido en una organización cuyos miembros actúen según una dirección centralizada y al servicio de un sistema común de fines, pero carecen de significado en un orden espontáneo que no tenga esos fines perfectamente jerarquizados y aplicables por igual a todos los individuos.

No cabe duda, no obstante, de que la idea de justicia social tiene un poderoso contenido intuitivo, que se deriva de una legítima preocupación por las desigualdades que inevitablemente se generan en toda sociedad libre (y, también y más rígidamente, en las sociedades totalitarias, pero por diversas razones). Esto ha traído como consecuencia una enorme confusión conceptual, de peligrosas connotaciones para la supervivencia de la libertad y la democracia. El problema surge de la incapacidad de buen número de honestos analistas para distinguir entre, por un lado, una sincera inquietud ética ante las desigualdades sociales y el infortunio de los débiles y los menos favorecidos, y de otro lado el análisis y comprensión desapasionados de la naturaleza de una sociedad libre, sus características y efectos, y de los correctivos que pueden implementarse —sin destruir su esencia— para superar las dificultades que su dinámica propia produce. A esta confusión intelectual se suma el uso que en muchas ocasiones hace la demagogia populista del igualitarismo como arma política, para manipular resentimientos y enardecer emociones con fines de poder. De hecho, ya es casi imposible para los políticos democráticos abstenerse de emplear el término «justicia social» en sus pronunciamientos públicos, y en el caso de los partidos con ideologías más

marcadamente colectivistas y hostiles a la economía de mercado, la promesa de una mayor justicia social ha sustituido los sueños iniciales de abundancia para todos a través de la planificación. No obstante, el hecho de que un concepto confuso sea ampliamente aceptado no acrecienta de ningún modo su validez, sino que simplemente añade otra muestra al grueso catálogo de los mitos políticos contemporáneos.

Sería absurdo negar que en una sociedad de hombres libres existan desigualdades, pues la diversidad de conocimientos, habilidades, aspiraciones y suertes individuales, dentro de un proceso que nadie en particular puede determinar o predecir, genera necesariamente resultados distintos en cada caso en particular. Sin embargo, como escribe Dubuc Picón:

... esto es justamente lo admirable, ya que la particularidad individual, bien sea ésta producto de dones innatos o adquiridos, es la fuente misma de donde emergen los innovadores cuyos logros personales ofrecen posibilidades de beneficio y abren caminos de progreso a todos los miembros de la sociedad. En cambio, la propuesta de la igualdad es una alternativa irreal, y el intento de alcanzarla por la fuerza no sólo ahoga la posibilidad de desarrollo de las energías y capacidades personales, *sino que establece una desigualdad a favor de quienes ejercen dicha fuerza*. Las peores tiranías que ha conocido la historia de la humanidad han sido, precisamente, el resultado de la quimera de perseguir la igualdad [itálicas AR].³⁵

Debo enfatizar que el autor se refiere aquí al mito de la igualdad *de condición* personal e ingresos económicos en una sociedad libre, y no a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en torno a cuyo valor e importancia, por supuesto, coincidimos todos los que creemos en la libertad y la dignidad humanas. En este último sentido la idea de igualdad ha cumplido un extraordinario papel en la historia como fuerza liberadora, y ha hecho posible fortalecer el respeto que como seres humanos merecen todos los hombres y mujeres así como el deber ético de una sociedad libre hacia sus miembros menos favorecidos. Mas este concepto de igualdad debe diferenciarse nítidamente del igualitarismo demagógico que con

frecuencia enarbolan los que hablan superficialmente de justicia social, como una condición de igualdad de ingresos entre los miembros de una sociedad libre; asimismo, la idea de igualdad ante la ley debe distinguirse del también muy ambiguo concepto de igualdad de oportunidades.³⁶

En una sociedad libre, donde *por definición* las posibilidades de superación están en líneas generales abiertas crecientemente a sus miembros, la noción de igualdad de oportunidades es obviamente incompatible con la posibilidad de que se genere una sustancial igualdad de ingresos entre sus diversos integrantes. Esto es así, como señala Bauer, porque los individuos y grupos difieren notoriamente en cuanto a sus aptitudes y motivaciones personales en todos los ámbitos, entre ellos el económico. Una sociedad libre puede de hecho, debido a su capacidad de generar mayor riqueza que cualquier otro sistema, reducir las desigualdades económicas y sociales más eficazmente que las sociedades cerradas, totalitarias o de castas, pero es inevitable que las diferencias entre individuos y grupos persistan.

Sólo la creencia de que las motivaciones y aptitudes de todo el mundo son las mismas —una creencia que puede tener graves consecuencias para la libertad— sostiene la noción de que una sociedad abierta es prácticamente sinónimo de igualdad económica [...] [tal creencia] se deriva de la doctrina de la igualdad natural de hombre. De acuerdo con esta idea, todos somos iguales excepto por diferencias en riqueza y educación [...] y sólo las diferencias económicas entre la gente tienen verdadera relevancia. Al mismo tiempo se asume que estas diferencias pueden ser removidas sin cambiar el comportamiento de la gente y sin afectar significativamente su desempeño económico. La creencia en que la persistencia de desigualdades económicas en las sociedades abiertas es algo anormal o accidental termina usualmente conduciendo a la adopción de medidas impositivas y de coacción que, de hecho, van en contra de la igualdad ante la ley o del mantenimiento de la igualdad de oportunidades.

Esto ocurre así, pues, incluso en condiciones de alta movilidad social y creciente igualación de oportunidades de acceso a la educación y a la

competencia y progreso económicos en una sociedad abierta, aun –repto– en tales condiciones, continúan existiendo diferencias que provienen del talento, las aptitudes y la buena o mala fortuna de las personas; pero esto, sin embargo, no siempre es aceptado en tales términos y siempre habrá gente que niegue que los logros de otros reflejan una mayor contribución a la sociedad o son el producto del mérito, la disciplina, la voluntad y la creatividad individual. A consecuencia de estos prejuicios, alentados por la demagogia populista, los mecanismos de mercado son constantemente denigrados en nuestro medio, y han sido severamente desmantelados también en otras naciones, erosionando aún más los fundamentos de una sociedad abierta y erigiendo paulatinamente en su lugar las estructuras del colectivismo negador de la libertad.

Desde luego, como ya he sostenido en estas páginas, la destrucción del sistema de mercado a través de la estatización de la economía y la adopción por parte del gobierno de un cada vez mayor intervencionismo redistributivo, cierra el espacio de la libertad y condena a la sociedad al estancamiento. Y es que, como con su acostumbrada claridad indica Hayek:

No existe un tercer principio de organización económica –capaz de ser racionalmente escogido para lograr ciertos fines– que sea distinto, por una parte, al principio del mercado competitivo en el cual nadie puede determinar conclusivamente los resultados para diversos grupos o individuos, o, por otra parte, al principio de dirección centralizada donde el grupo que detenta el poder político determina los resultados del proceso económico.³⁷

Esto último genera la politización de la vida económica, uno de los peores males que aqueja a gran número de países del así llamado Tercer Mundo, y contra el cual las democracias avanzadas –Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Federal, Italia, los países escandinavos, y aun Francia bajo la actual administración socialista– han estado luchando tenazmente en años recientes, con éxito variable, en un intento de restituir el oxígeno de la competitividad y la innovación a economías que poco a poco se habían venido asfixiando bajo el peso de los mitos socializantes de nuestro tiempo. La búsqueda infructuosa de la igualdad eco-

nómica por medio del estatismo y el colectivismo, sólo cambia la prometedida reducción de las diferencias de ingreso y riqueza en la sociedad por una desigualdad mucho mayor de poder entre los que gobiernan y los gobernados; esta es la contradicción básica del «igualitarismo» en una sociedad abierta y libre.³⁸

Una vez que un gobierno asume la tarea de intervenir masivamente en la economía con fines redistributivos y de acuerdo con algún criterio, necesariamente arbitrario, de justicia social, pronto se encuentra enfrentado a múltiples demandas y peticiones conflictivas de muy diversos individuos y grupos, todos los cuales argumentarán que su aporte particular merece una mayor recompensa de la que ya tiene. En vista de la inexistencia de reglas acerca de lo que cada cual debe recibir, las decisiones del gobierno serán arbitrarias e impredecibles, y

... ya que los objetivos iniciales de redistribución de ingresos son abstractos y confusos, el gobierno creará reglas que son también confusas, satisfaciendo tal vez las aspiraciones de algunos sectores, pero al mismo tiempo obstaculizando el funcionamiento del sistema de mercado. La ausencia de reglas claras y generales para la acción del gobierno conduce a su vez a la erosión en la mente de los ciudadanos del respeto por las reglas existentes [...] Los ingresos, como resultado, terminarán siendo asignados no con base en el valor efectivo de lo que las industrias y abastecedores aportan a los consumidores, sino en relación con el poder y la habilidad de diferentes grupos para convencer al gobierno de que «merece» tratamiento preferencial. Ello a su vez puede no estar fundamentado en factores que puedan ser calificados como verdaderamente meritorios, sino tan sólo en la *influencia política* del grupo o individuo en cuestión, y en las repercusiones negativas para el gobierno si éste rechaza tales demandas y no acepta apaciguar a determinado sector o persona en particular [itálicas AR].³⁹

Ejemplos ilustrativos de tal tipo de situación sobran en Venezuela.

Mas la versión populista del igualitarismo no se detiene en el ámbito nacional, sino que se extiende al plano internacional, creando la oscura,

38 Bauer, p. 8.

39 Butler, pp. 95-96.

endeble, confusa pero extremadamente extendida ideología tercermundista, que a su vez sostiene las propuestas de un Nuevo Orden Económico Internacional. Basta señalar que, dadas las enormes diferencias entre los distintos pueblos del globo en cuanto a sus motivaciones, actitudes, aptitudes, tradiciones, creencias, objetivos y maneras de organizarse políticamente, el propósito de igualar sus estándares de vida a través de una acción internacional basada en la imposición de un centro dirigente y no en los mecanismos de mercado y el comercio exigiría —para ser de verdad eficaz— un gobierno mundial con poderes prácticamente totalitarios, el cual, en vista de los cada vez más ambiciosos programas de los profetas del nuevo orden, sería aún más opresivo que los gobiernos ya existentes en numerosas naciones del Tercer Mundo.

En relación con este tema, así como en lo que respecta a la justicia social en el ámbito interno, buen número de políticos y comentaristas tienden no sólo a confundir la realidad con la retórica, sino también a mezclar la inquietud moral, a veces de origen religioso, ante los problemas que afectan las vidas de muchos de nuestros semejantes con el análisis racional de la política y la economía. Mi punto no es que ética y política sean incompatibles; al contrario, he venido hasta ahora argumentando que la política sólo encuentra sentido si se asume en función de un conjunto de valores más allá de la lucha por el poder. Mi punto, más bien, es que no es razonable ni sensato admitir que la preocupación moral es una excusa para la imprecisión conceptual, o que los sueños utópicos deben prevalecer sobre los argumentos y la discusión racional acerca de los factores que hacen posible una sociedad de hombres libres. Debo acá insistir en que una sociedad libre y democrática no es el preludio a un paraíso en la tierra, sino simplemente la opción menos dañina y más esperanzadora que pueden escoger seres racionales, que prefieren la persuasión a la violencia y que no creen que los hombres somos dioses, para organizar su existencia en común. Siempre habrá una tensión entre los valores morales y las exigencias prácticas de la política; no obstante, lo que he querido dejar claro aquí es que en ocasiones líderes políticos e intelectuales de intachable vocación democrática se dejan llevar por un estilo analítico discursivo y poco riguroso, que con facilidad puede desembocar en el lenguaje del populismo.

Tomemos por ejemplo estos textos escritos por un venezolano de particular relevancia política, como lo es Rafael Caldera, quien nos dice:

Hay una justicia social: es la que impone al más fuerte el mayor deber frente al más débil; es la que impone cargas que no se pesan en la balanza de las componendas ni en la igualdad matemática de la justicia conmutativa [...] Hay una justicia social que establece desigualdad de deberes para restablecer la igualdad fundamental de los hombres [...] La miseria y el hambre existían antes, pero quienes las sufrían ni siquiera tenían oportunidad de darse cuenta. *El argumento de que todos somos iguales y tenemos derechos iguales* ya no suena a mentirosa fantasía, sino a verdad que profundamente se enraíza en los pueblos [...] Es la hora del cristianismo. Del cristianismo envuelto en los principios. La idea de la justicia social internacional coloca la aspiración al bien común por encima de los intereses de cada pueblo aislado y *obliga a los que tienen más al servicio del derecho de todos* [...] Ella nos dice que *los pueblos compradores de materias primas tienen mayores deberes frente a los productores de materias primas* [...] Que los pueblos a quienes la Providencia o la fortuna, o el esfuerzo también, dieron un grado más avanzado en el desarrollo de la técnica y de la economía tienen *deberes que cumplir y no dádivas que conceder frente a los países menos desarrollados* [...] De aquí que el fundamento de la idea de justicia social internacional sea también idéntico al de la justicia social en el plano nacional [itálicas AR].⁴⁰

Ahora bien, me parece evidente que la idea de justicia social que se maneja en los párrafos citados tiene mucho que ver con el principio religioso de la caridad cristiana y poco que ver con lo que, por ejemplo, los marxistas entienden por justicia. No objeto que se hable de caridad cristiana, del deber —en este sentido religioso— de los fuertes respecto a los débiles; lo que no considero aceptable es que a este asunto se le envuelva en las tesis de la justicia social, que tienen un contenido y unas consecuencias muy distintas. Por otra parte, si bien en un sentido es cierto que todos somos iguales como seres humanos con una dignidad propia, y —en sociedades libres— como ciudadanos ante la ley, en otro sentido es una verdad incontrovertible que *no todos somos iguales*, ni como indi-

viduos ni como pueblos, en lo que respecta a las motivaciones, talentos, aptitudes y ambiciones que caracterizan a cada ser humano y que son, precisamente, las que hacen posible que las sociedades no se estancuen. Sin embargo, Caldera no establece una clara distinción entre estos aspectos del tema de la igualdad, ni extrae conclusiones sobre el impacto de los mismos en la discusión contemporánea en torno a la justicia social. Además, sostener que todos tenemos derechos iguales no es tan obvio como parece. De nuevo, esto es verdad en un sentido: en lo que respecta al derecho que todos tenemos de exigir que nuestros semejantes cumplan las leyes y reglas que conforman el orden en una sociedad libre. No obstante, no hay ninguna razón para considerar que sea justo que aquellos que más aporten a la sociedad —por su iniciativa, talento, creatividad, disciplina y dotes de cualquier tipo y en muy diversos niveles— deban recibir lo mismo en cuanto a ingresos y beneficios que otros que aportan menos. Pero el hecho es que en muchas ocasiones la idea de justicia social es empleada en el sentido de una nivelación de ingresos, y el dominio populista de nuestra cultura política impide que se formule la pregunta obvia: ¿Por qué? ¿En qué criterio se basa la perspectiva de que es justo penalizar a los que son más productivos y contribuyen más a la sociedad, y discriminar sistemáticamente a favor de los que no lo hacen?

A esto, y todavía en relación con los textos de Caldera, habría que añadir la pregunta siguiente: ¿Por qué los países *compradores* de materias primas tienen mayores deberes que los *productores* de materias primas? ¿Cuál es el origen, y cuál es el fundamento, de semejante aseveración? ¿Es éste un principio moral?, y si lo es, ¿de dónde surge? ¿Se trata acaso de un principio económico? ¿Se nos está diciendo acaso que un país que sea primordialmente productor de materias primas no puede ser próspero y libre? ¿Y dónde quedan entonces Nueva Zelanda y Dinamarca, por ejemplo? ¿Por qué debemos presumir que pueblos que prácticamente sin materias primas —como Japón y Suiza— han sido capaces de progresar con su trabajo e ingeniosidad tienen mayores deberes que otros? ¿Debemos concluir entonces que los países productores de materias primas —como Venezuela— no tienen deberes? Y si los tenemos, ¿cuáles son? Sobre el papel, Venezuela es un país rico al que bien podría aplicársele la frase de Caldera de acuerdo con la cual «los pueblos ricos tienen grandes deberes frente a los pueblos menos ricos»;⁴¹ sin embargo, ninguno de nuestros

dirigentes políticos se ha tomado jamás el trabajo de explicar con claridad cuáles son tales deberes en el caso venezolano.

He extraído algunas ideas de los escritos de Caldera porque se trata de un líder de gran peso político, cuyos puntos de vista ejercen mucha influencia dentro y fuera del partido al que pertenece; pero ejemplos como éste podrían multiplicarse tomándolos de los pronunciamientos de la mayor parte de nuestros hombres públicos. El problema siempre es el mismo: en vista de la debilidad intrínseca de la mitología populista, la vulnerabilidad de los conceptos se oculta tras un ropaje retórico que impresiona en la superficie pero que en el fondo es frágil y confuso.

¿En qué consiste entonces la justicia por la que hay que luchar en una sociedad libre? En las páginas precedentes me esforcé en mostrar que tal justicia definitivamente no es la que se intenta promover a través de la consigna de la justicia social, que en esencia no es otra cosa que la búsqueda de un mayor intervencionismo estatal para dismantelar progresivamente el sistema de mercado, lo que en forma inevitable —empujado por la dinámica del igualitarismo— desemboca en la gradual colectivización y politización de la economía y el acrecentamiento de los poderes de coacción del Estado. La creación de extensivos sistemas de seguridad social, la protección legal del trabajo, el control de las prácticas monopolistas, y otros logros propios de sociedades libres y de economías de mercado (aunque la seguridad social en salud y educación también existe en los países socialistas), esos logros, repito, no entran dentro de la esfera de lo que, en sentido estricto, puede denominarse un «acto de justicia» —aunque mucha gente usa el término de esa forma.⁴² El estado de bienestar (*Welfare State*) que existe, por ejemplo, en Gran Bretaña, Suecia, Italia, Alemania Federal, Francia y otros países democráticos avanzados es el resultado del progreso de la civilización en una sociedad libre, y tales sistemas de protección y seguridad social no son dádivas, ni donaciones, ni actos de caridad de los fuertes a los débiles; tampoco son, por lo demás, gratuitos, sino que esos sistemas se sostienen gracias al producto del esfuerzo de toda la ciudadanía, que contribuye a mantenerlos con el pago de impuestos. Si se insiste en llamar a esto justicia no creo que valga la pena polemizar de nuevo al respecto, sino repetir que, en sentido estricto, en una sociedad libre, con un sistema de mercado, la idea de justicia se

refiere a la conducta individual, y no existe una justicia social separada. Por ello, en una sociedad de hombres libres luchar por la justicia significa luchar por la existencia y aceptación de reglas generales de conducta que protejan al individuo frente al Estado y que le den a la vez la posibilidad de desarrollar su talento e iniciativa y de beneficiarse por ello; reglas que sean, además, imparciales hacia los diversos individuos y grupos que integran la sociedad.

El objeto de la política económica en una sociedad libre no debe concebirse en términos de redistribuir los ingresos o hacer incompatible el ordenamiento jurídico con el sistema de libre concurrencia anárquica,⁴³ u otra noción arbitraria de justicia, sino lograr que el producto económico total crezca lo más amplia, eficaz y rápidamente posible, de manera que la parte de cualquier individuo, escogido al azar, se maximice. No hay duda, como apunta Hayek, que en las sociedades libres de nuestro tiempo la inmensa mayoría de los ciudadanos –con excepción de los más infortunados– le deben a la existencia de esas libertades políticas y económicas un ingreso y un estándar de vida mucho mayor del que podrían obtener en cualquier otro sistema.⁴⁴ Lo anterior, no obstante, no supone que los seres humanos deben tener libertad absoluta para hacer lo que quieran. Ya tuve ocasión de referirme a la paradoja de la libertad, al hecho de que, para existir, ésta no puede ser irrestricta sino que debe estar delimitada por el entorno que crea en una sociedad civilizada un ordenamiento de leyes y reglas de comportamiento individual que hacen posible la vida en común. Además, en una sociedad libre el Estado tiene el deber ético, *por consideraciones de compasión y humanismo, y no de justicia*, de corregir los efectos negativos que puedan tener sobre determinados individuos y grupos los inevitables desajustes del mercado económico. En este orden de ideas cabe aclarar lo siguiente: referirse al sistema de mercado como la concurrencia anárquica suena bien, pero no explica nada. No afirmo, porque no sería cierto, que el sistema de mercado no presenta inestabilidades y *desajustes que son realmente inevitables en cualquier situación humana donde exista libertad*; sin embargo, sí creo que el mercado competitivo tiene de positivo que permite el aprendizaje y los ajustes correspondientes. «Lo que sí puede evitarse son las políticas eco-

Ibid.

43

Hayek, «The Principles of a Liberal Order», p. 175.

44

nómicas erráticas del Estado que impiden que la economía de mercado funcione a niveles razonables de estabilidad». ⁴⁵ Una vez comprendido esto, es necesario añadir que el Estado debe prevenir la realización de actividades negativas para el cuerpo social, y no ha de abstenerse de adoptar medidas, justificadas en cada caso y de acuerdo con el ordenamiento legal, tendientes a la solución de problemas colectivos.

La cuestión del control de la libertad económica por parte del Estado en una sociedad libre, y qué magnitud de intervencionismo estatal se justifica en cuáles circunstancias, tienen que encontrar respuesta concreta de acuerdo con las condiciones de cada país democrático, las cuales por lo demás son cambiantes y no estáticas. Lo importante es que la intervención del Estado en la economía se produzca en función de corregir abusos, castigar la corrupción y en lo posible restaurar a un mejor nivel de funcionamiento el sistema de mercado, y no —como con frecuencia sucede en nuestro medio— para acentuar el poderío estatal, que a su vez es fuente de abusos y corrupción. En lo que se refiere a Venezuela, me parece obvio que no hemos padecido de un exceso de libertad económica sino por el contrario de un abrumador y paralizante intervencionismo estatal. De hecho, en Venezuela, así como en la inmensa mayoría de las naciones del Tercer Mundo, la economía de mercado no ha sido aún verdaderamente ensayada; lo que hemos tenido es una economía estatizada con estrechos espacios abiertos a la competencia y al despliegue de la iniciativa individual. Como resultado, nuestra confianza y dependencia del Estado han ido demasiado lejos, así como la denigración de los mecanismos de mercado, lo cual nos ha llevado a perder de vista la enorme importancia de la competencia y la libertad económica en general como progenitoras de la innovación, el cambio y el progreso. Por esto, y en lo que respecta a nuestro caso, en términos económicos lo que está planteado ahora es menos, no más intervencionismo, más libertad económica, aliento a las fuerzas del mercado y desmantelamiento gradual —con base en la experiencia, y con ajustes progresivos— de la economía estatizada y el correspondiente monstruo burocrático que de ella se alimenta.

El Estado venezolano es una especie de pulpo que controla la economía, domina la política, moldea la sociedad, impregna la cultura, maneja la información, permea el medio ambiente, dicta sin parar pautas y reglamentos, es, en fin, omnipresente y pegajoso y determina la vida

de casi toda la población, pero sin embargo no puede hacer cumplir sus propias leyes. He aquí su paradoja: tenemos un Estado en apariencia omnipotente, pero que es fundamentalmente débil en lo decisivo, que es la capacidad de sancionar a los que violan sus reglas.

La pregunta importante es ésta: ¿Hasta qué punto es tal debilidad real o tan sólo aparente? Bien sabemos que en Latinoamérica es tradicional que países con las constituciones más liberales y democráticas vivan bajo regímenes esencialmente autoritarios y represivos. La distancia entre los objetivos proclamados y los propósitos efectivos es un rasgo común en la actitud de nuestros gobernantes, y el populismo, entre otras cosas, conduce precisamente a crear reglas para que sean rotas. La idea es, por un lado, cohesionar un movimiento amplio con base en promesas generalizantes e imposibles, y por otro lado hacerse de la vista gorda ante la violación de esas reglas por parte de los sectores dominantes en la estructura clientelar.

Hasta ahora ese mecanismo paradójico ha funcionado con éxito político en Venezuela, con altos costos y graves consecuencias para el país como un todo, pero con gratificantes resultados para el sistema clientelista. No obstante, ya las cosas van llegando a un punto en extremo peligroso, digan lo que digan los eternos —y a veces falsamente ingenuos— optimistas. La democracia venezolana, para sobrevivir con dignidad, debe encaminarse en una dirección no populista, fundamentada en el respeto al ordenamiento legal y la eficaz sanción a su incumplimiento.

En tal sentido, otra de las líneas de acción clave que debe adoptarse cuanto antes por parte de los que se encuentran a la cabeza de nuestra dirigencia política, tiene que ver con la reforma del sistema de administración de justicia en Venezuela. Me refiero por un lado a las leyes y los reglamentos que establecen la normativa legal en diversos órdenes de la vida ciudadana —incluyendo, desde luego, el económico—, y por otra parte al aparato concreto de evaluación y sanción, es decir, los tribunales y cortes de justicia —lo que denominamos el poder judicial. Allí está la columna vertebral de un Estado de Derecho capaz de sostener un sentido de disciplina, el respeto mutuo entre los ciudadanos, la libertad, la equidad y la eficiencia. En nuestro país este aparato, tanto en su teoría como en su práctica, es pesado, lento, quejumbroso y complicado; es indispensable hacer las leyes más accesibles y comprensibles al ciudadano común y corriente, así como renovar los enrevesados y oxidados andamios en los que se sustenta nuestro sistema de administrar justicia. Las

leyes son palabras vacías sin la posibilidad de una pronta, eficaz y justa sanción que las respalde. Es aquí donde reside el secreto de las democracias avanzadas: en su capacidad de hacer cumplir sus leyes la mayor parte del tiempo y en el mayor número de casos. Lo demás, en una sociedad libre, se da por añadidura.

Para recapitular: he argumentado que la mejor sociedad a que razonablemente podemos aspirar, tanto desde un punto de vista ético como práctico, es aquella que extiende el máximo posible de libertad a sus miembros; que este máximo de libertad no implica la ausencia de limitaciones y sólo puede ser creado y sostenido dentro de un orden institucional diseñado con ese propósito y controlado por un Estado sujeto, a su vez, por la libre voluntad de los ciudadanos. Este control exige que el Estado se ocupe de los problemas colectivos, particularmente de hacer cumplir las leyes, normas y reglas que conforman el ordenamiento institucional de una sociedad libre. La cuestión del intervencionismo del Estado no debe verse en términos extremos, pues el excesivo intervencionismo ahoga la libertad, y su total ausencia es el prelude de la anarquía. La vía más apta para minimizar ambos peligros es preservar, como el eje institucional de la sociedad, medios constitucionales que hagan posible la legítima sustitución de los gobiernos y la implementación de nuevas políticas. Cualquier intento por parte de individuos o grupos desafectos de reemplazar estos mecanismos por otros de naturaleza autoritaria debe ser resistido hasta por la fuerza, si ello se considera necesario, pues «las únicas metas no tiránicas que pueden tener la fuerza y la violencia en una sociedad es la defensa de instituciones libres donde éstas ya existen, y su establecimiento donde aún no estén vigentes».⁴⁶

Tal vez el reto de abandonar por completo el lenguaje del populismo es todavía excesivo para nuestros líderes políticos; sin embargo, Venezuela es una sociedad en la que aún impera, a pesar de todas las dificultades, un amplio espacio para la libertad, y por ello es posible aspirar a un cambio de actitud en un futuro cercano, cuando los dirigentes del país aprendan a tratar a los ciudadanos como adultos capaces de ejercer el derecho a ser libres, y no como niños dependientes del paternalismo estatal.

Dos salidas falsas: Socialismo y autoritarismo militar

A primera vista, el lector podría razonablemente preguntarse qué sentido tiene discutir el socialismo en relación con las perspectivas de la democracia venezolana. En nuestro país el apoyo electoral recibido por las opciones de izquierda socialista ha sido tradicionalmente mínimo, y por ahora no parecen existir motivos suficientes que permitan presumir que se producirá un cambio radical de dirección en favor del socialismo en un futuro cercano. No obstante, considero indispensable tratar el tema de la alternativa socialista en conexión con mi discusión sobre la democracia en Venezuela por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que, como ya dije, la izquierda socialista atraviesa estos años uno de los peores momentos de su historia, caracterizado por la confusión ideológica, la debilidad organizativa y la ausencia de un apoyo de masas, el proceso de deterioro de la democracia populista podría —a mediano y largo plazo— hacer que las cosas cambien, abriendo para las fuerzas socialistas un mucho más amplio espacio político. Desde luego, la evolución de los eventos podría también conducirnos en otros sentidos, mas lo único que he querido afirmar es que la salida socialista —que por motivos a explicar considero totalmente negativa e inconveniente— es una de las posibles vías en que puede orientarnos la decadencia populista.

En segundo lugar, aun cuando no se materializase una transformación política favorable al socialismo como ideología política y fuerza electoral en Venezuela, la influencia del marxismo y de diversas versiones del planteamiento socialista en sectores intelectuales, académicos y comunicacionales —que en nuestro medio penetra más allá de estos grupos radicalizantes y permea con intensidad la cultura política del populismo—, esa influencia, repito, exige una clara y firme respuesta desde otros terrenos de la confrontación ideológica. En nuestro país, y ello es común en todas las sociedades libres y democráticas, el socialismo es particularmente influyente entre los jóvenes y los intelectuales, quienes por su mayor propensión al idealismo tienden a reaccionar más intensamente ante las inevitables dificultades y contradicciones que genera un contexto de libertades políticas y económicas. Como acertadamente señala Hayek, quien fue, como Popper, socialista en su juventud: «La idea de que si usamos nuestra inteligencia podremos organizar la sociedad mucho mejor, y hasta perfectamente, es muy atractiva para los

jóvenes». ⁴⁷ A pesar de sus graves fracasos prácticos dondequiera que ha sido aplicado, el mensaje socialista posee un elevado contenido salvacionista y mesiánico, lo cual le da un carácter en ocasiones cuasi religioso, y en la mente de muchos convencidos ese mensaje se convierte en una sólida pared de dogmas, impermeable al razonamiento basado en hechos. El socialismo, según plantea Carlos Rangel, ⁴⁸ surge como una respuesta en apariencia racional y razonable a lo que es percibido como intolerable por hombres prósperos y libres: la desigualdad social, el sufrimiento de los débiles, la injusticia y hasta la inseguridad existencial.

Ese es el verdadero argumento en favor del socialismo, inscrito no en las palabras pero sí flagrante en los hechos: su carácter de religión sucedánea y su capacidad de coerción. Las dictaduras socialistas no han surgido para promover y proteger los valores humanistas proclamados por el socialismo, sino que el socialismo y sus referencias humanistas han sido y continuarán siendo la excusa para erigir y mantener dictaduras. ⁴⁹

Sin embargo, los partidarios del socialismo en nuestro medio, muchos de los cuales posiblemente tienen las mejores intenciones y actúan movidos por una legítima sed de justicia, se resisten a aceptar la evidencia teórica y empírica sobre la naturaleza intrínsecamente totalitaria de su credo político, e insisten en que el socialismo real no tiene nada que ver con el socialismo posible que buscan para Venezuela.

Es en contra de esta línea del pensamiento socialista en nuestro país —que parte de la crítica al socialismo real, que ha aprendido a valorar hasta cierto punto las libertades burguesas, y que habla del socialismo como expansión de la democracia—, que se dirigirán fundamentalmente mis argumentos. Mi propósito será mostrar que a pesar de sus diferencias retóricas respecto a las versiones más ortodoxas del marxismo, este nuevo mensaje socialista lleva en la práctica a las mismas consecuencias que ha producido el socialismo en todas partes donde se ha aplicado, pues su esencia teórica es colectivista, estatista, hostil a la libertad económica y por lo tanto necesariamente propensa a destruir la libertad política.

47 Entrevista publicada en el diario *El Universal*, Caracas, 17 de mayo de 1981.

48 Rangel, *El tercermundismo*, p. 267.

49 *Ibid.*, p. 269.

La falsa alternativa socialista –falsa en el sentido de que nos conduciría a una situación mucho peor de la que vivimos–, tiene una similitud estructural con la propuesta, casi siempre velada, de una salida autoritaria de tipo militarista para los problemas de Venezuela: en ambos casos se trata de proyectos dirigidos a cambiar las cosas radicalmente, que constituirían para el país, de llegar a materializarse, un verdadero salto al vacío de graves consecuencias para la democracia y la libertad. Dejando por el momento de lado la gran importancia del apoyo de nuestras Fuerzas Armadas a un sistema de libertades, del cual han dado repetidas muestras por más de dos décadas, hay que aclarar, no obstante, que el vuelco hacia el autoritarismo no se produce de la noche a la mañana sino que es un proceso complejo que madura a través del tiempo, y es resultado de una acumulación de conflictos, de la convergencia del fracaso económico, la agudización de tensiones sociales, la corrupción administrativa, el clientelismo en los partidos y el marasmo intelectual de las élites políticas, fenómenos todos característicos de la democracia populista. La posibilidad de una salida autoritaria en América Latina se abre a raíz del deterioro que el populismo genera en la democracia, como lo demuestran los casos de Brasil en 1964, Argentina en varias ocasiones, y Chile en 1973. Considero que una alternativa de este tipo sería también muy perjudicial para Venezuela. Lo creo así, por un lado, por lo que ello significaría en términos de represión, pérdida de las libertades y costos sociales, y por otro lado, porque, como bien lo demuestra el ejemplo de otras naciones latinoamericanas, los sistemas autoritarios, en lugar de proteger la seguridad y estimular el desarrollo de los países se convierten en una fuente inagotable de severos traumas internos y conflictos exteriores, que dejan a los pueblos sumidos en la angustia, el atraso y la desesperanza.

Tanto los partidarios de la opción socialista como aquellos, tal vez aún muy pocos, que ansían una salida de tipo autoritaria-militarista, coinciden en la creencia –que es a la vez su punto más débil– de que el nuevo orden por el que trabajan será capaz de combinar los presuntos beneficios de su proyecto alternativo con los aspectos positivos de la estructura que desean derribar estrepitosamente (la libertad, en el caso de los socialistas, y la unidad nacional, en el caso de los militaristas). Pero así no marcha la historia. Las transformaciones radicales siempre implican grandes costos de toda naturaleza, y las fuerzas desatadas por los extremismos políticos constantemente escapan al control y se desvían de las intenciones originarias de sus progenitores. En lo que sigue aborda-

ré primeramente el tema del socialismo, y luego expondré algunas breves consideraciones sobre la naturaleza e impacto del autoritarismo militar sobre nuestros pueblos y sus Fuerzas Armadas. En este análisis, y de acuerdo con la línea argumentativa central que he venido siguiendo hasta ahora, parto de la convicción de que no basta con desear que no se concreten en Venezuela tales alternativas, pues el hecho es que pueden producirse si no se da a tiempo un viraje al timón del Estado que motive reformas necesarias y restaure la credibilidad de la nación en sí misma y en sus dirigentes, así como su confianza en la potencialidad de una sociedad libre y democrática para afrontar con decisión y eficacia los desafíos que se le plantean.

Quiero pues, ante todo, discutir las implicaciones de la alternativa socialista para Venezuela. En líneas generales mis críticas al socialismo tienen, por un lado, un aspecto epistemológico que se refiere a la teoría del conocimiento en que se fundamentan, con mayor o menor intensidad, las diversas versiones de esta ideología, y de otro lado un aspecto político-económico. El punto central que deseo enfatizar es que los calamitosos fenómenos que se observan en todos los países del mundo que han experimentado un proceso de implantación socialista, son el resultado necesario de la puesta en práctica del credo socialista, y no meros accidentes históricos que puedan evitarse en el futuro en diferentes circunstancias. No se trata, repito, de poner en entredicho las intenciones de numerosos socialistas, que genuinamente creen que esa ideología política y económica está destinada a conducirnos a un modelo de sociedad en el que imperarán la abundancia, la libertad, la igualdad y la armonía entre los hombres. Es más, considero perfectamente legítimo que en una sociedad libre existan movimientos políticos que propugnen el socialismo —en tanto que no persigan su implantación a través de la violencia. No obstante, y a pesar de los contenidos salvacionistas del mensaje socialista, estoy convencido de que ése es, para cualquier pueblo que lo adopte, un camino de servidumbre que desemboca en opresión y estancamiento. Dicho en otras palabras, el producto real del mensaje socialista siempre contradice las intenciones y postulados de presunta liberación que se enarbolan en el plano teórico. En su esfuerzo por moldear el futuro de acuerdo con los ideales proclamados por su ideología, aquellos socialistas que dicen creer —y en efecto lo hacen— en la libertad y la democracia inevitablemente contribuyen a engendrar un orden so-

cial opuesto al que teóricamente aspiran. En nuestro tiempo, el fracaso del socialismo ha constituido la más clara y patética ilustración de la ironía de la política.

Según Teodoro Petkoff, uno de los más destacados ideólogos del socialismo en Venezuela, «Una de las mayores inepticias [sic] que se pueden oír en boca de adversarios del socialismo es la de que las semillas del Gulag están en el propio pensamiento marxista». ⁵⁰ Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es que a estas alturas Petkoff, y muchos otros intelectuales y políticos socialistas en nuestro medio, aún no hayan caído en cuenta de que, *en efecto*, el pensamiento marxista contiene implícita y explícitamente las semillas del totalitarismo socialista contemporáneo. Petkoff parece olvidar —convenientemente— que el pensamiento político de Marx, y más aún el de Lenin, se fundamenta en la idea de la *dictadura del proletariado* como mecanismo indispensable para el establecimiento del socialismo, a pesar de que en nuestros días algunos partidos socialistas en Europa occidental y América Latina hayan querido borrar este concepto de la ortodoxia original. No creo que sea necesario reproducir acá en detalle las críticas demoledoras de Popper contra el historicismo y otros aspectos de la epistemología marxista, que son bien conocidas y que en todo caso el lector puede consultar en sus fuentes originales. ⁵¹ En síntesis, como he indicado en páginas precedentes, mi objeción básica de tipo epistemológico al marxismo tiene que ver con el análisis de la sociedad como una organización que puede ser centralmente planificada y controlada en función de determinados propósitos. Esta concepción se opone a la visión liberal del orden social como un orden espontáneo que es el producto de la acción pero no del diseño humano. Desde esta perspectiva, el objetivo de la ciencia social no es —como lo propone la teoría marxista— sugerir que podemos mover la sociedad en la dirección que deseemos, sino más bien señalar dónde yacen los límites de nuestro control consciente de los procesos sociales, y alertarnos ante las consecuencias no intencionales de la acción humana. El marxismo, como todo historicismo, se fundamenta en una visión escatológica de la historia, según la cual los procesos sociales evolucionan inevitablemen-

Teodoro Petkoff, «Venezuela en el mundo: Seguridad nacional desde la perspectiva del cambio social», en Aníbal Romero, comp. *Seguridad, defensa y democracia en Venezuela*. Caracas: Equinoccio, 1980, p. 124.

Además de las obras ya citadas, véase Karl R. Popper, *La miseria del historicismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1987.

te en una dirección definida hacia una meta última —el socialismo— que será el reino de la libertad, y a cuyo logro deben subordinarse los esfuerzos de todos. La imposición de objetivos sociales comunes en aras de la utopía socialista, y el totalitarismo consecuente, es el punto de culminación de toda empresa política que se tome en serio las implicaciones del marxismo.

El siguiente pasaje, extraído de un texto del socialista británico Perry Anderson, ejemplifica con bastante claridad las dificultades y contradicciones del marxismo. Según Anderson:

El advenimiento del modo de producción capitalista era esencialmente un proceso objetivo ciego, por el que jamás nadie luchó voluntariamente como tal. *La democracia burguesa* en sí misma —su cobertura política ideal— *no fue creada como un propósito subjetivo de la burguesía*, [sino] que más bien emergió de las contradicciones objetivas de la lucha de clases entre el capital y el trabajo [...] El socialismo, por el otro lado, fue desde el comienzo un proyecto premeditado, intencional, un horizonte ideal declarado del proceso histórico, por el que la clase trabajadora conscientemente luchó [...] [Marx y Engels] vieron la lucha por alcanzarlo como la *inauguración de otro tipo de historia, consciente y controlada*. El socialismo, en otras palabras, es un ideal subjetivo, como el capitalismo nunca lo fue. *Es esta dimensión ideal del socialismo, inseparable de su misma definición, la que los principales Estados posrevolucionarios de este siglo contradicen cruel y profundamente* [itálicas AR].⁵²

Sin duda ello es así, y la razón de que sea de esa manera se encuentra en el carácter intrínsecamente totalitario del socialismo, que aniquila la libertad. No obstante, ésta no es la conclusión que extraen los socialistas de su constatación empírica acerca del aplastamiento de la libertad y la democracia bajo el socialismo real; tampoco aceptan que existe una relación *intrínseca* entre una economía de mercado (capitalista) y la posibilidad de vigencia de una sociedad libre y democrática. Más bien, el nuevo discurso de los socialistas democráticos nos dice que las libertades y derechos formales

... no son concesiones de la burguesía *ni frutos específicos de las grandes revoluciones burguesas de los siglos anteriores*, sino que son resultado del largo proceso civilizatorio de la humanidad [...] la democracia política [es] un *continuum* histórico, que debe encontrar en el cambio socialista un nuevo momento de expansión [...] otorgando a la idea democrática una plenitud en la práctica social que hoy la existencia de privilegios sociales y económicos en los países capitalistas le niega [itálicas AR].⁵³

En todo esto hay una mezcla de mala historia con mala política, que es necesario desentrañar cuidadosamente, Hayek señala con acierto que hoy pocos recuerdan que en sus comienzos la idea socialista era abiertamente autoritaria. Los autores que sentaron las bases del socialismo moderno no abrigaban dudas de que sus proyectos sólo podrían implementarse por vías dictatoriales. Fue sólo bajo la influencia de las fuertes corrientes democráticas que precedieron a las revoluciones europeas de 1848 cuando sectores socialistas adoptaron consignas libertarias. No obstante, ese mismo año un analista de la agudeza de Alexis de Tocqueville ya apuntaba hacia la incompatibilidad del mensaje socialista y su aspiración de libertad. Decía:

La democracia extiende la esfera de la libertad individual, el socialismo la restringe. La democracia le atribuye todo su valor a cada ser humano; el socialismo, en cambio, hace de cada hombre un mero agente, un simple número. La democracia y el socialismo no tienen nada en común, excepto una palabra: igualdad. Pero nótese la diferencia: mientras que la democracia busca la igualdad en libertad, el socialismo la busca en la restricción y la servidumbre.⁵⁴

Sin embargo, en su mensaje los socialistas dieron un contenido diferente al concepto de libertad: la nueva libertad sería económica y social, el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad; sin estas nuevas libertades la libertad política burguesa era una farsa, algo puramente formal. Los grandes defensores de la libertad en la tradición del liberalismo

Petkoff, pp. 122-123.

Citado por Hayek, *The Road to Serfdom*. London: Routledge & Kegan Paul, 1944, p. 18.

53

54

la habían entendido como libertad ante la coerción y el poder arbitrario del Estado. Ahora, la nueva libertad se plasmaría frente a la necesidad económica, y para lograr este reino los pasos indispensables serían la colectivización de los medios de producción y la planificación centralizada del uso de los recursos en la sociedad.⁵⁵

En nuestros días, los socialistas democráticos prefieren hablar de socialización y no de colectivización de la economía, pero el resultado es el mismo. Se trata, nos dice Petkoff en otro de sus trabajos, de construir un poder político que esté

... orientado a la socialización de los resultados de la producción, de acuerdo a criterios y prioridades racionalmente establecidos y cuyo desideratum no es únicamente el de la estatización de todo el aparato productivo y distributivo, sino el de ir avanzando en la socialización mediante la creación y expansión de sectores autogestionarios de la economía, en los cuales los productores directos asuman su control y dirección. Todo esto dentro de los marcos de un plan nacional, flexible y descentralizado, *que no rehúya la utilización controlada de determinados mecanismos de mercado, compatibles con los intereses sociales generales* [itálicas AR].⁵⁶

El modelo que proponen, nos explican otros ideólogos socialistas venezolanos, es el de «una sociedad económicamente pluralista, basada en una variedad de formas económicas —cooperativas, autogestionarias, privadas clásicas, estatales— cuyo conjunto lleve al máximo posible la democracia en la propiedad y en la gestión económica».⁵⁷ Todo esto, por supuesto, existirá bajo un sistema político que encarnará una forma superior de la libertad y la democracia.

Para ponerlo en otras palabras, los socialistas democráticos venezolanos persiguen algo que podríamos resumir con la frase de Leibniz sobre «el mejor de los mundos posibles»: una mezcla de socialismo con economía de mercado, de colectivismo con libertad, de estatismo con democracia. A veces resulta difícil tomar en serio estos pronunciamientos

55 *Ibid.*, pp. 18-19.

56 Teodoro Petkoff, «Hacia un nuevo socialismo», *Nueva Sociedad*, 56-57, Caracas, 1981, p. 49.

57 Diego Bautista Urbaneja y Rafael Guerra Ramos, «El socialismo del vecino: Solidaridad en la crítica o crítica en la solidaridad», *Nueva Sociedad*, 67, Caracas, 1983, p. 22.

tan superficiales y poco rigurosos. Pero sería irresponsable caer en este juego en el que los eslóganes y los buenos deseos sustituyen la precisión conceptual. El socialismo es incompatible con la economía de mercado, y esta última no puede existir sin la propiedad privada de los medios de producción. La implantación de un modelo socialista de sociedad supone necesariamente (y esto nada tiene que ver con los errores, condicionamientos históricos y desviaciones que supuestamente han adulterado el socialismo real), la abolición de la propiedad privada y su sustitución por la propiedad colectiva. La materialización de este objetivo siempre ha conducido, y seguramente conducirá donde el mismo sea ensayado, a la destrucción de la democracia y la libertad *que conocemos*. Por otra parte, esta democracia y libertad burguesas, *que son las únicas que existen* —a pesar del intento socialista de restarles legitimidad llamándolas formales—, son consustanciales a una economía de mercado capitalista. Es plenamente cierto que la economía de mercado puede coexistir, y de hecho esto ocurre con frecuencia en América Latina, con formas políticas autoritarias; pero tal realidad en nada disminuye la validez del planteamiento de que sólo sobre la base de una economía de mercado puede levantarse la posibilidad de vigencia y supervivencia de una sociedad libre y democrática. Para insistir sobre un punto que ya he enfatizado previamente, una sociedad libre descansa sobre leyes y reglas generales a las cuales nos adherimos porque las mismas producen un orden que protege una esfera privada para el individuo; pero el hecho es que no sabemos exactamente cómo ocurre esto, pues la amplia y compleja sociedad de la que somos parte ha crecido sin que haya sido explícita y conscientemente diseñada para desarrollarse así, y porque los millones de individuos y eventos concretos que determinan ese resultado son también complejos e impredecibles. El socialismo, por otra parte, persigue un cierto tipo de orden en particular, que exige de las personas actuar en función del establecimiento de un objetivo global específico; por lo tanto, los poderes del órgano de dirección central de la sociedad no deben ser limitados, pues sólo mediante la coerción puede lograrse esa meta final, tal y como es definida por la utopía socialista.⁵⁸

Los socialistas, en ocasiones, tratan de defenderse ante el anterior señalamiento diciendo que

... el proceso que constituye el socialismo tiene una dirección: la de la participación creciente de las mayorías organizadas en la adopción de las decisiones y en el control de la actividad de los dirigentes por ellos elegidos. *Sin embargo es imposible dibujar la forma concreta de las situaciones que resulten de esos procesos.* Por una simple razón: estos procesos incluyen inherentemente un elemento de **impredicibilidad**: el aprendizaje que a través de ellos las mayorías van haciendo sobre la más adecuada forma y medida en que debe producirse su participación y su control.⁵⁹

Sin embargo, este argumento se derrumba ante la realidad de la destrucción socialista, súbita o paulatina, de la economía de mercado y de aquella esfera privada del individuo a partir de donde le es posible ejercer la libertad económica, y su sustitución efectiva por una economía colectivizada. De manera que sí es posible dibujar la forma concreta en que un proceso de implantación socialista se desenvuelve, y existen numerosos ejemplos que permiten estudiarlo. Para citar de nuevo a Carlos Rangel:

Quienes, autocalificándose de «socialistas» no comparten ese proyecto [de colectivización, AR] teóricamente o, habiendo gobernado, no han intentado estatificar los medios de producción, no son socialistas genuinos [...] Es cierto que los socialistas autocalificados de democráticos y los socialdemócratas, se encuentran unos y otros empeñados sinceramente en mantener las llamadas «libertades burguesas», y se encuentran por lo mismo todos obligados a proceder de manera reformista y no «revolucionaria» cuando acceden al gobierno [...] Sin embargo, a partir de allí han ensanchado el área de competencia directa del Estado en la vida de sus respectivas naciones, de diversas maneras [...] Finalmente estos socialistas democráticos y socialdemócratas han terminado por extender la jurisdicción y los poderes directos del Estado en tal escala y con tal desmedida pretensión de dirigir la economía, que podría darse que en efecto logren hacer caer a sus sociedades en el socialismo, no por la guerra civil o por el golpe de Estado leninista como proponen los socialistas rigurosos, sino por la reducción gradual, primero lenta pero luego

galopante del área de funcionamiento de la economía de mercado, y la consiguiente asfixia primero de la libertad económica y luego ineluctablemente de la libertad política.⁶⁰

El resultado de estos procesos no sería menos calamitoso que el ya existente en los países donde impera el socialismo real, pues la imposición sobre toda la sociedad de una finalidad determinada, y la colectivización de la economía, llevan forzosamente a un sistema productivo altamente ineficiente y a un orden político necesariamente coercitivo, que ahoga las libertades individuales y favorece los intereses de los políticos y burócratas que controlan la socialización. Hay que añadir, de paso, que los socialistas democráticos venezolanos no parecen haber resuelto todavía el dilema entre reforma o revolución, y con frecuencia se les oye decir que —en los términos del economista D. F. Maza Zavala— «hay necesidad de una transformación fundamental de la economía y la sociedad, hay necesidad de un nuevo orden en Venezuela», y ello «no será posible sin un proceso revolucionario, sin la subversión del sistema establecido»,⁶¹ ya que su modelo de sociedad significará —de acuerdo con el artículo 1 de los estatutos del así llamado Movimiento al Socialismo— «la revolución integral de la vida». Lo que no parecen percibir es que, en la práctica, lo que proponen como salida sólo contribuirá a acentuar los males ya presentes con intensidad dentro de la democracia populista, empujándonos más aún en la dirección del estatismo colectivista.

Y es en ese terreno concreto donde hay que poner mayor énfasis, pues si bien creo que es posible demostrar, teóricamente, que el sistema de mercado es preferible en lo político y económico al socialismo, «lo que está a nuestro alcance es reconocer empíricamente cuál sistema ha sido *en la práctica beneficioso* para la sociedad humana, y cuál ha sido *en la práctica perverso y destructivo*» [itálicas AR].⁶² En tal sentido, enfrentados a la, en muchos aspectos, patética ilustración del modelo que ofrece el socialismo real, los socialistas democráticos venezolanos dicen que su modelo —cito a Petkoff— «No existe en ninguna parte, como antes de 1917 tampoco hubo ninguna revolución socialista y no era su inexistencia la demostración de su imposibilidad. La historia demostró otra cosa [...]

Rangel, pp. 50-52.

D. F. Maza Zavala, «Reflexiones sobre un modelo alternativo de desarrollo para Venezuela», *Nueva Sociedad*, 53, Caracas, 1981, pp. 40, 47.

Hayek, entrevista citada en nota 46.

60

61

62

Hoy, tampoco es su inexistencia lo que negaría la posibilidad de un socialismo en democracia y libertad. Ya la historia hablará». ⁶³ Sin embargo, esta es una salida demasiado fácil, pues cabe preguntarse, ¿cuáles son las *razones objetivas* que le permiten a Petkoff y a otros socialistas en nuestro medio sostener con tanta seguridad semejantes afirmaciones? O, para ponerlo en otros términos, ¿se nos está pidiendo simplemente un acto de fe cuasi religiosa en torno a un problema que es en esencia político? Lo cierto es que los socialistas democráticos jamás han explicado de qué manera en concreto, y en ausencia de una economía de mercado, van a preservar la libertad dentro de su modelo. La realidad, cruda y sin disfraces, es que los socialismos existentes han abolido toda traza de verdadera democracia; más aún, con su interferencia para asfixiar el mercado económico han creado serios problemas de ineficiencia y escasez que no encuentran solución en el marco de un sistema colectivista. Las preguntas que deben responder los socialistas democráticos son: ¿Quiénes, en su modelo, controlarán qué y de qué manera? En vista de que el mercado es la única institución humana colectivamente controlada por sus participantes, ¿cómo se va a reconciliar la inevitable supresión socialista del sistema de mercado con un gobierno sobre el cual, presuntamente, todos los ciudadanos ejercerán influencia y poder participativo? Y si se piensa, dentro del modelo propuesto, retener el mercado económico, ¿qué va a ocurrir con la propiedad privada de los medios de producción, que está *integralmente conectada* al sistema? La ausencia de respuestas claras a estas interrogantes es un indicio inequívoco del enmarañamiento ideológico que acosa a los socialistas democráticos, y que les lleva constantemente a sustituir las ideas por la retórica.

Por otra parte, si bien los socialistas democráticos afirman que entre su modelo y el socialismo real existe una distancia infranqueable, no es extraño que las críticas que hacen a los socialismos existentes adopten en ocasiones un carácter más bien ingenuo, que conduce a teóricos de tanto prestigio como C. B. Macpherson a argumentar que «en la escala de las libertades políticas y civiles, las naciones comunistas [socialistas, AR] no tienen a dónde ir excepto hacia arriba, en tanto que las demandas del belicismo pueden con facilidad empujar hacia abajo a los países democráticos occidentales». ⁶⁴ No dudo que esto último pueda ocurrir,

63 Petkoff, «Venezuela en el mundo...», p. 123.

64 C. B. Macpherson, *Democratic Theory*, p. 22.

pero lo que sí es obvio es que la represión de la libertad bajo el socialismo —en la URSS, China, Polonia, Cuba y en otras partes— todavía tiene un largo camino ascendente por recorrer. Macpherson, sin embargo, sugiere que las naciones socialistas, una vez que asuman plenamente los avances tecnológicos generados por el capitalismo, «se harán más capaces de ofrecer un tipo de libertad humana que la sociedad de mercado tiene que negar». ⁶⁵ La evidencia de esto, no obstante, no se ve en ninguna parte, lo cual no impide que en nuestro medio Pompeyo Márquez —para sólo citar un caso— sostenga que las naciones donde impera el «socialismo real» son «países y pueblos que se encuentran inscritos dentro del gran torrente mundial que busca un orden social más justo y sustituir el capitalismo [...] por [un sistema] más humano y racional, el socialismo». ⁶⁶

Como con claridad lo demuestran los escritos de Macpherson, la fuente de todas las contradicciones que asolan a los teóricos del socialismo democrático se encuentra en su deseo de preservar la libertad política, como la conocemos, en una sociedad de la que haya desaparecido la economía de mercado, que ha sido y es el fundamento de las libertades alcanzadas por toda sociedad que, razonablemente, pueda ser calificada de libre. Según Macpherson:

El hecho de que los valores liberales se hayan desarrollado en sociedades de mercado capitalista no significa que el principio ético central del liberalismo —la libertad del individuo para realizar sus capacidades— deba confinarse siempre a esas sociedades. Al contrario [...] ese principio ético [...] el apetito por la libertad individual ha desbordado sus restricciones capitalistas y puede ahora existir en otras condiciones; de igual forma, los poderes productivos del hombre, que crecieron tan impresionantemente bajo la economía de mercado competitiva, no se pierden cuando el capitalismo abandona la libre competencia o es reemplazado por algún tipo de socialismo. ⁶⁷

De nuevo, Macpherson no presenta ninguna evidencia empírica que soporte tales aseveraciones, como puede comprobarlo el lector que tenga

Ibid.

65

Pompeyo Márquez, «El socialismo debe salir al encuentro de las realidades contemporáneas», *Nueva Sociedad*, 56-57, Caracas, 1981, p. 214.

66

C. B. Macpherson, *The Life and Times of Liberal Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1977, p. 2.

67

la paciencia de revisar estos textos.⁶⁸ En última instancia, como queda plasmado en éstas y otras obras de igual tendencia, los socialistas democráticos aspiran a una sociedad de abundancia en la cual, de hecho, no existirán problemas económicos propiamente dichos, una sociedad que habrá alcanzado «un nivel de productividad que hará posible una vida holgada para todo el mundo, que no dependa de los incentivos de mercado capitalista».⁶⁹ Sobre este último punto, opto por citar las lapidarias frases de Hayek, de acuerdo con las cuales aquel que habla de «potencial abundancia» o bien «es deshonesto o no sabe lo que está diciendo»:

La libertad económica, que es el prerequisite de cualquier otra libertad, no puede ser la libertad de todo cuidado económico que nos prometen los socialistas, y que sólo puede obtenerse relevando al individuo no sólo de sus necesidades sino también de su *poder de escogencia*; la única libertad económica de que tiene sentido hablar conlleva no sólo el derecho a escoger, sino también, e inevitablemente, *el riesgo y la responsabilidad de ese derecho* [itálicas AR].⁷⁰

En síntesis, la democracia liberal, que es la única que efectivamente y no sólo en teoría preserva un espacio para la libertad del individuo, ha sido y es consustancial a la economía de mercado competitiva. Hay que tener claro, por consiguiente, que cuando los socialistas democráticos nos hablan de libertad se están refiriendo a otra noción de lo que significa ser libres, que no existe sino en teoría, y cuya conquista práctica no es más que un atractivo pero en extremo peligroso espejismo.

Otro tema del gusto de los socialistas democráticos en Venezuela es el de la autogestión y la participación ciudadana en la toma de decisiones, y con su tratamiento cierro mi discusión sobre la alternativa socialista. Al respecto cabe ante todo aclarar lo siguiente: cuando se argumenta que el nuevo orden político socialista «será la realización de una radical soberanía popular *mediante el otorgamiento a los productores* por primera vez de los medios para su autogobierno democrático —en las fábricas, en el campo, en las calles, así como en las municipalidades y asambleas»—⁷¹ no hay

68 Véase también su libro *The Real World of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1966.

69 Macpherson, *The Life and Times...*, p. 22.

70 Hayek, *The Road to Serfdom*, pp. 73, 75.

71 Anderson, p. 185.

que perder de vista que el concepto de productores no se limita —como parece implicarlo el párrafo citado— a los trabajadores manuales, sino que en las sociedades de mercado modernas incluye a los empresarios, que cumplen una labor clave en el terreno de la innovación, la organización y la toma de riesgos económicos. Una de las dificultades básicas de la ideología socialista reside precisamente en su visión un tanto romántica, casi decimonónica, de las realidades económicas contemporáneas, lo cual, por supuesto, contribuye a acentuar su utopismo. La cuestión de la autogestión así lo pone de manifiesto. Los socialistas democráticos venezolanos constantemente declaran que su modelo económico estará basado en criterios autogestionarios sin explicar jamás con precisión qué entienden por ello. Esto, sin embargo, no es nada nuevo. En Yugoslavia, luego de la ruptura con la URSS, el Partido Comunista promovió la autogestión como un método alternativo al modelo soviético. Se esperaba que estas empresas autogestionarias se comportasen como una especie de empresarios colectivos; no obstante, el experimento fracasó gravemente y la situación económica en Yugoslavia es tan mala como en el resto de Europa oriental. La dificultad crucial reside en que los trabajadores en las fábricas simplemente no se interesan en colocar el capital donde éste pueda ser más productivo. Para superar este obstáculo se han propuesto dos soluciones: en primer lugar, retornar a un sistema de inversión programada desde el centro gobernante, una opción que ya fracasó; en segundo lugar, motivar a los trabajadores (pero nadie sabe cómo, dadas las restricciones que impone el socialismo sobre la competitividad), para que éstos asuman el rol de empresarios que en el sistema autogestionario *nadie* lleva claramente a cabo. Esta última alternativa tampoco ha funcionado.⁷²

El problema se deriva de una ineludible realidad económica: el objetivo de una empresa es producir bienes que la gente desee adquirir, al más bajo precio posible y con el más económico uso de los recursos disponibles. Una vez que esto quede decidido, el problema de la gestión de la empresa se convierte en un asunto esencialmente técnico, referido a la cuestión de los medios necesarios para lograr el objetivo señalado. Apunta Sirc que:

Véase al respecto Ljubo Sirc, «Employee Participation and the Promotion of Employee Ownership», en Arthur Seldon, comp., *Agenda for Social Democracy*, pp. 113-127.

La solución de esta tarea depende de una combinación de conocimiento, información, experiencia, talento natural, etc., y *no de que la mayoría vote por ello o no*. En tal sentido, la toma de decisiones en la empresa se asemeja más bien al trabajo de un ingeniero o un médico que a la labor de un político, la cual tiene que ver con juicios evaluativos acerca de lo que la gente quiere alcanzar. Por ello no existe mucho espacio para la democracia en la industria.⁷³

Además, las decisiones empresariales, en particular las que tienen que ver con nuevas inversiones, se toman bajo condiciones de incertidumbre, lo cual implica que se fundamentan en estimaciones subjetivas de desarrollos futuros en los terrenos de la demanda de bienes y servicios, la tecnología y el suministro de materias primas. Por lo tanto, tales determinaciones requieren que se asuman riesgos, y esta cualidad especial de las decisiones empresariales las hace muy poco susceptibles a los mecanismos de control colectivo a través del voto. De estos experimentos lo que siempre ha emergido ha sido ineficiencia, anarquización en la producción y deterioro. En ello se pone en evidencia la tendencia de los socialistas democráticos a otorgar a la democracia una naturaleza casi romántica e idealista, y su contraproducente propensión a trasladar los mecanismos democráticos a nivel nacional a instituciones con peculiaridades propias que exigen un tratamiento diferente, como son, entre otras, las empresas y las universidades.

Algo similar ocurre con el culto casi místico a la participación. De nuevo el problema surge de la tendencia a llevar una idea que es básicamente positiva a extremos que la distorsionan y la hacen inoperante. En una sociedad libre y democrática la participación ciudadana en la toma de decisiones puede complementar pero no sustituir el liderazgo. Como con cierta rudeza señala Schumpeter, los votantes deben «respetar la división del trabajo entre ellos y los políticos a quienes eligen. No deben retirarles su confianza con demasiada ligereza entre una elección y otra, y deben entender que, una vez que han seleccionado con sus votos a un individuo, la acción política es fundamentalmente competencia de ese representante y no de los votantes».⁷⁴ ¿Significa esto que los gobernantes

73 *Ibid.*, p. 119.

74 Schumpeter, p. 295.

de una nación democrática, una vez electos, deban comportarse como una especie de dictadores? Desde luego que no. En primer lugar, en una sociedad libre existen mecanismos constitucionales, tradiciones e instrumentos de presión destinados a controlar el poder del Estado y sus diversos componentes. Por otra parte, en una sociedad democrática como la venezolana existen numerosos canales de participación a escalas local, regional y nacional (a través de los partidos) que hacen posible que los ciudadanos comunes y corrientes hagan oír su voz. Por supuesto, es mucho lo que aún puede avanzarse en este campo, sin caer en ingenuidades sobre las presuntas virtudes de la democracia directa. Como lo admite el propio Macpherson:

La idea de que los nuevos adelantos en tecnología de la computación y las telecomunicaciones harán posible una democracia directa [que consulte instantáneamente sobre todo tipo de asuntos a millones de ciudadanos, AR] es atractiva no sólo para los expertos en estas materias sino también para los teóricos sociales y los filósofos políticos. No obstante, tal perspectiva no presta suficiente atención a un requerimiento ineludible del proceso de toma de decisiones: *alguien tiene que formular las preguntas* [itálicas AR].⁷⁵

Ese «alguien», por supuesto, son los líderes democráticamente electos, cuya misión conductora es clave e inescapable.

La historia de América Latina demuestra que en nuestro continente los regímenes democráticos son altamente vulnerables a las crisis económicas y al flagelo de la corrupción política, fenómenos ambos que se acentúan notablemente bajo la democracia populista. La agudización de las luchas sociales a consecuencia del deterioro de la economía y el fracaso del liderazgo civil, lleva comúnmente o bien a un vacío de poder —como en Argentina en 1966— o bien a una situación prerrevolucionaria y al golpe de Estado militar —como en Chile en 1973—, empleado como instrumento extremo para evitar el colapso nacional y la guerra civil. No hay que engañarse al respecto, pues hacerlo sería profundamente irresponsable: en nuestros países la fragilidad de la democracia es un mal en no poca medida atribuible a la incompetencia, timidez y tolerancia ante

la corrupción de parte de los dirigentes y partidos políticos que manejan el timón del Estado. No obstante, la experiencia latinoamericana también indica que el autoritarismo militar está lejos de ser una salida ante los serios desvaríos de nuestras sociedades, y que la idea de que una mano dura que aplaste las libertades sería útil para impulsar el progreso de nuestros pueblos hasta que éstos maduren es un mito.

Los líderes militares que asumieron el poder en los años 1960 y 1970 en varios países de nuestro continente estaban inicialmente convencidos de que lograrían el desarrollo y la seguridad, superando la ineficiencia y corrupción de los gobiernos civiles. La realidad ha sido otra, y hoy vemos a las Fuerzas Armadas de esas naciones haciendo penosos esfuerzos para retirarse del terreno político, dejando un rastro de opresión, desencanto, divisiones internas, odio popular y decadencia nacional. Los avances realizados en algunos casos —por ejemplo, en el campo económico, en Brasil—, requirieron de enormes e irreparables costos sociales y políticos que hubiese sido preferible evitar. Tal vez el caso más patético junto al de Chile⁷⁶ lo proporcionó la tragedia argentina, que llegó a su culminación con el fracaso militar en las islas Malvinas en 1982. Allí se reveló plenamente la bancarrota moral, política y económica de un modelo de gobierno para Latinoamérica, inaugurado en la década de 1960, basado en el control dictatorial del poder por parte de la institución militar y sus colaboradores civiles en función de las doctrinas de seguridad nacional de corte autoritario extendidas desde entonces a través del continente.

Digo revelación de un fracaso, y no descubrimiento, porque el desastre a que estos regímenes habían llevado a Brasil, Chile, Uruguay y otros países del área era bastante obvio desde hacía varios años. Sin embargo, de no haber sido por la sacudida que experimentó la sociedad argentina, y en particular el sector militar a raíz del incompetente y trágico intento de recuperar las islas Malvinas en 1982, es altamente probable que nada de lo que ahora estamos viendo se hubiese materializado, y que el régimen castrense hubiese proseguido su abismal camino de represión interna, caos financiero, corrupción generalizada y belicismo en política exterior. Una vez más en la historia de América Latina han sido factores foráneos los que han llevado a una sociedad a enfrentarse a sí misma de

76

Sobre las consecuencias del mando militar en Chile durante el período posterior al derrocamiento de Salvador Allende, véase *Chile: The Pinochet Decade*. London: Latin American Bureau, 1983.

manera franca y con valentía, a dejar de lado mitos y pedir una clara rendición de cuentas de parte de sus líderes.

Sería trágico, no obstante, que la confrontación que necesaria e inevitablemente deben hacer los argentinos y otros pueblos del continente consigo mismos, con su propio ser nacional, se plantease puramente en términos de civiles contra militares. Ello equivaldría a perder de vista que si bien las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad fundamental en la decadencia argentina, no son los militares los únicos culpables de la catástrofe, y además, no todos los miembros de la institución armada pueden ser acusados en bloque por lo ocurrido. Lo que se ha derrumbado, insisto, es un modelo político que en todas partes donde se aplicó contó con el respaldo de importantes grupos civiles, sin los cuales ninguna institución militar, por eficiente que sea, puede gestionar un Estado moderno. Lo que está en juego no es entonces una lucha entre civiles y militares, sino entre autoritarismo y democracia. Para los latinoamericanos las grandes preguntas una vez más son: ¿Somos capaces de reconciliar la libertad y el orden? ¿Pueden las Fuerzas Armadas del continente depurarse de elementos autoritarios, de la arrogancia mesiánica que ha caracterizado su ejercicio del poder en Argentina, Chile, Perú y tantos otros países en décadas recientes? ¿Lograrán nuestros dirigentes civiles alzarse por encima de las pequeñeces de una lucha política concebida en términos parroquiales y enrumbar nuestras naciones hacia un desarrollo con libertad y estabilidad? ¿Podemos, en resumen, desterrar la violencia de la confrontación política, o estamos condenados a un dilema entre revolución y tiranía? Ya los argentinos y el mundo entero conocen la verdad. La así llamada «guerra sucia» llevó a sectores de las Fuerzas Armadas y de la policía a desatar una ola de represión frenética e ilimitada, manchando profundamente el honor militar y dejando un rastro de terror y revulsión en la sociedad argentina, que sólo podrán superarse con el paso de los años. Las Madres de la Plaza de Mayo y numerosos grupos ocupados por los derechos humanos insisten en que los desaparecidos no son menos de 30.000. No cabe duda de que el extremismo guerrillero planteó una amenaza significativa en los años 1960 y 1970, pero la contraofensiva militar desbordó todas las fronteras que por su dignidad y sentido de la autopreservación deben respetar una institución y un Estado civilizados: fuera de la ley nada, dentro de la ley todo, es el principio básico para un ejercicio verdaderamente sólido y eficaz de la autoridad gubernamental, incluso en las situaciones más difíciles de

crisis nacional. Por lo demás, la represión continuó en Argentina aun después de que las guerrillas urbanas habían sido eliminadas como riesgo militar, y la persecución no se detuvo ni siquiera ante los niños.

Los excesos cometidos no pueden interpretarse como un fenómeno aislado o clandestino, sino como expresión de la esencia misma de un régimen autoritario levantado sobre los inhumanos pilares de una visión de la seguridad que confunde la guerra con la política, que concibe la sociedad como un campo de batalla lleno de enemigos internos, y que se nutre de un absurdo espíritu de cruzada contra toda oposición y signo de descontento. Lo enfatizo: se trata del fracaso de un modelo político y de una concepción de la seguridad en América Latina. Los militares antidemocráticos argentinos se presentaron como defensores de la tradición y como reserva moral de la patria, pero en realidad su fanatismo les condujo al más hondo pantano moral que pueda imaginarse. No sólo torturaron y mataron fuera de la ley, sino que hasta quisieron suprimir algunas de las manifestaciones más elevadas del conocimiento y la cultura, prohibiendo el psicoanálisis, las matemáticas modernas, el arte no figurativo, quemando libros y expulsando a miles de científicos y técnicos en una empresa oscurantista que ha dejado a la Argentina exhausta en el terreno ético e intelectual.

La economía, por otra parte, ha quedado al borde del abismo, con una inflación de 200%, una baja (entre 1980 y 1983) de más del 10% en el PTB y del 25% en la producción industrial. El valor real de los salarios descendió en 50%, en tanto que la deuda externa alcanzó una cifra de más de 40.000 millones de dólares, consumidos en no poca medida en adquisición de armamentos. En teoría, las políticas aplicadas por los economistas (civiles en su mayor parte) que tuvieron en sus manos este aspecto del régimen podrían haber dado mejores resultados. Pero para que esto ocurriese habría sido indispensable controlar la corrupción. En cambio, esta última se desbordó a niveles sin precedentes, envolviendo tanto a militares como a civiles y destruyendo por completo la ilusión de que el sector castrense iba a poner fin a esa plaga que asola a América Latina.

En cuanto a la política exterior y de defensa se refiere, el drama de las Malvinas es bien conocido. Basta decir por ahora que el episodio demostró de manera elocuente que unas Fuerzas Armadas politizadas pierden sus capacidades militares, y que una cosa es torturar y reprimir y otra muy distinta hacer la guerra contra un ejército moderno y disciplinado, consciente de sus derechos y obligaciones como brazo armado de un Es-

tado democrático. El drama de la guerra por las islas Malvinas ilustró la validez de la tesis expuesta por el sociólogo Stanislav Andrevski, según la cual «existe una incompatibilidad intrínseca entre los usos *internos* y *externos* de las Fuerzas Armadas [...] en tanto que estas fuerzas son más frecuentemente usadas internamente, *menor* es su capacidad de hacer la guerra externa...».77 Este es un factor de primerísima importancia, que debe ser tomado muy en cuenta por los hombres de armas latinoamericanos en situaciones de conflicto interno, cuando las circunstancias empujan con mayor intensidad que lo usual a las Fuerzas Armadas a contemplar una más directa y decisiva intervención en el terreno político en nuestras naciones.

La tragedia argentina ha tenido la peculiaridad de que explotó brutalmente a raíz de una *crisis externa*; no obstante, las terribles heridas que ha dejado en ese país, y en sus propias Fuerzas Armadas, el mando militar se repite en muchos otros países de América Latina. Para los venezolanos, civiles y militares, es en extremo importante tratar de extraer lecciones de lo acontecido, no olvidarlo, y analizarlo en sus diversas implicaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas son herederas de un mensaje de libertad. Bolívar fue ante todo un hombre civilizado, convencido en lo profundo de principios humanistas, y escéptico ante toda tentación autoritaria. Además, nuestras Fuerzas Armadas viven en democracia y la defienden; por ello es esencial que tengan presentes los dilemas y dificultades que pueden plantearse a un sistema político libre. Las crisis no son patrimonio exclusivo de las dictaduras; también las democracias pueden experimentarlas. Lo esencial es entender que ello no debe tomarse como excusa para suprimir la libertad, pues ninguna amenaza es tan grave como para sacrificar lo que nos hace dignos: ser hombres libres.

El aterrador caso argentino produjo serias y casi insuperables divisiones entre las Fuerzas Armadas de esa hermana nación; su paso por el poder les ha llevado al desprestigio y a la desmoralización, y esto no debe repetirse jamás, ni en Argentina ni en ninguna otra parte. Para ello es necesario un esfuerzo conjunto, de civiles y militares. Lo que se requiere es una relación basada en el respeto mutuo, la claridad, los valores democráticos y la lucha permanente contra todo síntoma de mesianismo, contra toda tentación autoritaria, contra todo intento de confundir guerra y

Stanislav Andrevski, «On the Peaceful Disposition of Military Dictatorships», *The Journal of Strategic Studies*, 3, 3, 1980, p. 3.

política o idolatrar la seguridad nacional como algo que pueda estar por encima de la libertad y el cumplimiento de la ley. El perfeccionamiento de la democracia en Venezuela exige una clara comprensión y una firme toma de posiciones por parte de todos, civiles y militares, ante lo ocurrido en Argentina y otros países que han estado oprimidos en tiempos recientes bajo la dictadura militar.

En síntesis, pienso que los venezolanos debemos por un lado tener claro que la democracia, para sobrevivir, debe reformarse, y que con voluntad política y la firme determinación de combatir el populismo esa meta de perfeccionamiento es factible. Por otro lado hay que entender que los golpes de Estado y las intervenciones militares en la política no ocurren a la ligera, sino que suelen surgir como resultado de la crisis de la democracia y de la incapacidad de los dirigentes civiles para enfrentarla. Nuestras Fuerzas Armadas, por su parte, deben en todo momento tener presente las experiencias del mando militar en otras naciones —y en la nuestra hace tres décadas—, y mantener su fe en un régimen de libertades para todos los venezolanos. Nuestra democracia no requiere salidas de tipo revolucionario, socialistas o autoritarias, pues el sistema político venezolano todavía permite la reforma civilizada de las instituciones y estructuras que le componen. En lo que sigue trataré de precisar en qué dirección general deben orientarse esos cambios.

¿Somos capaces de ser libres y prósperos?

En las secciones precedentes he sometido a una severa crítica el camino que hasta el presente ha venido siguiendo la democracia venezolana. Tal vez algunos lectores piensen que en ocasiones me he excedido, mas estoy convencido de que sólo mediante un franco y crudo análisis de nuestra realidad, que no haga concesiones ni al sentimentalismo ni a la demagogia, podremos vislumbrar una vía clara de rectificación. Mi propósito, como he insistido varias veces, es salvaguardar lo que tiene de positivo nuestro régimen político, y alertar sobre aquellos aspectos negativos que

de no ser corregidos podrían conducir a su irrecuperable deterioro. A pesar de mis críticas, reconozco con legítimo entusiasmo el enorme significado que reviste el hecho de que los venezolanos, contra las predicciones de no pocos escépticos, hayamos sido capaces de preservar un sistema de libertades por casi tres décadas. Hemos logrado esto en un contexto —Latinoamérica— que se ha caracterizado tradicionalmente por la aparente aridez de su tierra ante los intentos de sembrar en ella por mucho tiempo una existencia libre y digna para sus habitantes.

En efecto, la vigencia de la democracia representativa en Venezuela, con las virtudes y defectos que la definen, es una realidad de gran peso y relevancia que contrarresta los argumentos de numerosos intelectuales y políticos, propios y extraños, que a lo largo de toda nuestra historia como nación independiente han expresado su pesimismo sobre la capacidad de nuestro pueblo para ser libre y alcanzar una prosperidad creciente, material y cultural, a través de su esfuerzo y trabajo creador.⁷⁸ Sin embargo, la persistencia de esa línea de interpretación pesimista, aún hasta nuestros días, no debe ser dejada de lado como si se tratase de una especie de aberración atribuible a algunas mentes desordenadas. Lo cierto es que en nuestra trayectoria histórica han predominado la violencia y el atraso, y que el sistema de libertades que hoy nos rige se sostiene sobre bases precarias, que exigen todavía una enérgica empresa de apuntalamiento. Por esto, la pregunta que da su título a esta sección debe ser correctamente formulada así: ¿Podemos ser libres y prósperos dentro del marco de una democracia política ajena al clientelismo y la demagogia?

Para responder adecuadamente esta interrogante, que es también nuestro primordial desafío, hay que enfrentar la realidad descarnadamente, sin engaños cómplices y falsificaciones acomodaticias, lo cual no es fácil en nuestro medio. La dificultad para afrontarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno con claridad y sin temores —problema en torno al cual Freud elaboró toda una teoría psicológica general— adquiere aparentemente un acento particular entre los latinoamericanos. Como lo expone Octavio Paz en su famoso —y ambiguo— libro *El laberinto de la soledad*, refiriéndose a los mexicanos, pero en términos posibles de generalizar: «Mentimos por placer y fantasía, sí, como todos los pueblos imaginativos, pero también *para ocultarnos* y ponernos al abrigo de in-

Sobre este tema véase la obra de Augusto Mijares, *La interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana*. Madrid: Afrodisio Aguado S. A., 1952.

trusos. *La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana* [...] Con ello no pretendemos nada más engañar a los demás, *sino a nosotros mismos*» [italicas AR].⁷⁹ Y según el venezolano Carlos Rangel: «En nuestras formulaciones más inteligentes, en nuestros actos más graves, suele haber, debe haber, *tiene que haber* algún grado de distorsión, algún acomodo a la exigencia social generalizada de que las cosas no sean enfrentadas tal cual son...». ⁸⁰ Creo que hay mucho de cierto en esto, y que por lo tanto la lucha contra la mentira es una misión política clave, más aún, es un deber ético en el esfuerzo por enrumbar nuestros países sobre un sendero de superación.

Una democracia no populista es una democracia basada en el sentido de la realidad por parte de los ciudadanos y sus dirigentes. Ese sentido de la realidad no surge como una especie de dádiva de la Providencia, sino que se conquista. Para lograrlo, es indispensable combatir los mitos en los que envolvemos las mentiras que pasajeraamente nos reconfortan y a la vez nos impiden ver de frente la realidad. Como decía Malraux, «los mitos no acuden a la complicidad de nuestra razón, sino a la de nuestros instintos». Nuestro combate debe ser un combate *por la razón* y por ello contra los mitos, contra las mentiras tranquilizadoras que hemos inventado para apaciguar nuestras conciencias.

Son dos los mitos que quiero discutir en estas páginas. Denomino al primero el mito de la redención, y tiene dos componentes. Por un lado nos dice —citando de nuevo a Paz— que así como para otros pueblos «el mundo es algo que se puede perfeccionar», para nosotros en Latinoamérica el mundo es «algo que se puede *redimir*». ⁸¹ Traducido en términos políticos en su versión progresista, este aspecto del mito de la redención le concede a la política una misión de cambio total, radical y perfecto que nos llevará, con una buena dosis de emoción, banderas alzadas, discursos fogosos y marchas callejeras, del reino de la injusticia y la opresión al imperio de la solidaridad y la igualdad. Todo ello, por supuesto, en forma rápida y prescindiendo preferiblemente de los formalismos y de los valores característicos de una sociedad liberal.

El segundo componente del mito de la redención nos indica que el proceso de cambio será el producto de la fructificación definitiva de una

79 Octavio Paz, *El laberinto de la soledad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1963, p. 32.

80 Carlos Rangel, *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1976, pp. 71-72.

81 Paz, p. 20.

identidad propia, que nos distingue del resto del mundo, que es comunitaria, y que debe llevarnos a construir un modelo político adaptado a nuestras circunstancias, con nuestras propias versiones de la libertad, el orden y la justicia.

Así explicado, podría pensarse que este mito tan sólo expresa la posición revolucionaria, salvacionista y mesiánica sobre el cambio en América Latina. Sin embargo, el mito de la redención tiene una variante empleada por los sectores autoritarios de extrema derecha en el continente para justificar la tesis del gendarme necesario. De acuerdo con esta formulación, nuestra identidad se define por la inmadurez y orfandad políticas de la mayoría, por una situación económica y social que exige el mando de una mano firme, ya que en las presentes y previsibles condiciones no estamos en capacidad de vivir en libertad. Es decir, tanto la extrema derecha como la izquierda en Latinoamérica hacen uso del mito de la redención y su corolario sobre nuestras presuntas incapacidades; unos proponen al gendarme necesario, otros la salida colectivista revolucionaria, pero ambos coinciden en un punto: los latinoamericanos no podemos vivir en sociedades liberales y democráticas.

El segundo mito al que deseo referirme, y cuyas implicaciones económicas discutiré ampliamente más adelante, es el mito de Odiseo. Lo llamo de esa forma a consecuencia de un pasaje que se encuentra al comienzo de la *Odisea*, en el cual Homero hace decir a Zeus esta frase: «¡Qué lamentable es que los hombres nos culpen de sus desgracias y nos atribuyan a nosotros, los dioses, la fuente de sus males, cuando en verdad son sus debilidades y vicios los que originan todos sus sufrimientos!». ⁸² El mito de Odiseo, que ha sido y continúa siendo en extremo influyente en los ámbitos intelectual y político en América Latina, consiste básicamente en atribuir *a otros* y no a nosotros mismos la causa de nuestros reiterados fracasos históricos, de nuestras repetidas fallas en el intento de construir sociedades libres, con sólidas instituciones democráticas, economías sanas y prósperas, con un sector empresarial innovador y una administración estatal sana y productiva. Esos «otros» cambian a lo largo de nuestra historia; unas veces ha sido la herencia colonial, otras el imperialismo o la dependencia, pero la idea central es siempre la misma: nuestros males vienen *de afuera* y sólo el florecimiento de nuestra identidad nos realizará plenamente.

Homero, *The Odyssey*. Traducción de B. V. Rieu. Harmondsworth: Penguin Books, 1983, p. 26.

En torno a este segundo mito, Carlos Rangel ha escrito un par de libros demoleedores, cuyos poderosos razonamientos resultaría superfluo repetir aquí.⁸³ Sin embargo, en vista de la trascendencia del tema y su impacto sobre las teorías económicas en boga en nuestro medio —especialmente las tesis de la dependencia y el Nuevo Orden Económico Internacional—, será motivo de análisis en secciones posteriores de este trabajo. En síntesis, y por razones que expondré oportunamente, respondo al mito de Odiseo con esta frase de Polibio: «Siempre que sea posible hallar las causas reales de lo que ocurre, uno debe evitar recurrir a los dioses».⁸⁴ En otras palabras, los problemas de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular no sólo tienen raíces esencialmente *autóctonas*, sino que, además, es necesario hacer todo lo posible por evitar caer en la trampa ideológica (el mito) de atribuir a otros la culpa por nuestras fallas y deficiencias, ya que ello no significa otra cosa que contribuir a la mentira o apelar a la verdad sólo a medias.

Los orígenes del mito de la redención y su corolario de especulaciones acerca de nuestra identidad y madurez para ser libres, se hunden profundamente en nuestra evolución histórica. Desde los albores de la Independencia hasta nuestros días el mito ha sido el producto del abismo que se ha puesto de manifiesto entre nuestras expectativas de libertad política doméstica y progreso social y económico, por un lado, y de otro lado las duras realidades del atraso, las guerras civiles, la violencia política, el aplastamiento de las libertades, los desequilibrios y divisiones sociales que han sido constantes en nuestro proceso evolutivo como pueblos, con algunas diferencias, desde luego, entre diversas naciones latinoamericanas. De este abismo ha surgido una especie de visión trágica de nuestra historia, que se caracteriza tanto por la eterna búsqueda de una identidad jamás hallada como por la tentación de definirnos *en función de un rechazo* a la civilización y mundo cultural al que fundamentalmente nos debemos —Occidente—, y a su más legítimo legado político: el ideal de una sociedad de hombres libres en un marco de leyes iguales para todos. Dicho de otra manera, buscamos esa identidad con base en una estrategia de rechazos, cuyo producto final —la autenticidad que nos define— ha sido siempre concebida, desde la extrema derecha y la izquierda, *como una barrera contra los valores liberales*.

83 Se trata de sus dos obras, ya citadas, *El tercermundismo* y *Del buen salvaje al buen revolucionario*.

84 Citado por Carr, p. 74.

Este último es el punto que a mi modo de ver requiere ser enfatizado en relación con el mito de la redención: el hecho de que la conclusión a que llega, en sus distintas versiones, es *siempre* un rechazo a la imagen de una sociedad de individuos libres, sujetos al imperio de leyes imparciales en un orden democrático que garantice la libertad económica. Complementariamente el mito exalta el colectivismo, el irracionalismo, la comunidad, lo que va más allá del individuo, el culto de la emoción y el desprecio a la razón. En su versión de derecha el mito de la redención desemboca en la propuesta de un gobierno autoritario, cuyo nacionalismo se manifiesta en la condena de lo extranjero y la estatización de la economía, un gobierno que nos guíe hasta que alcancemos la suficiente madurez para ser libres. En su versión de izquierda el mito combina la ideología de la autenticidad con la economía marxista para alcanzar la misma conclusión: las naciones latinoamericanas no pueden funcionar como sociedades liberales occidentalizadas; tenemos por lo tanto que inventar nuestras soluciones de acuerdo con una fórmula propia de la libertad y la democracia, en un nuevo socialismo.

Insisto en que éste es el *resultado ideológico* del mito de la redención, aunque el camino que hasta allí conduce asume en ocasiones el disfraz de una legítima –pero casi siempre mal concebida– búsqueda de identidad, de lo que nos es peculiar y característico, y que ha obsesionado las mentes de muchos de nuestros intelectuales, escritores, poetas, ensayistas y tratadistas políticos por más de 150 años. Semejante *resultado ideológico político* debe entonces distinguirse nítidamente de otro sentido de esa búsqueda, entendida como empresa cultural, de reconocimiento, comprensión y rescate de nuestra herencia y creaciones, de lo cual no es ajeno, como intentaré mostrar, el ideal de una sociedad libre bajo la ley. Este otro sentido de la búsqueda de identidad es el que queda plasmado, por ejemplo –y podrían citarse muchos pasajes similares de intelectuales latinoamericanos–, en el siguiente texto de Uslar Pietri:

Desde el siglo XVIII [...] la preocupación dominante en la mente de los hispanoamericanos ha sido la de la propia identidad [...] Se ha llegado a hablar de una angustia ontológica del criollo, buscándose a sí mismo sin tregua, entre contradictorias herencias y disímiles parentescos, a ratos sintiéndose desterrado en su propia tierra, a ratos actuando como conquistador de ella, con una fluida noción de que todo es posible y nada está dado de manera definitiva y probada.

Agrega Uslar que «la América Hispana es tal vez la única gran zona abierta en el mundo actual al proceso del mestizaje cultural creador», y concluye que «En lugar de mirar esa característica extraordinaria como una marca de atraso o de inferioridad, hay que considerarla como la más afortunada y favorable circunstancia para que se afirme y extienda la vocación de Nuevo Mundo que ha estado asociada desde el inicio al destino americano».⁸⁵

Esta inquieta búsqueda de identidad, que tanto ha consternado a buen número de nuestros más notables espíritus en el terreno intelectual y político no tiene en sí misma nada de malo, en particular si se dirige, como ya dije, a rescatar, preservar y enaltecer –sin ánimo provinciano o folklorismo chovinista– nuestros valores culturales. El problema, repito, empieza cuando, siguiendo esa vía, se llega a la conclusión de que nuestra identidad es incompatible con los valores occidentales que fundamentan las sociedades liberales y que requerimos una salida propia, pues como escribe Leopoldo Zea:

La América íbera deberá seguir sus [...] caminos, tal y como lo hicieron los pueblos modernos, y crecer de acuerdo con ellos. Así lo hicieron los pueblos sajones que han crecido *atendiendo a su espíritu individualista y libre*. Los íberos también podrán hacerlo *atendiendo a su viejo sentido comunal* [...] La América íbera no podrá actuar en función de ideas propias de los sajones, por buenas que éstas sean; tiene que atender, en primer lugar, a su realidad y modo de ser [...] Bolívar [sabía] de la diversa constitución de los pueblos sajones, de los pueblos modernos, frente a los pueblos de origen íbero. Los primeros han hecho al individuo el centro de sus relaciones; los segundos sólo podrán apoyarse en su sentido de comunidad que les es implícito [*itálicas AR*].⁸⁶

Nótese que en este pasaje se establece casi explícitamente una presunta diferencia entre la libertad sajona y otra libertad íbera, sin que quede claro en qué consiste exactamente. Se nos habla de un espíritu comunitario, que supuestamente es por sobre todo patrimonio de los pue-

85 Arturo Uslar Pietri, *En busca del Nuevo Mundo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1969, pp. 9, 25. Puede verse también el ensayo de Leopoldo Zea, *América Latina y el mundo*. Buenos Aires: Eudeba, 1965, pp. 5-18, 67-80, y Paz, p. 17.

86 Leopoldo Zea, *América en la historia*. Madrid: Revista de Occidente, 1970, pp. 253-254.

blos íberos, pero tampoco se nos explica de qué se trata en concreto tal sentimiento de comunidad. De hecho, este párrafo, que es típico de toda una línea de análisis sobre la identidad latinoamericana, no sólo distorsiona la historia sino que también ofrece una interpretación equivocada del pensamiento de Bolívar sobre el tema. Si de comunidad se trata, es en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos donde más se han desarrollado las formas locales de gobierno; éstas son además sociedades que han dado amplias muestras de solidaridad a lo largo de su evolución histórica. En cambio, y por duro que sea admitirlo, tanto España como las naciones latinoamericanas se han caracterizado por sus divisiones, querrelas y desgarramientos internos, así como entre sí mismas. Por ello Ortega y Gasset apuntaba que la falta de solidaridad, ese «no sentirse parte de *un todo*», marca la decadencia de las sociedades hispánicas.⁸⁷

Es por lo demás inútil y hasta absurdo plantear el problema en cuestión —que es el de nuestra capacidad para ser libres— como si se tratase de una confrontación entre sajones e íberos, que atribuye a los primeros el monopolio de los ideales liberales y a los segundos una especie de misticismo comunal, que contrasta con el individualismo egoísta de otros pueblos. Semejante concepción distorsiona el asunto que nos ocupa, pero tiene una ventaja al nivel de la propaganda ideológica, pues le hace el juego a los complejos, resentimientos e ignorancia que en diversos sectores latinoamericanos —políticos, intelectuales y religiosos— se abrigan frente al legado del racionalismo, el espíritu científico y el liberalismo, así como frente al progreso de los países sajones. En vista de que se han hecho esfuerzos por sumar el prestigio de Bolívar a esta cruzada del irracionalismo, creo indispensable despejar el panorama en cuanto a la posición del Libertador en torno al tema que ahora me ocupa, para luego retornar a las manifestaciones contemporáneas del mito de la redención.

Bolívar demostró honestidad intelectual al reconocer francamente, ya en la época del *Manifiesto de Carúpano* (1814), que el desgarramiento del *statu quo* colonial iba a tener efectos traumáticos sobre Hispanoamérica, y que el camino de recuperación sería posiblemente agotador. Sus intuiciones sociológicas reafirmaban esa convicción, y sostenía en la *Carta de Jamaica* que «Toda idea relativa al porvenir de este país [el Nuevo Mundo, AR] me parece aventurada», proporcionando esta imagen de la situación:

Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte [...] Yo considero el estado actual de la América, *como cuando desplomado el Imperio romano cada desmembración formó un sistema político*, conforme a sus intereses y situación o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones; *con esta notable diferencia: que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos*; mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles [...] *nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado...* [itálicas AR; también en las otras citas de estas *Obras del Libertador*].⁸⁸

Este pasaje refleja dos percepciones de Bolívar, las cuales se acentuaron posteriormente: en primer lugar, que el quiebre del lazo colonial había producido un vacío histórico, que de no llenarse con prontitud podía degenerar en caos; en segundo lugar, que existía un factor de naturaleza social que jugaba un papel en el proceso independentista, y que ese factor, por naturaleza, contribuía a la inestabilidad política. Este problema, es decir, de la dimensión social de los conflictos y su impacto político, surgió con mayor nitidez en el *Discurso de Angostura*. Allí el Libertador dijo:

Es imposible asignar con propiedad, a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado; el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma Madre, nuestros Padres diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un reto de la mayor trascendencia.⁸⁹

¿A qué se refería el Libertador?, ¿cuál era el desafío que su intuición política percibía?

Al realismo político de Bolívar no podía ocultarse el hecho de que la diversa composición étnica de los pueblos hispanoamericanos, que en sí

88 Simón Bolívar, *Obras completas*, tomo I, p. 164.

89 *Ibid.*, tomo II, p. 1140.

misma generaba tensiones, tenía también una dimensión social y política dentro de una sociedad dividida y profundamente desigual. El reto para Bolívar consistía en *superar gradualmente estas diferencias, en canalizar el cambio político y social dentro de un orden estable*, e impedir el desencadenamiento de las pasiones revolucionarias y la guerra de castas, cuyo producto final no podía ser otro que el desmembramiento del Estado y la fragmentación de la nación. Así, al vacío histórico creado por la ruptura de la tradición se sumaban los peligros representados por la heterogeneidad étnica y las diferencias sociales, todo lo cual exigía —según la aguda intuición política de Bolívar— «un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para *manejar una sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración*». ⁹⁰

¿Cómo esperaba Bolívar hacer frente a este desafío? La heterogeneidad étnica, con su corolario de tensiones y divisiones, sólo podía desaparecer mediante un proceso de mestizaje, y así lo planteó el Libertador en su mensaje al Congreso de Angostura: «Para sacar de este caos nuestra naciente República, todas nuestras facultades morales no serán bastantes, si no fundimos la masa del pueblo en un todo [...] La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla». ⁹¹ Las desigualdades sociales, por otra parte, tenían también que corregirse dentro de un marco legal sustentado por el Estado en forma, pero sólo podrían desaparecer de manera gradual. ⁹² Bolívar estaba plenamente comprometido con el principio de la progresiva «igualación de oportunidades» dentro de un orden político libre y legítimo, basado en la soberanía popular. A la vez, el Libertador se oponía al logro de la igualdad a través de cambios súbitos y revolucionarios, que a su modo de ver sólo conducían a la anarquía y finalmente al despotismo.

Los esfuerzos de Bolívar por establecer el orden chocaban no solamente contra la debilidad institucional de las nuevas repúblicas, sino que, también, el factor de convulsión social venía a añadir otro obstáculo a los intentos de crear un Estado libre y soberano, basado en la paz y las garantías civiles domésticas. En junio de 1828 Bolívar insistía, esta vez a Páez: «Yo espero por momentos una horrorosa tormenta, y, por lo mismo, debemos prepararnos a conjurarla, tomando todas las medidas de

Ibid., p. 1141.

Ibid., p. 1149.

Véase *ibid.*, pp. 1140-1141, 1215, y tomo 1, p. 1076.

90

91

92

precaución para que el desorden no nos arrastre a los crímenes de una sangui-naria anarquía». En esa misma carta el Libertador se mostraba dispuesto a sacrificar uno de sus más preciados proyectos, la unidad colombiana, a fin de contener el torrente de la anarquía política, la guerra civil y el caos social:

Yo había propuesto [...] una resolución que conciliara todos los intereses de las diferentes secciones de Colombia, *que era dividirla en tres o cuatro estados y que se ligaran para la defensa común*, pero nadie se ha atrevido a apoyar este expediente, y todo el mundo me ha acusado de que quiero abandonar la patria y aun perderla, sacrificando mi gloria y los más sagrados intereses de Colombia [...] *mi única mira fue combinar intereses opuestos y partidos encarnizados*.⁹³

Nuevamente Bolívar retomaba acá su concepción de la política como búsqueda de compromisos y acomodo de intereses divergentes; pero los problemas que afrontaba eran de una naturaleza tal que ni siquiera la enorme fortaleza de su voluntad creadora podía controlarlos. De aquí sus reiteradas expresiones de pesimismo: «Los que se han creado en la esclavitud —decía en marzo de 1827— como hemos sido todos los americanos, no sabemos vivir con simples leyes y bajo la autoridad de los principios liberales».⁹⁴

El pensamiento político de Bolívar se fraguó en una ardua confrontación con la realidad hispanoamericana y fue claramente concebido por el Libertador como una respuesta al problema del orden y la libertad. Su conciencia de las condiciones adversas a las prácticas democráticas imperantes en los pueblos emancipados, le llevaron a concebir salidas institucionales y sociales que permitiesen una evolución gradual, preservando a la vez la continuidad del Estado. Las diversas instituciones que a lo largo de su carrera propuso Bolívar —la Presidencia Vitalicia, el Senado Hereditario, el Poder Moral—, su lucha por el centralismo y la unidad fueron sin excepción manifestaciones de un mismo propósito político: avanzar en la creación de un Estado soberano y una sociedad libre, pero con paso seguro, sin pretender alcanzar de un salto un sistema de perfec-

93 Bolívar, tomo II, p. 367.

94 *Ibid.*, p. 76.

ción, y con la vista fija en las realidades concretas de su medio y su tiempo.⁹⁵ En materia de reforma social, Bolívar captó el enorme potencial de conflicto y destrucción encerrado en las desigualdades generadas por el régimen colonial, que luego, durante la guerra de Independencia, hallaron un canal de expresión que pronto se convirtió en un río desbordado de luchas civiles. El Libertador confiaba en que la igualdad legal y el progreso educativo bajo la protección de un Estado en forma, pudiesen corregir los graves desajustes sociales heredados por naciones que apenas se asomaban a la vida independiente;⁹⁶ sin embargo, un proceso como éste, de transformación gradual y ajustes progresivos, sólo podía efectuarse en un marco de estabilidad, que era precisamente lo que faltaba en las nuevas naciones. Sus consistentes esfuerzos de reforma se vieron por lo tanto cercados por un océano tumultuoso de confrontaciones, que no permitirían por muchos años, ni en Venezuela ni en otros países del área, más que reconciliaciones pasajeras entre la estabilidad, la legitimidad de los gobiernos y la vigencia de los derechos ciudadanos.

Los escritos del Libertador revelan tres líneas de pensamiento básicas en cuanto al problema del diseño institucional para las nuevas naciones hispanoamericanas: 1) Las instituciones y las leyes no son entes abstractos, aptos para un uso universal e indiscriminado, sino respuestas específicas del desarrollo político que deben conformarse y armonizarse a las características propias de los pueblos que van a regir. 2) Las normas de gobierno, en sí mismas, no son decisivas en la determinación de la evolución política de un pueblo. Lo esencial son las cualidades particulares del elemento humano, y son las virtudes ciudadanas el único dique verdaderamente sólido contra los males extremos de la anarquía y la tiranía. 3) Los pueblos hispanoamericanos, que recién emergían al disfrute de los derechos políticos y al ejercicio práctico de las libertades públicas, no estaban en condiciones de reproducir, sin sustanciales variaciones, los esquemas institucionales de los sistemas democráticos más avanzados de la época (Gran Bretaña y Estados Unidos), o de implantar sin cambios los ideales que el enciclopedismo francés postulaba como criterio insuperable de perfección política.

Si bien Bolívar concedía importancia secundaria a las formas de gobierno, con ello no estaba afirmando a la vez que todas fuesen igualmen-

Véase tomo I, pp. 42, 711.

Véase tomo II, p. 1150.

95

96

te valiosas desde el punto de vista de los principios políticos, o que él no tenía preferencias por unas sobre otras. Bolívar fue siempre sólidamente republicano y estuvo convencido de que la monarquía era una forma de gobierno anacrónica, que no se compaginaba con las realidades y el espíritu de la emancipación americana. Sus argumentos tenían otro objetivo, y se dirigían a contrarrestar la tendencia, muy extendida en influyentes círculos patriotas, a copiar modelos constitucionales extranjeros, y también a transmitir su convencimiento de que el debilitamiento del Estado a través de fórmulas federalistas impediría la creación de un orden político estable y erosionaría los diques que contenían la anarquía. Por esto Bolívar proponía, aun en las postrimerías de la existencia de Colombia, «un sistema central competente proporcionado a la extensión del territorio y a la especie de sus habitantes», y sostenía que «Un estado civilizado a la europea presenta menos resistencia al gobierno de parte del pueblo y de la naturaleza que una pequeña provincia de América, por las dificultades del terreno y la ignorancia del pueblo; *por lo mismo, nos veremos forzados a dar a nuestras instituciones más solidez y energía que las que en otros países se juzgan necesarias*». ⁹⁷ En última instancia, las reflexiones de Bolívar se enfocaban hacia lo que podríamos llamar una lección de pedagogía política: «La teoría de los principios es buena en las épocas de calma, pero cuando la agitación es general la teoría sería un absurdo, *como pretender regir nuestras pasiones por las ordenanzas del cielo que, aunque perfectas, no tienen conexión algunas veces con las aplicaciones*». ⁹⁸

La tendencia, fuertemente enraizada en el pensamiento de Bolívar, a restar importancia a las instituciones consideradas en abstracto como fórmulas de regeneración política, era consecuencia de su contacto directo con su realidad geográfica y socioeconómica hispanoamericana a lo largo de casi dos décadas de lucha. Esa experiencia suscitó en el Libertador un marcado pesimismo sobre la situación de orfandad política de los nuevos pueblos, y fortaleció su idea de que el factor crucial del desarrollo político son las virtudes cívicas de los ciudadanos y su integración en una conciencia nacional. Por ello decía en la *Carta de Jamaica* que «en tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que ven-

97 *Ibid.*, p. 773.

98 Tomo I, p. 1408.

gan a ser nuestra ruina». ⁹⁹ Resulta evidente que Bolívar asumía que tales virtudes aún no existían para el momento en que realizaba su análisis sobre el panorama político de Hispanoamérica. Así, insistía en el *Discurso de Angostura*: «Los códigos, los sistemas, los estatutos por *sabios que sean son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades*: ¡hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las Repúblicas!». ¹⁰⁰ El Libertador estaba convencido de que las nuevas naciones se hallaban «al borde de un cráter», ¹⁰¹ que la «tendencia de una república es hacia la anarquía, que yo considero como la demencia de la tiranía» ¹⁰² y que «nuestros débiles ciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad». ¹⁰³ Por todo esto polemizaba con aquellos demagogos que olvidaban que la práctica de la libertad no se sostiene sino con virtudes y que donde éstas reinan es impotente la tiranía. Así, pues, «*mientras que seamos viciosos no podemos ser libres, désele al Estado la forma que se quiera*», ¹⁰⁴ y concluía que la constitución de la Nueva República debía ser «capaz de dar estabilidad a las instituciones, garantías a todos los ciudadanos y *toda libertad e igualdad legales que el pueblo colombiano es susceptible de recibir en el actual estado de su civilización*». ¹⁰⁵

El problema era entonces: ¿A quién tocaba definir ese nivel de civilización?, ¿quién se encargaría de discernir que el nivel de desarrollo alcanzado en un momento determinado era el adecuado para el disfrute pleno de la libertad?, ¿qué significa, en última instancia, una libertad absoluta? El pensamiento del Libertador, su honesta y franca convicción de que las condiciones imperantes en Hispanoamérica en el período inmediatamente posterior a la emancipación hacían muy difícil la implantación de una república democrática al estilo norteamericano, esa convicción, repito, conducía su reflexión política al mismo dilema que en otro contexto había lúcidamente apuntado Kant: el ejercicio de la libertad sólo se aprende en libertad, los hombres sólo llegan a ser políticamente libres si un marco institucional adecuado se los permite o, para ponerlo en otras palabras, las virtudes que hacen a los hombres aptos

Ibid., p. 168.

Tomo II, p. 1142.

Tomo I, p. 566.

Ibid., p. 1426.

Tomo II, p. 1136.

Ibid., p. 309.*Ibid.*, p. 382.

99

100

101

102

103

104

105

para la libertad no pueden adquirirse excepto en libertad. Este dilema tiene un aspecto *teórico* y otro de naturaleza eminentemente *práctica*. Desde una perspectiva teórica, el pensamiento de Bolívar según el cual un gobierno paternal, protector y firme se encargaría de propiciar la madurez política de los pueblos libertados, presenta importantes dificultades, y es por eso que fue objeto de tan virulentos ataques en vida del Libertador. Desde un ángulo práctico, sin embargo, es evidente que la posición adoptada por Bolívar respondía a las exigencias del medio, a la aguda percepción de que los intentos de trasladar el modelo federalista norteamericano a las circunstancias de la Hispanoamérica de entonces se estrellarían irremediabilmente contra las limitaciones impuestas por una realidad diferente.

Este debate, tal y como se llevó a cabo entre el Libertador y aquellos de sus oponentes ideológicos que, con igual honestidad pero menor sentido de las realidades, proponían otras alternativas de organización política, es un ejemplo notable del carácter trágico que en ocasiones asume la lucha política y que impide llegar a un equilibrio perfecto entre opiniones y actitudes divergentes. Para Bolívar era obvio que la república democrática, tal como existía en Estados Unidos, o el ejercicio práctico de la libertad dentro del orden, como se daba bajo la monarquía constitucional británica, simplemente no podía reproducirse sino después de un período relativamente largo de *estabilización institucional* en las nuevas naciones de Hispanoamérica. Para sus adversarios ideológicos, por otra parte, parecía obvio que las propuestas del Libertador se acercaban en lo sustancial a los principios de un despotismo ilustrado: todo por el pueblo pero sin el pueblo, y que acarreaban serios riesgos de degenerar en un inaceptable autoritarismo.

Si nos adentramos aún más en la reflexión teórica del Libertador, queda claro que el principal modelo de desarrollo político que tenía en mente, y que le servía de medida de comparación al juzgar el grado de evolución social de los pueblos hispanoamericanos, era el británico. Cuando en septiembre de 1829, abatido por el vendaval anárquico que se desataba a su alrededor, escribía al coronel O'Leary que «Si he de decir mi pensamiento, yo no he visto en Colombia nada que parezca gobierno ni administración ni orden siquiera»,¹⁰⁶ el punto de referencia de su comparación era Gran Bretaña. En 1819, en Angostura, Bolívar había

recomendado a los legisladores «el estudio de la Constitución británica que es la que parece destinada a operar el mayor bien posible a los pueblos que la adoptan»; mas de inmediato añadió que:

... por perfecta que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. Cuando hablo del gobierno británico sólo me refiero a lo que tiene de Republicanismo, y a la verdad ¿puede llamarse pura Monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular, la división y el equilibrio de los poderes, la Libertad civil, de Conciencia, de Imprenta, y *cuanto es sublime en la política?* ¿Puede haber más Libertad en ninguna especie de República? ¿Y puede pretenderse a más en el orden social?

Y posteriormente, en un párrafo que podría superficialmente interpretarse como contradictorio con lo dicho anteriormente, Bolívar insistía: «Yo os recomiendo esta Constitución [...] *como la más digna de servir de modelo* a cuantos aspiran al goce de los derechos del hombre y a toda la felicidad política *que es compatible con nuestra frágil naturaleza*». ¹⁰⁷ Si lo esencial en la vida política eran las características del elemento humano, no las leyes e instituciones formales, ¿qué sentido tenía guiarse por un esquema constitucional que era producto de una historia y unas condiciones geográficas y sociológicas distintas e irrepetibles?

Esta pregunta nos acerca a una significativa paradoja en el pensamiento político del Libertador, que pone de manifiesto una vez más su idea de la política como lucha creativa, *como un proceso de enfrentamiento a una realidad concreta inspirado por la visión de una alternativa posible*. La paradoja consiste en que Bolívar, a la vez que restaba importancia a las instituciones y acentuaba la del factor humano, cifraba sin embargo grandes esperanzas en el poder creador del gobierno y la plasticidad de los pueblos a sus iniciativas. Es decir, que el Libertador, por un lado, afirmaba que las constituciones y las leyes no son decisivas si los hombres carecen de las virtudes políticas para vivir en libertad y democracia; a la vez Bolívar era pesimista sobre el grado de desarrollo político de los pueblos hispanoamericanos para la época. No obstante, por otro lado, el Libertador depositaba expectativas, que la experiencia demostró excesivas, sobre la posibilidad de que las nuevas naciones respondiesen de

manera maleable y con relativa rapidez al influjo benefactor de sus propuestas institucionales. Ello aclara el sentido de sus palabras en carta del 26 de mayo de 1820 a Guillermo White, quien había cuestionado las —en su opinión— exageradas esperanzas que Bolívar tenía en el Poder Moral que había propuesto a los legisladores en su *Discurso de Angostura*: «Todo el cuerpo de la historia —escribía el Libertador— *manifiesta que los hombres se someten a cuanto un hábil legislador pretende de ellos y a cuanto una fuerte magistratura les aplique [...] ¡A qué no se han sometido los hombres! ¡A qué no se someterán aún...!*».¹⁰⁸

En Angostura el Libertador había sugerido la creación del Poder Moral con el propósito «*de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía nos ha dado*»,¹⁰⁹ y al respecto comentaba a White lo siguiente: «*Yo tengo muy poca confianza en la moral de nuestros conciudadanos, y sin moral republicana, no puede haber gobierno libre. Para afirmar esta moral, he inventado un cuarto poder que críe a los hombres en la virtud y los mantenga en ella*».¹¹⁰ Sin embargo esta institución jamás llegó a materializarse ni a cumplir el elevado papel que Bolívar quiso otorgarle. Algo muy semejante ocurrió con la Constitución de Bolivia, que el Libertador aspiraba fuese adoptada, aunque con leves variaciones, por otros países del área: su duración fue muy limitada, su existencia azarosa y su impacto concreto muy distante de satisfacer las exaltadas expectativas de Bolívar. La Constitución de Bolivia sobrevivió en ese país sólo dos años; en el Perú, donde también se adoptó, duró aún menos tiempo, y en ningún otro país hispanoamericano tuvo vigencia alguna. No obstante, el Libertador afirmaba a Santander el 8 de agosto de 1826 que:

... ante la crisis política imperante no encuentro otro modo de conciliar las voluntades y los intereses encontrados de nuestros conciudadanos que el presentar a Colombia la Constitución boliviana, *porque ella reúne a los encantos de la federación, la fuerza del centralismo; a la libertad del pueblo, la energía del gobierno; y, en fin, a mi modo de ver las cosas, yo que las peso en mi corazón, no encuentro otro arbitrio de conciliación que la constitución boliviana, la que contemplo como la arca donde únicamente podemos sal-*

108 Tomo I, p. 433.

109 Tomo II, p. 1151.

110 Tomo I, pp. 442-443.

*var la gloria de quince años de victorias y desastres, y, últimamente, yo presentaré a Colombia esta medida de salvación como mi último pensamiento.*¹¹¹

Este dilema en el pensamiento político de Bolívar entre una tendencia hondamente realista, que percibía las limitaciones impuestas por el entorno físico y la ausencia de un basamento cívico sobre los intentos de crear un orden estable, y, por otra parte, una tendencia idealista que confiaba en exceso en sus proyectos institucionales, sólo puede explicarse por la voluntad creadora de un hombre que entendía la misión arquitectónica de la política, y asumía responsablemente la tarea de estadista. Si bien Bolívar entendía las raíces profundas de la anarquía sociopolítica hispanoamericana, tenía forzosamente que responder ante el desafío, pues a ello lo llevaba su elevada conciencia de la responsabilidad del líder. Un camino relativamente fácil y expedito de constituir alguna semblanza de orden habría sido el autoritarismo, pero para Bolívar el poder y la existencia política sólo tenían sentido como medios en un contexto de valores: de legalidad, respeto a los derechos ciudadanos y legitimidad del mando. Por eso dijo a Pedro Gual el 16 de septiembre de 1821: «La historia dirá: Bolívar tomó el mando para libertar a sus conciudadanos, y cuando fueron libres, los dejó para que se gobernaran por leyes, y no por su voluntad».¹¹²

Sin duda, Bolívar no logró afianzar sino una pequeña parte de sus proyectos políticos postindependentistas, pero ello, a mi modo de ver, no es suficiente justificación para calificar tales proyectos de meras quimeras o fantasías. Esto sólo sería apropiado si hubiesen existido alternativas *a la vez eficaces y políticamente aceptables* en términos de los valores republicanos y libertarios que sostenía Bolívar, y es difícil imaginar qué tipo de salida podría haberse formulado en las circunstancias imperantes. También vale la pena comentar la opinión, expresada por Francisco A. Encina, según la cual:

... la falla de la Constitución boliviana no radica en la debilidad del ejecutivo, defecto que habría sido fácil subsanar, sino en la imposibilidad de implantar el régimen constitucional en pue-

Ibid., p. 1416.

111

Ibid., p. 590.

112

blos en los cuales la ruptura de la tradición había disuelto el Estado en forma. *La única forma de vida política en estos pueblos es la dictadura criolla, alternada con períodos de anarquía y asomos efímeros de régimen republicano que pronto abate el tacón del dictador militar o civil.*¹¹³

Dejando de lado las connotaciones deterministas de estas frases, que considero inaceptables desde el punto de vista histórico y filosófico, lo fundamental es señalar que para Bolívar, un personaje histórico concreto enfrascado en las luchas de su tiempo, la apreciación de que la ruptura de la tradición y el impacto de la guerra definían ineluctablemente el marco de su acción, de que esa era la *condición* en que debían sustentarse sus proposiciones, *no era en sí misma una política*. Que el enfrentamiento a la anarquía se realizase de acuerdo a un conjunto de valores libertarios, y no en los términos dictatoriales que más tarde impuso el caudillismo, fue en buena medida el resultado de opciones realizadas por el Libertador dentro de un rango de múltiples alternativas, a veces excluyentes. En retrospectiva, el carácter incontenible del proceso de desintegración y desorden político que asoló Hispanoamérica durante el siglo XIX puede parecer *inevitable*, pero para los contemporáneos del período, como siempre ocurre en la historia, lo inevitable asumía el disfraz de lo *posible*.

Bolívar era pesimista sobre el grado de desarrollo de las virtudes cívicas en sus conciudadanos, y aspiraba, a través del gobierno, moldearlos para el ejercicio de la libertad dentro del orden. No obstante, y aunque a veces desesperase ante las dificultades del proyecto, jamás admitió que la autoridad sin controles fuese la herramienta adecuada para lograr sus fines, y así lo expresó en su *Manifiesto de Cartagena*, el primero de sus grandes documentos políticos: «Generalmente hablando, todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos; porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano: virtudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos [como el régimen colonial español, AR], en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano».¹¹⁴ Así, cuando Bolívar afirmaba que «Sería necesario desnaturalizarnos para poder vi-

113 Francisco A. Encina, *Bolívar y la independencia de la América española*, tomo VI. Santiago: Editorial Nascimento, 1963, p. 322.

114 Bolívar, tomo I, p. 4.

vir bajo de un gobierno absolutamente libre; sería preciso mudar nuestros hábitos y costumbres y hacernos austeros y desprendidos de nuestras viles pasiones o renunciar a la quimera de nuestros proyectos»¹¹⁵ es preciso entender el verdadero sentido de su pensamiento en su lucha perenne por reconciliar la libertad y el orden. Creo que en ningún otro texto quedó tan patente ese propósito como en estas frases del *Discurso de Angostura*:

Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional, que tenga por objeto *una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales, moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública*: los términos que fijan teóricamente estos dos puntos son de una difícil asignación; pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos, es la restricción, y la concentración recíproca a fin de que haya la menor frotación posible entre la voluntad, y el poder legítimo. *Esta ciencia se adquiere insensiblemente por la práctica y por el estudio. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud del espíritu es la que ensancha el progreso de las luces.*¹¹⁶

Este breve recorrido por el pensamiento de Bolívar permite, a mi modo de ver, constatar lo siguiente: en primer lugar, el Libertador tenía una concepción de la política ajena por completo a los postulados salvacionistas del mito de la redención. Su perspectiva se basaba en un sobrio realismo, en una aguda apreciación de las limitaciones de la acción regeneradora de sus esfuerzos, la cual sin embargo no le llevaba a sucumbir al pesimismo o la resignación. Al contrario, y en segundo lugar, Bolívar estimaba en alto grado los valores de libertad bajo la ley vigentes en sociedades como la británica y norteamericana; y si bien entendía las dificultades existentes en la Hispanoamérica de su tiempo para implantar en la práctica ese modo de vida, *sus proyectos institucionales se dirigían hacia ese propósito*, con las variaciones de acento y método que le sugirieron, en diversos momentos de su carrera, las condiciones imperantes. Para decirlo de otra forma Bolívar no tenía el más mínimo complejo respecto al legado del pensamiento liberal de su tiempo, ni consideraba que tales valores

Tomo II, p. 309.
Ibid., p. 1149.

115
116

eran extraños al hombre americano, o que nuestras tendencias comunales tenían que llevarnos a crear una nueva libertad. Finalmente, el Libertador jamás cedió a la tentación irracionalista característica del mito de la redención. Su pensamiento político es un ejemplo poderoso de lucidez crítica, de lucha contra los mitos reconfortantes, y de esfuerzo creador por superar los obstáculos que se interponían entre las realidades de su tiempo y sus ideales.

Desafortunadamente la historia de América Latina desde la Independencia hasta nuestros días —con pocas excepciones— ha estado ligada a la mentira, y el mito de la redención sigue impregnando la ideología de muchos de nuestros dirigentes en los campos político e intelectual. Podrían citarse múltiples ejemplos, pero me limitaré —para tomar un solo caso particularmente resaltante— a referirme al discurso pronunciado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez es un excelente escritor y no dudo de la sinceridad de sus convicciones políticas. La estatura literaria, no obstante, no es garantía de lucidez política, y estoy persuadido de que la posición ideológica de García Márquez, que hunde sus raíces en una percepción poético-romántica de América Latina, debe ser cuestionada a fondo por dos razones principales. En primer lugar porque nuestra realidad política debe ser asumida en forma descarnada, como un producto esencialmente nuestro, sin ilusiones falsas y distorsiones acomodaticias que usualmente atribuyen a otros la culpa de nuestros males, y esperan —al menos parcialmente— de otros la solución de nuestros problemas. En segundo lugar creo que hay que criticar la posición política de García Márquez porque la alternativa que propone para América Latina no es capaz de lograr los objetivos de liberación interna y externa, desarrollo económico y respeto a los derechos humanos a que aspira.

García Márquez comete el error de asumir la política con el lenguaje y el estilo de la ficción literaria. Pero la política y la fábula son asuntos distintos. La confusión del mito con la realidad de las cosas en el terreno político es un mal congénito entre los revolucionarios latinoamericanos. ¿Cómo olvidar las fútiles frases del Che Guevara antes de emprender su trágica aventura boliviana?: «Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con la adarga al brazo». Por duro que sea admitirlo, es indiscutible que el cementerio de los soñadores está congestionado de cadáveres provenientes de nuestro continente.

En su discurso al recibir el Nobel, García Márquez se ubicó nítidamente dentro de esa tradición interpretativa sobre la América Latina. En síntesis, el escritor colombiano sostuvo tres puntos: 1) Los latinoamericanos tenemos una esencia especial, diferente, propia, que carece de parangones y no tiene similitud con la de otros, y esa esencia particular exige parámetros de análisis y esquemas conceptuales distintos a los que se usan para entender la evolución histórica y la realidad sociológica y política de otros pueblos. 2) Nuestros sufrimientos y desventuras son también especiales en su naturaleza y dimensiones, y son en buena parte el producto de la manipulación que otros ejercen aprovechándose de nuestra ingenuidad y debilidades. 3) La racionalidad ni nos pertenece ni nos conviene: tenemos que medirnos con otros patrones y según otros criterios.

Todo esto quedó plasmado en el discurso de García Márquez: «América Latina —dijo— es una patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda»; nuestro continente es «una realidad descomunal», por esto los «poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desafortunada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida». La violencia y el dolor de nuestra historia son «desmesurados», por ello «no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo [Europa] [...] se hayan quedado sin un método válido para interpretar-nos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos».

Hay que leer en su totalidad este discurso para captar su tono, de un romanticismo que sólo cabe calificar de patético, y que conduce a García Márquez a hablar de sí mismo como «un colombiano errante y nostálgico». No obstante, el mensaje central es claro: se trata de exaltar una vez más esa «esencia mágica latinoamericana», de proclamar las limitaciones de la racionalidad en nuestro caso, de apuntar el dedo acusador y decirles a los europeos; si no nos entienden a *nuestra* manera no entienden nada.

¿Pero es que son tan peculiares las dificultades que padecemos? ¿En qué se diferencian de las de otros pueblos del mundo? ¿No han tenido

también que luchar tenazmente por la libertad los países democráticos de Europa? ¿No lo está haciendo ahora Polonia? ¿Tiene acaso Latinoamérica el monopolio de la desmesura histórica en la acción práctica o del realismo mágico en la expresión literaria? ¿Qué es más infelizmente desmesurado que la Segunda Guerra Mundial o más alucinante que Hitler? En pocas palabras, ¿por qué no se nos puede entender racionalmente?

Aclaremos muy bien las cosas: no estoy argumentando que los latinoamericanos somos superiores o inferiores a nadie, mejores o peores que nadie. En ningún caso se me ocurriría desmerecer el valor de las contribuciones que hemos hecho en muy diversos campos del arte, el saber y la acción humanos. Lo que sostengo es esto: ni nuestros sufrimientos ni nuestras realizaciones tienen una naturaleza distinta a las de otros pueblos; la responsabilidad por el curso de nuestra historia es fundamentalmente *nuestra*, y no tenemos ni el derecho ni la necesidad de pedirles a otros que dejen de lado su racionalidad para entendernos.

García Márquez pide al resto del mundo, en particular a Europa, que «revise a fondo su manera de vernos» y se queja de la falta de apoyo a los movimientos revolucionarios latinoamericanos: «La solidaridad con nuestros sueños —argumenta— no nos hará sentir menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo». Me pregunto: ¿Hasta qué punto tiene fundamentos sólidos tal protesta? ¿Pierde de vista García Márquez los esfuerzos de la socialdemocracia y la democracia cristiana europeas en favor de luchas democráticas en Centroamérica? ¿Qué sentido tiene, por lo demás, pedirles a otros que nos entiendan a nuestra manera? Cada quien que nos entienda (si le interesa hacerlo) como mejor pueda. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo uso de ese romanticismo cursi, de ese ánimo de poetas malditos, de esa cultura de la nostalgia, la tristeza, el misterio y la magia? ¿Para qué más masoquismo?

La dura realidad es que somos los propios latinoamericanos los principales responsables de la situación de atraso, opresión y desesperanza que impera en buena parte del continente. El terreno de la lucha no es el que algunos quisieran tal vez *escoger*, sino el que impone la vida concreta del sistema internacional: no es el mito sino la realidad, no es el romanticismo político sino el trabajo sistemático, no es la retórica sino la precisión, no es, en fin, la denuncia perenne sino la acción cotidiana y constante para buscar la reconciliación, en aquellos países democráticos

como Venezuela, de la libertad y el orden, de la economía de mercado y la eficiencia del Estado, y en países sometidos a dictaduras para lograr salidas democráticas que no se empantanen en las falsas ilusiones del socialismo revolucionario o el autoritarismo militar.

Latinoamérica es un continente lleno de tragedias y así son casi todos. Hay que luchar por la dignidad, la independencia, el orden, la justicia, la libertad. Todo esto es verdadero. Pero no siempre los combates se llevan a cabo como queremos. No se trata de rechazar la poesía sino de entender que con una política mágica, hecha de emociones, mitos y sueños, se corteja la derrota y se siembran las semillas de la frustración. En todas partes donde se ha aplicado, el socialismo ha resultado en opresión y se ha demostrado incompatible con la libertad y la democracia. Este resultado es intrínseco e inevitable en un sistema que suprime, en lugar de regular, la libertad económica y que se basa en la agudización de las luchas sociales. No hay ninguna razón para pensar que el experimento socialista pueda producir otros resultados en América Latina. Los catastróficos resultados de las dictaduras militares, por otra parte, son obvios para cualquier persona con un mínimo de sentido crítico y respeto por la dignidad humana.

La racionalidad no es patrimonio exclusivo de ningún pueblo, y tampoco la irracionalidad. Los latinoamericanos debemos dejar de lado esa visión de las cosas que nos atribuye el monopolio de las emociones, de la capacidad de tener ideales, en fin, de la estética de la vida, y que nos concibe como antirracionales. Somos lo que hemos logrado ser, y está en nosotros, y en nadie más, transformarlo. En tal sentido debo admitir que así como existen numerosos casos similares al de García Márquez, también hay otros —como el del notable escritor peruano Mario Vargas Llosa— que demuestran la voluntad de destacados intelectuales de nuestro continente de no ceder a las tentaciones del mito de la redención, de rechazar los mesianismos de derecha e izquierda, mantenerse firmes en la defensa de la libertad, y de enfatizar que —en palabras de Vargas Llosa:

Las soluciones verdaderas a los grandes problemas [...] no serán nunca [...] productos de una recomposición apocalíptica de la sociedad, sino básicamente pragmáticas, parciales, progresivas, un proceso continuo de perfeccionamiento y reforma, como el que ha hecho lo que son, hoy, los países más vivibles (o, los menos invivibles) del mundo: esas democracias del Norte, por

ejemplo, cuyo progreso anodino es incapaz de entusiasmar a los [...] amantes de terremotos.¹¹⁷

Siguiendo la pista a estas ideas, así como es indispensable combatir a los que argumentan que no somos capaces de ser libres debido a nuestra inmadurez, es también necesario salir al encuentro de aquellos que —con mayor sofisticación pero aún menor sentido histórico— nos suman al así llamado Tercer Mundo, que incluye países extraordinariamente disímiles en innumerables aspectos, y luego sostienen que «la democracia liberal, tal y como es practicada en los países occidentales, no es una forma de gobierno apropiada para las naciones del Tercer Mundo».¹¹⁸ Es quizás en el terreno del debate tercermundista donde con mayor nitidez se revela la tendencia intrínseca del mito de la redención a desembocar en propuestas autoritarias de uno u otro tipo, a argumentar que la democracia liberal es una diosa que nos resulta extraña, pues en verdad «no tenemos idea de cuáles son los ritos adecuados para su adoración».¹¹⁹ La única —y aplastante— respuesta que se puede dar a esto es que el único remedio que se ha inventado para curar la presunta incompetencia de los pueblos, cualesquiera que sean, para vivir en libertad política es la *libertad política*. De aquí que sea a la vez superficial y poco responsable por parte de Willy Brandt afirmar que «Nuestra [sic] clase de democracia no puede exportarse. La experiencia indica que la misma está asociada a un cierto nivel previo de desarrollo económico y educativo».¹²⁰ La implicación, desde luego, es que para alcanzar ese nivel de desarrollo *se requiere* suprimir la libertad y la democracia, a nombre, por supuesto, de la redención final.

¿A qué se debe ese ánimo colectivista disfrazado de espíritu comunitario que permea la ideología tercermundista y otros mitos políticos bastante extendidos en América Latina? ¿Por qué esa constante propensión autoritaria? Pienso que sus raíces pueden explicarse empleando la distinción popperiana entre sociedades abiertas y cerradas. Las segundas son las sociedades colectivistas que encierran en esencia el lado mágico y tribal del pasado humano; las primeras son aquellas sociedades en las cuales los individuos se encuentran constantemente enfrentados con de-

117 Mario Vargas Llosa, *Contra viento y marea*. Madrid: Seix-Barral, 1983, pp. 278-279.

118 B. K. Nehm y W. H. Morris-Jones. *Western Democracy and the Third World*. London: Third World Foundation (Monograph 8), 1980, p. 19.

119 *Ibid.*, p. 13.

120 Citado en *ibid.*, p. 37.

cisiones personales de todo tipo en los campos privado y público; es decir, son sociedades en las que la capacidad crítica de los ciudadanos ha sido liberada.¹²¹ Las sociedades pre-críticas, con sus jerarquías, autoridades perennes, rituales y tabúes garantizaban una seguridad basada en la pasividad y la obediencia. Con la emergencia del hombre al plano de la razón crítica comenzaron a plantearse al individuo nuevas y exigentes demandas, que se sintetizan en la necesidad de asumir responsabilidades por sí mismo y por otros. En contraste con las certidumbres tradicionales, la sociedad libre genera inevitablemente tensiones, inseguridades y angustias pues constantemente debemos interrogarnos, escoger, autodisciplinarnos, adaptarnos, competir y aprender tanto a ganar como a perder. En la sociedad abierta adquirimos la libertad a costa del abandono de un sentimiento reconfortante de obtusa seguridad, y conquistamos la capacidad crítica a costa de nuestra opresiva tranquilidad. Este paso de la sociedad cerrada a la abierta es «una de las más profundas revoluciones por las que haya atravesado la humanidad»,¹²² una revolución a la que *no* nos resulta fácil habituarnos. Pero como bien dice Popper:

Para aquellos que han comido del árbol del conocimiento, el paraíso está perdido. Mientras más tratemos de retornar a la edad heroica del tribalismo, con mayor prontitud llegaremos a la inquisición, la policía secreta y el gangsterismo político con disfraz romántico. Al comenzarse con la supresión de la verdad y la razón, se termina con la más brutal y violenta destrucción de todo lo que es humano [...] Pero si queremos permanecer humanos sólo hay un camino, el de la sociedad abierta. Debemos avanzar hacia lo desconocido, lo incierto e inseguro, utilizando la racionalidad que poseamos para conquistar, de la mejor manera que podamos, a la vez seguridad y libertad.¹²³

Popper se refiere, claro está, a la razón entendida como arma crítica y antidogmática, como instrumento que a la vez que nos hace humanos debe señalarnos nuestras limitaciones y enseñarnos que no somos dioses. Como señala Carlos Rangel:

Popper, *The Open Society...*, vol. 1, p. 173.

Ibid., p. 175.

Ibid., pp. 200-201.

121

122

123

Las expresiones de comprensión de las ventajas, para el hombre, de la sociedad abierta jalonan la historia desde Pericles. Pero igualmente [...] las expresiones de nostalgia reaccionaria por la sociedad tribal. Estas últimas son mucho más estimadas. El utopismo es generalmente considerado moralmente virtuoso y estéticamente agradable, a pesar de los monstruos políticos que ha generado en la práctica, entre los cuales se cuentan todos los experimentos totalitarios. En cambio el libertarianismo sufre de cierta desconsideración, por intuírsele fundado en la comprensión de que los hombres son imperfectos y dispuestos a acomodarse a esa realidad, en lugar de proponer construir «un hombre nuevo», un «superhombre».¹²⁴

Esta nostalgia reaccionaria, que empuja a las sociedades hacia el colectivismo y erosiona el sentido de responsabilidad personal en los individuos no es patrimonio exclusivo de los países subdesarrollados, sino que se materializa también en ocasiones en las sociedades presuntamente más adelantadas cultural y políticamente, como lo muestran numerosos ejemplos en la historia europea de este siglo. De manera que la lucha por la libertad nos compete a todos los hombres, pertenezcamos a sociedades avanzadas o en vías de desarrollo. Es una lucha constante y exigente, de la que no están exentos ni siquiera los ciudadanos de los países democráticos más desarrollados económicamente y con más sólidas tradiciones libertarias, pues el peligro de un retroceso gradual o relativamente abrupto hacia el estatismo colectivista tardará mucho en desaparecer de la faz de la tierra, y tal vez nunca lo haga del todo.

En el caso de América Latina en general, y de Venezuela en particular, el desafío de la libertad tiene una naturaleza muy compleja y difícil, pero de ninguna manera insuperable. Como he enfatizado en estas páginas, no podremos adelantar ni un solo paso en la dirección adecuada si antes no rompemos el ciclo de mentiras y mitos ideológicos que han servido por mucho tiempo para ocultar la realidad a nuestros pueblos y allanar el camino a la irresponsabilidad de nuestros sectores dirigentes, tanto en lo político como en lo intelectual. Entre otras cosas, América Latina requiere de un nuevo –diáfano, claro y sin ambigüedades– *lenguaje político*, que emplee con precisión las palabras, que no sucumba a los atrac-

tivos de la sonoridad de las frases y que lo sacrifique todo, inclusive, si ello fuese necesario, el deleite estético, a la pureza de los conceptos y la fuerza de los argumentos. Es este problema del lenguaje el que me llevó al comienzo de este capítulo a referirme al ensayo, ya varias veces citado, de Octavio Paz como un libro ambiguo. En esa obra el escritor mexicano nos dice que:

Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad tiende a salvarse creando un mito de redención [...] La sociedad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una nueva forma de participación creadora [...] El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto. Pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, *en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura*. Al salir, acaso, descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá, entonces, empezaremos a soñar otra vez con los ojos cerrados [itálicas AR].¹²⁵

Todo esto suena muy bien, ¿pero qué significa? Como bien decía Orwell en un ensayo de 1946 sobre política y lenguaje, el estilo inflado y pomposo es indicio inequívoco de confusión ideológica.¹²⁶ No quisiera ser demasiado severo con Paz, un escritor y poeta de gran talla, quien además ha asumido actitudes políticas claramente antitotalitarias; no obstante, en este libro —que ejemplifica todo un estilo de discurso político-intelectual muy latinoamericano—, me parece obvio que hay una vaguedad y un uso incompetente de palabras tan cruciales como, por ejemplo, razón, que son peligrosos porque no son claros, y porque esconden tras la retórica una especie de temor a enfrentar con diafanidad la realidad. Ciertamente Paz es un poeta, y se presume entonces que hay que descifrar sus signos. Éste puede ser un interesante y fructífero ejercicio literario, pero en política, así como el pensamiento puede corromper el lenguaje también el lenguaje puede corromper el pensamiento.

Paz, p. 165.

George Orwell, «Politics and the English Language», en *Inside the Whale and Other Essays*. Harmondsworth: Penguin Books, 1982, pp. 143-157.

Esforzándome por expresar lo que deseo decir claramente, respondo, en fin, a la pregunta que encabeza este capítulo con un rotundo sí: los latinoamericanos sí podemos ser libres y también prósperos, como argumentaré con mayor detalle en la sección siguiente. Hace apenas tres décadas *muy pocos* se hubiesen atrevido a apostar que Venezuela iba a vivir por los venideros 25 años bajo un sistema democrático que, pese a sus defectos, muchos de ellos graves, deja amplio espacio a la libertad. En Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, México, El Salvador, Colombia, Guatemala, en todos los países latinoamericanos ha habido y hay hombres que luchan denodadamente por la libertad y contra los mitos, y que no admiten que estamos condenados al atraso, la opresión o las salidas autoritarias de uno u otro signo. Es un combate largo y difícil, pero los hechos demuestran que puede ser exitoso. El *deseo de ser libres* es la condición necesaria —aunque no suficiente— para hacerlo, y ese deseo existe entre nuestra gente, y donde no exista aún es posible despertarlo.

El problema económico y el fin de los mitos

Así como sostuve en el capítulo anterior que sí somos capaces de ser libres, ahora me propongo argumentar que también podemos ser prósperos y alcanzar un desarrollo económico no rentista, fundamentado en los frutos de nuestra ingeniosidad, espíritu de empresa, esfuerzo y productividad. Esta concepción de lo que es verdadero desarrollo se separa entonces nítidamente de un mero crecimiento económico, el cual bien puede estar basado, como ha ocurrido en Venezuela, en actividades extractivas que requieren de un aporte relativamente pequeño de la población trabajadora total, pero que sin embargo generan una riqueza fácil y un consumo artificial que distorsionan el resto de la economía y ejercen un impacto profundamente negativo sobre el manejo político del país.

Mis argumentos se levantarán en torno a la convicción de que existen suficientes razones para pensar que, en líneas generales, «los seres humanos responden con trabajo e ingeniosidad a incentivos que les ofrezcan oportunidades potenciales de recompensa y reconocimiento, y la

existencia de incentivos favorables a la iniciativa personal depende del contexto institucional y de las ideas que sobre políticas económicas predominan en cada sociedad». ¹²⁷ El hecho de que los venezolanos, hasta el presente, no hayamos logrado crear una industria y una agricultura de dimensiones respetables y alta competitividad, que nuestra economía siga sujeta casi por completo al petróleo, y que el sector propiamente productivo sea una especie de enano con la gigantesca cabeza que le superpone un amplísimo sector terciario de elevado consumo y baja productividad, no implica que necesariamente ésa continúe siendo la situación en el futuro. Como he delineado en páginas precedentes, nuestra actual realidad económica es en buena medida el resultado de las ideas y actitudes predominantes en nuestra población y sus dirigentes durante un período de nuestra historia en que el petróleo y el populismo se unieron, engendrando el así llamado «efecto Venezuela», algunas de cuyas peculiaridades ya han sido descritas en este estudio. No obstante, esto puede cambiar, pues las posibilidades de los seres humanos no están determinadas de antemano, y hay numerosos ejemplos históricos que indican que pueblos enteros han sido capaces de transformar su posición económica una vez que ha cambiado el contexto de ideas, actitudes y políticas que definían el marco de su actividad, ¹²⁸ dando así al traste con cualquier preconcepción que sugiera que los seres humanos estamos condenados a repetir nuestros errores y reproducir una y otra vez nuestro pasado.

Los determinantes cruciales del progreso material de los pueblos son sus actitudes económicas, sus valores y creencias, sus modos de comportamiento y sus instituciones y estructuras políticas, y en menor medida sus posibilidades de acceso a recursos naturales y mercados externos. Naciones casi por completo carentes de recursos naturales como Japón, Singapur y Suiza han alcanzado gran progreso material; en cambio, otros países con acceso a enormes recursos —por ejemplo, en África, el Medio Oriente y América Latina— no han logrado avanzar en este terreno sino muy lentamente. Las actitudes, aptitudes e ideas que están en la base del progreso material, y quiero enfatizarlo para evitar malentendidos, no son tal vez las que confieren mayor felicidad, armonía y dig-

Dubuc Picón, p. 7.

Piénsese en los casos de Suecia, Alemania y Japón a partir del siglo XIX, y, más recientemente y en otro contexto, de Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, entre otros.

nidad a los que las poseen o adoptan. No se trata, al tocar este tema, de establecer categorías de superioridad e inferioridad entre los pueblos en ningún sentido. Parto de la base de la dignidad de *todos* los seres humanos, que asumo como un valor ético y político. Por ello, simplemente intento dejar claro que al hablar de *progreso material* y sus determinantes es indispensable tomar en cuenta la existencia en numerosos países subdesarrollados de ideas, actitudes y tradiciones culturales que obstaculizan en lugar de estimular ese progreso.

Entre otros ejemplos de creencias y modos de conducta desfavorables al avance material, pueden mencionarse la falta de interés en el progreso económico combinado con resignación ante la pobreza; la falta de iniciativa, autoconfianza y sentido de responsabilidad personal por los destinos económicos propio y familiar; la preferencia por el ocio combinado con la inercia, que con particular frecuencia se encuentran en climas cálidos; el alto prestigio concedido a la vida pasiva y contemplativa frente a la vida activa; el prestigio del misticismo y la renuncia al mundo frente a la adquisición de bienes y el logro material; la aceptación de la idea de un universo preordenado e inmutable; el énfasis en la ejecución de deberes y aceptación de obligaciones en lugar de la obtención de resultados y el reconocimiento de derechos personales; la carencia de curiosidad, sentido de experimentación e interés en el cambio; la creencia en la eficacia de fuerzas ocultas y sobrenaturales y su influencia sobre el destino personal; la insistencia en la unidad de un universo orgánico y en la necesidad de convivir con la naturaleza en lugar de conquistarla y utilizarla al servicio del hombre —actitud que se refleja, para citar un caso, en la renuencia a matar animales como la vaca—; la creencia en la reencarnación perpetua, lo cual reduce el significado de los esfuerzos en la vida presente; la admisión, como algo normal, de la mendicidad y la ausencia de una actitud reprobatoria ante la aceptación de caridad; la oposición al trabajo de la mujer fuera del hogar, y otras.¹²⁹ Estas creencias y formas de comportamiento pueden desde luego alterarse, y los seres humanos somos capaces de cambiar nuestras concepciones, hábitos y costumbres. No obstante, lo que se debe tener claro es que existen factores psicológicos y sociológicos que obstaculizan en lugar de alentar el progreso material de los pueblos, y que hablar de desarrollo sin tomar en cuenta este tipo de determinantes es no sólo ingenuo, sino, lo que es más relevante, inte-

lectualmente poco serio y políticamente absurdo, o en todo caso manipulativo.

La anterior lista, desde luego, podría extenderse considerablemente, y al respecto cabe aclarar dos puntos: en primer lugar, tales actitudes y creencias que obstaculizan el progreso material no son patrimonio exclusivo de ningún pueblo, aunque en ciertos casos pueden ser más numerosas que en otros; en segundo lugar, semejantes actitudes y creencias, muchas de las cuales tienen hondas raíces de carácter religioso, son perfectamente respetables en su contexto. Su presencia o ausencia, a mi modo de ver, ni enaltece ni disminuye a los seres humanos. Lo que hay que enfatizar, aunque resulte repetitivo, es que existen ideas, creencias y actitudes que *obstruyen* en lugar de alentar el progreso material, minando las aptitudes, convicciones y modos de conducta que están en la base de ese tipo de avance humano. Por lo demás, muchas de las ideas y creencias mencionadas están hondamente arraigadas en las formas de comportamiento de pueblos a lo largo y ancho del planeta, y forman parte integral de la vida espiritual y emocional de literalmente centenares de millones de personas. Cualquier intento de transformarlas o removerlas en forma masiva, rápida y radical traería seguramente como consecuencia un colapso social a gran escala —como en efecto ocurrió en China durante los años del «gran salto adelante» y luego la revolución cultural maoísta. No obstante, teóricos del desarrollo del prestigio de Gunnar Myrdal, por ejemplo, han sugerido la implementación de planes dirigidos a cambiar de raíz al hombre y la sociedad en Asia, utilizando para ello, si se requiere, la coerción. Como acertadamente señala Bauer, experimentos de esta naturaleza ya han sido llevados a cabo bajo regímenes totalitarios como el soviético, a un costo incalculable y plenamente deshumanizador.¹³⁰

El desarrollo económico es sólo *un* aspecto de la evolución histórica de las sociedades; no es un valor supremo sino *uno*, entre otros, de los objetivos que un pueblo puede asignarse a sí mismo, de manera espontánea o bajo coacción, en una determinada etapa. Por esto, economistas liberales como Bauer, que aprecian la libertad, respetan la dignidad humana, y son honestos intelectualmente, prefieren hablar de progreso material en lugar de desarrollo económico, para no dar la impresión de que tal proce-

En torno a este debate, véase *ibid.*, pp. 185-222, y el famoso libro de Gunnar Myrdal, *Asian Drama*. London: Allen Lane, 1968, pp. 1909-1910.

so de avance en este campo particular de la acción de los seres humanos depende de factores que sólo *los economistas* están en capacidad de analizar y evaluar. En realidad, como ya sugerí, ese progreso depende de un conjunto de factores de diversa índole: psicológicos, sociales y políticos, además de económicos, y es un objetivo al que no todas las sociedades conceden la misma importancia. En lo que sigue usaré ambos términos en forma intercambiable sin perder de vista la observación de Bauer.

En Venezuela, considero que es en extremo importante crear las condiciones para el florecimiento de actitudes económicas conducentes al progreso material, sin que para lograrlo debamos sacrificar otros valores igualmente o aún más relevantes, como lo es, por ejemplo, la vigencia de nuestras libertades. Lo creo así porque, como explicaré luego, pienso que, a pesar de la influencia nefasta de la mentalidad populista, nuestra sociedad es susceptible al influjo de ideas y políticas capaces de estimular actitudes positivas hacia la creación de riqueza material. Es obvio, por lo demás, que nuestro pueblo otorga gran importancia al mejoramiento de su condición económica, aunque el populismo distorsione sus percepciones al respecto. Por último, somos parte de un marco cultural –Occidente– en el cual, y al contrario de otras zonas del mundo, el progreso material es un valor clave. En vista de que el desarrollo económico debe ser concebido como un valor político y cultural al que diversos grupos humanos atribuyen diferente categoría y significación, resulta muy difícil formular una sola teoría general acerca de cómo alcanzar el desarrollo, aplicable a todos los casos por igual, ya que, como afirmé antes, el progreso material depende en buena medida de factores que no pueden ser adecuadamente analizados con los instrumentos de la teoría económica. En el caso venezolano el desarrollo debe armonizarse con el objetivo de preservar la libertad. Por esto considero que uno de los criterios más acertados para definir el desarrollo en el contexto de una sociedad libre es la *extensión del rango de escogencia* de las personas como productores y consumidores. En palabras de sir Arthur Lewis, «la ventaja del progreso material no es que la riqueza aumente la felicidad, sino que extiende el rango de la escogencia humana», y, como enfatizaré posteriormente, el orden económico con mayores posibilidades de lograr tal efecto es aquél en el cual los individuos y empresas son dejados en libertad para determinar en la mayor medida posible por *sí mismos* dónde van a trabajar, qué van a producir y consumir, cuánto van a ahorrar y en qué van a invertir sus aho-

ros, es decir, un orden económico de mercado con el menor control del Estado que sea compatible con la eficacia del orden económico total.¹³¹

Si bien es común referirse a los problemas económicos de los *países* subdesarrollados o en vías de desarrollo, no hay que olvidar en ningún momento que de hecho los sujetos y objetos del desarrollo son *pueblos*, es decir grupos humanos concretos, cuyas posibilidades y perspectivas en el campo del progreso material dependen esencialmente de sus creencias y modos de conducta. Para expresarlo de otra forma, en una economía compuesta por «gente cuyas necesidades materiales hay que satisfacer, es el desempeño económico de la gente el que a su vez determina la tasa de avance de la economía».¹³² El progreso material de un pueblo requiere de la adopción de una mentalidad ajustada a ese objetivo y la revisión de creencias, actitudes y modos de conducta adversos al mismo. Es un hecho absolutamente incontrovertible que en amplias zonas del así denominado mundo subdesarrollado predominan entre los individuos actitudes, costumbres e instituciones distintas y con frecuencia antagónicas a las que han determinado el progreso material en otras partes, incluyendo el de varios países y grupos humanos en el Tercer Mundo, lo cual indica que el progreso material no es exclusivo al Hemisferio Norte del globo.¹³³ La realidad de que es la gente, sus cualidades personales, sus formas de organizarse social y políticamente, motivaciones y actitudes las que determinan primariamente su progreso económico —con los recursos naturales y el acceso a oportunidades externas jugando un papel secundario—, esa realidad, repito, invalida la tesis de que existe un «círculo vicioso de la pobreza» de que «la gente es pobre porque es pobre», y de que «las naciones atrasadas no pueden superarse porque su producción es tan baja que les resulta imposible reservar una parte para capitalización e inversión, que les permita aumentar su nivel de vida».¹³⁴ Si semejante aseveración fuese cierta, ¿cómo explicar entonces el hecho de que numerosos individuos, grupos y comunidades alrededor del mundo han salido de la pobreza a través de la creación de riqueza por el trabajo y la ingeniosidad, aun en países pobres? Otros pueblos, en cambio, a pesar

P. T. Bauer, *Reality and Rhetoric*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1984, p. 22.

Bauer, *Dissent...*, pp. 74-75.

Sobre el caso del África, véase P. T. Bauer, «Broadcasting the Liberal

Death Wish», en *Equality, the Third World and Economic Delusion*, pp. 191-211.

Paul Samuelson, *Economics: An Introductory Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1951, p. 49.

131

132

133

134

de encontrarse rodeados de recursos naturales —tierra cultivable, minerales, agua, etc.—, no han logrado ese progreso, pues la explotación de estos recursos y de las oportunidades económicas *depende* de actitudes que no son universales. La tesis del círculo vicioso de la pobreza es también obviamente refutada por la existencia concreta de países desarrollados, *todos* los cuales empezaron pobres, con bajos ingresos per cápita y muy reducidos niveles de capital acumulado es decir, con los rasgos que hoy en día caracterizan a numerosos países subdesarrollados. Sin embargo, esos países «han avanzado, usualmente sin recibir cantidades apreciables de capital foráneo e invariablemente sin recibir dádivas de otros, lo cual habría sido imposible de acuerdo con la tesis del círculo vicioso de la pobreza. Ya que el mundo es un sistema cerrado, tal tesis es inconsistente con el fenómeno del desarrollo, y por lo tanto entra en conflicto con la más elemental evidencia empírica». ¹³⁵ Es la ausencia de los factores favorables al progreso material, psicológicos, políticos y sociales, sobre todo, y no la pobreza, lo que causa el estancamiento económico prolongado de grupos y naciones enteras.

La psicología social contemporánea ha realizado importantes aportes al estudio de las fuerzas y actitudes que impulsan el progreso material de individuos y grupos y aquellas que lo obstaculizan, y ha indicado, para sólo dar un ejemplo, que los países desarrollados se caracterizan por la prevalencia de normas de éxito, universalidad y especificidad, en cambio en los países subdesarrollados prevalecen normas adscriptivas, particularistas y difusas. Es decir, en el primer caso las personas son evaluadas en términos de lo que *pueden hacer* (estatus adquirido) y no en términos de *quienes son* (estatus adscrito); todo el mundo, idealmente, puede competir por cualquier trabajo (universalismo), en lugar de estar circunscrito, como ocurre en los sistemas de castas, a ciertas posiciones definidas (particularismo); por último, las relaciones entre la gente en los países avanzados tienden a ser más *específicas*, limitadas al universo concreto del trabajo, al contrario de otras sociedades donde predominan relaciones *difusas*, es decir, donde las relaciones económicas se conectan a toda clase de otras relaciones de tipo familiar, de amistad, políticas y hasta religiosas. ¹³⁶ El tratamiento detenido de esta temática escapa con mucho a los

¹³⁵ Bauer, *Dissent...*, p. 34.

¹³⁶ Véase el brillante estudio de David C. McClelland, *The Achieving Society*. Princeton: D. Van Nostrand Co., 1961, pp. 16-17, y capítulos 2, 6, 9. Sus ideas amplían las observaciones de Max Weber en su obra *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen & Unwin, 1976.

límites de este estudio; no obstante, quisiera insistir una vez más en que la significación de estas contribuciones teóricas consiste en señalar que el progreso material de los pueblos no es exclusivamente, ni siquiera primordialmente, una cuestión económica, y que la posibilidad del desarrollo depende de un conjunto complejo de variables de diversa naturaleza. De tal manera que al hablar de desarrollo hay que tener muy presente la relevancia de factores psicológicos, sociales, jurídicos y políticos, referentes a las creencias, ideas, actitudes, tradiciones, modos de conducta y formas de organización de las comunidades y pueblos, que son los que en última instancia determinan y sustentan el progreso material.

No cabe duda de que en Venezuela la mentalidad populista, ampliamente difundida entre la población y sus dirigentes, ha originado una serie de actitudes, ideas y modos de conducta que obstaculizan el progreso material no rentista, y tienden más bien a reforzar las concepciones típicas del nuevorriquismo petrolero. Se destacan, entre otras, el deseo de riqueza rápida y fácil, el consumismo, la escasa propensión al ahorro, el apego al paternalismo del Estado, la visión económica a corto plazo, la tendencia a la especulación, y la generalizada desconfianza en las instituciones jurídicas y políticas vigentes, lo cual contribuye a la renuencia a invertir en industria y agricultura, a la fuga de divisas y a la búsqueda de oportunidades especulativas en todo tipo de negocios comerciales, como por ejemplo importación, venta de artículos de lujo y construcción de viviendas urbanas, que den resultados rápidos y eficaces. No obstante, a pesar de todo esto, Venezuela es una sociedad abierta y democrática cuya cultura política tiene importantes rasgos modernos, que la diferencian notablemente de la mentalidad imperante en otras naciones del mundo subdesarrollado, caracterizadas por el predominio de tabúes de todo tipo, creencias mágicas y en ocasiones una hostilidad explícita al progreso material. Si bien Venezuela era hasta hace no mucho tiempo un país básicamente rural, cuya pequeña población actuaba según normas que bien podrían calificarse de semif feudales, la nación ha experimentado una transformación radical a raíz del impacto del petróleo, la urbanización y la aparición de roles, modos de conducta y maneras de percibir la realidad que se colocan en lo fundamental dentro del ámbito propio de la civilización industrial contemporánea. La diferencia, desde luego, viene dada por la difusión de las actitudes populistas ya mencionadas, las cuales, sin embargo, no son rígidas ni eternas, y en nuestro caso pueden ser combatidas con mayores posibilidades de éxito de lo que requere-

riría, por ejemplo, lograr que amplios sectores de la población en la India dejasen de lado su rechazo a beneficiar ganado vacuno.

En nuestro medio, dadas las condiciones imperantes de predominio estatal en la vida económica, la difusión de actitudes que recompensen la iniciativa y esfuerzo individuales y estimulen el sentido de responsabilidad ciudadana es una tarea que no puede limitarse al terreno de la lucha ideológica, sino que tiene necesariamente que contar con el impulso proveniente de *las políticas económicas del Estado*. Un cambio de dirección de esas políticas, opuesto al intervencionismo y orientado a la incentivación del mercado y al estímulo de quienes se dedican a la producción no rentista de bienes y servicios —entre otros aspectos—, es indispensable como instrumento de genuino desarrollo nacional. En una sociedad libre y democrática la difusión de actitudes favorables al progreso material y el estímulo al sentido de responsabilidad ciudadana no puede ser resultado de la imposición y la fuerza, sino de la creación de un marco político y jurídico que posibilite el surgimiento espontáneo de tales actitudes y modos de conducta como expresión de un contexto de amplias libertades. De aquí que, como plantearé luego, el problema de la relación entre el Estado y el mercado económico tiene importancia prioritaria en todo intento de analizar las condiciones que podrían posibilitar la erosión de las manifestaciones económicas del populismo en Venezuela. Este tema será motivo de discusión más adelante en esta sección, pero antes es necesario despejar el panorama teórico mediante la consideración más detallada, de la versión económica del mito de Odiseo, mejor conocida como la teoría de la dependencia. En síntesis, la tesis básica de la teoría de la dependencia sostiene que la variable clave que permite comprender la evolución económica de los países latinoamericanos y en general del Tercer Mundo es la estructura del sistema económico internacional, y sólo en segundo lugar las condiciones internas de nuestros países.¹³⁷ De acuerdo con esta tesis, la economía mundial es en última instancia un sistema coercitivo de explotación, y los males políticos y socioeconómicos de América Latina tienen sus raíces en el papel de víctima oprimida que les toca jugar a nuestros países como la periferia de ese orden opresivo. Escribe Theotonio Dos Santos:

137 La literatura sobre la «dependencia» es extensa. Pueden mencionarse, entre otros, los trabajos de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, 1978, y de André Gunder Frank, *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, 1978.

La dependencia es una situación en la cual la economía de un cierto grupo de países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la cual las primeras están sujetas [...] [se trata de] una condición histórica que da forma a una cierta estructura de la economía mundial, que favorece a ciertos países en detrimento de otros, y limita las posibilidades de desarrollo de las economías subordinadas.¹³⁸

En otras palabras, la médula espinal de la tesis de la dependencia consiste en atribuir a factores externos el origen fundamental de nuestras dificultades económicas, y en otorgar relevancia secundaria a los factores internos.¹³⁹

La teoría de la dependencia está fuertemente influida por el marxismo, aunque muchos de sus adherentes —en particular, numerosos paladines del Nuevo Orden Económico Internacional— nieguen con toda franqueza ser marxistas. De hecho, no obstante, varios componentes de la teoría son extensiones de las doctrinas marxistas originales. Por ejemplo, la idea de que el mundo subdesarrollado no sólo es desesperadamente pobre sino que está estancado económicamente y en proceso de regresión es la versión global de la doctrina marxista de la miseria creciente del proletariado bajo el capitalismo. Así también la idea de que la explotación del mundo subdesarrollado por los países industrializados es causa principal de la pobreza y atraso de aquéllos es una nueva versión de la doctrina marxista de la explotación del proletariado en la economía capitalista. En tercer lugar, la idea de que puede existir una independencia económica y de que sin tal conquista la independencia política pierde mucho de su sentido y validez, es una versión de la doctrina marxista sobre el carácter puramente formal y vacío de las libertades burguesas bajo el capitalismo. Por último, la idea de que la planificación centralizada y la industrialización son indispensables para el progreso material de las naciones del Tercer Mundo es la extensión, a un plano global, de las experiencias contemporáneas de construcción del socialismo, en parti-

Theotonio Dos Santos, *Dependencia económica y cambio revolucionario en América Latina*. Caracas: Nueva Izquierda, 1970, pp. 38, 40.

138

Para una detallada crítica de carácter técnico sobre esta tesis, véase el trabajo de Tony Smith, «The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency Theory», *World Politics*, 31, 2, 1979, pp. 247-288. Otro texto de interés es David Ray, «The Dependency Model of Latin American Underdevelopment: Three Basic Fallacies», *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 15, 1, 1983, pp. 4-20.

139

cular de la experiencia soviética.¹⁴⁰ De la misma manera que en los términos de la teoría marxista el proletariado es explotado por definición, para los teóricos de la dependencia el Tercer Mundo es pobre porque es explotado.

A mi modo de ver, la teoría o tesis de la dependencia es científicamente errada y profundamente dañina desde un punto de vista político para nuestros pueblos. Lo creo así por las siguientes razones: 1) Sobrestima y exagera la influencia de factores externos sobre nuestra evolución económica y política. 2) Subestima y minimiza la importancia de factores internos. 3) En su análisis de los determinantes del progreso material, deja de tomar en cuenta aquellos factores que juegan un rol prioritario y que tienen que ver con las actitudes psicológicas, valores políticos, instituciones y formas de organización social de los pueblos. 4) Establece una dicotomía rígida y totalmente irreal entre dependencia e independencia económica, en tanto que de hecho no existe ninguna nación que sea económicamente independiente. 5) No sólo contribuye a minimizar en forma ilegítima nuestras propias responsabilidades en la determinación de nuestro destino, sino que paralelamente otorga credibilidad a las excusas de nuestros dirigentes, que se eximen de culpa ante sus repetidos fracasos usando el sencillo expediente de atribuir la causa de los mismos a agentes exteriores.

Además, y paradójicamente, la tesis de la dependencia nos coloca en una situación de total dependencia político-psicológica respecto a los vaivenes del sistema internacional, pues su lógica interna lleva inevitablemente a concluir que sólo si el mundo cambia podremos entonces cambiar nosotros. Por otra parte, si —como plantea la tesis— nuestros males pasados, presentes y posiblemente futuros son resultado de las acciones de los países avanzados, hay que llegar a la conclusión de que si esas naciones no transforman sus políticas hacia nosotros estamos entonces condenados a un eterno subdesarrollo, pero si nos ayudan no podremos evitar seguir dependiendo de sus dádivas, buenas intenciones o realismo, pero, en todo caso, la relación de subordinación continuará bajo el disfraz que sea. Este es el más nefasto resultado político de la tesis de la dependencia, aparte de sus efectos negativos sobre el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina: su utilización como instrumento para excusar los enormes errores, corrupción y masiva incompetencia que

han caracterizado y caracterizan aún el manejo económico realizado por las élites dirigentes en numerosos países del Tercer Mundo, bien se proclamen estas élites socialistas o adherentes a principios neoliberales. Un ejemplo típico de tal actitud lo hemos visto en Venezuela a consecuencia del endeudamiento nacional de años recientes. Nuestros líderes han clamado contra el Fondo Monetario Internacional y los banqueros de Nueva York, Londres y Zúrich, pero pocos han dicho que nuestros problemas en este terreno se derivan primordialmente del uso incompetente que hicimos del capital que se nos concedió y de las ineptas políticas fiscales y monetarias que han venido implementando por años nuestros gobernantes.

Conviene comentar brevemente cada una de las observaciones críticas a la teoría, ya previamente esbozadas. La cuestión de las relaciones pasadas y presentes entre los países avanzados de Occidente y del Tercer Mundo está plagada de mitos, falsificaciones ideológicas y chantajes emocionales. Tal como ocurre en relación con el tema de la justicia social, el intento de despejar el horizonte teórico en el campo de las relaciones Norte-Sur equivale a atravesar un terreno minado, donde la menos severa explosión que espera al atrevido que allí incursiona sin prejuicios es la de ser acusado de defender los intereses de las naciones industrializadas en detrimento de lo nuestro. Tales insultos, que no pasan de ser un simple chantaje, no tienen sin embargo cabida en un análisis que como éste pretende ajustarse a las normas de la argumentación racional y crítica.

Lo que hay que enfatizar es esto: el colonialismo ha sido un fenómeno complejo que se extendió por varios siglos y que afectó de manera diversa distintas sociedades y grupos humanos. Cualquiera sea la opinión que se tenga sobre sus efectos en general —y muchos fueron negativos—, lo cierto es que buen número de los países más pobres del Tercer Mundo jamás fueron colonias. Pueden mencionarse, entre otros ejemplos, los casos de Afganistán, Tíbet, Nepal y Liberia. Etiopía lo fue (bajo Italia), por sólo seis años de su larga historia. Por otra parte, numerosas regiones asiáticas y africanas progresaron rápidamente bajo dominio colonial, aún más que países independientes en la misma zona —por ejemplo, el sudeste asiático—. Téngase en cuenta que hablo aquí de *progreso material*, y no de *independencia política*. Este último es un valor que muchos pueblos colocan por encima de todo lo demás, y por lo tanto no se trata de que acá se esté haciendo una apología del colonialismo, simplemente estoy señalando hechos que deberían, en teoría, contribuir a poner las

cosas en perspectiva, a pesar de los obstáculos político-sociológicos que rodean la discusión de este tema. Es un hecho, repito, que algunos de los más pobres y atrasados países del Tercer Mundo *jamás* fueron colonias y sólo hace poco empezaron a tener contactos económicos de importancia con su ambiente exterior; además, en varios de ellos ni siquiera existen corporaciones industriales extranjeras de relevancia mínima —piénsese en Chad, Bután, Burundi y Nepal, por ejemplo. De tal forma que su atraso no puede atribuirse ni al colonialismo ni al sistema de división internacional del trabajo. Hong Kong sigue siendo una colonia y sin embargo es extraordinariamente próspera, y sus habitantes no desean pasar del tutelaje inglés al dominio chino, a pesar de que no les quedará otro remedio que aceptarlo.

Por otra parte, los más avanzados y ricos países de Europa —como Suiza y los países escandinavos— nunca tuvieron colonias. Los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda fueron prósperos como colonias y lo siguen siendo ahora como naciones independientes. Sostener que la prosperidad de estos pueblos es básicamente el resultado de su explotación de otras naciones no es más que una falsificación de la historia. Los países europeos que establecieron grandes imperios coloniales —Inglaterra, España, Holanda, Portugal y Francia— lo lograron precisamente porque ya antes de extenderse habían alcanzado un nivel de progreso notablemente superior al de las áreas que conquistaron. El contacto con las naciones del Norte, en lugar de haber sido, como con frecuencia se afirma, totalmente negativo para el Tercer Mundo, ha constituido de hecho el principal agente de progreso material en estas regiones; asimismo, el nivel de avance material usualmente disminuye a medida que las áreas deprimidas se alejan más de los focos donde con mayor intensidad se siente el impacto económico de las regiones avanzadas del globo, y los seres humanos más pobres son aquéllos con el menor contacto exterior: los aborígenes, pigmeos, y habitantes de zonas desérticas y casi impenetrables.¹⁴¹

Destacar estas realidades de ninguna manera implica desconocer el lado negativo del colonialismo —fenómeno que, como ya dije, ha sido complejo y de efectos muy variables—, y mucho menos sostener que las relaciones económicas entre los pueblos, antes y ahora, se mueven de acuerdo con motivaciones altruistas, de beneficencia pública o caridad

cristiana. Desde luego que esto no es así. Pero lo que sí implica mi línea de argumentación es que hay que salirle al paso a cierta mitología tercermundista, que distorsiona la historia con fines políticos y añade munición al arsenal de excusas de nuestras élites dirigentes. Se trata entonces de no perder de vista que la prosperidad de los ahora países avanzados se debe principalmente a la presencia en esas sociedades de una mayor cantidad de recursos y actitudes productivas, en particular de *recursos humanos*, y que además tales recursos han contribuido también en forma significativa al progreso material de amplias zonas del Tercer Mundo. Fue a partir de la expansión económica internacional de los países industrializados cuando, por un lado, la productividad del trabajo humano se incrementó a niveles jamás antes experimentados y se concretó más firmemente la posibilidad de atacar eficazmente la miseria en amplias áreas del planeta; por otro lado, estas regiones se abrieron a las oportunidades de progreso, elevando así las aspiraciones materiales y espirituales de la mayor parte de la humanidad.¹⁴²

A la exageración de la influencia de factores externos sobre los procesos económicos en el Tercer Mundo, la tesis de la dependencia añade la minimización de los factores de tipo interno. Al respecto merece la pena citar extensamente a Bauer, refiriéndose sobre todo a Asia y África:

Antes de la independencia, los políticos locales en numerosas colonias atribuían la pobreza y el atraso tecnológico de sus países a su estatus colonial, en particular a la explotación de que acusaban a los poderes metropolitanos [...] De esta forma, los políticos generaban expectativas excesivas de prosperidad que presuntamente se materializarían una vez alcanzada la independencia. En vista de que la supervivencia política y aun física de los líderes en muchos países subdesarrollados puede en ocasiones depender de su habilidad para explicar la continua frustración de tales expectativas, el camino más fácil de lograrlo consiste en invocar responsabilidades externas [...] Tales alegatos desvían la atención de la gente de los factores reales que determinan la pobreza material y de las dificultades que existen para removerlos eficazmente. Más aún, la supuesta necesidad de combatir esas siniestras fuerzas externas es utilizada para

justificar la introducción de políticas dirigidas a ampliar el control estatal sobre la economía, y de esa manera acrecentar el poder de políticos, burócratas e intelectuales que favorecen esas medidas colectivizadoras.¹⁴³

Así, es usual en nuestros días contemplar a líderes tercermundistas que han contribuido a producir verdaderos desastres en sus propios países —como Nyerere de Tanzania, Manley de Jamaica, y Pérez de Venezuela—, dando largos y estridentes discursos en los más diversos foros internacionales en contra de la explotación que ejerce el mundo industrializado sobre nuestras naciones. Estos y otros dirigentes son sin embargo incapaces de exhibir el más mínimo sentido autocrítico y señalar hasta qué punto las políticas internas que ellos mismos han ideado y promovido han contribuido a obstaculizar el progreso material de sus pueblos, o a echar por tierra lo poco o mucho que se hubiese logrado antes de que sus pésimas administraciones lo derribasen.

Los teóricos de la dependencia jamás se refieren a las obvias y cruciales realidades de tipo psicológico, social e institucional que en gran número de países del Tercer Mundo cierran, en ocasiones decisivamente, el paso al progreso material. No obstante, como indiqué previamente, el hecho es que en amplias regiones del Tercer Mundo los determinantes personales y sociales del éxito económico y la productividad tienen escasa difusión, y con frecuencia —y a pesar de las exhortaciones y esfuerzos de transformación— muchas personas rehúsan abandonar creencias, costumbres y tradiciones que obstaculizan su progreso material. Por lo demás, como ya lo he afirmado, los seres humanos tenemos concepciones y aspiraciones diferentes, y hay gente que prefiere colocar en plano muy subordinado el objetivo de alcanzar mayor prosperidad material y dar prioridad a otras metas. Tal preferencia no parece ni injustificada ni reprehensible en su contexto. Lo que sí es injustificado es la tendencia a presumir que, como lo hace el igualitarismo internacional, los requerimientos de la gente son básicamente los mismos en todas partes, y que sus capacidades, valores, aptitudes y creencias son relativamente uniformes y por lo tanto las diferencias materiales entre diversas sociedades e individuos no son producto del juego de determinantes personales, sociales e institucionales sino de meros accidentes o de la explotación.

Tal ausencia de sofisticación intelectual y su renuencia a investigar los componentes psicológicos, sociales e institucionales del progreso económico reducen considerablemente las pretensiones de validez explicativa de la teoría de la dependencia.

A los obstáculos al progreso material existentes en numerosas naciones tercermundistas se suma la tendencia, predominante en la así llamada economía del desarrollo, a asumir que el camino más idóneo para superar tales barreras es la estatización de la economía y no la creación de un contexto de oportunidades económicas que despierte —en la medida en que ello sea posible— la ingeniosidad, competitividad y espíritu de superación de las personas, para así abrir espacio a la probabilidad de que la gente, enfrentada a la alternativa de capturar una ventaja económica, *la tome*. Esta probabilidad, que Hicks denomina el «principio económico»,¹⁴⁴ no funciona, desde luego, con la misma intensidad en todos los ambientes, pero como principio de acción es, creo, mucho menos demagógico, costoso y coercitivo y mucho más eficaz que la idea de que el gobierno, los planificadores o los decisores pueden y deben forzar a las ignorantes masas a acrecentar sus niveles de vida a través de los dogmas estatistas, que de hecho conducen a la represión, la ineficiencia, el atraso y la adopción de normas de conducta económica basadas en el paternalismo.¹⁴⁵

Otro aspecto cuestionable de la tesis de la dependencia es la división rígida que establece entre dependencia y no dependencia, como si se tratase de una variable dicotómica y no, como en realidad ocurre, continua. Los teóricos de la dependencia jamás han explicado qué es en concreto la no dependencia o independencia económica, pero constantemente sugieren, al menos en forma implícita, que tal objetivo es factible. Lo cierto, no obstante, es que no sólo ninguna nación, ni siquiera Estados Unidos, es económicamente independiente, sino que tampoco convendría que lo fuese, ya que:

... el desarrollo y bienestar de cualquier grupo humano dependen, precisamente, de la habilidad que este grupo humano tenga para incorporarse a un marco creciente de interdependencia

J. R. Hicks, *Causality in Economics*. Oxford: Blackwell, 1979, p. 43.

Sobre el tema del «dogma dirigista» (estatista) y sus consecuencias para la «economía del desarrollo» véase el trabajo de Deepak Lal, *The Poverty of «Development Economics»*. London: The Institute of Economic Affairs, 1983, pp. 5-16, 103-109.

de las actividades económicas, en donde pueda ofrecer bienes y servicios que sean altamente estimados por otros grupos y demandar, con los medios de cambio así adquiridos, bienes y servicios que sean producidos en condiciones más favorables fuera de sus fronteras.¹⁴⁶

En tal sentido, cabe indicar que la idea según la cual una menor dependencia exige la *industrialización* de los países al costo que sea es errónea y no se compagina con la realidad de naciones como Nueva Zelanda y Dinamarca, por ejemplo, que son exportadores netos de alimentos y materias primas, e importadores de bienes manufacturados de todo tipo. Estos países no sólo han alcanzado altos niveles de bienestar, sino que también han logrado preservar con dignidad su independencia política y cultural frente a naciones más industrializadas.

Si bien las anteriores objeciones a la tesis de la dependencia tienen, a mi modo de ver, bastante peso, la más nefasta consecuencia de la difusión y popularidad de tal teoría económica tiene que ver con los efectos político-sicológicos que genera su adopción por parte de nuestros dirigentes políticos e intelectuales. De hecho, como ya tuve ocasión de señalar, al inflar la culpabilidad de factores externos sobre nuestra evolución económica y hasta política, la teoría de la dependencia desemboca —explícita o implícitamente, de acuerdo con la versión de que se trate— en un verdadero *determinismo ambiental*, en una creencia en el poder incontenible del ambiente exterior sobre las vicisitudes históricas de naciones enteras. Con no poca frecuencia, a partir de allí se pasa a la promoción de medidas coercitivas para moldear el medio ambiente económico doméstico a través de un creciente intervencionismo estatal, y también internacional, mediante la planificación global que sugieren los proponentes de un Nuevo Orden Económico Internacional. En el fondo la tesis de la dependencia no es sino una versión más moderna de las desprestigiadas ideas leninistas sobre las causas y consecuencias de la expansión global de las economías industrializadas.¹⁴⁷ El resultado práctico de la tesis es la sustitución de los mecanismos de mercado en los planos doméstico e internacional por diversas formas de control estatal, a lo que añade, por su-

146 Dubuc Picón, p. 7.

147 Lenin formuló sus planteamientos en torno al tema en su conocido trabajo *El imperialismo: fase superior del capitalismo*, un ensayo de gran efectividad política pero de escaso valor teórico.

puesto, la hostilidad a la iniciativa individual, el menosprecio a las libertades formales y la adopción abierta o soterrada de la mitología socialista.

Por fortuna, Venezuela ni ha pedido ni ha necesitado ayuda económica de otros países por mucho tiempo; no obstante, hemos sido fervientes defensores del principio de la ayuda exterior de los países ricos a los más débiles en numerosos foros internacionales, y hemos además dado ayuda a diversos países del área centroamericana y del Caribe, así como de la región suramericana. La cuestión de la ayuda exterior es espinosa, y al igual que la del Nuevo Orden Económico Internacional está llena de trampas ideológicas. Por ello debo dejar claro que no me refiero acá a la ayuda que se presta en caso de desastres naturales, como terremotos, hambrunas y otras tragedias de este tipo, sino a la así llamada ayuda exterior que conceden los países industrializados en forma sistemática a un significativo número de naciones del Tercer Mundo. El punto es importante pues se conecta, como veremos, con el tema de los factores determinantes del progreso material y tiene relevancia dentro del marco de la ideología predominante en Venezuela.

En efecto, en nuestro medio, y en general en el Tercer Mundo, se acepta a manera de dogma incuestionable, por un lado, que la ayuda exterior no es un asunto que compete a la voluntad de los Estados que la conceden sino que es un *derecho* de los que la reciben y un *deber* para los que la dan, y por otro lado se acepta como artículo de fe que la ayuda exterior es *beneficiosa* para el desarrollo. Ambas suposiciones son, sin embargo, erróneas. Para ilustrar uno de los puntos mencionados, tomemos como ejemplo las siguientes ideas del ex presidente Rafael Caldera, según las cuales los países con mayor capacidad económica «están obligados a ayudarnos», que «los pueblos a quienes la Providencia o la fortuna, o el esfuerzo también, dieron un grado más avanzado en el desarrollo de la técnica y de la economía tienen deberes que cumplir y no dádivas que conceder frente a los países menos desarrollados». ¹⁴⁸ Desde luego, acá está implícita la noción de que la ayuda exterior es positiva *per se* para el progreso material de nuestros pueblos. Cabe sin embargo preguntarse: en vista de que, lamentablemente o no, de acuerdo con la perspectiva que sobre el asunto se tenga, *no* existe ni una sociedad internacional ni un estándar moral aceptado en general por todos los Estados, ni una concepción uniforme entre los pueblos acerca de lo que es el bien común,

en vista de todo esto, repito, ¿de dónde se deduce la idea de que *existe* un derecho de los países pobres (y Venezuela no es, en cierto sentido, uno de éstos) para exigirle a los ricos como un *deber* que nos ayuden?

Podría responderse que esos derechos y deberes se infieren de normas religiosas, de una ética humanista u otros principios de naturaleza semejante, pero el hecho es que *no* existe una sociedad internacional que suscriba en su totalidad una moral igualitaria común, de la que puedan inferirse en forma precisa derechos y deberes. Las sociedades industriales occidentales pueden, y en efecto así lo hacen, decidir que de acuerdo con sus principios morales es correcto y necesario que los países ricos ayuden a los países en desarrollo, pero esta postura moral no establece derechos.¹⁴⁹ Reiteradamente líderes políticos venezolanos confunden la realidad con la fantasía y se convencen de que el mundo no es como es sino como ellos quieren que sea. Por supuesto, la política exterior de un país democrático tiene que sustentarse en principios éticos, que incluyen la cooperación y ayuda mutua entre los pueblos. Esto, sin embargo, no debe llevarnos a perder de vista, por una parte, que la relación entre ética y política es de tensión, precario equilibrio, pasajeras reconciliaciones y sutiles compromisos, y por otra parte que en la realidad internacional los derechos y deberes de los Estados no se pueden fijar con base en elocuentes discursos en la ONU.

En nuestros días es casi axiomático sostener que la ayuda exterior es beneficiosa para el desarrollo. No obstante, destacados estudiosos de las realidades económicas, como Bauer, Little y Lal, que no se han dejado seducir por la mitología de la dependencia, han concluido que la ayuda exterior no sólo *no* es indispensable para el progreso material de nuestros pueblos, sino que más bien con frecuencia contribuye a obstaculizarlo.¹⁵⁰ La noción según la cual la ayuda es necesaria para el avance de los países pobres se enfrenta a un serio dilema: si, como apunta Bauer, las condiciones propicias para el desarrollo —excepto el capital— están presentes, el capital que se requiere podrá o bien ser generado localmente o bien solicitado en forma de créditos a gobiernos y bancos extranjeros. Pero si esas condiciones no existen, la ayuda que se preste inevitablemente será ineficaz y se desperdiciará. Las dádivas externas no pueden

149 Para una discusión más amplia de este punto, véase el ensayo de Deepak Lal, *Poverty, Power, and Prejudice. The North-South Confrontation*. London: Fabian Society, 1978.

150 Véase Bauer, *Dissent...*, pp. 95-135; *Equality...*, pp. 86-150; I. M. D. Little, *Economic Development: Theory, Policy, and International Relations*. Nueva York: Basic Books, 1982, pp. 218-266, 285-384; Lal, *The Poverty...*, pp. 54, 57.

crear las condiciones personales, sociales e institucionales que determinan el desarrollo económico, y no hay ningún ejemplo histórico que permita suponer que las donaciones externas pueden motorizar el progreso material autosostenido de un país. El único caso en que la ayuda cumplió decisivamente ese papel fue el del Plan Marshall, pero no hay que olvidar que éste fue un proyecto de *reconstrucción*, no de desarrollo: los pueblos europeos poseían las actitudes, motivaciones e instituciones favorables a un rápido progreso material, adquiridas por siglos antes de la Segunda Guerra Mundial.¹⁵¹ El punto es simple: si los factores determinantes del progreso material —personales, sociales e institucionales— están presentes, el desarrollo económico se producirá aun sin ayuda exterior; si están ausentes, el progreso no ocurrirá aun con ayuda exterior. La misma existencia de países avanzados demuestra que la ayuda exterior no es necesaria para el desarrollo: estos pueblos progresaron sin ayuda, y de hecho numerosos países del Tercer Mundo han avanzado económicamente sin requerir de ayuda.

El lector podría preguntarse por qué insisto sobre este punto: lo considero importante pues contribuye a dar énfasis a dos de los principales argumentos que he venido exponiendo en estas páginas. Me refiero, en primer lugar, a que son la actitudes, valores, formas de organización y motivaciones de la gente los factores que determinan primordialmente el progreso material de los pueblos; lo demás es secundario, y de hecho la ayuda exterior en muchas ocasiones implanta en la mente de las personas la idea de que su destino no depende de sí mismas sino de otros: de extranjeros, del gobierno, de los ricos, etc. Así, se empieza a esperar el progreso sin el esfuerzo y el éxito sin el mérito, a creer que la recompensa material depende de la suerte y de dádivas y que el desarrollo puede obtenerse sin pasar a través del largo y complejo proceso de ahorro, inversión, austeridad, innovación y ensayo y error en las políticas públicas y actividades ciudadanas que lo han caracterizado en todos los países ahora adelantados. En síntesis, la ayuda, como la riqueza fácil del petróleo, promueve la creencia de que una sociedad puede andar desde el atraso al progreso sin atravesar la senda del esfuerzo económico. Pienso, en segundo lugar, que esta discusión resalta el hecho de que las *políticas gubernamentales* tienen un rol crucial que jugar en la promoción del progreso material de los pueblos. Desde luego, la ayuda exterior puede acrecentar

los recursos de los gobiernos y pueblos receptores, haciendo posible una mayor tasa de inversión y consumo adicional, pero ello no implica que la ayuda aumente la tasa de desarrollo, pues esto último depende de la manera como esos fondos sean utilizados, y de sus repercusiones sobre los factores determinantes fundamentales del progreso material, es decir, las actitudes, valores y aptitudes de la población, y la calidad y eficacia de las políticas públicas. La verdad, aunque a algunos teóricos de la dependencia les moleste, es que los frutos del desarrollo no se pueden obtener de gratis, y que sólo si los habitantes de buen número de países en Asia, África y América Latina, así como sus dirigentes, generan las condiciones básicas del desarrollo podrán avanzar con paso firme en un camino de creciente progreso material.

En tal sentido deseo precisar dos cosas. De un lado, como sostuve previamente, creo que hay ocasiones concretas en que la ayuda exterior de los más avanzados a los más débiles se justifica, sobre todo si se trata de ayuda humanitaria en casos de tragedias producidas por la naturaleza o errores humanos. No obstante, aun aquí es importante que existan controles firmes sobre el uso que se da a esa ayuda, para que no se repitan fiascos como el que por ejemplo le ocurrió a Venezuela y a otras naciones a raíz del terremoto que devastó Nicaragua hace algunos años, cuando gran parte de los fondos destinados a socorrer a las víctimas terminaron en cuentas bancarias en poder de Somoza y sus secuaces. En la medida de lo posible la ayuda exterior al mundo en desarrollo debería canalizarse de gobierno a gobierno, y estar sujeta a condiciones precisas, en lugar de fluir a través de organismos multinacionales que usualmente carecen de la voluntad para seguir el rastro del uso a veces catastrófico que se hace de esas donaciones. Por otro lado, y en segundo lugar, deseo dejar claro que en estas páginas he procurado —con lenguaje directo y sin eufemismos— contrarrestar una mitología ideológica que es comúnmente aceptada por nuestra élite política y hacedores de opinión en Venezuela, y que a mi modo de ver adolece de graves fallas teóricas y produce nefastas consecuencias políticas. Mi propósito ha sido corregir lo que veo como un desequilibrio en la balanza del análisis sobre los orígenes de nuestras dificultades económicas y políticas, de nuestras posibilidades de superarlas y de los caminos que debemos tomar para lograr tal objetivo. No obstante, de ninguna manera pierdo de vista que los países del Norte industrializado —y en particular Estados Unidos respecto a América Latina— con reiterada frecuencia han actuado y actúan en forma ne-

gativa para nuestros intereses de libertad y progreso, y que, en ocasiones, sus acciones u omisiones acentúan nuestras dificultades en los terrenos político y económico, y pueden sumar obstáculos adicionales al subdesarrollo. Sin embargo, insisto, la importancia de los factores externos en nuestros problemas ha sido inflada y exagerada, con resultados altamente perjudiciales en lo político e ideológico, y es hora de que concentremos la atención en los obstáculos *internos*, especialmente en nuestras ideas e instituciones, como primer paso en el sendero de introducir las rectificaciones requeridas.¹⁵²

De todo lo dicho hasta ahora en esta sección es fácil deducir que, en términos económicos, lo importante para las posibilidades de desarrollo futuro de Venezuela es la creación de un *contexto* de políticas e instituciones adecuadas para el despliegue de actitudes y aptitudes favorables al progreso material no rentista por parte de nuestra población. Es bueno remarcar que *no* nos encontramos en la situación —en su caso mucho más desfavorable— de otros países del área latinoamericana y del Tercer Mundo en cuanto a los factores determinantes básicos del desarrollo se refiere. A pesar de la terriblemente negativa influencia del populismo sobre la mentalidad de gran parte de nuestra ciudadanía, no existen en Venezuela los gigantescos obstáculos conectados a, por ejemplo, prácticas discriminatorias de tipo racial, prejuicios religiosos y menosprecio al progreso material que entorpecen seriamente las posibilidades de avance económico en distintas regiones del globo. En otras palabras, en nuestras actuales y previsibles circunstancias se plantea al menos la posibilidad de dar un viraje al timón de las políticas públicas en dirección opuesta al estatismo, al paternalismo y a la mitología dependentista, y a favor de la gradual creación de un contexto que estimule concepciones y actitudes que acrecienten la productividad de nuestra gente.

Me parece obvio que tales políticas deben alentar los mecanismos de mercado en nuestra economía, reducir el poder del Estado y abrir el mayor espacio posible para el despliegue creador en el terreno económico de individuos y empresas. Una sociedad compleja como la nuestra está constituida por millones de personas que poseen conocimiento y percepciones insustituibles acerca de sus propias circunstancias, aspiraciones, preferencias, actitudes, metas, oportunidades y perspectivas en la vida. Ellos mismos —y no el gobierno o cualquier otro agente abstracto y

centralizado—son los más llamados y mejores calificados para juzgar sus posibles respuestas a los cambios en el marco económico que les rodea, y sólo un sistema de mercado puede difundir y procesar las señales económicas que estos millones de centros de decisión individual transmiten, y extraer de las mismas el potencial de innovación y productividad que contienen. Este tipo de sistema contrasta radicalmente con el de una economía estatizada; y si bien el gobierno tiene funciones clave que cumplir, y de hecho todas las economías del mundo son en alguna medida mixtas, las diferencias entre un sistema orientado hacia el mercado y una economía centralmente planificada son sustanciales e inconfundibles. Como ya tuve ocasión de aclarar, un sistema de mercado es una *condición necesaria* para la libertad personal; *no es una condición suficiente*, pero en la práctica el funcionamiento del mercado tiende a erosionar otro tipo de restricciones a la libertad personal.¹⁵³ Según explica Bauer, la existencia de un orden que proteja la propiedad privada «es la más importante garantía de la libertad, no sólo para aquellos que controlan la propiedad sino también para los que no la tienen. Es sólo gracias a que el control de los medios de producción se divide entre muchas personas que actúan de forma independiente, que nadie puede adquirir un poder completo sobre nosotros, y que como individuos podemos decidir qué hacer con nosotros mismos».¹⁵⁴ El mayor beneficio de un sistema de mercado es que permite a los individuos convivir, producir y beneficiarse unos a otros aun cuando pueda ocurrir que no sean capaces de ponerse plenamente de acuerdo sobre propósitos comunes o un bien común. El objetivo de un gobierno serio en el terreno económico debe ser entonces contribuir a crear un contexto en el cual la competencia y la libertad generen los más beneficiosos resultados posibles.

Desde luego, el sistema de mercado no es perfecto en ninguna parte por la sencilla razón de que los que le hacen funcionar son seres humanos, y no robots o dioses. Por esto, en un orden económico libre pueden surgir, y de hecho emergen, fenómenos objetables que incluyen, entre otras cosas, prácticas monopólicas, creación intencional de escaseces, operación coercitiva de grupos de presión, empresariales y sindicales; fraudes, etc. Pero aun estas realidades—que son controlables—no bastan para sustentar un caso lo suficientemente sólido y convincente que lleve

153 Hayek, *The Road to Serfdom*, p. 78.

154 Bauer, *Reality...*, p. 29.

a sustituir un orden de mercado por una economía colectivizada, en la cual la coerción queda concentrada en los políticos y burócratas que controlan el Estado, y el espacio para la libertad se cierra por completo. De hecho el mercado ni siquiera *garantiza* el progreso material, aunque es el sistema que menos lo obstruye, o la felicidad de la gente, pues se trata de un arreglo voluntario y libre que por ello mismo «permite que la gente deje de lado, si así lo desea, las ambiciones económicas, porque considera que su logro exige esfuerzos excesivos o incompatibles con sus preferencias personales». ¹⁵⁵ El mercado no hace milagros, pero proporciona un contexto que alienta la iniciativa económica de los que la tienen y crea condiciones propicias para el uso más eficiente de los recursos productivos de una sociedad.

De la misma manera que el mercado no es milagroso tampoco cabe esperar milagros de ningún gobierno, pero no hay que subestimar el rol que le corresponde en la gerencia nacional, con evidentes implicaciones económicas: la defensa y las relaciones exteriores, la preservación y el estímulo de los contactos comerciales externos, el mantenimiento de la seguridad pública, la administración eficaz de los sistemas monetario y fiscal, la promoción de un adecuado marco institucional para las actividades individuales, y el suministro de servicios básicos de salud, educación, comunicación y transporte públicos, entre otros aspectos. ¹⁵⁶ Hacer todo esto con eficiencia y honestidad no es poca cosa, como obviamente lo demuestran las dificultades que confronta el Estado venezolano, el cual, además —e imprudentemente— parece querer dominar una cada día mayor sección de nuestra economía, con los consiguientes y dañinos efectos de politización e improductividad crecientes.

Sin embargo, no hay suficientes razones para creer que todo está perdido en Venezuela para las perspectivas de la libertad. Al contrario, pienso que el cada vez más claro fracaso del populismo está abriendo los ojos a numerosos compatriotas, y que ello también crea la posibilidad de un cambio gradual pero firme en una dirección diferente. Sería ilusorio, además de peligroso, esperar una transformación positiva radical de la noche a la mañana. El proceso de deterioro de nuestras instituciones y partidos políticos, así como el implacable avance en la colectivización de la eco-

Ibid., p. 28. Para un tratamiento técnico de algunos de los principales puntos discutidos en este capítulo, puede consultarse la obra conjunta de P. Bauer y B. S. Yamey, *The Economics of Underdeveloped Countries*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. Dubuc Picón, p. 21.

nomía realizado en años recientes, indican que los cambios tendrán que efectuarse paulatinamente para no causar traumas y dislocaciones irreparables. Aun el camino de desestatización de la economía tendrá que ser emprendido en forma gradual, pero sin tregua.

Hacia un nuevo liderazgo

«Confío en que nuestra generación haya aprendido que ha sido el perfeccionismo de uno u otro tipo el que ha destruido la poca o mucha decencia que hayan podido alcanzar las sociedades».

F. A. HAYEK ¹⁵⁷

La argumentación desarrollada en esta segunda parte puede resumirse como sigue: 1) El surgimiento de una nueva visión de la democracia venezolana exige ante todo la adopción de una postura de *realismo crítico* ante nuestra situación nacional y sus perspectivas. Esa postura debe ser realista en el sentido de afrontar la verdad sin ambigüedades, despojándola de mitos reconfortantes y de retórica acomodaticia, y crítica en cuanto a su disposición a someterse a una consideración racional, con base en argumentos, sin dogmas y con un lenguaje apropiado a la confrontación abierta de las alternativas que se proponen para el país. 2) En el proceso de transformación gradual de nuestra democracia en una dirección no populista, *las ideas* tienen un papel fundamental que cumplir. Se requiere de un cambio significativo en las concepciones de nuestros sectores dirigentes en cuanto a las bases políticas y económicas que posibilitan la preservación de una sociedad libre, capaz de generar un consistente progreso material no rentista. Esas ideas deben enraizarse en el largo camino evolutivo del pensamiento político liberal y de las nociones sobre el rol del mercado y la iniciativa individual en el campo económico.

3) El viraje que requiere nuestro orden democrático tendrá que iniciarse ante todo en el liderazgo político nacional, que tiene un rol clave que ejecutar tanto en la promoción de una ideología contraria al populismo entre la ciudadanía, así como en el diseño e implementación de políticas que corrijan el legado del manejo muchas veces superficial y demagógico del gobierno, y de irresponsabilidad administrativa, corrupción y despilfarro de nuestras oportunidades económicas.

El punto básico es éste: si bien el Estado venezolano no puede, a corto plazo, dejar de ser un Estado rentista, dependiente para su estabilidad de una economía postiza sustentada en los ingresos petroleros, sí es posible imprimir a la conducción del gobierno un cambio de rumbo y asumir responsablemente una voluntad de conducción que corrija con decisión las fallas y coloque nuestro régimen de libertades sobre pilares más firmes. Dicho de otra manera, si bien las dificultades que padecemos tienen hondas raíces estructurales, tanto sociales como económicas, *las soluciones empiezan por ser políticas* y tienen que ver con la calidad del liderazgo nacional, su capacidad para decidir y concentrar esfuerzos en prioridades claramente definidas, y de contribuir a proyectar entre los venezolanos una imagen realista de nosotros mismos, de los problemas que enfrenta el país, de las alternativas que se presentan hacia adelante y los costos que implican.

En las actuales circunstancias la evidencia indica que el mundo político-partidista venezolano, sin excepciones, enfoca el presente y el futuro de Venezuela casi exclusivamente en función de sus propios intereses, constituyéndose en un sistema clientelista que olvida el destino del país y tiende a dar la espalda a la realidad nacional. Los principales partidos políticos son los responsables primarios —aunque no los únicos— de lo que está ocurriendo y puede ocurrir con Venezuela, y a ellos corresponde, en primer término, dar pasos de rectificación. Esto no puede hacerse sin autocrítica, sin una honesta aceptación de las fallas y limitaciones propias como medio de aprendizaje y cambio. En este sentido es lamentable percibir la autocomplacencia de la dirigencia política nacional, su falta de capacidad crítica, su disipación de energías en confrontaciones superficiales que no explican nada y sólo conducen a una cada vez más turbia lucha por migajas de poder. Toca entonces a los partidos políticos limpiar su propia casa, pues tal y como ahora se encuentran, tal y como ahora funcionan, no pueden generar los recursos intelectuales y morales para responder al desafío histórico de una nación que podría ser un

ejemplo de dignidad, progreso y estabilidad, pero que de hecho está sumida en el pesimismo, el desconcierto y la frustración.

Un nuevo liderazgo para la democracia debe ser realista y tener el coraje de decir la verdad, con confianza en la capacidad de respuesta de nuestro pueblo. Hay que plantearle al país metas de renovación que despierten la solidaridad y el apoyo de la gente, pero no con base en la demagogia y la creación de expectativas falsas sino en función de la lucidez y el sentido de la realidad. Decía Hannah Arendt que en política «Las mentiras son con frecuencia mucho más aceptables y llamativas a la razón que la realidad, pues el mentiroso tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que la audiencia quiere o espera oír. Al elaborar su historia para consumo público, trata cuidadosamente de hacerla creíble. En cambio la realidad tiene el desconcertante hábito de enfrentarnos a lo inesperado, para lo cual no estamos preparados».¹⁵⁸ Es por esto que el camino de la mentira es el camino fácil y que arroja dividendos a los inescrupulosos. El sendero difícil es el de la verdad y el realismo político, y aquí se encuentra el reto clave para un dirigente, el punto desde donde se traza la línea divisoria entre el mero manipulador y el estadista.

Básicamente, existen tres categorías de líderes políticos. En primer lugar están los profetas, que se consideran poseedores de verdades absolutas, aspiran a una sociedad ideal, propugnan verbalmente cambios radicales, son intolerantes ante la crítica y están siempre dispuestos a emprender los más ambiciosos proyectos y a pagar los mayores costos en aras de sus creencias. En segundo lugar se encuentran los manipuladores, que adoptan un estilo pragmático y mecánico, se someten —con una mezcla de avidez y resignación— al lado abyecto del poder, abandonan todo intento serio de reforma y esconden tras el silencio, la retórica o la fraseología mordaz la falta de sustancia en sus propósitos. Por último se hallan los estadistas, caracterizados por su conciencia de los límites de la acción política, convencidos sin embargo de la necesidad de avanzar pero sin sacrificios y costos innecesarios, orientándose decididamente hacia la eliminación de los males de la sociedad pero sin depositar por ello irrestricta confianza en sus proyectos de transformación total, rápida y radical para alcanzar la perfección.

Estas tipologías del liderazgo se corresponden a ciertas visiones de la política. El profeta representa el utopismo social, le guían los dogmas

y es capaz de todo para lograr sus objetivos. El manipulador encarna la mediocridad, el miedo al riesgo, la idea de la política como un terreno de superficiales confrontaciones personalistas. El estadista asume la vía de la reforma, de la ingeniería social paulatina, armado de convicciones que le permitan, a la vez, detener las utopías del profetismo y superar la parálisis de los manipuladores. El estadista es un realista pero no un mediocre, tiene convicciones profundas pero es ajeno a los dogmas, pretende cambiar la realidad pero no sueña con la perfección.

La democracia venezolana ha producido numerosos profetas y manipuladores pero muy pocos estadistas. Esto es así porque se trata de una democracia de corte populista cuya cultura política genera inevitablemente entre la ciudadanía y sus líderes una sistemática aspiración al profetismo, los macroproyectos, las ilusiones ficticias. Una vez en el poder los dirigentes y partidos políticos devienen manipuladores, acosados por sus múltiples y contradictorios compromisos, aprisionados por una red de complicidades que se extiende a todos los ámbitos sociales y corroe los mecanismos de división y equilibrio de poderes, deteriora el sistema de justicia, alimenta vanas expectativas y lleva eventualmente las crisis hasta un punto de ebullición y ruptura que significa el quiebre del pluralismo, la pérdida de fe en un juego político libre y la veloz diseminación de la tentación autoritaria.

Hasta ahora los profetas y manipuladores han imperado en la historia política nacional. Dentro de la democracia, se han caracterizado por ofrecer grandes cambios y ni siquiera acometer, una vez en el gobierno, reformas básicas dirigidas a suprimir de manera gradual pero resuelta los graves problemas que aquejan al país. Por el contrario, cada día aumenta la sensación de fracaso, de que no se avanza, de que las administraciones democráticas han perdido muy valiosas oportunidades de transformar nuestra economía rentista en una economía productiva, afianzando a la vez las libertades ciudadanas. En esta vía decadente y de indudable deterioro profetas y manipuladores cometen tres errores esenciales. Por una parte, el eterno recomenzar, la negación del pasado, la supresión de lo que les antecede, el impulso de empezar siempre desde cero en un esfuerzo que erosiona la continuidad histórica en la vida política del país. Por otra parte el error de jamás admitir las equivocaciones propias, de situarse más allá del bien y del mal, de despreciar las críticas de amigos y adversarios, y desconocer la falibilidad humana. Por último, quizás el más grave de todos, el error que consiste en la incapacidad para contemplar el

abismo y apartarse de él, la incapacidad para percibir la decadencia de un orden social hondamente desequilibrado y de una economía postiza, y la fragilidad de un régimen que no castiga la corrupción, fomenta la superficialidad en el debate, se aventura en planes de desarrollo de una ambición absolutamente desbordada y hace de los partidos centros de repartición de beneficios en lugar de instrumentos para la superación nacional.

Es signo característico del estadista reconocer la posibilidad del fracaso y enfrentársele con decisión y conciencia de sus limitaciones. El estadista ve la política a través de un prisma de sano escepticismo, pero no rehúye las dificultades, tiene el coraje de sus convicciones y entiende que para sostener la libertad con éxito se requiere de una fuerte dosis de valentía intelectual. No ofrece lo imposible pero tiene el coraje de decir la verdad. Si la democracia venezolana va a sobrevivir, el triunfo de los estadistas sobre los profetas y manipuladores constituirá un factor crucial en su evolución futura. El estadista sabe que la política es imperfecta, pero que sin embargo merece la pena luchar por determinados valores que hacen posible una existencia civilizada en sociedad; conoce que su tarea no es sólo considerar «lo que es teórica o moralmente deseable», sino también «las fuerzas concretas que existen en el mundo»,¹⁵⁹ y que debe orientarlas hacia la realización gradual y progresiva de sus fines.

Venezuela requiere de políticos con talla de estadistas, capaces de sobreponerse a los halagos del populismo y promover con valentía y eficacia las nuevas ideas que nuestro país reclama. En tal empresa no hay que perder de vista que, como afirma Lewis:

Los innovadores siempre están en minoría. Las nuevas ideas son inicialmente planteadas y llevadas a la práctica por pocas personas [...] Tales concepciones son en ocasiones aceptadas con rapidez por el resto de la población; las más de las veces, sin embargo, son recibidas con escepticismo e incredulidad y se imponen sólo muy lentamente [...] Por esto los cambios significativos son el producto de una élite, y la dimensión del cambio depende de la calidad del liderazgo.¹⁶⁰

159 Carr, p. 128.

160 W. A. Lewis, *The Theory of Economic Growth*. London, 1955, p. 148 (citado por Hayek, *The Constitution...*, p. 427).

Los obstáculos a todo proceso sustantivo de innovación política en nuestra democracia populista no son de ninguna manera menospreciables, pero en su superación se halla precisamente el desafío del nuevo liderazgo que debe surgir en Venezuela en los próximos años, tanto en lo político —dentro y fuera de los partidos—, como también en los terrenos económico e intelectual. Un nuevo liderazgo que restaure en nuestro medio la ofendida dignidad de la política como tarea creadora. Un nuevo liderazgo económico que esté dispuesto a despojarse del comfortable manto paternalista, y dar inicio a un proceso sistemático de innovación y aumento en la productividad de nuestras empresas industriales y agrícolas. Y un nuevo liderazgo intelectual que desmonte los enrevesados y paralizantes mecanismos de las mitologías ideológicas que ahora impregnan nuestra cultura política, y que deben ser sometidos a un implacable cuestionamiento y a una seria y fervorosa confrontación crítica.

Ninguna democracia puede sobrevivir sin un consenso básico entre las principales fuerzas que en ella actúan acerca de los valores y objetivos fundamentales del orden político. De lo que se trata, entonces, en Venezuela, es de establecer mediante la lucha de ideas y la persuasión un nuevo consenso sustentado en un marco ideológico distinto al populista. En un régimen de libertades lo deseable desde luego es avanzar sobre la base del más extendido apoyo posible. Sin embargo, en la práctica política siempre se plantea el problema siguiente: ¿consenso en torno a qué, y a qué precio? Generalmente, tanto en la vida de los individuos como en la de los sistemas políticos, si bien la abundancia económica no garantiza la armonía al menos proporciona instrumentos para mejores acomodos. El consenso se facilita si los objetivos que una democracia puede proseguir a la vez son múltiples y no requieren de una jerarquización. Las dificultades empiezan cuando hay que establecer prioridades firmes, cuando los recursos escasean y no se puede complacer a todo el mundo ni dar respuesta a todas las demandas. En tales condiciones el consenso se fragmenta y la misión de los gobernantes electos democráticamente es proporcionar liderazgo, establecer metas claras y marchar hacia ellas con firmeza dentro del marco de la ley.

En toda democracia hay una tensión entre una política del consenso y una política de la convicción. Llevadas a extremos estas tendencias conducen a la parálisis o al fanatismo, y lo ideal es el equilibrio entre ambas. En nuestra democracia populista, no obstante, ha habido tradicional-

mente un predominio casi incuestionado de la obsesión por la conciliación y el consenso, que ha alimentado una política prebendaria destinada a integrar grupos que se consideran importantes, mediante privilegios administrados por un Estado millonario y carente de controles judiciales firmes. En vista del deterioro que esto ha traído a la democracia, creo que se impone un reajuste profundo y éste tiene que iniciarse colocando renovado énfasis en una política de la convicción, dentro de líneas ideológicas claramente críticas del populismo. Sólo de esa forma podrá restablecerse un equilibrio adecuado entre los valores que sustentan una sociedad libre y los requerimientos prácticos del consenso democrático, evitando el peligro de que estos últimos lleven eventualmente a la destrucción de los primeros.

Me he esforzado en estas páginas en argumentar que la clave de un futuro mejor para Venezuela descansa ante todo en una más adecuada *comprensión* de nuestra situación actual y sus orígenes, y no en el simple enunciado de un recetario de soluciones aplicables a un sinnúmero de asuntos para transformar el país de la noche a la mañana. Por ello tiene enorme importancia que un creciente número de venezolanos hayamos comenzado a percibir en el *populismo* —con sus correspondientes dosis de demagogia, estatismo y clientelismo político—, la fuente primigenia del deterioro institucional, económico y ético que erosiona los fundamentos de nuestro orden político. Llegar a tal conclusión no es un logro subestimable, especialmente si de la crítica surge una firme voluntad de rectificación de parte de nuestros sectores dirigentes, y la convicción de que para preservar una sociedad libre y sustentar nuestra economía sobre bases no rentistas es *condición necesaria* orientar nuestra democracia en una dirección no populista. Ello exige un cambio sustancial en el estilo político de nuestros dirigentes, con objeto de despertar el sentido de la realidad en la ciudadanía y romper el hábito de crear expectativas falsas.

Un diagnóstico no es una profecía histórica. Los hombres hacemos nuestra propia historia, aunque desafortunadamente no siempre en condiciones que hayamos escogido. Por esto, sostener que el populismo acabará con la democracia puede no resultar cierto, entre otras cosas porque la identificación, a tiempo, de los males del populismo podría conducirnos a imprimir un sustancial cambio de rumbo en la dirección general que hasta el presente viene siguiendo nuestro proceso político. Se trata de transformar todo un estilo político y despertar la capacidad innovadora de nuestra sociedad, lo cual requiere primeramente dar un

verdadero viraje de timón a los términos del debate político venezolano, con una posición ideológica inequívoca frente al populismo y en defensa de una sociedad abierta y libre. En palabras de Hayek:

Debemos dar una vez más a la tarea de construir una sociedad libre el carácter de aventura intelectual y acto de coraje. A menos que convirtamos otra vez los fundamentos filosóficos de una sociedad libre en un candente tema intelectual, y su implementación en una empresa que desafíe a nuestras mentes más capaces, las perspectivas de la libertad serán muy oscuras. Pero si logramos reconquistar la creencia en el poder de las ideas, que es la marca característica del más genuino liberalismo, la batalla no estará perdida.¹⁶¹

No voy a ocultar al lector que hay una cierta paradoja en lo que estoy diciendo al liderazgo nacional, actual y potencial. Por un lado he sostenido que en política es errado buscar la perfección, pero por otro lado estoy pidiendo un cambio que es en extremo difícil y exigente, y que toca la médula espinal del estilo político imperante entre nuestros principales partidos y hombres públicos. Esta, no obstante, es una tensión insuperable en toda concepción política que no quiera sucumbir ni a la mediocridad populista ni a la tentación autoritaria. Tal concepción distingue al verdadero estadista de lo que Spengler llama un «mero político»: «el jugador que participa por el puro placer del juego, el arribista en las alturas de la historia que sólo persigue rango y riqueza». Venezuela no necesita «meros políticos» sino estadistas, es decir, «hombres capaces de pedir sacrificios y *obtenerlos*, porque su convicción de que ello es necesario para su país es compartida por otros muchos, los transforma y los hace capaces de realizaciones que en otras circunstancias jamás hubiesen conquistado».¹⁶²

Hayek, *Studies in Philosophy, Politics and Economics*, p. 194.
Oswald Spengler, *The Decline of the West*. London: Allen & Unwin, 1961, p. 366.

161
162



Las crisis y las perspectivas



de la democracia venezolana



A fines de febrero de 1989, a sólo dos semanas de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República por segunda vez, varias ciudades venezolanas —incluyendo a Caracas, la capital— hicieron erupción en un levantamiento popular espontáneo y devastador que duró casi una semana y que causó oficialmente más de doscientos muertos, aun cuando la verdadera cifra podría ser sustancialmente mayor. El momento y la magnitud de la protesta popular tomaron a todo el mundo por sorpresa, y ayudaron a desechar más de un mito acerca de la estabilidad del sistema democrático establecido en Venezuela en 1958. Lo acontecido produjo un severo y duradero *shock* a todos los venezolanos, y cambió profundamente las hasta entonces prevalecientes percepciones acerca de la solidez y viabilidad de nuestro sistema político.

Así como se ha dicho que la destructividad y la furia desatadas por las masas venezolanas fueron inesperadas, también es cierto que las enormes desigualdades sociales existentes en el país por muchos años crearon las condiciones para esta clase de violenta protesta por los menos privilegiados en nuestra sociedad. El motivo ostensible de la erupción de la ira popular fue el aumento en el costo del transporte público, decretado por el gobierno el 25 de febrero. Existe, sin embargo, un amplio consenso entre los políticos y los analistas políticos del país de que existían razones más profundas para la conmoción. Lo que ocurrió fue la explosión de sentimientos largamente reprimidos en contra de un estado de cosas que condena a millones de venezolanos ordinarios a la pobreza y a la angustia, mientras que el régimen democrático despilfarra la riqueza nacional de origen petrolero, que va a beneficiar, principalmente, a grupos elitescos selectos o a los aparatos clientelares de los partidos políticos.

El 1.º de marzo, en el Congreso Nacional, el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera, con claro tono demagógico y la mirada puesta en su futura reelección, habló con el fin de advertir que la democracia venezolana estaba en peligro, y que debían hacerse todos los esfuerzos para preservar el sistema. Al mismo tiempo, Gonzalo Barrios, presidente del partido de gobierno Acción Democrática dijo que Venezuela «había sentido el beso de la muerte del FMI» (Fondo Monetario Internacional). Los aumentos de precios implementados por el gobierno de Pérez fueron los pasos iniciales del programa de estabilización acordado previamente con el Fondo, en un esfuerzo desesperado por salir de la crítica situación económica y financiera heredada de su predecesor, Jaime Lusinchi, de su mismo partido. Unos días más tarde, un grupo de politólogos de la Universidad Central de Venezuela sintetizó las lecciones clave que podían razonablemente derivarse de lo que había pasado: 1) la continua estabilidad y el progreso del sistema democrático en Venezuela están en peligro; 2) es ahora evidente que el sistema está afectado por una profunda crisis de legitimidad; 3) el régimen democrático está metido en un «callejón sin salida» y es posible que tome una dirección más autoritaria en el futuro próximo.¹

Un aspecto positivo de los eventos de febrero de 1989 es que éstos pueden ayudar a los estudiosos y a los políticos, tanto en Venezuela como en el exterior, a obtener una visión más realista sobre la situación del país y las posibilidades de su régimen democrático. Durante años, pero particularmente desde mediados de los años 1970, los analistas políticos venezolanos —y también algunos estudiosos norteamericanos— habían advertido sobre las vulnerabilidades de la «democracia pactada» existente en el país, argumentando que la combinación de expectativas populares excesivas estimuladas por la demagogia del liderazgo democrático, junto con la declinación de los precios del petróleo y la extensión generalizada de la corrupción, estaban conduciendo a Venezuela a su perdición.²

Esta no era, no obstante, la visión dominante entre los estudiosos de nuestro sistema político, muy especialmente en los Estados Unidos. Algunos mostraron genuina sorpresa acerca de comentarios sobre una crisis

1 *El Nacional*, Caracas, 2 y 17 de marzo de 1989.

2 Héctor Malavé Mata, *Los extravíos del poder*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1987; A. Romero, *La miseria del populismo*, Centauro, Caracas, 1986; Juan Carlos Rey, «El futuro de la democracia en Venezuela», *Nueva Sociedad*, 367, Caracas, 1987, pp. 183-245.

que afectara al sistema político,³ mientras que otros declaraban sin ambigüedad que nuestra democracia había sido «notablemente exitosa»⁴ y que por tanto uno debía entender que las descripciones apocalípticas de la crisis sólo expresaban las opiniones minoritarias de «aquellos separados de la corriente principal de los partidos dominantes», haciendo «una virtud de la invectiva y la exageración».⁵ También hubo excepciones a esta visión consistentemente optimista de la situación y perspectivas venezolanas entre investigadores de los Estados Unidos,⁶ pero el hecho es que, tanto para el gobierno estadounidense como para la gran mayoría de aquellos que se ocupaban de América Latina en la comunidad académica norteamericana, el acelerado deterioro de la democracia «modelo» del hemisferio sur llegó como un rudo golpe. Es posible, pero por supuesto muy difícil de demostrar, que las ingenuas visiones optimistas de algunos acerca del desempeño y perspectivas de la democracia venezolana estaban enraizadas en el fuerte deseo de que tuviera éxito, en un continente caracterizado por el predominio histórico de formas autoritarias de gobierno y por la fragilidad de los regímenes democráticos.

En lo que sigue trataré de hacer tres cosas: 1) Explicar la naturaleza de la democracia venezolana y evaluar su desempeño, en el contexto de una más amplia discusión acerca del populismo y sus manifestaciones específicas en Venezuela. 2) Analizar en detalle los primeros meses de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, y las causas inmediatas del levantamiento popular de febrero de 1989, los efectos de la campaña electoral de 1988, el legado de la administración de Lusinchi, y el intento de Pérez de implementar un programa de austeridad dirigido por el FMI por primera vez en Venezuela. Mi propósito será el de mostrar por qué el liderazgo democrático venezolano debe ser señalado como responsable de la crisis que ahora afecta al país, así como discutir la naturaleza de la

Gene E. Bigler, «Professional Soldiers and Restrained Politics in Venezuela», en Robert Wesson, ed., *New Military Politics in Latin America*. New York: Praeger, 1982, p. 175. 3

Daniel H. Levine, «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», en L. Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds., *Democracy in Developing Countries: Latin America*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1989. 4

Enrique A. Baloyra, «Public Opinion and Support for the Regime, 1973-1983», en John D. Martz y David J. Myers, eds., *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger, 1986, p. 55. 5

Principalmente Terry Lynn Karl, quien vio claramente que «Even stability, the measure of Venezuela's success could become problematic in the long run». («Incluso la estabilidad, la medida del éxito venezolano pudiera hacerse problemática en el largo plazo»). Ver su artículo «Petroleum and Political Pacts. The Transition to Democracy in Venezuela», en G. O'Donnell, P. C. Schmitter y L. Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule. Latin America*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1986, p. 218. 6

crisis y argumentar que la democracia populista, en las condiciones latinoamericanas, condena a nuestros países a una declinación secular y posiblemente irreversible. 3) Trataré por último de evaluar las perspectivas a corto y a más largo plazo del sistema democrático venezolano.

El éxito y el fracaso de los regímenes políticos

¿Cómo medir el éxito de un régimen político particular? ¿Cuáles son los criterios correctos que deben emplearse para juzgar su desempeño? ¿Son suficientes la mera capacidad de sobrevivir y la estabilidad? No hay duda, por ejemplo, de que el gobierno del general Alfredo Stroessner en Paraguay demostró ser notablemente resistente y duradero, pero ¿en qué sentido puede decirse que también fue «exitoso», al menos en lo concierne a los intereses de su país y de la gran mayoría de los paraguayos?

Según mi punto de vista, es necesario tomar en cuenta tres criterios para evaluar con justicia el éxito o el fracaso de un régimen político: 1) El grado hasta el cual compromete la independencia y la soberanía nacionales, o para ponerlo en términos positivos, su capacidad para diseñar y ejecutar una política de su propia escogencia, y también de mantener un margen razonablemente amplio de autonomía en su proceso de toma de decisiones sobre asuntos nacionales fundamentales. 2) Su capacidad para garantizar no sólo el bienestar material de la población, sino también la de crear las condiciones que impidan que el país como conjunto se rezague demasiado respecto de las potencias mundiales líderes y de otros países avanzados en áreas cruciales de progreso material e intelectual; esto es, productividad y competitividad económicas, educación y tecnología, y todos los complejos elementos que dan forma al compromiso de una *polis* con su propia viabilidad nacional en un ambiente competitivo. 3) El grado de apoyo que el régimen pueda obtener de su propio pueblo.

Sobre la base de estos tres criterios es realmente muy difícil estipular, sin fuertes salvedades, que la democracia venezolana ha sido «exitosa».

Para comenzar, la gigantesca deuda externa, irresponsablemente acumulada por nuestros gobiernos democráticos (en mayor medida desde 1974 hasta hoy), ha reducido de modo significativo nuestra capacidad de decidir nuestro destino por nosotros mismos. Las decisiones económicas cruciales que afectan actualmente al país tienen que ser negociadas en condiciones extremadamente desfavorables, con organismos multilaterales que responden a intereses que no necesariamente están en armonía con los nuestros. La autonomía nacional de Venezuela y su margen de flexibilidad como actor soberano en los asuntos mundiales son hoy tan relativamente pequeños como a comienzos de siglo, cuando las potencias mundiales líderes enviaron sus barcos de guerra para el bloqueo de nuestras costas y forzarnos a cancelar nuestras deudas.

Tampoco el régimen lo ha hecho mejor por lo que respecta al bienestar económico de la mayoría de los venezolanos. Después de treinta años de democracia, durante los que el país disfrutó las bendiciones de increíbles riquezas derivadas del petróleo, y después de que enormes sumas han sido desperdiciadas por gobiernos ineficientes y corruptos, el balance es éste: de acuerdo con cifras del Banco Mundial, en 1987 (esto es, antes de que la crisis económica comenzara a acelerarse) 43% de la población venezolana estaba experimentando lo que los expertos del banco llaman pobreza «no extrema», que no es otra cosa que un eufemismo para una condición de marginalidad aguda, desnutrición y analfabetismo funcional; 15% de la población, por otra parte, sufría la «pobreza crítica»; de un total de casi 19 millones de habitantes, 8 millones eran «marginales» y casi 3 millones eran indigentes.¹ Es razonable suponer que la situación es mucho peor hoy en día de lo que era para entonces, como lo ha mostrado la ferocidad de la erupción popular de febrero de 1989, así como el hecho de que las personas asaltaron principalmente supermercados en busca de alimentos.

No menos preocupante es el deterioro generalizado de los estándares educativos nacionales, de sus universidades y de su infraestructura científica y tecnológica. La crisis financiera generada por años de desperdicio, ineficiencia y corrupción, ha forzado al gobierno a reducir en términos reales los recursos presupuestarios para educación e investigación y desarrollo. Esto, ciertamente, afectará de manera importante la capacidad de Venezuela como *polis* nacional para mantener el paso de los países más avanzados, y a menos que ocurran cambios sustantivos y

1 | *El Nacional*, Caracas, 30 de mayo de 1989.

por el momento imprevistos, parecemos estar condenados a una *profundización del subdesarrollo* en los próximos años.

Como profesor universitario de la que, tal vez, sea la mejor universidad del país, la Universidad Simón Bolívar, he sido testigo del deterioro de la institución en los años recientes. Para dar sólo un ejemplo, la biblioteca principal ha interrumpido la adquisición de revistas científicas y otras publicaciones debido a falta de fondos. Es suficiente tener en mente lo que ha ocurrido a muchas universidades en África que hoy en día no son más que vestigios de centros académicos respetables, para darnos cuenta de lo que este proceso de «africanización» en el campo de la educación avanzada significa.

A pesar de todo esto, y de acuerdo con algunos estudios sobre las actitudes políticas en Venezuela, parecería que una mayoría sustancial de la población todavía apoya al régimen democrático, adjudica gran valor a la democracia e incluso —en palabras de Levine— «considera la democracia como un valor en sí mismo». ² Esta evaluación es a mi juicio altamente engañosa, como son algunas de las encuestas de opinión que han sido empleadas con el objeto de pintar un cuadro —bastante equívoco— del compromiso de los venezolanos con la democracia.

En sus detallados estudios de las actitudes políticas en Venezuela, Baloyra y Torres han presentado resultados que, por decir lo menos, pueden indicar ciertas conclusiones paradójicas. En su estudio del año 1986, Baloyra reconoció que las encuestas de opinión mostraban «preocupación y exasperación con los defectos de la democracia venezolana, junto con una abrumadora preferencia por esa democracia», y llegó a la conclusión de que, aun cuando todavía la democracia goza del beneficio de la duda, no puede, sin embargo, «descansar en sus laureles» (una declaración sorprendente, dado el presunto y abrumador apoyo hacia el régimen). ³ Por otro lado, Torres encuentra que hay una disparidad significativa entre «apoyo al régimen» (que es alto) y «apoyo difuso» (el público está altamente insatisfecho con el desempeño de las administraciones democráticas y tiene una visión muy negativa del liderazgo democrático). ⁴ Encuestas más recientes (1988) muestran que el nivel de insatisfacción ha

Daniel H. Levine, «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», en L. Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds., *Democracy in Developing Countries: Latin America*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1989, pp. 279, 285. 2

Enrique A. Baloyra, «Public Opinion and Support for the Regime, 1973-1983», en John D. Martz y David J. Myers, eds., *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger, 1986, p. 64. 3

Aristides Torres, *Niveles y dimensiones del apoyo político en Venezuela*. (Trabajo presentado en el XII Congreso de la International Political Science Association), París, julio de 1985, p. 15. 4

continuado aumentando; pero posiblemente el más elocuente signo del deterioro de la confianza pública en el sistema fue el muy elevado nivel de abstención (20%) en las elecciones nacionales de 1988, una cifra premonitória si consideramos que el voto es obligatorio en Venezuela, que el electorado es explícitamente amenazado por el gobierno con sanciones si no sufraga y que en seis elecciones previas la abstención jamás alcanzó el 10%.⁵ Otras encuestas más recientes (abril de 1989) mostraron que más de 40% de los electores no tiene intención de votar en las venideras elecciones para gobernadores de estado, alcaldes y concejos municipales, y que alrededor del 20% de la población (los jóvenes en particular) desearía emigrar.⁶

Es importante enfatizar que los estudios de Baloyra y Torres a los que me he referido fueron llevados a cabo antes de que la crisis económica realmente comenzara a afectar de manera severa a la mayoría de los venezolanos, y también antes de que emergiera a la luz pública el peor escándalo de corrupción del período democrático (el escándalo de Recadi, al que volveré más adelante). Estoy convencido de que estos dos ingredientes han afectado de un modo muy negativo la forma como los venezolanos juzgan hoy en día al sistema democrático, y de que la tendencia hacia una caída ulterior de su apoyo a la democracia se acelerará en los próximos meses y años. Pero antes de tratar de fundamentar estas opiniones, resultará útil relacionar lo ya expuesto con el problema del populismo latinoamericano y su impacto sobre el desempeño democrático.

El populismo latinoamericano y la democracia venezolana

La causa de la democracia es popular entre los estudiosos norteamericanos de Latinoamérica —para no mencionar al gobierno de los Estados Unidos, que en años recientes ha hecho de la democratización una de sus

5 *Bohemia*, Caracas, 11-17 de abril de 1988, y 21-27 de marzo de 1988.

6 *El Nacional*, Caracas, 22 de abril de 1989.

políticas hemisféricas preferidas. La preocupación por la democracia, sin embargo, usualmente tiene más que ver con un compromiso hacia ciertos principios que con un análisis cuidadoso de las realidades del desempeño democrático en América Latina. Esto a su vez ha llevado a respetados investigadores como Fernando H. Cardoso a declarar que para los latinoamericanos la democracia debiera tener el estatus de «un valor en sí mismo», sin explicar por qué.⁷ Una de las consecuencias más negativas de esta actitud —un compromiso en abstracto con el ideal democrático sin preocuparse por el desempeño democrático real—, es que ciertos autores latinoamericanos tienden a evitar la discusión de lo que ocurre frecuentemente a nuestros países bajo el gobierno democrático, a pasar por alto la demagogia, la corrupción y la ineficiencia que usualmente caracterizan la conducta de nuestros políticos democráticos, y a reservar todo su arsenal crítico para atacar el admitidamente pobre desempeño de los regímenes autoritarios, sin darse cuenta de que el autoritarismo latinoamericano es resultante directo del desastroso manejo de los asuntos bajo regímenes democráticos populistas.

Un buen ejemplo de esta actitud puede encontrarse en los escritos del politólogo argentino Guillermo A. O'Donnell. Es difícil saber con exactitud qué es lo que O'Donnell propone como alternativa política para América Latina, aun cuando algunas veces parece favorecer una opción socialista sin decir una palabra sobre los decepcionantes resultados de la Revolución Cubana. Lo cierto es que O'Donnell desprecia la crítica de la democracia populista como un síntoma de una mentalidad política reaccionaria.⁸ En su fervor democrático, algunos de estos analistas, no sólo latinoamericanos, simplemente excusan el mal manejo en el que muchos de nuestros políticos incurren, argumentando que

... los latinoamericanistas pueden haber impuesto estándares excesivos de dedicación del liderazgo, participación de las masas, coherencia de clases, consistencia ideológica y rendimiento programático a los movimientos de reforma en el hemisferio.

Fernando H. Cardoso, «La democracia en América Latina», en W. Rama, ed., *Escenarios políticos y sociales del desarrollo latinoamericano*. Buenos Aires: CEPAL-UBA, 1986, p. 113.

G. O'Donnell, 1966-1973: *El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982, pp. 25-27; también «1966-1973. Las Fuerzas Armadas y el Estado autoritario del Cono Sur de América Latina», en N. Lechner, ed., *Estado y política en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, 1981, pp. 199-235.

7

8

Un vistazo a Europa o los Estados Unidos difícilmente convencería a un observador neutral de que las combinaciones de clases contradictorias, las ideologías de retazos y las deficiencias programáticas son inusuales. El populismo es escasamente una enfermedad confinada a la América Latina.⁹

Si bien es cierto que nosotros en América Latina no tenemos un monopolio de demagogia y de corrupción, el impacto de estos fenómenos sobre nuestra existencia nacional es mucho más grave, digamos, que en Estados Unidos o en Suiza, países con economías y sociedades civiles mucho más fuertes, y por tanto más capaces de resistir los efectos desestabilizantes y deletéreos de la demagogia en la arena política. Tratando de excusar el daño que el populismo hace a nuestros países, estos autores contribuyen inadvertidamente a sembrar las semillas del fracaso democrático y del renacimiento de incluso formas peores de autoritarismo en nuestro hemisferio.

La demagogia en el estilo y la sustancia políticos no es una condición suficiente pero sí necesaria para caracterizar al populismo latinoamericano. El término «populismo» ha sido usado para referirse a tres patrones políticos interrelacionados.¹⁰ Se aplica a una cierta clase de movilización política que incorpora a las clases populares («el pueblo») a un papel más activo en la *polis*, con promesas de mejoras rápidas y siempre crecientes en sus niveles de vida. Segundo, el populismo describe una coalición social heterogénea que integra a la clase trabajadora y a la clase media con algunos elementos de la burguesía no tradicional o moderna. Tercero, el populismo se refiere a un conjunto de políticas reformistas que incluyen la expansión del activismo del Estado, dirigido a incorporar a la clase trabajadora y a la clase media en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y de redistribución del ingreso.

Se ha dicho¹¹ que los movimientos y los líderes populistas carecen de una ideología coherente y bien acabada; sin embargo, desde el punto de vista ideológico el populismo posee dos características clave: políticamente el populismo es antiliberal en al menos dos sentidos: a) el imperio

9 Paul W. Drake, «Populism in South America», *Latin American Research Review*, 17, 1, 1982, p. 197.

10 *Ibid.*, pp. 190-191.

11 Ver, por ejemplo, Juan Carlos Rey, «Ideología y cultura política. El caso del populismo latinoamericano», *Politeia*, 5, Caracas, 1976, pp. 123-150.

de la ley no es un valor político significativo en el marco ideológico populista; más importantes son el compromiso con el movimiento o el partido y la obediencia al líder carismático cuando éste existe; b) las masas, no el individuo, son supremas. Desde la perspectiva económica, por otro lado, el populismo exalta el papel del Estado en la vida económica, desconfía profundamente del mercado y es retóricamente anticapitalista. Estos postulados ideológicos ayudan a explicar las debilidades tanto del concepto como de la realidad del imperio de la ley en la práctica democrática populista en América Latina, donde los derechos humanos son constantemente violados y frecuentemente sometidos a presiones que serían consideradas intolerables en las democracias liberales avanzadas.

La existencia de una vena autoritaria en el populismo, que se da, incluso, en sus variantes más democráticas, se manifiesta de manera más clara en las versiones abiertamente opresivas de los regímenes populistas que se han experimentado en América Latina (por ejemplo, en la Argentina de Perón y en Perú bajo el régimen militar comenzado en 1968), pero no está restringida a éstas. Como ha señalado Luis Abugattas,¹² no hay una correspondencia mecánica entre populismo y modos democráticos de gobierno. La cuestión de la democracia versus el autoritarismo es una cuestión de regímenes políticos, donde la alternancia entre los modos democráticos y autoritarios de gobierno es posible durante una fase populista como dentro de una fase antipopulista. El régimen de 1968-1976 en Perú, por ejemplo, fue un régimen populista autoritario, mientras que el régimen de Belaúnde (1980-1985) fue un régimen democrático antipopulista. El régimen actual venezolano, por otra parte, es un régimen democrático populista, pero sus ingredientes «democráticos» están condicionados por los aspectos antiliberales, autoritarios y demagógicos característicos del populismo latinoamericano en cualquiera de sus versiones.

El régimen democrático venezolano constituye entonces una variante del populismo democrático con una fuertemente marcada naturaleza rentista, que ha sido capaz de sobrevivir más tiempo del normal en América Latina debido a ciertas condiciones económicas que están gradualmente perdiendo su validez y, como consecuencia, el sistema probable-

Luis Abugattas, «Populism and After. The Peruvian Experience», en James M. Malloy y Mitchell Seligson, eds., *Authoritarian and Democrats. Regime Transition in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987, p. 123.

mente cambiará políticamente en la dirección de una forma de gobierno más autoritaria que la evidenciada hasta ahora. El desempeño del régimen, es mi creencia, ha sido altamente decepcionante en casi todos los aspectos, y ha hecho gran daño a las perspectivas de nuestro país de convertirse en una *polis* desarrollada, más socialmente homogénea, próspera e igualitaria en los próximos años. Lejos de alcanzar las metas proclamadas en la Constitución de 1961, ha tenido muchos resultados negativos e insatisfactorios. Mientras que a mi juicio es preferible vivir en un ambiente democrático, aun cuando éste sea limitado, sería un error —como argumentaré más adelante— que el régimen venezolano experimente en estos momentos con ulteriores reformas democráticas, las que probablemente apresurarían la crisis política y económica y abrirían el camino a una «solución» abiertamente autoritaria al problema del orden. No hay otra opción que la de reformular los pactos de las élites, la de establecer reglas más restringidas al juego político y la de entrar en un período de severo ajuste económico. Esto hará que la democracia venezolana esté más constreñida y sea más estrecha en lo tocante al espacio de la libertad pero, ojalá, sin destruirla totalmente.

La democracia pactada venezolana

Por una parte el populismo en América Latina ha abierto las puertas a la entrada de sectores populares previamente excluidos de la vida política, pero, por la otra, ha jugado el papel de una alternativa frente a formas más radicales de cambio social y político, como, por ejemplo, el socialismo. Como ha dicho muy bien Lois E. Athey:

Durante las etapas formativas tempranas en Argentina, Venezuela, Perú y Bolivia, el populismo fue significativo como respuesta a la alternativa izquierdista con su ideología de conflictos de clase. Al permitir el crecimiento de las alianzas electorales reformistas, las élites abrigaban la esperanza de detener las

actividades de los sindicatos anarquistas o comunistas militantes. Los programas presentados por los líderes populistas casi siempre se acompañaron de un desarrollo económico y de una integración nacional sin las reformas estructurales de tipo radical. Pero los esfuerzos por estimular la expansión de una economía mixta —en la que un gobierno central apoya tanto a la empresa privada como a una sociedad de bienestar— no condujeron al deseado control social ni a la integración. A medida que aumentó el nivel de conflicto de clases, la alternativa populista dio paso a regímenes burocráticos autoritarios.¹³

El populismo excluye a la izquierda pero hace promesas «izquierdistas» a las masas y les miente.

La principal excepción a este proceso de una democracia populista que se rompe para dar paso a una dictadura militar (un proceso que había afectado a casi todas las democracias suramericanas en los años 1960 y 1970), ha sido Venezuela, por la razón principal de los ingresos del petróleo como el factor estabilizante del régimen. En todos los otros casos, sin embargo, la demagogia populista condujo a un continuo aumento de las expectativas de la gente, y a su vez a una espiral incesante de financiamiento del déficit por parte de los gobiernos, que en América Latina siempre han tratado de escapar a sus autogenerados dilemas mediante la emisión de moneda. De este modo han empujado a sus economías hacia el abismo de la hiperinflación, en el que caían con frecuencia.¹⁴ Pero incluso en Venezuela, que entre 1974 y 1983 disfrutó de una enorme bonanza financiera debida a la cuadruplicación de los precios petroleros en los mercados internacionales, la combinación de demagogia, corrupción e ineficiencia no sólo condujo a la dilapidación de una parte sustancial de esos recursos, sino también a una pesada deuda externa cuya carga coloca ahora una gran interrogante sobre las posibilidades del país hacia el futuro.

En la raíz de este histórico fracaso se hallaban los siguientes factores:

a) La tendencia populista a levantar las expectativas populares de una

Lois E. Athey, «Democracy and Populism. Some Recent Studies», *Latin American Research Review*, 19, 3, 1984, p. 181.

Robert Wesson, «Populism and Military Coups», en R. Wesson, ed., *New Military Politics in Latin America*. New York: Praeger, 1982, pp. 22-23.

13

14

mejora social y económica más allá de lo que debiera ser razonable, en el contexto de economías subdesarrolladas y protegidas, aunque fuesen —como ocurrió con Venezuela— bendecidas con grandes recursos materiales. b) La creencia equivocada e irresponsable de que los precios del petróleo crecerían ininterrumpidamente y prácticamente por siempre, de forma que no importaba endeudarse cada vez más pues el país siempre estaría en posición de pagar sin problemas. c) El impacto destructor de una súbita e inesperada riqueza sobre una sociedad, sus normas morales, su cultura política y su ideología económica, que fueron distorsionadas por la oportunidad —provista por el petróleo— de usar y disfrutar riquezas que no fueron creadas por los esfuerzos de la sociedad, sino como si hubiesen sido obtenidas fuera de su propia infraestructura productiva.

Las características esenciales del sistema político establecido en Venezuela a fines de la década de 1950 y comienzos de la siguiente década han sido descritas en detalle por varios autores.¹⁵ El mismo fue diseñado como una «democracia pactada» (democracia de pactos), sobre la base de: a) pactos y coaliciones entre actores sociales clave; b) consensos interélites; c) limitación programática; d) estímulo a la participación, pero controlada y canalizada; e) exclusión de la izquierda marxista revolucionaria y de la derecha militarista.¹⁶ El pacto populista descansaba sobre la oportunidad estructural provista por el petróleo de acomodar intereses divergentes, y la forma como funcionó ha sido sintetizada eficazmente por Terry Karl:

En el corto plazo los petrodólares financiaron un plan de emergencia que calmó la atmósfera durante la transición a la democracia. En el largo plazo, el petróleo proveyó los recursos fiscales de los que las administraciones democráticas dependieron para mantener la ambigua y costosa situación de fomentar el crecimiento de un sector privado mientras concedía favores a las clases medias y trabajadoras. Concretamente, cada gobierno con-

15 Daniel H. Levine, *Conflict and Political Change in Venezuela*. Princeton: Princeton University Press, 1973, pp. 3-61, 209-260; J. C. Rey, «El sistema de partidos venezolano», *Politeia*, 1, Caracas, 1972, pp. 175-230; A. Romero, «El sistema político venezolano», en mi libro *América Latina: Militares, integración y democracia*. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1989, pp. 117-140.

16 Levine, «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», p. 257.

cedió extensos subsidios, contratos e infraestructura a los empresarios, y mientras pechaba con los más bajos impuestos del continente permitía algunas de las mayores ganancias. Al mismo tiempo los gobiernos democráticos podían darse el lujo de apoyar la contratación colectiva de los más altos salarios del continente, controles de precios, enormes subsidios a los alimentos y una reforma agraria.¹⁷

Este esquema tenía una debilidad crucial, completamente aparte de la volatilidad del mercado petrolero internacional: se había predicado sobre el erróneo supuesto de que el desarrollo de un país puede ser «comprado» con recursos puramente financieros, y de que esto puede ser logrado en tiempo breve y sin ningún esfuerzo especial por parte de la población del país. Igualmente, el esquema populista descansaba sobre el supuesto paralelo de que podríamos vivir eternamente más allá de nuestros medios, puesto que los ingresos del petróleo lo garantizarían. Paradójicamente, fue justo después de 1974, el período cuando Venezuela disfrutó de su mayor abundancia de ingresos del petróleo, cuando las limitaciones y los conflictos potenciales implícitos en el sistema populista comenzaron a desenvolverse con mayor claridad, conduciendo al país a la condición crítica en la que se encuentra, con un sistema político con pocas opciones en sus manos.

Quiero referirme ahora a este proceso en perspectiva histórica, comenzando con la primera administración de Pérez y cubriendo el período que va hasta la campaña electoral de 1988. Mi propósito será tratar de explicar con más detalle el fracaso de los pactos políticos populistas y de sus políticas económicas para responder a los retos del subdesarrollo. Esto, a su vez, establecerá las bases para sostener luego las siguientes tesis: a) El factor fundamental que explica la fragilidad de la democracia en América Latina en general, y en Venezuela en particular, es político y psicológico, y no económico o social: es la conducta demagógica del liderazgo democrático. b) La crisis de la democracia en Venezuela se desplegará muy rápidamente, llevando al país a una condición de incluso más grave deterioro institucional y socioeconómico, y colocando al sistema políti-

Terry Lynn Karl. «Petroleum and Political Pacts. The Transition to Democracy in Venezuela», en G. O'Donnell, P. C. Schmitter y L. Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule. Latin America*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1986, p. 215.

co en grave riesgo. c) La única manera de que en los próximos años sobreviva en Venezuela alguna forma de democracia es a través de un mecanismo de «control desde arriba», basado en la reformulación de los pactos de las élites pero sobre nuevas condiciones, que tendrán que ser definidas a través tanto del conflicto como de la negociación.

El petróleo y el modelo venezolano

De acuerdo con el punto de vista prevaleciente sobre los orígenes y el desarrollo de la democracia venezolana, una gran cantidad de petróleo en un país pequeño, con una población relativamente pequeña, sin divisiones étnicas significativas y con unos estratos superiores notablemente compactos y homogéneos, crearon las condiciones favorables para la democracia, pero fue la destreza política de los líderes lo que la hizo surgir.¹ El más comprometido proponente de este punto de vista ha argumentado que es

... falso y equívoco atribuir la exitosa transición a la democracia [en Venezuela] primariamente al impacto de los ingresos petroleros. La abundancia relativa ayudó; obviamente es más simple remunerar e incorporar que confrontar, aislar y derrotar. Pero el hecho escueto es que Venezuela había disfrutado de un ingreso sustancial del petróleo desde los años 1920. La decisión de buscar la conciliación y la institucionalización democrática es independiente de la riqueza disponible. Después de 1958 la riqueza es usada de manera distinta.²

Desde esta perspectiva, la democracia venezolana es el resultado de un estilo político particular caracterizado por la elusión del conflicto y la

Véase, por ejemplo, P. J. Alexander. *The Venezuelan Democratic Revolution*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1964; D. E. Blank: *Politics in Venezuela*. Boston: Little Brown, 1973;

D. Hellinger: «Democracy in Venezuela», *Latin American Perspectives*, 12, 1985, pp. 75-82.

Daniel H. Levine, «The Transition to Democracy: Are There Lessons from Venezuela?», *Bulletin of Latin American Research*, 4, 2, 1985, p. 52.

1

2

búsqueda de consensos acerca de formas procedimentales y utilitarias antes que sobre asuntos sustanciales.³ Esta visión de la democracia venezolana es a mi parecer equivocada en varios aspectos y necesita ser corregida. Para ello es útil comenzar distinguiendo dos fases distintas de «democratización»: inauguración y consolidación. Es verdad que durante la fase de inauguración (aproximadamente entre 1958 y 1963) los grupos de élite venezolanos, hombres de negocios, líderes políticos y sindicales, militares de alta graduación y la jerarquía católica, confiaron fuertemente en herramientas de compromiso y conciliación, limitando el campo del conflicto político y excluyendo tanto a la izquierda marxista como a la derecha militarista de la arena política. El compromiso alcanzado en 1958, no obstante, fue en gran parte posible gracias a que la economía petrolera pudo soportarlo. La dictadura militar derrocada en 1958 se había mostrado como corrupta e ineficiente; en el nuevo esquema de cosas el Estado distribuiría (*desigualmente*) en lugar de monopolizar la riqueza pública. La premisa fundamental del pacto de las élites era la de que un Estado democrático sería un instrumento más eficiente y estable, así como más legítimo, para la tarea de mediar en la distribución de la renta petrolera.

Los diversos grupos que entraron en los pactos «buscaban menos usar el Estado los unos en contra de los otros que usarse los unos a los otros para obtener acceso al Estado —la fuente primaria de fondos».⁴ En otras palabras, el modelo de dominación política (el pacto de las élites basado en un compromiso populista, que suponía el objetivo de contener a las clases bajas y trabajadoras dentro de un sistema centralizado de reformas y beneficios limitados), iba de la mano de un modelo de desarrollo económico basado en la expansión de la economía petrolera. Una vez que el modelo de desarrollo comenzó a mostrar signos de agotamiento a fines de la década de 1960 y comienzos de la siguiente, debido a la incapacidad de la industria y la agricultura venezolanas de alcanzar un crecimiento autosostenido sin continua ayuda del Estado (a su vez hecha posible por el petróleo), el modelo de dominación política también comenzó a mostrar las primeras señales de crisis severa. El aumento en la intensidad de la confrontación política fue temporalmente fre-

3 Véase, por ejemplo, J. C. Rey, «El futuro de la democracia en Venezuela», pp. 189-198. Para una visión más crítica, Fernando Coronil, *The Magical State. History and Illusion in the Appearance of Venezuelan Democracy*. Indiana: The Hellen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, (Working Paper 112), October 1988, pp. 57-65.

4 Coronil, p. 70.

nado por el *boom* en los precios del petróleo de los años 1970, y el modelo de dominación política obtuvo una prórroga que demostró ser el preludio a una crisis más profunda. La conclusión de este proceso, que llegó a madurar bajo el gobierno de Jaime Lusinchi (febrero de 1984-febrero de 1989) reafirmó la espiral viciada del «desarrollo» democrático venezolano: la sociedad, representada en el compromiso populista, continuamente demandaba más recursos del Estado para crecer, con la ilusión de que así resolvería los problemas generados por un crecimiento inducido por el petróleo.

La naturaleza específica del modelo democrático venezolano, y en particular el papel crucial del petróleo como un factor dinámico que hacía posible los compromisos políticos entre grupos en competencia, debe ser enfatizada, entre otras cosas, para disolver el mito de que existe una suerte de «síndrome venezolano» en el actual proceso de redemocratización en América Latina.⁵ Las condiciones que permitieron la restauración de la democracia en Venezuela en 1958 no existen en ningún otro país de la América Latina de hoy. Dado que el petróleo ha jugado y todavía juega un papel único en la formación y el mantenimiento del sistema democrático venezolano, «la viabilidad a largo plazo de esta forma de democracia pactada y su valor como modelo para otros países puede que se aclare únicamente cuando el dinero del petróleo comience a desaparecer».⁶ Sin duda el consenso de las élites, el engavetamiento de puntos conflictivos, la marginalización de la izquierda y otros de los logros de la coalición de las élites venezolanas en la fase de inauguración de nuestro sistema democrático, pudieran ser imitados en otras partes de la América Latina; lo que no puede hacerse es reproducir el elemento esencial de la renta petrolera como herramienta para financiar el sistema. Las muy blasonadas habilidades de las élites venezolanas para definir una dominación política y un modelo de desarrollo en la primera fase de la experiencia democrática (que estarían contruidos sobre las relaciones de poder existentes, no en contra de ellas), comenzaron a mostrar su dependencia del instrumento petrolero tan pronto como éste ya no pudo sostener más la prodigalidad del Estado. De hecho, puede argumentarse

Sobre la posible relevancia de la experiencia venezolana para otros países latinoamericanos, véase Paul Cammack, «Democratization. A Review of the Issues», *Bulletin of Latin American Research*, 4, 2, 1985, pp. 39-46.

Terry Lynn Karl, «Petroleum and Political Pacts. The Transition to Democracy in Venezuela», en G. O'Donnell, P. C. Schmitter y L. Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule. Latin America*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1986p. 219.

5

6

que la consolidación democrática en Venezuela fue real sólo mientras el petróleo pudo ser empleado fácilmente para financiar el sistema. El problema ahora para las élites venezolanas es el de tratar de restaurar su coalición sobre bases diferentes, lo que casi inevitablemente implicará una redefinición del sistema democrático en direcciones más restrictivas y autoritarias.

Una palabra final sobre los pactos y la democracia. Przeworski ha argumentado —correctamente, a mi juicio— que los pactos aparecen en la agenda política sólo cuando las condiciones para un espontáneo compromiso de clases están ausentes o están amenazadas.⁷ Lo que las naciones democráticas capitalistas avanzadas tienen en común no son los pactos sino el capitalismo mismo, junto con «condiciones electorales e institucionales que generan un compromiso espontáneo, que apoya la coexistencia del capitalismo y la democracia». En ausencia de estas condiciones la democracia no puede emerger espontáneamente. Przeworski supone un modelo de sociedad capitalista donde la riqueza es generada por, y distribuida entre, capital y trabajadores dentro de un ámbito nacional. El caso venezolano está lejos de ser uno de «espontaneidad» del mercado; los pactos acordados en la fase de inauguración de la democracia tuvieron un marcado carácter utilitario, relacionado con el objetivo de controlar el Estado y las rentas petroleras. El motivo utilitario fue y es aún crucial para la legitimidad del sistema; hasta tanto los ingresos petroleros hacían posible algún grado de mejora generalizada en los niveles de vida de la población, así como la satisfacción de los deseos de los grupos de élite que entraron en los pactos; hasta ese punto, repito, la democracia parecía funcionar. Pero por debajo de esta situación había una realidad más profunda, caracterizada por una cultura política débil y muy frágil, excesivamente atada a preocupaciones utilitarias y por tanto fácilmente afectada por un empeoramiento de las condiciones económicas del país. El rasgo principal de la cultura política venezolana es la mentalidad rentista dominante tanto dentro de los grupos de liderazgo como dentro de las masas, y que espera que todos los problemas sean resueltos a través de un gasto público siempre creciente. Así, el modelo de dominación política estaba fundado sobre un esquema de desarrollo económico que era extremadamente vulnerable a la posibilidad de una reducción en

7

Adam Przeworski, «Capitalism, Democracy, Pacts: Revisited». Chicago: University of Chicago, 1985 (mimeo), p. 3; también Coronil, p. 63.

los ingresos petroleros, y también, quizás paradójicamente, a una inundación de petrodólares.

Pérez y Herrera: La maldición de los petrodólares

La experiencia democrática venezolana ofrece una ilustración sobresaliente de que el desarrollo económico es un proceso complejo de transformación política y social, que no depende de una variable en particular sino de una compleja red de factores que se refuerzan mutuamente. Lo que ahora se entiende como un lugar común —que el desarrollo económico no puede ser simplemente comprado, sin importar de cuánto capital financiero pueda disponer un país en un momento particular—, no fue entendido claramente en Venezuela durante los diez años de bonanza petrolera desde 1973 hasta 1983, y probablemente no ha sido todavía asimilado a plenitud.

La experiencia venezolana muestra también que la democracia puede tomar diferentes formas, y desarrollarse a lo largo de líneas diferentes, de acuerdo con la visión, el coraje y la determinación de un pueblo y su liderazgo. Como ha demostrado convincentemente Albert Hirschman, a la par que es cierto que no existe necesariamente una correspondencia biunívoca entre una materia prima (un producto como el petróleo) y «su» ambiente sociopolítico, en cada ocasión esa materia prima (petróleo, en el caso venezolano) imprimirá ciertos patrones propios en cualquier ambiente en el que se encuentre.⁸ El punto hasta el que se permite que el impacto de un producto de exportación de gran escala y dominante determine la vida de una nación, y conforme su estructura económica e instituciones políticas es una cuestión abierta, como se muestra en las distintas rutas asumidas —por ejemplo— por Gran Bretaña, Arabia Saudita, Noruega y Venezuela, después de los aumentos de precios petroleros de los años 1970. El petróleo ayudó al gobierno conservador

Albert O. Hirschman, «A Generalized Linkage Approach to Development, with Special Reference to Staples», *Economic Development and Cultural Change*, vol. Supplement, 1977, pp. 97-98.

de Margaret Thatcher, pero ciertamente no jugó un papel decisivo en la formación de su proyecto político para conducir a Gran Bretaña en una dirección alternativa a la que el país había tomado a partir de 1945. Los gobernantes sauditas, por otra parte, lograron preservar las tradicionales estructuras políticas y sociales de su país, asegurando a la vez que tuviese una condición financiera saludable incluso con una caída de los precios petroleros, a través de inversiones juiciosas y metódicas en el exterior. Noruega tomó medidas específicas orientadas a evitar el llamado «efecto venezolano», esto es, las distorsiones introducidas por una riqueza súbita y masiva en el estilo de vida de un país. Tocó a Venezuela experimentar el traumático impacto de la combinación de riqueza petrolera con demagogia.

En su iluminador intento por descubrir en detalle «cómo una cosa puede conducir a la otra» a través de los requerimientos e influencia de un particular producto de exportación, Hirschman considera la posición de productos «enclaves» definidos por la ausencia de conexiones con el resto de la economía, con excepción de lazos puramente fiscales (que es exactamente lo que sucede con el petróleo en Venezuela). Señala que para que la conexión fiscal sea un mecanismo eficaz de desarrollo, deben combinarse la capacidad de imponer tributos con la capacidad de invertir productivamente, porque si la capacidad de pechar se desarrolla primero, entonces la desproporción entre el ingreso resultante y la capacidad para invertirlo productivamente en la economía doméstica probablemente se reflejará «en un agrandamiento de la burocracia, en servicios sociales más generosos y con frecuencia poco realistas, en el gasto en armamentos y otras inversiones despilfarradoras, y, en la balanza de pagos, en un aumento de las importaciones de bienes de consumo».⁹ Lo que hace que el análisis de Hirschman sea tan relevante para mis propósitos es que su descripción de lo que ocurre con una conexión fiscal «defectuosa» coincide exactamente con la experiencia venezolana de las tres últimas décadas, pero más obviamente desde la explosión de los precios petroleros de los años 1970. Por otro lado, para que su argumento no suene demasiado determinista, Hirschman también señala que un producto de exportación que haya jugado un papel importante de refuerzo en relación con un contexto social y político dado (como lo hizo el petróleo durante el período de gobierno militar entre 1948 y 1958), pudiera vol-

9 *Ibid.*, pp. 75-76.

ver a jugar este papel en un contexto muy cambiado. De este modo, «tal como la caña de azúcar magnificó la extensión de la esclavitud, así también ahora amplifica el socialismo en Cuba, al permitir a ese país el involucrarse en experimentos y adentrarse en direcciones que no son ni con mucho fácilmente accesibles a otros países socialistas». ¹⁰ En otras palabras, la forma como un sistema político maneja las implicaciones de un producto de exportación «condicionante» y con un papel dominante en la economía no está predeterminada por reglas inflexibles, y puede diferir de acuerdo con la influencia de aquellos factores que conforman los procesos históricos complejos, más particularmente con la visión y las decisiones de los grupos de liderazgo en relación con lo que debe hacerse.

Cuando se produjo el primer gran aumento de los precios petroleros hacia fines de 1973, el sistema político venezolano estaba considerando un cambio en el rumbo de su política económica, porque se hacía cada vez más evidente que el Estado no podría seguir subsidiando la industria y la agricultura del país, y que era necesario ir abriendo gradualmente las puertas a la competencia internacional. ¹¹ La inundación de los petrodólares, sin embargo, permitió al liderazgo venezolano, ejemplificado por el recientemente electo Carlos Andrés Pérez, profundizar el modelo de desarrollo financiado estatalmente, con consecuencias muy negativas. En vez de aceptar las limitaciones del país en ese momento, y las restricciones impuestas por la carencia de adecuados planes de inversión y de las destrezas intelectuales, técnicas y gerenciales necesarias a la transformación de Venezuela de la noche a la mañana, se quiso —en palabras de Pérez— convertir al país en «una de las naciones más altamente industrializadas del mundo». El liderazgo venezolano arrojó miles de millones de dólares sobre una economía débil y distorsionada, en un esfuerzo masivo y patéticamente mal concebido para resolver los problemas del país con la aplicación de dosis extraordinarias de una medicina que jamás había funcionado en el pasado. Los resultados fueron obvios con prontitud: la burocracia estatal aumentó de 400.000 empleados en 1974 a 800.000 en 1979 y a 1.200.000 en 1983; la deuda nacional creció enormemente, puesto que los nuevos planes de desarrollo eran tan gigantescos que no podían ser financiados de manera exclusiva con in-

Ibid., p. 97.

Margarita López Maya y Luis Gómez Calcaño, *Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana, 1958 a 1985*. Caracas: CENDES, UCV, 1985, p. 36

gresos derivados del petróleo; el siempre creciente e improductivo sector estatal se convirtió rápidamente en un foco de corrupción generalizada en la sociedad; miles de millones de dólares fueron canalizados al exterior para adquirir viviendas de lujo en los Estados Unidos y otros países, y con una moneda sobrevaluada los venezolanos de clase media se convirtieron en consumidores insaciables de toda clase de bienes importados, lo que generó un déficit de 1.600 millones de dólares en la balanza comercial de 1978.¹²

El político demócrata-cristiano Luis Herrera Campíns, que sucedió a Pérez a comienzos de 1979, dijo en su discurso inaugural que Venezuela era «un país hipotecado» y prometió reestructurar la deuda externa durante su período presidencial. Una vez más, sin embargo, el nuevo gran aumento en los precios del petróleo de ese año le dio al gobierno la oportunidad de continuar posponiendo decisiones difíciles sobre la necesidad para Venezuela de minimizar drásticamente la naturaleza rentista de la vida nacional. A fines de 1981 la deuda a corto plazo del país había pasado de 7.200 millones de dólares a 14.000 millones, mientras que la deuda a largo plazo había aumentado de 12.000 a 15.000 millones. El gasto corriente del gobierno pasó de 27.546 millones de bolívares en 1978 a 54.616 millones en 1981 (un promedio anual de 33%). Hacia 1982 más del 50% del presupuesto nacional se iba en pagar salarios de la burocracia estatal.¹³

En breve, el resultado de diez años de bonanza petrolera combinados con la política demagógica fue abismal: Venezuela estaba fuertemente endeudada y no podía pagar sin sacrificar sus reservas nacionales; los grandes proyectos de inversión en la región de Guayana habían creado empresas estatales no competitivas y crónicamente deficitarias, la moneda tuvo que ser devaluada en más del 100% en 1983, y las desigualdades sociales alcanzaron proporciones alarmantes. Estos decepcionantes resultados, no obstante, no produjeron la muy necesaria rectificación bajo el nuevo presidente, el socialdemócrata Jaime Lusinchi, quien asumió el poder en 1984.

12 James Petras y Morris H. Morley, «Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela», *Third World Quarterly*, 5, 1, 1983, pp. 7-27.

13 Leandro Cantó, *Los años del gatopardo. La saga de Jaime Lusinchi*. Caracas: Certum, 1989, p. 15.

Los años de Lusinchi: La era de la evasión

Muy temprano durante su gobierno Jaime Lusinchi estableció lo que según él serían los tres objetivos fundamentales de su administración. Prometió, primero, gobernar bajo los más estrictos criterios de austeridad administrativa y financiera, argumentando que el suyo sería el primer gobierno de la Venezuela pospetrolera; segundo, dijo que pagaría la deuda nacional «hasta el último centavo»; finalmente formuló su visión de lo que llamaría «el pacto social», que presumiblemente era una nueva versión de la política tradicional de consenso de las élites –dentro de un contexto pluralista– que había prevalecido por años en Venezuela, pero que había comenzado a deteriorarse agudamente bajo la administración de Herrera, como resultado de las dificultades sociales y económicas crecientes experimentadas por el sistema político.

Lusinchi mantuvo su palabra, al menos en lo que se refirió a su intención de pagar la deuda externa. De hecho, Venezuela pagó una buena cantidad de dinero a los bancos extranjeros, hasta el punto de que hacia el final del período de Lusinchi el país había agotado sus reservas internacionales, y la situación financiera se había hecho tan preocupante que el Presidente no tuvo más remedio que suspender, a comienzos de 1989, los pagos de la deuda, y pedir a los bancos una renegociación de los términos. Esta decisión la tomó justo un mes antes de entregar el cargo a su sucesor. Entre 1984 y 1988 Venezuela recibió 60.000 millones de dólares de sus exportaciones petroleras y no petroleras, pero pagó 62.836 millones de dólares en importaciones y por intereses y capital de la deuda externa, dejando un déficit de 2.836 millones de dólares. Cuando Lusinchi asumió la primera magistratura la deuda externa era de 33.000 millones de dólares y al final de su administración todavía alcanzaba la suma de 26.500 millones de dólares, a pesar del hecho de que el gobierno había pagado 26.000 millones de dólares en cuatro años. Las reservas operativas del país, que en diciembre de 1987 eran de 3.500 millones de dólares, habían sido reducidas, un año más tarde, a la lastimosa cifra de 54 millones de dólares.¹⁴

Las raíces de esta situación residían en el supuesto equivocado del gobierno de que, una vez más, altos precios del petróleo vendrían al rescate

El Diario de Caracas, Caracas, 3 de enero de 1989; también en Sanín, *Los muertos de la deuda*. Caracas: Centauro, 1989, pp. 222, 232-233.

de Venezuela, haciendo posible no sólo un aumento sistemático del gasto doméstico (que claramente violaba la promesa de austeridad de Lusinchi), sino también el pago puntual y completo de nuestras obligaciones. Este supuesto estuvo en la base del acuerdo firmado por el gobierno de Venezuela y sus acreedores externos en septiembre de 1984, en el que nos comprometimos a cancelar un mínimo de 4.200 millones de dólares anuales por un período de doce años (el país no obtuvo una tasa de interés fija). El Ministerio de Planificación (Cordiplan), sobre cuyas proyecciones económicas actuaron los negociadores venezolanos, apoyó el acuerdo argumentando que los precios del petróleo aumentarían en un 30% y que nuestro ingreso derivado del petróleo crecería en 54% durante esos cinco años.¹⁵ La extrema irresponsabilidad de tan exageradamente optimistas escenarios sólo puede ser apreciada con claridad si recordamos que ya en 1984, e incluso antes, hubo claros signos que apuntaban a una sobreoferta de petróleo y a una posible reducción ulterior de los precios por el resto de la década.¹⁶ Al momento de concluir el acuerdo, Venezuela disponía de la muy realista alternativa de posponer las negociaciones con los bancos acreedores, estableciendo unilateralmente un programa de pagos que atase las cantidades a pagar al ingreso real a recibir de nuestras exportaciones petroleras.

Cuando el acuerdo de 1984 fue firmado, algunos comentaristas argumentaron que los términos eran tan malos que el país había sido dejado con sólo dos opciones: o bien reducir drásticamente las importaciones, frustrando así cualquier expectativa de crecimiento económico por el resto de la década, o bien tratar de obtener más préstamos en el exterior, complicando aún más nuestras perspectivas a largo plazo de escapar a la «trampa de la deuda».¹⁷ El gobierno de Lusinchi no escogió ninguna de estas opciones, decidiendo antes bien liquidar las reservas internacionales para pagar nuestras importaciones, generando al mismo tiempo una gigantesca *deuda interna* a través de la emisión de bonos de la deuda pública, que le permitió mantener niveles de gasto que tal vez pudiesen ser aceptables en los años de bonanza, pero definitivamente no en un momento cuando el país se encontraba en difícil estrechez financiera.¹⁸

15 *SIC*, 468, Caracas, septiembre-octubre 1984, pp. 343-345.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 Cantó, p. 37.

El gobierno de Lusinchi no sólo no cumplió su promesa de austeridad, sino que de hecho aumentó el gasto público cada año durante cinco años.¹⁹ Desde una perspectiva puramente política, el proyecto de «pacto social» dio paso en realidad a una marcada evolución hacia un régimen presidencial más autoritario. Esta acentuación de la típica vena autoritaria del populismo bajo Lusinchi se reflejó en un alarmante —y sin precedentes— aumento de la persecución de sus críticos y en intentos de silenciar la libre expresión del pensamiento, con más de 180 casos de intervención del gobierno contra periódicos, estaciones de TV y de radio, y contra editores y columnistas individuales.²⁰ La corrupción alcanzó asimismo nuevas cotas, en particular el todavía vigente escándalo de Recadi, relacionado con el órgano gubernamental encargado de distribuir dólares a tasas preferenciales para los importadores de artículos seleccionados. Estimaciones conservadoras ponen la suma total de lo que se perdió o fue sustraído en una cifra no inferior a 200.000 millones de bolívares, cifra superior al presupuesto nacional de un año.²¹ Tal fue el legado de Lusinchi a Pérez, y debe decirse que, mientras es cierto que el petróleo nos ha permitido tener un tipo de democracia que ha llevado al país por este sendero de decadencia, es legítimo preguntarse si éste es el único tipo de democracia que podemos tener. Para ponerlo de otro modo, el punto no es que el petróleo haya hecho posible la «democracia» en Venezuela, sino que ciertamente ha hecho posible la clase de democracia que hemos tenido hasta ahora.

Ibid., pp. 55-59.

Sanín, p. 209.

Ibid., p. 311.

19

20

21



La campaña electoral de 1988: El arte de la demagogia

Dos rasgos fundamentales del comportamiento político del liderazgo democrático venezolano han sido, por un lado, la propensión a engañar al electorado con falsas promesas, creando irresponsablemente expectativas que a menudo son incumplibles; por el otro, nuestros líderes democráticos han tenido —y todavía tienen— una tendencia a formular sus planes y tomar sus decisiones sobre la base del mejor futuro concebible, con poca o ninguna preocupación ante contingencias inesperadas.

Probablemente estos dos rasgos son hasta cierto punto típicos del modo como los políticos democráticos se comportan en cualquier parte. Lo que puede, sin embargo, afirmarse sin ningún resto de duda es que la demagogia, definida en el sentido político como el arte de engañar intencionalmente a la gente para favorecer los propios fines, es un aspecto fundamental de la política democrática venezolana, y un factor al que debe darse un lugar privilegiado en cualquier intento de comprender los orígenes y perspectivas de la crisis que ahora afecta al país.

En ninguna otra ocasión de nuestra experiencia democrática han sido tan obvios o han jugado un papel tan grande la realidad y los peligros de la demagogia como en la campaña electoral de 1988. Contrariamente a lo que ocurre en, por ejemplo, los Estados Unidos o Gran Bretaña, en Venezuela las campañas para las elecciones presidenciales y parlamentarias duran, en su fase más intensa, por lo menos de doce a quince meses, y el dinero que es gastado en ellas empequeñece de lejos los gastos de cualquier otro país en el mundo en términos *per cápita*. De acuerdo con declaraciones hechas por los secretarios de finanzas de los dos partidos principales en el curso de la confrontación de 1988, puede certificarse que

Acción Democrática (socialdemócratas) y Copei (democratacristianos) gastaron en conjunto no menos de 3.000 millones de bolívares en sus respectivas campañas (más de 600 millones de dólares).¹ Que estos partidos no pueden generar tan enormes sumas de dinero a través de canales regulares, tales como contribuciones de sus miembros, es un hecho bien conocido, lo que ha llevado a acusaciones por parte de la oposición socialcristiana de que el partido gobernante empleaba fondos públicos para financiar su candidato, a lo que Acción Democrática respondió con un despliegue de propaganda que intentaba mostrar que la campaña de Copei era financiada con dinero proveniente de negocios de drogas ilícitas.

En un sentido, más importantes que los poco edificantes «trucos sucios» de esta campaña fueron las promesas hechas por los dos rivales principales, especialmente por el candidato del partido de gobierno, el carismático Carlos Andrés Pérez. Aun cuando su primer período de gobierno (1974-1979) había concluido en escándalo, en una crisis económica (la tasa de crecimiento de 2% en 1978 era la más baja de toda la era democrática), y en la derrota de su partido en las elecciones de 1978, Pérez capitalizó en 1988 los recuerdos de la todavía más desastrosa administración democratacristiana que lo había sucedido, así como la imagen cuidadosamente cultivada de acuerdo con la cual a Venezuela «nunca le había ido mejor» como durante su primera administración. Toda su campaña fue estructurada sobre la premisa de que un nuevo gobierno de Pérez haría regresar la bonanza que el país disfrutó cuando los precios del petróleo subieron a comienzos de los años 1970, y Pérez prometió explícitamente en su manifiesto electoral «restaurar los niveles de vida» prevalecientes durante los años de los petrodólares.² Pérez hizo esto a pesar del hecho de que él sabía, tanto como cualquier miembro del partido de gobierno, que se había pedido al presidente Jaime Lusinchi no tomar decisiones económicas que pudiesen afectar los resultados electorales. Lo que esto significaba era que se daba vía libre a la liquidación de las reservas internacionales del país con la finalidad de mantener un alto nivel de importaciones y para dar la impresión de que el gobierno de AD estaba manejando la economía exitosamente. Pérez había dicho que «compartía la responsabilidad» de todo lo que el gobierno de AD (Lusinchi) hu-

1 Pueden encontrarse numerosos comentarios sobre las finanzas de las campañas en la prensa venezolana, particularmente entre febrero y noviembre de 1988.

2 *Zeta*, Caracas, 20 de octubre de 1988.

biera hecho,³ y el legado que recibió en febrero de 1989 no le era sorprendente, a pesar de sus propios desmentidos en contrario.

A través de toda su campaña Pérez atacó fuertemente al Fondo Monetario Internacional, llamándolo «genocida» e irrumpiendo contra su «totalitarismo económico»; incluso llegó a comparar los programas de ajustes del FMI con la bomba neutrónica (sólo mata gente).⁴ Su campaña lo proyectó como un típico político populista de inclinaciones izquierdistas, y varias veces declaró «soy un populista», «estoy del lado opuesto del neoliberalismo», «las fuerzas creativas que rescatarán el proceso democrático venezolano pertenecen a la izquierda democrática». ⁵ También prometió específicamente: a) dar prioridad al crecimiento económico, aun cuando esto implicara aceptar mayores niveles de inflación; b) establecer «estricto control de cambios», y c) establecer un «bloque de deudores» junto con otros países latinoamericanos y del Tercer Mundo, y sugirió que se opondría al pago de la deuda «porque no podemos pagarla». ⁶ No es sorprendente, por tanto, que poco después de que Pérez tomara posesión y retrocediera en todo lo que había prometido —aceptando en principio un severo programa de ajustes del FMI y declarando «tenemos que pagar la deuda»— el país explotara en una insurrección popular ferozmente destructiva.

Sin duda, en febrero de 1989, la mayoría no entendía todas las implicaciones del «ajuste», pero ciertamente contrastaba las promesas que se le habían hecho y las expectativas levantadas en 1988 por el candidato triunfante, con el aumento de precios de los productos de consumo básicos decretado por el nuevo gobierno inmediatamente al llegar al poder. De paso debe decirse que algunas de las promesas del principal candidato de oposición no fueron menos irresponsables, aun cuando naturalmente presentó un panorama más realista de las precarias condiciones sociales y económicas que prevalecían, como arma para atacar el desempeño del gobierno.

Lo que se esperaba de Pérez emergió claramente en un reporte de la campaña y de las perspectivas del nuevo gobierno publicado en la revista

El Nacional, Caracas, 25 de enero de 1987. 3

Número, Caracas, 30 de agosto de 1987. 4

El Nacional, Caracas, 4 de enero de 1981; *El Universal*, Caracas, 27 de noviembre de 1988; Número, Caracas, 25 de enero de 1987. 5

El Nacional, Caracas, 30 de noviembre de 1987; *El Universal*, Caracas, 19 de abril de 1987; *El Nacional*, Caracas, 5 de mayo de 1986; *Gerente*, Caracas, noviembre de 1988. 6

norteamericana *The Atlantic* en febrero de 1989, sólo pocos días antes de que las masas tomaran las calles. La imagen que surge es la de un líder populista que probablemente repudiaría la deuda nacional, bien fuera declarando una moratoria, bien fuera creando un frente latinoamericano unido para negociar nuevas condiciones con los bancos.⁷ La pregunta es: ¿Por qué cambió Pérez? Su nueva actitud, menos demagógica, ¿redime de algún modo su previa irresponsabilidad? ¿Qué es lo que está tratando de hacer y qué presagia para la democracia venezolana? ¿Está tratando Pérez realmente de corregir sus errores del pasado? ¿Cuáles son sus probabilidades de éxito?

El beso de la muerte del FMI

En febrero de 1989, sólo unos pocos días después de los desórdenes que habían sacudido al país, el gobierno venezolano firmó una «carta de intención» con el Fondo Monetario Internacional, uniéndose así a las filas de varias otras naciones latinoamericanas que habían previamente aceptado la condicionalidad del Fondo a cambio de apoyo financiero.

Casi sin excepción, las naciones latinoamericanas acumularon grandes déficits en cuenta corriente y aumentaron significativamente su deuda externa neta durante fines de la década de 1970 y a comienzos de la siguiente.⁸ Los expertos del Fondo —en gran medida correctamente— han culpado a la política doméstica, en particular a la expansión fiscal y la sobrevaluación de la tasa de cambio, por este fenómeno que afectó simultáneamente a muchos países.⁹ A esto debe sumarse el papel jugado por los bancos. Cargados con un exceso de capital disponible proveniente principalmente de depósitos en petrodólares, un cierto número de poderosos bancos europeos y norteamericanos pasaron por una fase de irresponsables «sobre préstamos» a fines de los años 1970, lo que tuvo sin duda un impacto significativo en la creación de la actual crisis de insolvencia. Los crecientes déficits latinoamericanos, que pudieran haber requeri-

7 «The New Liberator», *The Atlantic*, February 1989, pp. 29-35.

8 M. Pastor, «Latin America, the Debt Crisis and the International Monetary Fund», *Latin American Perspectives*, 16, 1, 1989, p. 81 (tabla).

9 E. Weisner, «Latin American Debt: Lessons and Pending Issues», *American Economic Review*, 75, May 1985, pp. 191-195.

do severos ajustes en un período anterior, encontraron en su lugar un financiamiento fácilmente obtenible de bancos occidentales con capital abundante. La consecuencia fue la acumulación de deuda.¹⁰ Permanece abierta la pregunta, por supuesto, de si los gobiernos latinoamericanos, habiendo carecido de tan fácil acceso al capital extranjero, habrían sido proclives a emprender los necesarios ajustes, o si más bien hubiesen optado por financiar sus déficits, como ha ocurrido con frecuencia, con la emisión de más dinero inorgánico.

Hasta fines de los años 1970, entonces, una buena parte de América Latina pudo acceder al crédito privado para evitar tanto los ajustes en general como la condicionalidad del FMI en particular; pero esta situación fue revertida radicalmente con la emergencia de la crisis de la deuda en 1982: «Con países que buscaban, tanto un alivio a corto plazo como la ayuda del FMI en la renegociación de préstamos a largo plazo, la resistencia de los años 1970 a los programas de estabilización patrocinados por el FMI fue rápidamente vencida».¹¹ Hacia 1983, tres cuartas partes de los países de América Latina estaban operando bajo la condicionalidad del FMI. Venezuela, como señalé antes, llegó relativamente tarde a las puertas del FMI; nuestras mayores reservas internacionales y el inextinguible flujo de ingresos petroleros nos permitieron continuar financiando los déficits hasta 1988. Pero esta llegada tardía es precisamente lo que hace el caso venezolano interesante, puesto que no es un secreto para nadie lo que los resultados de los programas de ajuste del FMI han sido y lo que de manera realista hubiese podido esperarse de su rigurosa implementación. La tragedia para Venezuela es que, de nuevo, el gobierno parece creer que nuestro caso será diferente, y, peor aún, *que el programa de ajustes negociado con el FMI traerá resultados positivos rápidamente y sin una severa recesión económica*. Esta es, pienso, una ilusión adicional y dramáticamente peligrosa de la demagogia populista.

¿Cuáles son los objetivos clave de los programas de ajuste del FMI? Por un lado, el Fondo trata de garantizar a corto plazo la continuidad de pagos de los deudores a los bancos, prestándoles dinero fresco que es esencialmente empleado para cancelar más deudas. Por el otro, el Fondo busca a mediano plazo estimular el crecimiento de las relaciones comerciales de los países deudores con las naciones industrializadas de Occidente. El primer objetivo es de suyo altamente cuestionable, pues lejos de

Pastor, p. 83.

Ibid., p. 90.

10

11

abrir una salida a la «trampa de la deuda», lo que ha logrado hasta ahora es agravar el problema que supuestamente trata de combatir. En lo concerniente al segundo objetivo no hay nada de malo en principio, pero podemos preguntar legítimamente dos cuestiones: primero, ¿cuáles son los costos que deben esperarse con la aplicación de la estrategia económica del Fondo? Y segundo, en el caso de Venezuela, ¿existe una alternativa?

Los expertos del FMI están en lo cierto al pensar que los países de América Latina deben pasar a través de un severo proceso de ajuste económico; donde no parece estar en lo correcto, sin embargo, es de esperar que este ajuste pueda realmente producir resultados promisorios con rapidez. Tampoco parecen estar preocupados con el impacto político de sus proposiciones económicas. En suma, el paquete de políticas del Fondo busca reducir la demanda doméstica con el fin de rebajar el flujo de importaciones y promover el crecimiento de las exportaciones, disminuyendo así el déficit. El mecanismo empleado para reducir la demanda doméstica es el de deprimir el ingreso real de los consumidores, asegurándose de que quede rezagado respecto de la tasa de inflación. Es por esto que el paquete del Fondo usualmente exige la eliminación de todo control de precios, con excepción del precio de la mano de obra.¹² Esto implica que el Fondo espera que el gobierno que aplique su programa imponga, si es necesario, una congelación de sueldos y salarios, una cosa muy difícil de hacer dentro de un contexto democrático en América Latina. Los expertos del FMI argumentan que del mediano al largo plazo las políticas que recomiendan abrirán el camino a economías más saludables y competitivas, con mayores tasas de empleo y mayores ingresos, dirigidas al crecimiento de nuevas industrias de exportación. Esto puede que ocurra hasta cierto punto, pero nadie debe llamarse a engaño respecto de los costos —políticos y económicos— del ajuste, ni respecto del momento en que los cambios estructurales buscados tengan lugar, que debe ser medido (como ocurre con la mayoría de los cambios económicos realmente profundos) en años y tal vez en décadas antes que en meses.

La experiencia de los años recientes en América Latina muestra inequívocamente que la aplicación del paquete de políticas del Fondo es una receta de recesión económica e inestabilidad política.¹³ Puede que esto

12 Miguel Ignacio Purroy, «Evaluación del Programa Económico», *SIC*, 513, Caracas, abril de 1989, p. 128.
13 R. Frankell y G. O'Donnell, «Los programas de estabilización convenidos con el FMI y sus impactos internos». Buenos Aires: CEDES, 1978.

sea inevitable, pero lo que me interesa acá es tratar de contestar estas preguntas: primero, ¿qué espera el gobierno venezolano que ocurra una vez que ha aceptado el paquete de políticas del Fondo?; y segundo (en la sección final), ¿qué es lo que probablemente ocurrirá verdaderamente? O, para ponerlo de forma distinta, ¿cuál es el panorama para el sistema democrático venezolano ahora que, por la primera vez en décadas, está aparentemente tratando de aceptar la realidad?.

El «paquete» venezolano

La «carta de intención» firmada por el gobierno venezolano y el FMI en febrero de 1989 expone en detalle el paquete de políticas económicas que se está implementando ahora.¹⁴ Las políticas clave son las siguientes: primero, se ha establecido una tasa de cambio flotante, sujeta a las fuerzas del mercado, eliminando las tasas preferenciales que existían hasta febrero de 1989; segundo, se han liberado los precios y las tasas de interés y, finalmente, se han eliminado varios subsidios provistos por el Estado y se han aumentado los precios de bienes y servicios producidos por éste.

El paquete de políticas ha sido objeto de severas críticas desde un punto de vista puramente económico por varios de los economistas venezolanos más destacados.¹⁵ Olvidando el frecuentemente confuso debate acerca de ciertos aspectos específicos del paquete, lo que parece estar absolutamente claro es que tendrá un impacto recesivo sobre la economía, el cual puede muy bien durar años. Si en realidad el gobierno desea controlar la inflación y reducir el déficit (y debe hacer ambas cosas para obtener el apoyo que se pide al FMI), el ingreso real de los consumidores venezolanos debe caer, así lo indican las actuales tendencias, un 40% en este año. Por supuesto se espera que a largo plazo se dará un aumento de la productividad que compensará la pérdida de ingreso real experimentada ahora por una mayoría de venezolanos. Pero un aumento verdaderamen-

El Universal, Caracas, 3 de marzo de 1989.

Asdrúbal Baptista, *El Universal*, Caracas, 26 de febrero de 1989; E. Gómez, *El Diario de Caracas*, Caracas, 21 de febrero de 1989; Leopoldo Díaz-Bruzual, *El Universal*, Caracas, 25 de enero de 1989.

te significativo en productividad y competitividad toma años; entretanto, no obstante, el paquete de políticas del FMI generará las mismas consecuencias recesivas que han tenido en otras partes programas similares. El cambio estructural que Venezuela ha comenzado a experimentar en su vida económica, originado por la drástica reducción de nuestra capacidad de vivir de la renta petrolera y por la carga de la deuda, es un proceso de largo plazo y futuro incierto. Es por tanto altamente irresponsable de parte del gobierno venezolano aplicar un programa de ajustes tan severo —para nuestros estándares— que es manifiestamente recesivo, y al mismo tiempo pretender que la economía continúe creciendo este año y alcance una tasa de crecimiento de 5% en 1990.¹⁶

El nuevo gobierno de Pérez, a mi juicio, ha actuado correctamente al aceptar en principio la necesidad que tiene la economía venezolana de proseguir tres rutas de ajuste: primero, una mayor orientación externa de nuestra vida económica; segundo, un aumento sustancial de las tasas de ahorro por la desregulación de los techos a las tasas de interés, la creación de incentivos fiscales, la reducción de los déficits presupuestarios y la mejora de incentivos para el regreso de capitales fugados, y tercero, un papel reducido para el gobierno en la vida económica.¹⁷ El problema, sin embargo, es que en vez de tratar de explicar las causas reales, así como los probables efectos del paquete económico del FMI, el gobierno ha reiterado que la economía crecerá y que no habrá recesión. La aplicación del paquete generará inevitablemente gran desempleo, pero el Presidente prometió aun en el pasado mes de abril que crearía cientos de miles de empleos durante este año y el próximo.¹⁸

Debe tenerse asimismo en mente que el paquete del FMI hará que Venezuela incurra en nuevas deudas hasta por la cantidad de 26.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.¹⁹ El que hubiera habido alternativa ante un paquete de políticas cuyos efectos negativos son bien conocidos, y que además nos hará contraer deudas adicionales, es un asunto que trataré luego, cuando discuta las perspectivas del sistema político venezolano. Lo que finalmente debe enfatizarse por ahora es que el gobierno está sobrestimando la capacidad del público venezolano

16 Purroy, p. 129.

17 Estas políticas han sido recomendadas, en mayor o menor grado, a todos los países latinoamericanos; véase J. Sachs, «Recent Studies of the Latin American Debt Crisis», *Latin American Research Review*, 23, 3, 1988, p. 175.

18 *El Diario de Caracas*, Caracas, 30 de abril de 1989.

19 *El Nacional*, Caracas, 11 de enero de 1989.

para absorber la contradicción entre, por una parte, la recesión económica que golpea sus bolsillos y, por la otra, las declaraciones del Presidente sobre un crecimiento económico y una prosperidad a corto plazo. La insurgencia de febrero de 1989 fue probablemente sólo el primer y violento síntoma del descontento social que ahora fermenta en Venezuela.



Las perspectivas de la democracia venezolana

La experiencia latinoamericana muestra de modo inequívoco que la austeridad y los programas de «recuperación» preconizados por el FMI no pueden ser rigurosamente implementados bajo condiciones democráticas. Estos programas —que responden a una necesidad real de restablecer el equilibrio en varios indicadores macroeconómicos clave—, han tenido, por lo menos en sus fases iniciales, que pueden durar varios años, un severo impacto recesivo que afecta violentamente los ya precarios niveles de vida de la gran mayoría de la población en cada uno de los países en los que han sido aplicados. Solamente en Chile, donde una dictadura militar ha estado en el poder desde 1973, ha sido posible llevar a cabo un paquete de políticas de la clase que el FMI recomienda para el resto de América Latina. Parecería que desde un punto de vista puramente económico el experimento ha generado resultados aleccionadores, pero las repercusiones sociales, en términos del crecimiento de los niveles de pobreza y ulterior agravamiento de la desigualdad de ingresos, han sido muy altas.¹ No obstante, dejando de lado el tema de los costos sociales, lo que está claro es que el programa económico ejecutado por el régimen de Pinochet hubiese confrontado una gran oposición en un contexto político diferente.

Lo que de hecho ha ocurrido en países tales como Argentina, Brasil e incluso México, es que los programas de estabilización no han sido llevados a cabo como fueron concebidos originalmente, porque se ha hecho

A. Romero, *América Latina: Militares, integración y democracia*.
Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1989, pp. 42-49.

patente que no es posible a aquellos gobiernos que no sean abiertamente autoritarios el imponer privaciones a sociedades que no están dispuestas a aceptarlas sin protestar. El destino del paquete venezolano depende en gran medida, primero, de cuánto esté el gobierno dispuesto a admitir que para controlar eficazmente la inflación (con tasas por lo menos inferiores al 20%) la economía venezolana deberá abandonar todo objetivo de crecimiento significativo por los próximos años, y segundo, lo que ocurrirá dependerá también de la reacción de los principales actores sociales y políticos a la recesión que inevitablemente experimentará el país.

El sistema democrático venezolano está entrando en terrenos totalmente inexplorados, puesto que en el pasado nunca tuvo que sufrir las dificultades económicas que son comunes a otros países de la región y que necesariamente se desprenderán de la aplicación del programa del FMI. El gobierno se encuentra atrapado en un dilema: si lleva a cabo el programa estrictamente tendrá que enfrentar una intensa oposición política y una protesta social que pudiera desestabilizar el sistema seriamente; por otra parte, si trata de atenuar el contenido evidentemente doloroso del programa, por ejemplo, aumentando el gasto público, pudiera con facilidad acelerar la inflación y destruir cualquier beneficio que el paquete pudiera lograr y de este modo causar ambas cosas: una recesión y una situación hiperinflacionaria.

Después de los eventos de febrero de 1989, que fueron seguidos por una huelga general muy exitosa en mayo, el gobierno parece tentado a desdecir su promesa de reducir el gasto público. En 1988 el gobierno de Lusinchi inyectó 60.000 millones de bolívares a la economía, los que se obtuvieron de un aumento de la deuda pública interna. Este año y el próximo, el gobierno de Pérez dispondrá de importantes recursos monetarios provenientes de la venta (monopolizada) de dólares en el mercado libre a las nuevas y superiores tasas. Ya el presupuesto de 1989 es el más alto que el país haya tenido, en el orden de 300.000 millones de bolívares. La reciente creación de una variedad de subsidios al consumo podría fácilmente destruir lo que se está haciendo al eliminar los viejos subsidios a la producción.

Un gobierno responsable tendría que asumir el imperativo de llevar adelante el paquete del FMI tal y como fue originalmente concebido, o adoptar una alternativa aún más radical a lo largo, básicamente, de las mismas líneas de austeridad, reduciendo severamente la inflación y controlándola estrictamente, al costo de la recesión. Para poder hacer esto al

tiempo que se preserve la paz social y la estabilidad política, el gobierno tendría que contar con el apoyo de una mayoría sustancial del pueblo venezolano. Pero esto es precisamente lo que no puede lograr con facilidad después de todas las falsas promesas hechas durante la campaña electoral. Es probable que sea muy tarde para que la democracia venezolana pueda enmendar sus costumbres, de modo tal que le sea posible crear las condiciones para establecer un modelo de desarrollo no rentista como su base económica, y la reacción de algunos de los principales actores del sistema político pareciera corroborarlo.

Para empezar, el propio partido del presidente Pérez, Acción Democrática, está profundamente dividido en relación con el contenido y el impacto del paquete económico. Los formuladores principales del programa, el presidente del Banco Central y el ministro de Planificación, no son miembros de AD y están siendo fuertemente criticados dentro del partido. El gabinete de Pérez tiene una mayoría de miembros que no pertenecen a AD, y el Presidente ha hecho muy poco para estimular la clase de apoyo político que tales programas de austeridad requieren en un ambiente democrático. A veces ha actuado como si creyese que sólo con el carisma de su personalidad y el atractivo de su liderazgo será capaz de llevar adelante el programa. Esto puede explicar su intento, que fracasó por completo, de persuadir a los sindicatos de no convocar la huelga general del pasado mes de mayo (1989). Pérez asistió a la reunión en la que el punto estaba siendo debatido, donde dio un apasionado discurso a favor de la medida que cayó en oídos sordos. Los dirigentes del partido AD, por otro lado, se dieron cuenta de que las posibilidades del partido en las inminentes elecciones regionales y municipales se veían verdaderamente oscuras, pues los electores estaban airados ante su continuo empobrecimiento.

El principal partido de oposición, el socialcristiano Copei, se ha manifestado en contra de los planes económicos del gobierno, pero su liderazgo ha sido incapaz, hasta ahora, de articular una alternativa que luzca tanto atractiva como viable. Durante la campaña electoral de 1988, el candidato de Copei a la Presidencia de la República, Eduardo Fernández, había hecho también toda clase de promesas, y se comprometió a que si ganaba implementaría políticas económicas dirigidas a reducir la interferencia del Estado en la vida económica, aumentando el papel de las fuerzas del mercado y limitando el gasto público. Por supuesto, no dijo cuáles podrían ser los costos de esas medidas; pero ahora él y su par-

tido no saben realmente qué hacer, excepto demandar prosperidad sin sacrificios.

Hasta ahora el impacto del programa económico ha conducido al comienzo —por primera vez— de la protesta social violenta en Venezuela, a la intensificación de los conflictos intraélites, y a una grave erosión de la credibilidad del liderazgo democrático (y también, probablemente, de la credibilidad y la legitimidad del propio sistema democrático). Las divisiones dentro de los dos partidos políticos principales y entre ambos se han profundizado de manera alarmante, y también entre el sector empresarial privado y los sindicatos. Incluso la Iglesia católica, todavía muy influyente, ha reaccionado de forma atípicamente radical al paquete económico del gobierno, usando el lenguaje más enfático posible para condenarlo y demandando una «alternativa», sin decir cuál sería. En su Conferencia Episcopal de 1989, la jerarquía eclesiástica expidió un documento en el que denunciaba el programa patrocinado por el FMI, diciendo que «la eliminación de los controles sobre los precios y las tasas de interés generarán caos social y económico» en Venezuela.² El sector empresarial privado también está profundamente dividido en torno al punto de las posibles ventajas y desventajas del paquete económico. Aun cuando durante años los industriales habían estado exigiendo una menor interferencia del gobierno en la economía, hoy opinan que la nueva política de reforma arancelaria, que abriría las puertas a una mayor competencia internacional eliminando gradualmente el proteccionismo, podría destruir segmentos enteros de la industria nacional. Por otra parte, los grupos cuyos intereses son primordialmente comerciales ven las nuevas políticas más favorablemente. Estos puntos de vista en conflicto condujeron en junio de 1989 a una ruptura abierta en el seno de Fedecámaras, la más representativa entre todas las organizaciones del sector privado, cuando varios miembros importantes pertenecientes al sector industrial decidieron abandonarla para crear una organización paralela. La insatisfacción y el resentimiento son intensos en algunos altos empresarios, y uno de los más respetados y mejor relacionados hombres de negocios del país dijo recientemente que «no queda mucho tiempo a la democracia en Venezuela».³ Finalmente, hay señales de inquietud y descontento entre los militares, quienes no han estado exentos del cuadro de corrupción

2 SIC, 514, Caracas, mayo de 1989, p. 186.

3 Nicomedes Zuloaga, en *El Diario de Caracas*, Caracas, 28 de mayo de 1989.

generalizada, de incompetencia y descomposición que invade día tras día las vidas de los venezolanos ordinarios. En medio del escándalo de Recadí, un general de brigada de la Fuerza Aérea Venezolana, ahora retirado, llevó personalmente documentos comprometedores al presidente de la Cámara de Diputados (Congreso Nacional), denunciando un enorme fraude en una operación para renovar el grupo venezolano de aviones de combate Mirage; pocas semanas más tarde, el comandante del Ejército renunciaba a su carrera militar, después de entender como motivada políticamente una decisión presidencial de destinarlo a otro cargo.⁴

¿Cómo resumir todo esto? Obviamente, las cosas no se ven bien para el sistema democrático venezolano; no es suficiente, sin embargo, declarar que estamos atravesando una crisis, puesto que eso es demasiado general. Uno debe tratar de definir con mayor precisión qué clase de crisis está ocurriendo o, más bien, cuál es su naturaleza. Con esto en mente, es útil distinguir entre, primero, una crisis gubernamental; segundo, una crisis de régimen; tercero, una crisis del sistema político-económico (o del «modelo de desarrollo»), y finalmente, una crisis de los fundamentos de la dominación social.⁵ Mi tesis es que la crisis que ahora afecta a la democracia venezolana pertenece a la tercera categoría, es decir, es una crisis del sistema político-económico. No se trata meramente de una crisis de inestabilidad política, aunque ciertamente hay elementos de esto en el cuadro general, y es más que una crisis de régimen, puesto que trasciende la esfera política y abarca también el crucial aspecto de los mecanismos de acumulación y reproducción de la vida económica. En otras palabras, lo que experimenta una crisis no es sólo el régimen político democrático, sino también toda la estructura económica rentista sobre la que ha estado basado durante tres décadas. La crisis, sin embargo, no ha alcanzado, y con la mayor probabilidad todavía no alcanzará, el nivel de una crisis de la dominación social porque, aun cuando el proceso de deterioro llegue al punto de que la democracia deje de existir en Venezuela, no habrá una revolución social y aquellos grupos sociales que han sido dominantes bajo las condiciones democráticas continuarán ejerciendo el poder en un régimen autoritario dirigido por militares. No es tan descabellado imaginar incluso que, si el descontento social se hace inmanejable en los próximos meses y años, y el régimen democrático cede el

El Nacional, Caracas, 25 de mayo y 29-30 de junio de 1989.

Acá sigo, hasta cierto punto, la clasificación de O'Donnell, «El Estado burocrático», pp. 49-53.

paso a una alternativa autoritaria, gente de los niveles superiores e intermedios de los partidos políticos cooperarían con una «solución» autoritaria al caos social y económico generado por su mal manejo de la democracia venezolana.

De lo que se ha dicho resulta obvio que será extremadamente difícil para el gobierno de Pérez ejecutar el programa del FMI como fue originalmente negociado, excepto a riesgo de una intensificación amenazante de la inestabilidad política. *La alternativa menos indeseable para el país en sus actuales circunstancias, sin embargo, es que el gobierno de Pérez sea capaz de implementar el paquete de reajuste sin que se genere un completo colapso del régimen.* Casi inevitablemente, este escenario creará un ambiente político más restringido en Venezuela, así como requerirá, primero, una redefinición en los pactos de las élites con la intención de contener los peligros de nuevas insurgencias de masas y, segundo, la posposición de reformas en las leyes electorales que podrían abrir el camino a los partidos de izquierda para escenificar un regreso sobre las bases del descontento social.

Estos desarrollos conducirían, por lo menos por unos cuantos años, a lo que en otra ocasión he denominado el escenario «colombiano»: algunos rasgos de democracia sobrevivirían en Venezuela, los partidos políticos continuarían existiendo y las elecciones seguirían teniendo lugar, pero bajo condiciones más restringidas, con muy altas tasas de abstención, violencia y pobreza en aumento, y una más intensa erosión de la legitimidad del régimen. Una variante de este escenario es la fórmula uruguaya bajo el antiguo presidente Juan María Bordaberry, en la que el liderazgo civil pide a los militares tomar parte en el gobierno en un intento por fortalecer los controles desde arriba sobre un populacho inquieto. Este escenario no es particularmente atractivo, pero posiblemente sea menos indigerible que una nueva dictadura militar, especialmente cuando se conoce que las Fuerzas Armadas venezolanas carecen de un proyecto político propio, y no sabrían qué hacer si el poder cae en sus manos.

Decadencia y crisis de la democracia.



¿A dónde va la democracia venezolana?

«Señor, danos tu gracia para aceptar con serenidad aquellas cosas que no podemos cambiar, el coraje para cambiar aquello que debe ser cambiado y la sabiduría para distinguir lo uno de lo otro».

REINHOLD NIEBUHR

«Los antiguos que desearon arrojar luz sobre las virtudes ilustres por todo el reino, primero ordenaron bien sus propios Estados. Deseando ordenar bien sus Estados, regularon primero sus familias. Deseando regular sus familias, cultivaron primero sus personas. Deseando cultivar sus personas, rectificaron primero sus corazones. Deseando rectificar sus corazones, anhelaron primero ser sinceros en sus pensamientos. Deseando ser sinceros en sus pensamientos, extendieron primero al máximo su conocimiento; tal extensión del conocimiento descansa en la investigación de las cosas.

Habiendo investigado las cosas, el conocimiento se hizo completo. Habiendo completado su conocimiento, sus pensamientos fueron sinceros. Siendo sinceros sus pensamientos, entonces sus corazones se rectificaron. Habiendo rectificado sus corazones, sus personas se cultivaron. Habiendo cultivado sus personas, sus familias se regularon. Habiendo regulado sus familias, sus Estados fueron rectamente gobernados. Habiendo gobernado rectamente sus Estados, todo el reino llegó a ser tranquilo y feliz».

CONFUCIO

Introducción al gran aprendizaje.



Comienzo a escribir este libro en febrero de 1994. Sólo ayer, día 2 del mes, tomó posesión de su cargo el nuevo presidente de la República, Rafael Caldera, reelecto el pasado diciembre de 1993 con un porcentaje del 17.12, si se toma en cuenta a los votantes más los no votantes inscritos, en un contexto de abstención que alcanzó alrededor del 41% de los electores cuyos nombres aparecen en el Registro Electoral Permanente (49% si se toma en cuenta a la totalidad de adultos en edad de votar). En realidad, si se asume como referencia el número total de mayores de 18 años, que incluye gran número de personas que ni siquiera se molestaron en inscribirse para votar, el nuevo Presidente fue electo por un 15% de la población adulta del país, en un escenario en el cual la mitad de los electores se abstuvo de pronunciarse.¹

Al salir del Congreso Nacional, luego de dar lectura a su discurso, Caldera anunció que pondrá en libertad a los militares que dirigieron los intentos de golpe de Estado en 1992, tan pronto se cumplan «los requisitos institucionales».

Como es costumbre en momentos como éste, los medios de comunicación, en general, están repletos de buenos deseos, de frases aclamatorias y en ocasiones hasta de cierta euforia. Alguno que otro periodista se atreve a sugerir que «las cuentas no cuadran»,² y que la intención expresada por el nuevo mandatario de eliminar el IVA (impuesto al valor agregado) a nivel de consumidores, así como de no llevar a cabo el temido aumento en el precio de la gasolina agravará inevitablemente el ya abru-

Datos suministrados por Alfredo Keller, de la firma especializada en estudios de opinión pública Consultores 21. Fabiola Sánchez, *El Nacional*, 3 de febrero de 1994, cuerpo de Economía, p. 2.

1
2

mador déficit de un Estado que el propio ex presidente provisional, Ramón J. Velásquez, calificó de «insolvente».

Venezuela, en todo caso, retoma el camino luego de varios años de agudos conflictos, y, en oportunidades, cruentos enfrentamientos; años que fueron testigos de dos golpes de Estado, de la destitución de un Presidente, de un efímero gobierno provisional y de una elección que arrojó un resultado precario, dividiendo al país en cuatro parcelas políticas que prácticamente se cancelan entre sí, poniendo de paso de manifiesto una obvia apatía por parte de un amplio sector de la población votante.

El nuevo gobierno es legal y legítimo pero difícilmente podría afirmarse que posee un claro mandato, y tampoco tiene un programa más allá de sostener que no será «ni populista ni neoliberal». Tampoco tiene, como tuvieron otros, dinero.

Lo patriótico y lo sensato es desear todos los éxitos posibles al nuevo gobierno democrático. Lo cierto, no obstante, es que racionalmente resulta cuesta arriba ver el futuro con optimismo. Al contrario, numerosos síntomas indican que la decadencia de la democracia venezolana se acentuará en los tiempos por venir y que el empobrecimiento nacional seguirá su curso inexorable.

El problema central del que se deriva esa decadencia puede sintetizarse en pocas palabras: la economía petrolera, que sustentó la democracia puntofijista, hace ya varios años que dejó de ser suficiente, y los venezolanos no hemos sido capaces —lo cual no indica de modo necesario que no lo seamos en el futuro—, de crear una economía alternativa y complementaria lo suficientemente sólida y productiva, como para asegurar mejores niveles de vida a las mayorías.

Podría tomarse el famoso «viernes negro» de febrero de 1983 como el momento simbólico en que quedó evidenciado el agotamiento de la economía petrolera, como pilar básico de la petrodemocracia venezolana. Esa «petrodemocracia» jamás fue formulada o condicionada para experimentar un proceso de empobrecimiento tan profundo y largo como el que hemos estado viviendo, y sus perniciosos efectos políticos todavía se encuentran madurando. Como explica un destacado economista:

En 1980, las exportaciones petroleras alcanzaban a 1.218 dólares por venezolano. En 1993, a cada venezolano le correspondieron 255 dólares (una quinta parte). No se ha sabido compensar la caída del ingreso petrolero con una mayor recaudación interna.

Incluso, estamos hoy peor que hace seis años. Cuando en 1987 el ingreso petrolero sólo aportó el 10% del Producto Interno Bruto —lo mismo que hoy—, la tributación interna representó otro respetable 10%. Hoy, los ingresos tributarios internos no suman más de 5.7% del PIB [...] Con esa bajísima contribución fiscal interna es imposible hacerle frente a los gastos del Estado...³

Sólo ayer se encargó Caldera de la presidencia, y ya hoy la radio anuncia disturbios en Caracas y otros lugares del país...

La democracia venezolana marcha a tientas hacia un futuro incierto. Por mucho tiempo los venezolanos perdimos el sentido de lo trágico, la percepción de lo transitorio, la experiencia de la decadencia. Ahora, luego de tantos reveses y tumultos, la «religión del optimismo» democrático cede paulatinamente su lugar a un renuente pesimismo, a una callada irritación, a una extendida sensación de vacío y desesperanza.

Ciertamente, este libro está escrito en función de una premonición de catástrofe. Es posible que esté errado en mis apreciaciones políticas acerca del destino venezolano, pero no creo estarlo. Veo el problema desde una óptica conservadora, y como sugiere Goethe, considero preferible «la injusticia al desorden». No es que desee la injusticia sino que sencillamente la creo menos dañina para una convivencia civilizada que el desorden, es decir, que la ruptura del lazo entre protección del gobierno y obediencia del ciudadano, del cual hablaba Hobbes.⁴ Las injusticias de nuestra sociedad deben corregirse, pero la petrodemocracia ha dejado llegar las cosas a un punto tal que ya Venezuela vive una especie de situación prerrevolucionaria, situación que presagia grandes convulsiones, y que en todo caso no permite vislumbrar un destino mejor. En medio del desorden, una sociedad ni corrige injusticias, ni se desarrolla, ni se civiliza. Al contrario, echa constantemente hacia atrás.

Es importante que, desde ya, quede claro mi planteamiento. Las páginas que siguen intentan presentar un análisis y un diagnóstico del actual momento venezolano y sus perspectivas. Si mis conclusiones son pesimistas y desalentadoras, ello no implica que yo desee que las cosas sean así y desemboquen de esa manera. Es crucial distinguir entre análi-

Miguel Ignacio Purroy, *El Diario de Caracas*, Caracas, 2 de febrero de 1994.
Aníbal Romero, *Aproximación a la política*. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina-Universidad Simón Bolívar, 1990, pp. 107-114.

sis y prescripción. De hecho, aunque pienso, como argumentaré, que la decadencia democrática continuará en los tiempos por venir, mi sincero deseo es que un régimen de libertades sobreviva y se fortalezca en Venezuela. Es crucial que enfatice esto, a objeto de adelantarme a las acusaciones superficiales y a las distorsiones deliberadas que son tan comunes en este período, confuso y triste, de la vida nacional, período en el cual el debate de ideas es sistemáticamente sustituido por el intercambio de vituperios y los ataques *ad hominem*.

Hace unos años, en mi libro de 1986, *La miseria del populismo*, me preguntaba lo siguiente: «¿Lograrán nuestros dirigentes alzarse por encima de una lucha política concebida en términos parroquiales, y enrumbar nuestras naciones hacia un desarrollo con libertad y estabilidad? ¿Podremos, en resumen, desterrar la violencia de la confrontación política, o estamos acaso condenados a un dilema perenne entre revolución y tiranía?». ⁵ Más tarde, en un texto publicado en 1991, sostenía que: «Si bien es razonable suponer que no existen aún condiciones capaces de generar un quiebre radical y definitivo del actual orden democrático, y su sustitución por una alternativa autoritaria, las circunstancias podrían cambiar de manera acelerada, empujadas por la crisis social y el desprestigio de instituciones y líderes por igual». ⁶

A estas alturas del juego tengo que admitir que, a mi modo de ver, ya existen las condiciones «capaces de generar un quiebre radical y definitivo del actual orden democrático», aunque ello no implica afirmar que semejante desenlace es inevitable. No creo en el determinismo histórico; creo, parafraseando a Marx, que los hombres hacemos nuestra propia historia aunque no siempre en las circunstancias que desearíamos escoger. La democracia venezolana puede sobrevivir y quizás hasta renovarse, pero las probabilidades de que ello ocurra sin severos traumas son relativamente bajas, y otros escenarios, que discutiré en esta obra y que implican violencia y aun mayor decadencia, me lucen más factibles.

A pesar de todas sus fallas, cada día más patentes, la democracia puntofijista, la petrodemocracia venezolana, ha sido un paso en general positivo en nuestro devenir histórico. Sin embargo, es innegable que las expectativas suscitadas en sus albores no solamente no se han realizado ni siquiera a medias, sino que de hecho se han frustrado en aspectos esen-

5 A. Romero, *La miseria del populismo*. Caracas: Centauro, 1986, p. 121.

6 A. Romero, *Venezuela: El laberinto de lo posible*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1991, p. 13.

ciales. En Venezuela el orden político es precario, y la protección que el Estado concede a la seguridad personal, a los bienes y a las esperanzas del ciudadano es mínima, en ocasiones irrisoria. No estamos en camino de convertirnos en una nación desarrollada; más bien, por el contrario y a la manera del cangrejo, marchamos hacia atrás, dando tumbos por la vía de la degradación social. A ello se suma el significativo deterioro de nuestra posición geopolítica, debilitada en todos los frentes y enfrentada al creciente desafío de la invasión paulatina de nuestro territorio desde el sur y el oeste.

Tal vez suene demasiado duro decir que la petrodemocracia venezolana ha fracasado, y para no herir sensibilidades me limitaré a afirmar que si de hecho no ha fracasado, entonces está en vías de hacerlo. Insisto: esa decadencia puede revertirse y ojalá que así ocurra; no obstante, no me ocuparé de ofrecer recetas acerca de lo que pienso que sería indispensable hacer para lograr el objetivo de revertir la decadencia. Lo que acá busco es, más bien, explicar qué ha pasado y por qué, y explorar qué puede ocurrir. Me parece, por los momentos, un ejercicio además de necesario de cierto modo suficiente.

A partir de los intentos de golpe de Estado de 1992 la petrodemocracia quedó huérfana. Los que nos atrevimos a defenderla a pesar de sus evidentes fallas, quedamos derrotados por el avance indetenible del radicalismo ideológico, que proclama el nacimiento de una «verdadera democracia», de la «democracia real». En nombre de ese nuevo mito no pocos han tratado de justificar los intentos de golpe de Estado y el uso de la violencia para lograr cambios políticos. Ya no es posible defender esta democracia, al menos no como lo hicimos algunos entre 1992 y 1993, porque se ha concedido legitimidad a la violencia. No sabemos quién será el Chávez del futuro, pero lo que sí sabemos es que ya tiene el camino preparado. Su justificación está implícita en el anhelo de la «verdadera democracia». Ningún Mesías podrá construirla pero sobrarán los que se atribuyan el poder de lograrlo.

En su *Autobiografía intelectual*, el destacado politólogo e historiador de las ideas Manuel García-Pelayo rememora los tiempos de la Guerra Civil española y de su posterior cautiverio personal, y escribe que esa época turbulenta le permitió leer «los signos del libro de la realidad». Esta última le mostró «la presencia de una coyuntura histórica en la que coexistían la tremenda irracionalidad global con las rigurosas racionalidades instrumentales para objetivos definidos, animadas ellas mismas

por motivaciones irracionales; una coyuntura en la que se producía un falseamiento del verdadero sentido de las palabras, un envenenamiento de las almas, un autoengaño de las conciencias...».⁷ Algo muy semejante, en mi opinión, está ocurriendo en estos tiempos venezolanos. La mayoría de los diversos actores de nuestra política se mueven por motivaciones instrumentales, que en conjunto generan una crecientemente aguda irracionalidad global, empujando al país, no sin cierto macabro deleite, hacia el abismo de la decadencia. Y todo ello ocurre en medio de un agudo odio, de un palpable resentimiento, de una vocación centrada en denunciar, perseguir y castigar a diestra y siniestra, ciegamente, pasando y cobrando facturas reales o imaginarias, escarbando la tierra para encontrar chivos expiatorios que expliquen lo que, en verdad, no es sino el fruto de la mayor o menor irresponsabilidad y miopía de todos. Por ese rumbo Venezuela sucumbirá inexorablemente bajo el peso de las fuerzas de la disolución.

La ilusión lírica, o el fin de la religión del optimismo democrático

En su hermosa novela de 1937 en torno a la Guerra Civil española, *La esperanza*, André Malraux incluye una sección titulada «La ilusión lírica». La traigo a colación para referirme a esa especie de «religión del optimismo» que por mucho tiempo y en contra de la más rotunda evidencia ha rodeado la experiencia democrática venezolana.

Aún en nuestros días, en un importante libro publicado hacia fines de 1993, analistas de categoría afirman que:

Una gran parte de los valores y actitudes asociados a una economía rentista y a un ejercicio democrático caracterizado por el paternalismo y el clientelismo recreado por los partidos políticos, y el centralismo en la toma de decisiones por parte de un Estado sobredimensionado, han comenzado a cambiar, dando lugar al surgimiento de un nuevo ciudadano [...] En suma, un primer balance permite pensar que el sistema democrático en Venezuela ha respondido con relativa flexibilidad y capacidad de adaptación a las presiones ejercidas por las reformas económicas y la ampliación de las reglas de juego de la economía de mercado, y por las reformas políticas exigidas por el agotamiento y fisura del sistema democrático basado en el patronazgo y el clientelismo [...] En este marco se ha comenzado a producir una transición progresiva hacia un modelo económico más eficiente y competitivo, y hacia un sistema político más descentralizado y partici-

pativo, ajustado a las nuevas realidades del país y del contexto internacional...¹

Asombra una evaluación semejante, que pasa por alto realidades como, por ejemplo, la elevada abstención electoral; el agobiante empobrecimiento de las mayorías; la permanente conflictividad callejera; la muerte semanal, en Caracas solamente, de decenas de personas a manos del hampa común y el crimen organizado; el deterioro en la capacidad de convocatoria de los partidos políticos; la erosión de las instituciones, casi sin excepción, y paremos de contar...²

No obstante, tal actitud de ingenuo optimismo no es nueva, sólo que en estos tiempos es todavía más aventurado sostenerla. En otro volumen relevante sobre las perspectivas de la democracia en América Latina, publicado en 1989, un acucioso politólogo norteamericano, que ha estudiado en profundidad la experiencia venezolana, escribía con obvia satisfacción sobre el hecho de que «los venezolanos han construido un sistema político caracterizado por una amplia participación, un fuerte liderazgo, continuidad institucional, y genuina y amplia competencia [...] Hoy en día Venezuela despliega un efectivo orden democrático».³ Era en alguna medida —pero no del todo— admisible afirmar puntos de vista tan excesivamente optimistas en 1989, y ello a pesar de los masivos motines callejeros de febrero de ese año con su secuela de centenares de muertos. Ahora bien, continuar haciéndolo hoy en día es intentar tapar el sol con un dedo.

La dura realidad es que la democracia venezolana se ha venido deteriorando por años. Llama la atención, en consecuencia, que uno de los más lúcidos politólogos del país sostuviese en 1989 que «el electorado no sólo apoya abrumadoramente la democracia, sino también [...] la competencia entre partidos y las elecciones y atribuye una gran importancia

- 1 Andrés Serbin y Andrés Stambouli, «La democracia bajo presión: un análisis politológico», en A. Serbin et al., eds., *Venezuela: La democracia bajo presión*. Caracas: Nueva Sociedad, 1993, pp. 213, 215.
- 2 Una óptica diferente, desde posiciones de izquierda, argumenta que «En estos treinta años de democracia el pueblo venezolano ha vivido una sorda guerra de clases, recubierta con el teflón de la “paz social”, cuyos resultados son hoy evidentes: un 65% de la población vive en pobreza crítica; la marginalidad amenaza a gran parte de las capas medias [...] Una minoría ha despojado a la inmensa mayoría de la población en un proceso sórdido e insensible, protegida por el manto de la democracia consensual». Véase Federico Álvarez, «Treinta años de periodismo en democracia», en *Democracia y violencia política*. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, 1990, p. 133.
- 3 Daniel H. Levine, «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», en L. Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds., *Democracy in Developing Countries. Latin America*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1989, p. 242.

al voto como medio para influir sobre el gobierno y obligarle a ocuparse de los problemas del pueblo». ⁴ De hecho, estudios de opinión realizados a mediados de la década de 1980 ya ponían de manifiesto una paradoja en las actitudes políticas de los venezolanos: por un lado, se daba una alta —para entonces— confianza en el sistema político democrático, junto a, por otro lado, una elevada insatisfacción con la labor y beneficios recibidos de los gobiernos democráticos. ⁵ Cinco años más tarde, luego de los eventos de 1989, estudios similares señalaban que si bien la oposición al sistema democrático no alcanzaba a la mayoría de la población, sí abarcaba a un sector bastante apreciable de la misma. Los datos estudiados sugerían al analista que «a partir de los acontecimientos del año 1989 [...] se ha producido un cambio cualitativo de la población hacia el sistema político». ⁶

A decir verdad, el proceso de erosión de la fe en la democracia puede trazarse desde antes, siguiendo los pasos de dos variables: por una parte, la relación entre resultados electorales y respaldo al gobierno electo poco después de iniciado, es decir, el índice de frustración de expectativas; y por otra parte, las tasas de abstención electoral, tal y como se aprecia en el gráfico y las tablas siguientes: ⁷

T A B L A 1

RESULTADOS ELECTORALES Y RESPALDO GUBERNAMENTAL

Elecciones nacionales	A		B		C	
	1969 CALDERA	29	1973 PÉREZ	30	1978 HERRERA	+1
	1973 PÉREZ	49	1978 HERRERA	44	1983 LUSINCHI	-5
	1978 HERRERA	47	1983 LUSINCHI	32	1988 PÉREZ	-15
	1983 LUSINCHI	57		32		-25
	1988 PÉREZ	53		22		-31

F U E N T E S

A Consejo Supremo Electoral, República de Venezuela.

B Estudios de opinión de DATOS, C.A. para las fechas respectivas. Lamentablemente, no existe información para los dos períodos constitucionales previos de 1958 y 1963.

C Índice del autor. Es la diferencia entre la población que eligió al Presidente y la población que lo respalda al cabo de ocho meses de mandato.

- Juan Carlos Rey, *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: IDEA, 1989, p. 256. 4
- Aristides Torres, *Fe y desencanto democrático en Venezuela*. Caracas: FACES, UCV, 1985, p. 32 (mimeo). 5
- A. Torres, *La evolución de las actitudes hacia el sistema político en Venezuela*. Caracas: Datanálisis, 1990, pp. 5, 9 (mimeo). 6
- Tomadas de Alfredo Keller, *Indicadores sociales y electorales como reflejo del grado de satisfacción de las reivindicaciones políticas*. Ponencia. Bonn, 1992, pp. 9, 11 (mimeo). 7

GRÁFICO 1

ÍNDICE DE FRUSTRACIÓN DE EXPECTATIVAS

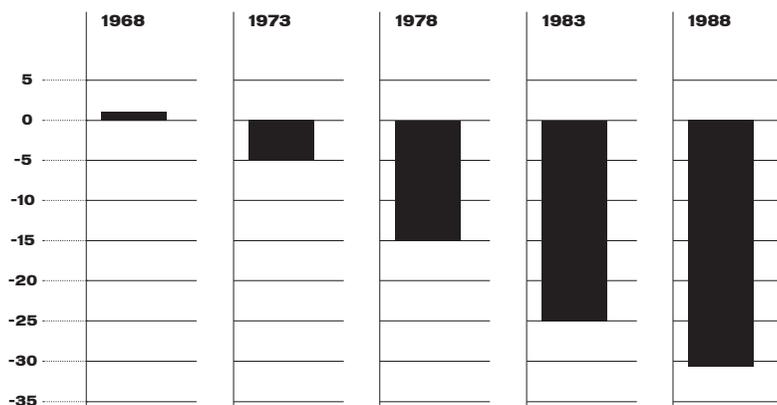


TABLA 2

TASAS DE ABSTENCIÓN ELECTORAL

Año electoral	Elecciones presidenciales	Elecciones municipales
1968	12%	—
1973	10%	—
1978	12%	—
1979	—	27%
1983	12%	—
1984	—	40%
1988	18%	—
1989	—	54%
1992	—	51%
1993	49%	—

FUENTE

Consejo Supremo Electoral, República de Venezuela. Las tasas de abstención 1968 y 1973 son estimadas, porque no se disponía para entonces del registro del total de electores.

Algunos párrafos atrás citábamos el punto de vista de dos politólogos, de acuerdo con el cual las tendencias de opinión apuntan hacia una creciente aceptación del modelo de economía de mercado y la germinación de una cultura del «ciudadano contribuyente» en Venezuela.⁸ A de-

cir verdad, no obstante, los estudios empíricos muestran algo bastante distinto. Como muestra la tabla 3, los indicadores establecen un notable crecimiento del porcentaje de la población que rechaza las políticas económicas de ajuste, llamadas por sus detractores «neoliberales», y un fuerte apego al tradicional modelo populista-paternalista-clientelar, lo cual en no poca medida contribuye a explicar el relativo éxito electoral de Rafael Caldera y Andrés Velásquez en 1993, y el fracaso de Oswaldo Álvarez Paz, quien fue percibido como representante de las políticas de ajuste implantadas por Carlos Andrés Pérez.

T A B L A 3

**POBLACIÓN INDISPUESTA A ACEPTAR
LA SUSTITUCIÓN DEL MODELO CLIENTELAR**

Período de año	Porcentaje de población
1 ^{er} trimestre 1991	42
2 ^{do} trimestre 1991	52
3 ^{er} trimestre 1991	52
4 ^{to} trimestre 1991	60
1 ^{er} trimestre 1992	66
2 ^{do} trimestre 1992	76

Como con acierto explica Alfredo Keller, el presunto «cuerpo de valores democráticos» de los venezolanos, en medio de su precariedad, ha sido desarrollado más como antítesis al régimen dictatorial que concluyó en 1958 que como sedimentación de valores normativos o estilos de vida creados y desarrollados por la propia democracia. Se trata, en realidad, de un cuerpo de valores «extremadamente frágil, sustentado en un esquema clientelar y oportunista». ⁹ De allí la respuesta favorable al golpe de Estado de Chávez, y de allí también la vulnerabilidad esencial de un sistema político cuyo principal mito, el del «pueblo democrático», es en buena medida un espejismo.

La mitologización del pueblo democrático y la cultura política de los venezolanos

Manuel García-Pelayo explica que «el mito no trata de satisfacer una necesidad de conocimiento y de conducta racionales, sino una necesidad existencial de instalación y de orientación ante las cosas...», y dice también que «la eficacia de un mito no consiste en su adecuación a la verdad, ni en sus posibilidades de realización, sino en su capacidad para producir ciertos efectos, quizá no queridos ni previstos, pero no por eso menos reales». ¹⁰ Por su parte, Juan Nuño afirma, con razón, que «el mito es mucho más fuerte que la historia». ¹¹ En ese orden de ideas no me cabe duda de que uno de los mitos más poderosos —si bien en vías de resquebrajamiento—, de la contemporaneidad venezolana es el de que «somos demócratas». Tal aseveración no es sólo simplista sino también, al menos parcialmente, equivocada.

Si entendemos por «cultura política» el «conjunto de creencias, ideales, valores, tradiciones que caracterizan y dotan de significado al sistema político en sus relaciones con la sociedad», ¹² tenemos que, como lo ha señalado Juan Carlos Rey, el «cuerpo de valores» desarrollado bajo la democracia ha tenido y tiene un carácter predominantemente instrumental y utilitario, y que el consenso desarrollado estas pasadas décadas ha sido el resultado «no ya de una comunidad de valores u orientaciones normativas», ¹³ sino fundamentalmente de un conjunto de mecanismos clientelares. En sus palabras, «La legitimidad de un sistema, en tanto que orientación normativa, supone la creencia en que las instituciones existentes son las más adecuadas para la sociedad aun si, en ciertos casos, su funcionamiento pudiera afectar negativamente las preferencias concretas del evaluador». Ahora bien, si —como ocurre en el caso venezolano— son los mecanismos utilitario-clientelares los que predominan, el sistema político «se hace altamente vulnerable y sensible a los problemas de funcionamiento eficaz». ¹⁴

En este orden de ideas quiero adelantar la tesis según la cual, a mi modo de ver, para gran número de venezolanos la democracia, lejos de

10 Manuel García-Pelayo, *Los mitos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1981, pp. 23, 26.

11 Juan Nuño, *La veneración de las astucias*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1989, p. 78.

12 Joaquín Marta Sosa, «Problemas y agenda para la gobernabilidad democrática», en Serbin *et al.*, eds., p. 35.

13 Rey, p. 257.

14 *Ibid.*, pp. 258-259.

ser asumida como un valor en sí misma es crecientemente juzgada en términos utilitarios, y puesta en conexión con un conjunto de creencias «mitológicas» que oscurecen, en lugar de aclarar, la realidad circundante y sus implicaciones sociopolíticas. Dicho de otra manera, a diferencia de las sociedades democráticas avanzadas, donde las condiciones institucionales generan «un compromiso espontáneo que garantiza la coexistencia entre capitalismo y democracia»,¹⁵ en nuestro contexto, por el contrario, la democracia y la libertad ni emergen espontáneamente, ni se solidifican como valores normativos, ni se convierten en una «segunda naturaleza» y en una experiencia histórica sedimentada en la conducta y visión de los ciudadanos. Democracia y libertad, en nuestro medio, son conquistas esencialmente frágiles, débiles tallos que asoman ligeramente la cabeza por encima de un territorio abonado por una historia de autoritarismo y una cotidiana realidad de violencia e irrespeto a los derechos de todos. Si a ello añadimos, como explica Marta Sosa, que «en el populismo democrático lo primordial es la capacidad distribuidora más que la productiva, o la asignación de beneficios más que la eficiencia, tenemos la clave para entender la gradual debacle del liderazgo. Sencillamente porque su experiencia era la de gerentes del clientelismo más que la de decisores políticos».¹⁶

Durante la mayor parte del período democrático, y ahora tal vez más que nunca, nuestra dirigencia política ha sucumbido a la tentación demagógica, tan agudamente analizada —entre otros— por Schumpeter,¹⁷ contribuyendo así a reforzar un cuerpo de creencias sobre el país que entra en radical contradicción con cualquier intento serio de sustituir la mentalidad rentista por un esquema alternativo, basado en la competencia y la productividad. Como lo expresa Diamond, el dilema se plantea así: «La democracia requiere consenso. El consenso requiere legitimidad. La legitimidad requiere una actuación eficiente. Pero es posible que se sacrifique la eficiencia en aras del consenso. Los líderes electos siempre se mostrarán reacios a seguir políticas impopulares, independientemente de lo sensatas y necesarias que éstas puedan ser».¹⁸

Fernando Coronil, *The Magical State. History and Illusion in the Appearance of Venezuelan Democracy*. Indiana: The Hellen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, (Working Paper 112), October 1988, p. 63.

Marta Sosa, p. 35.

Véase mi libro *La miseria del populismo*. Caracas: Centauro, 1986, pp. 79-91. Citado por Jennifer McCoy, «Venezuela: ¿Crisis de confianza?», en Serbin *et al.*, *ob. cit.*, p. 15.

15

16

17

18

Ahora bien, es imperativo enfatizar que el problema no se limita exclusivamente a la actitud del liderazgo, sino que tiene su correlato en la actitud del pueblo mitologizado, propenso a creer lo que desea creer, a evadir la realidad y a adoptar como segunda naturaleza la posición rentista que atribuye a fuerzas extrañas los fracasos y espera los triunfos de las dádivas del Estado. En tal sentido, no puedo compartir el punto de vista según el cual «aunque se reconozca que gran parte del pueblo puede, de hecho, en un momento dado, no estar adecuadamente informado o no ser consciente de cuáles son sus verdaderos intereses, sin embargo, es capaz de superar esta situación a condición de que se le trate como un adulto responsable y se discutan con él seria y racionalmente los problemas».¹⁹ La experiencia venezolana muestra, por el contrario, que aquellos que más han prometido han resultado favorecidos en las lides electorales, y los que más se han esforzado por promover un debate realista y racional han sido los más perjudicados. Esto puede cambiar, quizás, pero de nada vale mitologizar al pueblo para lograr ese propósito.

¿Cuál es entonces el cuerpo de creencias que orienta el comportamiento político de los venezolanos?

Alfredo Keller, sobre la base de sólidos estudios empíricos, lo ha organizado a modo de un silogismo, formulado así:

- Nuestro país es un país rico.
- Todos somos dueños de esa riqueza.
- El reparto de la riqueza es una cuestión de justicia.
- Yo soy bueno y merezco por ello parte de la riqueza de mi país.
- Para que sea justo, mi parte debe ser igual a la de los demás.
- El juez que distribuye la riqueza debe ser el Estado.
- El Estado es una instancia política.

Este cuerpo de creencias es contrastado con ciertas constataciones objetivas sobre la distribución de la riqueza:

– Yo soy pobre... mientras otros son ricos... los ricos son la élite del país... los políticos son también élite...

Todo lo cual arroja la siguiente conclusión:

– El Estado no reparte con justicia la riqueza... porque la élite política es incompetente (la malgasta) y corrupta (la roba).

De acuerdo con Keller el petróleo ha jugado un papel clave en la formación de este cuerpo de creencias: 91% de los venezolanos considera

que el país es efectivamente un «país rico»; 82% considera que esa riqueza «debe ser repartida entre todos sin distinción ni privilegio alguno»; 75% de la población considera que el recurso de los hidrocarburos, por sí solo, es suficiente para cubrir *todas* las necesidades financieras, que «abarcan tanto las necesidades reales como las aspiraciones de la población»; por otra parte, sólo 27% de los venezolanos siente que se ha beneficiado *en algo* de ese recurso.²⁰

El sistema democrático-populista, en lugar de minimizar el peso de este cuerpo de creencias «mágicas», lo que de hecho ha logrado es reforzarlo, mediante la absurda competencia de las falsas promesas electorales y el aprovechamiento oportunista de circunstancias singulares, como por ejemplo las actitudes de Caldera durante los eventos de 1992. En consecuencia, a medida que se ha hecho más sólida la mentalidad rentista de los venezolanos se han agudizado las frustraciones y todo ello ha culminado en «una demanda creciente de liderazgos mesiánicos, redistribuidores y autoritarios, un rompimiento con los instrumentos normativos de contención social y una creciente pérdida de fe en los mecanismos de participación democrática».²¹

La extendida creencia de que Venezuela es un país rico, aparte de errada, tiene efectos perversos sobre las actitudes de la gente. ¿Cómo se mide la riqueza de un país? Obviamente, por la productividad, competitividad y nivel de vida de sus habitantes. Si se midiese por la cantidad de petróleo, hierro o bauxita que poseen, entonces ni Japón ni Suiza serían países ricos. El sustrato de la riqueza de una nación descansa en las actitudes y aptitudes de su población, en su disposición hacia el trabajo, la disciplina, el ahorro, la previsión y el compromiso con las generaciones futuras. Desafortunadamente, la riqueza venezolana no es más que un espejismo derivado de nuestra posesión de ciertos recursos naturales en abundancia, en particular el petróleo, con la capacidad para generar significativos ingresos financieros que luego permean el tejido social a partir de la tarea distributiva de un Estado gigantesco e ineficaz.

El efecto perverso de esta situación consiste en que, en vista de que una mayoría parece convencida de que sin duda Venezuela es «rica», lo que cabe en tales circunstancias es esperar a que nos caiga el cielo el maná que nos corresponde. Lejos de contribuir a acentuar la voluntad

Keller, pp. 6-8.
Ibid., p. 13.

20
21

de esforzarse y de ser más productivos, la mitología de la riqueza venezolana lo que hace es bloquear todavía más las energías vitales de la población, desviándolas de la productividad hacia el asistencialismo del Estado.

Como lo explica Rey, a quien merece la pena citar *in extenso*:

En el caso del modelo de desarrollo venezolano, un factor clave lo constituye el papel jugado por el Estado y la naturaleza y cuantía de los recursos de que éste ha dispuesto. El hecho de que tales recursos provengan en gran medida del sector petrolero externo y no, por ejemplo, de impuestos o exacciones de origen interno, hace posible financiar mediante el gasto del Estado el desarrollo —en su doble aspecto de crecimiento y redistribución— [...] pero además como es posible, en principio, dado el origen externo de tales recursos, aumentar su monto y, por tanto, también la cuantía de los gastos del Estado, sin que ello suponga una pérdida para ninguno de los actores nacionales, las relaciones de éstos en lo que a tal aumento se refiere aparecen como cooperativas [...] De esta manera es posible conciliar los típicos antagonismos que en otros lugares han caracterizado a los procesos de desarrollo [...] Se desarrolla de esta manera una mentalidad rentista, que piensa que los problemas pueden resolverse mediante gastos públicos cada vez más cuantiosos e improductivos...²²

En estos párrafos se resume con lucidez esa especie de círculo vicioso de la petrodemocracia venezolana, que lejos de producir desarrollo acrecienta paso a paso la pobreza de las mayorías, a través de un «toque de Midas» al revés: mientras más petróleo tenemos, y más caro lo vendemos, más difícil nos resulta «sembrarlo», es decir, transformarlo en productividad y competitividad nacionales.²³

Para que este supuesto modelo de desarrollo funcione es imperativo que se cumplan al menos dos —entre otras— condiciones: una abundancia de recursos provenientes del sector petrolero externo y un relativamente bajo nivel de demandas de la población, a objeto de posibilitar

22 Rey, p. 280.

23 Margarita López Maya, Luis Gómez Calcaño y Thais Maingon, *De Punto Fijo al pacto social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela: 1958-1985*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1989, pp. 51-61.

un mínimo de capacidad distributiva que satisfaga las aspiraciones de la gente. A medida que esas condiciones han comenzado a estar ausentes, es decir, desde mediados de los años 1980, la conflictividad dentro del sistema político ha avanzado a grandes pasos, y ha tendido a reducirse más y más la distancia que separa la legitimidad «normativa» o «del régimen» de aquella que se deriva del *desempeño* concreto de los gobiernos de turno. Escribe McCoy:

Se puede considerar como democracia consolidada, a aquella en que la población es capaz de diferenciar entre la legitimidad de la forma como se eligen sus líderes (legitimidad normativa o del régimen), y la actuación de los que están en el poder (legitimidad del desempeño) [...] en una democracia consolidada la legitimidad normativa debería ser capaz de superar una falta de legitimidad del desempeño y garantizar la supervivencia del régimen democrático, aun cuando el descontento de la población sacrifique a algunas individualidades en las urnas electorales.²⁴

Entre 1992 y 1993 los venezolanos decidimos sacrificar algunos, y ni siquiera aguardar por las urnas electorales para ejecutar el entierro de nuestras frustradas expectativas. Decretamos, también, nuestra aspiración mesiánica.

Militares, políticos, y el uso de Bolívar como salvador providencial

La historia es la memoria de los pueblos. No obstante, hay pueblos con historia pero sin memoria. Ese es el caso de Venezuela. No solamente tenemos los venezolanos, en general, una visión muy nebulosa de nuestro pasado histórico, repleta de omisiones e ignorancia, sino que, además, la pésima enseñanza de nuestra historia en las escuelas refuerza

ese desconocimiento y desinterés por zonas tan amplias e importantes como el pasado colonial, así como buena parte de lo ocurrido el siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo XX. Para numerosos venezolanos nuestra historia prácticamente comienza y se detiene en el período de la guerra de Independencia frente a España; a partir de allí se abre un territorio insondable hasta la aparición de la era democrática en 1958.

Esta realidad de ignorancia, fácilmente constatable, tiene dos aspectos que es necesario resaltar: por un lado, el desconocimiento de buena parte de nuestra existencia como nación independiente dificulta captar el hecho de que, en buena medida, la historia venezolana se ha caracterizado por la violencia, el autoritarismo, el uso arbitrario del poder y las luchas fratricidas. Por otro lado, la fijación en la época de la guerra de Independencia en detrimento de todo lo demás, y el culto sin medida a lo entonces ocurrido, ha generado una visión heroica de la historia que la entiende como una especie de incesante camino dirigido a reeditar, en nuestros días, lo ejecutado y ordenado por los libertadores. De esa forma, el sano enaltecimiento de las figuras patrias deviene, en nuestro medio, en un afán imposible por reconquistar glorias que pertenecen a otro tiempo, espacio y circunstancias.

Así, la Independencia es vista como una «escuela para el porvenir», con la consecuencia, señalada por Ángel Bernardo Viso, de que para los venezolanos «el tiempo se encuentra detenido, ya que sólo consiste en ser fieles a los principios de la Independencia, como si hubiéramos perdido para siempre toda capacidad creadora. De manera tal que, si nos abandonamos, alguien resucita el espectro de los héroes y nos sobresalta, prometiéndonos una segunda Independencia». Y continúa Viso de este modo: «... al hipertrofiar la memoria de nuestros héroes, hemos inculcado a nuestro pueblo la idea de ser un conjunto de seres pasivos sin nada que buscar en el terreno de lo histórico, pues el período de creación ha transcurrido ya y es monopolio del grupo de hombres que vivió en ese pequeño segmento de nuestro pasado que constituye la Independencia».²⁵

A lo anterior se suma la utilización, no siempre adecuada ni ajustada a la verdad histórica, de la figura ilustre de Bolívar para cubrir de un manto de legitimidad cualquier proyecto político, al que se presume valedero con la exclusiva condición de invocar el nombre del Libertador y esgrimir lo que cada cual, y según su propia interpretación, supone que

es el «mensaje» o la «doctrina» de Bolívar. La premisa es simple: ya Bolívar estableció lo que hay que hacer para construir la Venezuela que queremos; por lo tanto, lo que resta es ejecutar ese proyecto. En palabras de uno de nuestros más reconocidos historiadores, para avanzar por el camino apropiado no hacen falta sino dos elementos: «... un plan de acción y una voluntad de acción. El plan ha sido hecho por Bolívar; la acción incumbe a América».²⁶

En este orden de ideas vale la pena citar otro párrafo de Viso, a pesar de que son palabras duras para los oídos de no pocas personas en nuestro medio, incapaces de mirar la historia con objetividad:

... es bueno tener presente que si Bolívar reúne todos los caracteres requeridos para ser calificado como un gran héroe, no solamente en razón de sus triunfos militares, también es cierto que su vida fue desgraciada y concluyó con un fracaso político de dimensiones gigantescas [...] Y en vista de que su trayectoria vital es un arquetipo que se nos propone para ser imitado íntegramente, también el fracaso de esa vida continúa gravitando sobre nuestro destino, como podría hacerlo un maleficio esterilizador.²⁷

Quien se haya tomado el trabajo de leer la correspondencia de Bolívar, en especial la que se inicia en 1825 y se extiende hasta su muerte, tiene que admitir que el juicio de Viso es correcto, pues el propio Libertador entendió que la vorágine desatada con la guerra contribuyó a destruir una estructura, pero a la vez impidió sustituirla con una alternativa institucional estable, capaz de orientar en forma creadora la existencia colectiva de los pueblos recién independizados. Poco antes de morir, para sólo citar uno entre muchos ejemplos, el Libertador decía a Urdaneta:

Nunca he considerado un peligro tan universal como el que ahora amenaza a los americanos: he dicho mal, la posteridad no vio jamás un cuadro tan espantoso como el que ofrece la América, *más para lo futuro que para lo presente*, porque ¿dónde se ha imaginado nadie que un mundo entero cayera en frenesí y devorase

J. L. Salcedo-Bastardo, citado por Viso, p. 71.
Ibid., pp. 66-67.

su propia raza como antropófagos? [...] Esto es único en los anales de los crímenes y, lo que es peor, *irremediable* [itálicas AR].²⁸

En lo que en mi opinión no acierta Viso es en el juicio según el cual esa imagen de Bolívar, decepcionado y consciente de los costos de la revolución –y no solamente de sus logros–, nos es ofrecida como ejemplo. Más bien lo que predomina en el alma colectiva de los venezolanos es una imagen uniforme, carente de matices, homogénea, de un Bolívar glorioso y triunfante, con un mensaje que podríamos calificar de «progresista», ajustado a los requerimientos actuales de la cultura de izquierda predominante en nuestros círculos intelectuales, periodísticos y políticos.

Semejante imagen, sin embargo, no se corresponde ni con la conciencia que el propio Bolívar tuvo acerca del impacto y consecuencias de su gesta personal, ni con los contenidos esencialmente conservadores, cautos y equilibrados, de su pensamiento político.

No es éste el lugar indicado para extenderse demasiado sobre tales puntos. Insisto en que basta con *leer* desapasionadamente a Bolívar –tarea que muy pocos venezolanos realizan–, para comprobar estos planteamientos. No obstante, quiero hacer breve mención del hecho de que no todos nuestros historiadores han estado ciegos ante la verdad evidente de que Bolívar, en particular a partir de la *Carta de Jamaica* (1815), y en especial en su *Discurso de Angostura* (1819), articula un pensamiento político conservador, basado en la búsqueda del equilibrio, la preservación de un sentido de las proporciones y la contención de las energías revolucionarias del pueblo-masa, para detener y encauzar creativamente el impulso anárquico desatado por la ruptura radical con el pasado. Entre los escasos historiadores venezolanos que han estudiado con verdadero espíritu científico a Bolívar se destaca Germán Carrera Damas, y cabe mencionar en particular su brillante análisis del *Discurso de Angostura*, al que refiero al lector de esta obra.²⁹

A pesar de que, como lo demuestra inequívocamente Carrera Damas, y como puede –repeto– comprobarlo cualquiera que se tome el trabajo de leer con algo de cuidado y objetividad a Bolívar, el Libertador propuso en su pensamiento político una salida conservadora, «llamada a ejercer sobre el pueblo una especie de tutela. De tutela en el sentido propio, para

28 Simón Bolívar, *Obras completas*, vol. II. La Habana: Lex, 1947, p. 933.

29 Germán Carrera Damas, *Validación del pasado*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1975, pp. 147-193.

educarlo, para llevarlo a un estado en el cual ya fuese posible para ese pueblo ejercer sus derechos, en el sentido de practicar la democracia y disfrutar de la libertad»;³⁰ a pesar de esto —repito—, los que hoy utilizan el nombre de Bolívar para legitimar sus proyectos políticos le presentan como una especie de cruzado del radicalismo, sin por supuesto atreverse a recordarnos que la organización institucional que diseñó el Libertador se sustentaba en el centralismo, la fortaleza del Ejecutivo (Presidencia Vitalicia) y un Senado Hereditario. Ese Presidente —estipuló Bolívar en su Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia (1825)— « nombra al Vice-Presidente para que administre el Estado y le suceda en el mando. Por esta providencia se evitan las elecciones, que producen el grande azote de las repúblicas, la anarquía, que es el lujo de la tiranía y el peligro más inmediato y más terrible de los gobiernos populares ».³¹

Es preciso aclarar lo siguiente: no es mi argumento que la propuesta institucional de Bolívar sea válida para el presente o porvenir venezolano. El Libertador actuó en un tiempo y circunstancias diferentes y produjo respuestas para enfrentarlas.

Mi punto es otro, y tiene que ver con el uso simplista y distorsionado que hoy en día se hace del nombre y del pensamiento de Bolívar para justificar golpes de Estado y proponer salidas salvacionistas bajo el lema de la «República Bolivariana», sin que nadie tenga la más mínima idea de lo que tal término significa ni qué relación pueda tener con lo que Bolívar realmente pensó y propuso.

La conversión de la figura de Bolívar en un símbolo de salvación nacional, para todo momento y circunstancias, tuvo de nuevo cabal expresión en nuestros días a través de las acciones de los militares golpistas en 1992, y en especial de las concepciones y propuestas de los dirigentes del llamado «Movimiento Revolucionario Bolivariano 200». De acuerdo con uno de sus líderes, el teniente coronel Hugo Chávez, su propósito —para el cual invocan constantemente el pensamiento de Bolívar— consiste en establecer «una auténtica democracia fundamentada en unas raíces históricas vigentes y cónsonas con el carácter sicosocial de los millones de hombres y mujeres venezolanos y latinoamericanos que configuran las naciones creadas por el genio libertario de Simón Bolívar...».³²

Ibid., p. 184.

Simón Bolívar, *Escritos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1981, p. 133.

Comandante Hugo Chávez Frías, «La democracia bolivariana», *El Ojo del Huracán*, 11, marzo-julio 1992, pp. xvi-xvii.

30

31

32

Desde luego, estas frases nada significan en concreto y pueden conducir a cualquier parte, pues, ¿qué es la «democracia bolivariana»? ¿Incluye acaso ese proyecto la Presidencia Vitalicia con derecho a designar sucesor y el Senado Hereditario?

Ciertamente, para el momento de llevarse a cabo la primera intentona golpista de 1992 (4 de febrero), el gobierno de Carlos Andrés Pérez era muy impopular, pero no cabe negar que era también legal y legítimo. No obstante, en el documento redactado por los golpistas a objeto de explicar sus motivaciones y fines, se destacan dos puntos: en primer lugar la invocación a Bolívar como mecanismo justificatorio de sus acciones y en segundo término la afirmación de que la democracia venezolana era (y es), en verdad una «tiranía». En efecto, dicen en una proclama, «¿cómo puede negarse un soldado venezolano al cumplimiento de la misión que le impusiera como última voluntad el Libertador Simón Bolívar...?». Esa misión les llevó a alzarse en armas, usando la violencia como instrumento para el cambio político, en vista de que lo que existía en 1992 en el país era «una tiranía que pretende ocultarse ostentando máscara de democracia...». ³³

A lo largo de nuestra historia independiente, numerosos venezolanos han manipulado a Bolívar en función de sus propios intereses y ambiciones, hasta llegar en nuestros días al MBR-200 y sus allegados, el más reciente de una larga lista de grupos que se han arropado con el nombre del Libertador en la búsqueda del poder. El problema es complejo y de singular relevancia, debido especialmente a su incidencia sobre la mentalidad y visión del mundo predominantes entre la oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas.

Como es natural y comprensible, la figura de Bolívar ocupa un lugar preponderante en la formación intelectual y emocional de nuestros hombres de armas. Ello, que en sí nada de malo tiene, y que —al contrario— puede resultar positivo si se mantiene dentro de un sano contexto de equilibrio, deriva sin embargo en ocasiones en un fenómeno negativo, que transforma la admiración hacia Bolívar en una especie de culto mesiánico y en manto ideológico de una visión simplista de la vida política, particularmente corrosiva para una democracia cuya esencia descansa en la comprensión de la complejidad de la política.

Ese «bolivarianismo» radicalizado, distorsionado y manipulativo —que contrasta con la visión equilibrada y conservadora de Bolívar— cumple tres funciones: a) Una función legitimadora de la ambición política autoritaria. No es casual que los golpistas de 1992 se llamen a sí mismos «bolivarianos»; con ello pretenden recubrirse de una virtud incuestionable que permite justificar cualquier acción, ya que, supuestamente, estaría «guiada por los más altos ideales de nuestro Libertador». b) Una función escapista: el nombre ilustre de Bolívar sirve en muchas oportunidades para frenar la autocrítica y para atribuirnos presuntas virtudes y logros que en realidad no poseemos. En tal sentido, el ejemplo de Bolívar, siempre superior a cualquier realidad presente, justifica todo intento de cambiar esa realidad, así sea a la fuerza, para que responda efectivamente «a lo que el Libertador quiere de nosotros». c) Una función mesiánica, que consiste en la conexión entre la figura histórica suprema y la acción concreta y actual dirigida a conquistar, de modo providencialista, el ideal «previsto por Bolívar».

No es mi intención sostener que esta manera de ver las cosas actúe sobre cada uno de nuestros oficiales; estoy sencillamente diciendo que se trata de una visión del mundo bastante extendida en el país y dentro de las Fuerzas Armadas y que la misma se encuentra, en no poca medida, tras los intentos de golpe de Estado ocurridos en 1992. De hecho, los cabecillas de esos golpes pertenecen a un sector militar que existe con mayor o menor peso en casi todos los países latinoamericanos. En otros escritos le he denominado «nasserista», en referencia al dirigente egipcio que insurgió, siendo un joven militar, al mando de su país. La visión del mundo de estos militares se caracteriza por tres elementos clave: a) Una concepción heroica de la vida y de la política, profundamente simplista e ideológicamente primitiva, que pierde de vista las complejidades de la vida social y a la hora de gobernar se transforma en mentalidad de cuartel aplicada a la conducción de los destinos nacionales. b) Nacionalismo extremo, a veces rayando en chovinismo. No se trata de un nacionalismo sano, con sentido de las proporciones y una clara conciencia de los intereses de la Patria propia. Se trata de un nacionalismo rudimentario, estrecho de miras, y dogmático. c) Autoritarismo y menosprecio por los procedimientos democráticos para resolver conflictos. No en balde los líderes del MBR-200 propusieron «la conformación de una Junta Patriótica Bolivariana, como órgano ejecutivo del gobierno de transición; pero el presidente de esta Junta debe ser designado por ella misma, es

decir, por sus miembros ya constituidos, los cuales deben ser tanto civiles como militares». ³⁴ Lo que jamás han explicado es: ¿quién elige esa Junta?, y ¿cuánto durará la transición?

Lo cierto es que el «democrático» pueblo venezolano reaccionó en buena medida a favor del golpe en contra del odiado Pérez, a quien había reelecto abrumadoramente sólo cuatro años antes. De hecho, como apunta Keller con base en un estudio coyuntural de opinión pública realizado quince días después del intento de golpe, «el 47% de la población pensaba que si los militares hubieran tenido éxito en su intento habrían hecho un gobierno que pondría orden en la economía, castigaría a los corruptos y convocaría a elecciones». ³⁵ Este mismo conglomerado social, acosado por la influencia de una estructura de creencias «mágicas» sobre su entorno, consideró —en alrededor de 70%— inmediatamente después de las elecciones de 1988, que el nuevo gobierno de CAP «resolvería los problemas más importantes del país». ³⁶ Nada tiene por tanto de sorprendente que una población en general tan hondamente sumida en un marco a la vez frágil y superficial de creencias políticas, haya experimentado ya hacia 1992 un acelerado proceso de radicalización, que le condujo a admitir a Chávez como un héroe y a rescatar la profunda corriente mesiánica que subyace en nuestra evolución histórica, alimentada por la visión heroica de la Independencia y el uso mítico de la figura de Bolívar.

Ese día 4 de febrero ocurrió un evento adicional al intento de golpe, un evento de trascendental importancia para el proceso político posterior y cuyas repercusiones serán, a mi modo de ver, definitorias del destino final de la democracia venezolana. Me refiero a la intervención del senador vitalicio Rafael Caldera ante el Congreso Nacional en momentos en que todavía sonaban disparos en Caracas y otras ciudades del país, y sólo poco después de que Chávez declarase a través de la televisión que, «por ahora», su movimiento debía deponer las armas y aguardar momento más oportuno.

En este contexto se insertó la intervención de Caldera ante el Parlamento, presenciada también por millones de venezolanos a través de la televisión, intervención que introdujo un elemento de decisivo impacto sobre el desarrollo posterior del proceso político venezolano. Con gran

34 Emisión radial de Hugo Chávez F., 26 de agosto de 1992, FM104.5, Caracas.

35 Alfredo Keller, *Venezuela: Escenarios de crisis*, Caracas, 1992, p. 8 (mimeo).

36 Keller, *Indicadores...*, p. 10.

sentido de la oportunidad, con base en una aguda percepción de las corrientes emocionales profundas que en ese momento se movían dentro del alma colectiva del país, y con extraordinaria puntería política, Caldera aprovechó la ocasión para colocarse a la cabeza de un presunto rumbo alternativo, haciéndose portavoz de las frustraciones de las masas.

Como con acierto señala Keller:

El tono y contenidos de este discurso, vehementemente expresado por uno de los venezolanos de mayor prestigio personal, *justificaron la rebelión militar*, al señalar que lo acontecido era una respuesta inevitable ante las políticas económicas del gobierno. Este mismo planteamiento aglutinó la dirección de las demandas de la opinión pública, hasta entonces algo dispersas en el debate sobre las políticas gubernamentales, al punto de que a partir de ese momento cerca del 75% de la población pasó abiertamente a adversarlas. Como consecuencia de ello, Caldera pasó a convertirse en el referente electoral para las futuras elecciones, con la oferta básica de sustituir el modelo de desarrollo de economía de mercado (o «neoliberal», como lo ha denominado) por una política estatista y nacionalista, aparentemente muy popular. Pero también, el discurso de Caldera abrió una expectativa que *hacía legítima la sustitución del sistema democrático por uno totalitario*, dentro de un cuadro de confusas y contradictorias actitudes políticas del electorado, *lo cual dejó abiertas las posibilidades para un nuevo golpe de Estado* que, en efecto, tuvo lugar nueve meses después.³⁷

Comparto plenamente estos criterios, y así lo escribí cinco días después del golpe del 4 de febrero, cuando afirmé: «No me cabe la más mínima duda de que Caldera se convirtió en una especie de apologista del golpe, pues su actitud ambigua, llena de calificativos, de retruécanos, de explicaciones y conjeturas impactó a la gran mayoría como eso: una justificación de las motivaciones de los alzados».³⁸

En ocasiones —y así lo manifestó esos días aciagos el destacado intelectual Carlos Guerón, ya fallecido— «explicarlo todo es justificarlo

Keller, *Venezuela...*, pp. 7-8.

A. Romero, «La demagogia de Caldera», *El Diario de Caracas*, Caracas, 9 de febrero de 1992.

37

38

todo», y Rafael Caldera se encargó de dar al intento de golpe la aureola de esfuerzo idealista de salvación nacional que requería para dejar de ser un acto de violencia ilegítima más, de los muchos que jalonan nuestra convulsionada historia, y transformarse en una gesta cuasi legendaria con sus artífices convertidos en héroes populares. A partir de ese instante se abrió un verdadero boquete en la solidaridad de la élite política democrática tradicional, con Caldera, uno de los pilares del puntofijismo, pasando a liderar una poderosa corriente de opinión crecientemente radicalizada, que –paradójicamente– representaba y representa el proyecto «reaccionario» (en el estricto sentido del término) de volver a los esquemas de control corporativista en lo político y de regulación, proteccionismo y estatismo en lo económico, pertenecientes al pasado «glorioso» de la democracia venezolana. El que semejante proyecto aparte de reaccionario sea un sueño imposible –dadas las condiciones actuales y previsibles de nuestra sociedad y economía–, no ha impedido que la rueda de la fortuna, es decir, el esquema mágico del mesianismo democrático, prosiga su curso hasta nuestros días.

Caldera tuvo puntería al concentrar en Carlos Andrés Pérez, en su «paquete» económico, y en el tema de la corrupción y los así llamados «cogollos» partidistas todo el peso de sus ataques, pues Pérez representa simbólicamente para la mayoría de los venezolanos «la traición y la promesa incumplida».³⁹ El hecho de que, a decir verdad, Caldera no haya ofrecido un programa alternativo concreto, con posibilidades ciertas de sacar al país del atolladero económico en que se encuentra, tiene sólo importancia relativa, en un cuadro político que en estos últimos tiempos se ha caracterizado por el predominio de factores irracionales, derivados de la irritación popular e incapacidad de comprender los componentes de una realidad compleja, hostil e insatisfactoria

Esta situación ha conducido a la búsqueda afanosa de chivos expiatorios, a los cuales achacar la culpa de los males que incesantemente acaecen sobre un país cuya errónea imagen de sí mismo se ve a diario negada por las crudas y tangibles realidades del empobrecimiento y el atraso. De allí el acierto del economista Ricardo Hausmann al sostener la tesis según la cual la percepción generalizada de que la corrupción es la gran culpable de todos los males del país, «es consecuencia de la mentalidad rentista que, al dejar de tener acceso a bienes y servicios a los cuales se es-

taba acostumbrado sin contraprestación productiva, no encuentra otra explicación para la repentina escasez que no sea la de que alguien se ha robado esa riqueza hasta ahora disponible». ⁴⁰

El proceso que se desató a partir del 4 de febrero de 1992 condujo en primer término a la salida de Pérez del poder, y luego al menguado triunfo electoral de Caldera. En cuanto a lo primero, si bien Pérez ha cometido innumerables errores, no necesito pronunciar sobre si es o no un corrupto para afirmar que su enjuiciamiento y oprobio público han tenido una naturaleza esencialmente política más que propiamente jurídica. Su salida de la Presidencia, del modo y por las razones en que ocurrió, han abierto las compuertas de una inestabilidad congénita que heredarán inevitablemente todos sus sucesores democráticos.

En torno a la crisis producida por el intento de golpe del 4 de febrero se aglutinó una coalición oportunista, que incluye desde la izquierda «institucional» a la insurreccional, pasando por sectores económicos aliados desde siempre con el proteccionismo estatal, y alcanza numerosos grupos e individuos que adversan a los partidos tradicionales y saben bien *en contra* de lo que están, sin tener la más mínima idea de lo que quieren y cómo lograrlo. Esta coalición heterogénea encontró el 4 de febrero el punto de partida necesario para acelerar la decadencia de la petrodemocracia a través de la agudización de la crisis política por un sendero de radicalismo que lejos de haber cesado con las elecciones de diciembre de 1993, continuará inexorablemente en los tiempos por venir.

Intelectuales y cultura de izquierda. La democracia huérfana

Dice Mario Vargas Llosa que «Sobre el latinoamericano pesa, como una lápida, una vieja tradición que lo lleva a esperarlo todo de una persona, institución o mito, poderoso y superior, ante el que abdica de su responsabilidad civil». De esta especie de maleficio, lamentablemente, no se

Citado por Gerver Torres, *Transformar una sociedad requiere algo más que reformas económicas*. Ponencia. Washington, septiembre 1992, p. 3 (mimeo).

escapan ni siquiera nuestros intelectuales, que con reiterada frecuencia sucumben ante la tentación autoritaria revestida de salvacionismo y se arrodillan ante los «hombres fuertes» al estilo de Fidel Castro y —salvando las necesarias distancias— Hugo Chávez, así como ante los cantos de sirena del izquierdismo que paraliza nuestros pueblos y los mantiene en el estado de postración en que se encuentran.

En Venezuela, los eventos del 4-F de 1992 desataron un verdadero torrente de irracionalidad y miopía política de parte de buen número de nuestros intelectuales, que acabaron por plegarse al golpismo a nombre de una «verdadera» democracia y del rechazo a los partidos y dirigentes tradicionales del país. La vieja izquierda derrotada, los ex marxistas resentidos, los idealistas ingenuos de siempre, volvieron por sus fueros, mitologizando a los militares que se «atreveron» a insurgir contra la «tiranía» de Pérez, violando su juramento y utilizando la fuerza para imponer sus objetivos de poder político.

El razonamiento de estos intelectuales, entre los que se cuentan algunos de los más prestigiosos del país, fue tan simplista como nocivo: en vista de que los golpes de 1992 se llevaron a cabo contra un gobernante «corrupto» —el mismo que resultó electo por abrumadora mayoría en 1988, y que ya, en 1979, había sido moralmente condenado por el caso «Sierra Nevada»—, en vista de ello, repito, los alzamientos militares se justificaban. En consecuencia, a los responsables de esos golpes, que ocasionaron destrucción y muerte y que rompieron abiertamente con el ordenamiento constitucional del país, hay que perdonarles, ya que, lejos de ser condenables sus acciones, son más bien dignas de elogio. Los golpistas no son —según estos intelectuales contaminados por el mesianismo y el deseo de revancha ante la petrodemocracia—, reos de la justicia democrática, sino por el contrario, «héroes» de la salvación de la democracia.

Desde luego, la fragilidad y miopía política de semejante punto de vista es obvia para quien se detenga a examinarle tan sólo un minuto: si admitimos que Carlos Andrés Pérez, o cualquier otro gobernante democrático, es corrupto como individuo, entonces ello de por sí justifica el empleo de la violencia para eliminarlo políticamente, estamos no solamente condenando las normas de la legalidad democrática a ser no más que letra muerta, sino de paso abriendo las puertas a toda suerte de abusos y peligros, porque lo que hoy se aplica a Pérez mañana puede aplicarse a cualquier otro, con o sin razón, en tanto así lo decidan los iluminados del momento, los «salvadores de la Patria» en ese instante, los

«bolivarianos» que siempre existen en una sociedad históricamente signada por el mesianismo político.

Esto es particularmente amenazante en nuestro medio debido a la irresponsabilidad con que actúan muchos medios de comunicación social, que no están sujetos al más mínimo control democrático (al de leyes que protejan la dignidad de las personas), y que difaman y vilipendian de modo sistemático, publican informaciones sin respaldo de pruebas en forma corriente y son incapaces de retractarse o ejercer el más mínimo sentido autocrítico en relación con sus prácticas. En tales circunstancias el llamado «Estado de Derecho» no es más que una parodia, y el juicio por opinión pública, y no por tribunales de justicia, la realidad cotidiana.

La casi increíble reacción de muchos intelectuales venezolanos ante los intentos de golpe de 1992 se hace aún más difícil de entender en vista del carácter evidentemente primitivo y simplista de las ideas y proyectos de sus ejecutores, que se limitaban a invocar los nombres de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez para definir sus planes de «reconstrucción nacional». Sin embargo, una vez que se ubica esa reacción de nuestros hombres de pensamiento en el marco de la cultura de izquierda predominante en el país, las piezas del rompecabezas se hacen menos difíciles de descifrar. Esa cultura de izquierda tiene ciertos rasgos específicos y poderosamente influyentes, que conviene desglosar:

- a) En relación con la economía: la cultura de izquierda es amiga del paternalismo estatal, enemiga del capitalismo y la competencia, y por ello enemiga de un espantapájaros al que denominan «neoliberalismo», que nadie ha explicado con precisión. La cultura de izquierda ni siquiera se da por enterada del estrepitoso fracaso del socialismo en el mundo, fuera de nuestras fronteras. Se ha opuesto al «paquete» de ajuste económico pero sin proponer alternativa concreta alguna, excepto la repetición de un conjunto de banalidades abstractas, sin correlato práctico.
- b) En relación con lo social: la cultura de izquierda se sustenta en una solidaridad retórica y sensiblera hacia los pobres y los necesitados, y en la creencia de que basta con dolerse ante las penalidades de otros para expiar culpas. La cultura de izquierda reivindica en el fondo la lucha de clases, odia a los que más tienen y presume que hay que «redistribuir» esa riqueza, sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo y de las probables consecuencias de ese curso de acción.

- c) En relación con lo político: la cultura de izquierda se basa en la propensión hacia el autoritarismo y el mesianismo, todo ello encubierto bajo un manto de defensa de la «libertad de expresión» tan superficial como oportunista, que es en realidad el disfraz en que se recubre una fuerte tendencia a buscar una figura ductora y dominante que «resuelva» los problemas por nosotros. Esa cultura de izquierda reivindica a Fidel Castro, sostiene que Cuba, con todo su desastre, es preferible a Chile a pesar del avance de esta última nación, y repite a diario clichés sobre el «imperialismo» norteamericano.
- d) En relación con la democracia puntofijista: la cultura de izquierda es un amasijo de contradicciones; detesta a los políticos y partidos tradicionales, que a pesar de sus carencias han demostrado ser realmente democráticos, y adopta a Chávez como un héroe a pesar de su primitivismo ideológico e inocultable intención autoritaria. La cultura de izquierda apoyó los golpes de 1992, lo cual es congruente con la propensión al mesianismo, a la ingenuidad utópica, al miedo a la libertad y a la tendencia a buscar soluciones simplistas para los desafíos de una sociedad abierta. La cultura de izquierda es incapaz de profundizar en las fallas estructurales de la petrodemocracia; su análisis es superficial, personalizado, emotivo y banal.

Por desgracia, no obstante, la cultura de izquierda es la predominante entre nuestros intelectuales y periodistas, y contamina hasta los tuétanos la mayoría de nuestros medios de comunicación social.

Ahora bien, ¿qué es un intelectual? Entre otras cosas, un intelectual es alguien que se ocupa con especial interés de las ideas. Por ello es deber ético de un intelectual luchar por la libertad, tal vez de modo todavía más imperativo que en el caso de cualquier otro individuo. No obstante, defender la libertad no es cosa fácil, y la historia —la nuestra y la de otros— pone de manifiesto que los intelectuales, sobre todo en tiempos de confusión y crisis, son particularmente propensos al radicalismo y la utopía. Ejemplos en Francia, Alemania, Italia, Argentina y Chile, entre otros sitios, muestran que las imperfectas democracias liberales son vistas por muchos intelectuales —contaminados de marxismo o frustrados por ambiciones insatisfechas— con odio y repulsión. En consecuencia, muchos intelectuales terminan claudicando bajo los impulsos hacia el radicalismo y la utopía, sumándose así a las fuerzas que tienden a destruir la libertad.

Ese fenómeno se puso de manifiesto con intensidad en nuestro medio en 1992 y 1993, cuando numerosos intelectuales –y los periodistas también lo son–, conscientes de los graves defectos de esta democracia, pero incapaces de vislumbrar los costos de perderla y el significado real de las opciones existentes, se entregaron y lo continúan haciendo, al peligroso juego del radicalismo. Esa actitud tiene serias fallas, y cabe resaltar las siguientes:

- a) Los intelectuales radicalizados presumen que todo lo que existe es malo y que todo lo que vendrá será bueno. Olvidan, por supuesto, que lo que existe, la famosa «tiranía», les permite entre otros puntos decir lo que piensan y tratar de cambiar las cosas sin el uso de la violencia. Por otro lado pierden de vista que lo que puede venir a raíz del radicalismo puede ser aún peor, como entendieron tantos intelectuales chilenos a partir de 1973.
- b) Subestiman las consecuencias *no deseadas* de sus acciones. En efecto, es típico de intelectuales radicalizados suponer que sus actuaciones van a generar resultados previsibles, y pierden de vista la profunda lección histórica según la cual son las consecuencias no deseadas de la acción política las que usualmente adquieren mayor relevancia a la hora de hacer un balance de la actividad pública. No pocos de nuestros intelectuales radicalizados presumen que su supuesta «superioridad ética» –derivada de su crítica implacable a un orden imperfecto– garantiza la pureza de sus resultados. Semejante idea es, no obstante, equivocada.
- c) Subestiman el impacto de sus actitudes al conceder legitimidad a los violentos. Es característico de los intelectuales radicalizados suponer que los violentos –Chávez y sus aliados– son poco importantes, que a la hora del «gran cambio» los violentos ocuparán lugares secundarios y se entregarán embelesados a la guía de los «hombres superiores», «notables» e «ilustrados». Este tipo de miopía ha costado sangre, sudor y lágrimas a incontables intelectuales a través de la historia.
- d) Sobrestiman su capacidad de control sobre los eventos. Esto se vincula a lo anterior y se refiere a la típica presunción de numerosos intelectuales que creen estar en capacidad de controlar los eventos sociales, que su radicalismo llega hasta un punto bien medido sin otras consecuencias y que el resultado de lo que hacen siempre será positivo. Esto fue lo que creyó, por ejemplo, un Trotsky, hasta que Stalin le aplastó.

e) No ofrecen nada en concreto, excepto la protesta. Es un rasgo notorio de nuestra actual crisis que los más exaltados entre los intelectuales claudicantes, los que más vociferan y aparecen en público, son también los más oscuros y confusos a la hora de proponer alternativas. La claudicación de los intelectuales, en síntesis, consiste en hacer el juego al radicalismo y la utopía, que son, por lo demás, enfermedades corrientes de la condición intelectual en sociedades sometidas a poderosas presiones de transformación.

En este orden de ideas quiero referirme a cuatro libros publicados en 1992 por reconocidos intelectuales venezolanos, dos de ellos –Arturo Uslar Pietri y Juan Liscano– de las llamadas «viejas generaciones» (no uso el adjetivo con intención ofensiva), y otros dos –Emeterio Gómez y el equipo de Heinz Sonntag y Thais Maingon– de las «generaciones jóvenes» de nuestra intelectualidad. Todos estos estudios presentan el mismo cuadro de miopía política y tolerancia de la violencia en nombre del «cambio» y la «purificación» de la democracia, y ninguno indica en concreto el camino a seguir.

Uslar, como los demás autores mencionados, habla todo el tiempo en su libro *Golpe y Estado en Venezuela* acerca de una «verdadera» democracia en contraste con la que existe en nuestro país, pero no explica dónde está ese ideal ni cómo obtenerlo. Su postura radicalizante le conduce a tres cosas: 1) a presentar propuestas totalmente superficiales y simplistas en torno al cambio necesario, 2) a minimizar las enormes diferencias entre democracia y dictadura, y 3) a adoptar una posición complaciente hacia los golpistas.

Sobre lo primero, las propuestas de Uslar tienen este tenor: «reestructurar a fondo el sistema democrático», «lograr la realización más completa de la Venezuela posible», «repensar a fondo la nueva realidad», «actualizar las instituciones democráticas para hacerlas más adecuadas, eficientes y útiles», «redimensionar el papel del Estado en la economía», y otros postulados por el estilo. En cuanto a los dos puntos que siguen, Uslar minimiza las diferencias entre democracia y dictadura, y afirma que «No pocas veces [en América Latina] han sido derrocadas las dictaduras militares para ver surgir en su lugar democracias incompletas, contradictorias, y en buena parte falsas», y sostiene igualmente que «es poca la diferencia [entre esas democracias “falsas” como la venezolana] con los regímenes dictatoriales». Uslar concede relativamente poca importancia al hecho de que existan «libertad de expresión, elecciones, debate público», pues a

su modo de ver todo ello queda desvirtuado por el supuesto «pacto entre los grandes partidos». De paso, como ocurre con todos los que sucumbieron ante el espejismo de Chávez, Uslar se pone complaciente con los golpistas, afirmando que los golpes muchas veces han constituido un mecanismo «para poner fin a gobiernos corruptos y abrir el camino a nuevas esperanzas». Sobre el 4-F, a la manera de Caldera, Uslar sostiene que «es posible que las carencias de la dirigencia política del país y la falsificación de la democracia hubieran parecido no dejar otra salida».

Entre sus numerosas contradicciones, propias de la ligereza e irracionalidad que se han apoderado del medio intelectual venezolano, Uslar critica en su libro la petición de Acción Democrática, antes del 18 de octubre de 1945, de una reforma constitucional para elegir al Presidente por voto universal, y dice que «haber aceptado la violenta posibilidad de lanzarse a una reforma constitucional intempestiva para complacer el capricho de un pequeño partido de oposición hubiese sido absurdo». No obstante, Uslar no menciona *sus* constantes exigencias, a todo lo largo de 1992 y 1993, a favor de la renuncia de Pérez, quien al fin y al cabo era un mandatario legítimo que aún no había concluido su período constitucional y al que se le armó un juicio político con rasgos de parodia. Uslar, además, critica la convocatoria de la Constituyente de 1946, «en la que improvisados dirigentes y bisoños diputados debatían sin término sobre todas las materias imaginables»; no obstante, es incapaz de aclarar por qué una Constituyente convocada *ahora* —como él lo ha solicitado— sería menos mala que la reunida en 1946.⁴¹

No me cabe la más mínima duda de que Arturo Uslar Pietri apoyó en su corazón los golpes de Estado de 1992, aunque se cuidó en sus palabras. No así Juan Liscano, quien con su característica vehemencia expresó en su libro *Los vicios del sistema* que él es un «radical», y lo que propone como «solución» a la situación que enfrentamos no es otra cosa que una «presión cívico-militar» que obligue a «adoptar la proposición de la Constituyente». Es decir, Liscano recomienda otro golpe de Estado; ahora bien, lo paradójico del asunto es que la fórmula de Liscano entra en franca contradicción con el análisis que se expone en el libro, y que está dirigido a mostrar los efectos perniciosos que en nuestra historia ha tenido la acción de minorías radicalizadas, así como las rupturas violentas y traumáticas que pueblan nuestro devenir como nación.

Arturo Uslar Pietri, *Golpe y Estado en Venezuela*. Bogotá: Norma, 1992, pp. 73, 88, 114, 119, 122, 126, 489.

Así, Liscano nos recuerda que el 19 de abril de 1810 fue el producto de «una conspiración cívico-militar que triunfó mediante un golpe de Estado incruento»; luego la emprende contra «los desatinos políticos del Ejecutivo y de la Sociedad Patriótica» durante la Primera República, e indica que «La Independencia fue impuesta sin consulta plena, ni siquiera a los de la misma casta». Por un lado, el autor rechaza el radicalismo de esos hombres, sin reparar, por otro lado, en que su actual radicalismo nada tiene que envidiarle al de tantos otros «salvadores» del país, que han adelantado conspiraciones cívico-militares de minorías no muy diferentes a las del 4-F y 27-N de 1992, que Liscano vio con inocultable simpatía.

Las ambigüedades conceptuales y contradicciones en el razonamiento de Liscano hunden sus raíces en el determinismo histórico subyacente como filosofía sustentadora del análisis. En efecto, según el autor «el problema [venezolano] fundamental no son las instituciones sino los hombres», es «el venezolano» como tal: «La estructura social y psicológica imperante es obra de sus tendencias y deseos, de su dinámica vital, de sus instintos y componentes síquicos». De acuerdo con Liscano, «no está en la naturaleza del venezolano, ni ayer ni ahora, respetar la Ley». De allí que, en su opinión, «la corrupción administrativa, el manejo fraudulento de los dineros del Estado, la aventura del enriquecimiento ilícito, no constituyen elecciones coyunturales sino forman parte de la estructura formada desde la colonia». En resumen: «La democracia incorruptible propuesta por Betancourt [...] tenía mucho mar que navegar [...] Los propósitos moralizantes [...] no compaginaban con la estructura política social, psicológica, *antropológica* y cultural de la realidad venezolana».

De ser las cosas como Liscano las pinta, se imponen inexorablemente dos conclusiones: 1) La responsabilidad ética de los llamados «corruptos» o bien no existe o bien se minimiza, pues son parte de un todo social y de una historia condenados a esas fallas; dicho en otras palabras, si actúan de cierto modo porque están obligados a ello en vista de su condición «antropológica», entonces no son moralmente responsables ya que no son libres de actuar de otra manera. 2) Carece de sentido creer que una «presión cívico-militar» para generar otra Constituyente (ya hemos tenido varias a lo largo de nuestra convulsionada historia), pueda ser capaz de resolver problemas estructurales, «antropológicos», como los que señala Liscano.

Una Asamblea Constituyente no sirve para enderezar entuertos antropológicos...

Por todo esto, la crítica implacable de Liscano contra la petrodemocracia, a la que nada bueno reconoce, luce excesiva. Al igual que Uslar, Liscano considera que la democracia venezolana es una «falsa» democracia y subestima la relevancia del hecho electoral (prefiere la «presión»). Lo extraño es que Liscano parece entender el importante problema de las consecuencias no deseadas de la acción política y llega a argumentar que Bolívar, «dentro de esa vorágine de matanzas y desorden subversivo, propiciado *involuntariamente* por él mismo y sus amigos de la Sociedad Patriótica», se vio envuelto en un proceso de desintegración histórica muy distante de los ideales planteados en la *Carta de Jamaica* y el *Discurso de Angostura*. Sin embargo, Liscano no asimila esa experiencia a la actual situación del país y a su radicalismo político, también capaces de desencadenar –como paulatinamente lo estamos presenciando– un proceso de fragmentación nacional en todos los órdenes, de irritación y violencia que quizás, eventualmente, nada tendrá que envidiar a otros procesos semejantes de nuestra tumultuosa historia. Dice Liscano que «Bolívar fue víctima de la irracionalidad de la historia y Betancourt también». Cabe preguntarse: ¿y Liscano, y Uslar, y Caldera?

Toda la incoherencia que despliega Liscano, fruto de la irracionalidad que impera en Venezuela, concluye en sostener que «el cambio real no puede proceder sino de alguna forma de insurgencia contra el sistema», y por ello propone «el desmantelamiento del sistema bipartidista y la convocatoria a una Constituyente en la que los partidos tendrían una simple representación proporcional ante una mayoría conformada por los sectores civiles más importantes». Lo que no queda claro es, ¿quién decide esa proporción?, ¿dónde quedan las elecciones y el propio llamado de Liscano a legitimar el poder a través de la «aceptación de la mayoría»?⁴²

El deplorable nivel de análisis de estos libros se repite en los de autores más jóvenes, quienes también se sumaron a la idea de que los golpes eran necesarios y que se justificaban en vista del deterioro de la democracia y de la «corrupción» de sus dirigentes.

Lllaman en especial la atención, por razones que explicaré en breve, los argumentos desplegados por Emeterio Gómez en un opúsculo que

Juan Liscano, *Los vicios del sistema*. Valencia: Vadell Editores, 1992, pp. 19, 34, 36, 37, 42, 49, 55, 59, 65, 68, 76, 80, 91, 98, 103-105, 107, 109.

publicó un par de meses después del golpe de Chávez. En síntesis, Gómez planteó lo siguiente:

- a) El intento de golpe, en realidad, no podía romper el «hilo constitucional» *ya que este último hacía rato que estaba roto* debido a la ineptitud y corrupción de la dirigencia democrática tradicional: «Fue contra esta constitucionalidad, esta democracia y estas instituciones huecas contra las que atentó Chávez el 4-F. De haber tenido éxito, no habría sido él el que las hubiese destruido. Ellas habían sido demolidas ya por el proceso constituyente o, más exactamente en nuestro caso, deconstituyente».
- b) Hay que distinguir entre una visión «constitucional» y una visión «constituyente» de la democracia. La primera, que es «historicista», «asume a la democracia como una institución, como una etapa auto-subsistente, constitucional, capaz por sí misma de desestimular los intentos de golpe de Estado». Frente a esta concepción, Gómez contrapone una perspectiva «estructural» de la democracia, «que la percibe como un proceso constituyente permanente que debe replantearse a cada instante». Para Gómez, aquellos que en Venezuela repudiaron los intentos de golpe en 1992 sucumbieron a un «*apego místico a los principios, colocados por encima de la vida*», pues la cultura democrática no es un «valor absoluto» que pueda sobreponerse a «las deficiencias, degradaciones o fallas del régimen». Y expresa: «¡Como si la gente estuviese dispuesta a dejarse morir de hambre o pervertirse, con tal de vivir en democracia!».
- c) Asegura Gómez que la democracia venezolana, ya para 1992, había perdido la capacidad de renovarse y perfeccionarse desde adentro, y que era entonces necesario un «factor» o «fuerza» externa que le impulsase a cambiar de rumbo. En sus palabras:

Por supuesto que la democracia es perfectible, pero con semejante precepto no podemos pretender adentrarnos en el complejo mundo real, en la imprevisibilidad infinita de la existencia. Por supuesto que la democracia es perfectible pero de allí no se desprende en lo más mínimo que ella, por sí misma, pueda corregir todas las deficiencias que podrían llevar a desvirtuarla. Más aún, de aquel precepto no se desprende siquiera que no puedan darse en la realidad procesos en los cuales, usando sus

propios instrumentos y recursos, la democracia tienda a hacerse más imperfecta, a *degenerar*; tal como no está de ninguna forma excluido que [ello, AR] pudiese haber pasado en Venezuela de no haberse producido el 4-F.

Para Gómez, decir que las asonadas violentas no se justifican en democracia, ya que éste es un sistema político capaz de autorregenerarse, es «una letanía cansona». Sostener que «la única forma [legítima] de cambiar un gobierno son los votos», y que el de Pérez «era legítimo porque había llegado por la fuerza de los votos» no es otra cosa que pretender imponer la «lógica formal» sobre la «existencia», es decir, ser ingenuos, formalistas, legalistas...

d) Según Gómez, los venezolanos no tenemos otra alternativa que escoger entre el mesianismo militar o el mesianismo civil:

Muchos intelectuales —argumenta— en sus lamentos porque nuestro pueblo no ha aprendido, se quejan porque el culto a Chávez indica que el mesianismo está todavía vivo entre nosotros. Caldera esa tarde [del 4-F] apeló sin duda a ese mismo mesianismo para darle un toque más humano, más racional. *Nuestro profundo atraso no daba más que para escoger entre el mesianismo civil y el militar*; entre una figura salvadora construida a partir de ideas y otra montada sobre los tanques y la fuerza» [itálicas AR].⁴³

Desde luego, Gómez no explica cuáles fueron las «ideas» que formuló Caldera en su famosa intervención.

Los razonamientos de Gómez, aparte de abrir las puertas de par en par a cualquier acto que se autojustifique en función de la «salvación» de la democracia «corrupta», están llenos de paradojas: por un lado, Gómez tiene una imagen profundamente negativa y escéptica acerca de las condiciones sicoculturales del pueblo venezolano —en lo que, tal vez, tiene razón—, y habla de la «conciencia infantil» de ese pueblo;⁴⁴ por otra parte, sin embargo, Gómez aspira a que este conglomerado «infantil» sea capaz de crear «una sociedad de mercado, una cultura, una ética, un sistema

Emeterio Gómez, *Después del 4-F*. Caracas: Cuadernos El Manantial 1, 1992, pp. 19, 22-23, 25, 27-28, 30-32.

Ibid., p. 32.

43

44

jurídico, una mentalidad, una Constitución y hasta una religión proclive al mercado, al intercambio mercantil». ⁴⁵ Semejante objetivo es quizá el más difícil que pueda plantearse a una colectividad «petrolizada» como la nuestra; no obstante, sin entrar a discutir su viabilidad, lo que sorprende en el razonamiento de Gómez es su carácter paradójico y el hecho de que hable del «destello de grandeza de Caldera» el 4-F, cuando, en realidad, no sólo esa intervención puede muy razonablemente ser interpretada como un acto de peligrosa demagogia, sino que además Caldera actuó en función precisamente de un propósito totalmente contrario a la «sociedad de mercado» por la que aboga Gómez. Caldera, como es de sobra conocido, rechaza de plano el «neoliberalismo», sospecha del mercado, y tiene una visión corporativista de las relaciones sociales y fuertemente estatista de las relaciones económicas.

Es paradójico, también, que sea un intelectual con la perspectiva de Gómez quien coloque tanto énfasis en la «degradación social», «ineptitud» y «corrupción» de la democracia en este tiempo, ya que él mismo, apenas comenzaba el segundo período de Pérez, manifestó su inconformidad radical con el «paquete» económico *porque no era lo suficientemente severo y no iba a generar un “verdadero shock”* [énfasis AR], cosa que para Gómez era necesaria. En sus palabras, lo que se requería era un «verdadero *shock* recesivo». Cuando se le interrogó acerca de los posibles efectos sociales de un programa de ajustes aún más duro respondió citando el ejemplo inglés bajo la señora Thatcher: «En esos cuatro años —dijo— hubo un desbarajuste social tremendo, pero fueron cuatro años y después la economía comenzó a crecer...». ⁴⁶ Estas frases las pronunció Gómez sólo seis días antes del estallido social del 27-F de 1989...

Los argumentos de Gómez, aunque provengan de un intelectual presuntamente «neoliberal» repiten sin modificaciones los planteamientos tradicionales de la cultura de izquierda contra la vilipendiada «democracia formal», y a favor de esas famosas «verdadera democracia» o «democracia real» que nadie define jamás con precisión. Así, por ejemplo, Sonntag y Maingon afirman que la defensa de esos valores «formales» es «parte de un complejo proceso de fetichización de los procedimientos democráticos formales para justificar un régimen que en los hechos mostraba desde hacía algún tiempo [...] signos y tendencias de faltas a

45 *Ibid.*, p. 43.

46 Entrevista publicada en *El Diario de Caracas*, Caracas, 21 de febrero de 1989, p. 16.

la constitucionalidad...»; de allí que, a su modo de ver las cosas —y resaldando las posiciones expresadas por algunos sacerdotes católicos enmarcados también dentro de la cultura de izquierda predominante—, «la democracia está por hacerse y construirse siempre, y [...] *más allá de consideraciones políticas, lo más importante es la satisfacción de las necesidades de la población*» [itálicas AR].⁴⁷

Con este tipo de argumentos, que no sólo dejan de lado el hecho de que la democracia consiste esencialmente en un conjunto de reglas políticas «formales» para asegurar el cambio pacífico y evitar la violencia en la sustitución de los malos gobiernos, numerosos intelectuales venezolanos sacaron la alfombra colocada bajo los frágiles pies de un sistema político que desde entonces ha quedado herido de muerte, acosado por el peso de sus propias deficiencias y contradicciones, y cuestionado en su esencia por los que, supuestamente, deberían defenderle.

No se trata, por cierto, de arrodillarse mentalmente ante una visión idealista, puramente «principista» de la democracia en abstracto, sin tomar en cuenta las condiciones de su desempeño concreto. Se trata de sostener que *es imperativo definir límites* a la crítica de la democracia, límites más allá de los cuales *no se puede permitir* que avance la crítica. En tal sentido, si se abre el paso desde las armas de la crítica a la crítica de las armas, si, en otras palabras, se llega a admitir la violencia como herramienta legítima frente a la democracia, esta última pierde su postrer mecanismo de defensa, que es su propia razón de ser.

En la búsqueda de la elusiva «democracia real», el teniente coronel Chávez entrelaza sus brazos con los políticos mesiánicos y los intelectuales decepcionados y ciegos ante la amenaza del desarme ético-político frente a los violentos. La orfandad de la democracia venezolana es ya prácticamente total. En adelante, la impopularidad de los dirigentes democráticos será su tumba política, y la proclama salvacionista justificada por la inexistencia de la «verdadera democracia» hallará en sí misma su legitimidad, ya que por mucho tiempo, décadas tal vez, será imposible «satisfacer las necesidades de la población».

A partir del 4-F de 1992 se desata para Venezuela una dinámica de la irracionalidad, se acelera la decadencia y se acentúa el proceso de desmembramiento institucional de la democracia, todo ello alentado por

Heinz R. Sonntag y Thais Maingon, *Venezuela: 4-F 1992. Un análisis sociopolítico*. Caracas: Nueva Sociedad, 1992, pp. 24, 36.

un coro de voces insensatas, dignas representantes de la más atrasada cultura de izquierda. Esa dinámica decadente favorece claramente a las fuerzas de la disolución, que ya cubren poderosamente el panorama nacional, controlan los contenidos de los medios de comunicación y han colocado contra la pared a los partidos y líderes tradicionales, al igual que a los que defendemos posiciones conservadoras en lo político. Vivimos, de eso estoy persuadido, tiempos llenos de malos augurios, aunque tal constatación escape por completo al campo de visión de los radicales que nos empujan, cegados por el odio, hacia un abismo insondable.

La clarividencia de las élites y el determinismo petrolero

En la primera parte de este estudio adelanté una explicación acerca de las turbulencias experimentadas por el sistema político venezolano en tiempos recientes. Me concentré en la interrogante sobre cómo ocurrió el proceso y exploré su significado general como acelerador de la decadencia de la democracia puntofijista.

En esta segunda parte intentaré explorar las raíces estructurales de la crisis venezolana, es decir, aquellos factores económico-políticos que tienen una naturaleza fundamental en la composición y desenvolvimiento del sistema cuya decadencia y destino acá nos ocupan.

En ese orden de ideas, resulta en extremo interesante constatar que —con pocas excepciones— el punto de vista predominante en torno a las razones que explican la creación y consolidación temporal del sistema democrático venezolano coloca especial énfasis en la presunta capacidad, astucia, visión y flexibilidad de las élites, en particular de las élites políticas, que han tenido en sus manos al menos hasta no hace mucho el poder para gestionar pactos y alcanzar compromisos a objeto de estabilizar un orden pluralista.¹

La tendencia predominante entre los analistas ha destacado la llamada «autonomía de las variables políticas», argumentando que es errado suponer que la realidad democrática venezolana «descansa primordial-

Algunos ejemplos representativos son: Diego Abente, «Venezuelan Democracy Revisited», *Latin American Research Review*, 1, 1987; Daniel Hellinger, «Democracy in Venezuela», *Latin American Perspectives*, 12, 1985; Andrés Stambouli, *Crisis política: Venezuela, 1948-1958*. Caracas: Ateneo de Caracas, 1980.

mente en la existencia de dinero fácil derivado del petróleo». Por el contrario, insiste esta perspectiva, el «secreto» de la creación y posterior estabilización de la democracia en Venezuela se encuentra en la capacidad de aprendizaje, moderación, sentido táctico y voluntad de compromiso de las élites y fuerzas políticas clave que fueron capaces de «colocar de lado asuntos demasiado difíciles y controversiales, para concentrarse en cuestiones más prácticas en relación con las cuales pudiesen ejecutarse soluciones “técnicas” [reduciendo su potencial de conflictividad política, AR]». ²

Frente a esta tesis, que claramente privilegia el elemento político —encarnado en la presunta «clarividencia de las élites»—, se yerguen tímidamente interpretaciones que enfatizan el peso crucial del petróleo como gran instrumento que ha hecho posible sostener un «sistema populista de conciliación». El argumento primordial, desde este ángulo de interpretación alternativo es que «los ingresos derivados del petróleo han pagado las cuentas de la democracia pactada venezolana, subsidiando tanto a los empresarios como a los sectores populares». Dicho en otros términos, «Sin esta oportunidad estructural [basada en el petróleo, AR], la voluntad, intenciones y experiencia políticas de los individuos no habrían logrado producir por sí mismas el resultado deseado»; todo lo cual lleva a concluir que «En vista de que el petróleo ha jugado un papel esencial y único en la formación y mantenimiento de este sistema político, la viabilidad a largo plazo de este tipo de democracia pactada, y su valor como modelo para otros países, se hará más claro solamente cuando el dinero petrolero comience a ser insuficiente». ³

No creo en el determinismo histórico; creo —como expliqué en el Prefacio de este libro— que los hombres hacemos nuestra historia, eso sí, en

2 Daniel H. Levine, «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», en L. Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds., *Democracy in Developing Countries. Latin America*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1989, pp. 249, 257, 281.

3 Terry Lynn Karl, «Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela», en G. O'Donnell, P. C. Schmitter, y L. Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1986, pp. 215, 219. Cabe destacar que uno —entre otros— de los más influyentes políticos de la generación democratizadora venezolana, Gonzalo Barrios, percibió con claridad la relevancia del factor petrolero: «El petróleo de nuestro subsuelo —escribió en 1977— ha permitido a Venezuela librarse parcialmente de la sumisión del engranaje dictatorial y convertirse en un campo de experimentación sin precedentes. La sola abundancia de los rendimientos fiscales del producto ha servido como factor esencial de estabilidad democrática, al capacitar al Poder Público para eliminar, mitigar o silenciar por medios financieros, las tensiones sociales que la comprometen», en vv.aa. *América Latina, conciencia y nación. Un nuevo enfoque sobre su tiempo y perspectiva*. (Seminario «América Latina, Conciencia y Nación». Universidad Simón Bolívar, 1976). Caracas: Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, 1977, p. 47.

condiciones dadas. Por ello no me pliego a la idea según la cual el factor petrolero posea, por sí solo, un efecto determinante e ineluctable dentro del contexto sociopolítico y económico que dio vida y sostuvo hasta ahora la democracia venezolana. Sin embargo, considero acertado y útil que al petróleo se le conceda, al momento de analizar lo que ha sido y puede ser esta democracia, un puesto de mayor relevancia del que tradicionalmente ha ocupado en los análisis de no pocos politólogos y economistas acerca de nuestro devenir nacional.

En tal sentido me parece muy importante apreciar que existe lo que podríamos denominar una «tendencia inercial» de la economía venezolana, originada en su dependencia del petróleo, que la empuja en una cierta dirección, y que hace muy difícil llevar a cabo un proceso de transformación a fondo destinado a acrecentar de forma decisiva nuestra productividad y competitividad nacionales.

El destacado economista Miguel Ignacio Purroy ha hablado de un «modo de ser natural» de nuestra economía y ha señalado que «No cabe duda de que sanear el Estado en un país con nuestra renta petrolera es tarea de gigantes». Refiriéndose al programa de ajustes intentado a partir de 1989, Purroy escribió:

La principal hazaña [...] se refiere al objetivo central de convertir la economía venezolana en una economía competitiva y abierta al mercado mundial. Por eso la piedra angular del programa era mantener una tasa de cambio suficientemente subvaluada, como para promover un fuerte crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Debe reconocerse que la devaluación de 1989 significó una verdadera revolución del modelo económico venezolano, que hasta ese momento se sustentaba en la sobrevaluación del bolívar. Fue posible esta «gesta revolucionaria» por el impacto psicológico de la debacle en que se encontraba la balanza de pagos a fines de 1988 [...] Pero resulta que la renta petrolera sigue estando ahí y muy cuantiosa. En cuanto el mercado petrolero se normaliza, el país comienza a percibir un sustancial flujo de divisas que presiona de nuevo hacia la sobrevaluación. Este es el «drama» de economías petroleras, en las que se requiere de una extremada disciplina y de una férrea voluntad política para mantener a largo plazo un tipo de cambio competitivo para las exportaciones no petroleras.

Y concluye: «Sinceramente, cuesta imaginarse esta disciplina en nuestro país». ⁴

Estos son pasajes de gran lucidez, que centran con extraordinaria precisión el complejo dilema de un orden político levantado sobre una renta bamboleante e incierta. Y es indispensable comprender y asimilar este punto: la democracia venezolana es un sistema político íntimamente vinculado a un determinado modelo de desarrollo (que más bien ha probado ser de antidesarrollo). Dicho de otra forma, la democracia venezolana se sustenta sobre un «modo natural» de ser de la economía, y no ha sido y probablemente no será capaz de torcer esa «tendencia inercial», debido a la dificultad política de convocar a la población a un esfuerzo compartido, con exigencia de sacrificios, para superar el desafío.

Lo anterior no implica desconocer el papel cumplido por el conjunto de decisiones tomadas y asumidas por las élites políticas a lo largo de más de tres décadas, decisiones orientadas a conjugar un orden pluralista-clientelar con una estructura económica rentista, que hizo posible repartir beneficios entre los diversos actores sociopolíticos, distribuyendo, mal que bien, los ingresos petroleros y colocando sobre los hombros del Estado los costos en que pudiese incurrirse en el proceso. Esas élites diseñaron un sistema político en el cual a ellas les correspondía desempeñar una función tutelar, entendida esta última —de modo estrecho, por lo demás— no como la de un padre «sabio» en relación con un pueblo «infantil», sino como la del afortunado administrador de un Estado patrimonial y aparentemente solvente en relación con un pueblo acostumbrado a solicitar del gobierno la solución de sus problemas.

Si no captamos este hecho fundamental no seremos capaces de comprender la dinámica que mueve realmente nuestro sistema democrático, ni las raíces de su crisis, ni sus perspectivas hacia adelante. Durante años nuestras élites dirigentes, principalmente a través de la mediación de los partidos tradicionales, cumplieron su rol tutelar sin mayores traumas, perdiendo de vista, sin embargo, que la función de un liderazgo de categoría no debe limitarse a la simple tutela administrativa, sino que debe procurar educar y preparar a la población para afrontar retos superiores, en este caso, el reto de ir más allá de la protección benevolente de un Estado paternal, y desviar la «tendencia inercial» de una economía artificialmente sustentada sobre una renta sujeta a impredecibles vaivenes.

4 Miguel Ignacio Purroy, «Remando contra la corriente», *El Diario de Caracas*, Caracas, 19 de febrero de 1991.

Al contrario de algunos, pienso que esa función tutelar ejercida por las élites políticas hasta fines de los años 1980, era no sólo inevitable sino imperativa en vista de las condiciones propias de la petrodemocracia. Lo que les critico es el haber concebido ese papel en términos estrechos, que jamás se elevaron por encima del sostenimiento del sistema populista-clientelar, a objeto de preparar a la nación para enfrentar con orden y sensatez el desafío de cambiar el «modo de ser natural» de nuestra economía. Ello había que lograrlo sin que se desbordasen los diques de contención de una sociedad frágil, que no fue capaz en estos años de hallar en sí misma las fuerzas para sobreponerse al paulatino agotamiento de la renta petrolera ante el aumento de la población y sus demandas y la caída internacional de los precios. Cuando llegó el momento inexorable de torcer el rumbo a partir de 1989, no existían los mecanismos políticos, ni las redes de solidez social, ni la disposición psicológica, para hacer frente a un proceso de empobrecimiento que a su vez abriese alguna esperanza de recuperación futura en otras circunstancias dentro de la democracia.

Como lo expresa Luis José Oropeza en un lúcido ensayo,

... si alguna razón histórica surge para explicar, por lo menos parcialmente, la excepcional estabilidad democrática de Venezuela, ninguna más valedera que el esfuerzo que han propiciado sus élites democratizadoras para encontrar un punto de equilibrio, una peripecia de las conveniencias políticas, que concilie las tendencias históricas por la unanimidad que despotiza y las influencias de la pluralidad que promueve el cambio social, pero que nos puede traer la recurrencia pretoriana cuando se permite que las expresiones del pluralismo se desborden.⁵

Esas «expresiones del pluralismo» efectivamente comenzaron a desbordarse a partir de 1989, y la «recurrencia pretoriana» ciertamente asomó su rostro, en medio del desconcierto y el temor de unas élites políticas arrastradas por los eventos. La democracia, es verdad, sobrevive, pero es posible que esté herida de muerte.

De allí el acierto de Oropeza cuando observa que «en la prosperidad petrolera de nuestra democracia, se encuentra también el germen de sus

vicios y de su propia destrucción». ⁶ Resulta como mínimo decepcionante constatar que la dependencia petrolera de los ingresos fiscales ha ido en aumento en el transcurso de los últimos cuarenta años, a pesar de todos los esfuerzos —las más de las veces demasiado tímidos— orientados a modernizar y diversificar la economía del país: «En 1950 —señala Purroy— los ingresos petroleros representaban 46% de los ingresos fiscales ordinarios; en 1970, ese porcentaje asciende a 60% y en 1990 ha alcanzado el récord histórico de 80%. Irónicamente, este “récord” se obtiene después que supuestamente el saneamiento fiscal era un objetivo central». Y prosigue:

¿Por qué es tan contraproducente y peligrosa esta altísima dependencia de los ingresos fiscales petroleros? Sencillamente porque la inestabilidad de los recursos públicos, derivada de la inestabilidad inherente al mercado petrolero, causa severos daños a la economía. Alzas excesivas del ingreso ocasionan congestión, despilfarro y fuga de capital, ya que la capacidad de absorción de la economía tiene límites bien definidos. Descensos bruscos, por el contrario, generan deterioro de los servicios del Estado, déficit fiscal, inflación y pobreza. Por si esto no fuera suficiente, la inestabilidad suele agravarse luego por efecto de las nefastas políticas económicas de los gobiernos, que en vez de ser anticíclicas terminan por reforzar procíclicamente los vaivenes petroleros. ⁷

Un breve paseo por ciertas coyunturas clave de nuestro devenir a partir de la primera gran explosión de precios en 1973-1974 puede ayudar a comprender mejor el proceso. Lo que muestra ese recorrido es que —para citar a McCoy—, los errores y desaciertos de la economía política del populismo «no son el resultado ineludible de la lógica de un Estado petrolero, sino más bien el producto de las decisiones tomadas dentro de las restricciones y oportunidades de este tipo de Estado». ⁸ Ciertamente, la economía venezolana posee una «tendencia inercial» y un «modo de ser natural», pero ese efecto, en muchos sentidos pernicioso, se ha acentua-

6 *Ibid.*, p. 55.

7 Miguel Ignacio Purroy, «El problema no es el gasto», *El Diario de Caracas*, Caracas, 10 de diciembre de 1990.

8 Jennifer McCoy, «Venezuela: ¿Crisis de confianza?», en A. Serbin *et al.*, eds., *Venezuela: La democracia bajo presión*. Caracas: Nueva Sociedad, 1993, p. 22.

do como resultado de un cúmulo de decisiones tomadas por nuestras élites, que han profundizado, en lugar de contrarrestar y revertir, la dependencia rentista del aparato productivo y la sumisión paternalista de la población.

Como apuntan López Maya, Gómez Calcaño y Maingon en su importante estudio, ya citado en estas páginas, el objetivo central del modelo de desarrollo formulado para la petrodemocracia

... no consistía en una redefinición radical de las tendencias que había venido presentando la economía venezolana en la época petrolera, ni de las grandes líneas de acción estatal hacia lo económico. Se trataba más bien de sistematizar y racionalizar esas tendencias, tratando de introducir algunos correctivos a las deformaciones más visibles, como el alto porcentaje de las importaciones en el consumo final, la baja producción agrícola, el desempleo y las grandes disparidades en la distribución del ingreso.

Este «modelo», como ya indiqué previamente, fue concebido como la otra cara de la moneda de un conjunto de pactos políticos explícitos e implícitos, dirigidos a establecer un sistema clientelar capaz de minimizar los conflictos a través de la acción redistributiva del estado populista: «Ello se hace posible en la medida en que se formula una estrategia de desarrollo “polivalente”, esto es, capaz de producir políticas con efectos favorables para varios actores sociales y varias ramas de actividad económica simultáneamente». Esto, a su vez, «se hace viable por la presencia de un actor que absorbe los costos y los efectos indeseables de la estrategia: el Estado. Un supuesto subyacente al modelo es que la economía se acercará progresivamente a una dinámica autosostenida, sin necesidad de intervenciones y subsidios estatales masivos».⁹

Es precisamente ese supuesto, de crucial relevancia en la concepción inicial del «modelo», el que nunca se ha dado,¹⁰ debido a la «tendencia inercial» o «modo de ser natural» de la economía petrolera, modo de ser acentuado por las decisiones sistemáticas de la dirigencia a favor de la

Margarita López Maya, Luis Gómez Calcaño y Thais Maingon, *De Punto Fijo al pacto social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela: 1958-1985*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1989, p. 35.

Ibid., pp. 40-41.

9

10

sobrevaluación del bolívar, sobrevaluación apuntalada a su vez por los ingresos de divisas provenientes del petróleo.

El proceso de profundización de la dependencia del crecimiento económico venezolano respecto del aumento del gasto público, se repitió en tres coyunturas clave por su impacto político y económico: 1974-1978, 1979-1983 y 1984-1988. En todos los casos se repitió el ciclo que lleva «de la expansión inducida por el crecimiento del ingreso petrolero, al estancamiento cuando la economía sobredimensionada no recibe el impulso del gasto fiscal ampliado que necesita para sostenerse y crecer».¹¹

A pesar de los planes faraónicos, del desbordamiento del gasto y de la autocomplacencia delirante de la «Gran Venezuela» –impulsados todos por los aumentos de precios petroleros–, la primera gestión de Pérez culminó en recesión económica y aguda intensificación de las desigualdades sociales. Los intentos de ajuste y corrección del sobredimensionamiento de la economía y del Estado, programados inicialmente por el gobierno de Herrera Campíns, fracasaron también en su momento «como consecuencia del segundo auge petrolero y el consiguiente resurgir de las demandas provenientes de los actores sociales, así como de la pérdida de rumbo de la política económica estatal».¹²

De paso, las demandas del «ciclo político», es decir, del proceso de escogencia de candidatos por los partidos y de la subsiguiente campaña electoral impulsaron al gobierno de Herrera, como ocurriría de nuevo bajo Jaime Lusinchi, a intentar reactivar la economía a través de la expansión del gasto público, todo ello a pesar de que ya a mediados de 1982 era claro que los precios del petróleo seguirían cayendo. No obstante, el Estado no se «apretó el cinturón», sostenido como de costumbre por la esperanza de que la caída en los precios se revirtiese a consecuencia de algún milagro –por ejemplo, una crisis bélica en el Medio Oriente u otra «bendición» por el estilo. Las semillas inmediatas del «viernes negro» se sembraron durante esos meses, aunque desde luego sus raíces profundas tenían más larga data.

El llamado Plan Trienal del período de Lusinchi fue otro acto más del drama de un Estado petrolero que acrecienta sus gastos aun en medio de un panorama de caída en los ingresos, y aun en contra de las advertencias del Banco Central, que en esa ocasión alertó al gobierno sobre

11 *Ibid.*, p. 49.

12 *Ibid.*, p. 51.

la insuficiencia de las reservas para cubrir las obligaciones de la deuda, así como el aumento de las importaciones que requeriría el impulso a la demanda interna reactivada.¹³ Ciertamente, gracias a las decisiones tomadas por Lusinchi y sus colaboradores, durante el año electoral de 1988 la economía creció en 4.2% y el desempleo bajó a 7%; sin embargo, semejante éxito se logró a costa de un déficit de 4.372 millones de dólares en la balanza de pagos del país.¹⁴

En los tres casos mencionados la petrodemocracia intentó superar los desafíos del crecimiento y la redistribución a través de las mismas fórmulas: aumento reiterado del gasto público, aun en medio de situaciones de descenso en los ingresos de divisas, y negativa sistemática a extender la base tributaria del Estado por razones políticas, a objeto de evitar el rechazo electoral o de contener posibles protestas sociales.

El resultado de quince años de espejismos, de precaria y fugaz abundancia financiera, de crecimiento de las demandas y empobrecimiento generalizado de las mayorías, dejó escaso espacio de maniobra al gobierno que se instaló en 1989: el gobierno del «paquete» de ajustes, cuya cabeza, Carlos Andrés Pérez, quien había anunciado que «me sacarán en hombros de Miraflores», casi pereció en el Palacio de Gobierno en febrero de 1992 y ni siquiera pudo culminar su período constitucional, hundido en el pantano de angustias, irritación y propensión a la violencia política en el que ahora apenas flota la vulnerable petrodemocracia venezolana.

El segundo Pérez o el reino de la ironía. ¿Terminó el festín de Baltasar?

En 1949, en su exilio en Nueva York, Arturo Uslar Pietri publicó un volumen que recogía artículos redactados durante los dos años anteriores. Uno de ellos contiene frases premonitorias que se adaptan de modo revelador a las circunstancias actuales del país. Decía Uslar lo siguiente:

Emilio Pacheco, *The Brief Rise and the Long Decline of the «Great Venezuela»: The Fiscal Policy of Venezuelan Populism in the 1980s*. Ponencia. Washington, 1992, p. 14 (mimeo).
Ibid., p. 20.

13

14

... hay en la Biblia una estampa que se me parece curiosamente a esta hora venezolana. Es la del rey Baltasar en el festín. El oro y la plata de los vasos sagrados judíos se llena de vino, la tumultuosa corte se regocija y ríe, suenan las músicas, bailan las danzarinas, los artesanos se hartan, el pueblo recoge las abundantes sobras y el príncipe sonríe, entre su ensortijada barba, contemplando aquel largo panorama de plenitud y de bienestar. Nadie parece percatarse de que se está al borde de una tragedia, que el maravilloso festín no puede prolongarse indefinidamente, que todo lo que parece abundar es aparental y falso, y va a desaparecer...

Más adelante, al referirse (recordemos de nuevo, hace más de cuarenta años) a los efectos que el riego de dinero proveniente del petróleo ya producía en la dura tierra venezolana, proseguía así: «El verdadero mal, el mal casi irreparable [está] en que se ha pervertido, Dios sabe hasta qué profundas fibras, el sentido de la economía en el pueblo venezolano. Se le ha enseñado, en todas sus capas sociales, a desdeñar el trabajo por el maná...». ¹⁵

No deja de ser irónico, con esa punzante forma de la ironía política sobre la que tan lúcidamente pensó Max Weber, ¹⁶ que haya sido precisamente Carlos Andrés Pérez, uno de nuestros más representativos líderes populistas, a quien correspondió, mal que bien, anunciar a los venezolanos a principios de 1989 que el «festín» estaba en vías de terminar o en todo caso que ya no sería el mismo de otros tiempos. La reacción no se hizo esperar y las consecuencias del anuncio fueron a la postre trágicas para el propio Pérez. Es más, estoy plenamente convencido de que una mayoría de venezolanos aún espera un retorno milagroso a lo que se percibe como el «festín» de otros tiempos. Nuestra población todavía se niega a ver la realidad de frente y con toda crudeza, y seguirá negándose a ello hasta que toquemos de una manera u otra el fondo del abismo.

Esos mismos venezolanos habían elegido a Pérez en 1988 con base en la expectativa generalizada de que esta vez él sería el Mesías capaz de recuperar el rumbo de aparente prosperidad y abundancia, perdido desde su salida de la Presidencia en 1978. Pérez no se eximió, en varias oportu-

15 Arturo Uselar Pietri, *De una a otra Venezuela*, en *Obras selectas*. Madrid-Caracas: Edime, 1956, pp. 1350-1352.

16 Max Weber, *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1975, pp. 156-157.

nidades, de cultivar deliberadamente esa percepción engañosa durante su campaña electoral, y en general no hizo nada por evitar que esa imagen de demiurgo de la abundancia se propagase.

Dos puntos más deben enfatizarse: 1) Con la perspectiva del tiempo a nuestro favor, parece claro que Pérez y su equipo llegaron al gobierno en 1989 con una visión en cierta medida nebulosa acerca de la precariedad en que se hallaban la economía y finanzas del país. El *shock* que entonces experimentaron debe haber sido severo; sin embargo, la toma de posesión del nuevo Presidente, lejos de asumir realidades que debían impulsar hacia la prudencia, se caracterizó por el sentido apoteósico y faraónico característico de los añorados y ansiados tiempos de la Gran Venezuela. 2) Por otra parte, el llamado «paquete» económico programado y puesto en marcha por Pérez y su equipo de acuerdo con los organismos financieros multilaterales, no respondía ni a las más profundas convicciones de CAP ni de miembros clave de su equipo económico. El «paquete» —en realidad, un plan de ajustes fondomonetarista más o menos ortodoxo, que comprendía varias partes, todo lo cual quedó confuso en la polémica que suscitó—, fue admitido por el nuevo gobierno como un necesario trago amargo, en vista de las frágiles circunstancias que se vivían. Todo ello contribuyó a generar bastante improvisación e incoherencias, enmarcadas en la aplastante realidad de que el país, simplemente, no estaba preparado para admitir, no deseaba aceptar y tampoco comprender el nuevo rumbo que se le quería abrir en medio de incesantes contradicciones y forcejeos.

Pérez no llegó a verse a sí mismo como un líder de «ajustes» sino muy tarde; todavía en 1987 decía a los periodistas: «Póngalo con mayúsculas, soy populista», y se refería al Fondo Monetario Internacional como «la bomba sólo mata gente». Sus instintos políticos respondían a la vieja y veterana tradición socialdemócrata de su partido:

El objetivo [...] tiene que ser el pleno empleo [...] como la justicia social es un objetivo irrenunciable, ese pleno empleo inicialmente tiene que ser sustituido por sistemas indirectos de la distribución de las riquezas. Entonces, tenemos que entrar sin ningún miedo a políticas de subsidios [...] El no atender a los sectores populares sería sumamente grave [...] No se puede concebir un Estado en desarrollo como el venezolano que suelte las amarras a una economía libre [...] Yo no creo que debemos caer

en el vicio del monetarismo, de colocar la lucha contra la inflación de una forma dogmática...¹⁷

Para CAP —asesorado entre otros por quien llegó a ser su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez—, los problemas de la economía venezolana tenían primordialmente que ver con las políticas erradas de los dos gobiernos posteriores al primero de los suyos, en especial el de Herrera. Esas políticas contractivas, y no factores estructurales que asfixiaban el modelo de desarrollo de la petrodemocracia eran, según Pérez, las causantes de la crisis. Por eso, CAP continuó insistiendo hasta posesionarse en 1989 en que «la decisión de crecer es inaplazable», que las políticas económicas de los gobiernos que siguieron al suyo se habían caracterizado «por un gran temor a todo lo que signifique endeudamiento», y que, en definitiva, el endeudamiento «no es malo por definición sino por la forma en que se contrae y los fines a que se oriente». ¹⁸ Estos son puntos de vista pertenecientes a lo que podríamos llamar la «etapa heroica» del populismo, propios de un líder que continuaba convencido de que todo es posible y que bastaba tan sólo con decisión, carisma personal y acierto para lograr las metas deseables.

Es importante constatar que el propio Miguel Rodríguez, figura central en el diseño y ejecución del «paquete», llegó a su posición decisivo con un pensamiento económico que distaba mucho de ese supuesto «neoliberalismo» radical que muchos de sus críticos le atribuían. Rodríguez, más bien, era para ese entonces —creo— un típico representante de la «visión heroica» del desarrollo venezolano en la democracia, convencido de que el nuestro es un país «rico», «pródigo en recursos reales de todo tipo», que sencillamente requería «una visión responsable pero audaz». Su fórmula de acción —aunque sorprenda a algunos— era instrumentar políticas que «amplíen el gasto». A los que acusaban de «inflationarias» sus propuestas, Rodríguez respondía que «el aumento del gasto público que yo propongo lo que pretende es corregir en el corto y mediano plazo un severo sobreajuste fiscal, que ejerce presiones profundamente contractivas sobre el nivel de actividad económica real». ¹⁹

17 Entrevista publicada en *Número*, 336, Caracas, 30 de agosto de 1987.

18 Carlos Andrés Pérez, *Ya ha llegado la hora*. Caracas: Edites, 1986, pp. 8, 11.

19 Miguel A. Rodríguez F., «Autopista hacia la prosperidad», *El Nacional*, Caracas, 3 de agosto de 1987, Cuerpo 2, p. 61.

No es de extrañarse, pues, que esta variada mezcla de concepciones, percepciones, convicciones y puntos de vista hayan experimentado a su vez un complejo matrimonio con las crudas realidades que hubo de enfrentar el nuevo gobierno al aposentarse en Miraflores. Tales realidades fueron resumidas así por uno de los más agrios críticos del «paquete»:

Un déficit acumulado en la cuenta corriente de la balanza de pagos cercano a los 10.000 millones de dólares [...] Las reservas internacionales por debajo de la línea de flotación [...] Una moneda sobrevaluada y un régimen de cambios diferenciales con una brecha muy ancha entre la paridad oficial y la del mercado libre. Una inflación engatillada, apenas contenida en 35% el año anterior, pero presta a dispararse sin aviso previo. Un déficit fiscal que montaba al 7% del PTB. Una deuda externa, por cuyo servicio se habían pagado durante los cinco años de Lusinchi, 29.000 millones de dólares, sin reducirla un ápice, para que sus 35.000 millones continuaran gravitando pesadamente sobre nuestra economía.²⁰

Así las cosas, como un «gran viraje» presentó Carlos Andrés Pérez ante el país, el 16 de febrero de 1989, su programa de ajustes acordado con el Fondo Monetario Internacional y explicado en una Carta de Intención que la prensa venezolana publicó en marzo.²¹ Las tres medidas fundamentales del «paquete» fueron éstas: 1) Adopción de un tipo de cambio único, libre y flotante, para el bolívar. 2) Eliminación de subsidios a los bienes y servicios producidos por el Estado. 3) Liberación general de precios y de las tasas de interés.

Pérez no se equivocó en esa ocasión: las medidas centrales de su «paquete» comenzaron a configurar en Venezuela —en palabras de Purroy— «un cuadro de relaciones sociales y económicas radicalmente distintas» a las preexistentes.²² Conviene enfatizar el verbo *comenzaron*, pues el programa, aparte de amoldarse a criterios bien conocidos a través de otras experiencias latinoamericanas es, al menos en algunas de sus partes, una realidad todavía vigente, que continúa influyendo de modo muy significativo el devenir de la nación.

Teodoro Petkoff, «El desdén suicida de CAP por el costo social», *El Ojo del Huracán*, Caracas, 1989.

El Universal, Caracas, 3 de agosto de 1989, pp. 2-4 y 2-5.

Miguel Ignacio Purroy, «Evaluación del programa económico», *SIC*, 513, abril de 1989, p. 122.

Centenares de miles de palabras se han escrito en torno al «paquete», tanto por sus defensores como por sus críticos. No siendo yo un economista, haré uso de los estudios de otros para alcanzar un juicio lo más objetivo posible acerca de su impacto y significado. Lo que deseo es destacar la ubicación del tema en un contexto: el de la evolución de la petrodemocracia hacia un proceso de conflictividad endémica, suscitada por una nueva constelación de problemas,²³ derivados de la dramática culminación del festín de Baltasar y de las dificultades que experimenta la población en el camino de captar y asimilar esa desagradable realidad.

En el texto introductorio al VIII Plan de la Nación el gobierno hizo explícitos algunos supuestos y objetivos centrales de su «viraje». Allí se lee que ese Plan «está basado en el reconocimiento de que el modelo de desarrollo que rigió al país por más de tres décadas se agotó». Se llega a decir que «la profundidad de la crisis exige una reorientación de la vida nacional que propiciará el restablecimiento de la condición moral y ética del venezolano». De este modo, «como consecuencia del viraje, la Venezuela del futuro será radicalmente distinta a la Venezuela del presente. De una sociedad basada en el consumo de la renta petrolera, pasaremos a una sociedad basada en el trabajo productivo».²⁴ Interesa observar que los redactores del texto tomaron en cuenta el asunto de fondo referido a que el cambio económico está íntimamente vinculado a otra faceta de la realidad social, faceta que tiene que ver con las actitudes éticas de las personas de carne y hueso, con sus anhelos, percepciones e imágenes de sí mismos y de su entorno.

Como observaron varios economistas, ya en las primeras de cambio, la piedra angular y verdadero viraje contenido en el «paquete» fue la adopción de un tipo de cambio único, libre y flotante para el bolívar. Con ello, dijo Purroy, «finalizó el reparto populista de la renta petrolera».²⁵ Y Asdrúbal Baptista, el día anterior al estallido del 27-F, lo explicó de esta forma:

El tipo de cambio en Venezuela no tiene nada que ver, en el corto plazo, con el sector externo. Es un mecanismo distribuidor de renta. Se exporta más o menos lo mismo; también se importa

23 G. A. O'Donnell, *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós, 1972.

24 *El Nacional*, Caracas, 11 de octubre de 1989, p. D-7.

25 Purroy, «Evaluación...», p. 122.

más o menos lo mismo. Lo que varía es quién recibe las importaciones. Si el cambio es muy bajo, las importaciones pueden llegar a quien tenga bolívares; si es muy alto, no le llegan. Con las medidas del actual gobierno [...] se acaba el tipo de cambio como mecanismo popular de distribución de la renta.²⁶

Terminó en lo esencial un mecanismo de subsidio «que durante medio siglo permitió al venezolano vivir por encima de las posibilidades de su nivel real de productividad interna».²⁷

La razón principal para la medida es simple: se trataba de iniciar, de verdad, el tránsito hacia una economía

... que debe generar sus propios excedentes dentro de sí misma. Eso quiere decir que la acumulación de capital (el beneficio) debe generarse dentro de las propias empresas. Debido a que la productividad sólo crece lentamente a largo plazo, la única forma inmediata de sustituir la ausencia de la renta petrolera como motor de acumulaciones es manteniendo deprimidos los niveles salariales reales. Ello se está consiguiendo [...] a través de la devaluación del bolívar, que por la vía de inflación de los precios de consumo, permite elevar la tasa de beneficio interno de las empresas. De esta forma, así como antes la sobrevaluación era el mecanismo fundamental de apropiación del excedente, ahora la subvaluación se ha convertido en el nuevo mecanismo de dinamismo económico.²⁸

De manera que, en síntesis, el gobierno de CAP se propuso un cambio significativo, que inevitablemente conducía a deprimir aún más los niveles de vida de los venezolanos, quienes, por su parte, esperaban todo lo contrario de parte del «hombre que camina».

Esto no solamente creó desde el comienzo una enorme brecha entre expectativas y realidades, sino que, además, a esta dificultad política se sumó otra: la del excesivo optimismo de un gobierno que, como los hechos posteriores demostraron, jamás tuvo una clara percepción del pro-

Entrevista publicada en *El Universal*, Caracas, 26 de febrero de 1989, p. 22.

Purroy, «Evaluación...», p. 122.

Ibid., p. 123.

26

27

28

fundo impacto sociopolítico y sicocultural de su programa de ajustes. Ese programa, repito, estuvo enmarcado en un contexto de expectativas y motivaciones de parte de la población que chocaban de frente contra cualquier opción distinta al sueño redistribucionista de la abundancia financiera. Esa es la tragedia del populismo latinoamericano: lleva las cosas a tal punto de descomposición que llega un momento en que todas las alternativas lucen negativas o indeseables.

De este modo, el nuevo gobierno abordó su rumbo pleno de un optimismo que visto en perspectiva luce realmente suicida. Miguel Rodríguez aseguró que el programa «es antiinflacionario porque se propone corregir desequilibrios que garantizarán un crecimiento de 6% del PTB interanual y una drástica caída de la inflación a partir de 1990»; de paso, anunció que «vamos a reducir el déficit fiscal aumentando el gasto público», con un «paquete coherente e integrado [...] de alto crecimiento [y] de aumento de salarios reales...». ²⁹ Quizás el punto más débil de ese peligroso optimismo fue la idea de que con el «paquete» iba a ser posible combinar crecimiento económico con efectivo control de la inflación, tesis que contrariaba la opinión, bastante generalizada –por buenas razones– de que, al menos en contextos económicos tan descompuestos como el nuestro, «la única forma de controlar la inflación y frenar la devaluación es aceptando una fuerte dosis de recesión y desempleo». ³⁰

En relación con este último punto, vale la pena citar un extenso párrafo de Purroy publicado en abril de 1989:

Uno se pregunta, no sin cierta angustia, si los artífices del plan económico no estarán en el fondo conscientes de esta incompatibilidad entre control de la inflación y crecimiento, y si no habrán aceptado ya, «puertas adentro», la necesidad de una recesión económica durante un par de años. En cuyo caso, las promesas de pleno empleo y crecimiento no serían más que las mentiras piadosas para que el CEN de Acción Democrática y el pueblo llano dieran su visto bueno al paquete de medidas. Pero no debe excluirse la posibilidad de que CAP y su equipo de gobierno crean realmente en la viabilidad de un período de ajuste corto de no más de un año y un retorno rápido al crecimiento. Cualquiera de

29 Entrevista publicada en *El Universal*, Caracas, 19 de febrero de 1989.

30 Purroy, «Evaluación...», p. 125.

las dos alternativas es altamente peligrosa. La primera, porque significaría un engaño al pueblo, que quién sabe cómo irá a reaccionar dentro de un año. Y la segunda, porque será el «arte de lo imposible», y en economía las contradicciones se pagan muy caras.³¹

A mi manera de ver no hubo un engaño deliberado de parte del gobierno; más bien el gobierno y muchos otros venezolanos se autoengañaron.

Lo anterior me conduce a considerar cinco puntos: 1) Las similitudes y diferencias del «paquete» con experiencias previas en Venezuela. 2) Los temas de la «sobredevaluación», el «sobreajuste» y el «gradualismo». 3) El tema de la participación del sector privado. 4) La cuestión del consenso político y la «dirección espiritual de la sociedad». 5) El problema esencial del modelo de desarrollo como prisma a través del cual tiene que evaluarse el programa de ajustes, así como las posibilidades de avanzar hacia adelante de nuestra economía y sociedad (asunto que abordaré más a fondo en la sección inmediatamente posterior de este estudio).

Sin duda, el «paquete» perecista fue una medicina bastante más amarga que otros ajustes del pasado; no obstante, es de interés resaltar el carácter cíclico que ha puesto de manifiesto el desenvolvimiento de la economía venezolana, ciclo reiterativo que funciona así: depresión-auge-depresión. Bajo Herrera se pasó del «enfriamiento» y «sinceración» a la «reactivación» (generada por el segundo *boom* petrolero), y luego otra vez a la depresión al quinto año. Con Lusinchi hubo un primer año y medio de «ajuste recesivo», seguido de una insensata «reactivación» (Plan Trienal 1986-1988), que en esta ocasión no desembocó en otra depresión debido a que el gobierno «haciendo gala de una irresponsabilidad inaudita, continuó alimentando la actividad económica a costa de gastar lo que no tenía y de quemar el último resto de reservas operativas de divisas. Por este motivo, el ajuste recesivo del primer año del siguiente período (1989) tuvo que ser necesariamente tan dramático».³²

El ciclo del segundo Pérez llevó, durante el primer año, a un decrecimiento del 8.3%, a una inflación superior al 80%, a un descenso del 14% en los salarios y del 8% del consumo. No obstante, el ajuste casi logró elimi-

Ibid., p. 126.

Miguel Ignacio Purroy, «Tiempo perdido», *sic*, mayo 1991, p. 172.

31

32

nar el déficit fiscal con los recursos provenientes de la devaluación y equilibrar las cuentas externas, y en 1990 la economía empezó a crecer en 4.4%, con la ayuda de 3.000 millones de dólares adicionales generados por el «milagro» de la invasión de Irak a Kuwait. Sin embargo, lo que se logró en materia de crecimiento en 1990 y 1991 estuvo, como de costumbre, dinamizado por el gasto público y no, como preveía el «paquete», por las exportaciones no tradicionales y los megaproyectos en asociación con capital privado. Una vez que los precios del petróleo retornaron a los niveles previos a la guerra, el gobierno volvió a encontrarse sin suficientes fondos para respaldar las expectativas creadas en los meses del *boom*.

En resumen, hubo crecimiento, pero el «paquete» estuvo muy lejos de «reducir el predominio del Estado para que la inversión privada y las fuerzas del mercado asumieran el rol de líderes del nuevo crecimiento». ³³ De hecho, la inversión privada descendió 32% en 1989 y 29% en 1990. Ya hacia finales de 1991 la tensión social y el malestar político podían olfatearse en el ambiente nacional, eran casi palpables, y en combinación con los factores económicos que evidenciaban la fragilidad del rumbo emprendido alcanzaron su paroxismo crítico a comienzos de 1992. Desde entonces, más que la llegada de una nueva y pasajera depresión, se aceleró el sistemático descenso al abismo.

Mucho se discutirá si la devaluación de 1989, sembrada como vimos por la irresponsabilidad heredada, fue o no «excesiva». Ciertamente, en vista del fracaso de la estrategia dirigida a promover las llamadas exportaciones no tradicionales con base en una tasa más competitiva del bolívar, los costos inflacionarios que se pagaron parecen exagerados. Hubo quienes –Teodoro Petkoff y el MAS, por ejemplo– propusieron una devaluación «moderada» en el marco de un «estricto control de cambios». Según Petkoff, los riesgos de un nuevo Recadi y su correspondiente corruptela se subsanarían entregando la administración del control al Banco Central. Uno se pregunta, no obstante: ¿cuál es la diferencia? Por otro lado, Petkoff desestimó de un plumazo el problema del mercado negro de divisas, argumentando que «en un país donde el Estado produce y administra el 99% de las divisas, el peligro de mercado negro es poco menos que desdeñable mientras dura el ajuste». ³⁴ En Cuba, hasta hace poco, el Estado lo controlaba todo (no sólo la divisa), y sin embargo campeaba

33 Purroy, «Remando...», *ob. cit.*

34 Petkoff, *ob. cit.*

un abierto y desmoralizador mercado negro de dólares. Pero es típico de los socialistas no darse por enterados de estas cosas.

Lo importante, no obstante, tiene que ver con el gradualismo. Al respecto un ex ministro de CAP, que tuvo una gran influencia en la formulación e implementación de las primeras fases del «paquete», tiene esto que decir:

La terapia de choque aplicada en Venezuela fue empujada por la incapacidad administrativa del Estado para introducir reformas gradualmente, y no por una adhesión de tipo ideológico a las políticas traumáticas [...] Un enfoque gradualista para corregir las distorsiones macroeconómicas requería un aparato estatal con habilidades que en Venezuela habían sucumbido bajo el abuso de más de una década de excesos.³⁵

Esta discusión, si bien es importante, no ataca la cuestión central de los pilares del programa y sus hondas contradicciones, porque la terrible paradoja del asunto es que el «gran viraje», rápido o gradual, significaba —vía devaluación— una masiva transferencia de ingresos hacia el Estado. El sector privado no se hizo presente tras el «paquete», la especulación financiera y el abultamiento artificioso de la banca se hicieron las normas, sólo siguieron exportando las industrias que siempre habían tenido ventajas comparativas, y el Estado fue incapaz de deslastrarse, vía privatización, de sus pesadas cargas administrativo-financieras. Mientras la economía no petrolera decreció en 9.4% durante 1989, el gobierno creció en 4.6%. Ya para 1991 algunos analistas lograron percibir estas tendencias tan claramente en contradicción con las perspectivas primarias del «paquete».³⁶ Y es que el sector privado venezolano responde también al «modo de ser natural» de nuestra petroeconomía; es un sector subsidiado, escasamente competitivo, sumido, como el resto del país, en la pantanosa realidad de una economía movida por un gasto fiscal sujeto a su vez a los vaivenes en los precios de los hidrocarburos.

No cabe duda de que el segundo CAP y su equipo arriesgaron mucho y obtuvieron muy poco. Se pagó un alto costo social y económico,

Moisés Naim, *Paper Tigers and Minotaurs*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1993, pp. 54-55.
Purroy, «Remando...», *ob. cit.*

35

36

así como político, con magros resultados. Sin embargo, me parece obvio que esa no era la intención de los que tuvieron en sus manos tan trascendentales decisiones. El país tomó en 1989 el camino de una repetición del ciclo fatídico de la economía en la petrodemocracia, sólo que en condiciones peores que las precedentes, que arrojaron consecuencias bastante más graves.

La verdad simple es que el «paquete» nunca tuvo el respaldo necesario ni podía tenerlo, y estoy convencido de que, aun con algo de gradualismo, el proceso que generó ese inexorable viraje no habría sido, a la postre, demasiado diferente al que hemos conocido a partir de entonces. Se ha argumentado que fue «la carencia de un pacto social o al menos político, capaz de proporcionar el sólido sustento que requiere la profunda transformación de la economía y de la sociedad»,³⁷ lo que en última instancia condenó a CAP al fracaso. Sin duda alguna, un mayor esfuerzo para persuadir a los diversos sectores acerca de las presuntas virtudes del viraje, un mayor empeño en lograr acuerdos, un mayor interés en escuchar y dialogar, habrían tenido cierta utilidad y, quizás, mellado algunas aristas y minimizado algunas diferencias. Pero, estoy convencido de ello, no mucho más. Sobre todo tratándose de CAP y de las expectativas que su nuevo mandato suscitó inicialmente, expectativas tan rápidamente frustradas.

No cuestiono en absoluto la tesis de Gerver Torres, ex ministro del gobierno de Pérez, según la cual el Presidente y su equipo fallaron gravemente en la tarea de proporcionar «la dirección espiritual del conjunto de la sociedad».³⁸ Pero, ¿podían hacerlo?, y, más específicamente, ¿tenían una capacidad real de lograr que los venezolanos aceptasen, con la suficiente rapidez y serenidad, el camino inexorable del empobrecimiento nacional, que habría seguido su rumbo con o sin «paquete» en el entendido de que la etapa «dura» sería el preludio de una recuperación posterior?

El terrible problema para los gobiernos democráticos, en este período de declinación económica y degradación social, es que la población en general está convencida de que el país es rico y por lo tanto su continuo empobrecimiento no solamente es inexplicable sino también in-

37 Emeterio Gómez y Carlos Sabino, «No hay un pacto sociopolítico que permita el viraje económico», *El Diario de Caracas*, Caracas, 5 de agosto de 1989.

38 Gerver Torres, *Transformar una sociedad requiere algo más que reformas económicas*. Ponencia. Washington, septiembre 1992 (mimeo).

justo. Por ello, desde hace unos años, todos los gobiernos democráticos experimentan, a los pocos meses de asumir el poder, un vertiginoso proceso de desgaste y acrecentamiento de su impopularidad. Es, por lamentable que ello sea, casi seguro que lo mismo ocurrirá al gobierno que está comenzando su período en 1994, y que ya se enfrenta a una avasallante y casi paralizante constelación de problemas.

Insisto: no es mi propósito exonerar a CAP y su equipo de los muchos errores que cometieron, tanto en el plano de las decisiones económicas como en el terreno de la conducción política del proceso de cambios. En materia económica, sin embargo —y como discutiré en la sección siguiente—, el problema de fondo, más que de gradualismo es un problema de incapacidad social para la transformación del modelo rentista. Sencillamente, Pérez se vio forzado a emprender un camino que en sentidos fundamentales ya es irreversible para Venezuela, a menos que queramos edificar una economía de guerra, autárquica y pobre, al estilo de Albania bajo el régimen comunista. Ese camino, que tiene como norte la creación de una economía productiva y competitiva que complemente con suficiente fortaleza la economía petrolera, exige concepciones y respuestas de parte de la población y de los dirigentes que chocan radicalmente con esquemas culturales hondamente arraigados en el país, y que, según indica la evidencia, sólo cambiarán a través de severas pruebas y decepciones.

Tal vez sea necesario, como en otros casos latinoamericanos, que el país «toque fondo» en el abismo de la hiperinflación para retomar el sendero en otra dirección. No lo sé. Lo que sí creo, no obstante, es que aun si Pérez hubiese «desarrollado [...] una estrategia eficaz de comunicación para llegar a la opinión pública»,³⁹ como le pidieron a posteriori algunos comentaristas, ello no habría cambiado sustancialmente las cosas, en vista de la naturaleza radical, implacable y populista que asumió la oposición, todo lo cual coloca al presente gobierno ante el mismo dilema de costumbre: o satisface a las masas, que confiaron en sus promesas, o su descenso por el tobogán de la impopularidad será igualmente indetenible.

A lo anterior hay que añadir, para preservar un balance, que hubo personas honestas y lúcidas que apoyaron a CAP y su «paquete», y llegaron a pensar que

Con ello, la sociedad venezolana está demostrando que su democracia, lejos de estar petrificada, tiene una gran capacidad de autoadaptación a tiempos cambiantes. Sin necesidad de pasar por formas autoritarias de ejercicio del poder político, más bien mediante la profundización del régimen democrático a través de la descentralización del poder y del perfeccionamiento de la representación, Venezuela está demostrando que el populismo clientelar no es la única forma de vivir en democracia en América Latina, tal y como lo pretendían algunas tesis pesimistas y despectivas.⁴⁰

Es de presumir que estas palabras, tan gratamente optimistas, fueron escritas previamente a los golpes de Estado de 1992. En todo caso, lejos de estar «autoadaptándose a tiempos cambiantes», la democracia venezolana está intentando retroceder, en condiciones que lo hacen imposible, al modelo populista, a pesar de que el valor real de los precios actuales del petróleo no debe ser muy superior a lo que se estaba recibiendo en términos reales hace veinte años, y de que el ingreso per cápita petrolero se ha perdido en casi 400% estos últimos quince años (según cifras proporcionadas por Roberto Dubuc).

Las conclusiones que cabe extraer del análisis de esta etapa fatídica son éstas –siguiendo a Templeton: 1) Si la dirigencia política es incapaz de asegurar suficiente consenso o autoridad en tiempos de reestructuración económica, el resultado es una aguda intensificación de los conflictos redistributivos y del cuestionamiento de las instituciones políticas vigentes. 2) Es muy difícil, por no decir imposible, intentar un proceso serio y eficaz de reestructuración económica en sociedades democráticas donde –como es el caso en Venezuela–, persisten importantes desigualdades sociales y además la población actúa de acuerdo a patrones culturales opuestos a la economía de mercado. 3) El voto democrático implica, al menos implícitamente, no sólo una equitativa distribución del poder sino también del bienestar: «Si bien los conflictos sociales pueden ser contenidos durante períodos de crecimiento económico, como ocurrió en Venezuela entre 1960 y 1980, la brecha de las expectativas generada

40 Andrés Stambouli, «Déficit democrático y gobernabilidad del sistema político venezolano», en C. Blanco, coord., *Venezuela, del siglo xx al siglo XXI: un proyecto para construirla*. Caracas: COPRE-PNUD-Nueva Sociedad, 1993, p. 43.

durante la abundancia —y estimulada por los medios de comunicación— se ensancha críticamente cuando llegan los tiempos de estancamiento y recesión, conduciendo al aumento de la conflictividad social». ⁴¹

A este proceso le resta todavía un largo trecho en Venezuela.

Un paréntesis: Algunas verdades sobre el desarrollo de los pueblos

Es interesante constatar que varios de los más lúcidos y objetivos críticos de las medidas asumidas a partir de 1989, admiten sin embargo que ya para ese momento las cosas habían llegado a un grado tal de descomposición, que era prácticamente imposible tener éxito en «cualquier intento de cohesionamiento social alrededor de cualquier proyecto». ⁴² En tal sentido me atrevería a afirmar que ya a estas alturas de evolución de la petrodemocracia, ningún gobierno será capaz de sostener, por un tiempo razonable, márgenes aceptables de popularidad, a menos que logre persuadir a las mayorías de que el empobrecimiento nacional, en las presentes y previsibles condiciones, es inevitable, y que sólo mediante un esfuerzo concertado de la colectividad, a mediano y largo plazo, podrá detenerse y revertirse ese rumbo.

Claro está, semejante tarea de persuasión sólo podría lograr resultados positivos si la gente percibe que las cargas del esfuerzo van a ser equitativamente compartidas entre los diversos componentes de la sociedad venezolana, y si los dirigentes de distintos sectores son vistos como personas creíbles y honestas. Además de todo esto, por supuesto, el proyecto de reconstrucción que requiere Venezuela tiene que ser coherente en lo conceptual y responder a ideas de avanzada en lo económico, y no a las tradicionales concepciones populistas que son precisamente las que nos han traído al punto donde estamos.

En ese orden de ideas, conviene hacer un breve paréntesis y poner en claro cuestiones centrales acerca de los verdaderos factores determi-

A. Templeton, *The Evolution of Popular Opinion*. Ponencia. Washington, 1992, p. 20 (mimeo).

Miguel Ignacio Purroy, «El paquete avanzando, la economía estancada», SIC, Caracas, julio 1990, p. 248.

nantes de la prosperidad material de los pueblos, es decir, del desarrollo. Me parece que un buen punto de partida lo ofrece un Informe del Banco Mundial, publicado en 1991 y sólidamente sustentado en una investigación empírica sobre experiencias exitosas y fracasadas de decenas de países durante los pasados cincuenta años.⁴³

Las conclusiones de ese Informe indican que son cuatro los elementos que, actuando en conjunto, determinan el éxito de una estrategia de desarrollo: la inversión en recursos humanos, una microeconomía competitiva, una macroeconomía estable y la vinculación con el comercio mundial. El punto clave a tomar en cuenta es que el potencial de crecimiento de una nación tiene que ver esencialmente con la calidad del capital humano, lo cual implica que la educación y el entrenamiento técnico-profesional deben ser prioritarios en el diseño y ejecución de una estrategia de crecimiento, en un marco que posibilite la subsistencia material digna de la colectividad.

T A B L A 1
PROPORCIÓN DEL CRECIMIENTO ATRIBUIBLE
AL AUMENTO DE LOS FACTORES (1960-1987)

Países	Aumento capital		Aumento trabajo		Aumento productividad
Japón		36%		5%	59%
Estados Unidos		23%		27%	50%
Asia oriental		57%		16%	28%
América Latina		67%		30%	0%

F U E N T E

Banco Mundial, *World Development Report 1991*.

En la tabla 1 se desglosa –para el período 1960-1987– qué porcentaje del crecimiento se ha debido a incrementos meramente cuantitativos de capital y de fuerza de trabajo, y qué proporción se ha debido al aumento de la productividad en el uso de esos factores. Japón, por ejemplo, debe 59% de su crecimiento a incrementos en la productividad, 36% al aumento de su *stock* de capital y sólo 5% a la incorporación de nueva fuerza de trabajo. En los Estados Unidos, por otra parte, el incremento de produc-

tividad ha contribuido con un 50%. Las naciones de Asia oriental, cuyo punto de partida en 1960 era similar o peor al de América Latina, deben un 28% de su crecimiento a mejoras en su nivel de productividad. En América Latina, no obstante, no hubo ningún aumento de productividad en el transcurso de esos 27 años. El crecimiento que ocurrió se logró a través de inversión y aumento de la producción laboral. Mientras en Estados Unidos se requieren 23 unidades de nuevo capital para aumentar cien unidades de producto, en América Latina hacen falta 67:

Nuestro esfuerzo de inversión es el triple, debido al pobre desempeño tecnológico. Esta es la tremenda paradoja del subdesarrollo. Los países con menores recursos necesitan movilizar más insumos que los países ricos para obtener un mismo nivel de crecimiento, porque son más ineficientes en su uso [...] Estos datos corroboran que el progreso tecnológico explicaría las fuertes diferencias en las dinámicas de crecimiento de los países. ⁴⁴

Esto comprueba igualmente que el pobre desempeño de una economía como la nuestra no se debe a una carencia de capital físico, financiero o de recursos materiales, sino a fallas y limitaciones del capital humano.

En tal sentido, nunca se enfatizará lo suficiente que los determinantes cruciales del progreso material de los pueblos son sus actitudes económicas, sus valores y creencias y sus modos de comportamiento; sólo en menor medida influyen sus posibilidades de acceso a recursos naturales. Existen creencias y actitudes que obstruyen, en lugar de alentar, el progreso material, minando y erosionando las aptitudes, convicciones y modos de conducta que están en la base de la prosperidad. Aquí me limitaré a apuntar que de acuerdo a rigurosos estudios empíricos realizados por el sociólogo Alfredo Keller y su equipo, el marco motivacional y valorativo actualmente predominante entre los venezolanos, posiblemente reforzado a raíz de los eventos entre 1992 y el presente, obstaculiza seriamente, en lugar de estimular, el tipo de actitudes y aptitudes que de acuerdo con la experiencia internacional son conducentes al desarrollo.

En efecto, ese «perfil cultural» adverso tiene las siguientes características básicas:

- a) Presencia de un fuerte locus externo de control; es decir, de una tendencia generalizada «a percibir el entorno como algo que cambia sin que se le pueda controlar, razón sobre la cual se ha nutrido el paternalismo de Estado y, en consecuencia, una fuerte relación de dependencia del ciudadano respecto de las estructuras sociales dominantes».
- b) Bajos niveles de confianza en las instituciones, «dada la naturaleza personalista e instrumental de las relaciones del individuo con la sociedad».
- c) Fuerte personalidad autoritaria que refuerza o magnifica la necesidad de «sociedades dominadas por superestructuras poderosas, referidas específicamente a la concepción del Estado y a las demandas de un orden previsible».
- d) Doble racionalidad entre el discurso y los hechos, «que pone de relieve la conflictividad entre las costumbres [lo que realmente se hace, AR], y las normas [lo que supuestamente se debería hacer, AR], y que explica, en buena medida, las dificultades para asumir compromisos colectivos bajo marcos jurídicos comunes».
- e) Cierta sobrevaloración del «yo» dentro de una cultura «mágico-religiosa, destinista e igualitaria que, en conjunción con la externalidad del control, deriva de actitudes que privilegian relaciones basadas en la solidaridad sobre las relaciones de productividad y que llevan, por ejemplo, a considerar la competencia como algo indeseable».
- f) Dominio de lo emocional sobre lo racional y «permanente conflicto entre la esfera de intereses volitivos sobre los normativos».
- g) Bajos niveles de información y «superficialidad de los niveles cognitivos, probablemente [...] por el rápido tránsito de la oralidad a lo audiovisual saltando la escritura, en la instrumentación de la transmisión cultural de valores societales».
- h) Por último, un cuerpo «hiperbólico de creencias sobre el entorno, reflejo de los bajos índices de conocimiento e información, que lleva en casi todos nuestros países a considerarnos, sin llegar a serlo nunca, potencias históricas, económicas e, incluso, militares».⁴⁵

El problema se agrava en lugar de aliviarse en nuestro medio, debido al mecanismo demagógico de funcionamiento de la democracia populista, ya que nunca falta cierto tipo de liderazgo que —como ha ocurrido tradicionalmente, para luego agudizarse entre 1992 y 1993—, articula ma-

nipulativamente los impulsos clientelares y creencias mesiánicas de la gente, a objeto de explotarlas en su propio beneficio.⁴⁶

Como consecuencia de lo expuesto, no es de extrañarse que los venezolanos estemos sumergidos bajo un verdadero océano de percepciones turbulentas y erróneas, que pesan severamente sobre nuestro ser colectivo y que hacen muy difícil nuestro despegue económico más allá de la petroeconomía. Repito, en esa línea, los datos ya ofrecidos en el capítulo anterior:

- 91% de la población sostiene que la riqueza de Venezuela es tan grande que puede financiar todas las necesidades de la gente.
- 82% siente que el Estado debe distribuir esa riqueza entre la gente «sin distinción ni privilegio alguno», ya que todos somos sus dueños.
- 72% piensa que el mejor modelo económico es el que fortalece al Estado a objeto de que distribuya adecuadamente esa riqueza.
- 27% solamente, de una población que ha recibido toda suerte de subsidios durante varias décadas, considera que su vida se ha beneficiado en «algo» de la «riqueza» del país.
- 42% considera que el hecho de que existan ricos y pobres es cosa del destino y poco o nada puede hacerse para cambiarlo.
- La mayoría piensa de igual modo que lo único bueno del segundo gobierno de CAP fueron sus políticas asistencialistas (dádivas del Estado denominadas «política social»), y el aumento de esas dádivas es la principal demanda que hacía el electorado a los candidatos que compitieron en la campaña presidencial de diciembre de 1993.⁴⁷

Parece inevitable, en vista de los datos expuestos, que los venezolanos continuemos por un tiempo —sólo Dios sabe qué tan largo— contemplando el espejismo de una petroeconomía que se asfixia aceleradamente. De igual manera es posible que sólo una fuerte sacudida, siempre indeseable por lo demás, logrará, quizás, hacernos despertar del letargo y torpor en que nos ha sumido una visión mágica y mitológica de la existencia.

En este punto tengo por primera vez que manifestar mi desacuerdo con el destacado economista Miguel Ignacio Purroy, cuyos lúcidos estudios me han sido de tanta utilidad en esta obra.

En 1990, Purroy argumentó que Venezuela

Ibid., p. 1.

46

Ibid., p. 3.

47

... todavía dispone de una muy cuantiosa renta petrolera en relación a su pequeña población. La productividad del petróleo propiedad de la nación le continúa otorgando al venezolano común un derecho inexpropiable sobre la renta petrolera. ¿En razón de qué ética o de qué lógica se le niega al venezolano el derecho a consumir su pedacito correspondiente de renta? ¿Qué razón hay para que la renta petrolera se destine exclusivamente a inversión o al repago de la deuda? De nuevo campea la vieja consigna de la «siembra del petróleo», que subrepticamente le cierra al pueblo el acceso al consumo de una renta que es también suya.⁴⁸

No es necesario exagerar las cosas. La verdad simple es que el Estado venezolano, a lo largo de 35 años de democracia, ha invertido sumas gigantescas en educación, salud, infraestructura y un cúmulo adicional de áreas sociales, sumas destinadas a «darle a cada cual su pedacito». Sin duda, mucho ha marchado mal y algunos han recibido partes desproporcionadas del «pastel»; pero carece de sentido perder de vista que, aun bajo el segundo CAP, no todo, ni siquiera la mayor parte, se destinó a inversión o a pagar la deuda, sino a sostener un enorme presupuesto de beneficencia social centrado, en especial, en el pago de una monstruosa burocracia que sigue y seguirá creciendo como costo del modelo rentista y distributivo.

Un problema diferente y más importante tiene que ver con las siguientes preguntas: ¿Qué ha pasado con el extraordinario e innegable esfuerzo realizado por la petrodemocracia en programas de «capitalización del hombre»? ¿Por qué han sido tan poco estimulantes los resultados? ¿Por qué tan elevada la ineficiencia?

Sería injusto negar que se ha llevado a cabo un esfuerzo para motorizar ese factor clave del desarrollo económico, que es el desarrollo de la gente, en Venezuela. Sin embargo no hemos podido arrancar, y nuestra sociedad marcha hacia atrás en materia de educación y capacidad tecnológica. ¿A qué se debe esto? Francamente no tengo respuesta a la pregunta e ignoro si existen estudios que expliquen por qué razones el esfuerzo de «capitalización del hombre» ha producido tan decepcionantes resultados. En todo caso, no me cabe duda de que si esos esfuerzos no se

ahondan y mejora su eficiencia, el país jamás abandonará su condición subdesarrollada.

Retomando el tema del modelo de desarrollo, reitero que mi propósito no ha sido defender el plan de ajustes perecista, sino explicar sus orígenes y analizar sus motivaciones. A mi modo de ver —como ya lo he sugerido en estas páginas— el obstáculo fundamental para ese tipo de cambios es de naturaleza política y cultural. Por otra parte, fue un serio error económico pretender que, meramente con el uso del tipo de cambio como herramienta, sería posible generar, rápida y eficazmente, un proceso de crecimiento masivo de exportaciones no tradicionales, capaces de sustituir al menos en parte sustantiva el «hueco» dejado por el encogimiento de la petroeconomía. Ni la capacidad de respuesta e iniciativa del empresariado, ni la disposición psicológica de la fuerza de trabajo, ni el esquema de actitudes y aptitudes prevaleciente —para no hablar de la irresponsabilidad del liderazgo— permitían un cambio tan abrupto y radical.

Ciertamente, también se falló en el relativo olvido en que se tuvo al mercado interno, así como en la lentitud para implementar otras reformas —tributarias y financieras, por ejemplo. No siempre fue el gobierno el culpable de estos retrasos, pero en todo caso el daño esencial pudo percibirse desde un comienzo, cuando las masas populares tomaron las calles de Caracas y otras ciudades a pocos días de los anuncios de Pérez en febrero de 1989. Desde ese momento, el divorcio entre los ajustes y la población quedó sellado.

El desplome de las élites y la indigestión reformista

Ninguna sociedad puede aguantar por demasiado tiempo una existencia caracterizada por la zozobra, la angustia y la incertidumbre acerca del futuro. De igual modo ninguna sociedad puede orientarse si carece de dirección, y esa dirección siempre la suministra una élite que cumple la indispensable función social del liderazgo.

Hablar de élites en nuestro medio, profundamente igualitarista, siempre resulta complicado y antipático. Sin embargo, la realidad es que uno

de los factores fundamentales que explica la decadencia del régimen democrático, así como el retroceso generalizado del país estos pasados años, se deriva del desplome intelectual, moral y político experimentado por los diversos grupos de élite que en otro momento —a nivel político, empresarial, sindical, militar y religioso— dieron pautas y marcaron rumbos a la sociedad.

La élite política democrática está prácticamente en ruinas. Caldera, el único sobreviviente del pequeño grupo que dio forma a la democracia puntofijista, mantiene sin duda un rango importante como líder, pero carece de programa y de visión, ya que el país que concibe y con base en el cual actúa ha dejado en buena medida de existir. No puede haber marcha atrás hacia la Venezuela de los subsidios, las dádivas y el optimismo ingenuo de los milagrosos petrodólares, ni están dadas las condiciones para restaurar el tipo de política consensual que emergía del poder de un Estado financieramente pródigo.

Los hombres de la «generación de relevo», la llamada «generación del 58», no han logrado articular un proyecto que suscite suficiente respaldo y entusiasmo en la sociedad. Algunos han tratado, pero desafortunadamente se han visto arrastrados y en ocasiones aplastados por el torbellino de radicalismo que campea en un país desilusionado y confundido. En líneas generales, la élite política democrática ha claudicado de modo imperdonable en su responsabilidad de ofrecer al país un camino cierto y esperanzador.

El caso de la élite política no es excepcional. Los grupos que poseen poder económico y prestigio social están divididos y carecen de voluntad y perspectiva. Con enorme miopía se dedican a combatirse mutuamente por las migajas de un mercado en vías de extenuación. Los otrora poderosos dueños de importantes medios de comunicación social abren sus puertas a los portavoces del radicalismo, y colocan sus considerables energías en función del vano y contraproducente propósito de envilecer aún más los esquemas de valores y percepciones de una población cada día más ignorante, irritada y ansiosa de revancha. Buen número de los que integran esas élites económicas y sociales ya tienen su corazón y su dinero fuera de nuestras fronteras. Sus intereses, sus verdaderas casas, sus emociones y anhelos se hallan en otros lugares. Hace rato que se desprendieron del país y que perdieron la confianza.

No menos lamentable y trágica es la situación de la dirigencia laboral democrática, acosada por un sector popular golpeado duramente por el

empobrecimiento y sin recursos intelectuales o éticos que le permitan enfrentar el desafío del radicalismo.

Las Fuerzas Armadas, luego de las experiencias de 1992, han quedado en situación muy compleja. Los oficiales y soldados que lucharon por el sostenimiento de la democracia ven ahora que aquellos que insurgieron violentamente contra el sistema reciben trato de héroes populares, salen de la cárcel y se proyectan con orgullo y en ocasiones hasta con soberbia hacia adelante. Los valores se invierten y los premios y castigos experimentan una extraña y paradójica voltereta, en una especie de carrusel de la fortuna en el que todo es válido y el azar impera.

En medio de la tormenta, la jerarquía católica sucumbe paulatinamente ante el mensaje izquierdizante de la «teología de la liberación». El lenguaje de la Iglesia venezolana se radicaliza, el «compromiso con los pobres» deviene en críticas a la economía de mercado y solicitudes de retorno al estatismo paternalista. Todo ello, aunque esa no sea la intención, acrecienta las llamas de un palpable resentimiento social de los que menos tienen contra los que más tienen. Desde luego, ese radicalismo es alimentado con el aporte de la intelectualidad de izquierda, que predomina en el país, y que no hace sino coquetear con el radicalismo y rendir tributo a algún Mesías de turno, militar o civil.

La atmósfera política del país parece presagiar grandes cambios. Se percibe una especie de anuncio de huracán en ciernes; el aire está cargado de premoniciones y nubes oscuras van y vienen sobre un escenario que cambia día tras día. La incertidumbre, la perplejidad y la zozobra son los tres signos clave de la vida venezolana. Los historiadores del futuro no tendrán mayores dificultades en discernir esas vibraciones de malestar, temor y angustia que ahora nos persiguen.

Las élites venezolanas se han desplomado, y así lo vio con lucidez uno de nuestros más distinguidos historiadores, quien hace un par de años, tal vez menos, escribió lo siguiente, en referencia a la evidente desorientación que padecen la clase dominante y la clase política:

No parecen haber comprendido cabalmente la situación, y no son capaces de coadyuvar, coherente y sostenidamente, a la superación de la misma. No se percatan que sin la rectoría de una clase dominante coherente y consciente de sus objetivos sociales, y sin la conducción de una clase dirigente consciente de su función, el proceso de reformulación [del proyecto nacional,

AR] se vuelve calamitoso y socialmente oneroso, con grave riesgo para sus propios intereses.⁴⁹

Valga añadir, por cierto, que ese desplome de las élites no es un fenómeno nuevo en nuestra historia y en las reflexiones sobre nuestra evolución nacional. Viso lo ha comentado, refiriéndose a la perenne tendencia de esos grupos de élite a «la alegada protección de los pobres, la demagogia a propósito de éstos y el exceso de sensibilidad (¿de cuánta ineficacia práctica!) hacia los llamados débiles jurídicos, llevados al punto de eliminar los incentivos al trabajo». Son y han sido élites «enervadas por el remordimiento o la falsedad», que «tratan de perpetuar en los débiles la conciencia de su debilidad: de esa manera, todas las reformas sociales llevan inevitablemente a impedir a esos débiles el logro de su propia redención mediante el trabajo, de manera parecida a como tantos padres impiden a sus hijos, por una excesiva protección, llegar a ser hombres».⁵⁰

A las élites venezolanas no les pasó inadvertido el deterioro del sistema, que empezó a hacerse obvio a finales de los años 1970. A pesar de que el radicalismo hoy imperante sostiene lo contrario, lo cierto es que los sectores dirigentes del país se entregaron, a partir de la década de 1980, a una verdadera orgía reformista en lo político y socioeconómico, que aún prosigue alrededor del mito de la «reforma constitucional». Viso ha analizado esa propensión de nuestras élites a crear «repúblicas aéreas» y a pasarse el tiempo inventando constituciones —de las cuales hemos tenido 25, y queremos otra más. Viso ha hablado de un «elemento lúdico» en la actitud de las élites, de una especie de tendencia a jugar con cosas muy serias, tendencia que es propia, por lo demás, de una población que invierte grandes sumas semanales en juegos de azar.

Dice Viso que «también es parte de nuestro problema el que los hombres encargados de elaborar las leyes a veces juegan con la posibilidad de hacer algo nuevo para adquirir la dignidad de creadores de normas y, eventualmente, de creadores de patrias».⁵¹ Su conjetura tiene fundamento, en particular si tomamos en cuenta que esas élites «lúdicas» constantemente esperan que sea la realidad la que se amolde a sus constituciones de papel.

49 Germán Carrera Damas, «La reformulación del proyecto nacional venezolano en perspectiva histórica», en C. Blanco, coord., *ob. cit.*, p. 21.

50 Ángel Bernardo Viso, *Venezuela: Identidad y ruptura*. Caracas: Alfadil, 1982, pp. 47-48.

51 Á. B. Viso, *Reforma constitucional e historia*. Caracas: Cedice, 1993, p. 15.

Creo que pocos sistemas políticos han emprendido —al menos en teoría, pero no solamente— tantas reformas a la vez, y de tanta significación, como las que la petrodemocracia comenzó a adelantar desde mediados de los años 1980: se buscaba la «modernización radical» del sistema político, así como la «redistribución del poder social con el propósito de profundizar la democracia y hacer más eficiente al Estado y a los actores sociales». ⁵² La economía, la sociedad, el sistema político, la cultura, en fin, casi la totalidad de las dimensiones que integran nuestra existencia nacional se vieron sujetos a los más diversos proyectos de cambio. No puedo acá desglosar este complejo proceso; ⁵³ lo que me interesa es señalar que las élites políticas se lanzaron al mismo con una mezcla de ingenuidad y temor que les llevó a perder de vista que en tiempos de turbulencia también es necesario conservar.

Al mismo tiempo que innumerables voces se alzaban y continúan alzándose para clamar por toda suerte de cambios, exigiendo a los gobiernos «gobernar» con eficiencia, una andanada incesante e implacable de críticas y cuestionamientos llueve sobre las instituciones básicas del régimen, en particular los partidos políticos y sus dirigentes, dando así al traste con el objetivo de acrecentar la gobernabilidad del sistema democrático. Esto ha llevado a algunos analistas a preguntarse si acaso «el sistema político no está sufriendo de un exceso de reformas antes que de una ausencia de ellas»; ⁵⁴ interrogante válida en vista del congestionamiento de propuestas y medidas que, a la postre, aparte de confundir aún más a la gente y de aumentar sus expectativas, jamás tocaron en la práctica el problema clave referido al imperativo de hacer entender a la población que el empobrecimiento nacional seguirá su curso y que no existen «soluciones» mágicas al reto del desarrollo.

En este orden de ideas, comparto el planteamiento de Oropeza (en 1982) según el cual:

La cultura civil venezolana puede y debe ampliar la base de su participación, pero no está en capacidad de tolerar ciertas formas que le impriman excesiva precipitación y que no le sea posible controlar o atenuar en circunstancias determinadas. Si los

COPRE, *La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado*, citado por L. Gómez y M. López Maya, *El tejido de Penélope. La reforma del Estado en Venezuela, 1984-1988*. Caracas: CENDES, UCV, 1990, p. 189.

Véase la obra de Gómez y López Maya, citada en la nota anterior.

Juan Carlos Navarro, «En busca del pacto perdido», en Serbin *et al.*, eds., *ob. cit.*, p. 82.

52

53

54

partidos democráticos que controlan hoy la adhesión del 90% del electorado no son capaces de mantener el pluralismo tutelar que atenúe el impacto social de los conflictos y éstos, como consecuencia de esa incapacidad, se acentúan y perpetúan, la democracia venezolana no tendrá capacidad cultural para sobrevivir.⁵⁵

El desbordamiento del radicalismo, que encontró su apogeo a partir de 1992, halló frente a sí unas élites atemorizadas y confundidas, sin capacidad de reacción frente a una ofensiva que continúa su marcha. El intento de cambio del modelo económico y la intoxicación generada por el intento de reformarlo todo a la vez entraron en directa contradicción con la estabilidad del sistema político. Nadie, o casi nadie, ha tenido la sabiduría de entender que en medio de las pasiones incontroladas, lo fundamental es mantener...

Decir como de hecho se ha sostenido, que la petrodemocracia no ha sido «incorporativa» es, cuando mucho, una verdad a medias. No obstante, es el tipo de afirmación a la que nuestra cultura de izquierda concede el rango de dogma incuestionable. Así, no contentos con la orgía reformista de los pasados años, varios de nuestros más importantes dirigentes se aprestan ahora a emprender una «reforma constitucional», inspirados por unos ideales participativos que desbordarían lo soñado por un Rousseau y que incluirán referenda «aprobatorio», «abrogatorio», «consultivo» y «revocatorio». Como si las dificultades de la gobernabilidad democrática en nuestro país no fuesen suficientes, proseguiremos con la fiebre demagógica a través de múltiples tipos de referenda que inevitablemente complicarán todavía más cualquier esfuerzo por formular y llevar adelante políticas públicas con alguna coherencia y continuidad.

A la miopía del liderazgo, la erosión de las instituciones y la carencia total de memoria y perspectiva históricas, se suma la ausencia de propuestas alternativas a lo que existe. Hemos perdido de vista que Venezuela es un país frágil, ante todo geopolíticamente, por sus relaciones de intensa dependencia externa como monoprodutor y multiconsumidor. Lo es también, de modo fundamental, en su ámbito interno, por la vulnerabilidad de una conciencia colectiva sustentada en mitos, en esperanzas mesiánicas, en una concepción mágica de la política y en la profunda

incomprensión de las raíces de lo que le ha ocurrido a la nación estos pasados quince años, luego del fin del sueño petrolero.

En medio de esa fragilidad, la acción irreflexiva de casi todos los principales actores de la actual vida nacional se basa en un único principio: hacer concesiones al clamor popular. Nadie contempla el abismo, pero en los asuntos políticos es indispensable observar con frialdad, con sangre fría, con base en la evidencia, sin odios o prejuicios. Como sostiene Kissinger, el problema esencial de la política «no es el control de la maldad, sino la limitación del puritanismo». Pocos se atreven a recordar que las acciones políticas no sólo son capaces de generar beneficios, sino también de producir costos. Los costos pagados gracias a la miopía de dirigentes y dirigidos, de gobernantes y opositoristas, de «líderes» y «pueblo» son y serán enormes. No se disiparán con otra ilusión.



El creciente odio social y la crisis de la democracia

El gobierno que resultó electo en diciembre de 1993 es legal y legítimo, y es deber de todo ciudadano venezolano admitirlo así. No obstante, sería exagerar las cosas pretender que ese gobierno posee un claro y firme mandato de parte del electorado. Como se apuntó a comienzos de este estudio, apenas un 15% de la población adulta del país sufragó por Caldera, y no creo desacertado sostener que este es el gobierno que se inicia con el piso político más débil en toda la etapa democrática, a lo que se suma la alta tensión social y una especie de sensación de precolapso económico.

Los estudiosos de la historia podrían hallar, en la nuestra y la de otras naciones, interesantes puntos de comparación en torno a lo que podríamos llamar «fiebre prerrevolucionaria» que empieza a apoderarse de muchos espíritus, en una colectividad desorientada, perpleja y temerosa del presente y el futuro; en una colectividad, además, donde el odio de unos contra otros se convierte paulatinamente en dimensión normal de la existencia cotidiana.

Ninguna sociedad puede aguantar por mucho tiempo el clima de constante zozobra, desazón y angustia que ha venido permeando la nuestra estos últimos tiempos. De alguna forma, tarde o temprano, las sociedades exigen un alivio a las tensiones y la seguridad esencial para desenvolverse con estabilidad y en paz. La sociedad venezolana, luego de dos años de incesante presión, reclama un alivio, que no puede consistir en otra cosa que en el señalamiento de un rumbo hacia adelante, con posibilidades ciertas de que el esfuerzo de cada cual produzca resultados alentadores.

Lamentablemente, ni el liderazgo nacional, ni la mayoría de la población, parecen todavía dispuestos a aceptar que lo que requiere Venezuela es una política de desarrollo a largo plazo, sustentada en el trabajo y la creatividad de individuos y empresas, con un Estado que oriente las energías sociales asegurando la vigencia de un marco de leyes comunes para todos, un Estado que se deslastre de su afán intervencionista y por el contrario estimule la libertad, castigando sin miramientos las transgresiones a la ley.

Esta política de desarrollo a largo plazo exigiría, desde ya, la ampliación sustancial de la base tributaria interna a objeto de: 1) Financiar con recursos reales, y no con dinero inorgánico, el Estado y sus servicios públicos. 2) Aligerar la carga que ahora recae sobre la industria petrolera, industria que ha sido gradualmente estrangulada por el Estado y que necesita ahorrar para invertir. 3) Educar a la población en un sentido opuesto al hasta ahora cultivado por la mentalidad rentista, constantemente reforzada por líderes y gobiernos demagógicos y complacientes.

Semejante propósito, no obstante, choca de frente con percepciones y actitudes que hunden sus raíces en el esquema rentista que sustenta la petrodemocracia. Se ha dicho que «al final, todo el problema converge hacia la necesidad de una reforma fiscal, que diversifique y amplíe las fuentes internas de ingresos. Sin ella, el crecimiento no será sostenible. Por mucho que intentemos esquivarlo, el problema fiscal sigue estando en el centro de la discusión».¹ Estas palabras fueron escritas en enero-febrero de 1992, como preludeo a una crítica a Pérez por no haber introducido para entonces las indispensables reformas fiscales, y los autores proseguían de este modo: «... la crítica que en un futuro le harán los historiadores de la economía al segundo gobierno de CAP será no haber tenido la visión y la valentía de acometer la reforma fiscal».²

Hay cierta ironía en el hecho de que se le exigiese a Pérez esa reforma, la cual, inevitablemente, iba a generar aún mayores resistencias sociales a su gobierno, precisamente en momentos en que se gestaba el primer intento de golpe en su contra, evento que desde luego terminó por descartar cualquier esfuerzo coherente y sostenido de parte de una administración acosada y sometida a los embates de una oposición implacable.

1 Miguel Ignacio Purroy y Ramón Espinasa, «Balance 1991. Perspectivas 1992», *SIC*, Caracas, enero-febrero 1992, p. 8.

2 *Ibid.*

Conviene en ese orden de ideas tener presente que, a pesar de todos los errores y traumas, la economía real experimentó en 1992 —en palabras de Miguel Ignacio Purroy— un

... crecimiento económico extraordinario, cualitativamente distinto y mucho más «meritorio» que el de 1991, por dos razones fundamentales. Primero porque la actividad petrolera no ha contribuido directamente en nada, antes bien ha sufrido un decrecimiento de casi 2%. Todo el vigor expansivo ha descansado en la actividad no petrolera, cuyo crecimiento de 9.5% ha sido superior al del año pasado. Y la segunda diferencia importante se refiere al aporte del sector público. En 1992 el crecimiento real de los servicios prestados por el gobierno ha sido de apenas 2%, frente a un 8.1% en 1991. La actividad económica del sector privado, por el contrario, ha crecido un 13.1%, frente a un 10% del año 1991. Podemos suponer, entonces, que el aumento de la demanda agregada y, por ende, de la actividad económica se ha sustentado íntegramente en el sector privado. Por primera vez en varios años, éste pasa a convertirse en motor del crecimiento.

Por otra parte, continúa Purroy:

Respecto al ingreso real, todo indica que en términos globales se ha detenido el deterioro del trienio anterior. Eso no quiere decir que haya mejorado la distribución del ingreso, por cuanto la mejoría ha sido relativamente mayor en los estratos altos. En cualquier caso, el aumento de la cantidad de personas empleadas en cada hogar, sumado a leves mejoras de la remuneración real, han contribuido a elevar la capacidad adquisitiva de la población.³

Es indispensable insistir sobre el punto: los promotores del «paquete» tenían ciertos elementos para argumentar que su diseño estaba avanzando correctamente hasta ese momento, y que fueron los factores políticos los que descarrilaron un programa que podía enrumbar adecuadamente la economía venezolana.

Sin embargo, tal argumentación tendría también que señalar que el financiamiento de ese crecimiento —motorizado, como de costumbre, por el gasto público— fue deficitario, y que el sector público consolidado cerró el año 1992 con 255.000 millones de bolívares en rojo, una cantidad equivalente al 6.1% del PIB. En otras palabras, el Estado siguió gastando mucho más de lo que ingresaba a su tesorería, utilizando los diversos artificios financieros a que recurren gobiernos incapaces de enfrentar a sus ciudadanos con la verdad. De igual forma, habría que recordar que los ligeros superávits de los años 1990 y 1991 (0.2 y 0.7% del PIB), se debieron al aumento de precios originado gracias a la Guerra del Golfo Pérsico y a la privatización de CANTV respectivamente, ingresos extraordinarios que posibilitaron equilibrar un gasto que no cesó de crecer.

De nuevo, el «festín» del crecimiento deficitario de 1992 continuó el año siguiente en condiciones muy adversas, generadas por la turbulencia política en que se hundió el país. Todo ello no hizo sino dar mayor urgencia al imperativo de reformar la base tributaria del Estado; pero si ya para 1992 ese paso no se había dado —a lo cual también contribuyó la lentitud y antagonismo del Congreso Nacional—, mucho más difíciles se planteaban las cosas en 1993, con el presidente de la República arrinconado y eventualmente suspendido de sus funciones.

Como es de suponer, en vista de las circunstancias que rigen nuestro sistema político, de un gobierno tan débil y precario como el que manejó la transición hasta las elecciones de diciembre de 1993 no podían esperarse medidas trascendentales en el campo fiscal, medidas que la petrodemocracia jamás se ha atrevido a tomar. De allí que el segundo gobierno de Caldera haya llegado a Miraflores en una situación altamente compleja, con unas finanzas públicas en proceso de naufragar y en medio de una abrumadora crisis que afecta al conjunto del sistema financiero nacional.

Como ha ocurrido otras veces, algunos indicios sugieren que Caldera y su equipo tomaron control del timón del Estado sin tener una idea clara de la verdadera situación del país, y arrastrando con el pesado fardo de promesas y expectativas ilusorias formuladas hacia la población en el transcurso de la campaña electoral.

Caldera no presentó un programa de gobierno digno de tal nombre a los electores. Se cuidó mucho de no despertar polémicas prematuras en el seno de la heterogénea coalición que le acompaña, y buscó suscitar en

la gente la sensación de que él, de algún modo, sería capaz de salir a flote con el país a cuestas, por su veteranía, su honestidad y su capacidad para generar confianza.

Leer su «carta de intención», presentada como un esbozo de su proyecto para Venezuela, y ampliada en un folleto titulado *Respuestas a la crisis*, publicado en noviembre de 1993 por su Comando de Campaña, resulta una experiencia sencillamente decepcionante. Se trata de una recopilación de generalidades y de buenos deseos, que en ocasiones alcanzan el nivel de la banalidad. No merece la pena ni siquiera citar estos textos, producto en general de la improvisación, cuyos contenidos uno no sabe si atribuir al poco ánimo intelectual de sus redactores o al deliberado objetivo de no decir nada, pretendiendo a la vez que algo se está diciendo.

De esa documentación, por consiguiente, resulta difícil extraer pistas concretas acerca del posible rumbo que tomará el nuevo gobierno. Sin embargo, es posible fundamentar una conjetura al respecto con base en tres criterios: 1) la visión global de Caldera sobre la economía y la política, puesta de manifiesto en sus escritos y actuaciones a lo largo del tiempo; 2) la dinámica que genera el proceso evolutivo reciente de nuestra sociedad, así como las circunstancias políticas imperantes y previsibles, que constituyen un factor clave para la toma de decisiones y que en alguna medida empujan a este gobierno en determinada dirección, y 3) las medidas y señales iniciales que está tomando y emitiendo el nuevo gobierno, y que al momento de escribir estas páginas (28 de febrero de 1994) permiten de algún modo empezar a orientarse en el neblinoso bosque del futuro.

La naturaleza de este libro, escrito «en caliente», exige combinar la audacia del pronosticador con la prudencia del analista. En tal sentido, creo no exagerar al decir que ni siquiera sus más fervorosos partidarios se atreven a sostener que el tema económico sea uno de los favoritos de Caldera. Su visión de la economía está fuertemente anclada en las versiones más anticapitalistas de la llamada Doctrina Social de la Iglesia, muy en boga en los tiempos inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo representaba una seria amenaza y se pensaba que era necesario contrarrestarle ofreciendo un «capitalismo con rostro humano», sustentado en una ideología socializante y hostil al mercado, que en realidad adoptaba, con algunos cambios, elementos del credo socialista.

Poco puede extraerse de una lectura del discurso inaugural de Caldera, cuando habló de un «compromiso de solidaridad con acento social», compromiso que no será «ni populista ni neoliberal». Las buenas intenciones allí enunciadas no constituyen siquiera una guía teórica, aunque sí existen aspectos que comprometen hondamente al gobierno en la creación de expectativas que, aun si se cumplen —y ello será muy difícil—, traerán con seguridad significativas consecuencias. Me refiero, por ejemplo, a la promesa de aumentar sustancialmente el salario mínimo, reducir las tasas de interés y cerrar el paso a una maxidevaluación y al control de cambio. Lo que parece claro es que Caldera no ha abandonado sus ideas económicas de siempre, intensamente intervencionistas y propensas a los controles.

No pasaron demasiados días bajo el nuevo gobierno para que observásemos una repetición de fenómenos bien conocidos en nuestra tradición democrática: 1) la revelación de que «las cosas están peor de lo que pensábamos»; 2) la suspensión de las garantías económicas, que CAP había restituido, como paso indispensable para acrecentar el poder controlador del gobierno sobre la economía, y 3) la suspensión del IVA a nivel del consumidor (acabando así con un recurso tributario excepcionalmente eficaz).

En efecto, el nuevo presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela declaró el 26 de febrero de 1994 que «la situación fiscal del país es mucho más delicada de lo que el gobierno pensaba hace dos semanas»; añadiendo que este año tendrán que pagarse 70.000 millones de bolívares más de los previamente presupuestados por concepto de intereses de la deuda externa, a lo que se suman 340.000 millones de otros gastos que el gobierno provisional no presupuestó. Por otra parte, el ministro de Hacienda notificó al Consejo de Ministros que «a duras penas» se han logrado recortar unos 110.000 millones de bolívares del abultado gasto público, y ello sólo en teoría, pues aún está por verse qué ocurrirá cuando el gobierno comience a hacer valer sus promesas de aumentos salariales.

Partidarios del nuevo gobierno han sostenido que:

Lo posible es [...] acordarse sobre precios, salarios e intereses. El alza, indispensable, del salario mínimo [...] debe ser inscrita dentro de ese acuerdo. A partir de allí, empresarios y trabajadores tendrían que comprometerse a mantener salarios y precios dentro de una suerte de banda de flotación, con un techo im-

permeable. De no ser así, el ajuste salarial [...] no sería sino gasolina para la caldera inflacionaria.⁴

A pesar de las posiciones bastante nebulosas de los ideólogos del nuevo gobierno en materia económica, de la actitud ambigua del propio presidente de la República, y de la carencia de un programa medianamente coherente que ordene y dé sentido de dirección al conjunto de políticas que vayan a ser ejecutadas, a pesar de todo esto —repito— considero que el rumbo más probable que tomará esta administración, al menos en su primera etapa, copiará los desaciertos y fracasos que ya se han cometido en otras naciones latinoamericanas a raíz de la reacción adversa ante los programas de ajuste y sus amarguras.

En aras de la objetividad, es imperativo decir que a este gobierno no le quedan demasiadas alternativas, en parte debido a la dura situación del país, y en buena parte también debido a sus propias convicciones y prejuicios, que le bloquean rutas factibles y sanas que bien podrían tomarse, arrojando beneficios tangibles y rápidos para nuestra enferma economía.

Me refiero, más específicamente, a cinco medidas —podría pensarse en otras— que en conjunto dan forma a una vía expedita de cambio y superación: 1) La eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales. El presente sistema, en una economía inflacionaria, está cercano al colapso total, no ofrece ninguna garantía de seguridad social al trabajador, obstaculiza gravemente una política de aumento salarial real y corroe la competitividad de las empresas, creando enormes rigideces en el mercado de trabajo y penalizando la calidad del empleo. 2) Un programa acelerado de privatizaciones, destinado a deslastrar al Estado del peso gigantesco de numerosas empresas públicas que abultan el déficit e impiden la concentración de energías en actividades verdaderamente vitales. 3) Eliminación de ministerios, tal y como en alguna oportunidad había sugerido Caldera, quien —lamentablemente— lo que ha hecho es acrecentar el número de los ministros, sin reducir en lo más mínimo la aplastante burocracia que asfixia al Estado. 4) Privatización de partes de la industria petrolera (PDVSA), conservando el Estado venezolano y, ¿por qué no?, los ciudadanos venezolanos directamente, paquetes accionarios mayoritarios —cuando sea el caso—, así como la participación tributaria que, a la postre, es lo que realmente interesa al país. 5) Manifestar

Teodoro Petkoff, «Acuerdo social y político o caos». *El Diario de Caracas*, Caracas, 14 de febrero de 1994, p. 6.

la voluntad nacional —como lo ha hecho, por ejemplo, Colombia— de ingresar al Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA), e iniciar las gestiones para lograrlo, lo cual se traduciría en un palpable aumento de la confianza —ahora tan baja— en el país, así como en un estímulo a la competitividad y productividad de nuestros diversos factores productivos.⁵

Medidas como las esbozadas, que generarían transformaciones extraordinariamente positivas para una economía y una sociedad que requieren iniciativas audaces e innovadoras, son sin embargo casi anátoma para un gobierno sujeto a las tentaciones estatistas y corporativistas que tanto daño han hecho a Venezuela por décadas, y que ahora, según parece, se intentan reactivar.

Es necesario insistir en que el nuevo gobierno se encuentra ante un panorama complicado en extremo. Es prácticamente imposible que pueda llevar adelante sanamente un programa de expansión a través del gasto público, por la aguda limitación presupuestaria y la creciente carencia de divisas (aunque todavía quedan reservas internacionales, que podrían —si se encuentran los mecanismos de acceso— ser sacrificadas).

Los indicios sugieren que de paso el Estado va a asumir la pesadísima carga de la crisis bancaria, y una de las formas de hacerlo —ello luce inevitable— es creando dinero inorgánico a través de malabarismos y artificios de diversa índole, a objeto de garantizar a los millones de ahorristas una esperanza. No obstante, mi apuesta es que a pesar de las dificultades mencionadas y de que el país ya se encuentra sujeto por las fauces de una recesión económica, contra viento y marea el gobierno intentará expandir la demanda y crear así una cierta «bonanza» lo antes posible, aun a costa de profundizar, a mediano plazo, los graves desequilibrios que aquejan nuestra economía.

Pienso, como plantea Purroy en uno de sus escenarios especulativos, que el gran hueco fiscal podría arrojar este año una inflación superior al 80%:

Es evidente que el nuevo gobierno no querrá aceptar el costo social y político de esa tasa de inflación. Para evitarla, tendrá que recurrir a un control generalizado de precios. Un control de precios tendría que abarcar también, más temprano que tarde, la intervención de las variables clave de la economía, como son las

5 Debo estas ideas al economista Roberto Dubuc.

tasas de interés y la tasa de cambio. Todo ello permitiría contener la inflación durante 1994 por debajo del 50%. Podría incluso generarse un nuevo repunte del consumo, sustentado en la mejoría temporal de los ingresos reales de la población. Ello podría hacer crecer moderadamente la economía. Desde un punto de vista estrictamente económico, este curso de acción es viable en 1994, gracias al todavía mullido colchón de reservas internacionales. Ahora bien, el agotamiento de las reservas en un plazo previsible marcaría el fin de la «bonanza» y el inicio de un proceso hiperinflacionario de magnitudes imprevisibles.⁶

Considero importante extender la cita:

La experiencia latinoamericana enseña que es mucho más difícil abatir una inflación crónica que una hiperinflación. La razón es muy sencilla: sólo los sufrimientos generalizados de una hiperinflación crean el suficiente consenso social para las medidas de saneamiento necesarias. El caos económico que acompaña a la hiperinflación es el mejor antídoto contra las creencias populistas de que los controles y subsidios estatales sean una solución eficaz contra la inflación. En Venezuela, por su pasado rentista-petrolero de siete décadas, la cultura económica todavía está impregnada de tales creencias. Hay quienes opinan, y no les falta razón, que solamente una crisis hiperinflacionaria de gran magnitud podrá erradicar esta forma de entender la economía.⁷

Dicho en otros términos, «tocar fondo» en el abismo de la hiperinflación sería, según algunos, el único y agrio remedio para la intoxicación populista. ¿Y qué vendría después?

Caldera culpó al «paquete» de Pérez de todos los males presentes, pasados y futuros del país. Liquidado Pérez políticamente y con el espacio «muerto» de un gobierno de transición tras de sí, no puede ahora Caldera limitarse a condenar a sus antecesores. Caldera, además, prometió que con su llegada al poder y con su nueva concepción económica, las

Miguel Ignacio Purroy, «Perspectiva económica en 1994», *El Diario de Caracas*, Caracas, 3 de febrero de 1994.

Ibid.

6

7

cosas van a mejorar para las grandes mayorías. Por todo ello, estoy convencido de que la dinámica sociopolítica empujará a este gobierno hacia la expansión de la demanda a como dé lugar, asumiendo todos los riesgos que ello implica. De no hacerlo de esa forma —y un político veterano como Caldera tiene que saber esto—, la frágil popularidad de la que aún puede estar gozando su administración se disipará rápidamente, y no sería inconcebible que la población, desengañada una vez más, volviese a clamar por un nuevo Mesías.

Lo anterior me lleva a mencionar una experiencia análoga —pero no necesariamente similar en todos sus aspectos— a la que podríamos vivir en los próximos tiempos, que fue la del programa económico implantado por Alan García en Perú. Los arquitectos de ese plan lo han explicado así:

Si fuese necesario resumir en dos palabras la estrategia económica adoptada por el gobierno [peruano, AR] a partir de agosto de 1985, éstas serían: controlar (se entiende que los precios y los costos, y sólo temporalmente, durante los doce primeros meses), y gastar, transfiriendo recursos a los más pobres para que aumenten su consumo y demanden más productos, «justificando» así la puesta en operación de la capacidad instalada actualmente ociosa [...] Es necesario gastar, aun a costa de un déficit fiscal, pues si este déficit es resultado de transferir recursos públicos al consumo de los más pobres para que demanden más productos y se reduzcan así los costos unitarios, ese no será un déficit con efectos inflacionarios, sino todo lo contrario.⁸

Este tipo de razonamiento puede eventualmente imponerse en las decisiones de un gobierno —el de Caldera— que no quiere, y quizás a estas alturas del juego ya no puede, llevar a cabo una política de austeridad conjugada a una profunda reforma fiscal. La lógica implacable del populismo conduce a los gobiernos, de modo casi inexorable, a gastar más de lo que deben y a proteger celosamente los mitos de la cultura de izquierda, engranaje fatídico de nuestra democracia.

8 Citado en R. Dombush y S. Edwards, «La macroeconomía del populismo en América Latina», *El Trimestre Económico*, 225, México, 1990, pp. 151-152.

Lo que algunos economistas olvidan –limitados a veces por una visión excesivamente sectorial y «técnica» de los procesos sociales–, es que el Estado moderno tiene un poder muy amplio para gastar, y cuando encuentra límites inventa subterfugios para respaldar las acciones más audaces e irresponsables con tal de garantizar su popularidad o, en todo caso, su sobrevivencia. No todos los gobernantes democráticos hacen este tipo de cosas todo el tiempo, pero es desafortunado constatar que no pocos sí lo hacen buena parte del tiempo.

En medio del casi paralizante cuadro económico brevemente descrito, se intensifica en Venezuela con mayor intensidad que nunca antes bajo la democracia un palpable odio social: odio de los que menos tienen contra los que más tienen; de los que se sienten ganadores contra los que se perciben perdedores; de los que pretenden que nada tienen que ver con el pasado contra los que inevitablemente reconocen que no tienen las manos totalmente limpias; de los que tienen algún acceso al poder contra los que quedan relegados del mismo. El pase de facturas, las venganzas, las denuncias, las acusaciones, los señalamientos, en fin, el odio en sus múltiples manifestaciones, entre individuos y entre sectores, es una dimensión central y crecientemente relevante en la dinámica social y política del país.

El odio de clases, alimentado por las frustraciones de una población que contempla día a día la interminable erosión de su nivel y calidad de vida, y que se nutre de una incesante sucesión de escándalos, reales o inventados, es –junto a la crisis económica y el deterioro de nuestras instituciones políticas– factor fundamental del actual y previsible horizonte venezolano. Se están creando, si es que ya no existen plenamente, unas «insalvables zanjas de odios», de las que habló Rómulo Betancourt en otro tiempo.⁹ ¿A dónde puede llevarnos este proceso de aceleración de la decadencia democrática? ¿Sobrevivirá la democracia en Venezuela?; y si lo hace, ¿cómo será esa democracia? ¿Se romperá o no el famoso «hilo constitucional»? Estas son las interrogantes que ahora me ocuparán.

La agonía del populismo

El intento de dar respuesta a las interrogantes antes planteadas me exige tomar en consideración, como un paso previo a la discusión de escenarios alternativos, el análisis realizado por el politólogo argentino Guillermo A. O'Donnell en torno al proceso de descomposición de la coalición populista en otras naciones latinoamericanas, como Argentina, Chile y Brasil.

En esos países, en los años 1960 y 1970, la «constelación de problemas» generada por la crisis económica, las tensiones sociales y el deterioro institucional produjo, en distintos momentos y circunstancias, el colapso de la democracia populista «incluyente» y su sustitución por regímenes autoritarios «excluyentes».

De entrada debo dejar claros dos puntos. En primer término, y recordando a Kissinger, me interesa enfatizar que «La historia enseña por analogía, no por identidad». No hay dos situaciones sociales totalmente idénticas, pero sí existen entre distintas situaciones sociales puntos de similitud y coincidencias que contribuyen a afinar el análisis y a descubrir analogías. No se trata de afirmar que necesariamente Venezuela vaya a seguir, en los tiempos venideros, el mismo camino que tomaron, por ejemplo, Brasil y Argentina en los años 1960, cuando se desmembró en esas naciones el esquema populista basado en la sustitución de importaciones y el consenso de clases. Se trata, eso sí, de señalar que de esas y otras experiencias, y de su discusión por O'Donnell, pueden extraerse herramientas conceptuales de gran valor para el estudio de la actual situación venezolana y sus perspectivas.

En segundo lugar ratifico lo que con tanta insistencia dije en el Prefacio de este estudio: se impone distinguir entre el análisis, por un lado, y la prescripción por otro. Sostener que en Venezuela podría producirse, en un futuro no muy lejano, un desenlace autoritario de la crisis de la democracia no significa afirmar, ni mucho menos, que ese resultado sea deseable o inevitable. Como se verá más adelante, tal desenlace autoritario no es tampoco el escenario que considero más probable para nuestra democracia, aunque no lo descarto en un plano teórico y dentro de un más amplio abanico de opciones.

Ahora bien, en el campo del análisis de la política latinoamericana moderna, predominó por años un cierto paradigma o esquema concep-

tual, sobre el cual se sustentaba lo que O'Donnell ha denominado «la ecuación optimista». De acuerdo con esta ecuación, mientras mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico de un país, mayores son, en consecuencia, las probabilidades de existencia de la democracia. En otras palabras, se pensaba que el avance material de los pueblos, el crecimiento de la clase media, la mejoría en la condición de los sectores populares y en general los adelantos en la prosperidad material de las sociedades latinoamericanas, ampliaban las posibilidades de vigencia de un régimen democrático.

Sin embargo, los golpes de Estado y sus secuelas autoritarias, acaecidos en varios de los más «desarrollados» países latinoamericanos en las décadas de 1960 y 1970, mostraron que algo andaba mal con la «ecuación optimista». El esfuerzo de O'Donnell por desentrañar las raíces de esos procesos es lúcido y aleccionador. Para empezar, explica, el crecimiento socioeconómico produce pluralización política, es decir, hace más complejas y diversificadas a las sociedades, con mayor número de actores, más numerosas demandas y más diversas interacciones; sin embargo, pluralización y democracia política no son la misma cosa. Si bien la democracia es una posible expresión institucional de un conjunto de factores, entre los que puede contarse la pluralización política, esta última puede traducirse de otra forma y generar regímenes no democráticos, ya que una mayor complejidad puede también abrir las puertas a una más inmanejable conflictividad.¹⁰

Según O'Donnell, «el autoritarismo político y no la democracia es el concomitante más probable de los niveles más altos de modernización en el contexto sudamericano contemporáneo».¹¹ Aquí la noción clave es la de «modernización», entendida –de acuerdo con Apter– como un proceso consistente en la penetración, en nuestras sociedades, de roles tecnocráticos e instituciones originados en y alrededor de las actividades industriales en las sociedades económicamente más avanzadas.¹² La relevancia de este concepto para nuestro caso se encuentra en que permite comprender que la sociedad venezolana, a pesar de su «antidesarrollo» –patentado en su actual crisis socioeconómica y política–, es, sin em-

Guillermo A. O'Donnell, *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós, 1972, p. 21.

Ibid., p. 22.

D. Apter, *The Politics of Modernization*. Chicago: The University of Chicago Press, 1965.

bargo, una sociedad altamente «modernizada», en la que coexisten múltiples y variadas manifestaciones de esos roles e instituciones propios de sociedades avanzadas.

Me refiero, para sólo citar dos muestras, a las decenas de miles de profesionales y técnicos que hay en el país, y que ocupan toda suerte de posiciones clave en la más amplia gama de actividades productivas, de investigación y servicios, muchos de ellos, además, entrenados y formados en el exterior, y que, por tanto, tienden a comparar a Venezuela no con otros países semejantes, sino —desfavorablemente— con las naciones avanzadas de Estados Unidos y Europa. Otra instancia singularmente importante de modernización en nuestra sociedad es la extensa, influyente y avanzadísima red de medios de comunicación —televisión, radio, prensa y otros— que cubre a todo el país y penetra en la inmensa mayoría de la población (92% de los hogares posee al menos un aparato de TV y 66% de la gente lee un periódico al menos una vez a la semana).¹³ En esto, también, Venezuela es una sociedad «moderna», aunque no «desarrollada».

El trasplante de roles e instituciones de sociedades desarrolladas a la nuestra es un fenómeno de gran relevancia, pues el hecho es que en Venezuela tenemos verdaderos enclaves de modernización —en la industria petrolera, de medios, ciertas universidades e institutos, empresas, etc.—, que conviven con un entorno que tiende a deteriorarse día a día. Los centenares de miles de individuos con esos roles tecnocráticos y actitudes y aptitudes modernas coexisten con un medio ambiente empobrecido, que les cierra caminos y que les aleja a pasos agigantados de sus expectativas.

O'Donnell explica que la expansión socioeconómica de las primeras etapas del populismo viene emparejada a una mayor activación política de diversos actores —incluidas las masas—, y en consecuencia: 1) aumenta el número de actores políticos; 2) crecen las demandas políticas; 3) se hace más sólida y extensa la base organizacional a partir de la cual se llevan a cabo dichos procesos.¹⁴ Como apunta Rey,

Dos son las principales contradicciones que van aumentando:

1) por un lado se acentúa la brecha existente entre un crecien-

13 Alfredo Keller, *Actitudes y demandas de los consumidores de comunicación*. Ponencia. Caracas, 1994 (mimeo).

14 Véase el resumen de Juan Carlos Rey, «Regímenes autoritario-burocráticos latinoamericanos», en *Problemas sociopolíticos de América Latina*. Caracas: Ateneo de Caracas-Editorial Jurídica Venezolana, 1980, p. 183.

te número de demandas y de activación política y las rigideces que para satisfacerlas proporciona el marco de la dependencia y la desigual distribución de recursos, y 2) aumenta también la brecha existente entre la creciente diferenciación que resulta de la aparición de nuevos roles, estructuras e instituciones y la falta de una adecuada integración entre ellos.¹⁵

Todo esto conduce a la situación calificada por Samuel Huntington como de «pretorianismo de masas», en la cual el juego político se torna más integral, y más demandas, formuladas por más actores políticos interrelacionados en formas más complejas, se enfocan sobre las decisiones gubernamentales, acrecentando la distancia entre demandas y desempeño social, así como la vulnerabilidad de gobiernos sobrecargados y acosados por las presiones y el desorden.¹⁶

La democracia populista, precisamente porque es un régimen político «incorporante» y no «excluyente», suma grandes masas a los mercados urbanos, masas con expectativas de consumo modeladas por las economías más avanzadas.¹⁷ Este proceso, por un tiempo viable, empezó a hallar severas limitaciones en países como Argentina, Brasil y Chile —y ahora en Venezuela— a raíz del deterioro de los términos de intercambio externo, del agotamiento de la etapa «fácil» de la sustitución de importaciones, de la carencia de una adecuada dinámica autosostenida de la economía y de «las presiones por mayor incorporación de parte de los sectores populares y medios, que tienden a aumentar las tendencias distributivas presentes en los regímenes populistas y a disminuir la capacidad de acumulación».¹⁸

La decadencia de la democracia populista termina por crear una «constelación de problemas» avasallante y asfixiante, situación en la cual

... difícilmente se puede mantener la coalición populista: el «juego pretoriano» se convierte en un juego imposible o sin salida, por falta de ganador. La tentación de cambiar, por consiguiente, las reglas del juego mediante la exclusión de algunos actores, es muy grande y pronto se forman coaliciones en tal sentido. La

Ibid., p. 184.

O'Donnell, p. 86.

Ibid., p. 72.

Rey, «Regímenes...», p. 182.

15

16

17

18

probabilidad de que surja un régimen altamente autoritario, con severas restricciones contra los actores que han quedado fuera de las coaliciones ganadoras, es muy grande. La nueva coalición ganadora no puede ir más allá de un acuerdo básico consistente en la exclusión de los sectores populares previamente activados, pues la heterogeneidad existente en su interior, como consecuencia de la diferenciación interindustrial, limita seriamente las posibilidades de acuerdos sobre políticas más específicas.¹⁹

Cabe tener en cuenta que O'Donnell publicó su libro en 1972, y que, por tanto, no pudo analizar la experiencia chilena bajo Allende y Pinochet. Allí también se produjo una crisis generalizada de la sociedad democrática, todavía más intensa—si es que ello cabe—que las de Argentina y Brasil en los años 1960. Ahora bien, el régimen autoritario-burocrático que emergió de las cenizas, luego del derrocamiento de Allende, sí pudo—sobre la base, claro está, de una férrea represión—llevar adelante un proyecto político y económico con cierta coherencia y homogeneidad, a elevados costos políticos y sociales.

Mucho interesa destacar, en relación con el tema venezolano, el siguiente párrafo de O'Donnell:

Si la alta modernización ha generado una situación de pretorianismo de masas, la evaluación de sus capacidades conjuntas por parte de quienes desempeñan roles tecnocráticos tenderá a influir en la formación de una coalición golpista en la que jugarán un papel predominante. Esta coalición intentará transformar el contexto social en formas que se suponen más favorables para la aplicación de la capacitación adquirida para y por el desempeño de roles tecnocráticos, y más conducentes a la expansión y creciente dominación política de los sectores sociales que esos roles han penetrado más densamente. El éxito de tal intento producirá la inauguración de un régimen político autoritario excluyente de la participación y las demandas políticas del sector popular.²⁰

19 *Ibid.*, p. 184.

20 O'Donnell, p. 99.

Es imperativo recordar que en Venezuela, los intentos de golpe de 1992 no obedecieron a la voluntad de una «coalición golpista» con la solidez y amplitud que ésta ha tenido en otras partes, pero sí fueron liderados por representantes de uno de los sectores más modernos de nuestra sociedad, es decir, las Fuerzas Armadas. El hecho de que —como anoté previamente en estas páginas— el «proyecto político» presentado por los golpistas del 4-F y 27-N de 1992 fuese bastante incoherente, superficial y primitivo, no es sino una más de las complejas paradojas que constantemente arroja nuestro tumultuoso devenir social.

No obstante, lo que me interesa destacar es que estamos ante analogías respecto al proceso venezolano que sólo el más miope dejaría de observar, y que se refieren a la combinación de: 1) el agotamiento evidente del esquema de «desarrollo» populista; 2) la agudización de la conflictividad social; 3) la sobrecarga de demandas y frustraciones sobre gobiernos acosados, y 4) el palpable desencanto y desesperanza de los sectores «modernizados» ante un panorama que no ofrece respuestas y que contrasta agudamente con sus expectativas.

De nuevo, es indispensable que precise dos puntos: en primer lugar, he pretendido poner de manifiesto una analogía entre la actual y previsible situación venezolana y situaciones diferentes acaecidas en otros marcos histórico-sociales. No estoy sugiriendo que el proceso venezolano necesariamente desembocará en un régimen autoritario-burocrático; de hecho, pienso que si bien ello es posible, no le concedo la más alta probabilidad dentro de la gama de escenarios hacia adelante, escenarios que discutiré posteriormente. He creído de interés hacer esto ya que los conceptos expuestos por O'Donnell permiten profundizar hasta el mismo fondo de nuestra propia crisis, y así palpar lo muy grave que podrían ser sus consecuencias.

En segundo lugar, pienso tener claro lo indeseable que sería para la petrodemocracia ofrendar finalmente sus contradicciones en el espejismo de una dictadura. Esta última quizás se dé, pero en cualquier caso sería indeseable por sus elevados costos de toda índole. No obstante, de producirse un resultado semejante, no está de más recordar que —en lo que tuvo que ver con Brasil y Argentina, y también con Chile— «la incapacidad para decidir y ejecutar coherentemente cualquier política pública era uno de los problemas de las semidemocracias políticas preexistentes».²¹

El insatisfactorio desempeño democrático siembra las semillas del autoritarismo. De allí que la pregunta de O'Donnell: «¿Existen umbrales o puntos críticos a partir de los cuales quienes desempeñan roles tecnocráticos pueden sentirse suficientemente capaces y poderosos para tratar de “solucionar” los problemas sociales más generales y más salientes “a su manera”?»,²² tiene que ser respondida afirmativamente. Es una posibilidad, nada más, pero tampoco nada menos.

Sólo resta añadir esto: los regímenes autoritarios en nuestras naciones no han logrado sacarnos del subdesarrollo. Sin embargo, su desempeño deja una serie de huellas perceptibles, no solamente en cuanto a las heridas que abren, sino también en lo que tiene que ver con el nuevo «juego» que inauguran. En palabras de O'Donnell:

La dinámica de este proceso sólo se detiene cuando y si la cada vez más sesgada distribución de recursos económicos, sociales y políticos se convierte en un obstáculo insalvable para poder seguir mostrando un desempeño gubernamental «satisfactorio». Pero en este punto el régimen autoritario-burocrático ha logrado uno de sus objetivos fundamentales: ha transformado radicalmente el estado del contexto social existente al momento de su implantación. Consecuentemente, debe ahora enfrentar una constelación de problemas enteramente diferentes (en la cual gravitará pesadamente el inmenso costo social incurrido) y un nuevo «juego político» es iniciado.²³

El reto para Venezuela es evitar tocar fondo y no verse forzada a reiniciar el juego político después de sufrir tan duras experiencias. ¿Lo lograremos? Quién sabe, pues, para citar de nuevo a Kissinger, «Un pueblo puede estar consciente de las consecuencias probables de una situación revolucionaria. Pero su conocimiento estará vacío si no puede reconocer una situación revolucionaria».²⁴ En ocasiones, como venezolano de hoy en día, presiento que el país se está enfrentando a una situación revolu-

22 *Ibid.*, p. 91.

23 *Ibid.*, p. 120.

24 Henry A. Kissinger, *Un mundo restaurado*. México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 421.

cionaria; pero se me ocurre que –posiblemente– no podré estar seguro de ello hasta que sea demasiado tarde.

Los escenarios posibles

Si ya es suficientemente difícil y exigente procurar conocer el presente, mucho más complejo –y, quizás, en cierto sentido presuntuoso– es intentar vislumbrar el futuro. Semejante desafío intelectual se acentúa si se trata del porvenir posible a corto plazo (uno a dos años) de una sociedad en las condiciones de la Venezuela actual, sometida obviamente a una dinámica de «ultracambio» –en los términos empleados por Dror–,²⁵ es decir, a transformaciones aceleradas e imprevisibles, que la sujetan a una dinámica nerviosamente incierta y constantemente propensa a salirse de los esquemas «normales». La nuestra es una sociedad que parece dispuesta a continuar arrojando, en el corto y mediano plazo, una continua sucesión de sorpresas, lo cual complica extraordinariamente las posibilidades de entrever lo que nos deparan los nuevos tiempos.

Ya David Hume, hace dos siglos, nos alertaba sobre las limitaciones de nuestro conocimiento, llegando a la conclusión de que un análisis epistemológico de lo que pretendemos conocer revela que no existen motivos racionales o bases ciertas para nuestros juicios; no tenemos, en síntesis, un criterio último y cierto para determinar cuáles de nuestros juicios acerca de áreas cruciales del conocimiento humano son verdaderos y preferibles a otros.²⁶ Si esto es así, conviene adoptar una actitud de sano equilibrio y de ponderación cuando pretendemos divisar el curso de eventos sociales sujetos a la influencia de múltiples y complejas variables.

A lo anterior se añade el hecho, estudiado en detalle por los analistas de inteligencia militar, de que las «señales» acertadas acerca de lo que puede pasar llegan a nuestro entendimiento a través de, y recubiertas por, filtros de «ruido», es decir, por un *background* de informaciones irrele-

Yehezkel Dror, *Ventures in Policy Sciences*. New York: Elsevier, 1971, pp. 95-221.

Sobre este tema, véase mi libro *La sorpresa en la guerra y la política*. Caracas: Panapo, 1992, pp. 33-46.

25

26

vantes o distorsionadas que oscurecen, confunden o sumergen aquellas otras señales que apuntan en dirección correcta.²⁷ En nuestro medio, en estos tiempos turbulentos, el «ruido» proviene desde incontables fuentes: medios de comunicación entregados a la explotación del escándalo, predominio de los rumores, informaciones ambiguas y contradictorias, presión inagotable de noticias confusas, todo ello envuelto por los prejuicios de la cultura de izquierda que adereza la visión del mundo de la población de acuerdo con sus dogmas favoritos.

En este sentido, hay que tomar igualmente en consideración que en el análisis de los fenómenos sociales juegan papel primordial los «paradigmas» o esquemas conceptuales que definen el marco de la investigación. Estos esquemas conceptuales y suposiciones analíticas son componentes indispensables en el arsenal teórico del investigador; no obstante, es importante sacarlos a flote —hacerlos plenamente conscientes— y evitar que se hagan inflexibles, pues bien puede ocurrir que si una información novedosa tiende a cuestionar teorías y esquemas preestablecidos, la resistencia al cambio encuentra razones suficientes para obstruir y bloquear aspectos que chocan con los esquemas conceptuales vigentes.

Es común, en otras palabras, la tendencia a cerrar prematuramente los canales cognoscitivos, a rechazar información novedosa y a tratar de asimilar la nueva información dentro de esquemas preexistentes. Esta tendencia es mayor mientras más ambigua es la información, más confiado se encuentra el investigador acerca de la validez de sus teorías y más intenso es su compromiso con los esquemas vigentes. A veces uno tiende a ver lo que espera ver, y en ocasiones uno tiende a ver lo que quiere ver.²⁸

Estas reflexiones vienen al caso en relación con el presente estudio, en particular cuando llegamos al punto de tratar de visualizar el rumbo que puede tomar la democracia venezolana en los próximos tiempos, por tres razones principales, que ahora recapitulo: 1) Conocer el presente es de por sí difícil, y lo es más intentar entrever el futuro. 2) Las «señales» que a diario recibimos sobre el curso de los eventos nos llegan recubiertas por un manto de «ruido» distorsionador y confuso. 3) Los intentos de divisar lo que puede ocurrir no están a salvo de la influencia de esquemas conceptuales que en mayor o menor medida enfocan la atención del investigador en determinados aspectos salientes en lugar de otros.

27 *Ibid.*, p. 54.

28 *Ibid.*, pp. 49-53.

Dicho todo esto, debo sacar a flote las premisas clave de mi paradigma conservador, que —así confío— ha estado al menos implícito a lo largo de mi argumentación en este estudio. En primer término, parto de la premisa —para citar otra vez a Kissinger— de que el problema fundamental de la política «no es el control de la maldad sino la limitación del puritanismo».²⁹ No creo en el radicalismo político ni en las revoluciones; no creo en las cruzadas moralizantes, y pienso que muchos en la petrodemocracia, que intentan vestir los ropajes de castos e intachables ductores de la virtud republicana, no son otra cosa que impostores. No creo en los mesías ni en los «salvadores de la Patria».

En segundo lugar, no espero mucho de la naturaleza humana. Creo que la política no es territorio apto para el idealismo, sino para un equilibrado andar hacia adelante a través de reformas bien pensadas y cuidadosamente ejecutadas. La utopía y el puritanismo son las semillas de las tragedias políticas.

En tercer lugar pienso que, con todos sus defectos, hay que defender un régimen democrático en Venezuela, e intentar en lo posible, mejorarlo, sobre todo en lo concerniente a establecer un verdadero Estado de Derecho, pues lo que hoy tenemos en el país por tal no es más que una farsa, una simple charada, un triste y penoso sainete.

Veo por tanto el futuro en función del imperativo de contener las tendencias anárquicas y dictatoriales que se mueven en el seno de nuestra sociedad, preferiblemente a través del sostenimiento de un sistema político libre. Percibo a esta democracia —repito, con sus defectos y a pesar de ellos— como un muro de contención que debe ser apuntalado, pues Venezuela corre altísimos riesgos de que esa represa se agriete definitivamente y se desborde un torrente incontenible, que nos podría ahogar a todos.

No obstante, y por todo lo dicho en este estudio, pienso que los chances de lograr ese apuntalamiento y avanzar en el mejoramiento de la democracia son muy escasos. Mis puntos de vista sobre el camino que puede tomar el país en los próximos tiempos están marcados por el pesimismo. Desearía equivocarme, pero tengo que expresar mis opiniones con franqueza.

Son básicamente cuatro los escenarios que considero posibles para la evolución futura de la democracia venezolana, y los enumero en función de su menor a mayor probabilidad:

- 1) El escenario revolucionario.
- 2) El escenario del golpe militar (en dos variantes: «bolivariano-fundamentalista» y «de derecha»).
- 3) El escenario cesarista.
- 4) El escenario del desangramiento de la democracia o de la conflictividad endémica («salir del paso»).

Rechazo de manera categórica, por ingenuo y superficial, el escenario optimista, que reedita la «ilusión lírica» sobre la severamente herida petrodemocracia.

Es interesante constatar en los únicos dos estudios recientes que conozco sobre el tema de los escenarios probables para la democracia, que ninguno de ellos toma en cuenta la posibilidad de una revolución en Venezuela.³⁰ Sin embargo, el hecho es que sí podría haberla, entendiendo por «revolución» un cambio radical del sistema político, motorizado por un amplio movimiento de masas, que sustituya no solamente el actual régimen democrático sino también el existente sistema de posicionamiento social y económico de los diversos actores y sectores del país.

Insisto: creo que se trata de un escenario poco probable, debido a tres razones principales: 1) El temor de las masas a la violencia generalizada y la consecuente represión que puede acarrear. 2) La ausencia de una «vanguardia» revolucionaria orgánica y con un proyecto coherente de izquierda, capaz de conducir un estallido social hacia un objetivo claro y de liderarlo con perspectivas de victoria definitiva. 3) La fortaleza de la reacción militar —y de los Estados Unidos— ante la posibilidad de otra Cuba, o de otro Irán, en Venezuela.

Hace casi un año, en un artículo de prensa, esboqué una analogía entre el proceso iraní hasta el triunfo de Jomeini y la actual situación venezolana.³¹ Destaqué entonces cinco temas básicos: 1) El choque cultural de un proceso brusco de modernización económica sobre una sociedad esencialmente «tribal» como la nuestra (en el sentido que Popper da al término),³² es decir, una sociedad basada en el proteccionismo, el corporativismo, las solidaridades subsidiadas, el temor a la competencia y el miedo a la libertad por parte de los individuos. 2) La polarización

30 Me refiero al estudio de Jennifer McCoy, «Venezuela: ¿Crisis de confianza?», en Serbin et al., eds., *Venezuela: La democracia bajo presión*. Caracas: Nueva Sociedad, 1993, y al estudio encargado por PDVSA, titulado *Escenarios nacionales a mediano y largo plazo*, junio de 1993.

31 A. Romero, «Venezuela y la analogía iraní», *El Diario de Caracas*, Caracas, 17 de agosto de 1993.

32 Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies*, vol. 1. London: Routledge & Kegan Paul, 1969, pp. 171-183.

aguda de la sociedad. En Venezuela, la mayoría es pobre y atrasada, y una decreciente minoría disfruta de las posibilidades efectivas de acceder a la modernización. Esa polarización de recursos no se traduce, no obstante, en polarización de expectativas, pues de hecho la mayoría de los venezolanos, no importa cuál sea su condición social, sigue alimentando expectativas más o menos similares en cuanto a aumentar rápidamente su calidad de vida, objetivo improbable en vista de las circunstancias imperantes y previsibles. 3) La radicalización de amplios sectores y el fundamentalismo ideológico. Ya para 1992, al momento de los intentos de golpe, el país se había radicalizado en contra de las estructuras vigentes, adquiriendo de paso un compromiso psicológico con cualquier opción, incluyendo la violencia, que ofreciera alternativas a lo existente. Esa radicalización incluye también a buena parte de la clase media, así como a un nutrido grupo de intelectuales que han dado legitimidad a los golpes. 4) La conversión de un líder (el Sha en Irán, CAP entre nosotros) en objeto de todos los odios y en chivo expiatorio de todos los males. 5) El recurso a un gobierno provisional y la ilusión del bonapartismo (o cesarismo) como salida a la crisis.

Así como existieron y existen analogías con el caso iraní, también hay relevantes diferencias: en nuestro medio el factor religioso no juega papel central, y no tenemos un Jomeini que pueda canalizar las energías de masas en función de ese tipo de fundamentalismo ideológico. La izquierda insurreccional (al estilo de Bandera Roja) tiene poca importancia; la izquierda democrática, representada por el MAS, no pareciera tener interés en revoluciones. La Causa R, por su parte, es un movimiento sin norte definido, con elementos fascistoides en lo ideológico y organizativo, lleno de tensiones internas y tal vez temeroso de su vertiginoso crecimiento. Su porvenir es muy incierto y no luce todavía como un verdadero actor revolucionario, con el potencial para darle una voltereta a la historia nacional.

A pesar de lo dicho, un escenario revolucionario no es del todo descartable para Venezuela. La historia podría darnos esa sorpresa.

El segundo escenario es el del golpe militar, que vislumbro en dos variables:

a) El golpe militar «bolivariano-fundamentalista»: este escenario podría resultar, o bien —en primer término— de un continuo deterioro de la democracia, de un desempeño pobre del gobierno y de su creciente impopularidad, arrojando como consecuencia alta conflictivi-

dad social; huelgas, paros, acciones violentas de calle en todo el país y la decisión de otro Chávez de «salvar a la Patria»; o bien –en segundo lugar– de un «golpe de mano» o de palacio (*coup de main*), más en frío, como el del 4-F.

Un golpe bolivariano-fundamentalista provendría de la oficialidad intermedia de las Fuerzas Armadas, quizás con la participación de algunos oficiales superiores (como ocurrió el 27-N), y podría tener consecuencias revolucionarias, dependiendo de un conjunto de factores, entre ellos el empuje real de masas y el grado de radicalismo ideológico de los cabecillas del golpe.

De nuevo, aunque de ninguna manera imposible, se trata de un escenario relativamente poco probable, por ahora, en parte por las razones ya expuestas en cuanto al escenario 1, en parte debido a que la audacia de un Chávez y un Arias Cárdenas no es cosa común, en parte debido a que los mecanismos de seguridad del Estado presumiblemente han mejorado, y en parte debido a que los altos mandos militares se han venido esforzando en restaurar la disciplina tradicional de la institución.

- b) El golpe militar «de derecha»: los motivos que podrían llevar a este desenlace son parcialmente similares a los mencionados para el escenario del golpe militar «bolivariano-fundamentalista». La diferencia estriba en que serían los altos mandos militares, de tendencia más conservadora, los que liderarían el golpe, imponiendo lo que un estudio encargado por PDVSA denomina una «dictadura ilustrada», «orientada a implantar un crecimiento económico acelerado, sostenido y sostenible [...] compatibilizando las acciones del mercado y del Estado en lo económico. El resultado es un bienestar social en lo material creciente, bajo un régimen político fuerte, que no permite que la sociedad se organice para defender sus intereses y menos si estas organizaciones presentan indicios de movilización política».³³

Nótese la contradicción entre, por un lado, la afirmación de que este escenario arrojaría un «bienestar creciente» (lo cual es obviamente un interés de la sociedad) y, por otro lado, la aseveración de que este régimen no permitiría «que la sociedad se organice para defender sus intereses». En todo caso el punto es secundario, y parece claro que lo que se tiene en mente es un régimen parecido al de Pinochet en Chile, que produjo

crecimiento económico y, en alguna medida, bienestar social a costa del aplastamiento de la libertad política.

Este escenario, aunque más probable que el del golpe «bolivariano-fundamentalista», encontraría fuertes obstáculos a corto y mediano plazo, tanto internos como externos, y difícilmente podría un régimen de este tipo sostenerse a menos que: a) surgiese como consecuencia de una anarquía generalizada y del clamor social por orden a cualquier costo, y b) contase con un proyecto político-económico coherente y de efectos positivos relativamente rápidos.

Si bien es éste el tipo de desenlace que plantea O'Donnell como probable para la crisis degenerativa del populismo (véase la sección anterior de este capítulo), lo cierto es que en Venezuela no hay «derecha» política, al menos por los momentos. No existe un movimiento político importante con ideas de derecha, ni siquiera conservadoras; los intelectuales, con pocas excepciones, son de izquierda, y los que no lo son pocas veces se atreven a calificarse abiertamente como «de derecha» y actuar en consecuencia. El empresariado está desunido, es usualmente proteccionista y acomodaticio. Los militares, por su parte, están sujetos a un tan intenso ritmo de rotación, y a una edad de retiro tan temprana, que pocas veces pueden asentar un liderazgo aun si poseen el instrumental ideológico para generar un proyecto político coherente. ¿Cómo puede haber un golpe de derecha si no existe una derecha política?

Claro está, en condiciones de descomposición acelerada y violenta del sistema, podría producirse el tipo de autoritarismo-burocrático que expone O'Donnell, con una alianza entre los altos mandos militares y los sectores tecnocráticos en el campo civil. No es imposible, pero, de nuevo, por ahora lo veo poco probable.

Cabe aclarar, de paso, que sería errado aparte de injusto identificar un pensamiento político conservador o «de derecha» con una propensión al autoritarismo. Al contrario, los verdaderos conservadores son celosos defensores de la libertad, entendida esta última como parte integral de un concepto de orden. Sin embargo, uso los términos con algo de flexibilidad, con fines prácticos y para facilitar la exposición de las ideas.

El tercer escenario es el «cesarista», que otros preferirían llamar «fujimorista», o tal vez «bonapartista». En este escenario el gobierno civil se hace crecientemente autoritario desde adentro y acaba por establecer un Estado de Emergencia, de acuerdo con las Fuerzas Armadas, limitando seriamente las libertades democráticas y gobernando por decreto, a ob-

jeto de afrontar la inmanejable «constelación de problemas» del populismo y de cortar nudos gordianos políticos y socioeconómicos, que no podrían ser resueltos en condiciones de normalidad institucional.

Conviene recordar que, al menos en teoría, una democracia puede ser cesarista y, sin embargo, continuar siendo democrática, pues lo esencial en la democracia es el respaldo de una mayoría relativa y no los límites del poder gubernamental (esta última es más una preocupación «liberal» que «democrática»).

Este escenario cesarista es abordado en el estudio de PDVSA y denominado como «caudillismo improvisado». Se le describe así: «Un desprestigio acentuado de los partidos lleva al [...] Presidente a desarrollar una estrategia de mando basada en su vinculación política directa con las masas, y un retorno al intervencionismo estatal populista en la economía».³⁴

A mi modo de ver este escenario es más probable que los dos previamente expuestos (revolución y golpe militar). Desde luego, no estoy atribuyendo al actual Presidente y su equipo la intención de llevarlo a cabo. Se trata simplemente de señalar que la dinámica política de estos tiempos puede con facilidad conducir a un creciente autoritarismo por parte de un régimen agobiado por los problemas y sujeto a la amenaza de una indetenible impopularidad.

No creo, sin embargo, que tal cosa suceda a corto plazo, y pienso que este gobierno hará todo lo que esté en sus manos para ganar un respiro, implementando medidas populistas que satisfagan a las mayorías. Pero más a mediano plazo, en un par de años a lo sumo, es casi inevitable que el deterioro de la economía se combine con la agudización de la conflictividad social y el antagonismo opositor, abriendo mayores perspectivas para el cesarismo.

Los escenarios del golpe militar —en sus dos variantes—, y del cesarismo, son lo que McCoy llamaría «el escenario pesimista», que ella describía así:

En este escenario las crisis económica y política se profundizarán y, o bien resulta electo un autócrata demagogo, o triunfa un golpe de Estado militar. Este escenario podría ser causado por la inercia o por una explosión social. La ruta de la inercia im-

plica que un estancamiento político continuo impide la firme capacidad de toma de decisiones que se requiere para enfrentar la carestía económica cada vez más profunda, e impedir el aislamiento total del Presidente en lo que resta de su mandato [...] El escenario pesimista implica que Venezuela todavía no ha llegado al fondo de su crisis, y que solamente después de que llegue a esos niveles surgirá la motivación necesaria para un cambio positivo y de significación.³⁵

Por supuesto, hay importantes diferencias entre los escenarios golpistas y el cesarista, en particular que este último tendría una carga de represión relativamente menor.

El cuarto escenario que propongo para el análisis es el del «desangramiento de la democracia», o «escenario de la conflictividad endémica», que no es otra cosa que la continuación de lo que hemos venido viviendo estos pasados años, sin rupturas bruscas y decisivas. Es lo que McCoy llama «salir del paso» o «escenario de la supervivencia»: «el sistema democrático sobrevivirá, pero no se afianzará ni será capaz de resolver los apremiantes problemas nacionales».³⁶

Considero que éste es el escenario más probable de evolución de la democracia venezolana en los tiempos venideros: proseguirá el empobrecimiento de las mayorías; los servicios públicos seguirán su ruta descendente; la economía decrecerá o crecerá poco, de forma poco sana; aumentará constantemente la inflación así como la devaluación de la moneda; la conflictividad social pendulará sistemáticamente de acuerdo con los meses del año; la política se moverá entre la apatía, la torpeza y el escándalo, y los medios de comunicación mantendrán sus altos niveles de *rating* transmitiendo al público las tumultuosas incidencias de esa especie de circo imprevisible que ha generado la decadencia del populismo en Venezuela.

Conviene aclarar, por cierto, que si bien el conflicto es parte integral de la sociedad abierta, libre y democrática, acá no me refiero al grado de conflictividad «normal» que en líneas generales existió en Venezuela cuando el petróleo «daba para todo», sino al nivel mucho más elevado y crítico de conflictividad que hemos experimentado a partir de 1989.

McCoy, p. 25.

35

Ibid., p. 24.

36

¿Pesimista?, sin duda; ¿equivocado?, los hechos darán la respuesta. Lo que ciertamente no creo que nos aguarde es un «escenario optimista»,

... en el cual el continuo desarrollo de la sociedad civil impone desde abajo la autotransformación de los partidos políticos y del estilo de toma de decisiones en modelos más descentralizados y participativos. En este escenario un pacto social reestructurado entre el Estado y la sociedad minimizaría las expectativas de los ciudadanos en cuanto a lo que el Estado puede proveer. Así mismo, un proceso de toma de decisiones más consultivo incorporaría a otros actores sociales y económicos al diseño de las políticas públicas, y abriría un debate sobre una estrategia de desarrollo a largo plazo que pueda enfocar tanto el crecimiento económico como las exigencias sociales.³⁷

Confío en que todo lo dicho hasta ahora en este estudio sea suficiente para que el lector sepa por qué creo que semejante escenario optimista es fruto de los buenos deseos, más que de un análisis descarnado de la actual realidad venezolana, así como de las causas profundas de la situación imperante. Semejante optimismo no es sino una reedición de la «ilusión lírica» respecto a la democracia populista, sólo que en circunstancias muchísimo menos favorables para tales vuelos de la fantasía.

Lo que probablemente nos espera, en síntesis, es el desangramiento de la democracia, que puede o no tomar años, hasta que se abran nuevas perspectivas para bien o para mal.

Consideraciones finales

El día 3 de marzo de 1994 (escribo esto diez días más tarde), apareció en el diario *El Universal* de Caracas un extenso artículo de Alberto Quirós Corradi, conocido hombre público y destacado representante de lo que

podríamos denominar la élite tecnocrático-política del país. En este esclarecedor análisis de los escenarios que a su modo de ver se abren para Venezuela en los próximos tiempos, Quirós Corradi alcanza la conclusión, aunque no la haga totalmente explícita, de que lo menos indeseable para el país sería una «sacudida institucional» o «dictadura civil», con apoyo popular, político (restringido) y militar.

Según Quirós, en este escenario, el actual presidente de la República,

... cuanto antes convoca a los partidos políticos y a las instituciones de poder de la sociedad civil y pide (exige) poderes extraordinarios para gobernar por decreto por un tiempo determinado. Durante ese período se suspenderán las actividades del Congreso Nacional y algunas garantías constitucionales. Las Fuerzas Armadas, ante la disyuntiva de tener que intervenir, a corto plazo, en forma represiva para mantener el orden público, que ya empieza a deteriorarse, o tomar por la fuerza el poder, deciden apoyar al presidente de la República en su solicitud. Por lo menos uno de los tres partidos de la oposición aprueba la medida. Caldera convoca entonces a un gobierno de entendimiento nacional, en el cual son llamados, y están dispuestos a colaborar, los mejores. Se abre un paréntesis de espera por parte de la población, que ahora siente que puede ser gobernada con eficiencia y pulcritud, dadas las condiciones morales del Presidente y la variedad de tendencias ideológicas y sectores representados en el Gabinete. No todo es siempre armonía y, probablemente, no se produzca un milagro de recuperación económica. Pero la ausencia de presiones partidistas y la profesionalización del Gabinete tenderán a la elaboración de un presupuesto nacional sincero, a una reducción de la inflación y del déficit fiscal mediante la toma de medidas urgentes y, a veces, desagradables y no populares. Pero esas son, precisamente, las medidas necesarias para empezar a resolver la crisis.³⁸

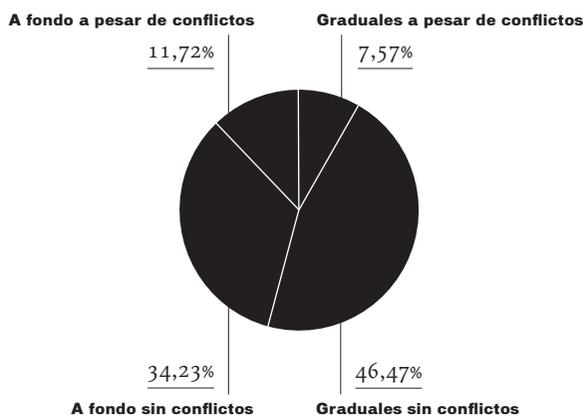
Estoy seguro de que al lector de los párrafos citados no se le escapa que, despojado de artificios, lo que dibuja Quirós se asemeja en lo esencial al «escenario cesarista» descrito en la sección previa de este estudio.

Estoy seguro, también, de que Quirós lo plantea como «salida» con las mejores y más patrióticas intenciones. Quirós señala varios de los principales obstáculos que se interponen en el camino de esa dictadura civil, y se interroga si, después de establecido el nuevo sistema, el Presidente y los «mejores» tendrán «el talento y el aliento de largo plazo necesarios para imponer los cambios institucionales requeridos».³⁹

Quirós no explica, sin embargo, quiénes son los «mejores» y qué es lo que realmente piensan sobre el destino que debería seguir Venezuela. Como es sabido, la idea de un gobierno de los «mejores» se esboza inicialmente en la *República* de Platón, con base en la figura del «filósofo-rey». En ese caso, los «mejores» son los que, supuestamente, más saben; en el escenario de la dictadura civil cabe pensar que los «mejores» son los tecnócratas de que habla O'Donnell, cuya participación política directa indicaría la inauguración de un tipo de régimen burocrático-autoritario.

Algunas encuestas muestran que el público, en su mayoría, desea cambios profundos en la vida nacional, pero a la vez quiere que éstos tengan lugar con un mínimo de conflictos.

GRÁFICO 1
DESEABILIDAD DE LOS CAMBIOS



F U E N T E

Data Sigma, noviembre de 1993.

Los datos del gráfico 1 no son sorprendentes. Difícilmente la gente hace explícita una vocación de violencia o conflicto, y busca la paz y la se-

guridad. No obstante, el proceso venezolano nos arrastra hacia cada vez más agudas manifestaciones de conflicto y lucha social. Estamos transformando la política democrática, que en su esencia exige un control de los conflictos y consideración y respeto hacia los oponentes, en un terreno de confrontaciones totales e implacables.

En palabras de García-Pelayo, estamos llevando la pugna política venezolana a un grado de totalización e intensidad en el cual se sustituye la perspectiva racional por la perspectiva mítica,

... I) para hacer del adversario el compendio de las peores cualidades de todo orden: el enemigo es malo, innoble, odioso, feo, torpe [...] inmoral, falaz, etc., y como contrapunto necesario puesto que somos su negación radical; II) para convertirnos nosotros mismos en el compendio de las óptimas cualidades; III) para generalizar esta bipolaridad –muy especialmente en momentos de fuerte tensión– hasta comprender dentro del campo adversario a todos los que no estén con uno mismo...⁴⁰

Dicho en otros términos, en nuestra actual política democrática se cumple el *dictum* de Carl Schmitt, según el cual el elemento característico de la política es la distinción entre «amigo» y «enemigo».⁴¹ Venezuela se está convirtiendo en una nación de enemigos.

Dice también García-Pelayo que:

Una crisis está constituida por la pérdida de vigencia de los supuestos [...] sobre los que se asienta una sociedad y, por eso, si se quiere comprenderla es necesario ir a las raíces, raíces que se extienden en el suelo de la historia [...] por eso, no es un azar que debamos a los grandes momentos de crisis un florecimiento del pensamiento histórico [...] en las épocas de crisis el hombre se siente inseguro, se halla desorientado y, en consecuencia, el primer problema que se le plantea es saber dónde está. Lo único que puede darle una respuesta es la historia...⁴²

Manuel García-Pelayo, *Obras completas*, vol. III. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 2744.

Carl Schmitt, *El concepto de lo político*. Madrid: Alianza Editorial, 1991, pp. 49-106.

García-Pelayo, *Obras completas*, vol. III, pp. 2494-2495.

40

41

42

Por extraño que parezca, si bien estos tiempos venezolanos son obviamente tiempos de crisis, no se percibe todavía un «florecimiento» ni del pensamiento histórico ni de ningún otro tipo de reflexión verdaderamente profunda sobre la turbulencia que nos acosa. Al contrario, la simple lectura de las páginas de opinión de la prensa pone de manifiesto una gran pobreza intelectual, el ánimo hostil y el propósito destructivo y revanchista que en conjunto hacen de estos momentos unos de los más desafortunados y desalentadores que podamos recordar los hombres y mujeres de mi generación.

Ignoro sinceramente si seremos capaces de salir del atolladero al que nos han llevado la miopía y la insensatez políticas, combinadas con el agotamiento del maná petrolero. Lo que sí es claro es que existe un enorme vacío de liderazgo en el país, en todos los órdenes. Predomina una cultura del odio, de la denuncia, de la acusación, del señalamiento, de la persecución y de la destrucción de hombres e instituciones. Los medios de comunicación, tal vez sin proponérselo deliberadamente, se dedican de modo sistemático a estimular esas tendencias de odio social y de cuestionamiento radical a los pilares básicos del «pluralismo tutelar», sin ofrecer ninguna opción positiva hacia adelante. Se cuece un caldo oscuro e indigerible para la alimentación de un pueblo que sin duda sufre la crisis, pero sólo la observa a través de tinieblas.

El nuevo gobierno, que apenas comienza, ha entrado a la palestra dando tumbos. Difícilmente el plan fiscal presentado en marzo por el ministro de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez, será capaz de amortiguar la caída libre de una economía enferma como la nuestra. Se presume que este nuevo «paquete» fiscal generará alrededor de 400.000 millones de bolívares adicionales para las arcas del Estado; sin embargo, estimaciones conservadoras calculan el «hueco» fiscal restante en no menos de 700.000 millones. También anunció el gobierno un recorte del gasto de unos 105.000 millones, pero las demandas de gasto extra no presupuestado son tres veces superiores. De paso, es muy probable que las estimaciones acerca de la baja en los precios petroleros este año, así como en la recaudación del impuesto sobre la renta interna, se hayan quedado cortas, todo lo cual conforma un cuadro peculiarmente negativo. Este nuevo «paquete» es un remedio de escasa potencia, al que no pueden augurársele, lamentablemente, mayores éxitos.⁴³

Entretanto, prosigue la política de las paradojas: salen en libertad, convertidos en héroes, y en ocasiones recibidos por el propio presidente de la República, los líderes de los intentos de golpe de Estado de 1992. Nadie reclama, nadie recuerda a los muertos del canal 8 de televisión, o a los soldados acribillados cerca de Miraflores. El famoso «hombre de la franela rosada», que apareció en las pantallas de tv el 27-N blandiendo un fusil y amenazando al país entero con la violencia, anda libre por gracia del Presidente. Nadie recuerda al vigilante desarmado de Venezolana de Televisión, brutalmente asesinado mientras pedía clemencia de rodillas... La sociedad calla, y los periódicos exaltan a los golpistas como héroes.

La democracia venezolana está huérfana. Los hechos así lo están demostrando, y posiblemente no falta demasiado tiempo para que la evidencia no deje lugar a dudas. La dinámica de la irracionalidad y la marcha de la decadencia se aceleran a pasos agigantados. Los partidos políticos tradicionales siguen deteriorándose, y los nuevos movimientos son incapaces de articular cualquier proyecto que no sea el de la denuncia metódica de todo y de todos. Copei y AD, dejados atrás por una insensatez que no pertenece a su naturaleza, ceden paulatinamente a la tentación de imitar a los radicales, o en todo caso guardan silencio, chantajeados por los vociferantes y puritanos de pacotilla que pululan por todas partes, convertidos en grandes figuras por los medios de comunicación social.

La imagen del país que algunos soñamos, de un país básicamente similar a las democracias avanzadas de Europa y el norte de América, se diluye y desgarras más y más en el horizonte, dejando un sabor amargo en la boca y la infinita decepción de las esperanzas perdidas...



Aquellos polvos trajeron estos lodos

El Universal, 23 de junio de 1998

Leí en alguna parte que los franceses se percataron de que estaban inmersos en una revolución varios años después de la Toma de la Bastilla. Tal vez nos ocurre algo semejante a los venezolanos de hoy. Tal vez aquí comenzó una especie de revolución en 1992, y sólo ahora se inicia la toma de conciencia histórica al respecto. Tal vez el panorama nacional que se vislumbra en los próximos meses lleve a su culminación ese proceso, cuyas hondas raíces y perdurable significado exigen tiempo para madurar en nuestro espíritu.

De comprobarse la conjetura esbozada, es decir, que atravesamos por tiempos revolucionarios, dos son los eventos que definieron su comienzo: el golpe de Chávez y su inmediata legitimación por parte de Rafael Caldera. En cuanto a lo primero, un ligero vistazo a nuestra historia revela que el ex comandante no hizo más que añadir un episodio adicional a la extensa sucesión de actos violentos que plagan nuestra existencia política. El caso de Caldera, por su parte, tuvo alguna originalidad, viniendo de tan prestigioso prócer de nuestra mitología republicana. Es obvio, a la luz que otorga el paso de los años, que Caldera justificó el golpe de Chávez en su famoso discurso televisado, contribuyendo así a adornar con aureola de virtud el zarpazo militarista.

Desde luego, los apologistas de nuestro primer mandatario sufren cuando escuchan semejantes señalamientos, pero no está mal que reciban un poco de amarga medicina. Más intragable se pone este aceite de ricino verbal cuando se les recuerda que, si aplicamos los mismos criterios entonces empleados por Caldera para minimizar la culpa chavista, otro golpe de Estado estaría más que justificado en las presentes circuns-

tancias, cuando la corrupción, el hambre, la mentira y la incompetencia gubernamentales se han enseñoreado de Venezuela. Caldera dijo: «No se le puede pedir a un pueblo hambriento que apoye la democracia». Si eso fue verdad en 1992, ¿por qué no también en 1998?

Resulta saludable traer a la memoria esos eventos, para no quedarse totalmente sin brújula ante lo que ahora ocurre y puede todavía ocurrir. Lo que resta es rogar que no pase lo peor y extraer algunas lecciones de lo acontecido. Por ejemplo, un nuevo gobierno que no aspire pasar cinco años en medio de la decadencia y la rabia, tendría a toda costa que buscar dos cosas destruidas por los virtuosos que ahora nos mandan. En primer término, es imperativo recuperar una sana idea de justicia. En segundo lugar, es fundamental desarrollar una política de amplitud y unidad entre los venezolanos.

De los muchos errores y fracasos que la historia imputará a Caldera y sus colaboradores, quizá lo más grave tenga que ver con la manipulación y degradación de la idea de justicia bajo su gobierno. En estos años *se corrompió la idea misma de justicia*. Las persecuciones y odios calderistas no se llevaron a cabo por justicia sino por venganza. Si alguna cosa acabó por desnaturalizarse en Venezuela, esa no es otra que el Estado de Derecho (o lo que del mismo quedaba). Un gobierno distinto debería procurar a toda costa el desarrollo de una política de unión, reconciliación y armonía entre los venezolanos. El actual gobierno ha actuado en función de dividir, de separar, de distinguir entre «buenos» (conmigo) y «malos» (contra mí), de escindir el país entre «amigos» y «enemigos», de pasar facturas y encerrarse en una trampa mental de rencores y pequeñeces. Venezuela requiere un período de reunificación y de canalización de esfuerzos conjuntos hacia un mejor futuro.

Como diría José Rafael Pocaterra, se me genera una «vasta carcajada» cuando escucho que el gobierno de Caldera logró «la paz social». ¿Qué significa semejante cosa?, me pregunto. ¿Acaso que no hayan bajado aún los pobres de los cerros a quemarles las casas a los habitantes de las urbanizaciones caraqueñas? No solamente hemos vivido cinco años de gran violencia social, traducida en brutal empobrecimiento para la mayoría de la población, sino que a ello se ha agregado la incontenible decepción de todo un pueblo que se sabe engañado por los «virtuosos», por los que ofrecieron una cosa en 1993 e hicieron otra en 1996, por los que ahora se aterrorizan ante la amenaza que enarbola el resentimiento de mucha

gente, que han colocado a Chávez donde se encuentra y se preparan a reclamar lo que consideran les pertenece.

De aquellos polvos de 1992-1993 surgieron los lodos que nos alcanzan este año de 1998, año pleno de incertidumbres y curtido de miedos. En tal marco político no merece la pena perder demasiado tiempo catalogando las torpezas del gobierno que agoniza, sumido en desilusiones. Sólo resta esforzarse para, en lo que sea factible, abrir puertas a un porvenir menos triste, menos hipócrita, más alentador para las nuevas generaciones.

¿Es que acaso hay élites en Venezuela?

El Universal, 7 de julio de 1998

En un reciente artículo de prensa, Ramón Piñango se quejaba con sobradas razones del cinismo de nuestras presuntas élites, que ahora —una vez que «los abandonados las abandonaron»— ponen sus esperanzas en la abstención electoral de los desposeídos. Comparto los puntos de vista expuestos con lucidez por Piñango. No obstante, quisiera ir a un paso más allá y plantear lo siguiente: en Venezuela no hay verdaderas élites; lo que tenemos son grupos de poder y privilegio, que es algo diferente. No se trata de un problema semántico sino de una cuestión sustantiva. El concepto de élite tiene necesariamente un contenido normativo y no meramente descriptivo. Las élites en una sociedad determinada son tales no sólo por el lugar especial que ocupan en razón de su posición socioeconómica, manejo del poder político y acceso al conocimiento; las élites son tales por la función que llevan a cabo en la sociedad.

En este sentido, puede hablarse de la existencia de élites cuando las mismas cumplen el papel de procurar activamente la adaptación de sus sociedades a los nuevos retos, generados por un entorno dinámico, así como la armonización entre los valores de la sociedad y las realidades que la definen. Las élites abren opciones creadoras al colectivo, opciones que se convierten en contextos institucionales estables. Todas las naciones modernas tienen en su seno grupos de poder y privilegio; no todas ellas, sin embargo, tienen élites.

El caso venezolano es paradigmático, ya que si algo nos ha faltado como pueblo a lo largo de nuestro devenir ha sido élites. En sus importantes estudios históricos, Germán Carrera Damas se refiere de modo sistemático a una «clase dominante» en el país, que entre otras cosas —a su manera de ver— ha utilizado el culto a Bolívar como «palanca para el control político del pueblo». Dudo mucho que podamos hallar a esa «clase» en la petrodemocracia. Lo que tenemos, insisto, son grupos de poder y privilegio (económico, social y político), cuya principal característica es su naturaleza parasitaria y la claudicación en su posible papel como élites.

Podría tal vez argumentarse que la generación fundadora de la petrodemocracia fue una élite en el plano político y en un sentido normativo. Igual razonamiento podría hacerse en relación con la que llevó a cabo la Independencia. En cuanto a esta última, y a pesar de los esfuerzos de Bolívar y otros próceres, la cruda verdad es que no lograron conducir el proceso hacia un esquema institucional que diese estabilidad y prosperidad al país, una vez concluida la guerra. Por otra parte, los fundadores del puntofijismo siguen siendo testigos de una ineludible realidad: su montaje institucional sólo funciona si el dinero del petróleo le alimenta; de lo contrario, no marcha. Dicho con otras palabras, el nuestro es un sistema político que se sostiene por razones utilitarias, no normativas. De allí que el Estado de Derecho sea menos importante que el cobro quincenal en la taquilla del gobierno.

El actual panorama nacional presenta inequívocos síntomas de la inexistencia de élites en la sociedad, y de la agudización del parasitismo y abandono de cualquier compromiso con el colectivo por parte de los grupos de poder y privilegio. De hecho, empezamos a comportarnos como los aterrorizados pasajeros de un *Titanic* condenado al naufragio. Ello se observa en el plano político y también en lo que respecta a los denominados «sectores productivos», con las contadas excepciones que siempre existen.

En lo que toca a los intelectuales, que también constituimos un grupo privilegiado por nuestro acceso al conocimiento, creo que una severa autocrítica está a la orden del día. Si bien es cierto que algunos han tenido el coraje de alertar sobre el peligroso rumbo de los tiempos, también es verdad que casi todos hemos sucumbido a lo que podríamos llamar *el chantaje democrático*. Deseo con ello manifestar el miedo que muchas veces experimentamos ante el camino que transitamos, miedo que impide

llegar lo suficientemente lejos en la crítica a este sistema político, no vaya a ser que contribuyamos a hundirlo definitivamente y sustituirle luego por algo todavía peor.

A pesar del miedo resulta inocultable que la petrodemocracia tiene vicios ya intolerables y que las cosas están llegando a un punto decisivo, un punto que exige cambios fundamentales en nuestro marco institucional y esquema económico. He intentado argumentar a favor de una ruta de cambios democráticos en paz. A estas alturas del juego, lamento admitirlo, tengo la impresión de que una alternativa semejante se desdibuja y debilita día a día. Sin élites, Venezuela se enfrenta a un porvenir desalentador.

Caldera: Anatomía de un fracaso

El Universal, 21 de julio de 1998

El ineludible fracaso de Caldera se traduce en términos sociales y económicos, pero sus raíces fundamentales son políticas. Precisar esto tiene importancia a objeto de extraer las lecciones adecuadas de estos cinco penosos años, y de ese modo evitar errores semejantes en el futuro. Es cierto que la gigantesca decepción que ahora experimentamos los venezolanos se sustenta en la constatación de la grave crisis económica que padece el país, así como de la fragmentación del tejido social a causa del empobrecimiento colectivo, el derrumbe de la educación, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Ahora bien, en buena medida el rumbo político que desde la propia campaña electoral de 1993 tomó Caldera, constituye la semilla primigenia de la patética decadencia en que culmina su gobierno, para desgracia de millones.

Caldera decretó su ulterior fracaso desde 1992, cuando trazó un camino de demagogia y odio. Su campaña electoral, como algunos advertimos entonces, se construyó sobre una oferta ilusoria, que implicaba necesariamente la ejecución de un programa populista. Además, Caldera formuló su sendero en función de la división entre los venezolanos, de la conversión de nuestra vida pública en un escenario de confrontación falsa y artificiosa de «virtuosos» y «villanos», que eran separados por su

adhesión o rechazo a un hombre que retornó al poder llevado de la mano del azar.

El año 1994 fue testigo de uno de los más oscuros, negativos y costosos desbordamientos de odio gubernamental que se haya visto en la Venezuela moderna. Las persecuciones se pusieron a la orden del día, los abusos, la arbitrariedad, la violación de los derechos de las personas y la exposición al escarnio público sin posibilidades de defensa de aquellos a quienes los dueños del Estado colocaban en su lista de retaliaciones. Durante ese tiempo el escaso imperio de las leyes que acá ha existido precariamente sucumbió ante los zarpazos de un poder casi ilimitado, que fue ejercido con criterio de venganza.

Adicionalmente, las atrasadas ideas económicas de Caldera y su equipo generaron, entre 1994 y principios de 1996, un deterioro tan severo del aparato productivo que no les fue posible nunca más levantar cabeza. El manejo torpe y posiblemente ilegal de la crisis financiera se convirtió en una especie de maldición, que todavía hoy persigue al gobierno. Casi cinco años después de esa crisis la banca sigue enferma, y la desconfianza se ha convertido en un virus crónico. La demagogia y el odio no cesaron luego del viraje económico de 1996. El daño estaba hecho y el curso posterior de los eventos, hasta el día de hoy, ha puesto de manifiesto que ese daño era irreparable y perseguirá a Caldera hasta el último día de su mandato y quizás de su vida.

Las lecciones de esta experiencia son claras e inequívocas. Sólo una política de unidad y reconciliación entre los venezolanos, una política desprovista de odios y de revanchismo, puede permitirle a un nuevo gobierno dar inicio a una etapa de reconstrucción nacional aun en medio de la severa crisis y el hondo malestar que deja como herencia el actual gobierno. La imperiosa necesidad de una política de esta naturaleza, es decir, de unidad y reconciliación nacionales, es precisamente lo que más temores me suscita con respecto a la candidatura de Hugo Chávez. En efecto, el candidato del MVR y otras agrupaciones en diversos sentidos repite la experiencia calderista, y en algunos aspectos la agudiza. Chávez también tiene una prédica de odio y retaliaciones, y su mensaje en materia económica está impregnado de elementos populistas tan anacrónicos como los enarbolados por Caldera en 1993.

La prédica chavista, al menos hasta ahora, no augura un rumbo de unidad, reconciliación y convivencia pacífica entre los venezolanos. Por el contrario, y al igual que Caldera, Chávez también divide a sus com-

patriotas en virtuosos y villanos, y su mensaje puede inevitablemente conducirlo a acrecentar las tensiones en una sociedad ya en extremo escindida. Por otra parte, cualquier programa populista en el terreno económico no hará sino profundizar el proceso de empobrecimiento que aqueja a la gran mayoría de la población, dificultando a su vez cualquier alternativa de recuperación futura.

Si el actual gobierno de Caldera estuviese más lejano en el tiempo, sería quizás comprensible que olvidásemos las lecciones que del mismo se desprenden. Pero Caldera sigue allí, con su enorme fracaso sobre los hombros; podemos observarle con toda frialdad y evitar su camino de desaciertos. Con base en el populismo, las persecuciones políticas y los odios sociales no habrá gobierno exitoso posible. Ignoro si Hugo Chávez, quien en estos momentos comanda los sondeos de opinión, será capaz de entenderlo así, viéndose en el espejo de Caldera. Pero el espejo está allí y su contundente fracaso no debería dejar lugar a dudas.

¿Seremos capaces de admitir la verdad?

El Universal, 29 de septiembre de 1998

Las venideras elecciones, la hipotética constituyente y la gestión de un nuevo gobierno pueden marchar medianamente bien o atrozmente mal. Nada de ello, sin embargo, se compara en importancia a la cuestión central que enfrenta Venezuela en este tiempo decisivo: ¿Seremos o no capaces los venezolanos de comprender y admitir la verdad de nuestra actual condición? Esa verdad no pareciera ser otra que la siguiente: estamos culminando el siglo xx, y aprestándonos a ingresar al nuevo siglo, en medio de un severo fracaso nacional, a lo que se suma la patente realidad de que ya no es posible continuar viviendo del petróleo, y se impone un enorme esfuerzo colectivo, a largo plazo, para transformarnos, si pretendemos alcanzar un futuro mejor.

Me temo que esa verdad sigue siendo difícil de entender para muchos, y casi imposible de admitir para la mayoría. De allí que estemos luchando a brazo partido para evadirla, en esta ocasión, a través de la coartada de otra constituyente. No me cabe duda de que, en términos de su signi-

ficado histórico profundo, el espejismo constituyente es una forma de evasión, un intento de escapar del problema fundamental que nos acosa y reclama nuestra respuesta. Ese problema no tiene que ver con ninguno de los asuntos generales y abstractos de naturaleza político-jurídica que han esbozado los diversos promotores de la constituyente. Ese problema tiene que ver con la imperiosa necesidad de dismantelar la podrida armazón del populismo, despertar a la realidad del mundo globalizado y colocar a la sociedad y economía venezolanas, sin disfraces y engaños, ante el reto de cambiar radicalmente en la dirección de la productividad y la competencia.

Todo lo que nos aleje de ese propósito clave no será más que fuegos de artificio. *Nuestro principal desafío es de adaptación*, en primer término al hecho ineludible de que el petróleo ya no es capaz de sustentarnos; en segundo lugar a la verdad inocultable de que el resto del mundo no va a esperar por nosotros. O respondemos al reto, o continuamos avanzando por el rumbo de empobrecimiento que nos agobia. Nadie, ninguna de las personas que agita la bandera constituyente, está focalizando el problema acá esbozado. Nos hablan de fórmulas etéreas de reforma político-institucional, quizás útiles para complacer nuestro apego al formalismo jurídico y posibilitar que algunos «próceres» satisfagan sus ansias de pronunciar discursos. Son, no obstante, fórmulas totalmente insuficientes para confrontar a los venezolanos con la dura e inexorable verdad con que culminamos el siglo. Nadie, ninguno de los que procuran algún tipo de liderazgo en estos tiempos decisivos está aclarando esa verdad, tal vez porque intuyen que millones de venezolanos no desean escucharla y prefieren refugiarse en la sed de revancha y la seducción de los espejismos.

Seguimos huyendo y para ello recurrimos a la constituyente, una fórmula político-institucional decimonónica. Resulta triste contemplar a Venezuela en su actual coyuntura histórica. No le faltaba razón a Picón Salas cuando sostuvo que nuestro país ingresó al siglo xx en 1936, y tampoco es insensato sostener que por el camino que llevamos entraremos también al siglo xxi con décadas de atraso, tiempo que tal vez podría tomarnos admitir la verdad que nos acorrala.

Es deplorable que el país haya caído en la trampa de concentrar el debate en torno a un mecanismo que en lugar de enfrentarnos con la verdad, funciona como instrumento para alejarse de ella. La propuesta inicial del chavismo sobre la constituyente no fue sino una manera de ocultar la au-

sencia de un programa de gobierno, ausencia que se hace cada día más evidente, y de evadir respuestas ante las apremiantes exigencias de la crisis nacional. Desafortunadamente, a la coartada chavista se vienen sumando voces que añaden leña a la hoguera de confusión y escapismo que consume a la nación. Estamos permitiendo que las venideras elecciones tengan lugar sumidas en un casi total vacío programático, en medio de una temeraria ausencia de propuestas concretas y prácticas frente a una contundente verdad: ya no podemos seguir viviendo del petróleo; si no cambiamos continuaremos empobreciéndonos; no hay manera de salir adelante sino a largo plazo, pero hay que empezar ya y pensar de manera prioritaria en las nuevas generaciones. Venezuela no es especial ni «Dios es venezolano». Es esencial despertar del sueño populista; lograr, por ejemplo, que los niños vayan más días a clases, tener menos asuetos, ser más productivos, admitir la competencia, cultivar la libertad y el respeto a los demás, tomar la vida, el trabajo y las leyes más en serio. O lo hacemos, o proseguiremos la caída hacia el abismo tercermundista.

El retorno al futuro

El Universal, 13 de octubre de 1998

De ser ciertos los estudios de opinión que a diario leemos en la prensa, una gran mayoría de venezolanos ansía ardorosamente un «cambio». Podría decirse que cada elección tiene un tema dominante. Por ejemplo, la de 1988 tuvo como motivo clave la vuelta a la prosperidad ficticia de los «años locos» perecistas. Caldera, por su parte, se encargó de que la elección de 1993 tuviese lugar bajo el predominio del tema de la corrupción. Las de 1998 son las elecciones de la liquidación del pasado. Todo lo que huele a eso pareciera estar condenado a una muerte ignominiosa. El «cambio» es el nombre del juego. La paradoja del asunto, sin embargo, es que se trata de un cambio ilusorio, de un cambio hacia la nada, de un cambio que nace y fallece en sí mismo, pues en esencia lo que deseamos es reconstruir un nuevo pacto populista bajo la conducción de un gobierno dadivoso, protector y, si ello es necesario, autoritario. Los venezolanos,

en realidad, no queremos un cambio; queremos volver a ser los consentidos hijos del petróleo caro y los gobiernos complacientes. Los venezolanos, en realidad, estamos huyendo de la modernidad. No queremos matar el pasado; queremos retornar al pasado y a eso le llamamos «cambio».

El gran drama nacional es que no hemos aprendido nada de las dos más recientes experiencias gubernamentales. La gente votó por Pérez buscando la reedición del espejismo saudita de los años 1970. De allí que el experimento reformista haya naufragado tan rápida y decisivamente en medio del tumulto del inolvidable 27-F. ¿Neoliberalismo? ¿Modernización? ¿Competitividad? ¿Productividad? ¿Globalización? ¡Jamás! Los venezolanos nunca hemos votado por eso ni estamos dispuestos a hacerlo ahora. Caldera interpretó adecuadamente esta verdad, y de hecho hizo lo posible por ser consecuente con su mensaje y convicciones los dos primeros años de su mandato, con las catastróficas consecuencias de sobra conocidas. De los numerosos y graves errores que con justicia pueden colocarse encima de sus hombros, el más terrible ha sido su absoluta incapacidad para actuar como un «maestro» en el más elevado sentido de la palabra, es decir, como alguien dispuesto a extraer lecciones de la experiencia y transmitir las a los demás. Al contrario, Caldera desperdió miserablemente cinco años, dejándonos como único legado un mayor resentimiento popular y el deseo ya irreprimible de restaurar a como dé lugar el pacto populista gobierno-pueblo, así sea votando por la reencarnación de Maisanta. Los cinco años calderistas pasarán al basurero de la historia, legándonos como epitafio estas palabras: «No sirvieron de nada».

En la aspiración de reconstruir el pacto populista se encuentra la verdad más pura del chavismo, en su actual versión electoral. No significa otra cosa que el retorno abierto, franco y sin ambigüedades al pasado ilusorio de nuestros espejismos. No importa cuáles sean las ocultas intenciones del líder del movimiento; no importa que intente o no girar al centro político para reducir temores; no importa que de pronto haya comenzado a entender las realidades de la vida de este mundo globalizado y esté tratando de preparar el terreno para su posible gobierno, apuntalando algunos diques frente el caos que amenaza en el horizonte. Lo que realmente importa es que la gente está preparándose a votar contra el pasado por las razones equivocadas. No vamos a votar contra los desatinos de Pérez y Caldera; vamos a votar para que el nuevo Presidente nos coloque otra vez en medio del reconfortante sueño del pacto populista,

nos ratifique en nuestra plácida condición tercermundista y subdesarrollada, nos garantice un chorro de petróleo a buenos precios, subsidios, bonos, aguinaldos, asuetos y eso sí: nada de competencia, nada de meritocracia, nada de exigencias. Educación gratis, hospitales gratis, comida gratis, «derecho a la alimentación», a la vivienda, a la salud, al bienestar, al paraíso...

Lo del «cambio» es puro cuento. El problema, claro está, es el siguiente: ¿Cómo se las arreglará el próximo Presidente, sea quien sea, para hacer estallar la pompa de jabón del sueño venezolano? Caldera escogió el camino del circo: los banqueros, los chivos expiatorios, las persecuciones, el cierre de abastos y la prisión para «especuladores», las denuncias contra los empresarios «mafiosos» y toda la patética parafernalia de este mandato sin brújula y sin destino. ¿Y ahora? ¿Qué hacer ante el panorama que se vislumbra después de la borrachera decembrina? ¿Otro circo inútil de retórica, llamada «constituyente»? ¿Otra ronda de gestos sin concierto en pos de la nada? ¿Otro despliegue de idas y venidas, de silencios seguidos de explosiones? Lo del cambio es puro cuento: los venezolanos no queremos modernizarnos y le haremos pagar caro al que intente despertarnos del sueño populista. ¿Y qué de malo tiene? El tercermundismo puede ser comfortable. Todo depende de los precios del petróleo.

Hugo Chávez: Entre el mito y la tragedia

El Universal, 27 de octubre de 1998

El tipo de liderazgo carismático encarnado por Hugo Chávez tiene ventajas a la hora de competir electoralmente, pero sus debilidades se manifiestan cuando se trata de gobernar. Gracias a los orígenes de su popularidad (un acto de fuerza percibido por muchos como «heroico»), y a su imagen tan vinculada a un sentir muy extendido entre los venezolanos de hoy, Hugo Chávez ha adquirido una cierta aura mítica que le proyecta con indudable vigor hacia adelante. Pero ser un mito tiene sus costos. En términos políticos, durante el tiempo de las promesas y las expectativas, el carácter cuasi mágico de los liderazgos míticos les otorga poderes especiales. Mas llegada la hora de los hechos concretos, cuando los pue-

blos pasan de la excitación del triunfo a la sobriedad de los resultados, se hace cuesta arriba preservar la pureza del mito y comienzan a agudizarse las tensiones entre la realidad y la esperanza.

De allí que analizar la figura de Chávez requiera ir más allá del tema de sus presuntas «intenciones». Estas últimas pueden de hecho cambiar de un día para otro. Por mi parte, y puedo desde luego estar equivocado, creo que Chávez no es un ideólogo o un «ayatollah», comprometido con principios dogmáticos, sino —hasta cierto punto— un tradicional «hombre fuerte» latinoamericano, interesado sobre todo en la conquista y preservación del poder. Esto quiere decir que lo importante en relación con su figura política es la naturaleza de la dinámica histórica que le suscita y empuja. Se pregunta Esquilo en *Prometeo encadenado*: «¿Quién es el timonel, pues, del Destino?». Con seguridad, Chávez cree que es él quien dirige las fuerzas sociales que levantan el oleaje de su factible presidencia. Que se cuide, sin embargo, del «pecado de orgullo», sobre el que tanto nos alertan los grandes autores de la tragedia griega. ¿No será más bien el Destino el timonel de Chávez? ¿Y hacia dónde puede llevarle?

Una profunda y amenazante paradoja envuelve el fenómeno Chávez. Sin duda, millones de venezolanos ansían un «cambio» y ven en el militar rebelde el instrumento de su redención. Es probable que Chávez sienta que él representa el cambio. De lo que tal vez no se percata es de que esa masa que le aclama no quiere un cambio hacia algo distinto a lo que se vivió durante las etapas «buenas» de la democracia, cuando hasta la corrupción era tolerada, ya que para todos alcanzaba. De ese tiempo permanece en el inconsciente colectivo una impronta positiva, a la que se aspira retornar. Por tanto, la gente no desea que Chávez invente nada nuevo; la gente lo que quiere es que Chávez haga funcionar de nuevo el sistema populista de manera eficaz.

Recurro otra vez a Esquilo para expresar el punto, y lo hago porque pienso que hay algo de «trágico», en el más estricto sentido de la palabra, en el actual proceso político venezolano y en torno a Chávez en particular. Recordemos que la esencia de la tragedia consiste en la imposición ineluctable de un Destino no querido, o en el castigo a través de la realización plena de los deseos de los seres humanos, que luego descubren que lo que tanto anhelaban no era lo mejor.

Pregunta el coro en *Prometeo*: «¿No has reparado, acaso, en la insegura, débil capacidad de los humanos, a un sueño semejante?». ¿Habrà reparado Hugo Chávez en la naturaleza paradójica del sueño venezolano

actual, que se centra en el ansia de prosperidad fundada en el maná petrolero, en el cuidado del Estado protector y benefactor, en el ejercicio de la justicia arbitraria contra algún culpable, pues alguno debe haber que ha causado nuestros males?

Por ahora, la parte mítica del liderazgo chavista se mantiene a través de un discurso ambiguo y un juego de espejos, que esconden más de lo que revelan. Al respecto, Esquilo advierte que «no hay peste peor, te lo aseguro, que un discurso cargado de aderezos». Pero Chávez sigue su rumbo con inocultable fuerza mesiánica. Si alcanza su propósito, enfrentará muy pronto ese difícil momento en que el mito se confronta con una realidad indeseable y comienza a perder su magia. ¿Qué rumbo tomará Chávez si sale victorioso? ¿Será acaso desbordado por las fuerzas que hoy le impulsan? ¿Intentará controlarlas, y transmutar su liderazgo carismático en uno de tipo racional, procurando construir con base en el consenso? ¿Y qué ocurrirá si, y cuando, el jefe mítico descienda desde las cúspides del sueño a la cruda verdad de una sociedad escindida, que no podrá salir de abajo sino a largo plazo y ello asumiendo enorme voluntad, focalizada en el dismantelamiento del populismo? He allí el dilema de Chávez: su futuro se define entre el mito y la tragedia. En esos casos, casi siempre, los dioses son ciegos e implacables y juegan a su antojo con las pasiones de los mortales. Prometeo nos dio el fuego y un águila devoró sus entrañas.

N O T A

Las referencias al *Prometeo encadenado* provienen de: Esquilo, *Tragedias completas*. Madrid: Cátedra, 1996, pp. 459, 460, 467.

Caldera: El tiempo del desprecio

El Universal, 8 de diciembre de 1998

Es muy hermosa e impactante la breve y severa novela de Malraux, *El tiempo del desprecio*, publicada en 1935. Como siempre en el caso de su autor el título es clave. Y recuerdo en particular una frase: «Entre los políticos, el desprecio de los hombres es frecuente, pero disimulado». Los venezolanos estamos asistiendo al fin de una época. En tales situaciones son comunes las traiciones y prolifera el miedo. Estas pasadas tres semanas, previas al

acto comicial, el electorado fue testigo de un asombroso despliegue de pánico y deslealtad en nuestro patético escenario político, de un espectáculo que disipó los precarios restos de credibilidad en las «élites» tradicionales. No debimos sorprendernos por lo que vimos; sencillamente, el desprecio soterrado a la gente, por parte de una dirigencia acosada, brotó a la superficie.

Punto Fijo ha muerto, y pareciera un acto de esos que califican como «justicia histórica» que este sistema de componendas entre «élites» mediocres haya perecido en manos de uno de sus fundadores, Rafael Caldera, cuya funesta herencia ahora recaerá sobre su sucesor, electo en medio de la decadencia. El juicio de la historia será muy duro con la ya triste figura de Caldera. Su legado consiste en una economía prácticamente en ruinas y más que nunca petrodependiente, una sociedad miserable, un Estado desvencijado, unas instituciones erosionadas hasta sus propias médulas y una extrema corrupción de la justicia, a lo que se suma un inmenso desencanto nacional.

Caldera culmina un siglo venezolano metido en el ojo del huracán del personalismo político, que él mismo auspició empujado por su enorme ambición y orgullo, por una vanidad que arrastró a su paso al partido que fundó, a sus generaciones de relevo y a lo poco que quedaba de control civil sobre la República, ahora entregada a los inciertos designios de un poder inevitablemente militarizado. Los apologistas de Caldera, los pocos que aún andan por allí, deberían recordar aquel fatídico 4 de febrero de 1992, cuando el presunto prócer de la democracia se dedicó a legitimar el golpe de Estado con argumentos espurios, faena que completó en el transcurso de su desventurado gobierno, un tiempo de desprecio, de desatinos y fracasos que ahora culmina como tenía que terminar: sumido en el rechazo masivo de los venezolanos.

La más dolorosa herencia de Caldera, no obstante, se manifiesta en la degradación de la política, realidad esta última que pudimos observar con lujo de detalles a través de la ópera bufa escenificada estos pasados días por nuestra «dirigencia civil». Lo que contemplamos no llega al nivel del drama o la comedia, y ni hablar de una verdadera tragedia. Se trató más bien de una especie de zarzuela decadente, con cantantes afónicos, vestuarios mezquinos y actores declinantes. Pocos salvaron una pizca de dignidad en este torbellino de impudor y descaro. Leí esos días la declaración de uno de los apologistas de Caldera, el actual ministro del Interior, afirmando que su alabado Presidente nos había legado la «paz so-

cial». Me permito recordar a nuestro premier unas frases de Burckhardt, en sus *Reflexiones sobre la historia universal*, referentes a la actitud de los pueblos durante épocas de pesadumbre, cansancio y deterioro: «Se toleran entonces con la mayor paciencia los gobiernos más lamentables y la gente se resigna a todo lo que poco tiempo antes habría provocado verdaderas conmociones». Eso fue lo que tuvimos a lo largo de estos cinco años de fracaso: no «paz», sino resignación.

El fin de Punto Fijo coincide con la bancarrota del calderismo y de todo lo que éste representa, de la hipocresía e impostura de estos años que todos desearíamos olvidar para siempre. Ignoro si Caldera y sus principales colaboradores serán pronto sometidos a los juicios que seguramente merecen. Pienso al respecto que ya Venezuela ha tenido bastante de retaliaciones, y que Caldera agotó, con sus odios y pequeñeces, buena parte de la energía que cualquier sociedad puede entregar a semejantes tareas.

No estamos presenciando el principio del fin, sino el fin del principio. El tiempo del desprecio, iniciado en 1992 y alentado cinco años por el calderismo, sigue con nosotros. Es un tiempo revolucionario, que exigirá grandes esfuerzos en defensa de la libertad, del adecentamiento de la democracia y de la vigencia de la constitucionalidad. Al nuevo gobierno hay que desearle éxito, aunque dudemos de sus intenciones y propósitos. Una oposición a ultranza y ciega carece de sentido. Una oposición firme, equilibrada y sensata es imperativa. Ojalá que al menos los nuevos dirigentes sean capaces de demostrar que nada puede ser peor que el quinquenio de fracasos en que naufragó Rafael Caldera, arrastrando al país consigo.

El populismo militarizado en América Latina

El Universal, 22 de diciembre de 1998

Desde que la leí por vez primera me ha deleitado esta aseveración del obispo inglés Butler: «Todo lo que es, es así, y no alguna otra cosa; ¿por qué entonces tratamos de engañarnos?». Las actuales circunstancias venezolanas, sus raíces y perspectivas apuntan de manera clara hacia una

compleja y tensa experiencia de populismo militarizado, con las indispensables variantes criollas, pero a la vez similar en aspectos fundamentales a experimentos semejantes del cercano pasado latinoamericano. Esto es así y no de otra forma. ¿Para qué engañarse entonces?

El populismo militarizado se basa en una institución que por conocidas razones históricas es de las pocas que poseen solidez y continuidad, en medio del turbulento devenir de nuestros pueblos. El repetido fracaso de las dirigencias civiles para procurar la modernización de nuestras naciones, sostener democracias decentes y asegurar la prosperidad de la mayoría, genera una y otra vez el quehacer político de las Fuerzas Armadas, bien sea abierta o indirectamente. En este marco, es decir, el de la erosión de la democracia en manos de los civiles, la institución militar se incorpora al manejo del poder con dos resultados: por una parte, se crea a corto plazo la percepción de que la balanza social se reequilibra a favor de los intereses de las grandes mayorías (debe quedar claro que las percepciones no son realidades tangibles, pero funcionan como tales). Por otra parte, hay una misión de naturaleza estructural que consiste en cambiarlo todo para que todo siga igual en lo que corresponde a las dimensiones cruciales de la vida económica y social.

Dicho en otras palabras: lejos de acelerar nuestra incorporación a las grandes corrientes de desarrollo del capitalismo mundial, el populismo militarizado latinoamericano ha actuado en repetidas ocasiones como muro de contención y mecanismo estabilizador, pero pocas veces como instrumento modernizador. Así ocurrió, entre varios ejemplos, con el velasquismo en el Perú y antes con el peronismo argentino. El populismo militar es, en esencia, un intento de retornar a un pasado «orgánico» y hasta precapitalista, con una sociedad «armónica», sustentada en la autoridad de un poder que «coordina» el esfuerzo colectivo. El populismo militar no se ocupa de temas tales como productividad y competitividad, sino de constituyentes, nacionalismos, gestos rituales en política exterior y símbolos de unidad patriótica. El populismo militar siempre apela a una abstracta «voluntad del pueblo», interpretada y tramitada por un jefe, que ejerce autoridad pero no, en sentido estricto, liderazgo.

Esta última es una distinción clave, analizada por Heifetz en su magnífico libro *Liderazgo sin respuestas fáciles*. La autoridad y la influencia son un «poder conferido para desempeñar un servicio». El verdadero liderazgo, de otro lado, es un concepto normativo que implica influenciar a la comunidad para que enfrente sus verdaderos problemas, movilizar a

la gente para que aprenda otras formas de hacer las cosas y mejorar sus vidas, y elevarles de modo tal que sean capaces de adaptarse con éxito a los retos del entorno interno e internacional. En tal sentido, pienso que los venezolanos de hoy *queremos autoridad, pero no liderazgo*, porque no deseamos despertar del sueño populista del «país rico», la «distribución equitativa de nuestras inmensas riquezas», el «castigo a los corruptos que se robaron todo» y otros espejismos.

De allí que el tema constituyente sea tan peligroso; no solamente por las amenazas implícitas de una hegemonía tiranizante con disfraz democrático, instaurada a través de la prolongación del período presidencial y/o la reelección inmediata, sino por lo que este proceso significa en términos de desviar la atención de los venezolanos y alejarla de nuestros más apremiantes desafíos, que ciertamente no tienen que ver con las reformas constitucionales, sino con el gigantesco reto que significa la incapacidad reiterada de nuestra sociedad para producir y competir de manera tal que nos sea posible mejorar nuestros niveles de vida y garantizar un futuro alentador a las nuevas generaciones.

No queremos despertar; deseamos autoridad pero no liderazgo; nos reconforta la presencia de un jefe a la vez severo y consentidor y nos entusiasma la retórica de un proceso constituyente que de nuevo pone en escena nuestro espectáculo favorito: la creación de «repúblicas aéreas». No es atractivo el porvenir que se vislumbra.

El espejismo de la refundación nacional

El Universal, 5 de enero de 1999

En su lúcido ensayo sobre el llamado «mito del eterno retorno», Mircea Eliade analiza la concepción del tiempo de los pueblos arcaicos, y resalta la importante diferencia que distingue su visión de la correspondiente a la historia moderna de la humanidad. Según Eliade, es característica de esa etapa arcaica una imagen del curso del tiempo que de hecho se esfuerza por *abolirle*, por rechazar la historia así como la admisión de que un evento pueda considerarse irreversible. El hombre arcaico no conce-

de valor a la memoria histórica, y por el contrario intenta regenerar constantemente el tiempo, refundar su presente de modo sistemático y de esa manera garantizar una realidad siempre acorde con sus sueños.

Estoy persuadido de que los pueblos que se encuentran recurrentemente en trance de «refundarse» persiguen un espejismo, carecen de memoria histórica y, por supuesto, de instituciones sólidas, y en verdad buscan escapar de su presente pretendiendo que la vida siempre es reversible. Ese es, así lo pienso, el caso venezolano. Y ese es, desde la perspectiva que acá propongo, el espejismo constituyente que con conocida frecuencia se apodera de la imaginación nacional.

Se trata de un espejismo «fundacional» que pone de manifiesto tres cosas: en primer lugar, nuestra carencia de memoria histórica, realidad ésta que nos conduce a suponer que el pasado puede ser abolido y un nuevo presente ser creado por la voluntad de algunos, especialmente iluminados. En segundo lugar, la recurrente fiebre fundacional revela que somos una nación con un precario, débil y vulnerable andamiaje institucional, que a cada rato se deteriora y estremece, dejando el campo abierto para el ejercicio del poder personalizado y de la voluntad de los audaces. En tercer lugar, el espejismo fundacional consiste en un intento por *escapar de un presente ingrato y desagradable*, al cual se pretende suprimir mediante el expediente de un acto providencialista (ejemplo: una asamblea constituyente), dirigido a crear una «realidad nueva», pura y superior, que dejará atrás los males e inaugurará una época feliz. El odioso presente que hoy nos acosa se hará espejismo en la constituyente.

El «eterno retorno» de este tipo de experiencia de la historia venezolana se combina en esta ocasión con un caso particularmente agudo de aprendizaje político «patológico». Cabe recordar que, de acuerdo con la definición de Karl Deutsch, el proceso de aprendizaje político puede ser creativo si nos lleva a avanzar en nuestra capacidad de adaptación a los desafíos internos y externos, o patológico si por el contrario nos empuja a repetir los errores del pasado, sólo que acentuados en nuevas y más complejas circunstancias.

A mi modo de ver, el hecho indudable de que los autores de un golpe de Estado, a todas luces ilegítimo, violento y violatorio del ordenamiento constitucional, sean ahora los aclamados gobernantes del país, sin que sus acciones pasadas les hayan significado el más mínimo costo ético-político, constituye un patético ejemplo de aprendizaje patológico que muy probablemente acarreará severas consecuencias en su momento

para Venezuela, y seguramente tendrá un negativo impacto en otras latitudes. De hecho, ha quedado claro para los latinoamericanos, que basta con enarbolar la bandera de la anticorrupción para legitimar la fuerza como instrumento de cambio político, y que ese proceso, lejos de traer resultados negativos para sus autores, es capaz de convertirse en expedito rumbo hacia el poder a través de los mismos mecanismos que una democracia timorata y pacata establece para su renovación.

Los hombres de violencia alcanzan el poder. A su estela se adhieren los saltimbanquis y oportunistas de costumbre, también de sobra conocidos en nuestra historia, ansiosos de arrastrarse ante los poderosos y de figurar entre sus servidores, hasta el punto de saltar desde posiciones relevantes en el actual gobierno para apoltronarse con el nuevo, sin que medie el más mínimo escrúpulo, la más mínima consideración principista, el más mínimo sentido de vergüenza. También en estos episodios contemplamos un rasgo característico de nuestra historia: el de los intelectuales que sucumben con fruición ante los «hombres fuertes», que se venden por privilegios, que hacen carrera a través de la adulación y el servilismo. Es muy triste observar ese «eterno retorno» de los tradicionales males venezolanos, y constatar la precariedad de los espejismos que cada cierto tiempo, como fantasmas dejados en un closet, brotan de su ensimismamiento para despertarnos con sus terribles pesadillas.

La cultura del despotismo

El Universal, 19 de enero de 1999

En días recientes, un columnista hacía referencia a la «orgía verbal» que se produce cada vez que el Presidente electo se yergue ante un micrófono. Pareciera que, así como el período calderista se caracterizó por la mediocridad y el silencio, el que ahora se inaugura brillará por la incontinencia de los adjetivos y la prolongación de los discursos. Ahora bien, los fuegos artificiales del encendido verbo ocultan en ocasiones lo esencial. Lo de menos son las citas indigestas de Federico Nietzsche, Mahoma, Cristo y Simón Bolívar. Lo clave está en la visión del mundo y de la política que se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, el Presidente electo afir-

ma —como en efecto hizo— que con su triunfo comicial él, personalmente, posee el poder constituyente. Lo que ocurre es que, mediante una especie de graciosa concesión de su parte, nos permite a los demás discutir sobre el proceso.

Mi convicción es que Hugo Chávez y un nutrido grupo de venezolanos están imbuidos por una «cultura del despotismo», que tiene profundas raíces históricas y que continúa ejerciendo un significativo influjo sobre nuestra manera de actuar en el terreno político. Al fin y al cabo, cuarenta años de democracia constituyen un período relativamente corto, a lo que hay que añadir el hecho de que hemos vivido bajo una democracia muy limitada y contaminada hasta los tuétanos por el ejercicio arbitrario del poder, con fronteras ambiguas entre lo legal e ilegal, y con un Estado de Derecho en no poca medida ficticio, erosionado por la corrupción de la justicia.

En estos tiempos de incertidumbre y volatilidad estamos presenciando una demostración clara y terminante de la influencia de esa «cultura del despotismo» a que he hecho referencia. Como diría Habermas, «su efecto se comunica más bien en el gesto del pensamiento que en la forma de argumentación». Cuando relevantes figuras públicas sostienen, sin pizca de vergüenza, que «lo jurídico no debe entabrar la realidad política» y otras frases por el estilo, en realidad se están pronunciando por el ejercicio arbitrario del poder por encima de las normas y limitaciones impuestas por una juridicidad, en todo caso, muy precaria en nuestro medio, una juridicidad que de poco ha servido —ahora o en el pasado— para contener los bríos de ese «hecho político» (la cruda e inequívoca realidad del poder), ante la cual constantemente tiemblan las piernas de muchos. No por casualidad son el oportunismo y la adulancia dos de las actividades más eficazmente practicadas en Venezuela.

¿Por qué tanta premura con la constituyente, en medio de los gigantes problemas sociales y económicos que padece la inmensa mayoría de la población? ¿Por qué si es obvio que, casi sin excepción, existe buena disposición por parte de los diversos actores de la escena pública nacional para llevar adelante una constituyente, el Presidente electo y sus seguidores se empeñan en romper con la legalidad establecida y violentar la Constitución vigente? ¿No será acaso que buscan avasallar en un referéndum convocado lo antes posible, mientras aún están en la cresta de la ola de su popularidad? ¿Y qué consecuencias podría tener una constituyente sometida a la hegemonía exclusiva del Polo Patriótico? ¿Acaso no

conocen la experiencia de la Constituyente de 1947 y sus nefastas consecuencias?

Una constituyente hegemónica, formada en el ojo del huracán de una polémica sobre su legalidad y legitimidad, no estará en ningún caso en capacidad de estabilizar el país y orientarlo hacia un mejor porvenir. Una ruptura revolucionaria traería igualmente resultados catastróficos para una sociedad en la que, sin duda, se ha producido una elección que abre paso a importantes cambios, pero que no fue más decisiva que otras que hemos experimentado en el pasado (como las de 1973, 1983 y 1988). Ninguno de los presidentes entonces electos con 50% y más se atribuyeron a sí mismos un poder constituyente, ni pretendieron asfixiar al nutrido porcentaje del electorado que no votó por ellos o sencillamente se abstuvo. Es fácil percibir un peligroso triunfalismo de parte del nuevo primer mandatario y sus acólitos. No parecieran tener conocimiento de nuestra historia ni la elemental prudencia para administrar su indudable victoria. Están actuando con un sentido de las prioridades que pareciera indicar que lo único que realmente les interesa es consolidar y prolongar su poder político, escapando de los desafíos sociales y económicos que afectan a la gente y a los cuales millones aspiran que el nuevo gobierno halle soluciones. Se trata de un rumbo preñado de peligros, y hacemos la advertencia, a tiempo, como ciudadanos comunes y con la mejor de las intenciones. Venezuela requiere unidad y no más divisiones. La confrontación deliberada está repleta de riesgos que sería preferible evitar.

Hombre fuerte, sociedad débil

El Universal, 16 de febrero de 1999

Venezuela ha comenzado a transitar un inequívoco rumbo de personalización del poder. En tales circunstancias, las instituciones se debilitan y el mando de los individuos, en este caso de uno solo, se fortalece. Se trata de un tiempo lleno de peligros para la convivencia pacífica y el ejercicio civilizado de la democracia. No está en mi ánimo hacer acusaciones ni articular pronósticos negativos. Deseo sencillamente alertar sobre una realidad que creo observar con claridad y que naturalmente me inquieta.

No es difícil en Venezuela implantar, de modo gradual o con celeridad, una democracia «tutelada», «militarizada» o «autoritaria». Por tradición, la nuestra es una sociedad acostumbrada a un gobierno de hombres, no de leyes. No es cierto que los venezolanos nos caractericemos por un intenso apego a la libertad. La triste verdad es que nos gusta la libertad propia, para hacer más o menos como queramos, pero no la de los demás. De paso, nuestras instituciones son frágiles y el respeto que hacia ellas sentimos, así como nuestra comprensión de su sentido y funciones, son mínimos.

Un ejemplo muy ilustrativo es el de nuestra Corte Suprema de Justicia. La misma ha devenido en una institución que «baila al son que le tocan». Su papel teórico de equilibrio se ha convertido de hecho en la propensión a andar a la cola de la opinión predominante en cada coyuntura, para refrendarla y jamás cuestionarla. La gente quería desprenderse de Pérez y la Corte la complació. Hoy queremos constituyente y la Corte ratificó esa aspiración. ¿Que pasará mañana? El Presidente alabó a la Corte en su discurso al tomar posesión del cargo, ¿qué habría hecho si la decisión sobre el referéndum hubiese sido otra?

Nuestras instituciones son de gelatina y la voluntad de un hombre poderoso es capaz de atravesarlas como cuchillo caliente a una panela de mantequilla. Una seria amenaza se cierne sobre una sociedad débil en su tejido institucional, sumida en emociones contradictorias y en no poca medida atemorizada por la autoridad que sobre ella empieza a pesar. Se está utilizando un argumento muy peligroso desde los predios de la mayoría gobernante: en vista, dicen, de que toda la herencia puntofijista, incluyendo instituciones como el Congreso, están «contaminadas de pasado», *entonces todo está permitido*. ¿A dónde llegaremos por ese camino?

Con la mayor tranquilidad se amedrenta al Congreso y se habla sobre su próximo cierre. Partidos presuntamente democráticos como el MAS, hacen gala de su ya legendaria capacidad camaleónica para complacer a sus nuevos amos, y tan campantes seguimos todos en medio de una «revolución» que empezó —conviene recordarlo— con un acto de violencia y bien podría hundirnos en muchos otros actos semejantes. Insisto: es imperativo alertar acerca de los peligros que comienzan a ensombrecer a Venezuela. Me refiero al despotismo democrático (tiranía de la mayoría), la militarización de la política y el gobierno por ilusionismo, es decir, creador sistemático de falsas ilusiones y engañosos espejismos.

Como bien lo afirmó un ex miembro de la comisión presidencial para la constituyente, estamos pasando de ser una sociedad de cómplices a

ser una de cobardes. La pleitesía que se está rindiendo al nuevo jefe del Estado raya en ocasiones en lo ridículo; hay miedo en el ambiente, empresarios se arrastran, políticos se arrodillan, académicos entonan loas, periodistas anuncian milagros y la débil sociedad venezolana, con sus instituciones de gelatina, marcha sin ton ni son por una senda de enormes riesgos, borracha de sueños imposibles.

Repito un punto: considero un deber ético e intelectual alertar sobre los peligros que observo. No estoy asegurando que estemos condenados a acabar en una autocracia personalista, pero sí estoy diciendo que los riesgos de que terminemos allí están aumentando exponencialmente. Es un error garrafal destruir las instituciones democráticas y erosionar el equilibrio de poderes, con el argumento de que son un legado de un pasado indeseable. Es un error garrafal doblar las rodillas ante los poderosos de hoy, para halagarles y buscar sus favores. Es imperativo mantener la dignidad y luchar palmo a palmo por la preservación de la libertad.

Es larga y penosa la historia de la personalización del poder y el despotismo en Venezuela. No somos en modo alguno inmunes a la repetición de experiencias ya vividas, que resultaron muy costosas para el país y su gente. Los nuevos gobernantes deben reflexionar sobre su grave responsabilidad histórica. Los cambios deben tener lugar, pero en un marco realmente democrático. Lo que se está viendo suscita con razón oscuros presagios. La complacencia ante el autoritarismo es el peor de los antidotos. Sólo una actitud digna puede salvarnos.

El destino de la revolución chavista

El Universal, 2 de marzo de 1999

Es un error hablar de revoluciones en nuestro tiempo. Las revoluciones de verdad son cosa del pasado. En esta época de predominio del capitalismo y la democracia, las revoluciones lucen como trastos viejos olvidados en un armario. Ponerse a anunciar revoluciones constituye un ejercicio banal. Experiencias como la cubana no tienen el más mínimo chance de repetirse en América Latina, a menos que ocurra un terremoto, que resulta difícil imaginar.

Las revoluciones de verdad implican mucho más que un cambio en los actores de la trama política. Para dar un ejemplo, Venezuela ha experimentado una sola revolución verdadera: la revolución de Independencia. Allí cambiaron los actores y también se trastocaron radicalmente las estructuras y mecanismos de poder político y socioeconómico. Ni la Guerra Federal llegó a tanto, o de manera tan masiva. El otro caso de cambio sustantivo, el «trienio» adeco, representó un importante movimiento transformador que puso de manifiesto desplazamientos telúricos ya maduros en el seno de la sociedad, en particular la democratización, el crecimiento de la clase media y el fortalecimiento del Estado petrolero. Sin embargo, llamar al «trienio» una revolución es exagerar un poco las cosas.

¿Cuál revolución podría Venezuela tener ahora? Estamos presenciando un cambio en los actores de la trama. Están siendo desplazados los herederos del puntofijismo y se colocan en posiciones de poder nuevos rostros, con fuerte predominio de militares y de una izquierda trasnochada. Ahora bien, una revolución de verdad, para ser tal, tendría que trastocar a fondo las estructuras y mecanismos de poder social y económico, no sólo político, en el país, y hasta el momento todo indica que, con la única excepción del debilitamiento de los partidos tradicionales (cambio de actores), esas estructuras y mecanismos, basados en la vigencia del Estado petrolero y proveedor, no harán sino robustecerse en medio de su congénita debilidad.

Ni aun en el terreno de la publicitada «lucha contra la corrupción» pareciera que nos disponemos a observar una transformación significativa. Ya se han dado designaciones en cargos de importancia que representan una evidente incompatibilidad de intereses en manos de quienes les detentan, tanto en el sector comunicacional como en el petrolero. Poco importa que estas personas nos aseguren que se conducirán como monjitas de la caridad. El problema de la corrupción, así como el juicio que se realice sobre una gestión pública, no puede reducirse a las supuestas buenas intenciones de las personas, sean quienes sean, y a pesar de que las proclamen con la mayor sinceridad.

Lo más riesgoso del curso que transitamos consiste en que se habla de «revolución» en momentos de grave crisis económica, cuando los mecanismos funcionales de siempre (demagogia y gasto público) se hallan imposibilitados de responder a las expectativas creadas los pasados meses. No vamos en camino ni de hacernos más libres y democráticos (al contra-

rio, la sociedad vive presa de incertidumbre y miedo), ni de hacernos más prósperos en lo material. Los nuevos gobernantes no parecen percatarse de que estamos al borde de un colapso económico, que el desempleo y la inflación están aumentando exponencialmente, que la macrodevaluación se hace inminente, que los inversionistas están incrédulos y que las fórmulas económicas articuladas por el novedoso equipo al mando repiten, en circunstancias que las desnaturalizan, las políticas estatistas de costumbre, que nos han llevado donde estamos. Las palabras «privatización», «mercado» y «competitividad» han desaparecido del léxico del gobierno, y con la coartada constituyente han sacado la economía del debate, como si pudiesen desaparecerla con un acto de magia política.

Por este camino, la llamada «revolución» chavista tendrá un solo destino: *el fracaso como revolución*. Puede que sea otra cosa, que logre otros objetivos (como por ejemplo, entronizar a su protagonista en el poder por años), hasta es factible que culminemos en un régimen semidictatorial, fuertemente autoritario y represivo. Lo que por ninguna parte se ve es una revolución de verdad. Apenas contemplamos el cambio de actores en los baluartes normales de la burocracia pública, con el empresariado privado, como es usual, solicitando prebendas al poder político para proseguir con el proteccionismo que les permite sobrevivir. En síntesis, nada fundamental está cambiando, y esa es precisamente la tragedia de esta hora venezolana: no se trata de un comienzo, sino del principio del fin de una etapa histórica. Pues de hecho y hasta el presente, el chavismo no es más que populismo con tinte militar. ¿Puede llamarse a esto revolución? ¿Por qué entonces no abandonar, de una vez por todas, la cansona retórica revolucionaria, y en su lugar hablar en serio el lenguaje de las reformas?

Modernización, nasserismo y regresión

El Universal, 16 de marzo de 1999

En los años 1960 y 1970 (Brasil 1964, Argentina 1966, Perú 1968 y Chile 1973), surgió en América Latina un nuevo tipo de autoritarismo militar, diferente a las dictaduras tradicionales encarnadas en hombres como

Batista, Pérez Jiménez, Odría y Rojas Pinilla. De un modo u otro los «hombres fuertes» persistieron (como Velasco y Pinochet), pero la situación era cualitativamente diferente en dos sentidos: en primer término, los nuevos regímenes implicaban *compromiso institucional* de las Fuerzas Armadas como cuerpo, en función de llevar adelante un determinado proyecto político-económico y, en segundo lugar, ese proyecto surgía de las insuperables tensiones sociales y «cuellos de botella» económicos del populismo, y se orientaba a procurar un nuevo modelo de inserción de esas sociedades en el contexto capitalista internacional. Con la relativa excepción del caso peruano, ese modelo intentaba superar las fracasadas fórmulas cepalistas del «crecimiento hacia adentro» y conquistar una nueva dimensión productiva de «crecimiento hacia fuera». Velasco Alvarado, por su parte, desarrolló en Perú un modelo corporativista y estatista que culminó en rotundo fracaso.

Gracias al colchón suministrado por la renta petrolera Venezuela fue capaz, hasta mediados de los años 1980, de sostener un populismo «exitoso» en términos de su capacidad para promover la movilidad social ascendente de las mayorías. Pretendíamos modernizarnos a pesar de que en el camino se asfixiaban nuestras posibilidades de construir una industria y una agricultura capaces de autorreproducirse, en caso de crisis de los precios petroleros. Cuando esa crisis comenzó a hacerse sentir con fuerza, también empezó el rumbo de desmantelamiento progresivo del sistema político puntofijista, construido sobre la premisa de un ascenso continuo en el nivel de vida de la gente con base en el petróleo. El proceso de modernización, con sus indudables limitaciones, se detuvo, y abrió las puertas a un deslizamiento hacia el abismo del empobrecimiento y la perenne inestabilidad política, que aún están con nosotros.

Para los venezolanos ha sido y sigue siendo muy duro comprender y admitir las verdaderas raíces de nuestra decadencia. *De allí que hayamos desatado una verdadera guerra contra la modernización*, entendiendo por tal la creación de una sociedad más abierta y de una economía de mercado competitiva, prefiriendo la opción de refugiarnos a toda costa en las seguridades tradicionales del paternalismo estatal, el corporativismo y la búsqueda de figuras mesiánicas que representan la ilusión de redistribución de una riqueza que en realidad no existe. Ello explica que hayamos votado por Pérez en 1988, por Caldera en 1993 y por Chávez en 1998. *Lo hicimos para intentar volver atrás y no para buscar algo nuevo.* Lo que que-

ríamos con Pérez era retornar a la bonanza petrolera de aquellos años locos, cuando el barril llegó a alcanzar los cuarenta dólares. En Caldera vimos la figura paternal, sentimental y redistributiva que sería capaz de dar a cada cual lo suyo. En Chávez, millones ven al salvador y justiciero que restaurará las cosas a su lugar y proveerá la «solución» mágica a que tantos aspiran.

Al colapsar el puntofijismo se abrió un vacío que está siendo llenado por una versión propia de «nasserismo», que es un compuesto de cinco factores: personalismo (culto al jefe), nacionalismo (estatismo económico), antiimperialismo (sobre todo retórico), populismo (demagógico) y militarismo. Es un nasserismo tropical matizado con sus peculiares características, que bien podría desembocar en un compromiso institucionalizado en las Fuerzas Armadas para llevar adelante un proyecto de tipo velasquista, en el marco de una democracia autoritaria o «tutelada». En todo caso, lo que sí es evidente es que se trata de un proceso de *regresión* a varios niveles y en diversas dimensiones.

Para empezar hay una regresión política, pues el esfuerzo de institucionalización de cuatro décadas está paulatinamente sucumbiendo ante las realidades de la personalización del poder. Se trata también de una regresión en cuanto a la cultura política, ya que el apego a la legalidad se ha rendido ante los detractores del «leguleyismo» y sus sueños constituyentistas. Hay igualmente una regresión económica, pues vuelve por sus fueros un cierto izquierdismo socializante, sospechoso del capitalismo, comprometido con el capitalismo de Estado y profundamente ajeno a las pulsiones que vigorizan el espíritu liberal. También tenemos una regresión social, ya que el sendero de empobrecimiento no hará sino acentuarse en medio de un cada día más menguado aclamacionismo y un soterrado odio de clases entre los que algo tienen y los que nada tienen. Por último, vivimos este tiempo una regresión generalizada de nuestro republicanismo cívico, en vista del derrumbe de la dirigencia política tradicional y la novedosa asertividad del estamento militar en nuestra vida pública. En síntesis, pareciera que el país se apresta a ganar su batalla contra la modernización y de ese modo condenarse a un poco estimulante destino.

¿Idealista sin brújula o dictador potencial?

El Universal, 25 de mayo de 1999

El ex primer ministro inglés Harold Wilson dijo una vez que «Una semana es largo tiempo en política». Parafraseándole, podríamos añadir que «cien días son una eternidad». Transcurridos más de tres meses del nuevo gobierno se hace necesario afinar los análisis, de acuerdo a la marcha dinámica de una realidad cambiante. En tal sentido, apologistas del presidente de la República han estado vanagloriándose de que, luego de este tiempo, no ha tenido lugar el apocalipsis y no se han materializado los pronósticos más extremos: «¿Lo ven? —nos dicen: Chávez no es Fidel Castro».

Caben cuatro comentarios: en primer lugar, el Presidente se ha moderado un tanto debido a la creciente resistencia que ha encontrado. Tanto en el plano doméstico como internacional, cualquier proyecto extraconstitucional va a hallar serios obstáculos, de difícil superación. En segundo término, puede haber ocurrido un proceso de aprendizaje por parte del Presidente, que le sugiera que no es posible «tomar el cielo por asalto» y que el marco democrático exige, al menos por un tiempo, cierta disposición para el compromiso. En tercer lugar, cabe recordar que existían y siguen existiendo razones de sobra para preocuparse por las intenciones y planes del Presidente. Basta referirse a los inequívocos conceptos autoritarios expuestos en la oscura y a ratos ininteligible carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Por último, todos hemos juzgado por intenciones haciendo conjeturas acerca de lo que puede o no proponernos Hugo Chávez. No queda alternativa a estas tempranas alturas del juego. No solamente erraron quienes pensaban que ya hoy nos encontraríamos sumidos en el caos y la dictadura, sino también los que han estado anunciando una «revolución» que por ninguna parte se ve.

Como casi siempre ocurre, la vida se ha mostrado más compleja que las teorías acerca de su curso factible, y continúa planteada la pregunta: ¿Quién es Hugo Chávez, realmente? ¿Un idealista confuso o un embrión de dictador latinoamericano? Mi respuesta es ésta: en política, a diferencia de la lógica, dos afirmaciones aparentemente antagónicas pueden ser ciertas a la vez. El Presidente es un idealista confuso, quizás un romántico lleno de ideas contradictorias y, a la vez, un conductor de masas en vías de convertirse en jefe autocrático de una «democracia» militarmente tutelada. No hace falta poner en duda la posible buena voluntad de Hugo Chávez hacia los millones de pobres y marginales del país, y

su aparente deseo de hacer cambios que muchos ansían. Mi tesis es que, precisamente porque Chávez es un idealista radicalizado, acosado por un amasijo de ideas confusas y atrasadas, y cercado por amplias «zonas grises» en su comprensión de las realidades del mundo actual, precisamente por ello, repito, es que el presidente de la República ha sido y sigue siendo una amenaza potencial para las libertades democráticas en Venezuela.

Hugo Chávez posee una fuerte tendencia autoritaria en su personalidad política; su temperamento impulsivo y su don de mando, unidos a la carencia de un proyecto concreto, realista y sensato de transformación nacional, conforman un contexto lleno de riesgos para la democracia. Cuando afirmo que el Presidente «no tiene brújula», me refiero a la ausencia de un proyecto viable y eficaz de cambio. No obstante, Hugo Chávez sí tiene un claro sentido de dirección en cuanto al fortalecimiento y consolidación de su poder personal. Existe un marcado contraste, por tanto, entre su ambición política y sus herramientas para llevar a cabo las transformaciones que dice desear. Esta es una fórmula para la frustración tanto del Presidente como del país, que deparará seguramente ingratas consecuencias.

El mayor logro de Hugo Chávez, hasta ahora, no ha sido la ficticia «estabilización macroeconómica», sino la creación de una nueva estructura de mitos políticos que paradójicamente han servido para apaciguar a las desencantadas masas populares, que han hallado una nueva esperanza y, en consecuencia, están dispuestas a postergar sus aspiraciones hacia el futuro. ¿Por cuánto tiempo más? Depende del desarrollo del choque entre, por un lado, la agenda de la mayoría, que es de naturaleza socioeconómica, y por otro lado la agenda del Presidente, que tiene que ver con la lucha por el poder y la definición de la hegemonía. Esta es una contradicción clave en la Venezuela actual, y es por ello que el proceso constituyente podría convertirse en una trampa para el gobierno, pues las expectativas en torno al mismo pertenecen a la primera agenda (socioeconómica), en tanto que la realidad de las cosas señala que la constituyente forma parte de un proceso exclusivamente político, enmarcado en la lucha por el poder. Es posible que el Presidente haya caído en cuenta que la constituyente es un «hueco negro» en su horizonte, una jugada azarosa, un mensaje sin destino fijo, un lance aventurado, un albur que se corre en medio de insolubles paradojas, cuyo desenlace somos incapaces de vislumbrar. Por todo ello, en Venezuela el nombre del juego sigue siendo la incertidumbre.

La responsabilidad colectiva de los venezolanos

El Universal, 8 de junio de 1999

Algunos ex parlamentarios del sector oficial han anunciado que la venidera Asamblea Constituyente promoverá «juicios populares» contra los presuntos culpables de nuestras desgracias nacionales. Interesa constatar, otra vez, la escasa comprensión que nuestros novedosos gobernantes parecieran tener sobre lo que significa un Estado de Derecho. Cabe también observar que aquellos que piden semejantes juicios se autoproclaman «defensores de los derechos humanos». Sin duda, la Venezuela de hoy vive bajo el signo de Orwell: aquí la verdad es mentira y la mentira verdad, lo blanco es negro y lo negro es blanco, la demagogía es gobierno y el gobierno es demagogía.

Ahora bien, ¿quién juzgará a quién? Sería poco equilibrado negar que recae sobre las mal llamadas «élites» del puntofijismo una responsabilidad fundamental por lo ocurrido, bueno y malo, en estas pasadas décadas. Pero, ¿y el pueblo, la colectividad en general, carece de toda culpa, de responsabilidad alguna? Preguntémonos, por ejemplo, ¿es que acaso alguien les obligó a votar por Pérez en 1988 y por Caldera en 1993? Si bien recuerdo, en ambas ocasiones numerosas voces se alzaron para alertar a los venezolanos acerca de lo que seguramente iba a significar la renovada elección de estos personajes como presidentes del país. Muchas advertencias se hicieron, y no es que faltaron alternativas. Sin embargo, la gente les respaldó mayoritariamente. ¿No implica esto un grado de responsabilidad del pueblo en general por el destino nacional? ¿Es que ya no recordamos lo que hicimos? ¿O se trata acaso de que no deseemos recordarlo?

La idea según la cual existe una *responsabilidad colectiva* por el destino de una comunidad o país no es original. Ya en nuestro siglo esa realidad de responsabilidad común ha sido puesta a prueba en casos concretos, y la razón es sencilla, muy en particular si estamos hablando de una democracia: ningún ciudadano tiene el derecho de lavarse las manos ante los procesos sociopolíticos que mueven la historia. Como mínimo, la vida nos obliga a rendir cuentas a consecuencia de los gobiernos que es cogemos.

Es absurdo no atribuir parte de responsabilidad a una colectividad como la nuestra, que por más de cuarenta años ha vivido con una moneda masivamente sobrevaluada, subsidiada por todas partes, siendo ob-

jeto de inversiones masivas en salud y educación que no supimos cuidar y acrecentar en calidad y eficiencia. Una comunidad que, cuando llegó la hora de enfrentar la dura realidad del fin del modelo rentista-populista, optó por tirarse a las calles (27-F de 1989), decapitar a un Presidente al que había electo democráticamente, apoyar dos violentos golpes de Estado y llevar al mando en 1993 a quien les remitió la patética «carta de intención». Redondeando la faena, esa colectividad terminó por exaltar a la conducción de nuestros destinos al principal protagonista de uno de aquellos golpes militares, negación crucial de todo valor democrático. ¿Qué esperamos entonces?

No entender esa responsabilidad colectiva equivale a concebir al «pueblo» como un ente compuesto por minusválidos mentales, jurídicos y morales. En razón de que esa no es mi idea del pueblo venezolano, de que creo que está integrado por seres humanos normales, es que considero que no podemos eludir la parte que nos corresponde en el drama del país. La actitud acaramelada y complaciente hacia el «pueblo» que adoptan algunos, una actitud que le imagina impoluto y fuente de toda virtud y sabiduría, no es más que una máscara tras la cual se oculta un profundo desprecio hacia la gente, que es vista como manipulable y hasta estúpida, como gente a la que deben repartírsele «guías» para votar, a la que se aspiraba entregar tarjetones electorales adornados con boinas, sombreros, gorras y otros juguetones símbolos, para que «no se equivoquen», ya que son demasiado bobos y podrían no sufragar por sus salvadores de turno.

Insisto, ¿quién obligó a los que votaron por Pérez y Caldera a hacerlo? ¿Quién obligó a los que votaron por Hugo Chávez? También en 1998 se levantaron muchas voces de alerta y, sin embargo, volvimos a escoger el camino fácil, el de los chivos expiatorios, las soluciones mesiánicas, las ilusiones constituyentistas, y otros artificios de nuestro incorregible y sistemático autoengaño colectivo. Ahora afirmamos querer cambiarlo todo, pero en realidad no deseamos cambiar nada. Lo que aspiramos es volver atrás, que el populismo funcione, que algún «hombre fuerte» tome las decisiones y nos lleve de la nariz. ¿Productividad? ¿Competitividad? ¿Visión a largo plazo? No son esos los temas que nos agobian. Aquí estamos emulando a Dantón y Robespierre, retrocediendo al siglo XVIII, ocupándonos de si la constituyente será «originaria» o «derivada», contentos de descargar nuestra responsabilidad sobre algún espejismo que venga a cuento. Pero no se podrá ocultar para siempre la verdad: el pue-

blo venezolano se ha dado los gobiernos que ha creído merecer. No otra cosa nos queda que correr con las consecuencias. ¿Juicios populares? ¿Y quién juzgará al pueblo?

El paroxismo del populismo *

1

El diccionario nos dice que «paroxismo» es «la extrema intensidad de una enfermedad». En lo que sigue argumentaré que Venezuela está entrando en un período histórico que es posible calificar como de «paroxismo populista», pues lo que está perfilándose es un rumbo dirigido a hacer extrema y llevar a su máxima intensidad la enfermedad que venimos padeciendo desde hace alrededor de cuatro décadas, con las variantes de cada caso. En otras palabras, quiero argumentar que la etapa político-constitucional que se inicia con la presidencia de Hugo Chávez en 1999 no representa ni representará el inicio fundamental de algo nuevo en lo socioeconómico, sino el principio del fin de un largo y complejo período en nuestra evolución histórica: el período del predominio populista. Lo que sí se transformará será la expresión política del populismo, que en las nuevas circunstancias de aguda crisis económica, desarticulación social y decadencia institucional, se expresará a través de un régimen híbrido de nasserismo militar y democracia tutelada.

Cabe aclarar, antes de desarrollar la tesis esbozada, que por razones metodológicas pueden distinguirse tres sentidos del término «populismo»: un sentido histórico, uno económico referido a cierto tipo de políticas económicas y sociales, y un tercer sentido que se refiere a un *estilo o modo de hacer política*. Desde un punto de vista histórico el populismo tiene que ver principalmente con las experiencias vividas por varios países latinoamericanos, en especial Brasil y Argentina, bajo las presidencias de Getulio Vargas y Juan Domingo Perón. La caracterización de esos re-

* Ponencia presentada en el seminario «¿Sigue vigente el populismo en América Latina?», organizado por la Fundación Pensamiento y Acción. Caracas, febrero de 1999.

gímenes, tanto en el plano político como en el económico, ha sido realizada muchas veces, y no es el caso detenerse acá en ello. Desde luego, en su complejo desarrollo tales experiencias son irrepetibles en sus diversos detalles y determinaciones. Sin embargo, *las políticas económicas y sociales populistas*, caracterizadas por el estatismo y la acelerada masificación, sí han seguido formando parte de posteriores experiencias latinoamericanas, que en mayor o menor medida se inspiran o conectan con el «populismo histórico».

El populismo como estilo o forma de hacer política, esencialmente caracterizado por la demagogia, no es desde luego un patrimonio latinoamericano. Ahora bien, se trata de un no desdeñable aspecto a ser resaltado en el análisis de la experiencia democrática venezolana hasta el presente. En lo que sigue denominaré «populismo» tanto un conjunto de políticas económicas y sociales (estatistas y masificadoras), así como un cierto modo de ejercer el liderazgo político, aclarando desde ahora que el tipo de régimen político en que se concretan esas políticas y ese estilo político puede variar. En ese orden de ideas, tenemos que durante cuatro décadas el populismo formó parte integral de un régimen de democracia corporativista o «de partidos», que a partir de la presidencia de Hugo Chávez está pasando a convertirse en un régimen de *nasserismo militar y democracia tutelada* o «delegativa», en el cual el caudillo que jefatura, y buena parte del sector militar, ejercen una «tutela» sobre la sociedad en su conjunto, y el poder es predominantemente «delegado» en términos personalistas en manos del jefe o caudillo supremo.

2

En su lúcido libro de 1972, *Modernización y autoritarismo*, el politólogo argentino Guillermo A. O'Donnell cuestionó, con una avalancha de argumentos, la denominada «ecuación optimista», que había sido por años el paradigma dominante de las teorías que intentaban explicar el proceso de modernización de los países latinoamericanos. De acuerdo con esa ecuación, a más desarrollo socioeconómico debía corresponder una mayor probabilidad del surgimiento y estabilización de la democracia política. Según O'Donnell, lo que esa ecuación primigenia no tomó en cuenta es que el desarrollo socioeconómico trae aparejado un proceso de mayor pluralismo político, que en un contexto de crecientes dificultades económicas en países periféricos, no insertados adecuadamente en el

marco del capitalismo global, genera a su vez más intensas «constelaciones de problemas», muchos de los cuales devienen en «problemas insolubles».

De acuerdo con esas ideas O'Donnell reformuló la ecuación original, y sostuvo que si bien un mayor desarrollo socioeconómico significa mayor «pluralización política», todo ello no necesariamente se traduce en mayor probabilidad de democracia política. Por el contrario, su sombría conclusión fue que «el autoritarismo político y no la democracia es el concomitante más probable de los niveles más altos de modernización en el contexto sudamericano contemporáneo». De hecho, las tesis de O'Donnell constituyeron un instrumento muy útil para explicar las dictaduras militares que surgieron en Brasil y Argentina (regímenes «burocrático-autoritarios») en los años 1960, y que sobrevivieron hasta las décadas de 1970 y 1980 (a las que podría añadirse, con sus peculiaridades, el caso chileno bajo Pinochet).

Menciono el planteamiento de O'Donnell precisamente para contrastarlo con la realidad venezolana bajo la democracia «puntofijista» (1959-1998). En ese tiempo, hasta mediados de los años 1980, la sociedad venezolana experimentó un intenso proceso de movilización y ascenso social para amplios grupos que se vieron beneficiados por las políticas populistas de un Estado opulento financiado por la renta petrolera. En nuestro caso, y a diferencia de Argentina y Brasil en los años 1960, no hubo «problemas insolubles», y el petróleo hizo posible, a pesar de todos los tropiezos, no solamente procurar niveles medianamente sostenibles de paz social y estabilidad política hasta fines de los años 1980, sino también *aislarnos, relativamente, de las demandas de la globalización*, en lo que esta última significa en términos de inserción competitiva del país dentro de un esquema internacional mucho más exigente.

La disolución del complejo y vulnerable entramado del populismo venezolano en los años 1990, luego del «caracazo» de 1989 y los golpes de Estado de 1992, ha arrojado como resultado la ascensión a la presidencia de un líder nasserista, Hugo Chávez Frías, que en esencia representa *el profundo rechazo de una gran masa de venezolanos al proceso de modernización* que, mal que bien, venía teniendo lugar bajo la democracia puntofijista, a pesar de sus fallas y limitaciones. A diferencia de lo ocurrido en Brasil y Argentina en los años 1960, cuando los regímenes militares optaron por forzar dictatorialmente sobre sus países una nueva modalidad de inserción en la globalidad capitalista, en Venezuela lo que ahora está

planteado es el *intento de preservar el populismo socioeconómico, contrario a la modernización, mediante el autoritarismo militarizado*.

Dicho en otras palabras, el nasserismo militar chavista representa un proceso de regresión, tanto político (a formas aún más degeneradas de democracia, o a un abierto autoritarismo), como socioeconómico (hacia la adopción de un programa populista máximo, que incluya el esfuerzo por aislarnos de las corrientes internacionales favorables a la economía de mercado, la exigencia de competitividad y las privatizaciones).

3

El «nasserismo militar», desde el punto de vista ideológico-político y de la cultura política, está integrado por cuatro ingredientes clave: nacionalismo, antiimperialismo, populismo y personalismo. Todos estos elementos están presentes, de diversa forma, en el proceso político chavista, así como en el contexto mental del caudillo. Los paralelismos con otras realidades son claros, aunque se trata de eso: de similitud y no de identidad. En el reciente pasado latinoamericano destaca una figura como la del general Velasco Alvarado en el Perú de los años 1970 y con respecto a otras latitudes pueden mencionarse personajes como Kaddafy y Saddam Hussein en el mundo árabe. Castro, cuya imagen parece ejercer una particular atracción para Hugo Chávez, es también un caso digno de ser tomado en cuenta a la hora de buscar referencias para el análisis.

Lo interesante del caso de Chávez consiste en el hecho de que su concepción de sí mismo es la del portador de un «cambio», más en realidad representa una regresión. Por un lado, el personalismo político conducirá a deteriorar aún más el ya muy lesionado esquema de la institucionalidad democrática; por otro lado, su nacionalismo y antiimperialismo, así como su visión populista de la sociedad y la economía, nos arrastrarán por el ya trillado y fracasado sendero del estatismo y la demagogia. La relación caudillo-masa sustituirá, paulatina o rápidamente, los correajes institucionales, y las prácticas populistas en lo económico acelerarán el ya pronunciado empobrecimiento de una sociedad confundida, violenta y negada a admitir las verdaderas causas de su penosa situación.

Las posibilidades de enfrentar con éxito este proceso en busca de una dirección diferente de los eventos, que al menos sea capaz de sostener una democracia en la que se pueda vivir en paz y en ejercicio de libertades fundamentales, no son muchas. Ello se debe principalmente al ra-

dical desprestigio de las organizaciones y hombres que hasta un pasado reciente tuvieron en sus manos los destinos del país, así como al predominio de una cultura política «mágica», cuyas coordenadas son, por un lado, la búsqueda de chivos expiatorios como mecanismo de expiación fantasmiosa de los problemas, y por otro lado la creencia de que Venezuela es un país inmensamente rico, cuya población sólo requiere la presencia de un caudillo justiciero al frente para muy pronto, y sin costo alguno, nadar en abundancia.

Ciertamente, el nuevo contexto internacional no favorece ni las políticas populistas ni la instauración de regímenes autoritarios. Sin embargo, es mucho lo que seguramente vamos a avanzar en la dirección de sustituir la democracia puntofijista, con sus conocidas fallas, por una «democracia autoritaria», en la cual los espacios de libertad serán progresivamente asfixiados. De igual forma, con la regresión populista cabe esperar un más acentuado empobrecimiento del conjunto de la sociedad. ¿Qué ocurrirá finalmente? El porvenir se presenta oscuro y triste para una nación que viene fracasando, que así lo siente, pero que no desea enfrentar con la necesaria crudeza las verdaderas raíces de su patético fracaso.



1

El debate sobre las consecuencias no intencionales de nuestra acción tiene gran interés teórico para las ciencias sociales. Autores de la relevancia de Maquiavelo, Weber, Popper, Arendt y Albert O. Hirschman, entre otros, han destacado de qué manera la naturaleza incierta de la dinámica social introduce elementos imprevisibles en la acción de los agentes históricos, transformando con frecuencia sus intenciones y trastocando sus propósitos, generando así amplio espacio para el análisis de la «alquimia» mediante la cual aquello que deseamos lograr acaba con frecuencia convertido en lo contrario de lo que aspirábamos. De allí la insistencia de Popper en que el esfuerzo orientado a anticipar las consecuencias no intencionales y muchas veces no deseadas de nuestra acción es una tarea legítima, quizás la más importante de las ciencias sociales.¹ En su momento, Maquiavelo también advirtió la extraña y sorprendente «alquimia» de la política, mediante la cual el bien en ocasiones se transmuta en mal, y éste en bien, y acciones que se planificaban para obtener un fin terminan por producir otra cosa muy diferente.²

Es vana, dicho en otros términos, la presunción que nos atribuye el poder de diseñar y controlar las complejas estructuras, instituciones y procesos de la evolución social, presunción que asume que los actores sociales poseen un conocimiento ilimitado acerca de sus propias condiciones, la naturaleza de sus circunstancias, el impacto concreto de sus

Karl Popper, *The Myth of the Framework*. London & New York: Routledge, 1994, p. 74.
Nicolás Maquiavelo, *El Príncipe*. Madrid-San Juan: Revista de Occidente-Universidad de Puerto Rico, 1955, pp. 343-344, 349-350. Sheldon Wolin, *Política y perspectiva*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1973, p. 245.

decisiones y el rango de sus posibilidades. La verdad es distinta; los actores sociales, en su búsqueda de fines particulares, no pueden estar seguros sobre las reacciones que sus empeños suscitarán y por ello sus estrategias y objetivos siempre están sujetos a un margen de incertidumbre, margen que usualmente varía de acuerdo con la complejidad de la situación social en cuestión.³

Hirschman señala que los cambios no planeados ni deseados son generalmente más radicales que aquellos que surgen de la voluntad consciente de los agentes o actores sociales, por la sencilla razón de que la imaginación del agente o actor social está severamente limitada por su experiencia inmediata y los precedentes históricos que le influyen. Por otra parte, el cambio no intencionalmente producido es mucho más difícil de detectar a tiempo y de bloquear por las fuerzas que se oponen al mismo. En la práctica, son esos sectores reacios al cambio los que sin percatarse de ello, en ocasiones contribuyen a estimular las transformaciones que no desean.⁴

En este orden de ideas, Arendt ha enfatizado que el concepto *moderno* de revolución, vinculado a la noción de que el curso de la historia recomienza otra vez, cobró fuerza a partir de las dos grandes revoluciones de fines del siglo XVIII: la francesa y la norteamericana: «Antes de que se involucrasen en lo que eventualmente se convirtió en una revolución, ninguno de los protagonistas clave tenía la más mínima premonición acerca del curso probable del drama».⁵ Aunque parezca sorprendente, las «limitaciones en la imaginación» de esos actores posiblemente dio a los cambios, una vez iniciados, un carácter más radical del que de otro modo —si hubiesen sido planeados de manera intencional— habrían tenido.

Weber sintetizó el problema en su famosa conferencia en torno a «La política como vocación», cuando escribió que es «una tremenda verdad y un hecho básico de la Historia [...] el de que frecuentemente, o, mejor, generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario».⁶ Las revoluciones son un ejemplo típico de este trastocamiento de fines y realizaciones concretas; se trata de proce-

3 Timur Kuran, *Private Truths, Public Lies. The Social Consequences of Preference Falsification*. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press, 1995, pp. 303-304.

4 Albert O. Hirschman, *A Bias for Hope*. New Haven & London: Yale University Press, 1971, p. 37.

5 Hannah Arendt, *On Revolution*. Harmondsworth: Penguin Books, 1990, pp. 28-29.

6 Max Weber, *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 156.

sos guiados por hombres y mujeres que proclaman la superioridad ética de sus proyectos políticos y reclaman para los mismos el sentido progresista de una omnipotente razón histórica. Pocos entre ellos, arrastrados usualmente por el torbellino de las ilusiones, reflexionan a tiempo sobre los costos que siempre se desprenden del contraste entre los sueños y las limitaciones de lo humano. Al final, casi sin excepción, el terror, la opresión, la tiranía, transforman en árido desencanto lo que una vez fueron poderosas pasiones.

Me propongo argumentar que esa «alquimia de la política» caracterizó el proyecto de independencia venezolano, un proyecto que como es bien sabido fue concebido y ejecutado en sus inicios, y fundamentalmente, por un muy definido grupo social, el de los mantuanos, sector privilegiado y dominante que para la época se consideraba a sí mismo prácticamente el dueño del país y que acabó barrido por el huracán que sus miembros tanto hicieron por desencadenar. Los mantuanos buscaron un fin: preservar su control social y a la vez obtener el dominio político sobre la colonia, con el resultado de que se logró otro, diferente y en sentidos esenciales contrario a sus más hondos intereses *como grupo social*. El resultado final de su decisión emancipadora, lejos de mantener el estado de cosas que les colocaba en posición dominante, les desmembró decisivamente.

¿Qué explica las acciones mantuanas y su ceguera, evaluadas desde el punto de vista de sus intereses como sector privilegiado en la sociedad colonial? Esta interrogante plantea a su vez otros temas, cuya complejidad e implicaciones exigen un cuidadoso ordenamiento conceptual. Nos topamos acá con el problema teórico de cómo juzgar de modo equilibrado, ética y políticamente, las posturas de un grupo de actores históricos en una coyuntura dada: ¿Qué información tenían a mano para sustentar sus decisiones?; ¿tomaron o no en cuenta precedentes históricos que pudiesen ilustrar su opción presente?; ¿midieron con algún cuidado las consecuencias probables de sus actos? Por otra parte, en vista de las circunstancias que conformaban el marco en que se tomaron decisiones e iniciaron procesos, ¿tenía sentido concebir el tipo de expectativas que se nutrieron en los espíritus de esos orgullosos y a la vez temerosos mantuanos, personas que pretendían al mismo tiempo emanciparse políticamente del imperio español y conservar el orden social interno en Venezuela, un orden que les concedía inequívoco predominio social y holgados beneficios económicos? Dicho en otros términos, ¿pecaron de ingenuos los mantuanos, de idealistas, de ilusos? ¿O simplemente erraron en sus cálculos?

Al abordar estas preguntas, y en general la temática esbozada sobre la «alquimia de la política», es necesario enfatizar que no es mi intención condenar *a priori* todo propósito de cambiar un estado de cosas existente, como si tal fin fuese intrínsecamente malo, perverso o inútil. No juzgaré a los mantuanos por haber tratado de cambiar las cosas, sino que procuraré analizar qué idea tenían sobre el cambio deseable, qué quisieron lograr y por qué, estudiando también los elementos de análisis que los patricios criollos tuvieron en cuenta para sustentar sus decisiones. Deseo cuidarme de lo que Hirschman denomina «la retórica de la reacción», es decir, la perspectiva reaccionaria sobre el curso histórico y la idea según la cual cualquier acción dirigida a mejorar algún aspecto del orden sociopolítico vigente, sólo sirve para empeorar la situación que se pretende remediar.⁷ La cautela esencial que reclama la evaluación de cualquier intento por destruir un orden de cosas, en particular uno —como el de la Venezuela colonial— que había perdurado por trescientos años, no implica acoger la tesis reaccionaria que con tino cuestiona Hirschman.

La aproximación teórica que llevaré a cabo en las siguientes páginas no tiene otro objeto que el esclarecimiento de un momento crucial en la historia venezolana, desde la perspectiva de quienes fueron sus principales protagonistas en una etapa originaria. Mi intención es explorar los problemas teóricos que he venido delineando: ¿Qué deseaban y esperaban lograr los mantuanos al asumir el desafío de emancipar políticamente la colonia de España? ¿Tenían algún proyecto alternativo que ofrecer ante lo existente, un proyecto que pudiese alentar el apoyo de otros sectores —la mayoría— menos privilegiados? ¿Lo habían madurado? ¿Aspiraban obtener la adhesión voluntaria de otros grupos sociales, o desconfiaban de ellos y buscaban engañarles? ¿Tenían sentido, en función de las realidades del esquema social vigente e imperante por mucho tiempo, las ilusiones de libertad, justicia e igualdad enarboladas entre 1810 y 1812? ¿Dejaron, en otras palabras, los mantuanos algún espacio para la casi inevitable intervención de lo azaroso e imprevisible, del juego de lo que Maquiavelo llamó la «fortuna» y Clausewitz la «fricción» en los procesos históricos,⁸ o actuaron movidos por una mezcla de miopía, miedo y soberbia, sin atisbar la magnitud de los peligros y del rumbo que emprendían?

7 Albert O. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991, p. 7.

8 Según Maquiavelo, de la fortuna depende «la mitad de nuestras acciones», en tanto que «nos deja a nosotros dirigir la otra mitad, o casi», *El Príncipe*, p. 444.

2

Nuestra indagación tiene que empezar con un recuento sobre las circunstancias sociopolíticas de la Venezuela de principios del siglo XIX. Los historiadores retratan una sociedad dividida y jerarquizada, en la que un sector minoritario, blancos herederos de españoles venidos a estas tierras en los primeros tiempos de la colonización, «españoles de raza más o menos pura nacidos en América»,⁹ disfrutaban de un férreo predominio social y controlaban la riqueza, ejerciendo también funciones político-administrativas a través de los cabildos y otras instancias de la existencia colectiva.

En su *Carta de Jamaica*, escrita en el exilio en 1815, Bolívar se quejaría de que España presuntamente había mantenido a los criollos «en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas [...] abstraídos y [...] ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y la administración del Estado».¹⁰ Pero esta aseveración no se corresponde con los hechos. Más razón tuvo Bolívar al sostener que España había negado a los criollos mantuanos lo que él denominaba «la tiranía activa y dominante»,¹¹ pues ciertamente las autoridades político-administrativas supremas de la colonia estaban en manos de peninsulares. Sin embargo, su papel rector de la vida social, así como su fuerza económica, dieron por mucho tiempo al mantuanismo una notable influencia sobre el manejo de los negocios públicos coloniales, y permitió a ese privilegiado sector de criollos venezolanos «adquirir una prolongada y arraigada experiencia en el manejo y control del correspondiente sistema de la estructura de poder interna».¹²

Los criollos dominantes de la época eran «maestros del trato político»;¹³ pero eran más que eso: al menos hasta mediados del siglo XVIII se acrecentó su participación en la burocracia colonial, aunque a partir de ese momento el cambio de la política imperial hacia América, y el intento español de racionalizar su dominio, erosionó la participación de los

Caracciolo Parra Pérez, *Historia de la Primera República de Venezuela*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 308.

Simón Bolívar, *Obras completas*, vol. I. La Habana: Lex, 1947, p. 165.

Ibid. Al respecto, véase Elena Plaza, *La tragedia de una amarga convicción. Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, 1870-1936*.

Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1996, pp. 329-335.

Germán Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*. Barcelona: Crítica, 1986, p. 43.

John Lynch, *América Latina, entre colonia y nación*. Barcelona: Crítica, 2001, p. 77.

blancos criollos en el manejo político-administrativo de las colonias. No obstante, no cabe duda de que para el momento en que estallan las revoluciones de independencia, y a pesar de la relativa decadencia de su involucramiento directo en la burocracia, los criollos seguían siendo «los principales guardianes del orden social y del Estado colonial».¹⁴ Con relación a Venezuela, «las nueve décimas partes de los autores del movimiento revolucionario estaban en la administración colonial»;¹⁵ administración ésta que no se caracterizó por el despotismo peninsular hacia los mantuanos. «En vano —escribe Vallenilla Lanz— hemos solicitado datos sobre el decantado despotismo de los empleados peninsulares en Venezuela».¹⁶ Por el contrario, y como lo expresa Encina, «Venezuela tuvo hacia el final de la colonia gobiernos políticamente tan templados como la mejor monarquía constitucional moderna [...] Y, sin embargo, el de Venezuela fue el foco revolucionario más precoz y vehemente».¹⁷

¿Por qué?, cabe preguntarse. ¿Qué llevó a los mantuanos, gente que ocupaba «altos empleos» y gozaba «de situaciones privilegiadas»¹⁸ a detonar el torbellino de una revolución que acabó por arrastrarles a ellos mismos, y destruir para siempre el orden social que les favorecía; una revolución —en palabras de Díaz—, «tramada y ejecutada por las personas que más tenían que perder?».¹⁹ ¿Se trató de idealismo o ceguera? ¿O fue un cálculo equivocado hecho con algún atisbo de las consecuencias probables en caso de error?

La decisión mantuana se hace más enigmática si se considera cuál era el contexto social de la colonia venezolana entre 1800-1810. En su estudio sobre la estructura social de la Venezuela colonial, Brito Figueroa señala que el número de españoles peninsulares y de canarios recién llegados al país, hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX apenas ascendía

14 *Ibid.*, p. 141.

15 Parra Pérez, p. 308.

16 Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático y otros textos*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991, p. 49. Parra Pérez también se refiere a «las benignas autoridades coloniales», que sólo pocas veces mostraron «aquella ferocidad y rigor que universalmente se les atribuye», *Historia...*, p. 37.

17 Francisco A. Encina, *Bolívar y la independencia de la América española*, vol. I. Santiago: Nascimento, 1957, p. 333. Al respecto, dice McKinley que «los representantes imperiales enviados a Caracas a partir de 1775 tendían a gobernar y actuar según los intereses de la provincia y de acuerdo con las élites locales».

Véase P. Michael McKinley, *Caracas antes de la Independencia*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1987, p. 12.

18 Parra Pérez, p. 308.

19 José Domingo Díaz, *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 73.

a 12.000 personas (1.3% de la población). Los blancos no peninsulares y canarios recién llegados (incluyendo al muy pequeño sector mantuano), que Brito Figueroa engloba bajo la categoría un tanto confusa de «blancos criollos» (en realidad, también incluía a los canarios de más vieja data y sus descendientes), sumaban 172.000 personas (19%). Los denominados «pardos», es decir, personas que eran producto de la mezcla entre blancos y negros, alcanzaban unos 407.000 (45%); los negros (esclavos y cimarrones) sumaban alrededor de 111.800 (12.3%), en tanto que los diversos grupos de indios llegaban al 18.4% (161.300 personas).²⁰

Usando otras y variadas fuentes, John Lynch presenta cifras aproximadas a las de Brito Figueroa, pero expone la composición social de la colonia en términos más claros y ajustados a la realidad política de la misma.²¹ Ello es así pues Lynch distingue entre, de un lado, los españoles peninsulares (0.18%, unas 1.500 personas solamente), y de otro lado los canarios recién llegados al país (1.25%, unas 10.000 personas).

Por otra parte, y esto me parece de importancia fundamental, Lynch indica que los *criollos de la élite social* (mantuanos) sumaban tan sólo entre 2.500 y 4.000 personas (0.31% de la población total), en tanto que los llamados por Lynch (también de manera un tanto confusa) «canarios criollos», mejor conocidos como «blancos de orilla» (sector que incluía criollos pobres, así como numerosos descendientes de canarios a veces con muchos años en el país) sumaban unas 190.000 personas (23.75%).

Estos «blancos de orilla» eran individuos que carecían de la consideración social de que gozaban los mantuanos, pero «a pesar de todo, su “blancura” les daba las mejores posibilidades de ascenso social dentro de estos niveles sociales en los que los pardos —frecuentemente relacionados con ellos— hacían notar cada vez con más ímpetu la fuerza de su presencia y de su número».²² Los «blancos de orilla» eran los hijos de inmigrantes blancos que no formaban parte del círculo mantuano y que

Federico Brito Figueroa, *La estructura social y demográfica de Venezuela colonial*. Caracas: Ediciones Historia, 1961, p. 58.

John Lynch, p. 107. Por otra parte, según Alejandro de Humboldt, citado por Lynch, «En Hispanoamérica hacia 1800 [...] en una población total de 16.9 millones, 3.2 eran blancos, y de éstos sólo 150.000 eran peninsulares». De hecho, comenta Lynch, «el verdadero número de peninsulares era aún más bajo, cercano a los 30.000 y no mayor de 40.000 en toda Hispanoamérica». *Hispanoamérica 1750-1850. Ensayos sobre la sociedad y el Estado*. Bogotá: Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1987, pp. 31-32.

Graciela Soriano de García-Pelayo, *Venezuela 1810-1830: Aspectos desatendidos de dos décadas*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1988, p. 44.

20

21

22

se hallaban subestimados por los miembros de esa exclusiva élite, dentro de una sociedad en la cual la riqueza no era vista como factor predominante de estratificación. Los factores clave que determinaban la jerarquía social eran realmente «el color, el rango y el privilegio»,²³ elementos todos que los mantuanos sometían al más estricto monopolio en aras del sostenimiento de su posición incuestionada en la cúspide de la pirámide, posición obtenida por sus antepasados y protegida por sus descendientes. Esa pirámide social se sustentaba, como hemos visto, en una amplia base productiva de 400.000 pardos y alrededor de 200.000 «blancos de orilla» (75% de la población total), que hervían de resentimiento a raíz del menosprecio y los ultrajes de la ínfima élite mantuana.²⁴ Al respecto, dice Vallenilla Lanz que «no eran clases en realidad las que existían (en Venezuela), sino verdaderas castas, con todos los caracteres de repulsión, de exclusión y de antagonismo feroz que tienen hoy mismo en la India».²⁵

En síntesis, para la mayoría de los habitantes de la Venezuela de principios del siglo XIX, en especial la gran masa de pardos y esclavos, los mantuanos eran los opresores, y las autoridades peninsulares una especie de «campeones de la igualdad y, en todo caso, defensores naturales contra la opresión» de la oligarquía criolla.²⁶

23 *Ibid.*, p. 50.

24 Dice Juan Uslar Pietri que los mantuanos constituían «una oligarquía que quería todo para ella. Su principal distinción era el color. Aparecer con la piel un poco morena o ligeramente tostada era un delito. De aquí que las damas de la sociedad colonial y lo mismo los caballeros, eludían lo más posible el contacto con el sol, evitando de esta manera levantar sospechas y maledicencias entre quienes poco les conocían [...] Esta posición de la alta clase venezolana les granjearía antipatía ilimitada, no solamente por los pertenecientes a la clase media, sino también por los esclavos y los funcionarios españoles, pues estos últimos sabían que la mayor parte de aquellos señores eran nobles del día anterior, con orígenes oscuros, puesto que ningún título de Castilla vino a Venezuela, colonia considerada pobre en relación a los virreinos de Méjico y Perú, donde sí fueron algunos». *Historia política de Venezuela*. Madrid-Caracas: Mediterráneo, 1975, pp. 10-12. Véase Germán Carrera Damas, *Una nación llamada Venezuela*. Caracas: Ediciones de la Dirección de Cultura, ucv, 1980, p. 41.

25 Laureano Vallenilla Lanz, *Críticas de sinceridad y exactitud*. Caracas: Garrido, 1956, p. 156. Lynch afirma que «Al final del período colonial, Venezuela era una sociedad de castas, dividida más o menos según una definición legal». *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*. Barcelona: Ariel, 1998, p. 106.

26 Santiago Gerardo Suárez, «Conflictividad social de la reforma militar dieciochista», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*, tomo IV. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, p. 235. Sobre este punto, véase también Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, pp. 45-46.

3

La élite mantuana era también rica,²⁷ aparte de considerarse a sí misma socialmente superior. Hacia la mitad del siglo XVIII, el 1.5% de la población de la provincia de Caracas monopolizaba todas las tierras cultivables de la zona; y al final de la etapa colonial la aristocracia criolla, que comprendía 658 familias, congregaba unas 4.000 personas: «Sus miembros habitualmente vivían en la ciudad y se mostraban activos en las instituciones que las prácticas españolas habían abierto para ellos, los cabildos, el consulado y la milicia».²⁸ Esta oligarquía comenzó a experimentar crecientes tensiones tanto con los españoles, representantes de la Corona en Venezuela, como con los pardos y blancos pobres, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, como reacción a una nueva y más dinámica política imperial. Sin embargo, su puesto en el orden social, el dominio que ejercían en el marco de la sociedad colonial y que en ocasiones les llevaba a colocarse en un plano de igualdad y hasta de superioridad ante las autoridades peninsulares,²⁹ seguían básicamente incólumes para el momento en que los orgullosos mantuanos se decidieron por la emancipación. ¿Qué les movió a ello? ¿Por qué arriesgaron su poder en el torbellino de una revolución?

Lo aventurado de esa determinación ha llevado a Parra Pérez a sostener que «nuestros criollos no tenían serias e irrefutables razones de descontento contra el régimen [español, AR]»;³⁰ y Vallenilla Lanz nos recuerda que ese grupo social había rechazado, poco tiempo antes de su decisión independentista, la rebelión de Gual y España —dos «blancos de orilla»— suprimida con implacable dureza en 1797, y adversaron el intento de invasión mirandino de 1806.³¹ Según Parra Pérez, «los mantuanos y grandes burgueses se apresuraron a condenar aquel conato...» (el de Gual y España), ofreciendo al Capitán General «sus personas y haciendas para el servicio de la Corona y el mantenimiento de la tranquilidad pública, puestos en peligro por un plan “infame y detestable” que se

McKinley, pp. 119-122. 27

Lynch, *Las revoluciones...*, p. 190. 28

Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, pp. 40-48; Uslar Pietri, pp. 20, 22. 29

Parra Pérez, p. 3. Sobre este punto, y con particular referencia a la prosperidad económica de la colonia venezolana, consúltese McKinley, pp. 11-12, 228-229. 30

Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, p. 49. 31

proponía destruir la jerarquía entre las clases...». ³² Estos mismos nobles criollos encabezarían la rebelión que eventualmente daría al traste no sólo con lo que restaba del imperio español en Venezuela, sino también con el orden social que proveía sus privilegios. ¿Qué pasó?

Existe consenso entre un distinguido grupo de historiadores sobre el impacto negativo que tuvo sobre la conciencia mantuana la llamada «segunda conquista de América», ³³ emprendida por España a mediados del siglo XVIII. Me refiero al esfuerzo español para racionalizar los vínculos con su imperio colonial. Hacia esas fechas «la metrópoli se da cuenta de que América ha dejado de ser un buen negocio, porque virtualmente todo el producto americano se queda en América; sólo una porción muy pequeña llega a la metrópoli». ³⁴ A partir de ese momento la Corona, mediante una política de «despotismo ilustrado», se esfuerza por restaurar un mayor control en sus colonias, afectando así los ya bastante consolidados intereses de la oligarquía criolla y exacerbando las tensiones en lugar de aplacarlas. Según explica Encina:

Para corregir los abusos, dar eficiencia a los servicios y poder realizar las obras de progreso, el gobierno español tuvo que intervenir enérgicamente en la administración local. Necesitó vencer la indolencia y la rutina, invadiendo actividades que estaban en manos de los criollos, dueños de los cabildos, o que hacían parte del cuerpo de funcionarios. Para costear las nuevas obras, fue necesario regularizar la relajada recepción de las rentas y aun imponer algunas contribuciones. Dada la disposición sentimental de los criollos, los beneficios de la nueva política [...] no podía encontrar en ellos comprensión simpática... ³⁵

32 Parra Pérez, p. 39. «Por iniciativa propia —escribe Elías Pino Iturrieta— los criollos [...] pusieron a la orden del gobernador sus vidas y sus haciendas con el objeto de eliminar aquella «abominable delincuencia» fraguada por las categorías sociales inferiores». *La mentalidad venezolana de la emancipación, 1810-1812*. Caracas: Facultad de Humanidades y Educación, UCV, 1971, p. 66. Humboldt observó durante su permanencia en el país que los mantuanos adversaban la independencia, debido a que «no ven en las revoluciones sino la pérdida de sus esclavos»; y añadía que «aun preferirían una dominación extranjera a la autoridad ejercida por americanos de una casta inferior». Citado por Lynch, *Las revoluciones...*, p. 189.

33 La frase es de Lynch, *ibid.*, p. 14.

34 Carrera Damas, *Una nación...*, p. 44.

35 Encina, vol. 1, p. 331. Dice Lynch que la reforma imperial «plantó las semillas de su propia destrucción: su reformismo despertó apetitos que no podía satisfacer, mientras que su imperialismo lanzaba un ataque directo contra los intereses locales y perturbaba el frágil equilibrio de poder dentro de la sociedad colonial», *Las revoluciones...*, pp. 9-10. La política «ilustrada» de los Borbones resultó, pues, una provocación a las oligarquías criollas, y la provocación «tiene lugar no cuando la metrópoli está inerte, sino cuando actúa», p. 12. Véase, también, *ibid.*, pp. 23-25, 29. Igualmente, Lynch, *América Latina...*, pp. 88-89, 92, 119.

Los nuevos impuestos y la invasión burocrática desde la península agudizaron la irritación de las oligarquías locales en América, a lo que se sumó el efecto de los intentos españoles dirigidos a reducir los privilegios de los criollos y flexibilizar la rígida estructura social imperante. Esta política de apertura hacia los pardos y blancos de orilla tuvo enorme impacto sobre el mantuanismo venezolano. Los patricios criollos empezaron a sentir miedo, casi pánico, ante la amenaza que representaba el ascenso social de las «castas», estimulado por una Corona que requería dinero y que observaba con creciente rechazo la altanería criolla. De allí la Real Cédula de «Gracias al Sacar» de 1795, que posibilitó a los pardos convertirse, mediante un pago, «en blancos, usar el apreciado (calificativo de) don, y ser tenidos por (hijos) legítimos».³⁶ Cabe imaginar, señala Juan Uslar Pietri,

... la consternación y el pánico que han debido cundir entre aquellas gentes ahítas de prejuicios. Ver de la noche a la mañana que sus privilegios se les esfuman y que cualquier mulato que hasta ayer miraban por encima del hombro puede ahora [...] sentarse en la sala de su casa, de quien a quien, y portar el título de don. ¡Ellos, que despreciaban a los blancos de orilla y hasta los canarios y los propios peninsulares!³⁷

La aristocracia venezolana se opuso con ferocidad a la política de igualación social promovida por las autoridades españolas, rechazando una nueva ley de esclavos, protestando las disposiciones favorables a los pardos y oponiéndose a la educación popular, en lucha vehemente contra toda «amalgama de blancos y pardos», situación que el Cabildo de Caracas juzgaba así:

La abundancia de pardos que hay en esta Provincia, su genio orgulloso y altanero, el empeño que se nota en ellos por igualarse con los blancos, exige por máxima de política, que Vuestra Majestad los mantenga siempre en cierta dependencia y subordinación a los blancos, como hasta aquí: de otra suerte se harán

Uslar Pietri, p. 20. Sobre las protestas del Cabildo caraqueño contra la Real Cédula de «Gracias al Sacar», véase Alí Enrique López B., «La aristocracia venezolana frente a la Real Audiencia de Caracas: una razón para la independencia de Venezuela», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*, tomo III, pp. 100-103.

36

Uslar Pietri, p. 20.

37

insufribles por su altanería y a poco tiempo querrán dominar a los que en su principio han sido sus Señores.³⁸

El mantuanismo venezolano fue el único grupo organizado en todo el imperio español en América «que puso en marcha una defensa decidida y eficaz» contra la Real Cédula, y «el celo demostrado por el Ayuntamiento caraqueño en la defensa del sistema de castas y de la discriminación social y racial es realmente impresionante».³⁹ Si bien es cierto que la política reformista española granjeó a la Corona la animadversión de los grupos privilegiados en las colonias, es de presumir que la misma fue aprobada por los sectores sociales mayoritarios, particularmente en Venezuela.⁴⁰

4

Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el imperio español funcionaba esencialmente como «imprescindible fuente de acatamiento y legitimación de la estructura de poder interna».⁴¹ Dicha legitimidad —entendida como «el supuesto que hace posible el reconocimiento y la aceptación del ejercicio del poder en cualquier sociedad»—,⁴² constituía un sustento clave del mecanismo de dominación de la oligarquía criolla, cuya posición en el seno de la sociedad colonial había estado por siglos estrechamente asociada a los factores de estabilidad proporcionados por la veneración cuasi religiosa de los sectores populares al Rey y sus representantes. No existían en Venezuela otros elementos de legitimidad que no fuesen los derivados de la simbología monárquica, pues los hábitos de servidumbre y/o deferencia de pardos y blancos pobres al mantuanismo no eran sino eso, hábitos dolorosos; en cuanto a los esclavos negros,

38 Citado en Lynch, *Las revoluciones...*, p. 27.

39 Carrera Damas, *Una nación...*, p. 41.

40 Las reformas, sin embargo, tuvieron escasos efectos prácticos, posiblemente debido al éxito de las protestas mantuanas; McKinley, p. 166.

41 Germán Carrera Damas, *La disputa de la independencia*. Caracas: Ediciones GE, 1995, p. 25.

42 Soriano, p. 104.

su sumisión era forzada. De modo que al afectar en forma directa y violenta ese esquema de legitimación, ofreciendo como sustituto una versión «aérea» de república oligárquica (el calificativo «república aérea» es del propio Bolívar, en su *Manifiesto de Cartagena* de 1812), los mantuanos asestaron un golpe irreparable a la estructura de poder que les sostenía. Sobre este punto, Lisandro Alvarado observó en un discurso de 1923:

Hacia 1810 era apenas posible la discusión y propaganda del sistema republicano [...] En cambio la monarquía era el Rey, algo concreto, idolátrico, definido en los textos sagrados, en las pláticas del amo, del noble, en la conseja del mayordomo, del plebeyo. Prácticamente no se sabía qué cosa fuese la república, ni al fin se supo sino por obra del triunfo, o lo que es lo mismo de la fuerza. Era natural que la mayoría fuera realista...⁴³

La decadencia de España hacia finales del siglo XVIII —decadencia relativa a sus principales competidores europeos—, no había sido suficiente aun para desequilibrar los vínculos mentales e ideológicos que daban forma a la legitimidad monárquica entre las clases populares. Mas, al procurar cambios en la estructura social a favor de esas clases, la Corona contribuyó a que se resquebrajase «la virtual concertación existente entre los grupos superiores nativos de la sociedad colonial y los mandatarios peninsulares de las provincias americanas».⁴⁴ El resultado final de las tensiones entre el mantuanismo venezolano y España fue la *pérdida de confianza* de los mantuanos hacia la Corona, sensación que pronto derivó hacia la convicción de que ellos, los mantuanos, no tenían otra opción que la de tomar en sus manos la defensa del orden social existente, en vista de la complacencia monárquica hacia las «castas» y de la crisis aparentemente terminal de España en 1808-1810, luego de ocupada la península por las tropas napoleónicas.

Para recapitular, la «segunda conquista de América» por parte de España incluyó en el caso venezolano —y otros— una política reformista en materia social, favorable a los grupos mayoritarios y percibida como amenazante por parte del sector dominante, grupo que concedía gran

Citado en Germán Carrera Damas, *La crisis de la sociedad colonial venezolana*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1983, p. 33.

Suárez, p. 234.

43

44

importancia al rango y sus privilegios. No obstante, existía una estrecha relación entre los factores que contribuían a crear un contexto de legitimidad, es decir, de aceptación del orden establecido, y la posición mantuana en la colonia. Esos factores eran las tradiciones y prácticas derivadas de trescientos años de presencia imperial, simbolizada en la autoridad monárquica. Sin la Corona, los mantuanos eran tan sólo un sector social rico y poderoso; con la Corona, los mantuanos eran también un sector rico y poderoso, *pero inserto dentro de un orden de cosas aceptado como legítimo*. La diferencia puede parecer sutil, pero es crucial.

5

Los mantuanos actuaron a favor de la independencia movidos por la ambición de poder,⁴⁵ y estimulados por el miedo⁴⁶ a perder su posición de dominio social en la colonia. La crisis de legitimidad originada por la ocupación napoleónica de España y la abdicación borbónica abrió posibilidades que fueron aprovechadas, en medio de un torbellino de ilusiones, ceguera, azar, autoengaño y temor propios de este tipo de eventos. Un pequeño grupo social, lleno de prejuicios de casta, que se había enseñoreado de Venezuela y sembrado imborrables semillas de odio, se atrevió a dar el paso hacia la conquista de esa «tiranía doméstica» de la que más tarde hablaría Bolívar, corriendo riesgos que a la postre se mostraron excesivos, o, más bien —dadas las circunstancias— insensatos. ¿Qué esperaban los mantuanos de parte de esa mayoría social que les veía como sus opresores? ¿Es que acaso presumían ser capaces de cambiar el esquema de dominación política preservando prácticamente incólume el orden social?

Tanto Carrera Damas como Lynch argumentan que la independencia fue un acto político preventivo, «de intención conservadora en lo social»,

45 Parra Pérez, pp. 8, 220, 308; Encina, vol. 1, p. 287; Lynch, *América Latina...*, p. 118; Lynch, *Las revoluciones...*, pp. 28-29, 30, 33.

46 Soriano, p. 61.

cuyo objetivo clave era la preservación de la estructura de poder interna.⁴⁷ Estos autores sostienen que fue el temor a una inminente guerra social lo que precipitó la acción mantuana. Los oligarcas criollos, colocados en el ojo del huracán histórico que empezaba a tomar forma, concluyeron que «llegaba el momento en que tendrían que adelantarse a la revolución para salvarse a sí mismos».⁴⁸ Lo paradójico de esta tesis reside en la fórmula que considera aconsejable desatar una revolución para detener otra. Es posible que no pocos mantuanos hayan pensado en esa dirección. Interesa igualmente tener presente que no existía unanimidad en el seno del mantuanismo; los grupos más radicales e idealistas eran minoritarios, pero, como casi siempre ocurre, también eran los más militantes y exaltados, capaces de arrastrar a los moderados y timoratos en momentos clave.⁴⁹

Si admitimos que las circunstancias eran ciertamente muy complejas —desde la perspectiva mantuana—, y que la «huida hacia adelante» (hacer una revolución para conjurar otra, más radical y peligrosa) no era una noción descabellada para algunos, las interrogantes que se plantean a objeto de evaluar el proceso son éstas: 1) ¿Qué esperaban los mantuanos, un cambio pacífico o uno violento? 2) ¿Qué ofrecían como alternativa, qué programa político tenían y con qué aspiraban sustituir el principio legitimador monárquico hasta entonces existente? 3) ¿Apelaron los mantuanos al engaño deliberado para hacer aceptable su «revolución conservadora» a las «castas»?; y si es así, ¿cuánto tiempo confiaban que duraría el engaño y de qué recursos disponían para hacer frente a una si-

Carrera Damas, *La disputa...*, pp. 12, 37-39; *Venezuela...*, p. 73; *Una nación...*, p. 49; *La crisis...*, p. 23; Lynch,

Las revoluciones..., pp. 193-197, 342. La definición que da Carrera Damas de «estructura de poder interna» es ésta: «Por estructura de poder interna entiendo el sistema de relaciones que en los diversos planos de lo social se establece entre las clases. Ese sistema determina la capacidad de cada clase —y por consiguiente de los grupos e individuos que la integran— para influir en el desenvolvimiento global o sectorial de la sociedad. En virtud de la estructura de poder interna la clase que ocupa la posición más elevada tiene la capacidad de dirigir, y en cierta forma de controlar, la totalidad de la sociedad». *Venezuela...*, pp. 113-114. Sobre esta temática puede consultarse también la obra de Miguel Izard, *El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela, 1777-1830*. Madrid: Tecnos, 1979.

Lynch, *América Latina...*, p. 169; Carrera Damas, *Una nación...*, p. 54.

Véase al respecto, Pino Iturrieta, *ob. cit.*, p. 219. McKinley señala que «muchos [...] de los activistas radicales no pertenecían a la élite colonial», sino que provenían —como Miranda, Sanz, Madariaga,

Isnardi y Roscio, entre otros— de «las esferas medias de la sociedad de la provincia [...] El grupo radical de 1810 era pues una curiosa mezcla de revolucionarios de las élites y de sus seguidores de clase media», pp. 221-222. Los moderados demostraron una «patente falta de resolución e ingenio frente a la adversidad política», debilidad que McKinley, citando la conocida obra de Brinton sobre las revoluciones, atribuye a la fragilidad «casi orgánica» de la posición de los moderados en cualquier situación revolucionaria. Véase Crane Brinton, *Anatomía de la revolución*. Madrid: Aguilar, 1962, pp. 154-157.

47

48

49

tuación en la cual esa manipulación de las masas, predominantemente realistas para entonces, dejase de surtir efecto?

Los eventos de 1810-1811 tienen lugar en una sociedad cuya población, en su mayoría, apoyaba al Rey y se apegaba a los esquemas del orden político tradicional.⁵⁰ Ahora bien, en ese contexto social, el empeño por llevar a cabo una revolución de parte de un sector tan minoritario y odiado tenía de por sí un aspecto temerario, y no sorprende que autores como Caracciolo Parra Pérez, Juan Uslar Pietri y Graciela Soriano, entre otros, hayan escrito que «un viento de locura soplabá sobre los mantuanos», que estos últimos «no parecían percatarse del todo de la trascendencia de sus decisiones y de sus acciones», o, sencillamente, «no se daban cuenta de lo que estaban haciendo».⁵¹ Como dice Parra Pérez, «los próceres venezolanos, como sucede en general con los actores de toda revolución, carecían de plan definido, y siguieron dichos sucesos en vez de conducirlos...».⁵² Cabe preguntarse, no obstante, ¿les exime esta miopía política de responsabilidad histórica ante sí mismos, como sector social dominante y, además, como el único grupo medianamente ilustrado en su sociedad? No lo creo; pienso por el contrario que resulta imperativo indagar más a fondo y escudriñar no ya los motivos que les impulsaron a actuar —pues hemos visto que eran la ambición y el miedo— sino sus aspiraciones, expectativas y proyectos, para de ese modo esbozar un juicio más equilibrado acerca del rango político y ético de sus decisiones.

En tal sentido, llaman la atención las ilusiones mantuanas, la capacidad de autoengaño puesta de manifiesto por un grupo que hasta hacía muy poco tiempo dominaba la sociedad, y que ahora, como quien da un salto mortal a la ligera, pretendía construir una república de seres virtuosos, todavía bajo su exclusivo mando y con la esperanza de una pronta y pacífica estabilización. Basta leer las Actas del Congreso de 1811-1812 para constatar, por un lado, el despliegue fantasioso del mantuanismo, y

50 Según Parra Pérez, la gran masa de la población venezolana era «conservadora, fiel al rey y a la religión»; la mayoría prefería «el régimen imperante, imparcial si no liberal, al posible dominio de los aristócratas criollos, cuya vanidad era incommensurable y anunciaba abusos y tiranías de todo género», y de hecho, «la opinión general fue en Venezuela, hasta 1820, hostil a la independencia», pp. 153, 158, 197-199, 573. Véase también Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, p. 21; Plaza, p. 234; Encina, vol. II (1958), p. 654. Y en una carta fechada en Kingston el 16 de junio de 1816, Juan Germán Roscio decía lo siguiente a Martín Tovar Ponte: «Pero quién ignora que casi todos los que en América han sostenido la causa del tirano, y la sostienen, son americanos? Son poquísimos los españoles que se hallan en las tropas del tirano en América. Su número es muy inferior al de los criollos». Citado por Carrera Damas, *La crisis...*, p. 62.

51 Parra Pérez, p. 174; Soriano, p. 64; Juan Uslar Pietri, *Historia de la rebelión popular de 1814*. Caracas-Madrid: Edime, 1972, p. 21.

52 Parra Pérez, p. 168.

por otro las tensiones que se expresan en el pensamiento de estos próceres, acosados por una mezcla de temor y espíritu de aventura.⁵³

Los oligarcas criollos hablaban de un proceso independentista mediante el cual «vamos a recobrar enteramente nuestros derechos y todos los bienes inseparables de tan preciosa adquisición»; vislumbraban «torrentes de prosperidad [que] van a sucederse a los siglos de ignominia», y confiaban que lo hecho el 19 de abril y luego el 5 de julio garantizaba la paz social, pues «en vez de haberse visto derramar una gota de sangre hemos observado, al contrario, que el juicio y la moderación han resplandecido en todas las clases de la sociedad». Contra toda evidencia garantizaban que el pueblo deseaba la independencia,⁵⁴ ya que la misma «nos traería bienes incalculables».⁵⁵ Predominaba una convicción de acuerdo con la cual el nuevo esquema de dominación no enfrentaría decisivos obstáculos, ya que el hombre americano, dotado de grandes cualidades, «está destinado a componer en el Universo el papel más brillante y sublime de que la historia de la especie humana jamás nos dará un ejemplo». Las nuevas naciones, roto el lazo que les unía a España, alcanzarían un lugar de distinción semejante al de las potencias europeas, y la ignorancia, atraso y apego a las tradiciones por parte de las mayorías populares no debían inducir a la prudencia «ni [ser] un óbice para esta declaratoria [de independencia]».⁵⁶

No se les escapaba a los mantuanos la lección de otros precedentes revolucionarios, pero confiaban que su prédica a favor de una transición pacífica obraría el milagro de distinguir este proceso de experiencias anteriores. En palabras de Francisco Isnardi en 1811, «La revolución de América no debe compararse con las que han producido la ambición y el fanatismo: el deseo de elevar al augusto rango de Patria a un país usurpado y convertido hace tres siglos en la heredad de propietarios distantes y co-

Francisco Encina apunta que, durante el período independentista, en toda la América hispana se evidenció escasa originalidad y profundidad en la reflexión política. En esta etapa —a su modo de ver— «sólo se advierte el más absoluto vacío de pensamiento político», *ob. cit.*, vol. 1, p. 286. Este juicio puede lucir exagerado; no obstante, me parece cierto que no se produjo en esos tiempos de la América española, en lucha por su emancipación, nada comparable en densidad intelectual y organicidad conceptual a los *Federalist Papers* de la revolución de independencia norteamericana.

Sobre la reflexión política en la Venezuela de entonces es útil el volumen *Pensamiento político de la emancipación venezolana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988; sobre el resto de la América española, véanse los dos volúmenes *Pensamiento político de la emancipación*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

Congreso Constituyente de 1811-1812 (Actas), tomo 1. Caracas: Publicaciones del Congreso de la República de Venezuela, 1984, pp. 111, 132, 145.

Artículo de 1811 publicado en *El Patriota de Venezuela*, citado por Pino Iturrieta, p. 130.

Ibid.

53

54

55

56

rrompidos, no debe confundirse con los incendiarios conatos de los usurpadores, de los tiranos o de los conquistadores». ⁵⁷ La actitud propensa al autoengaño asume en ocasiones visos irrisorios, cuando uno de los congresantes afirma que «jamás podrán seguirse ningunos males de los principios justos y equitativos», frase que revela con especial patetismo la tendencia a creer que leyes y principios abstractos eran capaces por sí solos de cambiar la realidad y ajustarla a sus designios. Así, otro congresante propone que la independencia no sea declarada sin antes promulgar «una ley que contenga los excesos». ⁵⁸ ¡Notable y riesgosa ingenuidad! ⁵⁹

Revela especial lucidez el testimonio del Regente Heredia, quien observó con estupor «la constante contradicción» entre, por un lado, la «conducta práctica» de los patricios criollos y sus aliados, y por otro «los bellos raciocinios filosóficos de que han llenado sus proclamas, sus periódicos ministeriales y los preámbulos de sus edictos». Para Heredia, la Sociedad Patriótica, especie de club del sector radical, era una «casa de locos», en la que se maduró «el insensato proyecto de dar a Venezuela casi en la infancia de la civilización, y poblada de esclavos, y tantas castas heterogéneas y opuestas entre sí, las instituciones republicanas que no había podido sufrir la ilustrada Francia, la Grecia de nuestros días...». En síntesis, dice Heredia en sus dramáticas memorias, los revolucionarios criollos «De golpe y en un día quisieron allanarlo todo, y ponerlo a un nivel, a ejemplo de lo que practicó la Asamblea Constituyente de Francia, como si fuera tan fácil destruir las colinas y desigualdades de un terreno que se ha formado en muchos siglos». ⁶⁰

La «cuestión social» ocupó lugar secundario en las deliberaciones mantuanas. Parecía que la vislumbraban, pero no deseaban verla de frente; rozaban el tema pero no lo abordaban en sus gravísimas implicaciones, ⁶¹ aunque en algún momento admiten que «la suerte y condición

57 Publicado en *El Mercurio Venezolano*, y citado en *ibid.*, p. 100.

58 *Congreso Constituyente...*, tomo 1, pp. 127, 205.

59 Vallenilla Lanz prefiere hablar de «error psicológico» en lugar de emplear el más sencillo calificativo de «ingenuidad», al referirse al inocente idealismo de buen número de mantuanos; *Cesarismo...*, p. 65; véase igualmente, *ibid.*, pp. 40-41, 45-46.

60 José Francisco Heredia, *Memorias del Regente Heredia*.

Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1986, pp. 33, 46.

61 «Así, por ejemplo, el tema [social, AR] afloraba cuando se trataban problemas relacionados con el federalismo y la competencia institucional. ¿Era el Congreso el órgano idóneo para el reconocimiento de la igualdad de los pardos, o eran las asambleas provinciales las que estaban llamadas a hacerlo? Y los problemas de competencia se seguían entrecruzando con las interminables discusiones acerca de la forma federal o centralista que se le había de dar al nuevo Estado...», Soriano, p. 65.

de los pardos» debe ser asunto prioritario a considerar «después de la independencia». ⁶² Personalidades aisladas como el Licenciado Garri-do, miembro de la Sociedad Patriótica, atinan a advertir acerca de los peligros de una guerra intestina en ciernes, pero los mantuanos, como anota Parra Pérez, «al fundar la República, acariciaban la ilusión de conservar-la siempre bajo su dominación, sin poner mientes en que su corto número debería pronto ceder ante el muy considerable de las castas de color». ⁶³

No tenían los nobles criollos una propuesta política concreta para el resto de la sociedad, excepto la muy limitada —pero acorde con sus intereses— de crear una república oligárquica, ⁶⁴ en cuyos esbozos de 1810-1811 se percibía claramente su carácter exclusivista, si bien no faltaron las piezas oratorias cargadas de emotiva y fugaz demagogia, exhortando a que «Entre blancos, indios, pardos, y negros debe haber la mayor unión: todos debemos olvidar cualquier resentimiento que subsista entre nosotros, reunirnos bajo un mismo espíritu y caminar a un mismo fin». ⁶⁵ En la práctica, sin embargo, los mantuanos actuaron como si «esos principios eran válidos sólo para ellos, y no para la pujante mayoría que hasta entonces habían logrado contener...». ⁶⁶

Hubo escasas voces que advirtieron desde el seno del mantuanismo sobre los peligros de una política contradictoria, que despertaba expectativas sin ánimo de cumplirlas de hecho. Por ejemplo, en la sesión del Congreso del 31 de julio (1811), Francisco Javier Yanes, diputado de Arau-re, señaló: «Los pardos están instruidos, conocen sus derechos, saben que por el nacimiento, por la propiedad, por el matrimonio y por todas las demás razones, son hijos del país; que tienen una Patria a quien están obligados a defender [...] Alterar estos principios y negar a los pardos la igualdad de derechos es una injusticia manifiesta, una usurpación y una política insana, que nos conducirá a nuestra ruina». ⁶⁷

Estas palabras, sin embargo, no fueron tomadas en cuenta a la hora de formular el nuevo esquema institucional, esquema que plasmó un inequívoco contraste entre una teorización liberal y una práctica discri-

Ibid., p. 126.

Parra Pérez, p. 336.

Parra Pérez, pp. 220, 262.

Declaración de 1811 sobre los *Derechos del hombre y del ciudadano*, con varias máximas republicanas, en Pino Iturrieta, p. 139.

Soriano, p. 65.

Congreso Constituyente..., tomo 1, p. 206.

62

63

64

65

66

67

minatoria. Ya la *Declaración de los Derechos del Pueblo* del 1.º de julio de 1811 había establecido que «Los ciudadanos se dividirán en dos clases: unos con derecho a sufragio, otros sin él [...] Los que no tienen derecho a sufragio son los transeúntes, los que no tengan la propiedad que establece la Constitución; y éstos gozarán de los beneficios de la ley, sin tomar parte en su institución». ⁶⁸ Si bien es cierto que la Constitución afirmó «la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad», y abolió los fueros y expresiones legales de discriminación sociorracial, ⁶⁹ la misma consagró una desigualdad real sustentada en el sufragio. En palabras de Lynch, «Para los pardos [...] era una ilusión de igualdad. Y los esclavos continuaron siendo esclavos». ⁷⁰

Los más lúcidos miembros del mantuanismo creyeron necesario asumir una política «gatopardiana», ⁷¹ es decir, una política orientada a hacer cambios pero para preservar lo fundamental. ⁷² Considero, por otra parte, que la evidencia no tiende a confirmar la interpretación de este respetado historiador cuando sostiene que para los mantuanos la preservación de la estructura de poder interna «suponía la del principio monárquico, y las diferencias con la Regencia española no podían llegar hasta el desmantelamiento del orden social tradicional». ⁷³ Los mantuanos no querían desmontar el orden social; aspiraban mantenerlo y conquistar el poder político. No obstante, el mero hecho de avanzar hacia la independencia y luego proclamarla constituía un golpe mortal contra el vínculo que les ataba al principio de legitimidad monárquico. La realidad de que los patricios criollos carecieran de un principio sustitutivo lo suficientemente articulado y maduro no obsta para constatar que,

68 *Textos oficiales de la Primera República de Venezuela*, vol. II. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, p. 95.

69 El texto estipuló lo siguiente: «... quedan revocadas y anuladas en todas sus partes las leyes antiguas que imponían degradación civil a una parte de la población libre de Venezuela conocida hasta ahora bajo la denominación de *pardos*». Véase *La Constitución federal de Venezuela de 1811*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, p. 205.

70 Lynch, *Las revoluciones...*, p. 195. Según Carrera Damas, las concesiones de los mantuanos «eran más formales que reales»; *La crisis...*, p. 93. Los mantuanos intentaron también establecer un sistema de trabajo forzado (las «Ordenanzas de los Llanos») en detrimento de los pardos, *ibid.*, p. 32. Otras leyes de la época, como las que se referían al «indiferentismo político» o a la «prohibición de emigrar», afectaban «hasta desvirtuarlos, los principios de la libertad en nombre de la cual se habían desencadenado todos los acontecimientos». Soriano, pp. 67-68.

71 El término se deriva de la novela de Lampedusa, en la que el personaje principal dice: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie». G. T. Di Lampedusa. *El gatopardo*. Madrid: Cátedra, 1991, p. 66.

72 Carrera Damas, *Venezuela...*, p. 62.

73 *Ibid.*, p. 115.

al menos, llevaron a cabo el intento de presentarlo, concebido como un proyecto de república cuyo igualitarismo teórico en el plano político disfracaba un esquema oligárquico de dominación social.

6

La formulación de un marco institucional como el que se manifiesta entre 1810-1811 no es algo que parezca, en principio, totalmente descabellado desde la perspectiva mantuana, *hasta tanto se analizan las circunstancias sociales imperantes*. Una vez consideradas éstas, resultaba poco menos que ingenuo de parte de la oligarquía criolla presumir que la ruptura del principio de legitimidad monárquico —con el cual se asociaba íntimamente la estructura de poder colonial—, pudiese ser llevada a cabo sin una conmoción de gran magnitud. La intuición de que esto podía ocurrir fue lo que condujo a los mantuanos, en una primera etapa (19 de abril de 1810), a procurar ocultar los propósitos emancipadores tras el velo o la «máscara» de la protección de los derechos legítimos de Fernando VII, es decir, mediante un engaño deliberado. Así lo expuso Roscio en su discurso de la sesión del Congreso Constituyente del 5 de julio de 1811: «Dos juramentos —dijo— habíamos prestado a Fernando cuando se instaló el Congreso, uno en 15 de julio de 1808 y otro en 19 de abril de 1810; pero el primero lo arrancó la fuerza y el segundo la ignorancia y la necesidad de no alarmar a los pueblos...» [énfasis AR].⁷⁴

La aparente tranquilidad del período entre abril de 1810 y julio de 1811,⁷⁵ que en el fondo escondía una importante efervescencia en el país, reforzó las tendencias más radicales e ilusas del mantuanismo y les confirmó en su propósito emancipador. El fin del engaño, patentizado en julio de 1811, dado el ambiente sociorracial venezolano y el apego de la ma-

Congreso Constituyente..., tomo 1, pp. 136. El diputado Peñalver ratificó esta verdad en su intervención del 3 de julio: «El nombre de Fernando fue entonces (19 de abril) un pretexto para no alarmar a los pueblos», *ibid.*, p. 110. Sobre el «engaño», véase Parra Pérez, pp. 198, 207, 247-248, 260, 271-272, 293. Consúltese, igualmente, Ángel Bernardo Viso, *Las revoluciones terribles*. Caracas: Grijalbo, 1997, pp. 72-76. Como bien apunta McKinley, «La calma y la tranquilidad de Caracas en los [...] meses después del golpe de 19 de abril sólo se entiende a cabalidad si se la coloca en este contexto, es decir, el de la certeza predominante de que se trataba de un acto legalmente correcto justificado por las circunstancias y por el hecho de que se mantenía la lealtad al símbolo de la unidad imperial, la monarquía», pp. 218-219.

74

75

yoría al principio de legitimidad realista, abrió las compuertas de una «guerra total de violencia incontrolada», como califica Lynch nuestra guerra de Independencia,⁷⁶ una guerra «expiable que durante diez años iba a asolar nuestro país y a hundirlo por un siglo en el desorden moral y político».⁷⁷ A lo largo de esa década de Guerra a Muerte, ejecutada principalmente entre venezolanos, el orden social mantuano se desmembró, y la «clase aristocrática», dice Vallenilla Lanz en su ensayo *Disgregación e integración*, «desapareció por completo [...] destruida por la guerra y dispersa por la emigración».⁷⁸

No era éste el resultado que buscaban los patricios que insurgieron contra las autoridades peninsulares en 1810, y luego proclamaron la independencia. Las consecuencias de sus acciones contrastan amargamente con sus intenciones iniciales. No fue la independencia, como en algún momento ha sostenido Ángel Bernardo Viso, un «suicidio» mantuano,⁷⁹ pues el suicidio es un acto voluntario. La independencia fue más bien, desde la perspectiva puramente egoísta de sus promotores iniciales, el naufragio —término que también usa Viso—⁸⁰ de un sector privilegiado y de un orden social, de un grupo hasta entonces dominante empujado por la ambición de adquirir mayor poder, por el miedo a perder el que ya tenían y la ceguera con respecto a los riesgos implícitos en su contexto vital. Pero, ¿tenían alternativa?; ¿podían haber tomado otro camino?

7

Pareciera conveniente, antes de enfrentar el problema clave sobre las opciones mantuanas, recapitular el conjunto de cuestiones consideradas hasta ahora.

En primer término, ¿qué esperaban los mantuanos? La evidencia indica que, atenzados por el miedo e impulsados por la ambición, con-

76 Lynch, *Las revoluciones...*, p. 214.

77 Parra Pérez, p. 531.

78 L. Vallenilla Lanz, *Disgregación e integración*, en *Cesarismo...*, p. 313.

79 Ángel Bernardo Viso, *Venezuela: Identidad y ruptura*. Caracas: Alfadil, 1982, p. 82.

80 El término «naufragio», más acertado a la hora de calificar lo ocurrido con el mantuanismo, es también usado por Viso en sus *Memorias marginales*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991, p. 129.

cibieron la posibilidad de una transición pacífica hacia una especie de república oligárquica. En segundo lugar, ¿tenían sentido las ilusiones mantuanas? En vista de las condiciones sociales y políticas imperantes —agudas tensiones de castas, apego mayoritario al principio de legitimidad monárquico y carencia de mensaje creíble del mantuanismo hacia los sectores oprimidos—, las aspiraciones de los patricios venezolanos lucen ingenuas. No en balde Humboldt, refiriéndose a la sociedad colonial venezolana, había apuntado que «el reposo ha sido el resultado del hábito de la preponderancia de algunas familias poderosas y sobre todo del equilibrio que se halla establecido entre fuerzas enemigas».⁸¹ La sacudida que experimentó ese equilibrio a causa de la decisión mantuana por la emancipación, no podía menos que convertir en añicos las esperanzas de la oligarquía criolla en un cambio pacífico que dejase el poder en sus manos. En tercer lugar, ¿tenían los mantuanos un proyecto político alternativo capaz de suscitar apoyo amplio más allá de sus propios rangos? Según Carrera Damas, la única opción al principio monárquico era el republicano, en dos modalidades: la francesa, libertaria e igualitaria pero de muy dudosa eficacia para el control de la sociedad, y de otro lado la norteamericana, que «aparecía recomendada no sólo por la eficacia en la transferencia de poder y en el control de la sociedad, sino que había resuelto el problema de la esclavitud en la única forma indicada para el esclavista: manteniéndola».⁸² Los mantuanos no tomaron de manera clara alguna de estas vías. El propio Bolívar cuestionó la viabilidad del modelo norteamericano para nuestras circunstancias y propuso un sistema cuasi monárquico, plasmado en la Presidencia Vitalicia y el Senado Hereditario del *Discurso de Angostura* y la *Constitución de Bolivia*.⁸³ El camino mantuano fue el «metafísico» —como lo denomina Vallenilla Lanz, en el sentido de «ilusorio» o «fuera de la realidad»—, un rumbo que les llevó a considerar las instituciones políticas como «moldes de fabricar pueblos», y a creer que «bastaba consignar principios abstractos en las páginas de un libro, para modificar hondamente los caracteres de una comunidad social».⁸⁴

En cuarto término, ¿acudieron los oligarcas criollos al engaño, ante las dificultades que se vislumbraban para la concreción de su proyecto

Citado en Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, p. 61.

Germán Carrera Damas, *Jornadas de historia crítica*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1983, p. 154.

Sobre el tema del prestigio del modelo norteamericano entre los mantuanos, véase Carrera Damas, *Venezuela...*, pp. 92-95.

Vallenilla Lanz, *Disgregación...*, p. 222.

81

82

83

84

de dominio político? Ciertamente fue así, y en torno a ello existe amplia evidencia;⁸⁵ no obstante, queda abierta la pregunta de: ¿hasta dónde pensaban que se prolongaría el engaño? Una vez declarada la independencia ya no restaban «máscaras» tras las cuales esconder el proyecto de mando oligárquico, mas los indicios sugieren que continuó predominando el autoengaño en el sentido de que la poderosa reacción popular, que ya empezaba a constatar, no generó aun en el mantuanismo la suficiente alarma —esta última cundió a plenitud sólo a mediados de 1812, ante las insurrecciones de esclavos en la provincia de Caracas.⁸⁶ El fin del engaño fue sustituido por el autoengaño. Por último, ¿dejaron los mantuanos en sus deliberaciones algún espacio para el papel del azar en el curso de los eventos?, ¿midieron el impacto probable de sus actos? La respuesta a estas interrogantes es negativa. Una inmensa miopía se posó sobre la visión política mantuana, empujándoles hacia un abismo de temerario radicalismo⁸⁷ y fantástico optimismo,⁸⁸ tendencias que culminaron en un irreparable error de cálculo.

Es un hecho que el sistema, hasta 1810, funcionaba bien para los mantuanos;⁸⁹ es igualmente un hecho que el propósito de emancipación frente a España no era compartido por la mayoría.⁹⁰ La dislocación producida tenía que ser traumática, y los enormes costos del proceso acabaron por arrasar no solamente el orden social mantuano sino también las posibilidades de recuperación del país por décadas, tal vez, en cierto sentido, hasta el presente,⁹¹ llevando a Bolívar a asumir una postura de extremo radicalismo que no se detuvo ante nada, pues como una vez afir-

85 Véase al respecto la sección 6 de este estudio. El engaño también se produjo entre los propios mantuanos, según refiere Díaz: «... una parte de los conjurados estaba engañada por la otra. Aquélla se componía de algunas personas de riqueza e influencia en el país, cuyos designios eran establecer en él la oligarquía; y ésta la de todos aquellos jóvenes inquietos, y en quienes las ideas de licencia y democracia eran el ídolo de su adoración...», *Recuerdos...*, pp. 57-58, 217.

86 Parra Pérez, pp. 484, 532-533, 574.

87 Como lo enunciaba la ya citada Declaración de 1811 sobre los *Derechos del hombre y del ciudadano*, «La reforma debe ser radical: no se debe tratar de reparar sino de construir de nuevo [...]

De qué sirve trabajar en una reforma para hacerla incompleta...?», en Pino Iturrrieta, p. 142.

88 «En América —prosigue la Declaración— no hay tantos obstáculos que vencer para hacer una buena revolución», *ibid.*

89 En los acertados términos de Carrera Damas, «la estructura de poder interna generada en función del proceso de implantación de la sociedad colonial era realmente eficaz [...] Era [...] una estructura de poder interna funcional...», *Venezuela: Proyecto nacional...*, p. 116.

90 En palabras de Julio C. Salas, «la idea de independencia no estaba en la conciencia de las mayorías pobladoras, y por consiguiente mucho menos la idea de la república democrática». Citado en Carrera Damas, *ibid.*, p. 59.

91 Sobre este tema, véase mi estudio «Pesimismo que alimentan», en Asdrúbal Baptista, coord., *Venezuela siglo xx. Visiones y testimonios*, vol. 3. Caracas: Fundación Polar, 2000, pp. 107-132.

mó: «Yo estoy resuelto a todo: por liberar a mi patria declaré la guerra a muerte...». ⁹² También podría haber dicho, sin temor a exagerar o distorsionar sus palabras, que para salvarnos fue necesario destruirnos. ⁹³

En este orden de ideas cabe cuestionar el planteamiento de Carrera Damas, de acuerdo con el cual la independencia de hecho contribuyó a *consolidar* la preeminencia de la clase dominante venezolana. Según este historiador, el proceso constituyó una «compleja y prolongada disputa [...] sobre la preservación primero, y el restablecimiento y la consolidación luego, de la estructura de poder interna de la sociedad formada en el seno del nexo colonial...». ⁹⁴ De acuerdo con Carrera Damas:

Al producirse la desmembración de la Gran Colombia la clase dominante venezolana estaba constituida por tres sectores: el minoritario que había sobrevivido a la guerra luchando por la ruptura del nexo colonial y por cuya reconstitución trabajó Simón Bolívar a partir de la toma de Angostura en 1817; el grupo de exiliados que comenzó a regresar al país poco después de la batalla de Carabobo en 1821; y quienes habían permanecido en las provincias que se mantuvieron bajo el poder real hasta el final de la guerra, como Coro y Maracaibo, y la provincia de Caracas, en la cual el poder real fue restablecido en 1814. El grueso de la clase [...] estaba constituido por este último sector. Sobre esta base se impulsó la reconstrucción de la clase dominante, y con ello el restablecimiento de la estructura de poder interna. ⁹⁵

Esta aseveración puede prestarse a confusiones. Resulta complicado demostrar su veracidad, ya que, por lo que conocemos, no existen los estudios sociológicos detallados que permitan comprobar que esos grupos de exiliados, y los mantuanos que permanecieron en provincias realistas, hayan tenido la voluntad y los instrumentos para reconstruir un domi-

Citado por Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, p. 99.

La correspondencia de Bolívar, en especial la que comienza en 1825 y se extiende hasta sus últimos días, aporta numerosos indicios sobre su convicción de que el proyecto emancipador había fracasado en un sentido profundo. Si bien se logró la independencia de España, ello fue posible al alto precio de condenar a estas nuevas naciones a un muy largo período de inestabilidad y atraso. Entre otros textos, es de particular interés su Mensaje del 24 de enero de 1830. Allí leemos esto: «Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás», *Obras completas*, vol. II, p. 1275.

Carrera Damas, *La disputa...*, p. 24; *La crisis...*, p. 32; Venezuela: *Proyecto nacional...*, p. 73.

Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional...*, p. 197.

92

93

94

95

nio eficaz. La afirmación de Carrera Damas también podría inducir a la conclusión de que *el orden social mantuano* —que fue un orden muy concreto, y distinto de cualquier situación de división de clases y de preeminencia de ciertos sectores sobre otros que se hayan generado después de 1821—, sobrevivió a la independencia. De hecho, el propio Carrera Damas sostiene, en el mismo libro que ahora discutimos, que si bien es cierto que el triunfo militar final en Carabobo puso de manifiesto «la superioridad militar de quienes procuraban la ruptura del nexo colonial, el estado de dislocación de la estructura de poder interna daba la razón, *desde el punto de vista de clase*, a quienes habían temido ese resultado». Y en otro lugar de esa obra, de manera contradictoria, el destacado historiador señala que la independencia condujo a la «casi destrucción de la clase dominante blanca». ⁹⁶ Difícilmente podía un grupo social, en tales condiciones, reconstituirse y refundar el orden social prevaleciente antes de 1810.

Ese orden social fue desmembrado, y fue el propio Bolívar quien dejó claros testimonios sobre su decadencia en textos como su proclama del 6 de mayo de 1814, en la que constataba: «... terribles días estamos atravesando: la sangre corre a torrentes: han desaparecido los tres siglos de cultura, de ilustración y de industria...». ⁹⁷ Más elocuente aun fue su carta a Esteban Palacios, el tío que regresaba al país del exilio al que le había empujado la guerra social. En esa misiva de 1825 Bolívar le decía:

Usted ha vuelto de entre los muertos a ver los estragos del tiempo inexorable, de la guerra cruel, de los hombres feroces. Usted se encontrará en Caracas como un duende que viene de la otra vida y observará que nada es de lo que fue [...] Usted dejó una dilatada y hermosa familia: ella ha sido segada por la hoz sanguinaria: Usted dejó una patria naciente [...] y usted lo encuentra todo en escombros [...] los campos regados por el sudor de trescientos años, han sido agostados por una fatal combinación de los meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas? Se preguntará usted. Caracas no existe... ⁹⁸

A modo de consuelo, Bolívar añade en la carta que la inmensa destrucción de Venezuela, «sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la

96 *Ibid.*, pp. 23, 120.

97 Bolívar, *Obras completas*, vol. II, p. 1066.

98 *Ibid.*, vol. I, pp. 1125-1126.

tuvo, han quedado resplandecientes de libertad; y están cubiertos de la gloria del martirio...». Ello, aseguraba, «repara todas las pérdidas». Mas es probable que esa opinión no fuese, ya a esas alturas, compartida en general por los escasos sobrevivientes del mantuanismo.

Conviene comentar también las aseveraciones de Vallenilla Lanz, según las cuales la independencia fue una falsa ruptura;⁹⁹ argumento que Lynch repite cuando afirma que la independencia, si bien barrió los vínculos con España y la fábrica del gobierno colonial, dejó «intactas las profundamente arraigadas bases de la sociedad colonial».¹⁰⁰ En cierto sentido esto es correcto, pues el pasado no desaparece de la noche a la mañana;¹⁰¹ no lo es, sin embargo, en lo que tiene que ver con *el orden social mantuano* en Venezuela, que fue arrancado de sus raíces por esa guerra «cruel, destructiva y total».¹⁰²

8

Los mantuanos demostraron ser un grupo social de escasa visión política; su más craso error —prueba irrefutable de su excesivo orgullo y miope arrogancia— fue perder de vista la íntima conexión entre su dominio y el principio de legitimidad monárquico. Su señorío sobre estas tierras no tenía fundamentalmente que ver con sus presuntas virtudes como clase capaz del mando, sino con su condición de pieza en un engranaje complejo y delicado que entre 1808-1812 experimentó una crisis singular en su propio eje. Ante esta situación los mantuanos vieron no sólo un peligro sino también una oportunidad, y optaron por esta última. ¿Tenían alternativa?

Desde el punto de vista de sus intereses como grupo dominante, la opción de enarbolar las banderas republicanas y hacerse voceros de una revolución igualitaria en el plano legal, pero con indudables implicaciones de

Vallenilla Lanz, *Disgregación...*, ed. cit., p. 225. Tales afirmaciones se contradicen con lo que Vallenilla afirma en otro lugar de su obra, al evaluar el resultado de la guerra de emancipación: «... todo había sido arrasado, todo había sido destruido, no por los españoles sino por el torrente incontenible de la democracia», en *Cesarismo...*, p. 24.

Lynch, *Las revoluciones...*, p. 349.

Al respecto, véase Plaza, p. 234.

Lynch, *Las revoluciones...*, p. 200.

99

100

101

102

ascenso social para las «castas», era absurda, pues *carecía de credibilidad ante la mayoría*, y así lo demostraron los hechos. Su demagógica oferta de una república teóricamente justa para todos cayó en oídos sordos, y era iluso esperar otra cosa. El absoluto inmovilismo tampoco era viable, dadas las circunstancias. ¿Qué opción restaba para los mantuanos? *Desde su exclusivo punto de vista como grupo dominante*, la única opción válida para los mantuanos en 1808-1810 era la de solidarizarse con la monarquía española en apuros y aprovechar la crisis para negociar un «nuevo tratado» entre España y la colonia, preservando el imperio pero dentro de un marco de mayor autonomía provincial, estabilidad básica del predominio mantuano y progresiva igualdad legal de las «castas». ¹⁰³ A corto plazo los riesgos de esta línea estratégica no eran inmanejables, aunque a largo plazo pudiesen los mantuanos vislumbrar tiempos borrascosos a medida que avanzase el proceso de igualdad social.

Nada garantiza que, de haber sido asumida por los mantuanos, esa alternativa hubiese tenido éxito, definiendo acá el «éxito» no sólo como la supervivencia física —importante por lo demás— sino también como preservación de una posición dominante en un contexto de cambio gradual y pacífico. El fermento de la sedición y la inquietud por las transformaciones políticas y sociales estaban esparciéndose en las colonias, más allá de los temores y motivaciones mantuanas. Cabe tener presente, no obstante, que la restauración de la estabilidad europea luego de la derrota de Napoleón abrió posibilidades ciertas —entre 1815 y 1818— para que España recuperase el control de su imperio americano. La participación de las oligarquías criollas en este intento hubiese sido muy importante. Estas últimas, sin embargo —y en particular la venezolana— ya estaban para ese momento diezmadas por la guerra, y su posición dominante había sufrido heridas irreparables en la percepción de la mayoría oprimida.

103 En comentarios que el profesor Joaquín Marta Sosa tuvo a bien hacer a la primera versión de este estudio, apuntó lo siguiente: «Habría que tomar en cuenta que una alternativa negociada podría haber sido demasiado moderna para la época, acaso imposible incluso para la Corona, lejos del horizonte de conciencia de comienzos del siglo XIX». El señalamiento es importante; no obstante, cabe tener presente que ya en 1809 la Junta Central española había dado esperanzas a las colonias de una inminente reforma del sistema imperial, al declarar que éstas eran parte integral de la nación: «Ese ofrecimiento de un *status* igualitario respecto a las provincias de España se hizo más sólido cuando se invitó a las colonias a celebrar elecciones para mandar representantes a la Junta». Véase McKinley, pp. 213-214. La situación era muy fluida y las posibilidades de innovar, ampliando el horizonte de la conciencia histórica para entonces predominante no eran subestimables. La misma resolución revolucionaria del mantuanismo así lo demuestra.

Al tomar la vía de abandonar la nave de España en su momento de mayor peligro, los mantuanos ocasionaron una reacción radical de parte del centro imperial, y a pesar de todas sus dificultades y limitaciones España «luchó ferozmente por su libertad en Europa y por su imperio en América»,¹⁰⁴ al menos por un tiempo. A lo anterior se sumó la rebelión social de una mayoría popular que rechazó la «república mantuana» y se plegó a las banderas del Rey, desatando la cruenta guerra civil que finalmente acabó con el orden de preeminencia de la oligarquía criolla. La rebelión mantuana, como señala Díaz con rabia inocultable, se llevó a cabo «en los momentos menos esperados, cuando la madre que nos dio el ser necesitaba más de nuestro apoyo en sus desgracias...».¹⁰⁵

La respuesta ante lo que fue percibido en España como un gesto de ingratitud y ceguera por parte de los blancos criollos, de esa privilegiada oligarquía descendiente de los primeros conquistadores,¹⁰⁶ tuvo un carácter igualmente miope, pues las autoridades imperiales y sus delegados en Venezuela, desde Monteverde en adelante, acometieron la reconquista con el único propósito de restaurar el *statu quo ante*, sin detenerse a considerar los cambios en el panorama político tanto doméstico como internacional, contribuyendo así a que los antagonismos se acentuasen y estimulando la «escalada» de la violencia.¹⁰⁷ En vista de la actitud mantuana, los jefes realistas atizaron la guerra social de las «castas» contra sus opresores, los blancos criollos, intentando explotar «los intereses y los resentimientos sociales de las clases más bajas»,¹⁰⁸ sembrando así las semillas de un huracán que con inusitada rapidez acabaría por arrasarles a todos.¹⁰⁹ El resultado de todo esto fue una guerra cruel, cuyas secuelas siguen pesando en la sicología colectiva venezolana.

La historia tiene sus coyunturas, y el *tempo* para las decisiones oportunas es muy cambiante. Lo hecho por los mantuanos entre 1810 y 1811

Lynch, *América Latina...*, p. 117.

Díaz, *Recuerdos...*, p. 78. El Regente Heredia escribió: «No pretendo justificar las revoluciones de estos países cuyos autores formaron desde luego el designio de la independencia, que prescindiendo de toda otra consideración era importuno y muy poco delicado en los momentos del horrible apuro en que se hallaba la infeliz España», *Memorias...*, p. 35.

Al respecto, consúltese el estudio de Michael P. Costeloe, *La respuesta a la independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840*. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, pp. 37-74.

La política represiva desatada por Monteverde en 1811-1812 «difería radicalmente de la política tradicionalmente seguida por la Corona para someter a súbditos rebeldes». La reacción realista se quedó en la búsqueda de un «retorno al viejo orden de cosas». Carrera Damas, *La crisis...*, pp. 42, 95-96.

Plaza, p. 243.

Sobre los errores españoles en el manejo de la crisis, véase Lynch, *Las revoluciones...*, p. 197.

104

105

106

107

108

109

generó unas consecuencias que transformaron casi en su totalidad el panorama político-social de la colonia. Con el derrumbe de la «república criolla» en 1812 se plantearon algunas posibilidades de reconciliación, pronto malgastadas por Monteverde ¹¹⁰ y minimizadas aun más por Bolívar con su decreto de Guerra a Muerte de 1813. ¹¹¹ Lo andado no podía desandarse, y ya montados los mantuanos en la nave de la rebelión, la «fuerza de las cosas», el signo y peso de sus decisiones, les arrastró al naufragio *como grupo social privilegiado y dominante*.

Con no poca frecuencia los historiadores se ven tentados a afirmar que ciertos procesos históricos son inevitables, que, por ejemplo, «cualesquiera que fuesen las providencias de la Corona española en sus posesiones trasatlánticas y cualquiera que fuese su política general en Europa, la monarquía debía fatalmente desmembrarse»; ¹¹² que la independencia formaba parte «de un proceso histórico a la postre incontenible», ¹¹³ y que la misma poseía una especie de «inevitabilidad demográfica». ¹¹⁴ No me adhiero a la idea de una presunta inevitabilidad de los procesos históricos. Estos lucen inevitables en retrospectiva, pero no ocurre de ese modo a los propios actores inmersos en la compleja y azarosa dinámica de la historia real, cuando ésta se desarrolla. Esos actores, dentro de oscuros nubarrones, o de la claridad que en ciertas encrucijadas puede descender sobre la existencia humana, saben que hay un margen para la decisión libre de las conciencias y que las cosas pueden tomar un rumbo u otro de acuerdo a múltiples factores. ¹¹⁵ El propio Carrera Damas admite que «en 1812 y aun mucho después este proceso [de independencia, AR] aparecía como claramente reversible...» ¹¹⁶ para gran número de venezolanos, que nunca se plegaron a la rebelión mantuana ni aceptaron sus corolarios.

Las decisiones de los patricios criollos no fueron «inevitables», pero sus consecuencias siguen siendo parte de nuestras vidas. La guerra de

110 Al respecto, véase Parra Pérez, pp. 578-599.

111 En torno a este punto, dice Carrera Damas: «En 1814 todavía era posible un entendimiento. Cajigal lo estima viable. Presuponía el desarrollo de una política de conciliación, cuyo punto de partida no podía ser sino la aceptación de la posición hegemónica que los criollos desempeñaban en la sociedad venezolana», *Una nación...*, p. 56. Pienso, por el contrario, que a esas alturas de la confrontación la «posición hegemónica» de los mantuanos había sufrido un resquebrajamiento irreparable, a raíz de su ruptura con el principio de legitimidad monárquico y de su oferta demagógica de una república igualitaria (aunque fuese en teoría).

112 Parra Pérez, p. 4.

113 Carrera Damas, *Venezuela...*, p. 116.

114 Lynch, *Las revoluciones...*, p. 25.

115 Sobre esta temática, consúltese mi libro *Disolución social y pronóstico político*. Caracas: Panapo, 1997.

116 Carrera Damas, *Una nación...*, p. 52.

Independencia constituyó una ruptura radical con el pasado, al día siguiente de la cual —como bien dice Viso— «sólo percibimos soledad y aislamiento».¹¹⁷ Esa brutal ruptura, origen de la pérdida de nuestra memoria histórica, se une a la visión parcial y distorsionada de la emancipación cultivada por nuestra superficial «Historia Patria», generando en conjunto un severo problema de identidad colectiva, de desapego a lo que nos precede, de carencia de sujeción a la herencia de nuestros antecesores y de incesante búsqueda de un perenne «nuevo comienzo», inventando constituciones y «refundando» a cada paso una república que nació en no poca medida nutrida por la ilusión y signada por el engaño.



1

Escribir sobre Bolívar en Venezuela es tarea ardua y riesgosa. Lo primero, debido a los obstáculos que se interponen en el camino de separar la figura histórica del personaje de su mitologización puramente epopéyica, casi siempre simplista y en ocasiones distorsionada, forjada a través de décadas por decenas de apologistas y un sistemático culto oficial. Lo segundo, en razón del papel que esa imagen mitologizada cumple en la sociedad venezolana como factor de cohesión y orgullo nacional. Esta última realidad no sólo dificulta con frecuencia la evaluación desapasionada del hombre y su obra, sino que de hecho amenaza veladamente la perspectiva crítica con una potencial sanción social.

Al respecto, la Sociedad Bolivariana de Venezuela dejó claro, en un «llamamiento» a «los escritores nacionales de todos los estilos y tendencias», que debemos observar una «pauta de reverencia» en los estudios sobre Bolívar, pues si bien es admisible que se «censure», está también «muy mal la violación de obligados sentimientos para con el autor de nuestra libertad».¹

Es claro que la definición de los alcances de esa «pauta de reverencia», así como del contenido de esos «obligados sentimientos», su naturaleza y límites, son cuestiones bastante subjetivas, y su manejo como mecanismo de presión y manipulación puede con facilidad asfixiar la audacia intelectual y debilitar el enfoque analítico. De hecho, y con escasas excepciones—entre las que destacan nombres como los de Germán Carrera

Damas, Ángel Bernardo Viso y Luis Castro Leiva— el estudio de la carrera y el legado de Bolívar en Venezuela ha estado signado por una «pauta de reverencia», que en realidad muchas veces ha ahogado o como mínimo erosionado el sentido crítico de no pocos de nuestros historiadores.

Pensar con sentido crítico requiere coraje, y pensar críticamente sobre Bolívar en Venezuela exige ante todo entender que su figura histórica debe ser reevaluada, pues sobre su trayectoria y logros, así como acerca del sentido y consecuencias de sus ejecutorias se ha tejido una inmensa y compleja red de espejismos, al igual que un culto cuasi religioso, que hacen muy difícil acceder a la verdad histórica y hasta plantear preguntas cruciales sobre temas que resulta imperativo discutir. Además, el estudio y comprensión del presente requieren de una interpretación equilibrada, no ideológica ni manipulativa, del pasado. Ese pasado venezolano, que ha sido reducido a un mito, reclama una recuperación creativa, que sólo puede provenir del planteamiento de nuevas interrogantes y de su tenaz exploración.

Historiadores venezolanos, y aun algunos extranjeros, a veces atisban problemas que deberían impulsarles a una consideración más profunda, y hasta apuntan hacia asuntos que demandan una más cuidadosa explicación; sin embargo, sucede con frecuencia que no ahondan en las indagaciones que sus hallazgos sugieren y se detienen ante la línea imaginaria de la «pauta reverencial».

Por ejemplo, Caracciolo Parra Pérez, uno de nuestros más destacados y respetables historiadores, escribe al final de su justamente apreciada obra sobre la Primera República venezolana estas sorprendentes frases: «El precio de la independencia de Venezuela era tan alto, que sólo Bolívar podía pagarlo [...] El Libertador impondrá la independencia a una población enemiga...».² A partir de estas retadoras observaciones, no obstante, Parra Pérez no hace explícitas preguntas que obviamente debieron al menos sugerírsele a un espíritu tan agudo como el suyo: ¿No pagó también el resto de los venezolanos el precio de la independencia, que fue por cierto muy elevado en ese momento y en sus proyecciones posteriores? ¿Qué tipo de factores concedían a Bolívar una especial autoridad moral para asumir que él tenía la obligación y el derecho de pagar ese precio, por

2 Caracciolo Parra Pérez, *Historia de la Primera República de Venezuela*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 534. También Ángel Bernardo Viso señala que la nuestra es «una patria impuesta por la fuerza». Véase su obra *Memorias marginales*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991, p. 29.

él mismo y por los demás? O dicho en otros términos, ¿qué tipo de motivación impulsaba a Bolívar, y le hacía sentirse poseedor de esa especie de fuero para «imponer» la independencia sobre una población que en buena parte y por buen tiempo no la quería? Son preguntas difíciles, no cabe duda, pero la afirmación de Parra Pérez las hace ineludibles.

Un prestigioso historiador extranjero, John Lynch, señala que en efecto «Bolívar nunca consiguió un apoyo de masas para la emancipación», y recuerda que «la guerra de liberación dejó a Venezuela convertida en una tierra baldía»;³ sin embargo, no extrae de estas apreciaciones interrogantes adicionales que parecerían hallarse a la espera de mayor profundización. Y un historiador tan importante como Laureano Vallenilla Lanz, de cuya valentía intelectual no podemos dudar, se sintió exigido a advertir, en la primera página de *Cesarismo democrático*, que «Decir que la guerra de la Independencia fue una guerra civil, no amengua en nada la gloria de nuestros Libertadores».⁴ Uno se pregunta: ¿qué llevó al autor de la tesis según la cual la independencia «fue una guerra civil», a colocar esa especie de nota absolutoria en el propio inicio de su texto? Aparte, por supuesto, de un comprensible temor a la sanción social derivada de violentar la «pauta reverencial», ¿no se trataría acaso de una efectiva limitación en el ánimo del historiador, de una falla de su pulso crítico, enfrentado a un horizonte de posibles preguntas que podían llevarle «demasiado lejos» en la discusión de temas que han sido casi por completo sustraídos al debate crítico en nuestro medio?

Ha sido Germán Carrera Damas uno de los autores que con mayor determinación y visión crítica ha analizado nuestro proceso evolutivo en general, y los efectos perniciosos para el trabajo científico del cuasi religioso «culto a Bolívar» en particular. Carrera Damas ha formulado interrogantes fundamentales, y una de ellas se refiere a la citada frase de Vallenilla Lanz. Al respecto dice: «¿No vendría al caso preguntarnos, por supuesto, de quién nos libertaron mediante una guerra civil, pero sin sacrificar la lógica en las aras del culto a los héroes?».⁵ En otro texto suyo, un meticuloso y agudo análisis del *Discurso de Angostura*, Carrera Damas pone de manifiesto la evidencia incontrovertible de que esa pieza oratoria de Bolívar constituye un verdadero «juicio al pueblo», un pueblo que

John Lynch, *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*. Barcelona: Ariel, 1998, pp. 198, 214-216.

Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático y otros textos*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991, p. 19.

Germán Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*. Barcelona: Crítica, 1986, p. 40.

3
4
5

Bolívar percibe y describe en el texto como «ignorante», «débil» y «pervertido», un pueblo que en su opinión tendría que «enrobustecer su espíritu mucho antes» de que lograrse «digerir el saludable nutritivo de la Libertad». ⁶ Con sobradas razones, enfrentado al *Discurso* y su inequívoca percepción sobre las gentes que entonces integraban la población de Venezuela, Carrera Damas se interroga: «¿Qué sentido tenía hacer libre a un pueblo que no estaba en condiciones de serlo, realmente?». ⁷ La pregunta es clave y a ella volveremos en estas páginas. Sin embargo, y como con acierto señaló Luis Castro Leiva, el mismo Carrera Damas no deja de sucumbir, al menos parcialmente, bajo el peso del culto que tanto ha hecho por denunciar, pues en su más relevante obra sobre el tema, ⁸ el historiador sigue considerando el pensamiento de Bolívar como «el centro de reunión de toda aspiración político-moral transformadora». ⁹ En otras palabras, la abrumadora influencia del culto se encuentra también en uno de sus más lúcidos críticos, al menos en una primera etapa de su análisis. ¹⁰

Ángel Bernardo Viso, por su parte, ha formulado también con claridad y fuerza intelectual cuestionamientos trascendentales en torno a la versión tradicional, puramente epopéyica y mitologizadora de la Historia Patria en general y del legado bolivariano en especial. Con relación al segundo aspecto, Viso ha escrito que:

... es bueno tener presente que si Bolívar reúne todos los caracteres requeridos para ser calificado como un gran héroe, no solamente en razón de sus triunfos militares, también es cierto que

6 Simón Bolívar, *Obras completas*, vol. II. La Habana: Lex, 1947, pp. 1135-1136. Bolívar no dejó lugar a dudas acerca del verdadero significado del *Discurso* cuando escribió lo siguiente a Guillermo White, remitiéndole el texto: «Tenga usted la bondad de leer con atención mi discurso, sin atender a sus partes, sino al todo de él. Su conjunto prueba, que yo tengo muy poca confianza en la moral de nuestros conciudadanos, y sin moral republicana, no puede haber gobierno libre», *ibid.*, vol. I, p. 442. Resulta interesante constatar que José de San Martín expresó convicciones similares a las articuladas por Bolívar en el *Discurso*:

«Era moralmente imposible — escribía en 1816 — el que nosotros mismos nos constituyésemos; somos muy muchachos y nuestros estómagos no tienen suficiente calor para digerir el alimento que necesitan», citado en John Lynch, *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*. Barcelona: Ariel, 1998, p. 69. Impresiona comprobar que dos de los más destacados dirigentes de la independencia hispanoamericana percibían con tan notorio pesimismo las perspectivas del escenario donde les tocó actuar.

7 Germán Carrera Damas, *Validación del pasado*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1975, p. 192.

8 Germán Carrera Damas, *El culto a Bolívar*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1973.

9 Luis Castro Leiva, «El historicismo político bolivariano», *Revista de Estudios Políticos*, 42, Madrid, 1984, p. 80.

10 En obras posteriores, Carrera Damas ha adoptado criterios todavía más independientes y autónomos con respecto a los cánones establecidos por el «culto». Véase, por ejemplo, su ya citado libro *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*, pp. 120-142.

su vida fue desgraciada y concluyó con un fracaso político de dimensiones gigantescas [...] Y en vista de que su trayectoria vital es un arquetipo que se nos propone para ser imitado íntegramente, también el fracaso de esa vida continúa gravitando sobre nuestro destino, como podría hacerlo un maleficio esterilizador.¹¹

¿A qué fracaso político se refiere Viso? Para precisar el punto, conviene recordar unas frases muy poco citadas pero en extremo significativas de Bolívar, escritas en 1816: «En vano —dijo en esa oportunidad a José Cortés de Madariaga— las armas destruirán a los tiranos, si no establecemos un orden político capaz de reparar los estragos de la revolución». ¹² ¿Estableció Bolívar ese orden?, ¿se repararon los estragos?, ¿desembocó la independencia venezolana, como la de los Estados Unidos, en la edificación de un andamiaje de instituciones, normas y principios políticos estable, civilizado y duradero, capaz de propiciar el progreso pacífico y libre de los ciudadanos de la nueva República?

La respuesta a tales preguntas es obviamente negativa. Y no se trata de colocar sobre los hombros de Bolívar toda la carga de la culpa por resultados tan desalentadores. Al menos él tuvo el sentido de responsabilidad de ocuparse del problema fundamental de las consecuencias del proceso, y de procurar en lo posible presentar opciones institucionales con las que pretendió, sin éxito, sustituir las estructuras derribadas por la voluntad de su espada por otras diferentes pero igualmente consolidadas, y adecuadas además para hacer realidad la tan ansiada «libertad». No obstante, el fracaso de Bolívar, que no fue militar sino *político* —un fracaso parcial, pues logró la emancipación nacional, mas no el orden y estabilidad internas— hunde a mi modo de ver sus raíces en su propia concepción originaria del sentido, necesidad y resultados probables de una revolución hecha del modo y al precio en que él estuvo dispuesto a hacerla, liderarla y conducirla hasta sus más extremas consecuencias. ¿Qué motivó a Bolívar?, ¿cómo imaginó el proceso revolucionario?, ¿con base en qué concepciones y expectativas orientó su titánico esfuerzo personal?, ¿qué sacrificios estuvo preparado a hacer, de sí mismo y de otros, para lograr sus fines?, ¿cómo evaluó, él mismo, los resultados de

Ángel Bernardo Viso, *Venezuela: Identidad y ruptura*. Caracas: Alfadil, 1982, pp. 66-67.
Bolívar, vol. I, p. 222.

su lucha?, y ¿qué costos y consecuencias tuvo y ha tenido, hasta llegar a nosotros, esa revolución? Finalmente, ¿qué explica su fracaso político?, ¿había alternativa, o estaban sembradas las semillas de su desilusión final en la misma simiente original en que germinó la independencia?

2

Uno de los aspectos que más impresiona en la carrera política de Bolívar es la aguda conciencia de fracaso que la permea, sobre todo –pero no exclusivamente– en sus etapas postreras. Son incontables las manifestaciones al respecto en su voluminosa correspondencia,¹³ mas tal vez ninguna frase suya sea tan reveladora de su congoja ante los resultados de su empeño como aquella de septiembre de 1830, en carta dirigida a Estanislao Vergara: «Créame usted –le dijo–, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones; y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles». ¹⁴ Muy conocida es la evaluación definitiva que llevó a cabo, alrededor de un mes antes de morir, sobre los logros obtenidos: «... yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 1) la América es ingobernable para nosotros; 2) el que sirve una revolución ara en el mar; 3) la única cosa que se puede hacer en América es emigrar; 4) este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas...». ¹⁵ Su diagnóstico acerca de lo que esperaba a las naciones independizadas no fue errado; al contrario, Bolívar puso de manifiesto una extraordinaria lucidez a lo largo de su carrera, pero especialmente en sus últimas etapas, con relación a los costos y resultados de una revolución en la que, en sus palabras, «tan infausta es la derrota como la victoria; siempre hemos de derramar lágrimas sobre nuestra suerte [...] Semejante a la corza herida llevamos en nuestro seno

13 Véase, por ejemplo, *ibid.*, vol. I, pp. 560, 708-709; vol. II, pp. 641, 694, 705-706, 771, 920, 933.

14 *Ibid.*, vol. II, p. 922.

15 *Ibid.*, vol. II, p. 959.

la flecha, y ella nos dará la muerte sin remedio; porque nuestra propia sangre es nuestra ponzoña. Dichosos los que mueran antes de ver el desenlace final de este sangriento drama». ¹⁶

El esfuerzo por proteger a toda costa la visión puramente heroica de la independencia, ocultando sus consecuencias e implicaciones, se ha expresado también en la minimización de la relevancia de los escritos de Bolívar, sobre todo en lo que respecta a su visión de las condiciones del pueblo venezolano de la época, así como también en lo que tiene que ver con su desgarrador balance del proceso revolucionario y su impacto político-social. En tal sentido, es fundamental tener claro que desde el propio comienzo de su carrera político-militar, cuando redacta el *Manifiesto de Cartagena*, Bolívar asume una actitud ambigua hacia la naturaleza de la guerra que ha comenzado y en la cual él desplegará un rol protagónico. Por una parte, Bolívar, en dos ocasiones en ese escrito, se refiere a la contienda como una «guerra civil»; ¹⁷ sin embargo, y por otra parte, en el análisis que allí realiza sobre las causas de la caída de la Primera República venezolana, Bolívar no menciona el hecho evidente de que, posiblemente, la principal de todas esas causas fue la carencia de apoyo popular al proyecto inicial mantuano. En efecto, en ningún momento en ese escrito primigenio Bolívar toca ese punto crucial, y cabe conjeturar qué razones pueden explicar semejante omisión. Una explicación no tan aventurada tiene que ver con la naturaleza del documento y su objetivo prioritario, que era obtener ayuda de parte del gobierno patriota de la Nueva Granada para invadir Venezuela —cosa que eventualmente hizo Bolívar en 1813 con su «Campaña Admirable». Mal podía Bolívar solicitar apoyo a una causa reconociendo al mismo tiempo la ausencia de respaldo entre la mayoría. ¿Silencio deliberado? Tal vez.

Otra explicación, plausible en cierta medida, se encuentra en que quizás Bolívar todavía no captaba, a fines de 1812, la magnitud de esa *cuestión social* —entendida acá como el desapego y hostilidad de la mayoría de los venezolanos de la época hacia un proyecto independentista liderado por el sector privilegiado—, y por lo tanto no la enfocaba con la debida cla-

Ibid., vol. I, p. 995. En otra parte hizo esta descripción del medio: «Nosotros estamos en el centro del Universo y en contacto con todas las naciones; ¿quién puede decir otro tanto? Tenemos dos millones y medio de habitantes derramados en un dilatado desierto. Una parte es salvaje, la otra esclava, los más son enemigos entre sí y todos viciados por la superstición y el despotismo [...] Esta es nuestra situación; esta es Colombia...», *ibid.*, vol. I, pp. 708-709.

Ibid., vol. II, pp. 1001, 1003.

16

17

ridad. Cabe recordar que Bolívar, un mantuano, había llevado antes de 1810 una existencia personal acomodada y despreocupada en Venezuela y el exterior; su conocimiento del país era entonces superficial, y su idealismo juvenil y formación intelectual de corte europeo probablemente le llevaban a imaginar una confrontación romántica entre valerosos patriotas y malvados realistas, en tanto que la cruda realidad mostraba el feo rostro de una contienda fratricida entre venezolanos, muchos de los cuales se acogían a las banderas del Rey español. Reconocer esto fue siempre muy difícil para Bolívar —o en todo caso políticamente inconveniente—; de allí su ocasional evasión de la cuestión social en sus escritos, y sus reiterados intentos de enfrentarla mediante una «contención» política del pueblo, con instituciones que controlasen y canalizasen lo que él denominaba su «ímpetu hacia la licencia».¹⁸

En ese *Manifiesto*, el primer gran documento político que salió de su pluma, Bolívar expone con la concisión y absoluta franqueza de que con frecuencia era capaz, su temprana y perenne convicción acerca de las enormes limitaciones que el pueblo venezolano de entonces experimentaba para gobernarse a sí mismo, y dotarse de instituciones políticas moderadas que estableciesen un marco de libertad para los individuos, limitando el poder del gobierno y abriendo espacios para el ejercicio de una práctica responsable de los derechos ciudadanos. Con no poca crudeza, Bolívar cuestiona las elecciones populares, hechas «por los rústicos del campo, y por los intrigantes moradores de las ciudades», pues «los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros tan ambiciosos que todos lo convierten en facción».¹⁹ La pregunta inevitable, con base en esas apreciaciones, es: ¿quién entonces podría votar?, pues los habitantes del país, obviamente, o bien vivían en el campo o bien en las ciudades.

En su *Carta de Jamaica*, redactada en 1815 y luego del derrumbe de dos repúblicas venezolanas, de la irrupción de Boves y sus llaneros, de la emigración de lo que restaba del mantuanismo caraqueño al oriente del país,

18 Esta línea de razonamiento se desarrolla con inequívoca claridad y plena coherencia en el *Discurso de Angostura*, Bolívar, vol. II, pp. 1147-1152. Laureano Vallenilla Lanz afirma en una de sus obras que Bolívar «fue el primero en descubrir y exponer, acaso con imprudente claridad, el carácter social de la magna lucha, sobre todo en Venezuela». El destacado historiador, no obstante, no desarrolla esta línea de argumentación. Véase su obra *Críticas de sinceridad y exactitud*. Caracas: Garrido, 1956, p. 109. A mi modo de ver, Bolívar alcanzó una conciencia plena acerca de la relevancia del tema social en la guerra de Independencia luego de las terribles experiencias de 1813-1814, las cuales elaboró con madurez en el plano intelectual un poco más tarde.

19 Bolívar, vol. II, p. 1002.

y la expulsión de Bolívar, los conceptos esbozados primeramente en el *Manifiesto* se afinan luego en varias direcciones. Cabe señalar, antes de tratarlos, que al salir de Venezuela en 1814 Bolívar reconoció explícitamente en el llamado *Manifiesto de Carúpano* que fueron sus «hermanos y no los españoles» los que le derrotaron; no obstante, lejos de profundizar en un asunto de tan extraordinaria significación, Bolívar afirma que «no es lo acesequible [sic] lo que se debe hacer, sino aquello a que el derecho nos autoriza».²⁰ Lo que no queda claro es a qué derecho en concreto se refiere, un derecho que presuntamente le autorizaba a imponer su voluntad sobre la de una mayoría que le había derrotado, así como tampoco queda claro por qué Bolívar consideraba que él era su único y legítimo intérprete. Simplemente, lo asumía de esa manera.

Ahora bien, en la *Carta de Jamaica* Bolívar ratifica su convicción acerca de la falta de preparación del pueblo americano (y venezolano en particular) para gobernarse civilizadamente, pues «nuestros compatriotas» carecen de los «talentos y virtudes políticas» necesarias para ello, y «desgraciadamente estas cualidades parecen estar muy distantes de nosotros en el grado que se requiere...».²¹ La *Carta* se hace eco de las más extremas denuncias acerca de la naturaleza y efectos de la conquista y colonización españolas de América; sin embargo, en momentos críticos previos Bolívar había sido capaz de asumir una postura mucho más equilibrada sobre el asunto. Por ejemplo, en mayo de 1814, ante la evidencia de las devastaciones que la guerra estaba produciendo en el país, dijo esto: «Terribles días estamos atravesando: la sangre corre a torrentes: han desaparecido los tres siglos de cultura, de ilustración y de industria...» [itálicas AR].²² No había sido, por tanto, la colonización española tan sólo el «frenesí sanguinario» al que se refiere en la *Carta*.²³ Y llama la atención que en este mismo documento y de modo contradictorio con otras aseveraciones en el texto, Bolívar escribe que: «El hábito a la obediencia; un comercio de intereses, de luces, de religión; una recíproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres; en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España».²⁴ Afirmaciones sorprendentes en vista del marco en que se insertaban.

Ibid., vol. II, pp. 1068-1069.

Ibid., vol. II, p. 168.

Ibid., vol. II, p. 1066.

Ibid., vol. I, p. 160.

Ibid.

20

21

22

23

24

¿Qué podía entonces esperarse de una revolución dinamizada por un pueblo que —en sus propias palabras— surgía de un «origen impuro?».²⁵ «Nosotros —escribía en 1826— somos el compuesto abominable de esos tigres cazadores que vinieron a la América a derramarle su sangre y a encastar con las víctimas antes de sacrificarlas, para mezclar después los frutos espurios de estos enlaces con los frutos de esos esclavos arrancados del África. Con tales mezclas físicas; con tales elementos morales, cómo se pueden fundar leyes sobre los héroes y principios sobre los hombres?».²⁶ Si esto era así, de acuerdo con Bolívar, ¿por qué extrañarse con el desenlace del proceso?, ¿cómo asombrarse con el hecho de que, ya hacia 1829, Bolívar constataba que «En este inmenso continente flota el desorden como las olas en el océano?».²⁷ «En semejantes países —añadía poco más tarde— no puede levantarse un libertador sino un tirano».²⁸ No debería intrigar, por tanto, el hecho de que Bolívar admitiese que el resultado de sus esfuerzos podía sintetizarse así: «Este es un caos... insondable y que no tiene pie ni cabeza, ni forma ni materia; en fin, esto es nada, nada, nada... estoy espantado de la situación... No hay cohesión en esta república. Yo me mato en balde y tontamente...».²⁹

Bolívar comprendió con clarividencia que «esta inmensa revolución no la encadena nadie».³⁰ Lo paradójico del caso es que Bolívar había expuesto en su *Discurso de Angostura* una realidad esencial acerca del panorama sociopolítico de la América española en vísperas de la revolución, cuando indicó que «La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración».³¹ Parece obvio que el Libertador no captó esto con la claridad necesaria en 1810-1811, cuando él y muchos otros miembros de la élite venezolana se arrojaron, con gran entusiasmo pero escasa previsión, al torbellino revolucionario. Esa sociedad heterogénea, que por trescientos años se había ajustado al delicado mecanismo de una abstracta y lejana —pero eficaz— legitimidad, centrada en el principio monárquico, ¿no iba necesariamente a desmembrarse, y de modo en extremo violento, al precipitarse en lo que el mismo Bolívar definió

25 *Ibid.*, vol. I, p. 1390.

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*, vol. II, p. 641.

28 *Ibid.*, vol. II, p. 665.

29 *Ibid.*, vol. II, pp. 641, 694, 771.

30 *Ibid.*, vol. II, p. 704.

31 *Ibid.*, vol. II, p. 1141.

como «el caos de la revolución?».³² «Desde esa época —decía más tarde Bolívar—, los elementos del mal se han desarrollado visiblemente. Dieciséis años de amontonar combustibles van a dar el incendio [...] Yo creo que bien pronto no tendremos más que cenizas de lo que hemos hecho». Y concluía su evaluación sobre el destino de su esfuerzo así:

La esclavitud romperá el yugo; cada color querrá el dominio, y los demás combatirán hasta la extinción o el triunfo. Los odios apagados entre las diferentes secciones volverán al galope, como todas las cosas violentas y comprimidas. Cada pensamiento querrá ser soberano, cada mano empuñar el bastón, cada espada manejada por el primer ambicioso, cada toga la vestirá el más turbulento. Los gritos de sedición resonarán por todas partes. El trueno de la destrucción ha dado la señal.³³

Bolívar escribía esas líneas en 1826. Se trataba de una visión tan descarnada como atinada, y los eventos no tardaron mucho en demostrarlo. No obstante, no era nueva. Bolívar se persuadió tempranamente de que la independencia, lejos de anunciar para las nuevas naciones un porvenir venturoso, abriría las puertas a nuevas guerras civiles. Por ello manifestó innumerables veces el mismo sentimiento: «Yo tiemblo [...] delante de lo futuro: más horrible me parece el porvenir que lo pasado».³⁴

3

A Bolívar no puede acusársele de haber carecido de lo que Henry James llamó «la imaginación del desastre».³⁵ Al contrario, lo que verdaderamente asombra es la aguda conciencia que tuvo sobre las consecuencias

Ibid., vol. 1, p. 167.

Ibid., vol. 1, pp. 1406-1407.

Ibid., vol. 1, p. 723. Y en una carta a Santander del 30 de octubre de 1823, comentando el armisticio entre España, México y Buenos Aires, y recomendando su aceptación, Bolívar decía: «El armisticio es mejor que la paz, aunque cueste más aparentemente, pues no tengo la menor duda de que más nos costará la guerra civil, que nacerá el mismo día que cesen las tempestades transmarinas», *ibid.*, vol. 1, p. 826.

Sobre este punto, véase Michael Oakeshott, *La política de la fe y la política del escepticismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 60.

32

33

34

35

probables de su gesta histórica y la manera descarnada como analizó algunos de los aspectos fundamentales del proceso en su correspondencia privada. Tales eran sus temores que una vez llegó a decir: «Yo temo más a la paz que a la guerra»;³⁶ y en otra oportunidad comentó lo siguiente: «Yo considero al Nuevo Mundo como un medio globo que se ha vuelto loco y cuyos habitantes se hallasen atacados de frenesí y que, para contener este flotamiento de delirios y de atentados, se coloca en el medio, a un loquero con un libro en la mano para que les haga entender su deber».³⁷ Su pronóstico difícilmente pudo ser más sombrío: «... no pudiendo soportar nuestro país ni la libertad ni la esclavitud, mil revoluciones harán necesarias mil usurpaciones».³⁸ Bolívar preveía —y ese fue el término que usó— una «catástrofe», y decía que esta última «no se puede evitar aunque se hicieran esfuerzos sobrenaturales».³⁹ ¿Qué le angustiaba tanto?

Sobre el espíritu de Bolívar se posaban, siempre inquietantes, las amenazas de la anarquía y lo que él denominaba «la pardocracia». En 1829 decía que «sin muchas exageraciones, se puede llamar a este hemisferio el de la anarquía...»,⁴⁰ a lo que se sumaba su profundo temor a la «pardocracia», es decir, al posible dominio político de la mayoría no blanca en sociedades que se hallaban en proceso de disolución, a consecuencia de la rotura de los vínculos coloniales y de las devastaciones de la guerra. Bolívar estaba convencido de que esa mayoría no se hallaba preparada para regir su propio destino.⁴¹ En la *Carta de Jamaica* previó, en cuanto al

36 Bolívar, vol. I, p. 560.

37 *Ibid.*, vol. II, p. 350.

38 *Ibid.*, vol. II, pp. 705-706. Más tarde escribía: «Nunca he considerado un peligro tan universal como el que ahora amenaza a los americanos: he dicho mal, la posteridad no vio jamás un cuadro tan espantoso como el que ofrece la América, más para lo futuro que para lo presente, porque, ¿dónde se ha imaginado nadie que un mundo entero cayera en frenesí y devorase su propia raza como antropófagos?», *ibid.*, vol. II, p. 933.

39 *Ibid.*, vol. II, p. 772.

40 Carta a Patrick Campbell, fechada en Quito el 26 de abril de 1829, publicada en el *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, 154, Caracas, p. 131, citada en Francisco A. Encina, *Bolívar y la independencia de la América española*, vol. VII. Santiago: Nascimento, 1965, p. 506

41 Como se dijo antes, esta honda convicción de Bolívar queda explícita, de manera especialmente clara, en el *Discurso de Angostura* y en otros muchos pasajes de su extensa correspondencia. También interesa conocer el reporte que el agente inglés J. Maling transmitió a su gobierno, luego de sostener (el 18 de marzo de 1825) una extensa conversación con Bolívar. De acuerdo con este reporte, Bolívar dijo a Maling que «De todos los países, Suramérica es la menos apta para gobiernos republicanos. ¿En qué consiste su población sino en indios y negros más ignorantes que la vil raza de los españoles de la que acabamos de emanciparnos? Un país representado y gobernado por gente así tiene que ir a la ruina». Citado en Salvador de Madariaga, *Bolívar*, tomo II. Santo Domingo: Cultura, 1979, pp. 297-298. La lectura de la correspondencia de Bolívar en esa época concede verosimilitud a lo expuesto por Maling en su reporte.

porvenir cercano, un período de transición en el que imperarían serias dificultades, período que en su opinión requeriría «de los cuidados de gobiernos paternos que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra». ⁴² Inicialmente, Bolívar confiaba en que el progresivo mestizaje y la igualdad legal entre los ciudadanos crearían paulatinamente las bases de la estabilidad y la prosperidad en las nuevas naciones, y éstas eran sus reflexiones al menos hasta 1819, en su *Discurso de Angostura*; ⁴³ no obstante, de manera gradual, y –paradójicamente– a medida que aumentan sus logros militares, el pesimismo se acrecienta en su ánimo, hasta un punto en que pierde la esperanza en la posibilidad de detener la «pardocracia»: «... la igualdad legal –escribe en 1825– no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico; y después querrá la pardocracia, que es la inclinación natural y única, para exterminio después de la clase privilegiada». ⁴⁴ Un año más tarde concluía que «solamente un hábil despotismo puede regir a la América», y repetía su advertencia: «Guinea y más Guinea tendremos; y esto no lo digo de chanza, el que escape con su cara blanca será bien afortunado...». ⁴⁵

La «historia oficial» pierde con frecuencia de vista que Bolívar era un hombre de sus circunstancias, con una posición concreta dentro de su sociedad. Lynch sostiene que Bolívar «se consideraba libre de prejuicios raciales», ⁴⁶ y asevera que: «Su primera preocupación fue la sociedad más que la raza; pudo usar el lenguaje de color, pero fue la estructura de la sociedad de que hablaba». ⁴⁷ Ello me parece cierto en un sentido moral, pues Bolívar mostró a lo largo de su carrera ser capaz de luchar codo a codo junto a hombres de todos los orígenes, y siempre combatió por la igualdad legal de los diversos grupos sociales y étnicos. No obstante, cabe insistir en que Bolívar era un hombre situado en un tiempo y en un espacio definidos, que asumía como natural el sentido de superioridad de su sector social en la Venezuela de entonces. Si bien la evidencia documental indica que esa superioridad era entendida por Bolívar como el

Bolívar, vol. I, p. 169.

42

Allí dijo: «La naturaleza hace a los hombres desiguales [...] Las Leyes corrigen esta diferencia [...]

43

La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla...», *ibid.*, vol. II, pp. 1140, 1149.*Ibid.*, vol. I, p. 1076.

44

Ibid., vol. I, pp. 1390-1391.

45

Lynch, *Las revoluciones...*, p. 207.

46

John Lynch, «Más allá de la revolución: Bolívar y el ascenso de la pardocracia», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*, tomo III. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, p. 213.

47

resultado de la posición sociocultural privilegiada de ese grupo mantuano y blanco, y no como producto de factores raciales,⁴⁸ lo cierto es que las realidades del momento le llevaban a ver con enorme preocupación lo que calificaba como «enemidad natural de los colores»,⁴⁹ y pensaba que una revuelta de los grupos sociales mayoritarios era el mayor de los peligros, «mil veces peor que una invasión española».⁵⁰

Sobre este tema clave, el de las tensiones presentes en una sociedad profundamente desigual por razones derivadas del color de la piel de sus integrantes, Bolívar asumió una actitud ambigua: por un lado, sobre todo a partir de 1815, lo percibió con agudeza en sus diversas implicaciones; por otro, tendió en ocasiones a evadirlo o a minimizar, tal vez deliberadamente, su importancia política. Con relación a ello ya mencioné que en el *Manifiesto de Cartagena* la «cuestión social» ocupa poco espacio. Lo mismo ocurre en la *Carta de Jamaica*, documento en el que —quizás más que en ningún otro de su vida pública— Bolívar habló como un miembro de la cúpula social,⁵¹ y «expresaba los conceptos de los criollos».⁵² De hecho, en una carta escrita el mismo mes de septiembre de 1815, poco después de la conocida como «de Jamaica» y dirigida al editor de un periódico en Kingston, Bolívar hizo esfuerzos por presentar un panorama idílico entre los diversos grupos sociales y razas en América, cuestionando la idea de que la mayor dificultad para obtener la independencia fuese

48 Sobre este punto, consúltese, Bolívar, vol. II, pp. 1140-1141.

49 Bolívar, vol. II, p. 337.

50 *Ibid.*, vol. II, p. 211. De hecho, el 17 de junio de 1814, desde Caracas, Bolívar escribió una reveladora carta al ministro del Exterior británico solicitando la ayuda inglesa frente a la amenaza representada por la rebelión de los esclavos en Venezuela. En ella le dice: «El ejemplo fatal de los esclavos y el odio del hombre de color contra el blanco [...] van a contagiar todas las Colonias Inglesas, si con tiempo no toman la parte que corresponde para atacar semejantes desórdenes [...] V.E. no violará de modo alguno la neutralidad de su Gobierno si en un caso tan extraordinario toma el partido de favorecernos con algunos socorros militares [...] para contener los excesos que pueda tener una tendencia directa a perturbar la tranquilidad y sosiego de las colonias de Su Majestad Británica», *ibid.*, vol. I, p. 98. Sobre este episodio, véase Juan Usklar Pietri, *Historia de la rebelión popular de 1814*. Caracas-Madrid: Edime, 1972, p. 138. Ya el 5 de marzo de 1813, los hermanos Toro, mantuanos refugiados en Trinidad, dirigieron al Príncipe Regente inglés un memorial en el que decían: «La población de Venezuela contiene cuatro quintas partes de hombres de color cuyos anhelos y ambiciones se hallan estimulados por las esperanzas que concibieron durante los últimos años [...] esta multitud sin principios renovará por desgracia, en nuestro país [...] escenas trágicas [...] cuyo ejemplo, como chispa eléctrica, puede comunicarse a estas colonias, tan cercanas y habitadas por las mismas clases de hombres», citado en Germán Carrera Damas, *La crisis de la sociedad colonial venezolana*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1983, p. 51.

51 Elías Pino Iturrieta, *Nueva lectura de la Carta de Jamaica*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1999, p. 41.

52 Miguel Acosta Saignes, *Acción y utopía del hombre de las dificultades*. La Habana: Casa de las Américas, 1977, p. 191. Según Lynch, por su parte, en la *Carta Bolívar* «hablaba por una clase muy reducida, aquellos que tenían riqueza y posición y deseaban más». Véase John Lynch, «El pensamiento de Simón Bolívar y su contribución a los primeros proyectos nacionales», en *Primer Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano*, tomo II. Caracas: Congreso de la República, 1984, p. 133.

«la diferencia de las castas que componen la población de este inmenso país». Al contrario, argumentaba, «todos los hijos de la América española, de cualquier color o condición que sean, se profesan un afecto fraternal recíproco», y las guerras civiles —cruel evidencia de lo cual experimentó Bolívar en la Venezuela ensangrentada de 1813-1814— «nunca se han originado en la diferencia de castas», sino en «la divergencia de las opiniones políticas, y de la ambición particular de algunos hombres». ⁵³ El tono de la carta, escrita por un exiliado que buscaba afanosamente en esos momentos la ayuda inglesa para obtener recursos que le permitiesen continuar la lucha, autoriza a creer que Bolívar escondía en este caso la verdad, y procuraba describir a sus lectores, con fines de propaganda, una situación que distaba mucho de ser tan armoniosa.

En Venezuela la guerra de Independencia fue una guerra civil, una conflagración social de grandes proporciones, con significativos elementos raciales —«de colores»— jugando un papel hondamente destructivo. A partir de 1815 Bolívar iba a referirse con frecuencia a esto, ⁵⁴ siempre con inocultable angustia. Los pardos, como señala Lynch, no eran propiamente una «clase» homogénea en el sentido marxista de la palabra, sino una especie de «masa indeterminada, inestable e intermediaria, oscilante en los márgenes hacia abajo y hacia arriba, porque ellos también tenían una estructura social, pues los más blancos miraron con recelo a sus colegas y tuvieron mayores esperanzas». ⁵⁵ Es bien sabido que esta masa se opuso mayoritariamente, en sus etapas iniciales y hasta muy avanzada la lucha, al proyecto independentista encabezado por el mantuanismo criollo, a raíz, en parte, de su apego cuasi religioso a la legitimidad monárquica, pero por encima de todo a los resentimientos y tensiones que existían entre la mayoría, de un lado, y del otro el estrecho círculo de blancos criollos dominantes. Ya en 1783 representantes de ese grupo privilegiado, agrupados en el Cabildo de Caracas, se habían ocupado de definir de este modo a los pardos: «Los pardos o mulatos son vistos aquí con sumo desprecio, y son tenidos y reputados en la clase de gente vil [...] Ellos han de descender precisamente de negros gentiles, de esclavos de hijos ilegítimos, porque los que se llaman mulatos o pardos son los que traen su origen de blancos con negras». ⁵⁶

Bolívar, vol. 1, pp. 178, 181.

Juan Bosch, *Bolívar y la guerra social*. Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1966, pp. 103-104. Una carta de particular importancia en torno al asunto es la del 8 de julio de 1826 a Santander. Véase Bolívar, vol. 1, pp. 1390-1391.

Lynch, «Más allá de la revolución», p. 215.

Cabildo de Caracas a la Corona, 13 de octubre de 1788. Citado en Lynch, *ibid.*

53

54

55

56

Si bien es cierto que Bolívar, luego de las duras experiencias de 1813-1814, se deslastró de cualquier prejuicio que pudiese haber abrigado en cuanto a la imperiosa necesidad de atraer a los pardos y esclavos a la causa patriota,⁵⁷ y se esforzó por dar forma a una coalición amplia que sustentase una guerra victoriosa, es también claro que procuró en todo momento mantener esa coalición bajo un férreo control. Lynch indica que a los pardos «no se les permitieron dirigentes autónomos»; de allí el enfrentamiento de Bolívar con Piar —nuevo instigador de la «guerra de castas»— y el eventual fusilamiento de este último.⁵⁸ En tal sentido, es elocuente la proclama en que Bolívar explicó las razones que le condujeron a enjuiciar a Piar y a ratificar su condena a muerte. Allí, sin equívocos, Bolívar —luego de acusar a Piar de pretender «proclamar los principios odiosos de la guerra de colores»— dice: «¿Quiénes son los actores de esta Revolución? ¿No son los blancos, los ricos, los títulos de Castilla y aun los jefes militares al servicio del rey?». Esta realidad, no obstante, había sido superada en términos prácticos —argumentaba— por la política igualitaria de los republicanos: «Todo lo inicuo, todo lo bárbaro, todo lo odioso se ha abolido y en su lugar tenemos la igualdad [...] La libertad hasta de los esclavos que antes formaban una propiedad de los mismos ciudadanos».⁵⁹ Las cosas, sin embargo, eran un tanto más complejas. Ciertamente, Bolívar guardó por un tiempo la esperanza de que, de manera gradual, el mestizaje y la igualdad legal proporcionasen las bases de un régimen «moderado» y «liberal», en un futuro quizás distante; mas esa esperanza se fue disipando con el paso del tiempo y con la maduración de su pensamiento sobre las condiciones en que la guerra dejaba a las sociedades en trance de emancipación. Son particularmente ilustrativas estas expresiones de Bolívar en 1828: «En los primeros tiempos de la independencia [...] se buscaban hombres, y el primer mérito era el ser guapo [es decir, valiente, AR] [...] negros, zambos, mulatos, blancos, todo era bueno con tal que

- 57 Escribe Lynch que «desde el punto de vista social, la guerra de la Independencia puede ser considerada como una competencia entre los criollos republicanos y los criollos realistas (con los peninsulares) por la lealtad de los pardos y el reclutamiento de los esclavos», *ibid.*, p. 222. Aunque Bolívar «nunca consiguió un apoyo de masas para la emancipación, sí extendió el movimiento más allá de la estrecha base de la Primera República», Lynch, *Las revoluciones...*, p. 198.
- 58 Lynch, «Más allá de la revolución...», p. 222; por su parte, Kossok dice que «[Bolívar] se oponía al movimiento espontáneo y descontrolado del pueblo. Apoyado en el ejército, le interesaba el firme control y la subordinación de las clases populares a la guerra y la revolución», véase Manfred Kossok, «Simón Bolívar y el destino histórico de la América española», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*, tomo II. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, p. 384.
- 59 Bolívar, vol. II, pp. 1105-1106.

peleasen con valor [...] individuos de todas las castas se hallan hoy entre nuestros generales, jefes y oficiales [...] *que en el día, con la paz, son un obstáculo al orden y la tranquilidad; pero fue un mal necesario*» [itálicas AR].⁶⁰

La «pardocracia» era un problema político, pero los pardos eran un componente indispensable del ejército en guerra. Ahora bien, ¿se hicieron patriotas los pardos? El tema de cómo logró Bolívar triunfar, a pesar de que —sobre todo en las primeras etapas de la guerra y hasta al menos 1819-1820— las mayorías sociales se mostraban indiferentes u hostiles al proyecto independentista,⁶¹ será tratado con mayor detalle más tarde en este estudio. No obstante, cabe adelantar lo siguiente: la guerra de Independencia venezolana se dividió en dos etapas, bastante bien diferenciadas. La primera se extiende entre 1810 y 1814, y culmina con la muerte de Boves. El país queda extenuado y el orden sociopolítico plenamente dislocado. La segunda etapa se inaugura en 1815 con la llegada a Venezuela del ejército peninsular de Morillo. Este ejército, como con tino apunta Elena Plaza, «venía a restaurar el orden, y no a cumplir con las promesas de Boves». ⁶² Las llamadas «castas», en medio de la disolución social, y habiéndose ya derribado los pilares ancestrales que sostenían el frágil edificio del sistema colonial, no estaban dispuestas a transformarse en fuerzas restauradoras del «orden». Su nueva existencia era la guerra, y el logro más importante de Bolívar, el que hizo posible su triunfo, fue haber canalizado en el terreno militar parte de esas fuerzas disolventes en función de la causa patriota. ⁶³ Ese logro sólo se extendió hasta el punto

L. Perú de Lacroix, *Diario de Bucaramanga*. Caracas: Tipografía Americana, 1935, pp. 215-216.

En 1814 Rafael Urdaneta escribía esto: «Los pueblos se oponen a su bien; el soldado republicano es mirado con horror; no hay un hombre que no sea enemigo nuestro; voluntariamente se reúnen en los campos a hacernos la guerra [...] los pueblos quedan desiertos al acercarse nuestras tropas [...] El país no presenta sino la imagen de la desolación. Las poblaciones incendiadas, los campos incultos, cadáveres por donde quiera, y el resto de los hombres reunidos para destruir al patriota...», citado en Germán Carrera Damas, *Boves. Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1972, pp. 165-166.

Elena Plaza, *La tragedia de una amarga convicción. Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936)*. Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1996, p. 245.

O'Leary puso de manifiesto las dificultades de reclutamiento para los patriotas. Los oficiales eran mayoritariamente blancos de los sectores elevados de la sociedad, y tenían un compromiso más firme con la causa; en cambio, «Las clases bajas [...] sufrían a consecuencia de las frecuentes incursiones de los beligerantes. La victoria o la derrota eran para ellas una misma cosa; cualquiera que fuese el jefe victorioso estaba seguro de reclutar sus tropas de entre ellas [...] De este modo se hacía [...] difícil hallar los reemplazos necesarios para llenar las bajas de los cuerpos», citado en Lynch, «Más allá de la revolución...», pp. 225-226. Comenta al respecto Lynch que «la guerra actuó como un disolvente social que dividió a los pardos contra ellos mismos, incorporando algunos al cuerpo de oficiales y a los sectores altos y dejando a las masas pardas al fondo de la sociedad», *ibid.*, p. 226.

60

61

62

63

de la victoria militar, de la emancipación nacional, pero no pudo ser convertido en la creación de un orden político estable y libre en términos de la posterior existencia interna de los pueblos independizados.

La guerra, escribe Lynch, «actuó como un disolvente social que dividió a los pardos contra ellos mismos»;⁶⁴ algunos pardos ascendieron al rango de oficiales en el ejército y otros se hicieron parte de los nuevos sectores sociales dominantes, resultado de la conmoción bélica, pero las masas pardas siguieron en el «fondo de la sociedad» después de la independencia.⁶⁵ El hecho de que la «pardocracia» —término que para Bolívar significaba tanto el dominio político de los pardos como el imperio de la anarquía— no se diese, por decirlo así, en «estado puro» después de culminada la guerra, no implica que Bolívar no haya estado convencido, sobre todo a partir de 1819-1821, de que una especie de guerra racial y el eventual dominio político de los pardos sobre los blancos eran amenazas reales, ante las cuales, en buena medida, concibió y propuso sus respuestas político-institucionales.

4

En sus lúcidas *Memorias marginales*, Ángel Bernardo Viso argumenta que «[Bolívar] jamás debió entrever las consecuencias fatales de su conducta, sino cuando la marcha de los sucesos le reveló la imposibilidad de controlar la revolución, como más tarde lo descubriría trágicamente la pérdida de poder de los suyos, de ese grupo elegido en cuya cima se veía a sí mismo».⁶⁶ Ciertamente, la toma de conciencia en Bolívar sobre el curso casi fatal del proceso emancipador en dirección hacia la disolución social, la anarquía política y el extremo debilitamiento de las nuevas nacio-

64 Lynch, «Más allá de la revolución...», p. 226.

65 *Ibid.*

66 Viso, *Memorias marginales*, p. 61. José Domingo Díaz, por su parte, escribió en las suyas estas palabras, dirigidas a Bolívar: «Usted ha debido saber al emprender su [...] carrera que no hay cosa más fácil que mover a un pueblo, ni más difícil que conducirle después al fin que se propuso quien le movió», J. D. Díaz, *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 432.

nes se agudiza con el paso del tiempo, y se hace particularmente intensa a partir de 1819. Luego de esa fecha se multiplican en sus cartas expresiones como las siguientes: «Esta es una catástrofe trágica, en que el desenlace lo decidirá el destino [...] Mis temores nunca me han burlado; ellos son infalibles [...] Mis temores son los presagios del destino; los oráculos de la fatalidad [...] cuanto más me elevo tanto más hondo se ofrece el abismo...». ⁶⁷

Bolívar se expresó con incuestionable sinceridad cuando afirmó que «mis ideas están en oposición con las inclinaciones del pueblo...». ⁶⁸ La ruptura de los vínculos de legitimidad tradicionales, el colapso del orden y el desencadenamiento de la guerra civil crearon el escenario tanto para la victoria militar como para el fracaso político. En una primera etapa de su carrera, las exigencias de la guerra colocaron en un segundo plano —pero sin que Bolívar les perdiese jamás de vista— los retos de la reconstrucción política. En el *Discurso de Angostura* esos desafíos se ponen de manifiesto de modo especialmente preciso y coherente. En ese documento, Bolívar expresa su convicción de que las «inclinaciones del pueblo» se orientaban a «la licencia», ante la que se hacía necesario levantar un «dique». Nuestra «constitución moral», frágil y degradada «por las ilusiones del error y por incentivos nocivos» exigía un gobierno adaptado a la realidad de que «nuestro Pueblo no es el Europeo, ni el Americano del Norte», sino más bien «un compuesto de África y de América». ⁶⁹ A objeto de «regenerar el carácter y las costumbres» ⁷⁰ de ese conjunto humano, Bolívar propuso un esquema institucional orientado —como con acierto lo describe Vallenilla Lanz— «a la formación de una élite que representara en el gobierno el mismo papel que el cerebro en el organismo individual». ⁷¹ De allí sus fórmulas políticas del Senado Hereditario y el Poder Moral, también desplegadas en el *Discurso*. ⁷² Desde luego, tales fórmulas hallaron escaso eco en las circunstancias imperantes, y ciertamente nadaban contra la corriente de los tiempos, anárquicos e igualitarios. Lo paradójico del caso es que la emancipación implicó, entre otros

Bolívar, vol. I, pp. 781, 784; Encina, vol. II, 1958, p. 647.

Bolívar, vol. I, pp. 759-760.

Ibid., vol. II, pp. 1135-1151.

Ibid., vol. II, p. 1151.

Vallenilla Lanz, *Críticas...*, p. 110.

Bolívar, vol. II, pp. 1143-1145, 1150-1151.

67

68

69

70

71

72

aspectos, la liquidación de la élite venezolana existente hasta 1811; la pretensión de recrearla en 1819, luego del cataclismo que ya había tenido lugar, era no más que una quimera.

Dicho lo anterior, y todavía en el terreno de las paradojas, cabe igualmente enfatizar que el pensamiento político de Bolívar tenía como norte —en atinadas palabras de O’Leary— establecer «un sistema capaz de dominar las revoluciones, y no teorías que las fomentasen; pues el espíritu fatal de una malentendida democracia, que había producido ya tantos males en America, debía refrenarse para impedir sus efectos».⁷³ En realidad, estas frases de O’Leary reflejan con precisión la médula conceptual del *Discurso de Angostura*, un esfuerzo notable por parte de Bolívar para contener los efectos de una revolución que él alentó con todas las fuerzas de su alma grande, y que acabó por desbordarle. Por esto, a partir de 1819-1821, ya completada la emancipación venezolana en Carabobo, se acentúan en Bolívar tanto la preocupación por el rumbo del proceso como la convicción de que «con los elementos morales que hay en el país, con nuestra educación, nuestros vicios y nuestras costumbres, solo siendo un tirano, un déspota, podría gobernarse bien a Colombia».⁷⁴ Es evidente que el problema de la dictadura le era inmanente a la independencia, a pesar de los reiterados deseos de Bolívar de asegurar la centralización del poder político sobre una base republicana legitimada.⁷⁵ Al respecto, Encina observa que:

... Bolívar se dio cuenta, desde el comienzo de su carrera, de que en los estados disueltos por la ruptura de la tradición, con su corolario la anarquía política y social, para triunfar en la lucha armada no basta la simple concentración del mando, suficien-

73 Citado en John Lynch, *América Latina, entre colonia y nación*. Barcelona: Crítica, 2001, p. 230.

74 *Diario de Bucaramanga*, p. 163. Esta idea es expuesta de otra forma en su importante carta a O’Leary del 13 de septiembre de 1829: «Un estado civilizado a la europea presenta menos resistencia al gobierno [...] que una pequeña provincia de América, por las dificultades del terreno y la ignorancia del pueblo; por lo mismo, nos veremos forzados a dar a nuestras instituciones más solidez y energía que las que en otros países se juzgan necesarias», Bolívar, vol. II, p. 773.

75 Sobre este punto, véase Kossok, p. 389. Cabe señalar que la lucha de Bolívar contra el federalismo, si bien tenía sentido en el marco de la guerra, se oponía al enraizamiento real de las autonomías regionales de entonces. Esto se comprobó en los debates ideológicos durante la Primera República, así como en la resistencia que persistió ante los intentos centralistas hasta muy avanzado el proceso emancipador. Véase *Actas del Congreso Constituyente de 1811-1812*. Caracas: Publicaciones del Congreso de la República, 1984, 2 vols.; también Carrera Damas, *La crisis...*, pp. 47-49. Parra Pérez emite al respecto un juicio categórico: «... la autonomía y el federalismo que trataron de imponer los próceres del año oncenso correspondían a la naturaleza política e histórica de los pueblos de Venezuela», en *Historia...*, p. 214.

te en los estados en forma. En ellos es ineludible la dictadura unipersonal del caudillo, libre de toda cortapisa y de toda traba constitucional o legal.⁷⁶

Ahora bien, la centralización del mando por las necesidades de la guerra devino gradualmente en concentración del mando frente a los desafíos de la anarquía y la disolución social. Ante las amenazas que percibía después de logrados sus triunfos militares, el pensamiento político de Bolívar, que siempre estuvo apegado al centralismo⁷⁷ y desconfió sistemáticamente de lo que calificaba como «la libertad indefinida, la Democracia absoluta»,⁷⁸ experimenta una evolución todavía más «conservadora» —entendido acá el término en un sentido estrecho, como ejercicio cuasi discrecional del poder. Esa acentuación de las fórmulas semidictatoriales en tiempos de paz culminan en la propuesta de Presidencia Vitalicia con derecho para escoger el sucesor, presentada por Bolívar en 1826 —y sin ironía alguna— como «la inspiración más sublime en el orden republicano».⁷⁹

Cualquier lector atento de los escritos de Bolívar tiene casi necesariamente que percibir la contradicción entre, de un lado, su constante prédica a favor de instituciones que se adaptasen «a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los Pueblos»,⁸⁰ y de otro lado su propuesta de fórmulas políticas tan alejadas de la realidad como, por ejemplo, el Senado Hereditario y el Poder Moral. En el *Discurso de Angostura*, para citar un caso, Bolívar cuestiona la imitación del «Código de Washington» [la Constitución federal norteamericana, AR], y de inmediato recomienda «el estudio de la Constitución Británica».⁸¹ Estas posiciones paradójicas no se explican ni por descuido ni por superficialidad; al contrario, eran —pienso— producto de

Encina, vol. vi, p. 120. En 1817 había dicho: «Toda la fuerza y, por decirlo así, toda la violencia de un gobierno militar bastaba apenas a contener el torrente devastador de la insurrección, de la anarquía y de la guerra. ¿Y qué otra constitución que la dictatorial podía convenir en tiempos tan calamitosos?», Bolívar, vol. II, p. 111. Véase también *ibid.*, vol. II, p. 1002.

Al respecto, consúltese Bolívar, vol. I, pp. 44, 168; vol. II, pp. 1138-1139, 1223. **77**

Bolívar, vol. II, p. 1148. Carrera Damas señala con tino que «a medida que se alejaba el estado de guerra», Bolívar percibía el «auge del liberalismo democrático» no sólo como un «obstáculo para el restablecimiento de la estructura de poder interna, sino [...] incluso [...] como un estímulo al desbordamiento de esa estructura».

Véase Germán Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*. Barcelona: Crítica, 1986, p. 131. **78**

Bolívar, vol. II, p. 1223. **79**

Ibid., vol. II, p. 1138. **80**

Ibid., vol. II, pp. 1138, 1143. **81**

la angustia que sentía Bolívar ante la inescapable constatación de que el proceso revolucionario, si bien estaba conduciendo a la independencia frente a España, también llevaba a un abismo de atraso, inestabilidad y despotismo.

Las salidas institucionales que Bolívar buscó denotan una patente dificultad, acerca de la cual dejó amplios testimonios, para hallar cauces constructivos al torbellino revolucionario. Por ello, aciertan quienes han señalado que Bolívar se reveló como un pensador político de gran creatividad en la formulación de la teoría de la *independencia nacional*, y en el intento de erigir un nuevo orden mundial —en particular en la *Carta de Jamaica*—, pero fue menos afortunado en lo que tuvo que ver con las respuestas al reto de organizar *internamente* las sociedades emancipadas, a través de un orden político que combinase la estabilidad y el equilibrio entre la libertad de los individuos y la acción del gobierno.⁸² En este orden de ideas podría decirse que Bolívar vivió una perenne y al final insuperable tensión entre, por una parte, su «clara visión de la anarquía post revolucionaria, la imposibilidad de crear nada duradero sobre la arena movediza que pisaba»,⁸³ y por otra su sentido de responsabilidad y su ímpetu de gloria personal, que le llevaban a luchar con todas sus fuerzas contra las implicaciones últimas de una revolución que dejaba a su paso la ruina inevitable a que usualmente conduce ese tipo de experiencias históricas, radicales, traumáticas y recurrentes.

Encina ha argumentado que: «Se resbala sobre la superficie del pensamiento político de Bolívar, cuando se cree divisar en él destellos del empeño greco-francés por rehacer racionalmente la sociedad».⁸⁴ Esto no es del todo cierto. Más bien, pienso que en el pensamiento político de Bolívar —como ya sugerí antes— puede percibirse una constante tensión entre, de un lado, su empeño en concebir fórmulas institucionales que se adaptasen a las circunstancias imperantes, diesen respuesta a las tradiciones y costumbres prevalecientes, y no generasen meras «repúblicas aéreas»; y de otro lado una tendencia que atribuía a las concepciones institucionales —como la Presidencia Vitalicia, el Senado Hereditario y el Poder Moral, entre otras—, una eficacia excesiva como factores capaces de moldear la realidad por sí mismas. De hecho, en el *Discurso de Angos-*

82 Carrera Damas, *Venezuela...*, pp. 134-135; Lynch, *América Latina...*, pp. 218-220.

83 Encina, vol. II, p. 721.

84 *Ibid.*, vol. VI, p. 114.

tura Bolívar llega en un párrafo a definir la función de los legisladores allí presentes como «la creación de un cuerpo político y aun se podría decir la creación de una sociedad entera»;⁸⁵ comentario revelador de los dilemas de un hombre que pretendía, con loable sentido de responsabilidad histórica, dar forma a naciones que habían caído en un torbellino de desorden a raíz de una revolución que las inundó en sangre, en especial a Venezuela.

La carrera de Bolívar ha sido tan distorsionada y simplificada por la «historia oficial», que el resultado mitificado impide apreciar en su justo valor tanto la magnitud de su angustia ante el destino de nuestros pueblos, a los que veía deslizarse hacia un abismo, como el significado de las acciones que tomó para intentar detener ese rumbo, acciones que en ciertos casos, como la dirigida a establecer una tutela extranjera sobre las naciones independizadas, constituyen un dramático ejemplo del carácter trágico —en un sentido que explicaré posteriormente— que asume su trayectoria vital. En tal sentido tiene gran importancia reproducir párrafos de una carta de 1825, en la que argumentó lo siguiente:

... nuestra federación americana no puede subsistir si no la toma bajo su protección la Inglaterra [...] si nos ligamos a la Inglaterra existiremos, y si no nos ligamos nos perderemos infaliblemente [...] Mientras tanto, creceremos, nos fortificaremos y seremos verdaderamente naciones para cuando podamos tener compromisos nocivos con nuestra aliada [...] Supongamos aun que suframos por la superioridad de la Inglaterra: este sufrimiento mismo será una prueba de que existimos, y existiendo tendremos la esperanza de librarnos del sufrimiento. *En tanto que, si seguimos en la perniciosa soltura en que nos hallamos, nos vamos a extinguir por nuestros propios esfuerzos en busca de una libertad indefinida* [itálicas AR].⁸⁶

Esta no fue una reflexión aislada o inconexa por parte de Bolívar, sino una inquietud sistemática del último período de su vida, inquietud que encontró elocuente expresión en un oficio que dirigió en 1829 desde Quito al ministro del Exterior de Colombia, en el que otra vez re-

Bolívar, vol. II, p. 1134.
Ibid., vol. I, pp. 1120-1121.

comienda que una gran potencia europea asuma la tutela protectora de las naciones recién emancipadas en Hispanoamérica para evitar que caigan definitivamente en el foso de la anarquía. Allí solicita al ministro que explique al representante británico las «pocas esperanzas que hay de consolidar los nuevos gobiernos americanos y las probabilidades que hay de que se despedacen recíprocamente, si un estado poderoso no interviene en sus diferencias o tome a la América bajo su protección». ⁸⁷

De modo que, finalmente, Bolívar concluyó que los pueblos hispanoamericanos emancipados requerían tanto de gobiernos paternales como de tutores extranjeros para corregir la realidad, que con el paso del tiempo y la evidencia del deterioro socioeconómico y desmembración política causados por la guerra se le hizo evidente, de que «la América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió...». ⁸⁸ Es verdaderamente sobrecogedora la angustia que se apodera del ánimo de Bolívar, sobre todo con respecto al destino de Venezuela, a partir precisamente de la culminación de sus triunfos militares, como cuando escribe a Santander en 1825 lo siguiente:

Cada día me convenzo más de que es necesario darle a nuestra existencia una base de garantía. Veo la guerra civil y los desórdenes volar por todas partes, de un país a otro, mis dioses patrios devorados por el incendio doméstico. Hablo de Venezuela, mi querido país. Esta consideración me ocupa noche y día; *porque contemplo que el primer desorden que allí nazca destruye para siempre hasta la esperanza, porque allí el mal será radical y penetra luego a la sangre...* [itálicas AR]. ⁸⁹

El pesimismo bolivariano se extendía al conjunto de una América hispana que emergía a la vida independiente en condiciones de extrema debilidad e indetenible anarquía: «... el orden, la seguridad, la vida y todo, se aleja cada vez más de esta tierra condenada a destruirse ella misma y ser esclava de la Europa». ⁹⁰ Sólo desde la perspectiva de este hondo desencanto pueden entenderse las gestiones de Bolívar en cuanto a la posibilidad de un protectorado extranjero para la América recién

87 Citado en Encina, vol. VII, pp. 508-511.

88 Bolívar, vol. I, p. 166.

89 *Ibid.*, vol. II, p. 1028.

90 *Ibid.*, vol. II, p. 704.

emancipada.⁹¹ Esos intentos, que en nada concreto desembocaron, fueron producto de su frustración ante el panorama de derrumbe político-institucional de una región a la que Bolívar —con una frase que si bien puede parecer presuntuosa es de igual modo profundamente reveladora—, llegó a considerar «el más infame pueblo que ha tenido la tierra», un pueblo al que «he dado una libertad que no merece».⁹²

Para la «historia oficial», por supuesto, estos aspectos de la carrera de Bolívar son objeto o bien de falta de atención sistemática, o bien de deliberado olvido, o bien de inequívoca distorsión. Desde mi perspectiva, no obstante, los esfuerzos finales de Bolívar por contener la anarquía posrevolucionaria, e incluida la idea de una posible tutela extranjera, revelan un rasgo positivo desde una perspectiva ético-política, que es necesario contrastar con errores que hubiese podido cometer: me refiero a su sentido de responsabilidad histórica, que llegó en ocasiones —y en especial en las etapas finales de su impresionante carrera— a superar la otra gran fuente motivadora de su gesta, es decir, su ambición de gloria personal.

5

¿Cómo logró triunfar Bolívar? A pesar de que pocos historiadores se han hecho la pregunta en el contexto en que acá he intentado formularla, ésta tiene sentido, en particular tomando en cuenta las adversas condiciones sociopolíticas —y, por buen tiempo, también militares— que enfrentó la causa patriota, en particular en Venezuela entre 1810 y 1819 principalmente.

Para responder esa interrogante hay que tomar en cuenta, en primer término —y como sugerí antes— que la guerra de Independencia en Vene-

El tema del protectorado extranjero es a veces mezclado con el del presunto «monarquismo» de Bolívar. Sobre el asunto comparto plenamente las opiniones de Encina, quien argumenta que Bolívar mantuvo en relación con la monarquía una posición consistente: no la rechazaba en teoría, pues admitía la grandeza a que había conducido a pueblos como el británico, mas tampoco la aceptaba para los pueblos hispano-americanos, pues se trataba de un régimen que se les había hecho odioso y para cuya implantación no existían condiciones adecuadas en estas tierras. Véase Encina, vol. VI, pp. 177-178. En lo personal, Bolívar tenía una aguda conciencia de su imagen histórica y del sentido de su gloria, que era incompatible con la pretensión de coronarse. Al respecto, véase Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional...*, pp. 84-85.

Bolívar, vol. II, p. 665. También la importante carta de Bolívar sobre el tema en *ibid.*, p. 985.

En torno al protectorado extranjero, véase Joan E. Garcés, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*. México: Siglo XXI Editores, 1996, pp. 323-329.

91

92

zuela se divide en dos etapas claramente diferenciadas: una primera que se extiende desde 1810 hasta 1814, y que culmina con la muerte de Boves, y un segundo período que se inicia con la llegada del ejército peninsular de Morillo en 1815 y se cierra en Carabobo. La primera etapa, la de la guerra civil radicalizada, termina en derrota estratégica para Bolívar; la segunda permite la gradual transformación de la guerra civil en guerra nacional contra España, y si bien incluye serios reveses tácticos, explicables en buena medida por el empeño estratégico de Bolívar en obtener una *decisión rápida*, con base en una estrategia de combate directo frente al grueso de las fuerzas realistas estacionadas en Venezuela, culmina en victoria estratégica, gracias al cambio del teatro de la guerra en 1819 de Venezuela a la Nueva Granada—estrategia indirecta— y a la batalla de Boyacá, con sus posteriores efectos.

La cruenta guerra venezolana entre 1810 y 1814 condujo a la sociedad a una especie de «estado de naturaleza» hobbesiano, «una guerra tal que es la de todos contra todos», como escribió el gran filósofo político inglés.⁹³ La revolución mantuana de 1810-1812 destruyó un «sistema social, político y económico [...] muy sensible, que funcionaba relativamente bien pese a sus numerosas imperfecciones».⁹⁴ La sociedad comenzó a disolverse, pues se asestó un golpe mortal al principio de legitimidad que actuaba como «cemento» de un orden sustentado en odiosos privilegios y estamentos, compuesto por individuos unidos no por promesas y pactos mutuos, sino por el elemento común que proporcionaba la lealtad a la Corona. La decisión del sector socialmente dominante, asociado a minoritarios grupos de intelectuales radicales, de romper los vínculos con el principio de legitimidad monárquico devolvió la sociedad al «estado de naturaleza», pues a diferencia de lo ocurrido en la América del norte, donde la ruptura con la Corona británica lejos de desintegrar los pactos entre los ciudadanos de la colonia lo que hizo fue reforzarlos, en Venezuela y el resto de la América española esos pactos entre individuos libres no existían.⁹⁵ El resultado objetivo de esto, además de la exterminación de al menos un tercio de la población original, fue «una situación de crisis permanente [...] provocada por la extraordinaria movilidad horizontal y vertical cuyo catalizador principal era el ejército».⁹⁶ La

93 Thomas Hobbes, *Leviatán*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 102.

94 Jaime E. Rodríguez O., *La independencia de la América española*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 291.

95 Sobre este punto, véase Hannah Arendt, *On Revolution*. New York: Penguin Books, 1990, pp. 180-181.

96 Kossok, p. 381.

lucha en Venezuela tuvo entonces un carácter de encono y ensañamiento extremos: «Unidos a las condiciones de privación y miseria en que se combatía, estos factores de violencia llegaron a imponer terror incluso a soldados veteranos de campañas nada fáciles, cuales los soldados peninsulares que trataban de eludir a toda costa su envío a América y particularmente a Venezuela». ⁹⁷

La Primera República sucumbió en 1812 asfixiada por la falta de apoyo popular y el miedo de los sectores moderados —y del propio Miranda— a la rebelión de esclavos que desde Barlovento y otras zonas amenazaba a Caracas. ⁹⁸ La Campaña Admirable de Bolívar en 1813 le permitió atravesar el país, pero no dominarlo —como en su momento indicó Rafael Urdaneta. ⁹⁹ No obstante, es posible que ni siquiera el éxito limitado que significó esa fulgurante campaña se hubiese producido sin el decreto de Guerra a Muerte de junio de ese año, ¹⁰⁰ decreto que contribuyó a sembrar el terror y la parálisis en muchos corazones realistas. ¹⁰¹

Sobre el tema de la Guerra a Muerte se ha discutido mucho, casi siempre con escasa ponderación. Los historiadores «bolivarianos» culpan a los realistas de haberla comenzado, ¹⁰² y sostienen que su práctica por parte de Bolívar fue una «retaliación». ¹⁰³ Encina especula que al decre-

Carrera Damas, *Boves...*, p. 101. Encina se refiere a la guerra venezolana como un episodio con «caracteres de ferocidad inenarrables», vol. III, p. 323. Al respecto, consúltese Juan Uslar Pietri, *La Revolución Francesa y la Independencia de Venezuela*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1989, pp. 109-112. Dice Uslar Pietri que «En Venezuela se derramó más sangre en aquel año [1814] que en toda la Revolución Francesa», *Historia de la rebelión...*, p. 101.

Parra Pérez, pp. 484, 574; Uslar Pietri, pp. 51-53.

Citado por Kossok, p. 379.

Bolívar, vol. II, pp. 1013-1015.

Esta es, ciertamente, la opinión de Salvador de Madariaga, tomo 1, pp. 401-402.

Encina, vol. II, pp. 681-682; Lynch, *Las revoluciones...*, p. 200. Sin embargo, en otra obra Lynch se contradice y argumenta que «Los historiadores [...] venezolanos han condenado [...] la contrarrevolución de 1812-1813 al considerarla excesivamente cruel y vengativa. Fue opresiva, pero no especialmente violenta, y es bien sabido que se permitió a muchos líderes republicanos (como el propio Bolívar) que se escaparan sin ser molestados», Lynch, *América Latina...*, p. 109. El Regente Heredia, uno de los testigos más lúcidos y equilibrados del proceso, emite en sus *Memorias* juicios de enorme interés en torno al tema de la Guerra a Muerte y las responsabilidades al respecto de cada uno de los bandos en pugna. Véase José Francisco Heredia, *Memorias del Regente Heredia*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1986, pp. 142, 144-146.

Encina, vol. III (1961), pp. 147, 302; vol. II, pp. 664-665. Según Carole Leal Curiel, «La violación de las capitulaciones y la posterior aprobación que hacen las Cortes de la acción de Monteverde crearon las perfectas condiciones para el surgimiento de la práctica del “terror” permitiendo que el adversario fundamentara su venganza en el derecho de la legítima defensa...»; poco más tarde, no obstante, la autora dice que la declaratoria de Guerra a Muerte por parte de Bolívar se desprendió de sus decisiones sobre la organización militar, de su teorización sobre la naturaleza del enemigo y su concepción de la guerra ofensiva. En ese orden de ideas, afirma, Bolívar «institucionalizó» el terror, entendiendo por «institucionalización» la oficialización «por escrito» de «una línea de pensamiento y acción». La radicalización militar, en suma, estuvo precedida por la radicalización política producida entre 1811 y 1813. Véase su interesante artículo, «El árbol de la discordia», *Anuario de Estudios Bolivarianos*, VI, 6, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Simón Bolívar, 1997, pp. 172, 175-176, 181.

97

98

99

100

101

102

103

tarla, Bolívar puede haber creído que «los realistas aterrados humanizarían la guerra». ¹⁰⁴ Este juicio me parece errado. Para empezar, comparto la opinión de Carrera Damas según la cual la Guerra a Muerte formó parte de un proceso complejo y fue practicada por ambos bandos con extrema crueldad. ¹⁰⁵ En cuanto a Bolívar se refiere, las motivaciones del decreto de 1813 fueron diáfananamente descritas por Urdaneta al referirse a las consecuencias que esperaban producir: «... que los españoles, sabiendo que encontraban una muerte cierta se acobardarían, como sucedió, y que los criollos engrosarían las filas de Bolívar, como era necesario». ¹⁰⁶ McKinley piensa igualmente que Bolívar, enfrentado al escaso apoyo popular que percibía a su alrededor, esperaba que el decreto contribuyese a separar a los españoles de los criollos y que estos últimos se verían impulsados a identificarse con la causa patriota. ¹⁰⁷ Según Carrera Damas, la Guerra a Muerte no logró «a corto plazo» los objetivos propuestos y enajenó «la opinión moderada sin galvanizar al pueblo». ¹⁰⁸ McKinley, por su parte, sostiene que el esfuerzo de Bolívar por radicalizar la opinión criolla fracasó, y que «el único efecto seguro de su política fue un efecto negativo: la radicalización extrema de la comunidad española realista que sobrevivió». ¹⁰⁹

A mi modo de ver, la radicalización de la guerra a partir de 1813, en lo que toca a Bolívar, fue un acto deliberado ¹¹⁰ y estratégicamente calculado, que se enraizó en su convicción de que —en sus palabras— «en todas las guerras civiles ha vencido siempre el más feroz». ¹¹¹ Muy reveladoras son sus expresiones en carta a Santander de 1819:

Las grandes medidas, para sostener una empresa sin recursos, son indispensables aunque terribles. Recuerde Usted los violentos resortes que he tenido que mover para lograr los pocos sucesos que nos tienen con vida. *Para comprometer cuatro guerrillas, que han contribuido a libertarnos, fue necesario declarar la gue-*

104 *Ibid.*

105 Carrera Damas, *Boves*, pp. 172-179.

106 Citado en Madariaga, tomo 1, p. 401.

107 P. Michael McKinley. *Caracas antes de la Independencia*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1985, p. 237.

108 Carrera Damas, *La crisis...*, p. 46.

109 McKinley, p. 238.

110 Su postura obedeció, dice Viso, «básicamente, a su decisión personal, y a la supuesta *voluntad general* encarnada por él», Ángel Bernardo Viso, *Las revoluciones terribles*. Caracas: Grijalbo, 1997, p. 116.

111 Bolívar, vol. II, p. 933. Según McKinley, «el derramamiento de sangre [...] no fue producto del compromiso político de la población [...] con uno u otro de los dos bandos enfrentados [...] sino más bien de las políticas deliberadas y extremistas de los dos caudillos rivales...» [Bolívar y Monteverde, AR], p. 237.

rra a muerte; para hacernos de algunos partidarios fieles necesitamos de la libertad de los esclavos... [itálicas AR].¹¹²

El riesgo que corrió Bolívar con la Guerra a Muerte fue enorme, pues generó lo que los estudiosos de la estrategia denominan un «proceso de escalada» en el nivel de la violencia mutua,¹¹³ es decir, de ascenso constante y paulatino hacia planos cada vez más altos de violencia entre antagonistas que no encuentran zonas de compromiso y moderación. Así, el terror republicano enfrentó una respuesta realista todavía —si cabe— más bárbara, materializada en Boves y sus llaneros. Es cierto que esta reacción acabó con la Segunda República, pero también lo es que con la Guerra a Muerte Bolívar logró algo muy importante en función de sus propósitos: *quemó las naves* y comenzó a labrarse una reputación de implacabilidad y determinación que en adelante siempre le acompañó, reputación que en no poca medida contribuyó a consolidar su liderazgo.

Dicho de otra manera, con la Guerra a Muerte Bolívar avanzó en el camino de lograr lo que Sloterdijk explica en estos términos: «El arte de lo posible a gran escala gira en torno a ese acto forzado que consiste en *presentar lo improbable como ineludible*».¹¹⁴ En 1813-1814 la independencia lucía aún como algo improbable y hasta reversible para una mayoría en Venezuela; la Guerra a Muerte fue un paso, lleno de peligros sin duda, que empezó a darle visos de ineludible al objetivo emancipador. No estoy, desde luego, discutiendo acá los aspectos éticos de la Guerra a Muerte que, sin duda, y de ambas partes, constituyó una gravísima transgresión de las leyes de la guerra civilizada y del derecho de gentes; me estoy refiriendo exclusivamente a sus efectos político-militares. Bolívar tomó un camino en la organización militar y conducción política de la guerra que le llevaría siempre hasta las últimas consecuencias;¹¹⁵ de ese modo se forjan en la historia los caudillos.

La guerra es un fenómeno complejo y azaroso, en el que siempre intervienen al menos dos contrincantes. Los errores estratégicos de uno de ellos pueden aportar mucho a su eventual derrota. En ese orden de ideas, conviene recordar que entre 1813 y 1814 el sector realista en Venezuela no era homogéneo; por una parte se hallaban los representantes tradiciona-

Ibid., vol. 1, p. 397.

112

Sobre la teoría de la «escalada», véase Richard Smoke, *War. Controlling Escalation*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

113

Peter Sloterdijk, *En el mismo barco*. Madrid: Siruela, 2000, p. 37.

114

Kossok, p. 380.

115

les del poder español, y por otros ciertos caudillos, entre los que destacaba Boves, que dirigían un importante movimiento popular en contra de las «repúblicas mantuanas». La muerte de Boves en diciembre del año 14 asestó un golpe severísimo a este movimiento, que amenazaba con desbordar los marcos de la autoridad tradicional y convertirse en algo totalmente inédito, en un desarrollo anárquico colocado «fuera de la ley». Dice Rodríguez al respecto que «Su muerte [de Boves, AR] constituyó un alivio para las autoridades reales que él reconocía nominalmente. Los peninsulares, al igual que los americanos [criollos blancos, AR], estaban temerosos ante la posibilidad de que se produjera una revolución semejante a la de Haití dirigida por las castas de ascendencia africana».¹¹⁶ Bolívar, con característica perspicacia, lo interpretó así: «La muerte de Boves es un gran mal para los españoles, porque difícilmente se encontrarán reunidas en otro las cualidades de aquel jefe».¹¹⁷

La decisión de la Corona (el sistema absolutista había sido restituido en España en 1814) de enviar una expedición de unos diez a doce mil hombres, al mando de Morillo, a Venezuela en 1815 tuvo no poco que ver con los temores al desbordamiento anárquico encarnado en la rebelión «realista» de los llaneros de Boves.¹¹⁸ Esta expedición venía a restaurar el orden colonial, no a promover insurrecciones populares. Escribe Encina:

Los llaneros, los esclavos, los negros, los zambos, los indios y los malhechores, frenados los incentivos que los habían inclinado del lado del Rey (el saqueo de las ciudades y de las haciendas, el asesinato de los blancos y la apropiación de sus bienes y de sus mujeres) se desinteresaron de la causa realista; y los fusilamientos y castigos impuestos a los desertores y a los recalcitantes, los iban a inclinar gradualmente del lado patriota.¹¹⁹

La política española fue definida en función de la restauración de las estructuras de poder colonial, confiando para ello en Morillo, sus tropas y los blancos realistas, y no en los pardos y esclavos. No obstante, apunta

116 Rodríguez, p. 148; véase también Heredia, pp. 40, 162-163, 194-195.

117 Bolívar, vol. I, p. 125.

118 Uslar Pietri, pp. 99-101.

119 Encina, vol. III, p. 470. Estas observaciones reflejan las de Laureano Vallenilla Lanz, en su capítulo «Psicología de la masa popular», de *Cesarismo democrático*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991, pp. 79-93. Los caudillos populares realistas odiaban a los soldados peninsulares recién llegados y les consideraban parásitos, interesados en lograr algún compromiso, hacer fortuna rápida y largarse de Venezuela lo antes posible. Véase Lynch, *América Latina...*, pp. 114-115.

Lynch, «los pardos no podían olvidar sus recientes avances y rehusaron regresar a las condiciones anteriores a 1810. Antes que sufrir la desmovilización o la degradación, decidieron que tuvieron más que ganar del bandidaje o con la causa revolucionaria». ¹²⁰ Los patriotas, con Bolívar a la cabeza, dieron comienzo a un viraje estratégico que fue transformando la estructura del Ejército republicano, haciéndole más «popular»; y si bien «los criollos [blancos, AR] conservan en definitiva la dirección militar y política de la lucha, se abren a los pardos posibilidades de acceso a rangos elevados, disminuyendo así la distancia social entre tropas y cuadros». ¹²¹ El sector realista, en cambio, perdió gradualmente su enraizamiento en las masas, a lo que se sumó la desilusión creciente de los todavía fieles a la Corona ante la falta de una acción consistente por parte de España, en el esfuerzo por apoyar a Morillo y adelantar con la necesaria firmeza y eficacia una política de reconquista. ¹²²

Es de hacer notar que los desatinos de la política española hacia América, particularmente luego del retorno de Fernando VII al trono, reflejaron iguales desaciertos en el ámbito interno en la península, donde el Rey ejecutó una política «de venganza y de represión que ahondó más la división entre las dos España» [liberal y monárquica, AR]. ¹²³ El esfuerzo militar encarnado en la expedición de Morillo no fue acompañado por una adecuada política de conciliación y compromiso, ajustada a los nuevos tiempos, que tomase en cuenta tanto las posibilidades como las limitaciones que una nueva situación colocaba en la agenda histórica.

La Guerra a Muerte había obstaculizado aun más las posibilidades de conciliación que pudiesen haber existido entre los dos bandos; ¹²⁴ después, la política restauradora de la Corona, ejecutada a través de Morillo, abrió las puertas a una segunda etapa de la contienda, bajo nuevas condiciones sociopolíticas, que Bolívar supo interpretar y explotar efi-

Lynch, «Más allá de la revolución...», pp. 220-221. Véase también Encina, vol. IV (1962), pp. 60-61; Plaza, p. 246. 120

Carrera Damas, *La crisis...*, p. 97. Es correcta la aseveración de Lynch de que Bolívar «superó los límites de sus propios orígenes, al ampliar la base social de la revolución para atraer a los esclavos y la gente de color», *América Latina...*, p. 256; véase también, *Las revoluciones...*, pp. 198, 207. 121

Sobre este punto, véase Michael P. Costeloe, *La respuesta a la independencia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 51. Las dificultades de adaptación de las tropas de Morillo al clima y al inhóspito terreno tropical las diezmaron prontamente y redujeron su capacidad de combate: «Cuatro años después de haber llegado a Costa Firme [...] el ejército de Morillo estaba reducido a menos de la tercera parte», escribe Vallenilla Lanz. Véase *Cesarismo...*, p. 25; también Acosta Saignes, p. 220. A pesar de todo esto, la causa realista se sostuvo hasta 1821, lo cual pone de manifiesto claramente la reticencia de muchos a asumir y respaldar la causa emancipadora. 122

Marqués de Lozoya, *Historia de España*, tomo VI. Barcelona: Salvat Editores, 1977, p. 7. Sobre este punto, véase Heredia, pp. 35-36, 146. 123

124

cazmente. El neoabsolutismo de Fernando VII constituyó una respuesta miope a las revoluciones hispanoamericanas, una respuesta que no tomó en cuenta el cambio de actitudes y circunstancias, que reclamaban mayor lucidez y flexibilidad. La simple pretensión de restaurar las cosas al sitio en que se hallaban antes de 1810 resultaba quimérica, en vista de la conmoción que ya había sacudido los cimientos del poder colonial.

En lo que respecta a Venezuela en particular, la situación de «estado de naturaleza» hobbesiano al que había descendido la sociedad entre 1813 y 1814 degradó en forma extrema los principios sustentadores de la convivencia; en tales condiciones, se imponía una política de mayor apertura, si es que la Corona pretendía nutrir el rechazo a los patriotas por parte de amplios sectores sociales y encauzar ese sentimiento en una dirección constructiva. No haber actuado de esa forma fue un error estratégico esencial, que cimentó el camino de victoria para los independentistas.

En el terreno militar, el aprendizaje de Bolívar fue un poco menos rápido que en el aspecto político. Es importante observar que entre 1813 y 1818 Bolívar se aferró sistemáticamente a una estrategia directa, que buscaba golpear el poder español en su punto de mayor concentración y fortaleza, que en el caso venezolano se encontraba en el centro-norte del país (provincia de Caracas), la zona más poblada y rica y por tanto la mejor defendida por los realistas. La Campaña Admirable fue un surco en la tierra dirigido con pasmosa velocidad hacia Caracas; los desembarcos de 1816 y 1817 (expediciones de Los Cayos) también se orientaban a combatir en las regiones norteñas para forzar el paso hacia Caracas.

Como es sabido, Bolívar se vio obligado, en vista de su precaria situación militar, a trasladarse a la región de Guayana en 1817, y pronto empezó a percatarse de las ventajas estratégicas de esta posición, que le permitía recibir apoyo y suministros a través de las bocas del Orinoco y le conectaba por vía fluvial hacia los llanos y el centro del país. Sin embargo, en 1818 Bolívar insistió, con su Campaña del Centro, en el enfoque estratégico directo, y una vez más desafió al poder español donde este último era más fuerte, obteniendo como resultado una severa derrota.

La decisión de 1819, tomada en vista de la parálisis estratégica en Venezuela, de atravesar los Andes con el Ejército republicano y tomar a los realistas por sorpresa en la Nueva Granada, donde menos se le esperaba, constituye un ejemplo muy ilustrativo y exitoso de «estrategia indirecta», tal y como ha sido codificada y explicada por el experto militar

inglés Basil Liddell Hart.¹²⁵ El triunfo de Boyacá puede considerarse el «punto de inflexión» militar de la guerra de Independencia en la Nueva Granada y Venezuela; a partir de allí Bolívar no solamente consolidó decisivamente su posición política frente al resto de los caudillos patriotas, sino que adquirió los recursos y factores estratégicos necesarios para desarrollar una fructífera campaña contra el centro de gravedad del poderío español, campaña que culminó en Carabobo dos años más tarde. Boyacá fue el producto del fracaso de la Campaña del Centro en 1818 y de la agudeza estratégica de Bolívar, fraguada en la dura escuela de sucesivos reveses luego convertidos en victorias.

El triunfo final de Bolívar, en el aspecto militar, se debió también en medida importante a la calidad y eficacia de su liderazgo, a su enorme perseverancia, a sus dotes carismáticas y capacidad para inspirar a sus seguidores, convertir masas informes en ejércitos aguerridos y hombres sin escuela en oficiales capaces de vencer, en medio de un contexto pleno de adversidades por lo difícil del terreno, lo agreste del clima y lo primitivo del ambiente socioeconómico.¹²⁶ No es de ninguna manera exagerado afirmar que la lucha de independencia conducida por Bolívar, pone de manifiesto la relevancia que en determinadas circunstancias tiene el papel de un individuo en el curso de complejos y amplios eventos colectivos.¹²⁷

6

Los costos materiales y espirituales de la independencia venezolana fueron enormes. A mi modo de ver, ha sido Vallenilla Lanz quien con mayor sensatez resumió lo que ese proceso significó para esta sociedad, cuando

B. H. Liddell Hart, *Strategy*. New York: New American Library, 1974, pp. 319-337.

Sobre este punto, véase Encina, vol. IV (1962), pp. 350, 359.

El más elocuente testimonio al respecto lo produjo el propio Pablo Morillo en su informe reservado al gobierno de Madrid, luego de su entrevista con Bolívar: «Nada es comparable a la incansable actividad de este caudillo. Su arrojo y su talento son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución y de la guerra: pero es cierto que tiene de su estirpe española rasgos y cualidades que le hacen muy superior a cuantos le rodean. *Él es la revolución*». Citado en Indalecio Liévano Aguirre, *Bolívar*. Bogotá: Oveja Negra, 1985, p. 237.

125

126

127

dijo que en la lucha emancipadora «Venezuela ganó en gloria lo que perdió en elementos de reorganización social, en tranquilidad futura y en progresos moral y material efectivos».¹²⁸ Si bien no condenó de manera explícita la revolución de Independencia, Vallenilla Lanz sí la interpretó como un hecho profundamente desestabilizador, como «el origen y desenvolvimiento necesario y fatal de todos los gérmenes anárquicos que brotaron con cizañas venenosas al romperse la disciplina social de la colonia».¹²⁹ La independencia trastocó un proceso evolutivo gradual y constante, dando cabida a un «desorden orgánico» que alteró gravemente la salud y equilibrio de ese organismo social, producto de tres siglos de maduración. En síntesis, escribe Elena Plaza glosando a Vallenilla Lanz, «El vacío institucional y político que la independencia produjo trajo como consecuencia la anarquía, la guerra perenne y el enfrentamiento de partidos».¹³⁰ Como hemos visto en páginas anteriores, la evaluación que hizo el propio Bolívar, todavía colocado muy cerca de los eventos, fue una premonición de lo que más tarde diría el autor de *Cesarismo democrático*. Escribiendo en 1828, Bolívar llegó a afirmar cosas como ésta: «Muchas veces me arrepiento de ser americano, porque no hay cosa por eminente que sea que no la degrademos»,¹³¹ y su pronóstico fue simple: «Estos países no pueden progresar en los primeros cien años».¹³² Al menos en lo que respecta a Venezuela Bolívar no se equivocó, y las razones se deducen sin dificultad de estos datos que aporta Lynch: «La población de Caracas descendió de 50.000 habitantes en 1812 a 21.000 en 1814, la de Cumaná de 16.000 a 5.236 en el mismo período. Venezuela perdió 134.487 de sus habitantes entre 1800 y 1816, y se calcula que perdió 262.000 durante toda la guerra. La población total descendió de 800.000 en 1810 a poco más de 700.000 en 1825».¹³³

128 Vallenilla Lanz, *Cesarismo...*, p. 23.

129 Citado en Elena Plaza, *ob. cit.*, pp. 247-248.

130 *Ibid.*, pp. 342-343.

131 Bolívar, vol. II, p. 374.

132 Bolívar al Comodoro Hull; citado en Vallenilla Lanz, *Críticas...*, p. 112.

133 *Las revoluciones...*, p. 216. En otro estudio Lynch aporta estos datos: «En la provincia de Caracas la población bajó de 250.278 en 1810 a 201.922 en 1816. En toda Venezuela la población declinó desde 898.043 en vísperas de la independencia, hasta 767.100 en 1822». Véase «Más allá de la revolución...», pp. 226-227. Arturo Uslar Pietri se expresa así sobre el tema: «La tercera parte de la población venezolana pereció, directa o indirectamente, en la guerra. La prosperidad alcanzada a fines del siglo XVIII desapareció. El arcaduz quedó sin agua, la tierra sin semillas, el arado sin brazos. Los campesinos se volvieron soldados [...] El antiguo mayordomo era ahora General o magistrado. Los soldados que regresaban no sabían volver al campo. Preparaban golpes armados contra las autoridades o merodeaban las soledades como bandoleros», en *Bolívar hoy*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1983, p. 27.

Esta hecatombe marcó al país por más de un siglo en cuanto a lo material, pues solamente a mediados del siglo xx empezó la sociedad venezolana a levantar cabeza, gracias primordialmente al flujo financiero proveniente del petróleo. Las huellas espirituales son también evidentes, aunque más difíciles de precisar en sus diversas dimensiones y alcances. Autores extranjeros son lapidarios en sus juicios sobre el significado de todo esto. Según Jaime Rodríguez, por ejemplo, «Ninguno resultó vencedor en la guerra civil venezolana. La élite americana no logró alcanzar el autogobierno, ya fuera dentro de la nación española o por medio de la independencia. Los españoles europeos quedaron virtualmente exterminados. Los pardos, negros y esclavos tampoco alcanzaron ni la igualdad ni la libertad. Venezuela quedó devastada y fueron necesarios muchos años para restaurar el orden y la prosperidad». ¹³⁴ Encina es, si cabe, aún más severo:

La revolución de la independencia, lejos de consolidar la estructura social hispanoamericana [...] la empeoró desde el punto de vista de la estructuración política [...] Lo que la historia necesita registrar es el hecho de que, bueno o malo [...] el régimen que feneció en 1810 era la expresión de los sentimientos, las creencias, los ideales, y las aptitudes de los pueblos hispanoamericanos hacia esa fecha [...] cesó la asimilación de lo que se ha sido por lo que se es, y de lo que se es por lo que será. Se produjo la ruptura de la tradición, el interregno entre el pasado colonial que murió y las nuevas fuerzas espirituales y formas políticas que, surgiendo de sus propias entrañas, debieron reemplazarlo. Sociológicamente los pueblos hispanoamericanos nacieron con la espina dorsal fracturada. ¹³⁵

Pienso que una evaluación de especial relevancia es la de Viso, pues apunta hacia la cuestión clave del *proyecto político* inmaduro e inconcluso de los mantuanos, de una aristocracia que alentó y luego se lanzó a la ligera a un torbellino revolucionario que acabó por arrastrarla al naufragio. En sus palabras: «...no sólo debe concluirse que la Independencia es

Jaime E. Rodríguez O., *La independencia de la América española*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 149.
Encina, vol. vi, pp. 64, 67, 74.

134

135

prematura en el momento de ser auspiciada por la Revolución, sino que resulta inconveniente por el hecho mismo de formar parte de un plan maestro de dominación concebido por la aristocracia, quien únicamente está interesada en independizarse del poder español y *es incapaz de promover un espacio interior para la libertad*» [itálicas AR].¹³⁶

Esta última observación es esencial. El hecho cierto es que las revoluciones de independencia hispanoamericanas en general, y la venezolana en particular, no arrojaron como resultado —a diferencia de la revolución norteamericana de 1776— regímenes políticos aptos para el disfrute de la libertad por parte de sus integrantes. En tal sentido, las experiencias hispanoamericanas confirmaron lo dicho por Arendt en cuanto a que la idea de «liberación» (de un poder colonial, por ejemplo) es distinta a la idea de «libertad». La liberación puede ser una condición de la libertad, pero no conduce a ésta de manera automática.¹³⁷ La evidencia documental sugiere que Bolívar concentró sus miras en el problema de la liberación, más no así en la cuestión de la libertad en cuanto aña, por un lado, a la protección de una esfera autónoma para los individuos y a su participación política, y por otro a la cuidadosa limitación de los poderes del gobierno. Su pensamiento político, como hemos visto, se orientó más bien hacia una especie de autoritarismo paternal, que si bien no alcanzaba los extremos del despotismo y la tiranía, tampoco abría mayores posibilidades para el desarrollo autónomo de los individuos en una comunidad abierta. No niego que, en términos ideales, haya considerado tal meta algo deseable, pero sólo a muy largo plazo y como consecuencia de un lento proceso de maduración de pueblos a los que percibía como «insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional», ya que «miran con indolencia la gloria de vivir en el movimiento de la Libertad...».¹³⁸

En realidad, las revoluciones hispanoamericanas, conducidas por aristocracias criollas que básicamente anhelaban controlar el poder político e imponer su dominio sobre el resto de la sociedad, carecieron de

136 Viso, *Las revoluciones terribles*, pp. 144-145.

137 Arendt, p. 29.

138 Bolívar, vol. II, p. 1137. Carrera Damas enfatiza que Bolívar rechazaba el sistema político norteamericano «por considerarlo contrario al interés fundamental de restablecer la estructura de poder interna, desquiciada por la guerra», y requerida de un fuerte poder central. Véase *Venezuela...*, pp. 82, 84-85, 93. Habría que añadir que el modelo norteamericano encarnaba una realidad de libertad, de origen «liberal» (Locke, Smith, Hume), que contrastaba con el concepto rousseauiano dominante en el paradigma conceptual bolivariano. Sobre este tema, véase Luis Castro Leiva, *Sed buenos ciudadanos*. Caracas: Alfadil, 1999, pp. 32-64, 91-126.

un sustrato de pensamiento equivalente al que caracterizó la experiencia del nacimiento de los Estados Unidos.¹³⁹ Lo que dijo Joaquín Campino respecto al caso chileno se aplica a la generalidad de los estallidos de 1810: «La revolución [...] se hizo por odio al gobierno colonial y los peninsulares sin que nadie tuviese idea fija acerca del gobierno que debía en consecuencia establecerse después».¹⁴⁰ De allí que las revoluciones hispanoamericanas hayan sido más bien «rebeliones», en el sentido que explica Arendt; es decir, insurrecciones que no se referían esencialmente al establecimiento de la libertad sino a la conquista del poder político como instrumento para el ejercicio del dominio social.¹⁴¹ En cambio, el objetivo de la revolución norteamericana fue fundar la libertad y establecer instituciones duraderas: su producto fue una Constitución aún vigente; el de las revoluciones hispanoamericanas, una cadena de dictaduras que se extendió por décadas.

La revolución norteamericana, escribió Tocqueville, «se originó en un reflexivo y maduro apego a la libertad, y no en algún vago e indefinido instinto de independencia, de ausencia de orden y de límites. No fue guiada por pasiones exaltadas; al contrario, avanzó en estrecha vinculación con el apego al orden y a la legalidad».¹⁴² Es decir, una situación muy diferente al desbordamiento anárquico en que desembocó la experiencia emancipadora de la parte sur del continente, en lo que tiene que ver con la organización social y la institucionalidad política. Las nuestras fueron «revoluciones terribles», según el término empleado por Viso; en otras palabras —y a semejanza de las revoluciones francesa, rusa, china y cubana, estas tres últimas más cercanas a nuestros días— fueron revueltas exitosas de minorías mesiánicas, que reivindicaron para sí la «razón histórica» y arrastraron a su paso masas informes, que a su vez suplantaron una sujeción por otra.¹⁴³ En lugar de apropiarse de la tradición y enriquecerla, como en efecto hicieron los llamados «padres fundadores» de los Estados Unidos, nuestros próceres arrancaron de raíz la tradición en busca de anhelos imprecisos de reformas políticas, repudiando temerariamente el pasado y estableciendo una perdurable e irre-

El más notable ejemplo de la riqueza conceptual de la revolución norteamericana es, desde luego, el conjunto de documentos compilados bajo el título de *The Federalist*. La edición definitiva es la de la Wesleyan University Press, publicada en Hanover, NH, en 1961.

Citado en Encina, vol. VI, pp. 78-79.

Arendt, pp. 32, 34, 40, 66, 68, 92, 119, 159, 198.

Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*. New York: Harper & Row, 1966, p. 64.

Viso, *Las revoluciones terribles*, pp. 17, 53, 58, 113, 134, 151, 174.

139

140

141

142

143

ductible incongruencia entre los ideales proclamados y las realidades de nuestra vida como pueblos, incongruencia que en no poca medida continúa definiendo nuestra existencia colectiva. Los norteamericanos recuperaron lo mejor del legado colonial y lo superaron; nosotros pretendimos destruir la herencia de tres siglos, liquidando el pasado español, y amanecemos luego de la independencia en patética orfandad.

La nuestra, en síntesis, fue una independencia lograda por imposición, no por consenso, un cataclismo que produjo una fractura radical entre el pasado y el porvenir de la nación, origen a su vez de nuestro olvido de lo que nos ha precedido y de la pérdida de nuestro sentido de identidad. Es tan profundo ese rasgo de nuestra vida como pueblo que, por ejemplo, este mismo año (2001) el Jefe del Estado venezolano ha anunciado que trasladará al Panteón Nacional los «restos» (simbólicos) del cacique o líder indígena Guaicaipuro, quien combatió a los españoles en las primeras etapas de la conquista. Cabe preguntarse, ¿y por qué no llevar también a ese «templo de la nacionalidad» a uno de los primeros peninsulares que acá vinieron, a Diego de Losada —para citar alguno—, cuya sangre, lenguaje y legado cultural en general son igualmente parte de nosotros? La respuesta es simple: la ruptura con aquellos a quienes Bolívar juró «una guerra eterna y un odio implacable»¹⁴⁴ sigue siendo parte de nuestra conciencia colectiva, una conciencia que en no poca medida define su identidad en función de la visión puramente heroica de la Independencia, y en consecuencia en función del combate «eterno» contra el pasado en lo que concierne a su parte española. A algunos esto puede sonar excesivo, pero estoy persuadido de que no lo es.

De modo pues que el proceso de emancipación instauró entre nosotros una discontinuidad estructural, destruyendo lo que había en términos de andamiaje institucional-cultural para abrir en su lugar un enorme vacío, que ha sido llenado a lo largo de nuestra evolución histórica, y con escasos interludios, por el personalismo político. Es en este terreno, el del vacío de identidad y quiebre psicológico, donde se enraíza el culto a Bolívar y su mitificación oficial. En tal sentido, la palabra «mito» no debe entenderse como una «falsa realidad» sino en su significado antropológico, es decir, como el conjunto de creencias que dan forma a la memoria colectiva de un pueblo respecto a su pasado, un sistema de creencias que conforma a su vez la visión del mundo en el que viven y de su lugar en el

mismo. Es a través de los mitos, dice Steiner, como el hombre comprende «el sentido del mundo, como lo experimenta de una forma coherente, como afronta su presencia irremediabilmente contradictoria, dividida, ajena».¹⁴⁵ El palpable vacío, la orfandad psicológica que como pueblo nos legó el cataclismo ocurrido entre 1810 y 1830 requería entonces de un mito heroico para actuar como factor de integración nacional, y ese mito ha sido construido a través del tiempo sobre dos pilares: la visión puramente epopéyica de la emancipación y el culto a Bolívar.

Acierta por tanto Carrera Damas cuando apunta que el culto a Bolívar es un fenómeno psicosocial que expresa una conjunción de factores y circunstancias históricas definidas, en cuyo origen se encuentran hechos y necesidades auténticas.¹⁴⁶ Esta observación corrige parcialmente su perspectiva inicial, desarrollada en su importante obra primigenia en torno al tema, según la cual el culto a Bolívar y la deificación del héroe constituían fundamentalmente acciones deliberadas de la «clase dominante» para manipular al pueblo.¹⁴⁷ El asunto es —como he intentado mostrar— bastante más complejo y toca aspectos muy hondos del alma nacional. Y no deja de ser triste comprobar que la visión puramente heroica de la emancipación y el culto cuasi religioso a Bolívar, son mitos integradores que en verdad nos sirven para ocultar el fracaso del presente mediante la glorificación de un pasado desfigurado, y la deificación de un hombre cuyas realidades vitales fueron mucho más contradictorias y dolorosas de lo que la «historia oficial» jamás se atreverá siquiera a sugerir.

No es, pues, el «culto a Bolívar» un instrumento de la clase dominante para adormecer al pueblo; es, más bien, el instrumento de todo un pueblo para autoengañarse respecto a nuestro fracaso como sociedad, para no hacer frente a nuestra incapacidad, hasta ahora, para edificar un orden sociopolítico estable y libre que haga posible la prosperidad de la mayoría. El «culto» es un *consuelo*, sin que ello implique negar la importancia del respeto a la memoria de un hombre grande como lo fue Bolívar. Esto último es distinto a exaltar ese merecido reconocimiento al plano de lo cuasi religioso, simplificando y distorsionando la historia para ajustarla a las exigencias del mito.

George Steiner, *Nostalgia del absoluto*. Madrid: Siruela, 2001, p. 63.

Germán Carrera Damas, *Jornadas de historia crítica*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1983, p. 85.

Carrera Damas, *El culto a Bolívar*, pp. 49-50, 60-61, 244.

145

146

147

En su *Mensaje al Congreso Constituyente de Colombia*, fechado el 24 de enero de 1830, el año de su muerte, Bolívar escribió esto: «Ardua y grande es la obra de constituir un pueblo que sale de la opresión por medio de la anarquía y de la guerra civil, *sin estar preparado previamente para recibir la saludable reforma a que aspiraba [...]* ¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: *la independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás*» [itálicas AR].¹⁴⁸

Como siempre que decidía expresarse tal y como le indicaban sus más íntimas convicciones, Bolívar reiteró en ese mensaje, escrito el último año de su vida, ideas que le acompañaron desde los albores de su extraordinaria carrera como hombre de armas y caudillo de un vasto movimiento histórico. Llamar a Bolívar, sin más, «alfarero de repúblicas» es no obstante una denominación que posiblemente a él mismo le habría sorprendido, pues si bien es cierto que su espada contribuyó decisivamente a *libertar* a varias naciones, a emanciparlas de un poder colonial, no es menos verdadero que las repúblicas que emergieron de esa gesta distaban mucho de ajustarse al modelo que vislumbró en sus escritos más notables; no fueron, en otras palabras, repúblicas donde imperase la *libertad*, pues —como afirmó— «la independencia es el único bien que hemos adquirido, a costa de los demás».

Una evaluación equilibrada de la carrera de Bolívar debe a mi modo de ver fijar la atención tanto en su aspiración a la gloria militar, objetivo que logró con creces, como en su parcial fracaso político, en lo que tiene que ver con su frustrado empeño por dar forma a una gran nación (la Gran Colombia), y establecer regímenes políticos estables y prósperos para los pueblos emancipados. De igual manera, es legítimo preguntarse hasta qué punto la ambición de gloria personal, que fue un motivo central en la gesta de Bolívar —como lo prueban incontables documentos y testimonios—,¹⁴⁹ le impulsó hacia adelante a pesar de su aguda con-

148 Bolívar, vol. II, pp. 1270, 1275.

149 Véase, por ejemplo, Bolívar, vol. I, pp. 224, 578, 585, 738, 784, 884, 986, 1043, y vol. II, pp. 414, 488; Encina, vol. II, pp. 578-583, 701-706; vol. VI, p. 126. Encina llega a sostener que «En Bolívar la gloria por la gloria misma se convirtió gradualmente en el supremo ideal de su vida», vol. II, p. 702. Carrera Damas, por su parte, habla de la ambición de gloria personal como una «idea fija» en Bolívar, y dice que si algún rasgo en su personalidad ha sido reconocido unánimemente, es precisamente «su deseo de gloria», *El culto...*, p. 87. Dice Alfred Schutz que: «No puedo comprender una cosa social sin reducirla a la actividad humana que la ha creado y, más allá de ello, sin referir esta actividad humana a los motivos que la originan», en *Estudios sobre teoría social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1974, p. 23. Esta observación debe tenerse muy presente a la hora de *comprender* a Bolívar.

ciencia, que se hacía más intensa a medida que corría el tiempo, acerca del fatal desenlace que aguardaba a sus esfuerzos.

Desde esta perspectiva —la del choque entre sus expectativas y la «fuerza de las cosas», entre su ánimo creador y su conciencia de que el material sociopolítico con que actuaba no podía alcanzar las cimas de orden y civilización a que aspiraba, entre su ambición y su lucidez—, desde esa perspectiva, repito, Bolívar se nos presenta como un verdadero «héroe trágico». Ahora bien, en la tragedia griega clásica los héroes se encuentran sujetos a un destino que casi les avasalla; el héroe trágico «no ve, ya que se halla lo más alejado posible del conocimiento trágico [...] es lo opuesto a lo que corrientemente se llama conciencia trágica. Concentrado en su objetivo, se esfuerza en olvidar su propia historia, en negar su destino».¹⁵⁰ No se trata de que en la tragedia clásica la catástrofe sea inevitable, no importa lo que el héroe haga o deje de hacer;¹⁵¹ más bien, los desastres que pueden ser evitados constituyen buena parte del drama clásico.¹⁵² El tema del hombre cegado y conducido a su perdición por los dioses tiene su contrapartida en la idea de *hubris* o «pecado de soberbia». En realidad, son los hombres, con su desmedido orgullo, los que se ciegan a sí mismos. Parece claro, no obstante, que los héroes de la tragedia clásica carecen de esa aptitud autorreflexiva que es característica de lo *moderno*. Dice Steiner que la conciencia de sí mismo y la subjetividad reflexiva son precisamente los rasgos definitorios del héroe moderno; en la tragedia antigua el héroe *sufre* su fatal destino, en tanto que en el drama moderno el héroe se yergue y sucumbe enteramente por obra de sus propios actos, y no mediante la intervención insuperable de los dioses.¹⁵³

De acuerdo con lo expuesto, puede afirmarse que Bolívar reúne los principales rasgos del héroe trágico moderno. En palabras de Rodríguez Adrados:

El sufrimiento es, efectivamente, el rasgo más general y característico del héroe trágico. Nada más lejos de él que ser víctima resignada de un destino adverso ante el que huye o víctima pasiva de un mundo incomprensible ante el que apenas trata de defenderse. Junto con la nobleza y decisión en la acción es el sufrimiento el tercer rasgo común del héroe trágico. Y es también el

Jean-Marie Domenach, *El retorno de lo trágico*. Barcelona: Península, 1969, pp. 21, 33.

Tal vez la única excepción sea *Edipo Rey*, de Sófocles.

Esto lo señala Walter Kaufmann, *Tragedy and Philosophy*. Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 313.

George Steiner, *Antígona*. Barcelona: Gedisa, 2000, pp. 71-72.

150

151

152

153

más general, ya que es el único que ha quedado definitivamente asociado al concepto de lo trágico en todas las centurias.¹⁵⁴

El Libertador murió desencantado, acosado por el sufrimiento¹⁵⁵ y convencido de la futilidad de mucho de lo que había logrado. A la manera del *Edipo* de Sófocles, llegó a un fin trágico por la absoluta desolación en que desembocó su espíritu, pero era un fin en gran medida anunciado de antemano, *previsto por él mismo* desde muy temprano en su carrera, tal y como intenté mostrarlo en estas páginas. En este sentido hay que decir que las decisiones de Bolívar, la concepción de su papel, su voluntad de avanzar a pesar de su lúcida apreciación acerca de los resultados probables de su lucha, obligan a atribuirle una importantísima responsabilidad ética y política en cuanto al resultado final del proceso, resultado claramente desalentador en el plano superior de la creación político-institucional y del acuerdo moral de la existencia colectiva.

Fue, pues, Bolívar un «héroe trágico» en varios sentidos. Primeramente, por la crudeza y magnitud de su escisión personal con sus raíces y su pasado y el de sus ancestros, estrechamente vinculados a España, hasta él mismo, casado con una española. En segundo lugar por la enormidad del riesgo que estuvo dispuesto a correr, personal, familiar, de su grupo social y de su mundo cultural en general, devorados finalmente por el huracán revolucionario. En tercer término, por el contraste entre su clara percepción sobre el resultado probable de la lucha y su implacable decisión de proseguirla y radicalizarla. En cuarto lugar por la permanente contradicción en su pensamiento político entre, de un lado, su convicción sobre el imperativo de asumir fórmulas autoritarias de gobierno para controlar la anarquía, y de otro lado su debilidad —asociada a la protección de su imagen y de su gloria— hacia los formalismos del credo republicano. En quinto lugar por el perenne contraste entre, por una parte, su tendencia a concebirse a sí mismo como un «débil juguete de la fortuna»,¹⁵⁶ un «vil juguete del huracán revolucionario que me arrebató como una débil paja»,¹⁵⁷ y por otra parte su voluntarismo, así como su disposición a imponerse, al costo que fuese, sobre los eventos. Por último, es también de cierta forma trágica la manera como su carrera y su

154 F. Rodríguez Adrados, *La democracia ateniense*. Madrid: Alianza Editorial, 1988, p. 131.

155 Para constatarlo, hay que leer las cartas de los meses finales de su existencia. Véase Bolívar, vol. II, pp. 949-989.

156 Bolívar, vol. II, p. 1070.

157 *Ibid.*, vol. II, p. 1133.

legado histórico han sido objeto de manipulación y distorsión por una «historia oficial» que pareciera hecha con base en la premisa de que aquellos a quienes se dirige son un pueblo compuesto, no solamente por ignorantes, sino también por débiles mentales.

Los héroes trágicos combinan la grandeza y la fragilidad; son grandes por las tareas que se fijan a sí mismos y son frágiles por el fruto de sus actos, casi siempre decepcionantes si se les mide en relación con sus aspiraciones. La grandeza de Bolívar, más allá de las hazañas militares, estuvo en su intención creadora en el ámbito político, en su sentido de responsabilidad, que al final llegó a imponerse sobre su ambición de gloria. Su fragilidad estuvo, quizás, en ser demasiado consciente acerca de las limitaciones del proyecto sobre el que labró su destino. Mas como dijo Sócrates en una obra apócrifa atribuida a Platón, pero probablemente escrita por un miembro de la Academia en el siglo III a.C.: «¿Cómo sabemos qué debemos pedir en nuestras oraciones? Un hombre puede implorar para sí mismo grandes males creyendo pedir un bien, sobre todo si los dioses deciden otorgarle todo lo que les piden». ¹⁵⁸



El estudio de un estado de espíritu

La historia intelectual de la Venezuela independiente ha estado predominantemente signada por la marca del pesimismo. Pesimismo acerca de nuestras potencialidades como pueblo, sobre nuestra capacidad para construir una nación unida, próspera y estable, y también en torno a la verdadera posibilidad que tenemos de vivir bajo un régimen democrático y respetuoso de la libertad.

Las primeras e inequívocas huellas de ese pesimismo se encuentran en los escritos de Bolívar, muy especialmente en el *Discurso de Angostura*, que con razón ha sido calificado por uno de nuestros historiadores como un juicio al federalismo y al pueblo.¹ En ese denso y complejo texto político, Bolívar no duda en referirse a la situación que entonces caracterizaba a los venezolanos como la de un «pueblo pervertido». En nada distorsionaríamos su discurso si le interpretásemos como un esfuerzo orientado a persuadir a los legisladores allí reunidos, de que los venezolanos no estábamos entonces preparados para vivir bajo formas políticas democráticas, ya que: «Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la Libertad».² El Libertador, desafortunadamente, no explicó cuánto tiempo sería necesario a su manera de ver para lograr tal fortalecimiento espiritual. Tampoco se hizo la pregunta: ¿Cómo puede un pueblo aprender a ser libre sin vivir en libertad?

Germán Carrera Damas, *Validación del pasado*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1975, p. 147.
Simón Bolívar, *Escritos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1981, p. 98.

A pesar de estos antecedentes, poco estimulantes para nuestras perspectivas como nación de hombres y mujeres libres, no deja de llamar la atención, por ejemplo, que una destacada investigadora de nuestro proceso sociopolítico todavía plantee como inevitable, 175 años después que Bolívar, indagar la posibilidad de que la democracia no sea un régimen viable para nuestra sociedad.³ ¡Casi dos siglos no han sido suficientes para concedernos un mínimo de seguridad acerca de nuestra solidez espiritual como demócratas!

Es bastante probable que esa convicción pesimista no sea exclusiva de nuestra particular historia intelectual. Mas debe destacarse su relevancia en Venezuela, así como su presencia, con altibajos, a todo lo largo de nuestra existencia independiente. Conviene no obstante distinguir, de un lado, esa convicción pesimista sobre nuestras posibilidades de construir un orden democrático-liberal, y de otro lado la percepción según la cual el país ha fracasado, percepción que de un modo u otro, velada o abiertamente, se manifiesta también como ingrediente esencial del estado de espíritu desalentador al que venimos refiriéndonos.

La distinción tiene cabida en vista de que al menos uno de nuestros más notables intelectuales, Laureano Vallenilla Lanz, estuvo en su momento persuadido de que carecía de sentido para Venezuela plantearse como objetivo la creación de un orden democrático-liberal, ya que el mismo se encuentra, presuntamente, más allá de nuestro alcance, y en todo caso no armoniza con nuestro modo de ser. Lo que, de acuerdo con Vallenilla Lanz había hacer en el país no era otra cosa que asumir la «Constitución Orgánica» que nos corresponde, pues en sus palabras, «todo pueblo se gobierna con la idiosincrasia».⁴ La adopción de esa «Constitución Orgánica» de naturaleza autoritaria, lejos de ser un síntoma de fracaso se presentaba a Vallenilla Lanz como un verdadero triunfo, como una victoria de la sensatez política sobre las ensoñaciones de espíritus adolescentes carentes de sentido práctico y criterio científico acerca de las fuerzas que mueven la historia de los pueblos.

La figura de Vallenilla Lanz tiene gran relevancia en nuestro panorama intelectual, tanto por el contenido de sus planteamientos, caracterizados por una franqueza poco usual en nuestro medio, así como por la

3 María Sol Pérez Schael, «Democracia, ética y libertad. Hipótesis para analizar el caso venezolano», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2-3, abril-septiembre 1995, pp. 26-48.

4 Citado en Elena Plaza, *La tragedia de una amarga convicción. Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936)*. Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1996, p. 353.

naturaleza del debate que suscitaron. En cuanto a lo primero, importa destacar que Vallenilla Lanz desarrolló una bien hilvanada argumentación a favor de su tesis del «Gendarme necesario» como fórmula política supuestamente ajustada a las condiciones propias de una sociedad con los rasgos de la venezolana.⁵ Sus ideas contrastaban acentuadamente con las de otros pensadores venezolanos de las primeras décadas del siglo xx, que procuraron, a la manera de Bolívar el siglo xix, salvaguardar en teoría los valores y principios abstractos de la democracia y el liberalismo, aunque a la vez sostuvieron que los mismos, y por los momentos, no se adecuaban a las circunstancias del desarrollo histórico del país.

Autores como Pedro Manuel Arcaya y José Gil Fortoul consideraron que el régimen de Juan Vicente Gómez era el que convenía a Venezuela en esa coyuntura, pues se hallaba en vías de modernizar a la nación y de crear el contexto dentro del cual, en un futuro, pudiese surgir la democracia entre nosotros. En tal sentido, repito, las ideas de estos hombres coincidían con la opción esbozada por Bolívar en sus textos políticos, que era un compuesto de dos elementos: en primer término, la afirmación de que el país no estaba maduro para la democracia; y en segundo lugar la propuesta de instituciones políticas tutelares y autoritarias que preservasen la paz y la estabilidad, y en cuyo marco, de manera gradual, germinarían presuntamente las semillas de una sociedad más libre.

A diferencia de todos ellos, Vallenilla Lanz rompió de manera decisiva con los valores de la democracia liberal.⁶ Sus simpatías políticas por Mussolini y Franco y su exaltación de la idiosincrasia de un pueblo como sustento inexorable de su proyección política, acercan su pensamiento al de otros teóricos que en los años 1920 y 1930 pugnaban en Europa contra la herencia democratizadora de la Ilustración francesa y del liberalismo de origen anglosajón. Me refiero, por citar un ejemplo, a Carl Schmitt.⁷ La ruptura radical de Vallenilla Lanz con la visión democrático-liberal dio origen a las muy agrias controversias que le rodearon siempre, como intelectual y como figura política.

El aspecto que más interesa de ese debate para nuestros efectos tiene que ver con la distinción que hacían algunos críticos entre, por una parte, el contenido objetivo y posible validez científica de los planteamien-

Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1990, pp. 165-187. Plaza, p. 474.

A. Romero, *Estudios de filosofía política*. Caracas: Panapo, 1998, pp. 35-82. También en el vol. II, pp. 283-317, de estas *Obras selectas*.

tos de Vallenilla Lanz, y por otra parte la inconveniencia ideológica de concepciones que rasgaban, por decirlo así, el velo de engaños del liberalismo venezolano, mostrándonos con una crudeza descarnada y psicológicamente casi insoportable la dura realidad de lo que él llamaba nuestra «idiosincrasia», poco apta, en su opinión, para el ejercicio de la democracia liberal. Es particularmente revelador un documento anónimo, que fue remitido a Vallenilla Lanz por un crítico en 1921, en el cual este último le reclamaba haber «roto con todos los antecedentes de idealismos que salvan a los pueblos», tratando «con el más profundo desprecio las ideas [y] las ilusiones [...] de que se han venido alimentando nuestros pueblos en medio de sus desgracias y sus miserias». El autor del anónimo confesaba que había arrojado muchas veces al suelo su ejemplar de *Cesarismo democrático*, sólo para recogerlo de nuevo y sentir «rabia, odio contra mí mismo cuando me he sorprendido diciendo: ¡Tiene razón!». ⁸

El breve recuento de esta polémica apunta hacia una crucial constatación: la *tradición pesimista* en nuestra historia intelectual no es homogénea. La misma contiene aspectos y matices que es indispensable diferenciar. Ya vimos que para Bolívar y otros autores posteriores que se han inspirado en su pensamiento, el fracaso venezolano (me refiero a nuestro fracaso en la tarea de construir una nación en la que imperen de manera estable y sólida la democracia, la libertad y una extendida prosperidad material), es temporal y susceptible de superación a través de un proceso de paulatina maduración, bajo la tutela de instituciones que ejerzan una autoridad paternal, a la vez severa y comprensiva, hasta que el pueblo «crezca». Para Vallenilla Lanz, por el contrario, no hubo tal fracaso sino durante el período (siglo XIX), cuando los venezolanos nos empeñamos en soñar con repúblicas aéreas que la realidad derribaba a cada paso. El régimen de Gómez constituía ante sus ojos una superación de ese fracaso, al ajustar las aspiraciones con la realidad de las cosas.

En las páginas que siguen intentaré mostrar, a través de un somero recorrido por el horizonte intelectual venezolano del siglo XX, cómo el análisis del sentido de nuestra historia adquiere nuevos y más complejos rasgos, a medida que nuestros intelectuales descubren en nuestro devenir causas tanto para agudizar el pesimismo y hacer del fracaso algo más que una mera situación coyuntural, así como para extraer conclusiones,

tal vez forzosamente optimistas, basadas en una filosofía histórica de raigambre hegeliano-marxista.

La escogencia de determinados autores, a quienes prestaré la mayor atención en estas páginas, se sustenta únicamente en la calidad intrínseca de sus aportes, sin por ello menoscabar los de otros que también están reflexionando con lucidez y coraje cívico en la Venezuela de fin de siglo. Pretendo por tanto dar cuenta de la continuidad de esa tradición pesimista en nuestro siglo xx, señalando sus peculiaridades y características dominantes. Procuraré elucidar la naturaleza de la convicción sobre el fracaso nacional en la obra de pensadores cuya reflexión parece resignada a admitir una condición venezolana sellada por un destino de desarraigo y frustración. Me ocuparé también de comentar una línea de reflexión diferente, que encarna una interpretación menos desesperanzadora sobre el curso de nuestro proceso sociopolítico, planteamiento que ha sido sin embargo sometido a muy afanosas pruebas, a raíz de los eventos que han sacudido al país y su frágil democracia a partir de 1989. Veremos que pesimistas y optimistas por igual siguen distanciándose en nuestros días de la fórmula cesarista de Vallenilla Lanz como propuesta concreta, vista como necesaria y positiva. De hecho, el debate histórico-político en Venezuela sigue enmarcado en los parámetros democrático-liberales considerados como un rumbo ideal, y nadie se atreve a sugerir que opciones no democráticas sean las más apropiadas y recomendables para el país. En la Venezuela de finales del siglo y comienzos del XXI todos nos proclamamos demócratas, al menos retóricamente, aunque no pocos actúen de modo muy poco democrático. A la manera del corresponsal anónimo que escribía en 1921 al autor de *Cesarismo democrático*, mantenemos a buen recaudo los principios teóricos y sucumbimos ante las realidades prácticas.

Ningún pensador de la talla de un Vallenilla Lanz enturbia en estos tiempos el firmamento de nuestra buena conciencia liberal, a pesar de que los hechos cotidianos indiquen a todas luces que nuestras convicciones y realizaciones democráticas son precarias. Los pesimistas se alarman o resignan ante los evidentes síntomas de un renacer del militarismo, y los optimistas procuran seguir viendo en nuestra historia una marcha hacia la democracia, que experimenta a diario nuevos embates. Pero nadie propone con alguna sistematicidad otra salida, o porque no la creemos factible o porque la creemos indeseable, o porque no nos atre-

vemos a señalarla. ¿Será acaso este pudor democrático un signo positivo hacia el futuro?

El recorrido que haré a través de nuestro horizonte intelectual del siglo xx permitirá una discusión en torno a preguntas como las siguientes: ¿Dónde nos hallamos como nación en la aurora del siglo? ¿Qué luces arroja el análisis de los autores que abordaremos sobre nuestra situación y perspectivas? ¿Hemos logrado el objetivo proclamado por nuestra tradición liberal-democrática, o hemos fracasado en el intento? Si es que hemos fracasado, ¿a qué se debe ese resultado? ¿Es que acaso se trata de un objetivo ilusorio, como lo sugería Vallenilla Lanz, o sólo debemos entender que el mismo requiere un proceso preparatorio que no hemos sabido completar, como habría indicado Bolívar?

La crisis en el alma nacional

Fue Mariano Picón Salas quien afirmó que Venezuela ingresó al siglo xx al morir Juan Vicente Gómez, con 35 años de atraso. La ausencia definitiva del caudillo tachireño pareció abrir un horizonte de esperanza a un país que, además de respirar nuevo oxígeno político, comenzaba a sentir con creciente intensidad el impacto del factor petrolero en la sociedad y la economía. En el plano intelectual, no obstante, varios de los más lúcidos pensadores de la Venezuela que empieza a andar en ese tiempo desarrollan una línea de pensamiento hondamente pesimista sobre nuestras perspectivas. Cuando se pretende lo contrario, como ocurre con Augusto Mijares, la opción optimista es conquistada sólo a costa de lo que en ocasiones se percibe como una forzada miopía histórica.

Dijo una vez Henry Kissinger que la historia enseña por analogía, no por identidad. No hay dos procesos sociopolíticos que sean idénticos en distintas épocas; sin embargo, entre algunos se manifiestan similitudes que muchas veces son fuente de enseñanzas. Viene a cuento en tal sentido, y con relación a la Venezuela del siglo xx, la realidad española del xvii. En ese entonces, una nación que se perfilaba a ojos del mundo como un gran imperio se vio sumida en un borrascoso clima espiri-

tual de decadencia. La conquista de América había dado a España enormes territorios de ultramar, mas ya al final del siglo xvi y a lo largo del xvii ofrecía el poco edificante espectáculo de una sociedad que dependía del extranjero, no solamente para sus bienes manufacturados sino también para su suministro de alimentos, en tanto que su población se hacía ociosa o enfocaba sus energías hacia actividades económicamente improductivas.⁹ Los hombres de pensamiento en la España de la época focalizaron su reflexión en torno a la temática de la «decadencia», persuadidos de que, en los términos empleados por el conde de Gondomar en una carta de 1625, «el buque [de España] se va a fondo». Ahora bien, los indicadores de declinación nacional son en sí mismos un producto cultural; las sociedades establecen sus objetivos y evalúan sus fracasos y logros de acuerdo con sus propios valores y preconcepciones, y aquéllos de sus vecinos y rivales.¹⁰ Existe además una intrincada relación entre los eventos y la percepción que de los mismos se tiene, y los intelectuales tienen la misión de expresar y dar coherencia al clima espiritual predominante en sus sociedades en distintas coyunturas históricas.

La Venezuela que echó a andar en 1936 estaba lejos de ser un imperio; se trataba de un país al que —con tino— Picón Salas calificó como de «recogida frugalidad».¹¹ Era también una nación que se asomaba con perceptibles bríos a la modernidad. Resulta por ello de sumo interés comprobar que autores como el propio Mariano Picón Salas, Mario Briceño Irigorry y Arturo Uslar Pietri, escribiendo en esa Venezuela que aparentemente asistía al alba de tiempos mejores, no observaron el proceso que se desplegaba ante sus ojos con la robusta confianza de quien contempla los indicios de una etapa creadora, sino con una mezcla de inquietud, desazón y sospecha, alimentadas por una oscura angustia acerca del destino de la sociedad en que vivían. El tema de la decadencia, no el del progreso, absorbe las conciencias de estos intelectuales y permea dolorosamente sus escritos.

Cuatro cuestiones esenciales les atormentaban. En primer término, la influencia que el peso de nuestra «trágica historia»¹² seguía ejerciendo sobre el presente y el futuro. En segundo lugar, la desconfianza ha-

J. H. Elliot, *Spain and Its World, 1500-1700. Selected Essays*. New Haven & London: Yale University Press, 1992, p. 231.

Ibid., p. 215.

Mariano Picón Salas, *Regreso de tres mundos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 28.

Mariano Picón Salas, *Cinco discursos sobre pasado y presente de la nación venezolana*. Caracas: La Torre, 1940, p. 6.

9

10

11

12

cia el pueblo venezolano, «devoto de lo mágico»,¹³ un pueblo «mágico, más que lógico»,¹⁴ un pueblo que, en síntesis, «no es pueblo». ¹⁵ En tercer término, la aprehensión con relación a los efectos que el petróleo estaba produciendo sobre la sociedad, desatando en la misma «bajos instintos orgiásticos»,¹⁶ debido a la «maleza oscura de nuestra ignorancia y nuestra desidia»,¹⁷ y generando un «avasallador riesgo mortal». ¹⁸ Por último les descorazonaba la ausencia de élites en el país, de grupos cohesionados, lúcidos y virtuosos, capaces de sacar adelante nuestra «nación fingida». ¹⁹

En resumen, para estos hombres, que en ese tiempo redactaron algunos de los más leídos y lúcidos ensayos sobre nuestra historia, la condición de la Venezuela que emergía a un nuevo período, que dejaba atrás el gomecismo, que recibía como un don del cielo el maná petrolero y realizaba entre 1945 y 1948 profundos cambios democratizadores en lo político y socioeconómico, no era otra que *la crisis*, una caracterización que ha sido «un tema permanente entre nosotros». ²⁰ ¿Se trataba de una crisis orientada hacia la superación de nuestros males o hacia su profundización? La respuesta es en cierta medida ambigua. No obstante, aun autores que presentan una evaluación bastante menos sombría de esa época venezolana, de la época que se extiende entre 1936 y 1958, seguían viendo el petróleo como villano del drama ya que el mismo suscita una riqueza fácil y «corrosiva». ²¹

En lo fundamental, el tono predominante entre la intelectualidad era el de un notorio pesimismo. La crisis se hallaba, por encima de todo, en el alma nacional. Por un lado —y como apunté antes— actuaba sobre esos espíritus el fantasma de una historia que desde el propio momento de la Independencia transcurría «en el azar sin orden de una sociedad violenta». ²² Por otro lado, asumía una visión enfáticamente negativa sobre nuestra condición como pueblo, un pueblo carente de la «densidad

13 Arturo Uslar Pietri, *Obras selectas*. Madrid: Edime, 1953, p. 854.

14 Picón Salas, *Cinco discursos...*, p. 9.

15 Mario Briceño Iragorry, *Mensaje sin destino*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1980, p. 32.

16 *Ibid.*, p. 28.

17 Picón Salas, *Cinco discursos...*, p. 59.

18 Uslar Pietri, p. 1259.

19 *Ibid.*, p. 1281; Briceño Iragorry, p. 75; Picón Salas, *Cinco discursos...*, pp. 11-12.

20 Briceño Iragorry, p. 31.

21 Rómulo Betancourt, *Venezuela: Política y petróleo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1956, pp. 755, 761; R. Betancourt, *Posición y doctrina*. Caracas: Cordillera, 1959, p. 210.

22 Picón Salas, *Cinco discursos...*, p. 37.

social requerida para el ascenso a nación»;²³ un pueblo enfermo, ya que «una corriente de sangre impura circula por nuestras venas». ²⁴ Se sumaba a todo ello una perspectiva ambivalente con respecto al petróleo y su papel en la vida del país; un petróleo que, a la vez de significar un grave problema, a consecuencia de sus efectos distorsionadores sobre una economía y una sociedad atrasadas, representaba también –y paradójicamente– la solución: «Porque si de él [...] surgen los males, de él tan sólo, por medio de la inteligencia y de la voluntad colectivas, podrían venir los mayores bienes». ²⁵ La ausencia de grupos de vanguardia, con las luces y virtudes requeridas para encaminar la nación hacia un destino superior, era también sentida como falla clave.

De este incierto panorama se salvaba, a la manera de saldo positivo de nuestra historia, el igualitarismo político y social, ²⁶ aunque la conclusión global hubiese sido concisamente expuesta por Briceño Iragorry en estos términos: «... no hemos hecho sino sustituir un fracaso por otro fracaso». ²⁷

Contrastó con esta visión de las cosas el aporte de Augusto Mijares, quien con encomiable vocación patriótica, pero tal vez no siempre con la necesaria objetividad, llevó a cabo en sus escritos una dura lucha para sostener que «El caudillismo no puede [...] considerarse sino como un subproducto funesto de la lucha emancipadora, un accidente histórico dentro de nuestra verdadera realidad fundamental, que es [la] tradición de la sociedad civil». ²⁸ Es difícil, a la luz de los crudos hechos, admitir la evaluación que hizo Mijares de nuestro acontecer sociopolítico. Acertó sin embargo al señalar que «la historia de nuestros crímenes políticos es también, por el anverso, la historia de [la] lucha heroica de nuestra tradición cívica contra el predominio del gendarme». ²⁹ Al igual que Germán Carrera Damas en nuestros días, Mijares quiso ver una historia en línea ascendente, línea que en su opinión fue iniciada y mantenida por los gobiernos de Isaías Medina Angarita y Eleazar López Contreras. ³⁰

Briceño Iragorry, p. 40. 23

Picón Salas, *Regreso de tres mundos*, p. 56. 24

Uslar Pietri, p. 1297. 25

Picón Salas, *Cinco discursos...*, p. 80; Uslar Pietri, p. 854. 26

Briceño Iragorry, p. 40. 27

Augusto Mijares, *La interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana*. Madrid: Afrodísio Aguado, 1952, p. 62. 28

Ibid., p. 201. 29

Ibid., p. 197. 30

¿Cuál era, a fin de cuentas, la imagen de país que estos hombres anhelaban? No es fácil precisarlo. Sin duda el elemento republicano era esencial. Se apuntaba también a la democracia, aunque había diferencias en cuanto al método para lograrla. Si algo les acercaba ello era el acuerdo en torno a la nebulosa consigna de «sembrar el petróleo», pero al respecto existían posiciones divergentes. Los mayores contrastes se observan entre las propuestas de Uslar Pietri y Betancourt, y se trata de diferencias que han tenido importante significación en los debates teóricos de la Venezuela moderna. Sobre esa famosa consigna cabe aclarar un aspecto: la misma ha implicado siempre el objetivo de explotar el petróleo para escapar del petróleo, el de usarlo para huir del mismo. En palabras de Uslar, se trataba de realizar el reemplazo de riqueza petrolera por riqueza manufacturera y agrícola; de materializar el cambio del petróleo por cosechas y fábricas, ya que el oro negro es dinero, pero no riqueza permanente capaz de producir crecimiento verdadero. Este último sólo puede ser distinto e independiente del petróleo.³¹

Betancourt coincidía con Uslar en ese punto; de allí que dedicase buena parte de su obra fundamental a justificar el trienio 1945-1948, ya que durante esa etapa, nos dice, *se sembró el petróleo*.³² Había sin embargo un desacuerdo clave, de extraordinaria trascendencia para comprender la discusión político-económica estas pasadas décadas: Uslar proponía que el ingreso petrolero, que era «bastardo» en su origen (no generado por el trabajo productivo de la sociedad), fuese legitimado en su destino, convirtiéndole íntegramente en inversión productiva. Esto requería un sacrificio nacional temporal, mediante la abstención colectiva de ese flujo de dinero gratuito que el comercio internacional nos concede,³³ creando así los pilares de una economía no dependiente del oro negro.³⁴ Lo que Uslar, en contraposición a Betancourt, no entendió (y tampoco, más adelante, Juan Pablo Pérez Alfonzo), fue lo siguiente: esa abstención colectiva, como propuesta política práctica, era un objetivo imposible de lograr en condiciones democráticas, en razón de los imperativos de una sociedad en vías de modernización que —en palabras de Betancourt— se

31 Uslar Pietri, *ob. cit.*, pp. 1265, 1267; A. Uslar Pietri, «Epílogo de 1985», en *De una a otra Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1989, p. 164.

32 Betancourt, *Venezuela: Política y petróleo*, p. 287.

33 Asdrúbal Baptista, «¿En qué medida se ha sembrado el petróleo?», en *Hacia la Venezuela post-petrolera*, vol. 1. Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989, p. 134.

34 Uslar Pietri, *Obras selectas*, p. 1366; A. Uslar Pietri, *Las vacas gordas y las vacas flacas*. Caracas: Concejo Municipal del Distrito Federal, 1968, p. 88.

hallaba acosada por «innumerables problemas exigidores de soluciones ya inaplazables por más tiempo». ³⁵ La postergación de esas necesidades —repito: como propuesta política práctica—, sólo podía llevarse a cabo bajo condiciones políticas diferentes, dentro de un esquema de dominación tutelar como el que, posiblemente, Uslar quiso ejercer durante el período medinista, como lo sugieren los personajes de dos de sus menos conocidas obras literarias, marcadamente autobiográficas. ³⁶

Lo cierto es que, frente a la versión uslarista de la «siembra», que de hecho aspiraba *privatizar* la propiedad petrolera, ³⁷ Betancourt propuso la versión populista, orientada no solamente hacia la creación de una base industrial y agrícola sino también y prioritariamente hacia la distribución popular de la renta y su absorción consuntiva. Ahora bien, y aunque parezca paradójico, entre 1940 y 1982 alrededor del 70% del ingreso petrolero se destinó a la inversión, sin que se incluya en esa cifra lo gastado durante esos cuarenta años en capital humano. ³⁸ Esta realidad fue parcialmente admitida por Uslar Pietri en un texto posterior a los ya citados, mas haciendo la salvedad —según su punto de vista— de que la mayor parte de los recursos «se lanzó a manos llenas a todas las formas imaginables del consumo improductivo y del hedonismo». ³⁹

Cabe entonces destacar lo siguiente: la idea de transformar el dinero petrolero en inversión *se llevó a cabo*. A partir de 1940 y hasta el presente el petróleo fue «sembrado», aunque no exactamente en el sentido ansiado por Uslar Pietri. Esa siembra, que durante décadas contribuyó a cambiar la faz del país modernizándolo en muchos sentidos, ha arrojado finalmente resultados que la sociedad percibe como seriamente insatisfactorios.

¿Qué pasó? La indagación de esta interrogante violentaría los límites del presente ensayo. Baste indicar que, tal vez y sencillamente, «hay en una economía [...] capitalista-rentista, razones de estructura que imposibilitan de suyo la reproducción plena de las inversiones financiadas por el ingreso que es renta». ⁴⁰ Quizás el país se «intoxicó», debido a la limi-

Betancourt, *Venezuela: Política y petróleo*, p. 287. 35

Me refiero a *El laberinto de fortuna. Un retrato en la geografía*. Buenos Aires: Losada, 1962, y *El laberinto de fortuna. Estación de máscaras*. Buenos Aires: Losada, 1964. 36

Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer, *El petróleo en el pensamiento económico venezolano*. Caracas: IESA, 1987, pp. 40-43. 37

Baptista, «¿En qué medida...», p. 135. 38

Uslar Pietri, «Epílogo de 1985», p. 155-156. 39

Baptista, «¿En qué medida...», p. 136. 40

tada capacidad de absorción de capital de nuestra economía,⁴¹ y como admitió el propio Uslar: «... no era posible dar el salto sobre el tiempo y sobre la madurez».⁴² En cualquier caso, el largo proceso de siembra del petróleo dejó como legado a fines del siglo xx un amargo sinsabor entre los venezolanos, la idea muy extendida de que el país ha sido saqueado,⁴³ y una inocultable sensación de fracaso patentizado en la gigantesca desproporción entre la renta percibida y gastada y el desarrollo real de la economía y la sociedad venezolanas, hoy acosadas por la recesión y el empobrecimiento acelerado de las mayorías.⁴⁴ Esa sensación de fracaso encuentra su más elaborada manifestación en la reflexión de los intelectuales.

La Independencia como tragedia

Señala Ágnes Heller que el Renacimiento fue la primera época en la historia de Occidente que eligió libremente un pasado. Elegir el propio pasado implica que los pueblos de una época determinada seleccionan de la historia y sus mitos aquellos con los que encuentran afinidad, sean éstos positivos o negativos. El contenido de la elección no es arbitrario. Depende de cierta semejanza objetiva de la situación, o al menos de que en su interpretación moderna el tiempo pasado se torne parecido al presente.⁴⁵ Estas aseveraciones se aplican sólo parcialmente al caso venezolano. Es evidente que hemos escogido la época de la independencia de España como el paradigma de nuestra historia; mas es obvio también que esa gesta, en tantos aspectos heroica, no armoniza con el tenor espiritual de buena parte de nuestra evolución posterior, bastante distanciado de fervores creativos, a pesar de que recurrentemente los líderes de turno

- 41 A. Romero, *Decadencia y crisis de la democracia*. Caracas: Panapo, 1994, pp. 50-75; Juan Pablo Pérez Alfonzo, *Petróleo y dependencia*. Caracas: Síntesis 2000, 1971, pp. 18-19; J. P. Pérez Alfonzo, *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Caracas: Lisbón, 1976, p. 238.
- 42 Uslar Pietri, «Epílogo de 1985», p. 110.
- 43 Luis Ugalde, «Introducción», en *Encuentro y alternativas. Venezuela 1994*, tomo I. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1994, p. 30.
- 44 Baptista y Mommer, p. 197.
- 45 Ágnes Heller, *El hombre del Renacimiento*. Barcelona: Península, 1994, pp. 93-94.

anuncien el inicio de una segunda o tercera «independencia» para el país. Como señaló Uslar Pietri en una charla de 1995, es posible que el culto a la Independencia tenga mucho que ver con la sensación de fracaso que hemos experimentado en los hechos posteriores, pues no hemos sido capaces, luego de ese momento singular, de encontrar una empresa nacional que logre motivarnos de igual forma.⁴⁶

La democracia surgida en 1958 quiso ser vista por muchos como un nuevo comienzo para Venezuela, como un paso adelante que iría eventualmente a satisfacer la sed de estabilidad, prosperidad y solidez cívicas reiteradamente planteadas en nuestra historia, y sistemáticamente frustradas por el curso de los eventos. Pero la ilusión no duró demasiado, y si uno concede credibilidad a lo que innumerables analistas han venido diciendo durante buena parte de los más de cuarenta años transcurridos desde entonces, se ve obligado a concluir que nuestra democracia ha vivido una crisis perpetua.⁴⁷ Sin duda, la tradición pesimista y el estado de espíritu desencantado, cuyas huellas he venido trazando en estas páginas, lejos de atenuarse o cesar se han intensificado, y un importante grupo representativo de la intelectualidad venezolana culmina el siglo sumido en desalentadoras percepciones y melancólicos pronósticos sobre nuestro complejo devenir.

A diferencia de la casi totalidad de los que se han ocupado de reflexionar sobre nuestra historia y su posible sentido, Ángel Bernardo Viso ha desplegado una implacable argumentación que comienza por interpretar la Independencia como una verdadera tragedia, y la causante directa, «en la medida en que exista una causalidad histórica», de nuestra actual «pobre realidad». Según Viso, la Independencia fue una tragedia por el modo en que ocurrió, al originar una decisiva ruptura espiritual que aún hoy explica nuestro marasmo; por el momento en que tuvo lugar, ya que «la tarea emprendida por los españoles en América requería un tiempo de maduración negado por los acontecimientos», y por las consecuencias que tuvo, al dar origen a un culto castrador y a una historia inventada, que dibuja la Independencia, de manera falsa, como fuente de bienes inagotables. Esta última, sostiene Viso, es una manipulación «hecha de manera consciente y en gran escala por los hombres que han detentado

Arturo Uslar Pietri, «La identidad nacional», *Seguridad y Defensa. Temas del IAEDEN*, 9, Caracas, 1995, p. 124.

A. Romero, «Rearranging the Deck Chairs on the Titanic: The Agony of Democracy in Venezuela», *Latin American Research Review*, 32, 1, 1997, pp. 7-36.

el poder en Venezuela desde 1810 hasta la fecha, con la complicidad de los historiadores de más prestigio». ⁴⁸

El análisis que hace el autor sobre la naturaleza del movimiento histórico que denominamos Independencia no deja de presentar contradicciones. Por momentos Viso atribuye a los hombres que lideraron el movimiento la voluntad de imponer una patria por la fuerza y a través del engaño sobre la masa mayoritaria del pueblo; en otras ocasiones, no obstante, Viso observa la coyuntura independentista como un naufragio, no un acto deliberado, y también como el suicidio de un grupo dirigente y de todo un proyecto civilizatorio. En tal sentido llega a afirmar que «nuestros libertadores no son tan responsables por lo que hicieron, pues buena parte de su conducta se originó en la desesperación». Lo ocurrido en todo caso fue un gran fracaso de la generación de nuestros próceres, al no haber ofrecido salida viable a nuestros países en el terreno decisivo de la organización de la sociedad y del gobierno. El producto de este cataclismo está a la vista: los países hispanoamericanos en general, y Venezuela en particular, son países inconclusos, repúblicas signadas por una «farsa grotesca», por una historia de «naturaleza valleinclanésca y algo brechtiana». ⁴⁹

Viso sostiene que nuestra historia es un reiterado fracaso, una sucesión de despropósitos que se desprenden de un nacimiento torcido. Para empezar, la Independencia nos dio una patria impuesta por la fuerza y un venezolano creado por decreto, contra lo que entonces deseaba la mayoría de la población. Si bien el desprendimiento de España era inevitable, no tenía por qué producirse del modo en que se produjo, ni generar las consecuencias que ha tenido. La Independencia fue una «revolución terrible», muy diferente a una revolución moderada o limitada como por ejemplo la norteamericana de 1776. La nuestra fue una revolución impuesta por una minoría únicamente interesada en separarse del poder español e incapaz de promover un espacio interior para la libertad. La ruptura radical con el pasado, activamente perseguida por Bolívar, fue tan brutal y extrema que nos arrancó de raíz, de manera que cuando hoy volvemos el rostro al pasado lo que hallamos es un vacío, una nada. De allí nuestra perenne angustia por forjarnos una identidad, nuestro desa-

48 Ángel Bernardo Viso, *Venezuela: Identidad y ruptura*. Caracas: Alfadil, 1982, p. 19;

Á. B. Viso, *Memorias marginales*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991, pp. 47-55, 77, 95.

49 Viso, *Venezuela: Identidad y ruptura*, pp. 83-84, 90, *Memorias marginales*, pp. 69, 73, y *Las revoluciones terribles*. Caracas: Grijalbo, 1997, p. 75.

sosiego espiritual, nuestra falta de anclaje psicológico, nuestra disgregación interior y nuestra incesante búsqueda de algún mito fundacional, búsqueda a la que responde el culto a Bolívar originado por la necesidad de «proveerse de un nuevo padre». ⁵⁰

No debe sorprender entonces que hayamos modificado 25 veces nuestra Constitución, y estemos aprestándonos en 1999 a hacerlo de nuevo (ello se concretó en la «Constitución Bolivariana» de la llamada Quinta República), en tanto que los Estados Unidos preserva las reglas básicas de organización política que se dio en su primera y única carta fundamental de 1787. Esa compulsiva necesidad psicológica de cambiar repetidamente lo que somos y queremos ser, trastocando continuamente instituciones esenciales para la existencia en común, pone de manifiesto una indecisión «en el centro mismo del ser y no en sus accidentes». Estamos en perpetua flotación, enarbolando gestos rituales que desdeñan un pasado al que se desconoce y menosprecia, con excepción del episodio independentista luego elevado a religión cívica, y construyendo perennemente nuevas repúblicas aéreas, sin andamiaje en una tradición y sin sustento en las realidades del presente. Por todo esto, tampoco debe extrañar que nuestra historia sea una serie de fracasos repetidos, y que estemos inmersos en una desesperanzadora manera de vivir, sumidos en una especie de raquitismo espiritual: «No nos hemos recuperado todavía de los traumas ocasionados por aquellas luchas y, por otra parte, no hemos sabido qué hacer con la libertad y la igualdad tan duramente conquistadas». ⁵¹

Bajo el supuesto de que el diagnóstico que ofrece Viso se ajuste en alguna medida —y pienso que es así— a lo que hemos sido y seguimos siendo, es indispensable preguntarse: ¿Qué nos resta entonces hacia adelante? ¿Qué está en nuestras manos hacer para superar el marasmo histórico al que pareciéramos condenados por un nacimiento insatisfactorio? Viso propone que aprendamos a ver descarnadamente y sin prejuicios la realidad; en particular, que volvamos el rostro hacia la Independencia de modo diferente, con objetividad y sentido crítico, como preludeo para recuperar nuestra conexión psicológica con el pasado en su totalidad, incluyendo desde luego nuestro pasado colonial. Hay en Viso una inculcable añoranza por lo que pudo ser y no fue, con relación a los logros

Viso, *Venezuela: Identidad...*, pp. 43, 60, 102, 136, 142; *Memorias...*, p. 29, y *Las revoluciones...*, pp. 17, 144-145.

Viso, *Venezuela: Identidad...*, pp. 64, 93, 95, 136-137, 141-142.

positivos que habrían sido capaces de alcanzar –hipotéticamente– las colonias españolas de América, si no se hubiese interpuesto la prematura y traumática independencia. Es lícito suponer, nos dice, que si la Colonia se hubiese prolongado por más tiempo sin que la conciencia de los blancos criollos entrase en crisis, tal vez el elemento español habría logrado marcar su impronta en la población, asimilándola anímicamente, en tanto que la fusión racial se consumase hasta el punto de un verdadero mestizaje, físico y espiritual. La revolución de 1810 decapitó ese proceso factible, cercenando el crecimiento de un nuevo tipo humano, «puesto a prueba anticipadamente, sin que hubiese concluido el trámite de españolización y cristianización integrales de nuestra sociedad». ⁵²

La Independencia, sin embargo, es un hecho irreversible, con todas sus consecuencias. ¿Qué se nos plantea entonces como pueblo? Viso enfatiza que el primer paso en el rumbo de superar el desgarramiento de nuestro ser dividido entre un pasado trágico y un presente anémico, consiste en rescatar íntegramente ese pasado, «en el sentido de aceptarlo en la intimidad». Por un lado, debemos sustituir el merecido respeto a la gesta independentista por lo que hoy no es otra cosa que un culto esterilizador. Por otro lado, debemos entroncarnos con la España histórica, pues, «Sólo si rescatamos, *para nosotros*, el imperio del cual [una vez] formamos parte, dejaremos de proyectarnos como hombres de segunda clase...». Somos herederos de la derrota imperial de España y debemos asumirla si aspiramos a ponerle término. A partir de allí, nos toca conquistar una voluntad de dominio, una vocación inquebrantable de estar en primer rango a la manera, por ejemplo, de pueblos como el alemán y el japonés, que luego de los desastres experimentados durante la Segunda Guerra Mundial fueron capaces, con orgullo nacional y tenacidad a toda prueba, de levantarse de las cenizas y colocarse otra vez a la vanguardia en el escenario internacional. ⁵³

A partir de 1810, sostiene Viso, se extinguió en el país la voluntad de colonizar y poblar; se abandonó gran parte del territorio, que aún hoy permanece virgen, y el ímpetu vital disminuyó radicalmente con la breve excepción del tiempo de guerra emancipadora. Tan poca conciencia ha tenido nuestro desmemoriado «yo» nacional de su propio espacio, que ni siquiera nos hemos ocupado de poblar y defender nuestras fron-

52 Viso, *Las revoluciones...*, p. 144.

53 Viso, *Venezuela: Identidad...*, pp. 45-46, 143-145, y *Memorias...*, pp. 65, 80, 117, 135.

teras.⁵⁴ ¿Cómo recobrar ese ímpetu? ¿Es tal meta factible? Las propuestas que hace el autor son importantes, mas las mismas se mueven en un plano estrictamente espiritual. Los procesos de evolución en este terreno son normalmente muy largos, y su destino probable siempre impredecible. Se trata de procesos culturales que tocan aspectos cuyo hondo arraigo en la estructura sicológica de un pueblo exigen amplios períodos de maduración. No aborda el autor asuntos políticos o económicos de la actualidad venezolana, ni se compromete con fórmulas institucionales determinadas. Su diagnóstico se ubica en un marco diferente de nuestra existencia colectiva. Viso nos enfrenta con lucidez y crudeza a una historia marcada por la inestabilidad y el desarraigo y a un presente en no pocos aspectos desolador. Pero cabe preguntarse: ¿cómo reconquistar creativamente el pasado con el cual rompimos de modo tan inmisericorde? No sólo nos hallamos hoy tan distantes como siempre de esa historia, sino que la visión heroica y acrítica de la Independencia vuelve a prender en la imaginación popular, como suprema y casi única referencia de nuestro curso sociopolítico, activamente promovida así desde el propio gobierno. A ello se suma la intensificación deliberada del culto a Bolívar, culto al que se procura colocar otra vez en el pedestal de una especie de religión cívica, con respuestas para todos los problemas actuales y venideros. ¿Qué nos queda entonces? ¿No era acaso la democracia, con tantos esfuerzos conquistada en 1958, el camino de avance hacia una reconciliación de nuestro ser con su pasado, su presente y su porvenir? ¿Qué legado nos deja esta etapa reciente a cuya lastimosa agonía hoy asistimos, y qué puede esperarse del futuro que apenas se vislumbra?

La Venezuela estéril

La percepción según la cual el sistema político inaugurado en 1958 ha culminado en un estrepitoso fracaso se ha convertido en moneda corriente entre la opinión pública mayoritaria del país. Situados ante el umbral

de un nuevo siglo, millones de venezolanos se han sentido defraudados, angustiados ante la incertidumbre, y ansiosos de asirse a alguna tabla salvadora, no importan los riesgos que esta última pueda implicar en términos de un posible retorno al autoritarismo militarista. Una colectividad irritada y desencantada se prepara a contemplar otro ejercicio de laboratorio en nuestra ya extensa trayectoria de reforma constitucional, en tanto que los actores políticos que por cuatro décadas tuvieron el control de las más relevantes decisiones se esfuman como fantasmas, empujados fuera del juego por un huracán social, cuya verdadera magnitud y sentido final de dirección nadie parece todavía capaz de prever con aceptable claridad.

De esta convicción generalizada acerca del fracaso de la democracia puntofijista, transformada en renovada y momentánea ilusión de cambio para los sectores populares y sus nuevos conductores, no escapan los intelectuales. Y así como en 1936 la nueva etapa que se perfilaba repercutió sobre los espíritus más lúcidos con un mensaje pesimista o en todo caso escéptico, podríamos ahora decir que la percepción más extendida es la de que asistimos al fin de un proceso, a un desenlace perturbador y cargado de frustraciones, a una Venezuela en la que, en palabras de María Sol Pérez Schael, se ha perdido la fe en todo y de la cual desapareció el porvenir.⁵⁵ El régimen político que en los años 1960 y 1970 no pocos vieron con orgullo como un producto de exportación más, casi que a la par del petróleo, es hoy evaluado como una «parodia de democracia» y un «esperpento de organización social», y el curso entero del país hasta llegar a esta coyuntura como un fracaso tan obvio que casi no merece la pena discutir al respecto, pues la «Venezuela profunda» ha devenido en un «sistema organizado de inseguridad y violencia».⁵⁶

El análisis de la experiencia puntofijista es de fundamental importancia para los efectos de este estudio. Fueron cuarenta años del siglo que culmina, durante los cuales, presuntamente, Venezuela se hallaba inmersa en la tarea de construir un Estado verdaderamente democrático, que armonizaría la reivindicación de la libertad de los individuos con el logro de la justicia social. Esa conquista histórica habría dado al traste con los pronósticos pesimistas que han predominado en nuestra tra-

55 María Sol Pérez Schael, *El excremento del diablo*. Caracas: Alfadil, 1997, pp. 7-8.

56 M. S. Pérez Schael, *Petróleo, cultura y poder en Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1993, p. 198; Pérez Schael, *El excremento del diablo*, pp. 19, 125, 128, 196.

dición intelectual. De allí que el revés sufrido por las expectativas que muchos albergaron durante los primeros tiempos de la democracia no pueda en modo alguno subestimarse, y requiera una cuidadosa consideración.

¿Por qué el fracaso de un régimen que por un tiempo despertó tantas esperanzas? De modo semejante al nacimiento del país en la ruptura traumática de la independencia, el diagnóstico del proceso democrático puntofijista, desde la perspectiva de algunos de sus más acuciosos investigadores, debe enfatizar las circunstancias de su nacimiento. No podemos perder de vista que la democracia que surge en 1958 fue el resultado de una serie de pactos políticos entre diversos actores, todos los cuales y en mayor o menor medida habían vivido las intensas confrontaciones del llamado «trienio adeco» de 1945-1948. Esta etapa se caracterizó por la radicalización de los conflictos y la división del país en bandos irreconciliables, proceso que eventualmente nos condujo a la reacción militar y a una larga dictadura. La decidida voluntad de no repetir esas experiencias —las de una democracia radicalizada y una dictadura militar—, y de labrar un consenso mínimo entre los principales actores en el escenario nacional, explica los diversos acuerdos sobre los que se sustentó el nuevo régimen surgido en 1958, acuerdos que dieron forma a un cierto tipo de democracia, a un sistema político cuyo nacimiento estuvo signado por una sensación de vulnerabilidad extrema.

Semejante percepción de fragilidad explica que los constructores de la democracia puntofijista hayan partido de una definición mínima de la misma, en el sentido de centrarse en establecer un conjunto de condiciones que favoreciesen la supervivencia del régimen. No se trataba de maximizar la democracia ni la probabilidad de concreción masiva de los valores con ella asociados, sino de maximizar la perdurabilidad de un mínimo satisfactorio de democracia.⁵⁷ La consecuencia de tal perspectiva fue la conversión de la democracia puntofijista en una democracia de élites, cuyo funcionamiento generaba poderosas tendencias desmovilizadoras y antiparticipativas a través de la canalización de las demandas populares por unas pocas organizaciones «confiables». De esta forma, y debido al temor de las élites hacia las masas, el Estado venezolano devino en un «Estado de partidos», en una estructura de la cual se adueñaron esas pocas organizaciones, creando una compleja red de privile-

gios y complicidades que a su vez motorizó una extensa maraña de clientelismo y corrupción.

Por otra parte, el monopolio de poder y participación ejercido por los principales partidos políticos contribuyó a la esclerosis de una sociedad civil de por sí poco desarrollada en un país petrolero, en el que los gobiernos han actuado tradicionalmente como principal fuente de movilización social y económica. Esta situación, que en las primeras etapas del puntofijismo ayudó a fortalecer el régimen, se transformó paulatinamente en una de sus más graves patologías. De allí la aseveración de Pérez Schael, según la cual: «La impronta dejada para la historia por el pacto de Punto Fijo, fue la definitiva y absoluta exclusión del ciudadano de la vida política».⁵⁸ Los que durante un tiempo fueron entendimientos para la convivencia democrática se transmutaron en entendimientos hegemónicos, que redujeron «la complejidad democrática al *bien pensar* de pequeños grupos [...] y, en muchos casos, al libre arbitrio de unos cuantos»,⁵⁹ drenando así de contenidos la noción misma de representatividad del sistema político.

El puntofijismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo igualitario, generador de una servidumbre dulce y apacible; las elites sustituyeron al pueblo, en primer lugar, y en segundo término abdicaron su papel como conductoras, para hacerse simplemente beneficiarias de un orden hecho a su medida. La presencia del petróleo había convertido al Estado, desde los tiempos de Gómez, en el más poderoso agente económico del país, y con ello hizo de la actividad política el botín máspreciado, «la moneda de cambio y referencia única para todas las transacciones».⁶⁰ En este terreno germinó la segunda patología de la democracia puntofijista: el estatismo económico y el redistributivismo social, llevados a extremos tales que asfixiaron el potencial productivo de una colectividad parasitaria, cuya mentalidad rentista ha soportado todos los embates de una ya prolongada crisis. Los venezolanos sabemos que el dinero petrolero es del Estado, «y como el Estado es de todos, el pueblo es rico».⁶¹ Si nuestra realidad concreta es la de una pobreza cada día más creciente, la razón no puede ser otra –de acuerdo con el esquema descrito– sino el hurto ejecutado por unos pocos: las élites tradicionales, hoy execradas por una masa irredenta que reclama salvación y castigo.

58 Pérez Schael, *El excremento del diablo*, p. 101.

59 *Ibid.*, p. 103.

60 *Ibid.*, p. 33, 128-129.

61 *Ibid.*, p. 49.

El paroxismo de estas patologías se materializó entre 1989 y 1998. En aquel año, la población puso de manifiesto su total indisposición para admitir el agotamiento del modelo económico rentista-populista, que ya durante la década de 1980 se había traducido en una caída sin precedentes de los ingresos promedio reales de los trabajadores del país. Los violentos motines de febrero de 1989 pusieron sobre aviso a quienes tuvieron ojos para ver que a las reformas modernizadoras les aguardaba un angustioso destino en Venezuela. Más adelante, en diciembre de 1998 y como resultado de la indetenible descomposición del régimen político y su correlato económico, ascendió a la Presidencia de la República el principal protagonista de un violento golpe de Estado, un líder demagógico que por los momentos parece encarnar todas las ansiedades y contradicciones propias de una masa social que dice aspirar a cambiarlo todo, cuando en realidad lo que busca es retornar a los tiempos en que el populismo redistributivista fue capaz de extender sus tentáculos sobre las diversas capas de la población. Fueron aquellos tiempos durante los cuales se generó el más intenso ritmo de movilidad social ascendente de nuestra historia, y ello, cabe recordarlo, tuvo lugar bajo la hoy tan cuestionada democracia puntofijista. El recuerdo de esa etapa de avance socioeconómico, a pesar de todo, no ha perecido aún.

Pérez Schael, al igual que Viso, no abriga duda alguna de que hemos fracasado, y se muestra perpleja ante el «gran misterio» que se deriva de la siguiente constatación: «¿Cómo, habiendo invertido el inmenso volumen de ingresos derivados del petróleo, obtuvimos míseros beneficios?». ⁶² El atolladero en que se encuentra Venezuela en este fin de siglo no luce susceptible de salidas fáciles. No cabe por tanto sorprenderse de que las propuestas que formula la autora rehúyen terrenos demasiado específicos, para situarse también en el plano de la cultura política y su necesaria transformación a largo plazo. Su principal sugerencia parte de lo que considera la «miseria cognoscitiva», mala conceptualización de la realidad y evasión de la misma que nos caracterizan. Al tratar de escapar de la realidad que tenemos ante nosotros, no podemos capacitarnos para enfrentarla. ⁶³ Es difícil extraer de los escritos de la autora recomendaciones más concretas en materia económica y político-institucional. Su caso, por lo demás, no es único. La reflexión de nuestros pensadores este fin de siglo se ha movido primordialmente en el plano

Pérez Schael, *Petróleo, cultura y poder...*, pp. 205-206.

Ibid., 95, 167, 198.

62

63

de la crítica a una condición cultural, es decir, a una *enfermedad de nuestra cultura cívica en general*, en la que juegan papel clave las consideraciones sobre la mentalidad rentista del liderazgo y la población por igual, y nuestra fascinación por «fabular paraísos imposibles». ⁶⁴ Sus conclusiones no podrían ser más desalentadoras: estamos, desde una perspectiva etnosiquiátrica, enfermos como grupo social, tanto por el «rechazo alucinante de lo real» como por la «ausencia de imaginación colectiva en el estupor alucinado por lo real». ⁶⁵

El fracaso nacional obliga finalmente a preguntarse: ¿Si no era la modernidad nuestro destino, cuál es entonces? ¿Si no hubiésemos tenido petróleo, experimentaríamos en lo profundo de nuestro espíritu la aguda sensación de fracaso que hoy invade a muchos? ¿No fue precisamente el hecho de poseer petróleo lo que infló de modo desmesurado nuestras expectativas, que contrastan ahora de manera tan cruel con nuestra realidad? Tal vez nos vemos en medio de un fracaso permanente porque las ilusiones que el petróleo ha sido capaz de generar jamás armonizarán plenamente con nuestros logros.

¿Las ilusiones perdidas?

No deja de ser irónico que uno de nuestros más destacados historiadores, Germán Carrera Damas, haya producido estos pasados cuarenta años un importante conjunto de obras orientado a demostrar la «larga marcha» venezolana hacia la democracia, sólo para encontrarse, a finales del siglo xx, con la penosa agonía del puntofijismo y sus impredecibles consecuencias. El notable aporte intelectual de este autor ejemplifica los riesgos de toda filosofía de la historia que presume una direccionalidad predeterminada para el curso de los eventos sociopolíticos. En su caso, se trata de una concepción de la historia con inocultables raíces hegeliano-marxistas.

64 Pérez Schael, *El excremento del diablo*, p. 20.

65 François Laplantine, citado en Pérez Schael, *Petróleo, cultura y poder*, pp. 212-213.

Para Hegel, como es sabido, la razón rige al mundo y la historia transcurre *racionalmente*; en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que no es otro que «el progreso en la conciencia de la libertad». La historia adquiere conciencia de sí misma en el plano del espíritu y «los pueblos son el concepto que el espíritu tiene de sí mismo». Ahora bien, en el transcurso de la historia universal y mediante las acciones de los hombres surge algo más de lo que ellos se proponen y alcanzan, algo distinto de lo que ellos saben y quieren inmediatamente: «Los hombres satisfacen su interés; pero, al hacerlo, producen algo más, algo que está en lo que hacen, pero que no estaba en su conciencia ni en su intención». Dicho en otros términos, aunque el objetivo no sea consciente ni buscado de modo deliberado, el avance de la historia se orienta inexorablemente hacia esa meta; la «astucia» o «ardid» de la razón asegura que el curso de los eventos, más allá de lo que en determinadas circunstancias los hombres crean estar haciendo y más allá de lo que *parezca* que hacen, se encamina a cumplir esa racionalidad esencial de la historia.⁶⁶

Para Carrera Damas, también, la historia tiene una racionalidad y su reloj se atrasa y se adelanta en diversas coyunturas, pero sin que se pierda el rumbo esencial.⁶⁷ La historia de Venezuela, en particular, es una larga marcha hacia la democracia, cuyo destino final será la conformación del país como una genuina sociedad democrática.⁶⁸ En este esquema, sucesos tales como, por ejemplo, el proceso de reforma del Estado de los años 1980 se inscriben «en una línea de necesidad histórica» y dentro de «un curso histórico claramente fijado».⁶⁹ El camino de avance es indetenible a pesar de los obstáculos y tropiezos y de los posibles atrasos del reloj histórico, pues va garantizado por su racionalidad subyacente. La vida de un pueblo es, entonces —y en la más pura tradición hegeliana— su ser histórico y el conocimiento de ese ser histórico, con lo cual se logra «la unificación absoluta y activa del pasado y del presente en un constante devenir». El espíritu de nuestro pueblo sería la formación de la conciencia nacional, y su firme adquisición significa la definitiva estructuración histórica, «porque un pueblo en posesión de tal forma de conciencia po-

G. W. F. Hegel, *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. 66

Madrid: Alianza Editorial, 1997, pp. 42-43, 65, 68, 85, 97.

Germán Carrera Damas, *Jornadas de historia crítica*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1983, p. 155. 67

G. Carrera Damas, *La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia*. 68

Caracas: Fondo Editorial de la Contraloría General de la República, 1998, pp. 3, 59.

G. Carrera Damas, *La necesaria reforma democrática del Estado*. Caracas: Grijalbo, 1988, pp. xvi, 27. 69

drá ser sojuzgado pero jamás destruido. Tarde o temprano [...] triunfará de la opresión, y la vida del pueblo reanudará su curso...».70

No obstante, ¿cómo estar seguros de ello? No muestra acaso la historia que numerosos pueblos han desaparecido simplemente, o han sido sojuzgados y aniquilados como civilizaciones autónomas, como ocurrió a incas, mayas y aztecas, para sólo citar tres casos? ¿Qué decir de las «limpiezas étnicas» que hemos observado más recientemente en los Balcanes? Según Carrera Damas, nuestra historia puede no haber seguido una línea recta, constantemente progresiva en su curso, pero sí en su resultado. De nuevo, ¿cómo estar seguros de semejante resultado «progresivo»? ¿No se encuentra actualmente Venezuela en una situación tal que permite, con sólidas razones, que se susciten dudas acerca de la perdurabilidad de un régimen democrático? ¿Es acaso absurdo contemplar siquiera la posibilidad de que se entronice en el país una larga dictadura o «democracia autoritaria»? ¿Qué puede garantizarnos vivir para siempre en libertad? ¿No hemos estado la mayor parte de nuestra historia independiente bajo el yugo de gobiernos de fuerza?

Desde luego, el concepto hegeliano de «astucia de la razón» permite superar todo obstáculo, e interpretarlo todo como expresión de un destino inevitable, pues a través del mismo cabe atribuir aun los más severos reveses al desarrollo oculto de esa línea progresiva y verles como ardides de la razón subyacente a la marcha histórica. Eso es precisamente lo que hace Carrera Damas cuando, por ejemplo, analiza los acontecimientos que sacudieron al país entre 1989 y 1998. A su modo de ver los golpes de Estado, los motines masivos y el nuevo militarismo no son otra cosa que un frente de tormenta generado por los propios logros y características de nuestra larga marcha democrática. En otras palabras, ese cuadro de dificultades pone de manifiesto procesos de cambio «que son parte orgánica de un proyecto de democratización y modernización profundas de la sociedad».71 Repito, ¿cómo saberlo, cómo estar seguros de ello? ¿No podríamos quizás estar viviendo el preludio de un descenso al autoritarismo político, al fin de la democracia representativa, a la conformación de un modelo de cesarismo populista muy alejado de las estipulaciones de lo que Carrera Damas denomina el Proyecto Nacional, enfocado a instaurar el Estado republicano, representativo y liberal?72

70 G. Carrera Damas, *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*. Barcelona: Crítica, 1986, pp. 196-197.

71 Carrera Damas, *La larga marcha...*, pp. 66-67.

72 *Ibid.*, p. 31.

Según el autor, quien durante buena parte de su carrera intelectual se ha ubicado teórica y metodológicamente dentro del cauce marxista, ese Proyecto Nacional ha estado en función del desarrollo y consolidación de la clase dominante venezolana. Sostiene Carrera Damas que nuestra historia independiente puede explicarse en no poca medida como el producto de las actividades de esa clase, orientadas a preservar y fortalecer su poder social. Por un lado, el autor destaca la debilidad de la clase dominante, numéricamente escasa, dividida y oscilante en lo ideológico entre un «optimismo lírico» y un «pesimismo sistemático». Por otro lado, sin embargo, esa misma clase es presentada como la ejecutora de un masivo plan de manipulación ideológica sobre la población a lo largo de décadas, forjadora de una «trampa», que nos impide «pensar nuestra sociedad organizada en otra forma que no sea el proyecto nacional de la clase dominante». Aun la ideología igualitaria es vista por este autor como herramienta hábilmente manejada por la clase dominante, con el propósito de «desalentar trastornos del orden social». Algo semejante ocurre con la visión heroica de la Independencia, el culto a los próceres y en particular a Bolívar. Al igual que Viso, Carrera Damas les interpreta como otra treta de la clase dominante, como un instrumento adicional de manipulación con el cual esa clase procura suplir la ausencia de una teoría de su dominio, mediante «la apropiación de una suerte de destino histórico, como fundadora, creadora, y de hecho usufructuaria de la nacionalidad, al amparo de la invocación bolivariana...». ⁷³

Si bien es difícil armonizar una constatación de debilidad con una presunción tan intensa de poderío por parte de tal clase, es también complicado reconciliar esa supuesta fortaleza histórica de la clase dominante con una idea del pueblo venezolano como ente capaz de asumir su destino y actuar con autonomía moral y política. Dicho de otra manera, si el pueblo venezolano ha permitido que una clase dominante intrínsecamente débil le haya manipulado y controlado por tanto tiempo, ¿qué se puede esperar entonces de su presente y porvenir? Por otra parte es legítimo dudar acerca de la existencia, de modo orgánico y coherente, de semejante clase dominante en la historia venezolana, muy en especial durante la ya larga etapa petrolera, cuando el predominio económico del Estado ha ejercido tan decisiva influencia en todos los órdenes de nuestra existencia colectiva, sobre todo en materia económica. Sería

errado confundir la posición privilegiada de algunos apellidos más o menos tradicionales en la escala social en diversos momentos de nuestro devenir, o aun la riqueza personal de determinados individuos o grupos, con la realidad de una clase dominante en efecto capaz de ejercer la hegemonía política e ideológica sobre el conjunto de la sociedad. Calificar, de paso, a intelectuales como Mario Briceño Iragorry, Caracciolo Parra Pérez y Augusto Mijares, como «representantes ideológicos y culturales de la clase dominante»⁷⁴ parece un tanto exagerado, sobre todo si tomamos en cuenta —como he intentado mostrar en estas páginas— que en líneas generales nuestros intelectuales han abrigado serias dudas acerca de la eventual realización del llamado Proyecto Nacional enarbolado por dicha clase.

Es de hacer notar que la reflexión de Carrera Damas experimenta, a partir aproximadamente de mediados de los años 1980, una atenuación del elemento marxista, sin que se diluya su hegelianismo. Hasta 1980 el autor hacía énfasis en la profundización de los «contenidos socialistas» de la democracia, y cuestionaba el «espejismo liberal».⁷⁵ Esta postura ideológica se moderó más adelante, y ya en 1998 le hallamos en disposición de cuestionar la perversión del principio igualitario en nuestra democracia, así como el populismo redistributivista.⁷⁶ Su diagnóstico de la actual situación venezolana insiste en lo que denomina el vacío de poder social o quiebra de la autoridad de la clase dominante, que en unión a los gestores del poder político constituye la clase dirigente del país. En segundo lugar, Carrera Damas enfatiza «la acentuada desorientación ideológica» que ve reforzada por la crisis del socialismo: «Esta última ha privado a la sociedad de una fuente de normativas éticas y políticas que, si bien eran reiteradamente violadas por los mismos que las proponían, servían de puntos de referencia al conjunto de la sociedad».⁷⁷ Llama la atención este análisis, ya que como sostuve previamente cuesta trabajo identificar con alguna precisión a los rectores del poder social en Venezuela, y el hecho de que el autor señale la crisis del sistema financiero de los años 1994-1997 como un evento que dañó seriamente «la capacidad de ofrecer orientación social, de quienes han venido ejerciendo de rectores del poder social», sugiere como mínimo cierto desconocimiento

74 Carrera Damas, *Una nación...*, p. 34.

75 *Ibid.*, pp. 178-179, 187-189.

76 Carrera Damas, *La larga marcha de la sociedad...*, pp. 52, 60.

77 *Ibid.*, pp. 65-66.

con respecto a las realidades sociopolíticas venezolanas de estos tiempos. Buen número de los principales protagonistas de esa crisis financiera fueron personas a las que sólo con dificultad podría atribuírseles el ejercicio de un poder social en el país, a pesar de la posición económica que detentaron. En cuanto a los gestores del poder político, estos últimos sí han sufrido un serio desprestigio, mas la agonía del puntofijismo ha abierto las puertas al ingreso de nuevos grupos al mando del gobierno y del Estado. Con relación al diagnóstico que venimos comentando, importa indicar finalmente que el socialismo de raigambre marxista no ha sido un punto de referencia ético-político de verdadera relevancia *práctica* para la sociedad venezolana, quizás con la excepción de lo ocurrido durante la década de 1960.

Carrera Damas ha argumentado que los intelectuales de este momento nacional «perdimos el rumbo y nos dedicamos a señalar culpables antes que estudiar situaciones». ⁷⁸ En algunos casos esa aseveración corresponde a la verdad, pero no en todos. Es lamentable que distinguidos hombres de pensamiento hayan puesto de manifiesto tan singular miopía en el análisis de los eventos de años recientes, hasta el punto de perder de vista, por ejemplo, que las reformas económicas que intentaron implementarse no fueron producto del capricho de unos «neoliberales de gabinete», ⁷⁹ sino del innegable agotamiento del modelo rentista-populista para solventar la gigantesca crisis venezolana, alimentada por ese mismo modelo. Más grave aún ha sido la actitud justificatoria de los golpes de Estado de 1992 asumida por intelectuales ⁸⁰ y políticos. ⁸¹ No es nada novedoso en nuestra historia contemplar a los intelectuales hundidos en un pantano de confusión, y a los políticos en otro de oportunismo. Lo peculiar esta vez tiene que ver con la magnitud de lo que ha sido puesto en juego, luego de cuarenta años de democracia y a pesar de todas las carencias de esta última.

Si bien el optimismo hegeliano de Carrera Damas contrasta con el escepticismo de otros, lo cierto es que resulta muy difícil escudriñar con

Ibid., p. 63.

78

Juan Carlos Rey, «La crisis de legitimidad en Venezuela y el enjuiciamiento y remoción de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República», *Boletín Electoral Latinoamericano*, San José de Costa Rica, ILDH-CAPEL, enero-junio 1993, p. 81.

79

Ibid., pp. 99, 195; Arturo Uslar Pietri, *Golpe y Estado en Venezuela*. Bogotá: Norma, 1992, pp. 48-49, 73, 88, 114 119, 122; Juan Liscano, *Los vicios del sistema*. Valencia:

80

Vadell Editores, 1992, pp. 19, 34, 36-37, 42, 49, 55, 59, 65, 68, 76, 80, 91, 98, 103-105, 109.

Rafael Caldera, citado en A. Romero, *Decadencia y crisis...*, pp. 36-38.

81

alguna seguridad el sentido final de los tormentosos acontecimientos que todavía sacuden a nuestra sociedad este fin de siglo, acontecimientos que no necesariamente auguran cambios positivos para nuestro convulsionado país.

El nuevo siglo mesiánico

¿Hemos fracasado como país? La pregunta es tan dura, tan enervante, que difícilmente puede dársele una respuesta unívoca y definitiva. Lo que sí es cierto, y he intentado mostrarlo en estas páginas, es que un núcleo significativo de nuestra intelectualidad ha visto con inequívoco pesimismo nuestro proceso histórico durante el siglo que ahora culmina, y ha enjuiciado con severidad crítica nuestro desempeño en la tarea de construir una nación en la que imperen, de manera estable, la democracia, la libertad y la prosperidad de la mayoría.

El objetivo de este ensayo no ha sido otro que el siguiente: poner de manifiesto la continuidad de ese estado de espíritu, caracterizado por el desaliento acerca de los logros de una nación que aparentemente se ha trazado objetivos que desbordan, al menos hasta ahora, sus energías y capacidades sociopolíticas. No he pretendido sostener que no hay diferencias entre los diversos autores acá comentados, y como constatamos, no todos participan de una visión desesperanzadora de nuestra condición. No he tenido, por tanto, el propósito de argumentar que no han existido y existen puntos de vista divergentes sobre nuestro devenir en el complejo panorama de ideas de la Venezuela del siglo xx. He querido tan sólo dar cuenta de la creencia clave que comparte un destacado grupo de nuestros intelectuales, creencia según la cual algo fundamental ha marchado muy mal con la sociedad en que les ha tocado vivir. Esa creencia y la angustia que de la misma se desprende se han encontrado en el centro de mi indagación.

Un tema estrechamente vinculado al anterior es éste: ¿qué contribución puede haber hecho el análisis articulado por los intelectuales, y el modo como han reaccionado ante los eventos, en la acentuación del proceso de decadencia que describen? Si bien esta última es una interrogan-

te legítima, la misma desborda el limitado marco del presente estudio. No obstante, me atreveré a esbozar dos planteamientos: en primer término, estoy persuadido de que la influencia de la intelectualidad venezolana sobre el curso de los eventos políticos del país ha sido siempre de relativa poca monta. La relevancia que la reflexión a ese nivel ha tenido se ubica más bien en el terreno de lo testimonial. En segundo lugar, los intelectuales, en lo esencial, han actuado como traductores de más amplias palpitaciones de la psicología colectiva; no han sido primordialmente creadores de estados de espíritu sino canales a través de los cuales esas percepciones sociales se han manifestado.

En ese orden de ideas conviene señalar la singularidad del horizonte político y psicológico que se perfila en la Venezuela de fin de siglo, en cuanto a la palpable brecha que se está abriendo entre, de un lado, una intelectualidad crecientemente aislada y básicamente crítica del rumbo que toman los hechos, y de otro lado una población y una nueva dirigencia mayoritaria y entusiastamente volcadas sobre un sendero de incierto destino. Pareciera que la sociedad y buen número de sus intelectuales han optado por separarse cada día más. Así vemos cómo se amplía la distancia entre, por una parte, el fervor popular y la confianza restaurada de la novel dirigencia de la «Quinta República», y por la otra el reiterado pesimismo e inocultable escepticismo de no pocos de nuestros hombres y mujeres de pensamiento. Queda abierta la interrogante acerca del significado de este hecho para el porvenir venezolano.

En otro lugar de este ensayo mencionábamos que los indicadores de declinación de un pueblo están ellos mismos determinados y definidos culturalmente. Las sociedades establecen sus metas de acuerdo con sus valores y percepciones predominantes. En tal sentido, dos factores han jugado un papel crucial en la definición de nuestros objetivos como sociedad: la escogencia de la Independencia como paradigma de nuestro pasado y la presencia del petróleo en nuestra historia moderna. Ambos han actuado conjuntamente en la creación de grandes expectativas y ambiciosos propósitos, que tercos y lamentables sucesos han venido frustrando recurrentemente. Venezuela pareció a muchos, sobre todo durante la década de la mayor bonanza petrolera, una sociedad «condenada al éxito». Los dolorosos encuentros de la población con una realidad muy alejada de sus esperanzas han dado origen al agudo malestar que se apoderó de Venezuela a fin de siglo. La incapacidad para generar nuevas fuentes de riqueza, la extrema dependencia petrolera que aún nos carac-

teriza, el empobrecimiento generalizado de la población, el desprestigio y erosión de las instituciones democráticas tradicionales y de su liderazgo, y la tendencia a refugiarnos en una visión estrecha y cuasi parroquial de nuestros problemas aislándonos del contexto internacional que nos rodea, conforman un contexto escasamente alentador hacia el futuro. El país, sin embargo, pareciera estar dando origen a una nueva vitalidad política, mas no queda claro qué dirección puede tomar ese renovado fervor y tampoco hasta qué punto se trata de un espejismo pasajero, de una extraña mezcla de ilusión y realidad.

Pienso que para cualquier observador desapasionado la Venezuela que arriba al umbral del siglo XXI ofrece un ejemplo, singularmente ilustrativo y doloroso, de una sociedad que no logra responder adecuadamente a los desafíos planteados por sus entornos externo e interno, así como por su propia concepción de sí misma, y por ello paga el precio de la pobreza masiva de su gente, la persistente crisis económica y la tendencia al mesianismo político. El nuevo esquema de relaciones internacionales posterior al fin de la Guerra Fría, exige de las sociedades que valoran la libertad y la prosperidad material esforzarse intensamente en los campos de la productividad y la competitividad, lo que a su vez reclama visión a largo plazo y hondas reformas educativas. Adicionalmente, la evidente imposibilidad del esquema económico petrolero-rentista para propiciar el avance socioeconómico de los venezolanos no deja espacio para dudas acerca del imperativo del cambio hacia la modernidad. No son éstos, no obstante, los retos que percibe la mayoría ni a los que concede prioridad su dirigencia, ocupada en dirimir la hegemonía política mediante nuevos experimentos de cambio constitucional en una dirección «revolucionaria».

Seguimos atrapados por la miseria del populismo, y resulta difícil tener verdadera confianza en nuestra capacidad para escapar ilesos de sus mitos.

Bibliografia

- ABENTE, Diego. «Venezuelan Democracy Revisited», *Latin American Research Review*, 1, 1987.
- ABUGATTAS, L. «Populism and After. The Peruvian Experience», en James M. Malloy y Mitchell Seligson, eds. *Authoritarian and Democrats. Regime Transition in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987.
- ACOSTA SAIGNES, Miguel. *Acción y utopía del hombre de las dificultades*. La Habana: Casa de las Américas, 1977.
- ACTAS DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1811-1812. Caracas: Publicaciones del Congreso de la República, 1984, 2 vols.
- ALEXANDER, P. J. *The Venezuelan Democratic Revolution*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1964.
- ÁLVAREZ, Federico. «Treinta años de periodismo en democracia», en *Democracia y violencia política*. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, 1990.
- ANDERSON, Perry. «Acerca de las relaciones entre el socialismo existente y el socialismo posible», *Nueva Sociedad*, 56-57, Caracas, 1981.
- ANDREWSKI, Stanislaw. «On the Peaceful Disposition of Military Dictatorships», *The Journal of Strategic Studies*, 3, 3, 1980.
- APTER, D. *The Politics of Modernization*. Chicago: The University of Chicago Press, 1965.
- ARENDT, Hannah. *Crises of the Republic*. Harmondsworth: Penguin Books, 1971.
- . *On Revolution*. New York: Penguin Books, 1990.
- ATHEY, L. E. «Democracy and Populism. Some Recent Studies», *Latin American Research Review*, 19, 3, 1984.
- BALOYRA, Enrique A. «Public Opinion and Support for the Regime, 1973-1983», en John D. Martz y David J. Myers, eds. *Venezuela: The Democratic Experience*. New York: Praeger, 1986.
- BAPTISTA, Asdrúbal. «¿En qué medida se ha sembrado el petróleo?», en *Hacia la Venezuela post-petrolera*. Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1989, vol. 1.
- y Bernard MOMMER. *El petróleo en el pensamiento económico venezolano*. Caracas: IESA, 1987.
- BAUER, P. T. *Dissent on Development*. London: Weidenfeld & Nicholson, 1971.
- . *Equality, the Third World and Economic Delusion*. London: Methuen, 1981.
- . *Reality and Rhetoric*. London: Weidenfeld & Nicholson, 1984.
- y B. S. YAMEY. *The Economics of Underdeveloped Countries*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
- BEETHAM, David. *Max Weber and the Theory of Modern Politics*. London: Methuen, 1974.

- BETANCOURT, Rómulo. *Venezuela: Política y petróleo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1956.
- . *Posición y doctrina*. Caracas: Editorial Cordillera, 1959.
- . *Tres años de gobierno democrático. 1959-1962*. Caracas: Imprenta Nacional, 1962, tomo II.
- BIGLER, Gene E. «Professional Soldiers and Restrained Politics in Venezuela», en Robert Wesson, ed. *New Military Politics in Latin America*. New York: Praeger, 1982.
- BLANCO, Carlos, coord. *Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla*. Caracas: COPRE-PNUD-Nueva Sociedad, 1993.
- BLANK, D. E. *Politics in Venezuela*. Boston: Little Brown, 1973.
- BOLÍVAR, Simón. *Obras completas*. La Habana: Lex, 1947, 2 vols.
- . *Escritos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1981.
- BOSCH, Juan. *Bolívar y la guerra social*. Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1966.
- BRICEÑO IRAGORRY, Mario. *Mensaje sin destino*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1980.
- BRINTON, Crane. *Anatomía de la revolución*, Madrid: Aguilar, 1962.
- BRITO FIGUEROA, Federico. *La estructura social y demográfica de Venezuela colonial*. Caracas: Ediciones Historia, 1961.
- BRITTAN, Samuel. *The Economic Consequences of Democracy*. London: Temple Smith, 1977.
- BRUNI CELLI, Marco Tulio. «Significación, características y consecuencias de las elecciones del 4 de diciembre de 1983», en vv.AA., 1984: *¿A dónde va Venezuela?* Caracas: Planeta, 1984.
- BULLOCK, Alan. «The Historian's Purpose: History and Metahistory», *History Today*, 7, February 1959.
- BUTLER, Eamonn. *Hayek*. London: Temple Smith, 1983.
- CANTÓ, Leandro. *Los años del gatopardo. La saga de Jaime Lusinchi*. Caracas: Certum, 1989.
- CARDOSO, Fernando H. «La democracia en América Latina», en W. Rama, ed. *Escenarios políticos y sociales del desarrollo latinoamericano*. Buenos Aires: CEPAL-UBA, 1986.
- y ENZO FALETTO. *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, 1978.
- CARR, Edward H. *What is history?* Harmondsworth: Penguin Books, 1964.
- CARRERA DAMAS, Germán. *Boves. Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1972.
- . *El culto a Bolívar*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1973.
- . *Validación del pasado*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1975.
- . *Una nación llamada Venezuela*. Caracas: Dirección de Cultura, UCV, 1980.
- . *Jornadas de historia crítica*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1983.
- . *La crisis de la sociedad colonial venezolana*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1983.
- . *Venezuela: Proyecto nacional y poder social*. Barcelona: Crítica, 1986.
- . *La necesaria reforma democrática del Estado*. Caracas: Grijalbo, 1988.
- . *La disputa de la independencia*, Caracas: Ediciones GE, 1995.
- . *La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia*. Caracas: Fondo Editorial de la Contraloría General de la República, 1998.
- CASTRO LEIVA, Luis. «El historicismo político bolivariano», *Revista de Estudios Políticos*, 42, Madrid, 1984.

- . *Sed buenos ciudadanos*. Caracas: Alfadil, 1999.
- CHÁVEZ FRÍAS, Hugo. «La democracia bolivariana», *El Ojo del Huracán*, 11, marzo-julio 1992.
- CONSULTORES 21. *Un modelo distinto de análisis para comprender el entorno*, Caracas, 1993 (mimeo).
- CORONIL, Fernando. *The Magical State. History and Illusion in the Appearance of Venezuelan Democracy*. Indiana: The Hellen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, (Working Paper 112), October 1988.
- COSTELOE, Michael P. *La respuesta a la independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840*. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
- DELEGACIÓN VENEZOLANA ANTE LA ONU. *Venezuela Now*. New York: Delegación Venezolana ante la ONU, 1977.
- DEUTSCH, Karl. *The Nerves of Government*. New York: The Free Press, 1966.
- DI LAMPEDUSA, G. T. *El gatopardo*. Madrid: Cátedra, 1991.
- DÍAZ, José Domingo. *Recuerdos sobre la rebelión de Caracas*. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1961.
- DOMBUSH R. y S. EDWARDS. «La macroeconomía del populismo en América Latina», *El Trimestre Económico*, 225, México, 1990.
- DOMENACH, Jean-Marie. *El retorno de lo trágico*. Barcelona: Península, 1969.
- DOS SANTOS, Theotonio. *Dependencia económica y cambio revolucionario en América Latina*. Caracas: Nueva Izquierda, 1970.
- DRAKE, Paul W. «Populism in South America», *Latin American Research Review*, 17, 1, 1982.
- DROR, Yehezkel. *Ventures in Policy Sciences*. New York: Elsevier, 1971.
- DUBUC PICÓN, Roberto. «El Programa de Gobierno de Acción Democrática», *Resumen*, Caracas, 13 de noviembre de 1983.
- . *Hay salida*. Caracas, 1983 (mimeo).
- ELLIOT, J. H. *Spain and Its World, 1500-1700. Selected Essays*. New Haven & London: Yale University Press, 1992.
- ENCINA, Francisco A. *Bolívar y la independencia de la América española*. Santiago: Editorial Nascimento, 1954-1965, 8 vols.
- FRANKELL, R. y G. O'DONNELL. *Los programas de estabilización convenidos con el FMI y sus impactos internos*. Buenos Aires: CEDES, 1978.
- FREUD, Sigmund. *Civilization and Its Discontents*. London: Hogarth Press and the Institute and Psychoanalysis, 1946.
- GARCÉS, Joan E. *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*. México: Siglo XXI Editores, 1996.
- GARCÍA-PELAYO, Manuel. *Idea de la política*. Caracas: Universidad Central de Venezuela (Cuadernos del Instituto de Estudios Políticos, 13), 1968.
- . *Los mitos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, 1981.
- . *Obras completas*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, vols. I y III.
- GARCÍA-PELAYO, Graciela Soriano de. *Venezuela 1810-1830: Aspectos desatendidos de dos décadas*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1988.
- GARDINER, Patrick, ed. *Theories of History*. New York: The Free Press, 1959.
- GÓMEZ, Emeterio. *Después del 4-F*. Caracas: Cuadernos El Manantial 1, 1992.
- GÓMEZ, Luis y Margarita LÓPEZ MAYA. *El tejido de Penélope. La reforma del Estado en Venezuela, 1984-1988*. Caracas: CENDES, UCV, 1990.

- GUNDER, Frank André. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. México: Siglo XXI Editores, 1978.
- HAYEK, F. A. *The Road to Serfdom*. London: Routledge & Kegan Paul, 1944.
- . *The Constitution of Liberty*. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
- . *Studies in Philosophy, Politics and Economics*. London: Routledge & Kegan Paul, 1967.
- . *The Political Order of a Free People*. London: Routledge & Kegan Paul, 1979.
- HEGEL, G. W. F. *Lecciones sobre la filosofía de la historia universal*. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
- HELLER, Ágnes. *El hombre del Renacimiento*. Barcelona: Península, 1994.
- HELLINGER, Daniel. «Democracy in Venezuela», *Latin American Perspectives*, 12, 1985.
- HEREDIA, José Francisco. *Memorias del Regente Heredia*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1986.
- HICKS, J. R. *Causality in Economics*. Oxford: Blackwell, 1979.
- HIRSCHMAN, Albert O. *A Bias for Hope*. New Haven & London: Yale University Press, 1971.
- . «A Generalized Linkage Approach to Development, with Special Reference to Staples», *Economic Development and Cultural Change*, 25, Supplement, 1977.
- . *Essays in Trespassing*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- . *The Rhetoric of Reaction*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- HOBBS, Thomas. *Leviatán*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- HOMERO, *The Odyssey*. Harmondsworth: Penguin Books, 1983.
- IZARD, Miguel. *El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela, 1777-1830*. Madrid: Tecnos, 1979.
- KANT, Immanuel. *Kant's Political Writings*. London: Cambridge University Press, 1970.
- KARL, Terry Lynn. «Petroleum and Political Pacts. The Transition to Democracy in Venezuela», en G. O'Donnell, P. C. Schmitter y L. Whitehead, eds. *Transitions from Authoritarian Rule. Latin America*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1986.
- KAUFMANN, Walter. *Tragedy and Philosophy*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- KELLER, Alfredo. *Indicadores sociales y electorales como reflejo del grado de satisfacción de las reivindicaciones políticas*. Ponencia. Bonn, 1992 (mimeo).
- . *Venezuela: Escenarios de crisis*. Caracas, 1992 (mimeo).
- . *Actitudes y demandas de los consumidores de comunicación*. Ponencia. Caracas, 1994 (mimeo).
- . *Crear cultura económica, 1994* (mimeo).
- KISSINGER, Henry A. *The Necessity for Choice*. London: Chatto and Windus, 1960.
- . *Un mundo restaurado*. México: Fondo de Cultura Económica, 1973.
- . *A World Restored*. London: Gollancz, 1977.
- KOSSOK, Manfred. «Simón Bolívar y el destino histórico de la América española», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo II.
- KURAN, Timur. *Private Truths, Public Lies. The Social Consequences of Preference Falsification*. Cambridge & London: Harvard University Press, 1995.

- LAL, Deepak. *Poverty, Power, and Prejudice. The North-South Confrontation*. London: Fabian Society, 1978.
- . *The Poverty of «Development Economics»*. London: The Institute of Economic Affairs, 1983.
- LATIN AMERICAN BUREAU. *Chile: The Pinochet decade*. London: Latin American Bureau, 1983.
- LEAL CURIEL, Carole. «El árbol de la discordia», *Anuario de Estudios Bolivarianos*, VI, 6, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Simón Bolívar, 1997.
- LEVINE, Daniel H. *Conflict and Political Change in Venezuela*. Princeton: Princeton University Press, 1973.
- . «The Transition to Democracy: Are There Lessons from Venezuela?», *Bulletin of Latin American Research*, 4, 2, 1985.
- . «Venezuela: The Nature, Sources, and Prospects of Democracy», en L. Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds. *Democracy in Developing Countries: Latin America*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1989.
- LIDDEL HART, B. H. *Strategy*. New York: New American Library, 1974.
- LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. *Bolívar*. Bogotá: Oveja Negra, 1985.
- LISCANO, Juan. *Los vicios del sistema*. Valencia: Vadell Editores, 1992.
- LITTLE, I. M. D. *Economic Development: Theory, Policy, and International Relations*. New York: Basic Books, 1982.
- LÓPEZ B., Alí Enrique. «La aristocracia venezolana frente a la Real Audiencia de Caracas: una razón para la independencia de Venezuela», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo III.
- LÓPEZ MAYA, Margarita y Luis GÓMEZ CALCAÑO. *Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana, 1958 a 1985*. Caracas: CENDES, UCV, 1985.
- , Luis GÓMEZ CALCAÑO y Thais MAINGON. *De Punto Fijo al pacto social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela: 1958-1985*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1989.
- LOZOYA, marqués de. *Historia de España*, Barcelona: Salvat Editores, 1977, vol. VI.
- LYNCH, John. «El pensamiento de Simón Bolívar y su contribución a los primeros proyectos nacionales», en *Primer Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano*. Caracas: Congreso de la República, 1984, tomo II.
- . «Más allá de la revolución: Bolívar y el ascenso de la pardocracia», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo III.
- . *Hispanoamérica 1750-1850. Ensayos sobre la sociedad y el Estado*. Bogotá: Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1987.
- . *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*. Barcelona: Ariel, 1998.
- . *América Latina, entre colonia y nación*. Barcelona: Crítica, 2001.
- MACPHERSON, C. B. *The Real World of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- . *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- . *The Life and Times of Liberal Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- MAQUIAVELO, Nicolás. *El Príncipe*. Madrid-San Juan: Revista de Occidente-Universidad de Puerto Rico, 1955.

- MADARIAGA, Salvador de. *Bolívar*. Santo Domingo: Cultura, 1979, tomo II.
- MAGEE, Bryan. *Popper*. London: Fontana, 1973.
- MALAVÉ MATA, Héctor, *Los extravíos del poder*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, UCV, 1987.
- MANN, Thomas. «The Problem of Freedom», en E. K. Bramsted y K. J. M. Melhuish, comp. *Western Liberalism. A History in Documents from Locke to Croce*. London: Longman, 1978.
- MÁRQUEZ, Pompeyo. «El socialismo debe salir al encuentro de las realidades contemporáneas», *Nueva Sociedad*, 56-57, Caracas, 1981.
- MARX, Karl y F. ENGELS. *Selected Works*. London: Lawrence & Wishart, 1968.
- MAZA ZAVALA, D. F. «Reflexiones sobre un modelo alternativo de desarrollo para Venezuela», *Nueva Sociedad*, 53, Caracas, 1981.
- MCCLELLAND, David C. *The Achieving Society*. Princeton: D. Van Nostrand Co., 1961.
- MCKINLEY, P. Michael. *Caracas antes de la Independencia*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1987.
- MIJARES, Augusto. *La interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana*. Madrid: Afrodisio Aguado, 1952.
- MILL, John Stuart. *Principles of Political Economy*. London: Longmans, 1848.
- MYRDAL, Gunnar. *Asian Drama*. London: Allen Lane, 1968.
- NAIM, Moisés. *Paper Tigers and Minotaurs*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1993.
- NEHM, B. K. y W.H. MORRIS-JONES. *Western Democracy and the Third World*. London: Third World Foundation (Monograph 8), 1980.
- NUÑO, Juan. *La veneración de las astucias*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1989.
- O'DONNELL, Guillermo A. *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós, 1972.
- . «Las Fuerzas Armadas y el Estado autoritario del Cono Sur de América Latina», en N. Lechner, ed. *Estado y política en América Latina*, Siglo XXI, México, 1981.
- . 1966-1973: *El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982.
- OAKESHOTT, Michael. *La política de la fe y la política del escepticismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- OROPEZA, Luis J. *El pluralismo tutelar*. Caracas: Centauro, 1982.
- ORWELL, George. *Inside the Whale and Other Essays*. Harmondsworth: Penguin Books, 1982.
- PACHECO, Emilio, *The Brief Rise and the Long Decline of the «Great Venezuela»: The Fiscal Policy of Venezuelan Populism in the 1980s*. Ponencia. Washington, 1992 (mimeo).
- PARRA PÉREZ, Caracciolo. *La mentalidad venezolana de la emancipación, 1810-1812*. Caracas: Facultad de Humanidades y Educación, UCV, 1971.
- . *Historia de la Primera República de Venezuela*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992.
- PASTOR, M. «Latin America, the Debt Crisis and the International Monetary Fund», *Latin American Perspectives*, 16, 1, 1989.
- PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1963.
- PÉREZ, Carlos Andrés. *Un nuevo orden económico es esencial para la paz Mundial. (Alocución del 16 de noviembre de 1976 ante la Asamblea General de la ONU)*. Caracas: Ministerio de Información y Turismo, 1976.

- . *Manos a la obra. (Textos de mensajes, discursos y declaraciones del Presidente de la República)*. Caracas: Presidencia de la República, 1977, 2 vols.
- . *Ya ha llegado la hora*. Caracas: Edites, 1986.
- PÉREZ ALFONZO, Juan Pablo. *Petróleo y dependencia*. Caracas: Síntesis 2000, 1971.
- . *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Caracas: Lisbona, 1976.
- PÉREZ SCHAEEL, María Sol. *Petróleo, cultura y poder en Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1993.
- . «Democracia, ética y libertad. Hipótesis para analizar el caso venezolano», *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 2-3, Caracas, abril-septiembre, 1995.
- . *El excremento del diablo*. Caracas: Alfadil, 1997.
- PERÚ DE LACROIX, L. *Diario de Bucaramanga*. Caracas: Tipografía Americana, 1935.
- PETKOFF, Teodoro. «Venezuela en el mundo: seguridad nacional desde la perspectiva del cambio social», en Aníbal Romero, comp. *Seguridad, defensa y democracia en Venezuela*. Caracas: Equinoccio, 1980.
- . «Hacia un nuevo socialismo», *Nueva Sociedad*, 56-57, Caracas, 1981.
- . «El desdén suicida de CAP por el costo social», *El Ojo del Huracán*, Caracas, 1989.
- PETRAS, James y MORRIS H. MORLEY. «Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela», *Third World Quarterly*, 5, 1, 1983.
- PICÓN SALAS, Mariano. *Cinco discursos sobre pasado y presente de la nación venezolana*. Caracas: La Torre, 1940.
- . *Regreso de tres mundos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1959.
- PINO ITURRIETA, Elías. *Nueva lectura de la Carta de Jamaica*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1999.
- PLAZA, Elena. *La tragedia de una amarga convicción. Historia y política en el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz. 1870-1936*. Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1996.
- POPPER, Karl. *The Open Society and Its Enemies*. London: Routledge & Kegan Paul, 1969, 2 vols.
- . *Conjectures and Refutations*. London: Routledge & Kegan Paul, 1974.
- . *La miseria del historicismo*. Alianza Editorial: Madrid, 1987.
- . *The Myth of the Framework*. London & New York: Routledge, 1994.
- PRZEWORSKI, Adam. *Capitalism, Democracy, Pacts: Revisited*. Chicago: University of Chicago, 1985 (mimeo).
- PURROY, Miguel Ignacio. «Evaluación del programa económico», *SIC*, 513, Caracas, abril de 1989.
- . «Los equilibrios inestables», *SIC*, Caracas, marzo de 1990.
- . «El paquete avanzando, la economía estancada», *SIC*, Caracas, julio de 1990.
- . «Tiempo perdido», *SIC*, Caracas, mayo de 1991.
- . «La clave del desarrollo», *SIC*, Caracas, abril de 1992.
- y R. ESPINASA. «Balance 1991. Perspectivas 1992», *SIC*, Caracas, enero-febrero de 1992.
- RANGEL, Carlos. *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1976.
- . *El tercermundismo*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1982.

- RAY, David. «The Dependency Model of Latin American Underdevelopment: Three Basic Fallacies», *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 15, 1, 1983.
- REY, Juan Carlos. «El sistema de partidos venezolano», *Politeia*, 1, Caracas, 1972.
- . «Ideología y cultura política. El caso del populismo latinoamericano», *Politeia*, 5, Caracas, 1976.
- . *Problemas sociopolíticos de América Latina*. Caracas: Ateneo de Caracas-Editorial Jurídica Venezolana, 1980.
- . «El futuro de la democracia en Venezuela», *Nueva Sociedad*, 367, Caracas, 1987.
- . *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: IDEA, 1989.
- . «La crisis de legitimidad en Venezuela y el enjuiciamiento y remoción de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República», *Boletín Electoral Latinoamericano*, ILDH-CAPEL, San José de Costa Rica, enero-junio 1993, pp. 67-112.
- RODRÍGUEZ ADRADOS, F. *La democracia ateniense*. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- RODRÍGUEZ O., Jaime, E. *La independencia de la América española*. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- ROJAS, Clara M. «El positivismo de Laureano Vallenilla y la tesis del Gendarme Necesario», *Argos*, 2, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1981.
- ROMERO, Aníbal. *Líderes en guerra: Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle*. Madrid: Tecnos, 1979.
- . «Tolstói, el poder y la paz», *Argos*, 3, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1981.
- . *La idea de la política en el pensamiento de Simón Bolívar*. Caracas: Ateneo de Caracas, 1985.
- . *La miseria del populismo*. Caracas: Centauro, 1986.
- . *América Latina: Militares, integración y democracia*. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1989.
- . *Aproximación a la política*. Caracas: Instituto de Altos Estudios de América Latina-Universidad Simón Bolívar, 1990. [También, Caracas: Panapo, 1994].
- . *Venezuela: El laberinto de lo posible*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1991.
- . *La sorpresa en la guerra y la política*. Caracas: Panapo, 1992.
- . *Decadencia y crisis de la democracia*. Caracas: Panapo, 1994.
- . *Disolución social y pronóstico político*. Caracas: Panapo, 1997.
- . «Rearranging the Deck Chairs on the Titanic: The Agony of Democracy in Venezuela», *Latin American Research Review*, 32, 1, 1997, pp. 7-36.
- . *Estudios de filosofía política*. Caracas: Panapo, 1998.
- . «Pesimismo que alimentan», en Asdrúbal Baptista, coord. *Venezuela siglo xx. Visiones y testimonios*. Caracas: Fundación Polar, 2000, vol. 3.
- SACHS, J. «Recent Studies of the Latin American Debt Crisis», *Latin American Research Review*, 23, 3, 1988.
- SAMUELSON, Paul. *Economics: An Introductory Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1951.
- SANÍN. *Los muertos de la deuda*. Caracas: Centauro, 1989.
- SCHMITT, C. *El concepto de lo político*. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- SCHUMPETER, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Allen & Unwin, 1976.
- SCHUTZ, Alfred. *Estudios sobre teoría social*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1974.
- SELDON, Arthur, comp. *Agenda for Social Democracy*. London: The Institute of Economic Affairs, 1983.

- SERBIN, Andrés et al., eds. *Venezuela: La democracia bajo presión*. Caracas: Nueva Sociedad, 1993.
- SLOTEDIJK, Peter. *En el mismo barco*. Madrid: Siruela, 2000.
- SMITH, Tony. «The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency Theory», *World Politics*, 31, 2, 1979.
- SMITH, Adam. *The Wealth of Nations*. London: Methuen, 1950.
- SMOKE, Richard. *War. Controlling Escalation*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.
- SOCIEDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA. «Un llamado al patriotismo venezolano», en *Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela*, 12, 63, 1960.
- SONNTAG, Heinz R. y Thais MAINGON. *Venezuela: 4-F 1992. Un análisis sociopolítico*. Caracas: Nueva Sociedad, 1992.
- SPENGLER, Oswald. *The Decline of the West*. London: Allen & Unwin, 1961.
- STAMBOULI, Andrés. *Crisis política: Venezuela, 1948-1958*. Caracas: Ateneo de Caracas, 1980.
- STEINER, George. *Antígonas*. Barcelona: Gedisa, 2000.
- . *Nostalgia del absoluto*. Madrid: Siruela, 2001.
- SUÁREZ, Santiago Gerardo. «Conflictividad social de la reforma militar dieciochista», en *Congreso Bicentenario de Simón Bolívar*. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo IV.
- TEMPLETON, A. *The Evolution of Popular Opinion*. Ponencia. Washington, 1992 (mimeo).
- TEXTOS OFICIALES DE LA PRIMERA REPÚBLICA DE VENEZUELA. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959, vol. II.
- TOCQUEVILLE, Alexis de. *Democracy in America*. New York: Harper & Row, 1966.
- TORRES, Arístides. «¿Crisis o consolidación de los partidos en Venezuela?». *Argos*, 1, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 1980.
- . *Fe y desencanto democrático en Venezuela*. Caracas: FACES, UCV, 1985 (mimeo).
- . *Niveles y dimensiones del apoyo político en Venezuela*. (Trabajo presentado en el XII Congreso de la International Political Science Association), París, julio 1985.
- . *La evolución de las actitudes hacia el sistema político en Venezuela*. Caracas: Datanálisis, 1990 (mimeo).
- TORRES, Gerver. *Transformar una sociedad requiere algo más que reformas económicas*. Ponencia. Washington, septiembre 1992 (mimeo).
- TOYNBEE, Arnold. *A Study of History*. London: Oxford University Press, 1960.
- TULLOCK, Gordon. *The Vote Motive*. London: Institute of Economic Affairs, 1976.
- UGALDE, Luis. «Introducción», en *Encuentro y alternativas. Venezuela 1994*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1994, tomo I.
- URBANEJA, Diego Bautista y Rafael GUERRA RAMOS. «El socialismo del vecino: solidaridad en la crítica o crítica en la solidaridad», *Nueva Sociedad*, 67, Caracas, 1983.
- USLAR PIETRI, Arturo. *Obras selectas*. Madrid: Edime, 1953. [También la edición de 1956].
- . *Hacia el humanismo democrático*. Caracas: Publicaciones del Frente Nacional Democrático, 1965.
- . *Las vacas gordas y las vacas flacas*. Caracas: Concejo Municipal del Distrito Federal, 1968.

- . *En busca del Nuevo Mundo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.
- . *Bolívar hoy*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1983.
- . *De una a otra Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1989.
- . *Golpe y Estado en Venezuela*. Bogotá: Norma, 1992.
- . «La identidad nacional», *Seguridad y Defensa. Temas del IAEDEN*, 9, Caracas, 1995.
- USLAR PIETRI, Juan. *Historia de la rebelión popular de 1814*. Caracas-Madrid: Edime, 1972.
- . *Historia política de Venezuela*. Madrid-Caracas: Mediterráneo, 1975.
- . *La Revolución Francesa y la Independencia de Venezuela*. Caracas: Cuadernos Lagoven, 1989.
- VALLENILLA LANZ, Laureano. *Críticas de sinceridad y exactitud*. Caracas: Garrido, 1956.
- . *Cesarismo democrático*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1990.
- . *Cesarismo democrático y otros textos*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1991.
- VARGAS LLOSA, Mario. *Contra viento y marea*. Madrid: Seix-Barral, 1983.
- VISO, Ángel Bernardo. *Venezuela: Identidad y ruptura*. Caracas: Alfadil, 1982.
- . *Memorias marginales*. Caracas: Monte Ávila Editores, 1991.
- . *Reforma constitucional e historia*. Caracas: Cedice, 1993.
- . *Las revoluciones terribles*. Caracas: Grijalbo, 1997.
- VV.AA. *América Latina, conciencia y nación. Un nuevo enfoque sobre su tiempo y perspectiva*. (Seminario «América Latina, Conciencia y Nación». Universidad Simón Bolívar, 1976). Caracas: Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, 1977.
- VV.AA. *Pensamiento político de la emancipación venezolana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977. [También la reimpresión de 1988].
- WEBER, Max. *El político y el científico*. Madrid: Alianza Editorial, 1975.
- . *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Allen & Unwin, 1976.
- WEISNER, E. «Latin American Debt: Lessons and Pending Issues», *American Economic Review*, 75, May 1985.
- WESSON, Robert, ed. *New Military Politics in Latin America*. New York: Praeger, 1982.
- WILKINS, Mira. «Venezuelan Investment in Florida», *Latin American Research Review*, XVI, 1, 1981.
- WOLIN, Sheldon. *Política y perspectiva*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1973.
- ZEA, Leopoldo. *América Latina y el mundo*. Buenos Aires: Eudeba, 1965.
- . *América en la historia*. Madrid: Revista de Occidente, 1970.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

AUTORIDADES

Enrique Planchart *Rector*

Rafael Escalona *Vicerrector académico*

William Colmenares *Vicerrector administrativo*

Cristian Puig *Secretario*

CONSEJO EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Carlos Graciano

Presidente/Decano de Extensión

Lilian Reyna Iribarren

Directora de Cultura

MIEMBROS POR LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Claudio Olivera *Principal*

Oscar González *Primer suplente*

Luis Loreto *Segundo suplente*

MIEMBROS POR LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Carole Leal Curiel *Principal*

Carlos Leáñez Aristimuño *Primer suplente*

Gustavo Sarmiento *Segundo suplente*

MIEMBROS POR LA DIVISIÓN DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS

Alicia Villamizar *Principal*

Patricio Hevia *Primer suplente*

Eduardo Klein *Segundo suplente*

MIEMBROS POR LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS E INDUSTRIALES

Lilian Pérez Monroy *Principal*

Junys Quijada *Primera suplente*

Luis Buttó *Segundo suplente*

MIEMBROS EXTERNOS

Antonio López Ortega *Principal*

Claudio Bifano *Primer suplente*

Jesús Alberto León *Segundo suplente*



Carlos Pacheco
Coordinador

Evelyn Castro
Coordinadora de producción

José Manuel Guilarte
Corrector

Luis Müller
Cristin Medina
Diseñadores gráficos

Nelson González
Administrador

Isabel Borges
Secretaria

El segundo volumen de *Obras Selectas* de Aníbal Romero fue impreso durante el mes de febrero de 2010 en los talleres de Gráficas Acea, Caracas, Venezuela. En su composición se emplearon las familias tipográficas *FF Maiola* y *Vonness*.



V O L U M E N

II